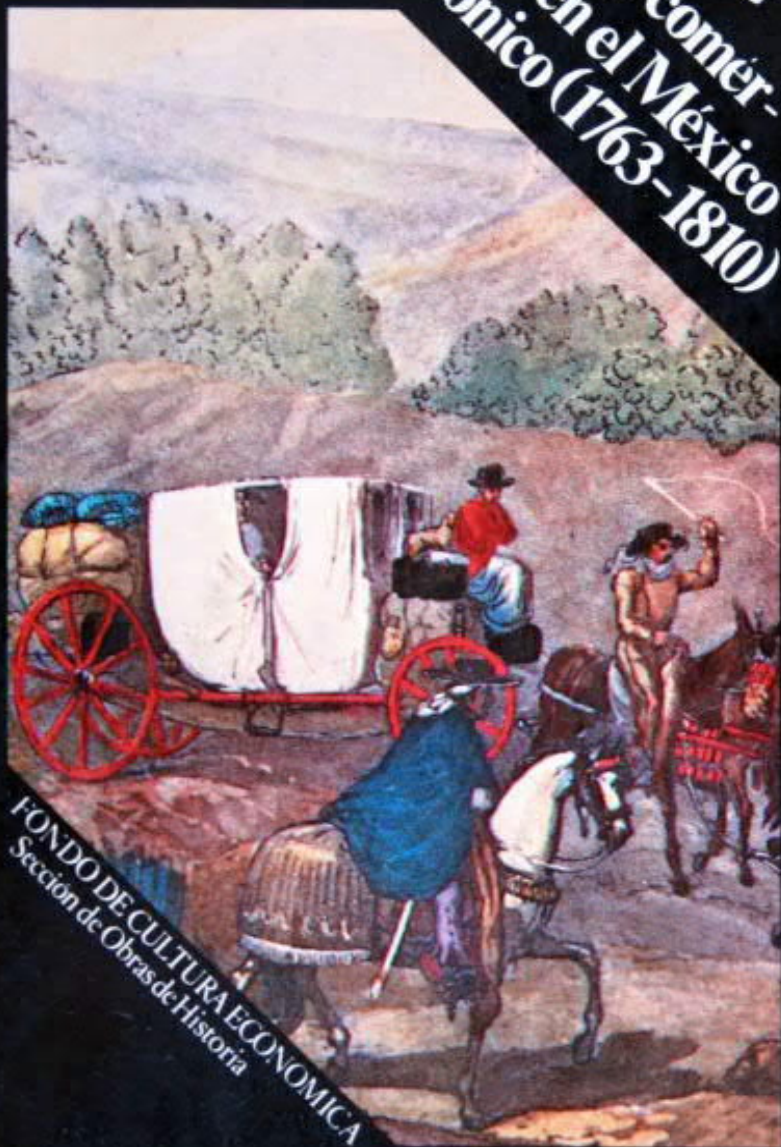


D.A.
BRADING
Mineros y comer-
ciantes en el México
borbónico (1763-1810)



FONDO DE CULTURA ECONOMICA
Sección de Obras de Historia

LOS CONTENIDOS DE ESTE LIBRO PUEDEN SER
REPRODUCIDOS EN TODO O EN PARTE, SIEMPRE
Y CUANDO SE CITE LA FUENTE Y SE HAGA CON
FINES ACADÉMICOS, Y NO COMERCIALES

D. A. BRADING

MINEROS Y
COMERCIANTES
EN EL MEXICO
BORBONICO
(1763-1810)



FONDO DE CULTURA ECONOMICA
MEXICO

Primera edición en inglés.	1971
Primera edición en español.	1975
Primera reimpresión.	1983

Título original:

Miners and Merchants in Bourbon Mexico, 1763-1810

© 1971. Cambridge University Press Londres

D. R. ©1975 FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Av. de la Universidad, 975; 03100 México, D.F.

ISBN 968-16-1340-6

Impreso en México

P R E F A C I O

*Han pasado ocho años desde aquella ocasión en que, después de viajar por México durante todo el verano, llegué a Guanajuato, La Valenciana y San Miguel Allende. Allí, casi por casualidad, encontré lo que quería yo estudiar. Escogido el lugar, la época no podía ser otra que el siglo XVIII, período en el cual estas poblaciones adquirieron la forma que hoy presentan. De todos modos, yo era por inclinación un estudioso del colonialismo. Aunque es cierto que el estudioso escoge su tema, es la disponibilidad de material relativo la que determina la trayectoria de sus actividades. Sobre la Nueva España en el siglo XVIII muy poco es lo que se ha escrito que tenga un gran valor, pues hasta nuestros días el mejor relato sigue siendo el *Essai Politique sur le Royaume de la Nouvelle-Espagne*, de Alexander von Humboldt, publicado por primera vez en 1811. Durante las luchas por la independencia y los decenios que las siguieron, Juan López de Cancelada, Fray Servando Teresa de Mier, Manuel Abad y Queipo, Lorenzo de Zavala, Sir Henry Ward, José María Luis Mora y Lucas Alamán escribieron preciosas descripciones de la colonia y de la sociedad colonial. Casi al mismo tiempo se trató de publicar recopilaciones informativas tales como el Informe General del Virrey Conde de Revillagigedo y la Historia general de Real Hacienda de Fabián de Fonseca y Carlos de Urrutia, pero luego, durante la segunda mitad del siglo XIX el interés de la mayor parte de los estudiosos mexicanos se dirigió hacia períodos anteriores de la historia nacional de su país, y en particular muchos de ellos se lanzaron a la gran obra de redescubrimiento del pasado indígena. Otros, entre los cuales el más distinguido en nuestros días es Silvio Zavala, concentraron sus investigaciones en el siglo XVI. Los estudiosos extranjeros también siguieron estas tendencias de estudiar la formación de la sociedad colonial y no su época de mayor florecimiento. Aquí vienen a la mente inmediatamente los nombres de François Chevalier, Robert Ricard, J. H. Parry, George Kubler, Charles Gibson y José Miranda. También la notable serie de monografías producidas por la «escuela» de Berkeley, de Carl O. Sauer, Lesley Byrd Simpson, Sherburne F. Cook y Woodrow Borah se ha ocupado, en su mayor parte, del estudio del*

indígena y de su suerte después de la Conquista. Unicamente H. I. Priestley en su obra José Gálvez, Visitor-General of New Spain, publicada ya hace mucho, en 1916, eligió un tema, como el mío, relativo a los españoles y al siglo XVIII. Todo esto significa que he tenido que hacer mi aprendizaje histórico en un campo poco estudiado, y con muy pocos guías aparte de Humboldt, Ward, Revillagigedo, Alamán y el Padre Mier. Estos son los autores que más me ayudaron en mis investigaciones.

No obstante, los tres estudios en que se divide el presente libro se basan principalmente no en fuentes publicadas, sino en material de archivo, y siguen la trayectoria de mis propias investigaciones. «La revolución en el Gobierno» está casi totalmente basada en notas tomadas en el Archivo de Indias en Sevilla, mientras que «Guanajuato» se deriva de un examen intenso de los registros notariales locales; la parte intermedia, «comerciantes y Mineros» tiene una base más variada. La sección de Minería del Archivo General de la Nación de México proporcionó el material más importante. Debe notarse que los tres estudios han sido concebidos como enfoques autónomos del México de fines del siglo XVIII, y que entre ellos no existe una relación lógica progresiva. Sin embargo, posiblemente la sección intitulada «Guanajuato» no será enteramente comprendida si el lector no conoce el estudio de «Mineros y Comerciantes» que la precede. Al escribir este libro, mi propósito ha sido definir primeramente un periodo histórico que yo llamo el México Borbónico, y después describir sus características principales.

Naturalmente que en el curso de siete años de investigación y de composición he contraído muchas deudas, intelectuales y de otra clase. David Joslin, mi supervisor de estudios en Pembroke College en Cambridge me dio muy buenos consejos cuando comencé mi labor y me alentó mucho (cosa de la que tenía yo gran necesidad) cuando le envié el primer borrador de mi libro. Frederick Bowser, desde los días en que estábamos juntos en Sevilla hasta el presente, ha sido siempre un escucha paciente, un lector escéptico y un crítico gentil. Muchas otras personas, cada una a su modo, me han ayudado. Deseo expresar mi agradecimiento a los directores de mi tesis en Londres, R. A. Humphreys y John Lynch, y a mis compañeros estudiantes Nancy M. Farriss y Juan Manguashca; en Sevilla a Enrique Otte, Miguel Maticorena, Pierre Ponsot, Günter Vollmer y, en una visita que hizo, a J. H. Parry; en la ciudad de México, a Ignacio Rubio Mañé y Gonzalo Obregón, Jr.; en Guanajuato, a Manuel Leal, Ti-

burcio Alvarez y Jesús Fraustro Rodríguez; en San Miguel Allende, a Miguel Malo Zozaya; en Berkeley, a William P. McGreevey, José Antonio a Miguel Malo Zozaya; en Berkeley, a William P. McGreevey, José Antonio Matesanz, Peter Mathias, Raymond K. Kent y, naturalmente, Woodrow Borah. Varias instituciones me proporcionaron ayuda económica. En primer lugar, si no me hubiera concedido la beca Henry para Yale College nunca habría yo visitado la América Latina. Más tarde, el fondo central para investigaciones de la Universidad de Londres me dio una beca suplementaria para los meses que pasé en Sevilla, y la Fundación Astor me dio la posibilidad de emprender mis investigaciones en México. En Berkeley el Centro de Estudios Latinoamericanos me proporcionó generosamente los fondos suficientes para que dedicara yo tres veranos completos a la terminación de este libro. Finalmente quiero expresar mi agradecimiento a mi esposa Celia Wu; sólo ella sabe cuánto he contado con su ayuda.

D.A.B.

Guanajuato - Berkeley
1966-9

ABREVIATURAS DE ARCHIVOS CONSULTADOS

ACM	Archivo de la Casa de Morelos (Morelia).
AGI	Archivo General de Indias (Sevilla).
AGN	Archivo General de la Nación (México, D. F.).
AGS	Archivo General de Simancas.
AHG	Archivo Histórico de Guanajuato.
AHGP	Archivo Histórico de Guanajuato, Protocolos.
AHH	Archivo Histórico de Hacienda (México, D. F.).
AHN	Archivo Histórico Nacional (Madrid).
AMM	Archivo Municipal de Morelia.
AHL	Archivo Histórico de León.
AMZ	Archivo Municipal de Zacatecas.
APS	Archivo Provincial de Santander.
BN (Madrid)	Biblioteca Nacional (Madrid).
BN (México)	Biblioteca Nacional (México, D. F.).
BM	Museo Británico (Londres).
BRP	Biblioteca del Real Palacio (Madrid).
CV	Cancillería de Valladolid.
FV	Fundación Valenciana (México, D. F.).

MEDIDAS Y MONEDA

Puede ser útil alguna explicación de las unidades de medida y valor que se emplean en el texto.

Todas las varas son castellanas, equivalentes a 83.5 cm. cada una.

El quintal se componía de 4 arrobas o 100 libras y era equivalente a 46.1 kg. aproximadamente. Las libras y onzas de que se habla son las del sistema castellano.

La fanega equivalía aproximadamente a 54.5 litros.

El peso de plata de México, que a veces se llamaba peso fuerte o duro, era equivalente al dólar de aquella época. Se dividía en 8 reales de plata o en 20 reales de vellón, que era la unidad entonces usada en España. De cada marco castellano de plata se obtenían 8½ pesos. La siguiente tabla especifica las equivalencias:

1 marco = 8½ pesos.

1 marco = 8 onzas.

1 peso = 8 reales de plata.

1 peso = 20 reales de vellón.

1 real = 12 granos.

1 real = 34 maravedís.

G L O S A R I O

- Acuerdo: Convenio o decisión, resolución de la Audiencia.
- Agente fiscal: abogado que ayudaba a los representantes de la Corona.
- Alcabala: impuesto sobre las ventas.
- Alcalde del barrio: funcionario designado por el alcalde de la ciudad, con jurisdicción sobre una parte de ella como juez.
- Alcalde del crimen: juez menor de la audiencia, miembro de la sala del crimen.
- Alcalde mayor: juez de letras del pueblo.
- Alcalde ordinario: juez municipal.
- Alcaldía mayor: distrito sobre el cual tenía jurisdicción el alcalde mayor.
- Alférez real: miembro de mayor jerarquía del Ayuntamiento.
- Alhóndiga: traje municipal.
- Almacén: tienda, bodega.
- Almacenero: comerciante de la ciudad de México, generalmente dueño de una casa comercial importante.
- Arrastre: pulverización de los minerales y el lugar donde se realizaba.
- Aşesor general: consejero del virrey para asuntos legales.
- Audiencia: corte superior de justicia.
- Aviador: prestamista.
- Avíos: materiales y dinero en efectivo proporcionados por el aviador.
- Azogüero: el que supervisaba el procedimiento de amalgamación.
- Barrenadores: mineros, dinamiteros.
- Barreteros: mineros que trabajan con la barreta.
- Buscones: mineros que recibían la mitad del mineral producido en lugar de salario.
- Cabildo: ayuntamiento, concejo municipal.
- Caja real: tesorería de la provincia.
- Cajero: aprendiz de comerciante.
- Catastro: registro público de la propiedad, censo.

Cédula: decreto real.

Consulado: gremio de comerciantes y su tribunal.

Consulta: recomendación o resolución del Consejo de Indias.

Corregidor: gobernador y juez de un distrito.

Corregidor de letras: si era licenciado.

Depositario general: concejal de una población.

Dinero: medida de la calidad de la plata, equivalente a 24 granos.

Fanega: medida de volumen, equivalente a 54,5 litros aproximadamente.

Fiel ejecutor: concejal municipal encargado de la inspección del mercado, etc.

Fiscal de lo civil: abogado de la Corona agregado a la Audiencia que se ocupaba de todos los asuntos no fiscales ni penales.

Fiscal de real hacienda: abogado de la Corona agregado a la Audiencia que se ocupaba de asuntos fiscales.

Fuero: exención de la jurisdicción real, derecho a ser juzgado por miembros del propio gremio.

Gañán: peón.

Gachupín: español nacido en Europa y residente en la Nueva España.

Gente de razón: en realidad, todos los no indígenas.

Junta de real hacienda: principal comité financiero del virreinato.

Junta superior de real hacienda: principal comité financiero después de la creación de las intendencias.

Leyes de partida: código medievoal español.

Libranza: letra de cambio.

Maravedí: moneda equivalente a la treintaicuatroava parte de un real.

Media annata: salario de seis meses que se pagaba como impuesto durante el primer año en que se ocupaba un cargo público.

Montañés: natural de la provincia de Santander.

Obraje: gran taller de tejido.

Oidor: juez de la Audiencia.

Partido: parte del mineral tomado por los trabajadores mineros.

Policia: función administrativa del gobierno, especialmente la construcción y conservación de obras públicas.

Polizón: inmigrante sin documentación apropiada.

Procurador general del común: concejal municipal encargado de representar los intereses del público, especialmente de los pobres.

Real: moneda que si era de plata valía la octava parte de un peso.

Real orden: decreto ministerial.

Regidor: concejal de una población.

Repartimientos de comercio: distribución pública (generalmente por la fuerza) de mercancías en existencia por el alcalde mayor.

Rescatador: refinador independiente de mineral.

Residencia: revisión de la actuación de un funcionario, especie de juicio de responsabilidades.

Sala del crimen: tribunal inferior de la Audiencia, que se ocupaba de casos penales.

Superintendente subdelegado de real hacienda: superintendente fiscal.

Temporalidades: dependencia del gobierno encargada de la administración de las antiguas propiedades jesuitas.

Tenateros: peones de las minas.

Tratante: comerciante en pequeño.

Vagos: vagabundos, trabajadores migratorios sin residencia ni en haciendas ni en pueblos indígenas.

INTRODUCCION

«Cortés le preguntó si Montezuma tenía oro. Y como respondió que sí, “envíenme”; dice, “de ello, pues tenemos yo y mis compañeros mal de corazón, enfermedad que sana con ello”¹. Y cuando los tesoros del emperador fueron repartidos entre los conquistadores, no se hallaba ya ni oro ni plata en cantidades apreciables en ninguna parte del Imperio Azteca. Bernal Díaz del Castillo, que participó personalmente en la Conquista, recordó más tarde: «como veíamos que en los pueblos de la redonda de México no tenían oro, ni minas, ni algodón, sino mucho maíz y magueyales, de donde sacaban el vino, a esta causa la teníamos por tierra pobre, y nos fuimos a otras provincias a poblar»². Y es muy cierto que durante los primeros treinta años de colonización después de 1521 la Nueva España tenía muy poco que ofrecer por lo que se refiere a producción minera. Si los primeros conquistadores no encontraron descanso en su incesante búsqueda de El Dorado, fue porque la Conquista, una vez terminada la primera ola de saqueos, les produjo muy pocas ganancias y les ofreció mínimas posibilidades de encontrar un empleo aceptable.

La parte central de México era rica en indígenas, no en oro. Según estimaciones recientes, las costas y el altiplano del México central y meridional sostenían a un número de habitantes que se hallaba entre los doce y los veinticinco millones³. Los espléndores de Tenochtitlán y la riqueza y cultura del imperio tenían su origen

¹ Francisco López de Gómara, *Historia General de Indias* (2 vols., Barcelona 1954) II, 50.

² Francisco del Paso y Troncoso, *Papeles de Nueva España*, 2a series III, Suplemento, pp. 62-3.

³ Sherburne F. Cook y Lesley Byrd Simpson, *The Population of Central Mexico in the Sixteenth Century* (Berkeley y Los Angeles, 1948), p. 38. Woodrow Borah y Sherburne F. Cook, *The Aboriginal Population of Central Mexico on the Eve of the Spanish Conquest* (Berkeley y Los Angeles, 1963), pp. 88, 15. Véase una opinión opuesta a estos cálculos en Angel Rosenblat, *La población de América en 1492: viejos y nuevos cálculos* (México, 1967), pp. 23-80.

en el pequeño margen de superproducción creado por la fuerza física y la energía de un campesinado que no disponía ni de la rueda ni de bestias de tiro. En estas circunstancias el trabajo proporcionaba tanto la riqueza como el poder; el tributo, en gran parte, se pagaba con servicios personales, y la propiedad de la tierra generalmente comprendía el derecho a hacer trabajar a los campesinos. La producción que no se consumía era entregada a los caciques locales, a los templos y a la Triple Alianza que había creado el imperio. El tributo imperial incluía grandes cantidades de maíz, frijol y telas, así como artículos de lujo tales como escudos decorados con plumas, penachos, oro y ámbar ⁴.

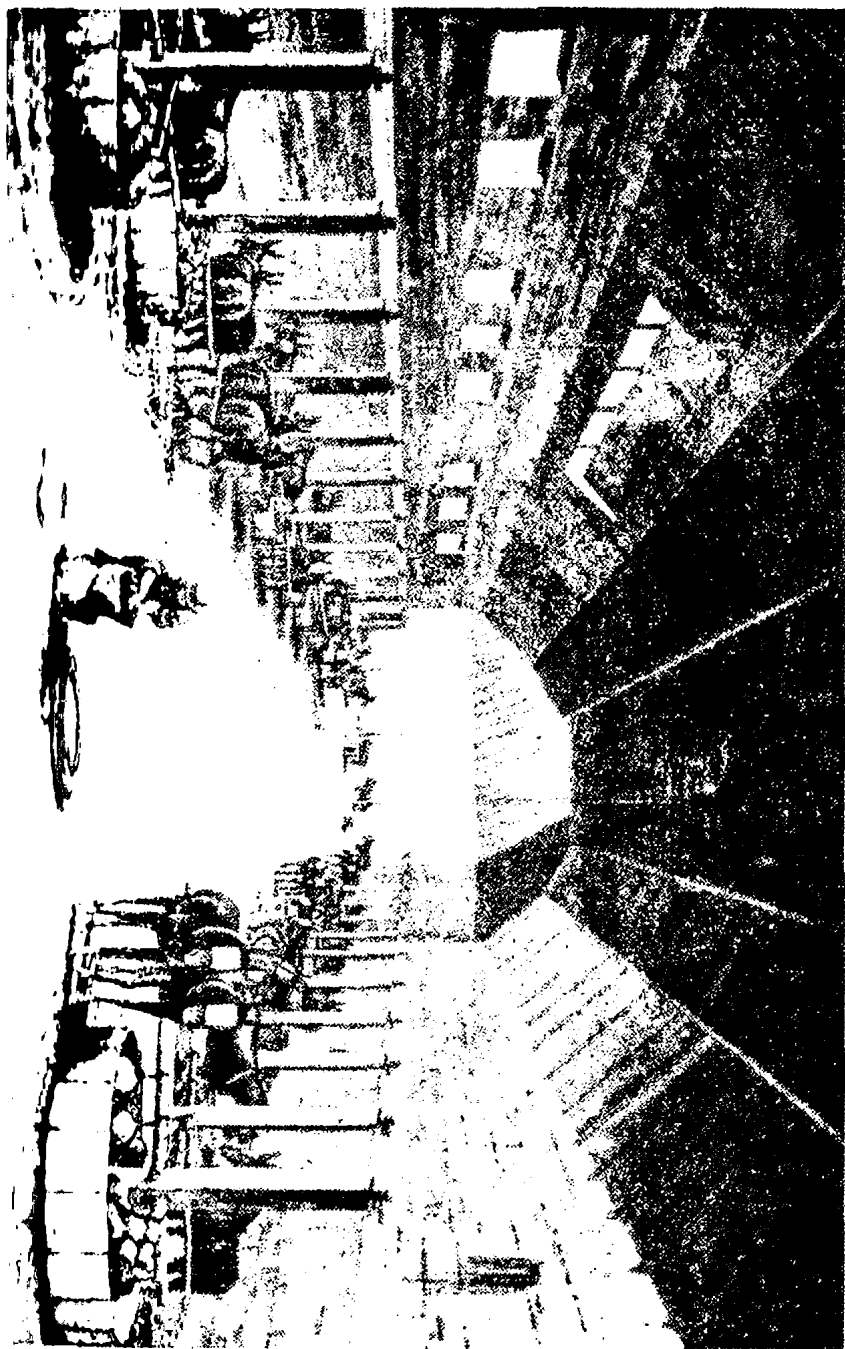
Para sostener y alimentar a sus soldados, Cortés se sirvió de este sistema, distribuyendo grandes encomiendas a sus principales ayudantes. Cada encomendero recibió a un cierto número de indígenas —en algunos casos hasta 20 000— que tenían obligación de pagar tributo a su nuevo amo tanto en especie como en trabajo. Las encomiendas no conferían ni jurisdicción civil ni la propiedad de la tierra ⁵, aunque en la práctica reemplazaron al antiguo tributo imperial y por ello no fueron causa de que la sociedad indígena local resintiera inmediatamente un desequilibrio, sino que siguió siendo gobernada por sus propios nobles y caciques.

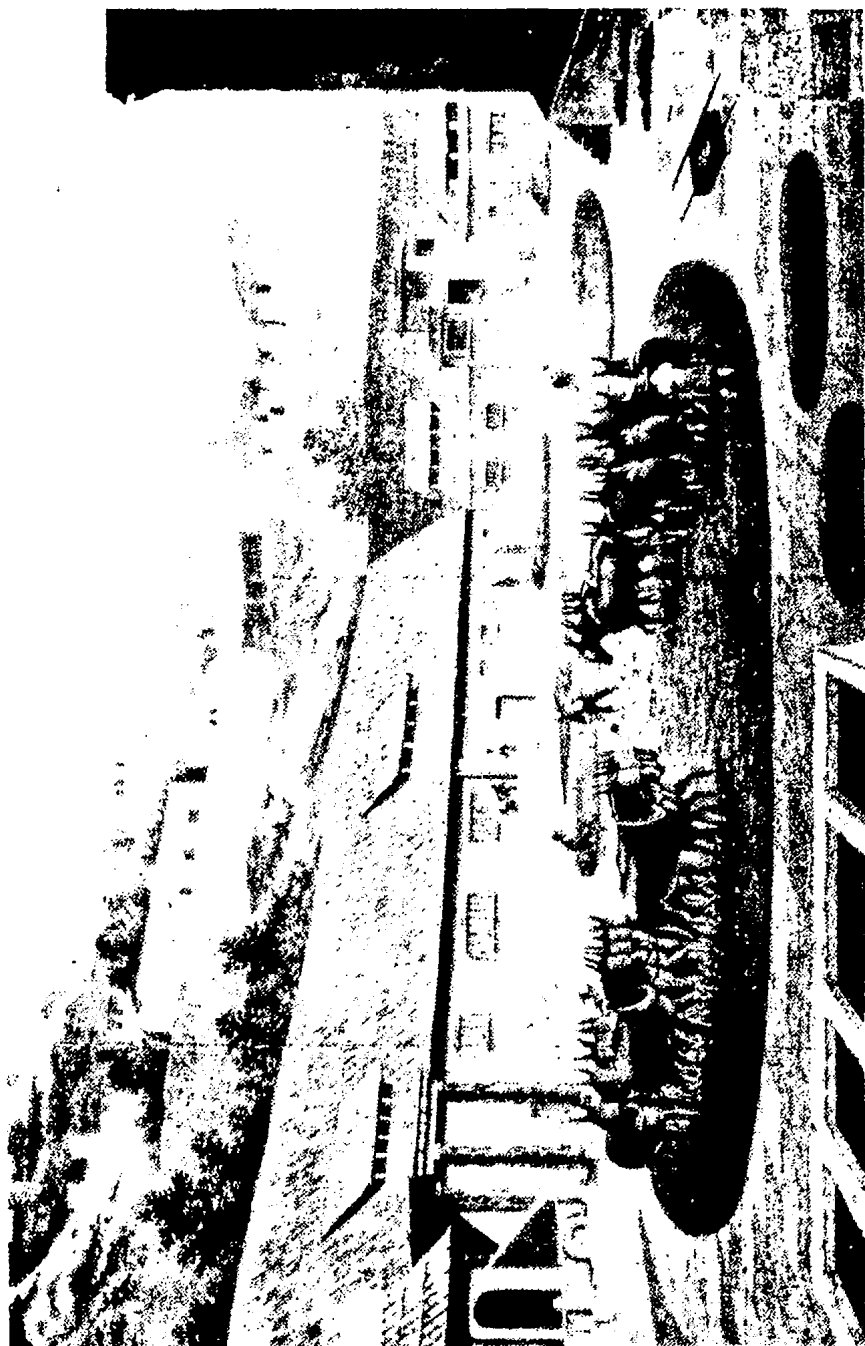
No obstante, esta distribución de indígenas no satisfizo a los españoles cuya ansia de hacer fortuna en el Nuevo Mundo no podía saciarse con el maíz, el algodón y las plumas que les ofrecían sus tributarios, y así dio principio una búsqueda frenética no sólo de metales preciosos, sino de cualesquiera productos de valor comercial. Los encomenderos importaron ganado de Europa y se apoderaron de tierras para cultivar el trigo. Cortés, que fue el mayor encomendero, se lanzó a la búsqueda de perlas en el Golfo de California, inició el comercio con el Perú y la explotación de placeres de oro en el sur, y abrió las primeras minas de plata en Taxco ⁶. En sus vastas propiedades emprendió la cría de grandes cantidades de gana-

⁴ Véase una lista de tributo imperial en Borah y Cook, *Aboriginal Population*, pp. 109-49.

⁵ Charles Gibson, *The Aztecs under Spanish Rule* (Stanford, 1964), pp. 58-81.

⁶ Woodrow Borah, *Early Colonial Trade and Navigation between Mexico and Peru* (Berkeley y Los Angeles, 1954), pp. 8-16. Jean Pierre Berthe, «Las minas de oro del Marqués del Valle en Tehuantepec, 1540-47», *Historia Mexicana*, 7 (1958), pp. 122-31.





2 Panto de una hacienda de beneficio (Salgado, Guana/juato)

do vacuno, lanar y porcino. En todas estas empresas ni él ni los demás encomenderos tuvieron empacho en obligar a sus tributarios indígenas a que trabajaran sin compensación. Con los tributos se alimentaba y vestía a los parientes y trabajadores españoles y a sus esclavos negros. Así pues, las encomiendas dieron el ímpetu inicial a la creación de una economía europea en la Nueva España: fue solo el trabajo gratuito que proporcionaron lo que hizo posible las primeras actividades económicas de los españoles.

Sin embargo, esta fase de trabajos forzados terminó legalmente con la promulgación de las Nuevas Leyes en 1542. Muchos encomenderos habían tratado cruelmente a los indígenas que tenían a su cargo, sobre los cuales, contradiciendo los *términos de las concesiones* otorgadas, ejercieron una autoridad casi absoluta ⁷. La Corona, para evitar una explotación aún mayor y para proteger sus derechos, dispuso que en adelante el tributo fuera pagado en efectivo o en especie, pero nunca en trabajo. Así fue que los encomenderos perdieron el contacto con los indígenas y se convirtieron simplemente en una clase rentista cuyos ingresos iban en descenso. En cualquier caso, la mano de obra, superabundante durante el primer decenio de la dominación española, se hizo relativamente escasa al disminuir rápidamente la población indígena. Ciertos cálculos recientes revelan que, para 1568, únicamente sobrevivían en la superficie de la Nueva España dos millones y medio de personas ⁸. La curva de esta disminución, muy aguda al principio, fue moderándose al avanzar el siglo hasta llegar a una línea horizontal en las primeras décadas del siglo XVII, cuando quedaba una población indígena de poco más de un millón de personas.

Varias causas distintas tuvo esta catástrofe demográfica. En primer lugar, ya desde antes de la Conquista la densidad de población había reducido a la sociedad indígena casi a una economía de subsistencia. Dos grandes hambres, ocurridas en 1454-7 y 1504-6, habían ocasionado la muerte de miles de gentes ⁹. No es de sorprender, entonces, que cuando los españoles exigieron esfuerzos exagerados

⁷ Gibson, *The Aztecs*, pp. 78-80.

⁸ Sherburne F. Cook y Woodrow Borah, *The Indian Population of Central Mexico 1531-1610* (Berkeley y Los Angeles, 1960), p. 48.

⁹ Sherburne F. Cook, «The Incidence and Significance of Disease among the Aztecs and Related Tribes», *Hispanic American Historical Review*, 26 (1946), pp. 320-31.

a sus nuevos súbditos, mayores que su capacidad de trabajo, éstos murieran en grandes cantidades. Además, y esto fue un factor más importante, la Conquista puso fin a la inmunidad existente en el continente, que había permitido el desarrollo de una población tan densa. América se convirtió en presa de las enfermedades europeas y asiáticas; mientras Cortés tenía sitiada a Tenochtitlán sus defensores fueron víctimas de una epidemia de viruela. En cierto modo, México recibió a través del Atlántico la sucesión de epidemias que en muchas regiones de Europa, durante el siglo XIV, habían reducido la población en un tercio o más, y que seguían asolando las ciudades del Viejo Mundo. Además, los españoles también fueron portadores de las enfermedades tropicales adquiridas en África y en Asia, las cuales florecieron con gran violencia en las costas de América ¹⁰. Parece que estos azotes de los trópicos fueron más mortíferos que los llegados de Europa, porque si bien los indígenas del Altiplano fueron diezados, los de las costas veracruzanas y de las islas del Caribe prácticamente desaparecieron. Un viajero inglés de aquella época observó: «En esta ciudad de Veracruz durante veinte años, cuando las mujeres daban a luz a los recién nacidos morían incontinenti» ¹¹.

El efecto de esta crisis demográfica sobre la sociedad indígena fue general. En las primeras décadas de la dominación española los nobles y caciques tribales conservaron su autoridad. Se encargaban de organizar el trabajo forzado para provecho de los encomendados y de la Iglesia, recaudaban los tributos reales impuestos a sus comunidades; y siguieron siendo beneficiario del trabajo exclusivo de una numerosa clase de siervos que estaban exentos del pago de otros tributos. En la década de 1560-70, sin embargo, la Corona Española destruyó este sistema de gobierno indirecto. La mano de obra había escaseado y los tributos eran exigüos, por ello la Corona exigió que tanto los campesinos libres como los siervos de los parti-

¹⁰ *The Cambridge Economic History of Europe*, I. *The Agrarian Life of the Middle Ages* (2.^a ed., ed. M. M. Postan, Cambridge, 1966), pp. 562-70, 673-7.

¹¹ Woodrow Borah, «America as Model: The Demographic Impact of European Expansion upon the Non-European World», *Congreso Internacional de Americanistas* (México, 1962), pp. 379-87. Richard Hakluyt, *Voyages* (8 vols.; Londres: Everyman, 1962), VI. «A Relation of the Commodities of Nova Hispania, and the Manners of the Inhabitants, written by Henry Hawks merchant, 1572», p. 280.

algunos pagaban un tributo que sería recaudado con base estrictamente personal. Los jefes indígenas seguían estando exentos, pero se les quitó el derecho a cobrar tributos que hasta entonces les habían permitido sus siervos, ya fuera en especie o en trabajo ¹². Para fines del siglo la sociedad indígena había sufrido una reorganización que la convirtió en una serie de poblados pequeños, gobernados por funcionarios electos entre los mismos campesinos. Las relaciones coloniales imperiales, más amplias, fueron suprimidas y la jerarquía social fue simplificada y reducida en número. Las pocas familias coloniales nobles que habían conservado su riqueza fueron pronto absorbidas por la comunidad española.

La reducción continua de la fuerza de trabajo indígena también le dio nuevo carácter a la colonización española. La clase encomendera al agotarse poco a poco su fuente de ingresos, perdió su posición social. Así, hecho que es más importante, los españoles se vieron obligados a participar en la producción agropecuaria a fin de obtener las cantidades necesarias de alimentos y vestido para la población colonial de la colonia. Porque debe hacerse hincapié en que el español, tanto por razones de seguridad como de preferencia cultural en general, era urbano, de modo que en todo el Nuevo Mundo la fuerza del imperio era un enorme conjunto de poblaciones que dominaban los campos circundantes ¹³. Estos centros urbanos muy pronto atrajeron a un gran número de trabajadores domésticos indígenas esclavos, y de artesanos mestizos y mulatos, de modo que constituían un importante mercado para los productos de la economía del campo.

Como los campesinos indígenas, al disminuir continuamente su número, no pudieron abastecer a las ciudades y pueblos, los españoles apoyados en concesiones virreinales, comenzaron a apropiarse de los terrenos abandonados o baldíos. Después de 1550, más y más tierras cambiaron de propietario, llegando este proceso a su

Arthur H. E. Cook y Woodrow Borah, «Quelle fut la stratification sociale au Centre du Mexique durant la première moitié du XVI^e siècle ?», *Annales*, 18 (octubre y abril de 1963), pp. 23-35.

Fernand Braudel, *El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II* (2 vols.; México y Buenos Aires, 1958), I, 258. J. H. Parry, *The Spanish Seaborne Empire* (Londres, 1966), p. 112. Richard M. Morse, «Some Characteristics of Latin American Urban History», *The American Historical Review*, 63 (enero de 1962), pp. 317-38.

máxima actividad entre 1570 y 1600; en total, unos 75 000 kilómetros cuadrados de tierra fueron cedidos de acuerdo a los procedimientos legales ¹⁴. Cada uno de los poblados quedó así circundado por propiedades rurales relativamente pequeñas en las que se cultivaba el trigo, el maíz y los árboles frutales. A distancia un poco mayor, se dedicaron grandes extensiones para el pastoreo de ganado, que en las nuevas condiciones se multiplicó con notable rapidez. En realidad, el ganado vacuno y lanar disputaba el espacio vital a los indígenas, y a veces les destruía sus cultivos ¹⁵. En grandes zonas del centro de México, el ganado de procedencia europea prácticamente reemplazó a la población indígena. En los extensos pastizales del norte erraban grandes manadas de animales sin control. La sociedad española, fuera de las ciudades, era sumamente pastoral, casi nómada, y dependía económicamente en gran medida de un rápido aumento en el número de estos animales importados. Eran indispensables los caballos y mulas para el transporte, las ovejas y reses como proveedoras de lana, cuero y carne, tanto como el trigo y el maíz, y, al contrario de los cereales, se producían sin necesidad de un gran esfuerzo.

Sin embargo, aunque la desaparición parcial de la antigua población permitió tanto la creación de la hacienda como la proliferación del ganado, seguían siendo necesarios los indígenas para el cultivo de la tierra. Así pues, la Corona organizó un sistema de reclutamiento de trabajadores a fin de proporcionarlos a las haciendas productoras de cereales. Además, los campesinos indígenas participaban en la construcción de iglesias y de caminos, y en el trabajo de las minas. Más tarde, en las primeras décadas del siglo XVII, la Corona reclutó a miles de indígenas de la Mesa Central para hacer el gran desagüe de Huchueroca ¹⁶. No debe sorprendernos, pues, que al verse obligados a trabajar tanto, muchos indígenas abandonaran sus pueblos. Huían a las ciudades para convertirse en sirvientes o artesanos, al norte para trabajar en las minas, y más generalmente, se convertían en peones de la hacienda más cercana. Los terratenientes recibían

¹⁴ Lesley Byrd Simpson, *Exploitation of Land in Central Mexico in the Sixteenth Century* (Berkeley y Los Angeles, 1952), pp. 19-21.

¹⁵ François Chevalier, *La formación de los grandes latifundios en México* (México, 1956), pp. 71-90; véase también el mapa de la p. 252.

¹⁶ Gibson, *The Aztecs*, pp. 248-9.

los otros refugiados con los brazos abiertos y los protegían tanto de la imposición de trabajos por parte de la Corona como de las faenas comunales de sus pueblos, pagaban sus tributos, les daban pequeñas parcelas y, mediante préstamos en efectivo que nunca pagaban, los obligaban a la hacienda para siempre. Los indígenas que optaron por incorporarse permanentemente a la economía española —en las haciendas, las ciudades o las minas— poco a poco se hispanizaron en el vestido, las costumbres y el idioma. Sus hijas se acostaban, se casaban, con los trabajadores mestizos o mulatos, con los esclavos negros, y con los capataces españoles. Sus descendientes comenzaron a integrar la clase mestiza en cuyas manos se hallaba el futuro de México. No obstante, por entonces, el presente seguía perteneciendo a la mayoría indígena que no abandonaba su pueblo, y que a pesar de que con frecuencia se le exigían trabajos excesivos, seguía cultivando una tierra que le pertenecía. Es verdad que muchos pueblos, especialmente en la Meseta Central, pronto perdieron sus tierras, pero de todos modos eran comunidades autónomas que, a cambio de la ayuda que prestaban en la temporada de siembra o en la de cosecha, recibían en alquiler tierras de la hacienda más cercana. Así pues, permanecieron dentro de una economía agraria relativamente autosuficiente.

En general, los españoles no mostraron mucha inclinación a colonizar el campo. Los hacendados difícilmente conseguían mayordomos. En 1599 Gonzalo Gómez de Cervantes afirmó: «Los que poseen haciendas las dejan arruinarse porque no encuentran a nadie a quien contratarlas... no se encuentra a nadie que quiera irse al campo»¹⁷. En cambio, seguía diciendo, los españoles prefieren vender vino en las calles de una población. No obstante, la economía local no satisfacía todas las necesidades de la sociedad española residente en la colonia. México, al igual que la Nueva Inglaterra de los primeros tiempos, dependía de la metrópoli tanto para el abastecimiento de hierro como para el de textiles¹⁸. Necesitaba armas, hierro y acero para herramientas, aguardiente y vino, papel y, sobre todo, textiles.

Gonzalo Gómez de Cervantes, *La vida económica y social de Nueva España al finalizar el siglo XVI*, prólogo y notas de Alberto María Carrero (México, 1944), pp. 117-18.

¹⁸ Bernard Bailyn, *The New England Merchants in the Seventeenth Century* (Harvard, Nueva York, 1964), p. 61.

Los indígenas podían vestirse de algodón, y las telas burdas de lana de producción local quizá satisfacían al populacho, pero la gente acomodada exigía telas de manufactura europea. Y ¿con qué podían pagarse estas importaciones? Luis de Castilla escribió que «era inútil enviar telas de algodón, cacao o maíz a Castilla, ni había barcos que vinieran de España a recoger tales productos»¹⁹. Del mismo modo, enviar lana y trigo era como mandar vasos a Samos. Aparte de unos cuantos cueros, la hacienda en México existía sobre todo para abastecer un mercado interno y no producía nada que valiera la pena de exportar.

Este problema de la balanza de pagos se resolvió con la exportación de metales preciosos, que primero fueron adquiridos mediante la oportuna confiscación del tesoro azteca, después por la escasa producción de los placeres de oro y, finalmente, a partir de 1550, por la producción de plata en gran escala. Para fines del siglo los metales preciosos eran más del 80 por 100 de las exportaciones totales de la Nueva España²⁰. El otro producto de valor para la exportación era la cochinilla. La curva de producción argentífera fue el factor determinante del ritmo del comercio transatlántico el cual, en términos del valor de los productos preponderantes, simplemente consistió en el trueque de plata de América por telas europeas.

La economía interna sufrió igualmente los efectos de la producción de plata. El descubrimiento de minas argentíferas empujó a los españoles mucho más allá de las fronteras del imperio azteca, hacia las amplias extensiones del norte llamadas entonces la Gran Chichimeca por los cazadores indígenas salvajes y nómadas que las recorrían. Porque aunque habrían de encontrarse ricos depósitos de plata en las cercanías de la ciudad de México —en Pachuca, Sultepec, Tlalpujahua y Taxco— las zonas mineras que más mineral producían se encontraban en el norte, dispersas en las estribaciones de la Sierra Madre que se internan hacia la Mesa del Norte, y

¹⁹ Citado en Borah, *Early Colonial Trade*, p. 8.

²⁰ Parry, *The Spanish Seaborne Empire*, pp. 242-3: «En ningún momento durante la última parte del siglo xvi y principios del xvii ascendió a menos del 80 por 100 la proporción del oro y la plata en los cargamentos enviados hacia España de que tenemos noticia, computada por su valor.» En el año de 1595, en que se llegó al máximo, el oro y la plata alcanzaron la cifra del 95.6 por 100 del total en valor, la cochinilla comprendía el 2.8 por 100, y el cuero el 1.4 por 100.

que se localizaban en su mayor parte sobre una línea que va de Pachuca a Sonora. La producción en gran escala se inició en el término de 1550 a 1560, después del descubrimiento de minas en Zacatecas (1546), Real del Monte (1552), Pachuca (1552), Guanajuato (1550) y una serie de veras menores en el norte ²¹. Si bien la curva de la producción ya no siguió subiendo después de 1590, experimentó una reducción considerable sino hasta después de 1630, cuando el desarrollo de la producción argentífera coincidió con la liquidación del sistema de encomiendas y llegó a su punto más alto cuando los efectos principales de la crisis demográfica ya habían dejado su huella.

Es difícil localizar documentos que nos den luz sobre cuáles eran las zonas mineras que producían la mayor cantidad de plata, pero sabemos que en 1632, las dos terceras partes del mercurio que consumió la minería se distribuyeron en el norte, comprendiendo en esta denominación a Guanajuato, y una tercera parte de esta cantidad fue consumida por las minas dependientes de la hacienda real de Zacatecas ²². Esta preponderancia de la zona norte en la riqueza minera fue el factor que en realidad hizo que se iniciara allí la colonización, ya que pronto cada campo minero se vio rodeado por un grupo de haciendas que dependían de él. La mayoría de estas fueron organizadas por empresarios mineros que necesitaban mano de obra para sus jornaleros y para sus mulas, así como madera, cuero y otras materias primas para las minas. La prosperidad de las haciendas del norte siguió de cerca los pasos del progreso de la minería.

Las utilidades proporcionadas por la minería sufragaron los gastos de la conquista de provincias enteras. Francisco de Ibarra, por ejemplo, financió la colonización de Nueva Vizcaya (hoy estado de Durango) con la fortuna que reunió su tío en Zacatecas ²³. Del mismo modo, el conquistador de Nuevo México, Juan de Oñate, heredó una fortuna de un tío, que era otro minero de Zacatecas ²⁴. También

²¹ Molessto Bargalló, *La minería y la metalurgia en la América española durante la época colonial* (México y Buenos Aires, 1955), pp. 61-3.

²² A. Maulla Tascón, *Historia de las minas de Almadén* (Madrid, 1958), p. 223.

²³ Véase J. Lloyd Mecham, *Francisco de Ibarra and Nueva Vizcaya* (Durham, N.C., 1927), y George P. Hammond, *Juan de Oñate and the Founding of New Mexico* (Santa Fe, N.M., 1927).

²⁴ Vito Alessio Robles, *Coahuila y Texas en la época colonial* (México, 1938), p. 148.

las grandes propiedades de Francisco de Urdiñola en Coahuila, que más tarde fueron base del marquesado de San Miguel de Aguayo, eran respaldadas en gran parte por sus minas de plata.

Las minas norteñas atrajeron una corriente pequeña pero constante de trabajadores indígenas los cuales, como los chichimecas demostraron ser intratables ni siquiera como esclavos, quizá procedían de Michoacán y de la Mesa Central. Hacia fines del siglo XVI las minas del Centro, de Guanajuato y de Zacatecas tenían empleados hombres de las siguientes categorías ²⁵.

Esclavos negros	1 022
Indígenas libres	4 606
Indígenas forzados	1 619
	7 247

Casi todos los trabajadores forzados laboraban en minas relativamente cercanas a la capital del virreinato —en Taxco y en Pachuca— mientras que en Zacatecas casi todos los indígenas eran libres y recibían un salario. Debe hacerse notar que los esclavos negros se empleaban para la fase de refinación, porque no soportaban los rigores del trabajo en las profundidades de los tiros de minas, a causa de la altitud de la meseta mexicana.

Si nos guiamos, como aproximación, con la escala de distribución de mercurio en 1632, parece que estos 7 247 hombres producían unas dos terceras partes de la plata de la Nueva España. La minería, entonces, probablemente no necesitaba más de unos 11 000 hombres. Una fuerza de trabajo tal, fácilmente podía eludir los efectos de la disminución de la población indígena, especialmente porque los empresarios pagaban salarios altos y daban a sus trabajadores una participación en el mineral que extraían ²⁶. Las minas representaban, para los indígenas más resistentes y emprendedores, abrumados

²⁵ Woodrow Borah, *New Spain's Century of Depression* (Berkeley y Los Angeles, 1951), pp. 37-8.

²⁶ Alonso de la Mota y Escobar, *Descripción geográfica de los reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León*, introducción por Joaquín Ramírez Cabañas (México, 1940), pp. 151-2. El salario mensual de un barretero iba de 5 a 8 pesos.

de obligaciones comunitarias, una vía de escape atractiva. Una vez que se encontraban en los campos mineros, indudablemente se asociaron pronto con los españoles, mestizos, mulatos y negros a quienes la minería ofrecía también la posibilidad de un salario alto y la perspectiva de hacer fortuna. Los mineros norteños constituyeron una especie de aristocracia laboral entre los trabajadores de México que se distinguieron por su libertad, su movilidad y su despilfarro.

Ante el siglo XVI tuvieron lugar en la Nueva España dos procesos claramente diferenciados. En la región anteriormente gobernada por los aztecas, la economía indígena fue completamente desplazada por la hacienda y las nuevas ciudades españolas, o por los pueblos se subordinó a ellas. En el norte fue creada una economía como la peninsular, pero en las primeras décadas del siglo XVII estos dos movimientos disminuyeron su ritmo, o comenzaron a invertirse. Sin embargo, siguen siendo desconocidas para nosotros las causas de esta depresión económica y las fases en que se presentó.

En la Mesa Central puede explicarse, es verdad, mediante la continua disminución de la fuerza de trabajo. Con alguna certeza podemos plantear la hipótesis de que la expansión de la producción neocuatrecal que implicaba el cambio de manos de la tierra en gran escala, como sucedió entre 1570 y 1600, llegó a un clímax y comenzó a declinar en razón de que el abastecimiento de mano de obra seguía en declinación. Muchas tierras, que durante un tiempo fueron cultivadas por la nueva clase terrateniente, quedaron abandonadas, especialmente después de 1630, cuando las exigencias de mano de obra crecieron por parte de la Corona para las obras del tajo de Huehuetoca y por fin al sistema de reclutamiento de trabajadores ya de por sí en decadencia²⁷. A partir de entonces, los agricultores españoles se vieron obligados a depender del trabajo asalariado y de un pequeño grupo de peones que residían permanentemente en sus tierras. Durante este crítico decenio, muchos hacendados se retiraron completamente de la producción. Fueron años de experimentación, por decirlo así, y si aceptamos como guía el precio del maíz, la relación entre la oferta y la demanda, es decir, entre las haciendas y las ciudades, no llegó a equilibrarse sino hasta el decenio de 1620 a 1630. Una fanega de maíz, que costaba en 1573 4.8 reales, se vendía

en 1627 en 9 reales precio que, aparte de los años de terrible sequía, conservaría durante más de un siglo ²⁸.

Si bien en la Mesa Central no tuvo lugar más que una sacudida económica, en el norte, en cambio, la minería experimentó una severa depresión. Los cálculos de Earl J. Hamilton sobre la exportación de metales preciosos americanos a España demuestran claramente que en el decenio de 1630 a 1640 la producción decayó precipitadamente, llegando a su mínimo después de 1650, cuando apenas alcanzó la cifra producida un siglo antes ²⁹. La curva del comercio transatlántico elaborada por M. Chaunu corrobora las cifras dadas por Hamilton ³⁰, y también Fausto Elhuyar, experto en minería del siglo XVIII que pudo examinar los registros de la Casa de Moneda, declaró que la Casa de México acuñó en 1632 unos 5 109 000 pesos, cifra que no volvió a ser superada hasta los años 1689-92, y que no fue definitivamente sobrepasada sino hasta después de 1706 ³¹.

Cualquier explicación que expongamos sobre esta declinación en la producción de plata debe ser hipotética. No obstante, la «crisis de mano de obra» no puede invocarse con facilidad como una razón, ya que las minas tuvieron una gran prosperidad mientras la población iba en disminución, y decayeron solo cuando esta ya había alcanzado una cierta estabilidad ³². No podemos considerar que los dos movimientos estuvieran sincronizados. Quizá ciertos campos mineros, como Pacluca y Taxco, que dependían del trabajo forzado, resintieron el efecto de las obras de Huehuetoca, pero la mayoría de los virreyes siempre dieron prioridad a la producción minera. De cualquier forma, estas regiones mineras cercanas a la capital únicamente

²⁸ Woodrow Borah y Sherburne F. Cook, *Price Trends of Some Basic Commodities in Central Mexico, 1531-1570* (Berkeley y Los Angeles, 1958), p. 18. Véase también C. Chester L. Guthrie, «Colonial Economy, Trade, Industry and Labor in the Seventeenth Century», *Revista de Historia de América*, 7 (diciembre de 1939), pp. 103-34. Véase una crítica a estos estudios en Enrique Florescano, *Precios del maíz y crisis agrícolas en México. 1708-1810* (México, 1969), pp. 21-8.

²⁹ Earl J. Hamilton, *American Treasure and the Price Revolution in Spain 1501-1650* (Cambridge, Mass., 1939), pp. 34, 43.

³⁰ H. y P. Chaunu, *Sérille et l'Atlantique* (1504-1650) (8 vols.; París, 1955-9), VII, 54-5. Véase también John Lynch, *Spain under the Hapsburgs* (Oxford, 1964), pp. 163-6.

³¹ Fausto de Elhuyar, *Indagaciones sobre la amonedación en la Nueva España* (Madrid, 1818), p. 12.

³² Borah, *New Spain's Century of Depression*, pp. 43-4.

producían la tercera parte del total, y además, el número de trabajadores que empleaba la minería era suficientemente pequeño y los salarios que recibían suficientemente altos para que la explotación minera haya eludido los efectos de la escasez de mano de obra.

Entonces, ¿qué fue lo que ocasionó la decadencia de las minas en la Nueva España? ¿Fueron la técnica deficiente, el agotamiento de los filones o los impuestos excesivos los azotes de la minería? En primer lugar, el gran florecimiento minero de fines del siglo

XVI no fue producto únicamente del descubrimiento de depósitos minerales, porque la calidad media del mineral mexicano no era suficientemente alta para proporcionar una gran utilidad mediante el simple método de fundición que se usaba en tiempos de la Conquista. Después de 1550 se introdujo una técnica alemana para purificar la plata del metal básico mediante un largo procedimiento de amalgamación con mercurio ³³, y fue este procedimiento el que salvó a la minería de su anterior dependencia en la buena suerte de encontrar minerales altamente ricos. Además, en 1548, la Corona redujo el impuesto establecido sobre la producción de plata de una quinta a una décima parte ³⁴. Esta concesión, otorgada únicamente a los mineros y no a los que beneficiaban el mineral ni a los comerciantes que compraban la plata, aunada a la técnica de amalgamación, proporcionó una base económica duradera a las nuevas minas descubiertas en la década de 1550 a 1560.

Pero en los años que siguieron la minería sufrió un aumento constante en sus costos de producción, al elevar la inflación mundial, causada en la Nueva España, tanto el precio de las materias primas como el costo de la mano de obra. Al mismo tiempo, el valor de la plata con relación al oro bajó de una proporción de 12:1 a 14:1 ³⁵. Además, como la mayor parte de la plata se acuñaba, su precio en el mercado permanecía estable, pero su valor adquisitivo declinó constantemente. Sin embargo, aunque posiblemente esta curva ascendente en los precios redujo las utilidades, no obstaculizó la produc-

³³ Juan Bargalló, *La minería*, pp. 115-33. Véase también Alan Probert, Dominique de Medina: The Patio Process and the Sixteenth Century Silver Crisis, *Journal of the West*, 8 (enero de 1969, pp. 90-124.

³⁴ Edm. de Fonseca y Carlos Urrutia, *Historia general de Real Hacienda española desde el reinado del virrey, conde de Revillagigedo* (6 vols.; México, 1845-53), I, 15. Wadsworth, *American Treasure*, p. 71.

ción, ya que las minas alcanzaron su máximo florecimiento exactamente cuando la inflación era mayor, y sólo decayeron cuando el proceso inflacionario había sido ya detenido. Tampoco podemos atribuirlo a una técnica deficiente, porque en los años de 1612-20, por ejemplo, un entusiasta alcalde real de San Luis Potosí distribuyó un crédito a la minería local de 60 000 pesos, y, lo que es más significativo, organizó la construcción de un túnel de desagüe bajo la veta de unos 230 metros de largo. El resultado de esto fue que la producción aumentó en una tercera parte ³⁶. Parece que la técnica, si bien era primitiva, era de todas maneras apropiada para las necesidades de la época.

Los contemporáneos, por el contrario, atribuyeron la crisis minera a los altos costos y al abastecimiento insuficiente de mercurio. Este catalizador indispensable se producía en tres grandes minas que se hallaban en Almadén, en España, en Huancavelica, en el Perú, y en la península de Istria. Aunque las de Almadén se hallaban arrendadas al Banco Fugger, la venta y distribución del mercurio estaba en manos de la Real Hacienda y de magistrados autorizados. Al principio la Corona obtuvo unas utilidades exorbitantes de este monopolio. En el decenio de 1560 a 1570 el costo medio en la ciudad de México era de 117 a 125 pesos por quintal. Pero los precios de venta que se obtenían mediante subasta iban de 132 a 236 pesos, siendo las cotizaciones más frecuentes entre 170 y 187 pesos. Luego, ante las protestas locales, la Corona redujo continuamente el precio, de 113 pesos en 1590 a 96½ pesos en 1602, hasta que en 1627 se llegó finalmente al precio que durante más de un siglo fue estable, de 82½ pesos el quintal ³⁷. Así pues, contrariamente a la tendencia general, el precio de venta del mercurio, que representaba el mayor renglón en los costos del beneficio, en realidad disminuyó durante aquellos años.

Tan importante como un precio razonable era que el abastecimiento fuera abundante. A pesar de ello, durante el decenio de 1630 a 1640, las exportaciones de Almadén a Veracruz fueron redu-

³⁶ Woodrow Borah, «Un gobierno provincial de frontera en San Luis Potosí, 1612-20», *Historia Mexicana*, 13 (abril-junio de 1964), pp. 532-50.

³⁷ A. Matilla Tascón, *Minas de Almadén*, pp. 214-15 y p. 213; Fonseca y Urrutia, *Historia general de Real Hacienda*, I, 302, 310; y AGI, México 2235, *Real Cédula*, 7 febrero, 1602.

plata o desviadas hacia el Perú. La tabla 1 demuestra la cuantía de este cambio ³⁸.

Sin el mercurio no podía beneficiarse una gran cantidad de mineral de calidad mediana ya que, de esta clase de mineral, el procedimiento de fundición no extraía suficiente metal para cubrir su costo. Puede calcularse, aproximadamente, que durante aquellos años antes de 1632 por lo menos dos terceras partes de la plata mexicana se producían mediante la amalgamación ³⁹. Por ello esta inesperada reducción de los envíos de mercurio a la mitad inevitablemente cerró muchas minas.

Años más tarde se recurrió al Perú y a Alemania para completar el insuficiente abastecimiento que llegaba de Almadén. Por ejemplo, en 1670, llegaron del Perú unos 3 000 quintales. Hasta a China se le pidió ayuda. No obstante, todas estas fuentes tenían un mismo defecto: sus precios eran demasiado altos, ya que iban de 110 a 140 pesos contra 82½ que costaba el mercurio español ⁴⁰. Tampoco tenían capacidad de proporcionar los 4 000-5 000 quintales de mercurio al año que requería la minería mexicana para alcanzar de nuevo

A. Matilla Tascón, *Minas de Almadén*, pp. 291-2.

TABLA I
ENVÍOS DE MERCURIO A VERACRUZ (1610-45)

En quinquenios		En décadas	
1611-15	19 048 quintales	1611-20	43 359 quintales
1616-20	24 311 quintales	1621-30	46 685 quintales
1621-5	24 045 quintales	1631-40	20 274 quintales
1626-30	22 640 quintales		
1631-35	11 033 quintales		
1636-40	9 241 quintales		
1641-5	14 579 quintales		

Para llegar a este porcentaje he hecho el siguiente cálculo. La cantidad de mercurio importada de 1626 a 1630 fue de 4 528 quintales al año. Multiplicada por cien, se obtiene la cifra aproximada en marcos de la producción por amalgamación, es decir, 452 800. La acuñación total en 1630 era equivalente a 601 065 marcos. Con relación a la importación de mercurio véase A. Matilla Tascón, *Minas de Almadén*, pp. 291-2, y con referencia a la proporción del mercurio a la plata, véase Fonseca y Urrutia, *El Virrey General de Real Hacienda*: I, 306-83. Véanse los datos de la acuñación en 1630 en Elhuyar, *Indagaciones*, p. 12.

Francisco Javier de Gamboa, *Comentarios a las ordenanzas de minas dedicados a su majestad, nuestro señor Don Carlos III* (Madrid, 1761), p. 46.

el nivel de producción del decenio de 1620 a 1630. Un corresponsal anónimo de la Corona, escribiendo sobre Zacatecas en el último decenio del siglo XVII, declaró: «remita a esos reinos suficiente azogue, pues el único remedio para que haya muchas platas»⁴¹. El mismo corresponsal señalaba una causa secundaria de la decadencia de la minería local: la escasez de capital. En Zacatecas el alcalde real trató de monopolizar las operaciones de crédito, con el resultado de que los comerciantes se mostraron poco dispuestos a invertir en la minería o a otorgarle créditos, ya fuera por falta de voluntad o de capacidad. Consecuentemente, los mineros de la zona a menudo carecían de efectivo hasta para sufragar sus costos de operación. Únicamente una intensa inversión de capital mercantil, afirmaba, podría librar a las minas del predicamento en que se encontraban.

En general, las pruebas documentales dispersas que han sido reunidas hasta ahora indican que muchas de las grandes familias terratenientes y mineras establecidas durante el gran florecimiento económico de fines del siglo XVI, corrieron la misma suerte que la clase encomendera. No eran raros la bancarrota y el abandono de las haciendas. Ya en 1599 Gómez de Cervantes se lamentaba de que: «los que ayer estaban en tiendas y tabernas y en otros ejercicios viles, están hoy puestos y constituídos en los mejores y más calificados oficios de la tierra, y los caballeros y descendientes de aquéllos que la conquistaron y ganaron, pobres, abatidos, desfavorecidos y arrinconados»⁴². Setenta años más tarde, el virrey Marqués de Mancera comentaba en 1673 que «la estrechez y disminución, a que han venido los patrimonios y mayorazgos de los caballeros»⁴³. Claramente, en la Nueva España ni las minas de plata ni las grandes haciendas proporcionaron una base económica estable a la aristocracia hereditaria.

No debe exagerarse, a pesar de todo, esta depresión económica de mediados del siglo XVII. Surgió principalmente de la crisis minera y de la consiguiente reducción del comercio transatlántico, y puso fin a un ciclo en que se depositó demasiada confianza en las minas de plata y en la posesión de tierras. Quizá arruinó, o por lo menos

⁴¹ BRP, MSS Miscelánea de Ayala, 45, f. 304.

⁴² Gómez de Cervantes, *La vida económica*, pp. 94, 132.

⁴³ *Instrucciones que los virreyes de Nueva España dejaron a sus sucesores* (México, 1867), p. 258.

en mejores condiciones más modestas a muchas familias pudientes, pero el hecho es que durante el clímax de esta tempestad económica, entre el censo de 1650 a 1660 el diarista Gregorio de Guijo informaba de fortunas de 116 000 pesos «sólo en metal y monedas»; de 800 000 pesos en efectivo sin contar casas, jardines y muebles; y otra de 200 000 pesos⁴⁴. Sólo la Iglesia podía competir con estos ricos particulares. Un arzobispo de México, a su regreso a Europa, llevó consigo unos 800 000 pesos en joyas y metales preciosos. La crisis, sin embargo, obviamente no afectó a todos con la misma intensidad, y no todas las zonas sufrieron todas sus consecuencias. La reducción en las importaciones de telas de Europa naturalmente estimuló a la industria local. Además, hacia 1650 la población española —que incluía no solamente a españoles, sino también a mestizos, mulatos y negros— quizá llegaba a las trescientas mil personas, en comparación con la población indígena que apenas pasaba del millón⁴⁵. Ciertas estadísticas relativas al Bajío también indican que el flujo de emigración hacia el norte no se detuvo. El registro de tributarios indígenas en Querétaro aumentó de 600 a 2 000 entre 1644 y 1688, y en la cercana población de Celaya, de 2 184 a 6 419 entre 1657 y 1688⁴⁶.

La verdad que M. Chevalier ha argumentado que durante aquel período las haciendas mexicanas, junto con sus dueños y peones, se convirtieron en un aislamiento rural con una autosuficiencia que comparaba las grandes propiedades en Europa durante la Edad Media⁴⁷, por este argumento, y las pruebas que lo apoyan, esencialmente son aplicables al norte. No hay duda de que allí fueron abandonadas muchas haciendas al cerrarse las minas, y otras redujeron sus actividades a un nivel de subsistencia, pero debemos distinguir entre el norte y el centro. Es igualmente importante el hecho de que algunas haciendas cultivaban cereales y caña de azúcar y otras eran ganaderas. Estas últimas podían adaptarse con facilidad a un régimen de autosuficiencia, pues las primeras, que por su producción estaban sujetas a la demanda del mercado, eran más susceptibles de quedar

⁴⁴ Gregorio M. Guijo, *Diario 1648-1684* (2 vols.; México, 1953), I, 184; II, 10, 61, 147.

⁴⁵ O. H. Brown, *New Spain's Century of Depression*, p. 3.

⁴⁶ L. A. Miranda, «La población indígena de México en el siglo XVII», *Hispania Mexicana*, 12 (1963), pp. 182-9.

⁴⁷ M. Chevalier, *Los grandes latifundios*, pp. 226-33.

abandonadas. Como ha observado M. Berthe: «el ingenio azucarero era así una empresa especializada que concentraba todos sus recursos en la producción de un artículo, el azúcar, destinado a la venta. Por ello estaba ligado a una economía de mercado y sujeto consecuentemente a todas sus fluctuaciones» ⁴⁸.

En la región central de la Nueva España, por consiguiente, la expansión ininterrumpida de la población española, relativamente concentrada en núcleos urbanos, promovió el avance correspondiente de la economía doméstica. Sin embargo, las pruebas documentales de aquella época relativas al crecimiento de este círculo interno de intercambio, sea de productos industriales como agropecuarios, son extraordinariamente escasas. Tanto los virreyes como los diaristas fueron fascinados por el brillo del comercio transatlántico y de las minas de plata. Únicamente hasta fines del período colonial se hace abundante la información relativa a la industria y a la agricultura.

II

Durante el siglo XVIII la Nueva España experimentó una profunda recuperación económica que tuvo su origen tanto en el renacimiento de la actividad minera como en el continuo aumento de la población. Como desde muchos puntos de vista el desarrollo de la producción de plata dependía del crecimiento de la economía interna, este último merece un examen más minucioso. En términos generales, la población mexicana aumentó de 3 336 000 personas en que se estimó en 1742, a cerca de 6 122 000 en 1810 ⁴⁹. Casi todas las razas que habitaban la colonia se reprodujeron más o menos con el mismo ritmo. En los dos años que se han citado, los indígenas formaban el 60 por 100 de la población y los cálculos sobre cómo se componía el resto son algo variables. Los «españoles» eran el 11 por 100 en 1742 y el 18 por 100 en 1810. Mestizos y mulatos,

⁴⁸ Jean Pierre Berthe, «Xochimancas, les travaux et les jours dans une hacienda sucrière de Nouvelle Espagne au XVIII^e siècle», *Jahrbuch für Geschichte... Lateinamerikas*, Tomo 3 (Colonia, 1966), p. 102.

⁴⁹ Con relación a estas cifras de población véanse Peter Gerhard, *México en 1742* (México, 1962); Alexander von Humboldt, *Ensayo político sobre el reino de la Nueva España*, ed. Juan A. Ortega y Medina (México, 1966), pp. 37-9; Fernando Navarro y Noriega, *Memoria sobre la población del reino de la Nueva España* (México, 1954).

comados en conjunto bajo la denominación de *castas*, ascendían al 22 por 100 ⁵⁰. Estas proporciones raciales representaban promedios nacionales, no regionales, ya que mientras más al sur se iba se encontraban más indígenas, mientras que en el norte el grupo hispánico seguramente predominaba. En la intendencia de Oaxaca los indígenas eran más del 88 por 100 de la población, mientras que en la de Guadalajara los habitantes podían dividirse en tres grupos aproximadamente iguales de españoles, indígenas y castas. La intendencia de México, en el centro del país, en donde los hispanos formaban el 66 por 100 del total, estaba más conforme con el promedio general. Esta diferencia entre las provincias es igualmente manifiesta cuando se considera la tasa total de crecimiento, porque mientras en 1742 las diócesis del norte, incluyendo en esta definición a Michoacán, contaban con el 26 por 100 de los habitantes de la Nueva España, en 1810 su población había subido al 30 por 100. La mayor parte de este crecimiento tuvo lugar en la zona que puede definirse como más cercana. En 1742 la diócesis de Michoacán contenía el 11 por 100 de la población; en 1810 los habitantes de esa misma zona, ya dividida en tres provincias, Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí, eran el 19 por 100 del total ⁵¹.

Estas estadísticas, aunque burdas y aproximadas, sirven para demostrar que para fines del siglo XVIII cada una de las regiones de la Nueva España poseía ya características notablemente propias. Aquí se contabilizaron la geografía y la historia, porque si bien el corazón del país está formado por amplios y fértiles valles todos ellos relativamente accesibles, en el sur las dos cadenas de montañas que limitan el altiplano convergen y parten el paisaje en una serie de montes y valles. Viajar era más fácil por el norte, a pesar de las derivaciones de la Sierra Madre que dividen la meseta, pero las distancias eran mucho mayores. Además, hacia el norte la tierra se va haciendo cada vez más árida y estéril. El clima está en función de la altitud, de manera que todas las zonas templadas son vecinas de las regiones tropicales, pero el descenso a las costas es arduo y difícil. El mar

⁵⁰ Gerhard, *México en 1742*, pp. 17-18; Navarro, *Memoria*, p. 30.

⁵¹ Son cálculos míos con base en las cifras proporcionadas por Gerhard y Navarro.

PRIMERA PARTE

LA REVOLUCION EN
EL GOBIERNO

Todos los demás errores sólo perturban al
estado; pero la innovación es el soplo del des-
tina.

JOHN DRYDEN

no ofrecía, como en Europa, una forma fácil y barata de comunicación entre las regiones. Aparte del lago del Valle de México y de sus pocos kilómetros de canales que conducían a Chalco, la Nueva España no poseía ni ríos navegables ni canales internos. Viajar, entonces, era difícil, ya que se hacía solo a caballo, a lomo de mula o en los pocos carruajes que existían. En el transporte de mercancías la recua de mulas reinaba como medio único⁵², pero como una mula común y corriente no cargaba más que unos ciento cincuenta kilos y con trabajo avanzaba 20 kilómetros diarios, las mercancías baratas y voluminosas no podían ser transportadas a grandes distancias a causa de la severa limitación que debía imponerse a los costos⁵³. Así, el medio geográfico de la Nueva España acentuaba la diversidad y el aislamiento de las regiones.

Sin embargo, los residentes de casi todas las regiones podían producir a distancias relativamente cortas la totalidad de los alimentos básicos de México. El maíz y el fríjol se dan bien casi en todas partes y la mayoría de los campesinos cultivaban su propia parcela llamada milpa. Naturalmente que el cultivo del trigo se limitaba a las regiones más templadas, pero el ganado vacuno, los cerdos y los pollos se criaban en toda la colonia. El ganado lanar, sin embargo, al igual que el trigo, no se producía bien en los trópicos, de manera que tuvo lugar una cierta especialización regional. El norte contaba con el mayor número de cabezas, y en 1807 el intendente de Durango estimó que en su provincia había más de dos millones de cabezas de ganado lanar y unas 324 000 reses⁵⁴. Coahuila y Nuevo León eran también conocidas por la abundancia de rebaños. En cambio, en 1807 Michoacán no tenía más que 150 000 cabezas de ganado vacuno y 237 000 de lanar⁵⁵. Los cultivos tropicales, especialmente el algodón y el azúcar, generalmente podían producirse en la tierra caliente cercana. La ciudad de México obtenía azúcar de los ingenios vecinos a Cuernavaca, en donde hoy es el estado de Morelos. El Bajío obtenía algodón crudo y azúcar en Michoacán. Jalisco enviaba

⁵² Robert C. West, *The Mining Community in Northern New Spain: The Parral Mining District* (Berkeley y Los Angeles, 1949), pp. 86-7.

⁵³ H. G. Ward, *Mexico in 1827* (2 vols.; Londres, 1828), II, 216.

⁵⁴ Jesús Silva Herzog, *Colección de documentos*, III, *Relaciones estadísticas de Nueva España a principios del siglo XIX* (México, 1944), p. 96.

⁵⁵ Con relación a Michoacán véase BM Add. MSS 17557, ff. 140-2.

piloncillo a Sinaloa y a Durango ⁵⁶, mientras que Veracruz abastecía a la región oriental del Altiplano.

Esta tendencia hacia la diversificación racial y hacia la autosuficiencia económica regional propició esquemas muy diversos de tenencia de la tierra y de producción agrícola. En la provincia de Oaxaca existían muy pocas haciendas: en 1810 se registraron únicamente 83, en tanto que había 928 poblados indígenas y 264 ranchos. En cambio en la provincia de Guadalajara, además de 370 haciendas y 326 poblados indígenas, había 1 155 ranchos, término no muy claramente definido en el que se incluían tanto las pequeñas propiedades rurales como las aldeas donde residían agricultores que eran o propietarios o arrendatarios de sus tierras. En este aspecto la intendencia central de México ocupaba una posición media, ya que tenía 1 228 pueblos, 824 haciendas y 871 ranchos ⁵⁷. El contraste, en realidad, consistía en que el sur era indígena mientras el norte era mestizo, y en que por una parte existía una agricultura principalmente de autosubsistencia y por la otra una agricultura que abastecía al mercado.

La demanda efectiva de productos agropecuarios estaba regida principalmente por los costos de transporte y por la importancia de los mercados urbanos. H. G. Ward, que fue el primer ministro británico enviado a México, evaluó con precisión esta situación: «Pero en la nueva España, la falta de caminos, y la consecuente dificultad para el comercio entre los estados productores de grano, excluye de la competencia, en cada mercado, a todos aquellos que se encuentran más allá del estrecho círculo de una vecindad inmediata; y así se mantiene una especie de precio ficticio» ⁵⁸. Se encontró con que el precio del maíz en la capital era de más del doble del que prevalecía a 300 kilómetros de distancia, y la causa de estas diferencias era el costo del transporte. En 1785 Juan Antonio de Yermo, rico comerciante y terrateniente, calculó que transportar *maíz por tierra a la ciudad de México desde una distancia de más de 100 kilómetros* costaba 5 1/3 reales por fanega, suma que equivalía al 50 por 100 del precio de venta, que era de 10 2/3 reales ⁵⁹. Los

⁵⁶ West, *The Mining Community*, pp. 78-9.

⁵⁷ Navarro y Noriega, *Memoria*, hoja doblada, p. 30.

⁵⁸ Ward, *Mexico in 1827*, I, 42, 50.

⁵⁹ BN (México) MSS 1535, f. 129.

artículos voluminosos y baratos, tales como los cereales, tenían que cultivarse y consumirse localmente, o de otro modo había que privarse de ellos. No obstante, los mercados disponibles eran sumamente limitados en tamaño, en relación a la capacidad productiva de las grandes haciendas. La totalidad de la demanda de maíz en la ciudad de México podía ser casi satisfecha por las haciendas de un distrito de Chalco ⁶⁰.

Este cuadro de un círculo comercial puramente local, sin embargo, no debe exagerarse, porque los artículos industriales llegaban a mercados lejanos, y la industria colonial, en su mayor parte, simplemente transformaba los productos agrícolas y pastorales. El algodón, la lana, el cuero, el jabón y el sebo para velas eran los productos que figuraban prominentemente en los informes de los intendentes. En Jalisco, por ejemplo, la producción de jabón fue valuada en 28 000 pesos y la de sebo para velas, en 271 000 pesos. La provincia de Puebla, según afirmaba su intendente, producía anualmente cinco millones de libras de jabón ⁶¹. En el campo textil se manifestaba una cierta división del trabajo entre las regiones. El sur, y particularmente la ciudad de Puebla, se especializaban en la manufactura de manta de algodón, el Bajío en telas de lana, y Jalisco en piel y gamuza. No obstante, estas preferencias, determinadas en parte por el clima y en parte por la proximidad a las fuentes de materias primas, no fueron absolutamente invariables. En Puebla también se curtía el cuero y en el Bajío se hilaba el algodón. Además, aunque Querétaro y Puebla eran los grandes centros textiles, otras ciudades de menor importancia, tales como Oaxaca y Celaya, y muchos pueblos pequeños, también manufacturaban grandes cantidades de manta ⁶².

La escala a que operaba esta industria textil en la colonia era, en muchos casos, sorprendentemente grande. A fines del siglo el intendente de Puebla estimó que por lo menos la mitad de la población de la ciudad (unos 52 000 habitantes en 1793) se ocupaba de hilar algodón y de tejer manta ⁶³. Las fuentes de abastecimiento

⁶⁰ Enrique Florescano, *Precios del maíz*, p. 95.

⁶¹ Silva Herzog, *Documentos*, pp. 54, 101.

⁶² En Oaxaca más de 10.000 personas se ocupaban de hilar y tejer. Véase BM Add. MSS 17557, f. 31.

⁶³ Silva Herzog, *Documentos*, p. 54.

de materia prima estaban en Veracruz y Oaxaca, desde donde el algodón crudo se transportaba a Puebla en recua de mulas. La venta y distribución tanto de la materia prima como del producto elaborado eran manejadas por un grupo de unas 28 casas mercantiles ⁶⁴. No poseemos cifras precisas de la producción, pero en los años de 1790 a 1805 Puebla envió anualmente a la ciudad de México más de un millón de libras de telas ⁶⁵.

Los mercados más amplios y productivos para los textiles domésticos se hallaban en el norte. En 1804 el intendente de Guadalajara calculó que su provincia importaba productos textiles del centro por valor de 462 000 pesos. Es cierto que esta cifra no podía compararse favorablemente con la de 1 299 000 pesos que se gastaron en telas de manufactura europea, pero hay que tomar en cuenta que el producto doméstico era ordinario y barato, de manera que en volumen quizá sobrepasaba a su competidor extranjero; además, la intendencia poseía su propia industria, aunque fuera pequeña ⁶⁶. Sin embargo, más hacia el norte no existían ni siquiera ruecas caseras, de manera que las vastas provincias de Durango, Sonora y Coahuila eran completamente dependientes de la industria textil de Puebla, San Miguel el Grande y Querétaro, que las abastecían de manta, cobijas y ponchos ⁶⁷.

En muchos sentidos el norte, tan despoblado y tan rico en minas y ganados, y *atrasado en lo relativo a la industria y a la agricultura*, era una dependencia colonial de las provincias centrales ⁶⁸. Las abastecía de muchas materias primas, cuero, lana, un poco de algodón, mulas, caballos y toros, y plata. A cambio de esto compraba artículos manufacturados, especialmente textiles, cerámica, objetos finos de plata y alimentos de origen tropical, como el azúcar. Este era, probablemente, el ejemplo más cuantioso y en mayor escala de comercio interregional de productos domésticos en la Nueva España. Lo que

⁶⁴ Jan Bazant, «Evolución de la industria textil poblana (1554-1845)», *Historia Mexicana*, 13 (1964), pp. 473-516.

⁶⁵ Robert A. Potash, *El banco de arío de México. 1821-1846* (México, 1959), pp. 17-25.

⁶⁶ Silva Herzog, *Documentos*, p. 103.

⁶⁷ *Ibid.*, pp. 96, 137.

⁶⁸ Los norteños se quejaban de tener que depender del centro. Véase Miguel Ramos Arizpe, *Memoria sobre el estado de las provincias internas de oriente presentada a las Cortes de Cádiz*. Noticia biográfica y notas por Vito Alessio Robles (México, 1932).

el Alto Perú era para Quito, Cuzco, Arequipa y Buenos Aires, eso era el norte de México para el Centro y para el Bajío. Naturalmente que en ambos casos lo que generó el comercio interior a grandes distancias fue el poder adquisitivo de la minería y de sus trabajadores.

Pero ¿qué tan importante fue esta economía doméstica, en relación a la de exportación? Después de todo, la Nueva España, como colonia que era, ¿no existía para satisfacer las necesidades de la Metrópoli? Para responder a estas preguntas tenemos por fuerza que recurrir a las estadísticas. Por fortuna podemos referirnos a los cálculos contemporáneos de José María Quirós, secretario del Consulado de Veracruz. He aquí sus estimaciones, que recientemente han sido sometidas a una revisión detallada ⁶⁹.

VALOR DE LA PRODUCCION ANUAL DE LA NUEVA ESPAÑA h. 1810

Agricultura	106 285 000 pesos (56 %)
Manufacturas	55 386 000 pesos (29 %)
Minería	28 451 000 pesos (15 %)
	190 122 000 pesos (100 %)

Naturalmente que estas cifras deben manejarse con cuidado, porque son esencialmente aproximaciones gruesas basadas en extrapolaciones hechas a partir de una hipótesis del consumo mínimo de la población de México. De ningún modo representan el valor de los artículos vendidos en la realidad. No obstante, a pesar de su obvia aproximación, las estimaciones de Quirós demuestran que la economía interior, tanto por el valor de la producción como por el del intercambio comercial (lo cual es más importante porque

⁶⁹ José María Quirós, *Memoria de estatuto. Idea de la riqueza que daban la masa circulante de Nueva España sus naturales producciones* (Veracruz, 1817). Este folleto ha sido reimpresso en *Colección de documentos para la historia del comercio exterior de México* (México, 1959), VI. Fernando Rosenzweig Hernández, «La economía novo-hispánica al comenzar el siglo XIX», *Ciencias Políticas y Sociales*, 9 (1963), pp. 455-93.

la mayoría de los artículos industriales se vendían) claramente superaba al sector externo de la economía colonial. También daba empleo a la enorme mayoría de la población, ya que la minería, aun en 1803, probablemente no ocupaba a más de 50 000 trabajadores ⁷⁰.

Al mismo tiempo, no debemos subestimar sin embargo el papel decisivo de la minería y del comercio de ultramar. La agricultura y la industria mexicanas producían principalmente artículos baratos que daban poca oportunidad de obtener ganancias. Es verdad que por lo menos las dos terceras partes de la población se vestían con textiles domésticos, y que del mismo modo la colonia se autoalimentaba en gran medida ⁷¹, pero los artículos de importación europeos y orientales, tales como los textiles, el *aguardiente* y el *vino*, eran los que tenían precios altos y los que producían una ganancia igualmente alta. La minería argentífera era, por su parte, la única actividad que posiblemente daba la oportunidad a unos cuantos individuos con suerte de que se convirtieran en millonarios de la noche a la mañana. La importancia del sector de importación, entonces, no residía tanto en el número de personas a que daba empleo, ni en el valor absoluto de sus productos, sino precisamente en que era muy productivo. Sólo mediante las actividades mineras y con el comercio exterior podía adquirirse rápidamente una fortuna. Eran el único modo, dentro de la variedad estática de actividades económicas posibles, como podía acumularse en gran escala el capital sobrante.

III

La sociedad de la Nueva España era tan desequilibrada, característica y colonial como su economía. Las distinciones de clase por entonces en vigor en Europa de noble, hidalgo, burgués, plebeyo libre y siervo no son aplicables a México sin una fuerte distorsión. Es verdad que existía una especie de aristocracia con títulos, pero en su mayor parte era de tan reciente creación, y sus glorias fueron tan pasajeras, que la nobleza europea se sentía movida a risa ⁷².

⁷⁰ Humboldt, *Ensayo político*, p. 48.

⁷¹ Juan López de Cancelada, *Ruina de la Nueva España* (Cádiz, 1811), pp. 11-12.

⁷² Mariano Otero, *Obras* (2 vols.; ed. Jesús Reyes Heróles, México, 1967), I, 28-9.

Además, buscamos en vano a la clase media, o a una burguesía mercantil o profesional que tuviera conciencia de ocupar un rango medio en la sociedad. Tampoco es pertinente la distinción entre plebeyos libres y no libres, porque aparte de unos cuantos esclavos, todo el mundo en la Nueva España era libre en el sentido de que todos los súbditos de la Corona podían recurrir a la justicia real; la ley no ligaba a nadie de por vida a los terratenientes. En realidad, no existía en México un sistema de clases claramente definido.

No obstante esto, existía naturalmente una jerarquía social con claras divisiones, que nulificaba totalmente los derechos del ciudadano común, y que impedía en gran medida la movilidad social ascendente. En la Nueva España la posición de una persona en la sociedad estaba determinada tanto por la clase social como por la raza. La población se dividía en tres grandes categorías: españoles, tanto europeos como americanos; castas, es decir, mestizos, mulatos y otras mezclas; e indígenas. Estas categorías, a las que se asignaba a cada individuo en el momento de bautizarlo, se referían a la calidad cívica y fiscal de las personas más que a sus antecedentes genéticos. La mayoría de los «españoles» eran mestizos; muchas castas eran indígenas aculturados; y los indígenas, especialmente si eran caciques, muy a menudo eran mestizos⁷³. Debe hacerse hincapié en que cada uno de estos grupos tenía derechos civiles y obligaciones fiscales bien definidas. No obstante, era frecuente que se hiciera una división más simple entre la *gente de razón*, es decir, la comunidad hispánica, y los indígenas, dicotomía que acentuaba la severa división todavía existente entre los dos grupos humanos que habitaban la Nueva España.

Otra distinción igualmente esquemática existía entre la *gente decente*, es decir, las clases respetables, y la *plebe*, o sea, el populacho. Esta mal definida clase alta colonial estaba formada enteramente por españoles. Se le reconocía por su riqueza, por su ocupación, por sus privilegios legales y por su sangre, su educación y costumbres españolas. Pero no actuaba en ningún sentido como casta establecida,

⁷³ Gonzalo Aguirre Beltrán, *La población negra de México, 1519-1810. Estudio etno-histórico* (México, 1946), pp. 154, 174-5, 274-80. Véase Woodrow Borah, «Race and Class in Mexico», *The Pacific Historical Review*, 22 (1954), N.º 4, pp. 331-42.

sino que constituía una *élite* un poco inestable como grupo. Lucas Alamán escribió que formaba:

una nobleza que no se distinguía del resto de la casta española sino por la riqueza, y que cuando ésta se acababa volvía a caer en la clase común... esta clase, a la que se agregaban todos los que adquirirían fortuna, pues todos pretendían pasar por españoles y nobles, se distinguía del resto de la población por su traje, estando más o menos bien vestidos los individuos que la formaban, cuando el pueblo generalmente no lo estaba, se conocía con el nombre de «gente decente» y ésto, más bien que el nacimiento, era el carácter distintivo con que se le designaba ⁷⁴.

No puede establecerse entonces un solo criterio, como podía ser la propiedad de la tierra, una cierta forma de educación o los derechos hereditarios, que rigiera el ingreso a esta heterogénea *élite* colonial. No era tanto una clase social cuanto un conjunto, formado por acumulación, de las órdenes privilegiadas de la sociedad que tenían *fueros*, es decir, el derecho a ser juzgados por iguales. En este sentido, el clero, con su total inmunidad a la jurisdicción de los tribunales reales, formaba parte de la *élite*. La burocracia, los comerciantes, el ejército y, a partir de 1783, los mineros, también tenían *fueros*, es decir, el derecho a ser juzgados por sus iguales. En nientes, aunque no gozaban de privilegios legales, fueran reconocidos como *gente decente*. También la mayoría de los españoles peninsulares residentes en la colonia pertenecían a este grupo por derecho de nacimiento.

La *élite* colonial era distinta de la europea en cuanto que los comerciantes gozaban de un prestigio social igual al de los hacendados. Esto era cierto especialmente con relación a los grandes importadores, los *almaceneros* de la ciudad de México, entre los que se hallaban algunos de los hombres más ricos de la colonia. La riqueza proporcionaba posición y aceptación en la sociedad. Ya en 1673 el virrey Marqués de Mancera declaró: «los mercaderes y tratantes, de que se compone en las Indias buena parte de la nación española se acercan mucho a la nobleza, afectando su porte y tratamiento... puede suponerse que en estas provincias por la mayor parte el

⁷⁴ Lucas Alamán, *Historia de México* (5 vols.; 1942), I, 19.

caballero es mercader y el mercader es caballero»⁷⁵. Reconociendo este hecho, la Corona otorgó títulos nobiliarios a varios comerciantes, y recompensó a muchos más admitiéndolos como miembros de las órdenes caballerescas de Santiago, Alcántara y Calatrava⁷⁶. Durante el siglo pasado los pensadores sociales latinoamericanos, tales como el argentino Domingo de Sarmiento, hacían hincapié en la diferencia entre los puritanos de Nueva Inglaterra y los conquistadores de México y del Perú; sin embargo, no advirtieron que en ambas colonias, ya para principios del siglo XVIII los mercaderes habían surgido como las figuras dominantes de la sociedad⁷⁷.

No obstante, existían ciertos requisitos mínimos para entrar a las filas de la gente decente. Aparte de unos cuantos caciques hispanizados, no se admitían indígenas, y del mismo modo se rechazaba a las castas, es decir, mestizos y mulatos. Sólo los españoles podían aspirar a entrar. Así pues, una escala racial móvil muy peculiar regía el avance dentro de la sociedad en el México colonial. No todos los blancos pertenecían a las clases respetables, es decir, a la gente decente, o lo que es lo mismo, no todo el grupo social de los españoles era rico, educado y respetable, pero todos los ricos y educados eran españoles⁷⁸. Esta escala social fue la que prácticamente impidió toda movilidad social ascendente a quien quiera que no fuera considerado español. Naturalmente, existía la hipocresía y la simulación: muchos criollos de clase alta tenían algo de sangre indígena; pero el prejuicio social imponía los esquemas matrimoniales: los criollos con más sangre mestiza procuraban casarse con mujeres que tuvieran apariencia más europea, y las criollas ricas se casaban con españoles peninsulares.

Por otra parte, entre la plebe se encontraba una cierta confusión de razas y ocupaciones. Muchos hombres de raza diversa trabajaban en los mismos oficios, aunque de todos modos poseían una calidad social y legal diferente. En primer lugar, los indígenas pagaban un impuesto definido por cabeza, llamado tributo, que se fijó en poco

⁷⁵ *Instrucciones que los virreyes... dejaron*, p. 258.

⁷⁶ Véase más adelante, Segunda Parte, capítulo 1, «Comerciantes».

⁷⁷ Domingo de Sarmiento, *Conflicto y armonía de las razas en América* (2 vols.; Buenos Aires, 1953), I, 197-211, 240-6. Bailyn, *The New England Merchants*, pp. 192-7.

⁷⁸ Véanse «Los escritos de Manuel Abad y Queipo», reimpresos en José María Luis Mora, *Obras sueltas* (México, 1963), p. 205.

más de dos pesos anuales y que era recaudado por el magistrado local. Así, figuraban siempre en el padrón permanente de tributarios que tenía cada poblado ⁷⁹. Como compensación parcial por este impuesto, estaban exentos del pago de alcabalas y tampoco pagaban diezmos. Igualmente característica era la tenencia de la tierra por parte de los indígenas: la propiedad era comunal, de manera que el campesino individual no tenía el derecho a vender o enajenar su propiedad. La Corona garantizaba a cada pueblo una superficie de tierra de 600 varas radiales a partir del perímetro de la población ⁸⁰. Naturalmente que no siempre se cumplían estas leyes, pero por lo menos en teoría los súbditos indígenas tenían derecho a una fracción de las tierras comunales. Además, la Corona protegió a los indígenas con un código legal que, aunque tenía la intención de defenderlos, prácticamente los convertía en menores de edad ante la ley. Por ejemplo, la Inquisición no consideraba a los indígenas dignos de su vigilancia, porque se les tenía por demasiado ignorantes para ser capaces de caer en la herejía; sólo eran capaces de tener supersticiones infantiles. Además, tenían prohibido contraer deudas mayores de cinco pesos. Bien es cierto que esta ley fue ignorada universalmente, pero reflejaba la opinión oficial de las capacidades del indígena ⁸¹. Un tribunal especial, llamado *juzgado de indios*, del cual era personalmente responsable el virrey, se ocupaba de los problemas de los indígenas y recibía sus apelaciones. También se dedicaban exclusivamente a su servicio otras instituciones, tales como hospitales y colegios. En fin, no debe olvidarse que muchos indígenas conservaron su idioma, su modo de vestir tribal y diverso, y, en ciertos casos, sus supersticiones tribales. Todavía en 1810 el 60 por 100 de la población seguía confinada a una categoría social y legal especial sin paralelo en la historia europea, pues aunque los indígenas eran súbditos libres de la Corona, la ley los trataba como a niños, y después de tres siglos de dominación colonial seguían formando una comunidad separada, oprimida y despreciada por el resto de la población hacia la cual, ellos a su vez, demostraban tanto temor como hostilidad.

⁷⁹ Gibson, *The Aztecs*, pp. 207-9; Alamán, *Historia*, I, 24.

⁸⁰ Mora, *Obras sueltas*, «Escritos de Manuel Abad y Queipo», p. 205.

⁸¹ Alamán, *Historia*, I, 22-4. Silvio Zavala, «Orígenes coloniales del peonaje en México», *El Trimestre Económico*, 10 (1943-4), pp. 711-48.

Las tres categorías que formaban la capa baja de la gente de razón —españoles, mestizos y mulatos— estaban mucho menos claramente definidas, y menos separadas socialmente, que los indígenas. Por ejemplo, los mestizos tenían casi los mismos derechos y obligaciones que los españoles, con excepción de que muchos cargos oficiales y eclesiásticos estaban reservados para los españoles. Y entre un español de la *élite* y uno de la plebe —debemos recordar que hacia 1810 estos últimos ascendían al 13 por 100 de la población— no existían en realidad barreras legales, excepto la tendencia de los miembros de la *élite* a conseguir sus propios fueros. Por otro lado los mulatos, a los que podían sumarse unos cuantos negros que todavía existían, formaban a su vez un grupo claramente diferenciado. Eran los únicos, entre la gente de razón, que pagaban tributo, establecido sobre la base de tres pesos por persona; así pues, como el indígena, estaban incluidos en la lista permanente de tributarios y había para ellos registros bautismales separados ⁸². La sangre africana seguía llevando el estigma de haber sido esclavo; los mulatos no podían aspirar a cargos municipales y el sacerdocio les era teóricamente negado. Además, el prejuicio social general de que eran víctimas hacía más odiosas sus obligaciones fiscales ya que eran lo único que les impedía fusionarse con los mestizos.

En general, si comparamos las condiciones de la clase baja española con la indígena del mismo nivel, la primera no siempre resulta mejor librada. Como gente de razón pagaban alcabalas y diezmos eclesiásticos, y carecían de garantía sus derechos a la tierra. Contrariamente a los indígenas, estaban sometidos a la leva y tenían obligación de servir en las milicias. También en los campos mineros los mestizos y mulatos, si se les encontraba sin ocupación, podían ser reclutados para ponerlos a trabajar en el interior de las minas, mientras que los indígenas estaban protegidos por una ley que autorizaba el reclutamiento de únicamente un 4 por 100 de la fuerza de trabajo de cada pueblo ⁸³. Un jornalero mulato sin tierra tenía buenas razones para envidiar la relativa seguridad de que gozaban los indígenas, los cuales tenían más derechos y menos obligaciones.

⁸² Mora, *Obras sueltas*, pp. 205-6; Alamán, *Historia*, I, 25.

⁸³ Eusebio Buenaventura Belcáñ, *Recopilación sumaria de todos los autos acordados de la real audiencia y sala de crimen de esta Nueva España* (2 vols.; México, 1787). El Vol. II contiene las *ordenanzas de minería de 1783*, véase II, 258-61.

La tendencia a considerar a los mestizos y mulatos como un estrato social medio situado entre la *élite* española y las masas indígenas debe ser evitada. Posiblemente en el sur, y especialmente en Oaxaca, la sociedad se aproximaba a tal esquema, pero en otras partes, sobre todo en las que un día habían sido las zonas chichimecas, los españoles de baja clase social, los mulatos y los mestizos, trabajaban hombro con hombro con los indígenas en oficios similares; estaban en competencia directa por la tierra y por el salario, y no constituían una capa media en formación. Si se comparan las dos comunidades, se distinguen sobre todo por su distribución geográfica entre el norte y el sur; porque una era un proletariado urbano y la otra era campesina; y en el campo, porque unos eran peones en las haciendas o agricultores en los ranchos, y los otros eran campesinos que habitaban en comunidades propietarias comunales de la tierra. No obstante, entre la misma gente de razón, la diferencia social principal dependía simplemente de la posesión o falta de riquezas, pero en la Nueva España el pastel económico estaba dividido muy irregularmente. Cuando Humboldt visitó la colonia en 1803, observó que «... grandes riquezas; las cuales por desgracia están repartidas aún con mayor desigualdad en México que en la capitania general de Caracas, en La Habana y el Perú»⁸⁴. El ilustrado obispo electo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, compartía esta opinión cuando escribió: «en América... no hay graduaciones o medianías; son todos ricos o miserables, nobles o infames»⁸⁵.

Naturalmente que esta mezcla surtida de razas y de grupos privilegiados no formaban una nación en ningún sentido de la palabra. Es verdad que todos eran súbditos del rey de España, pero aun en este respecto la colonia no se caracterizaba por su devoción al real servicio. El virrey Duque de Linares se quejó de que durante la Guerra de Sucesión al Trono de España únicamente tres personas ofrecieron contribución pecuniaria a la Corona. «El fin de todo es vivir en una absoluta libertad»⁸⁶. José de Gálvez comentó tiempo después: «fue hasta ahora tan desconocido o remoto el premio para

⁸⁴ Humboldt, *Ensayo político*, p. 83.

⁸⁵ Reproducido en Mora, *Obras sueltas*, p. 205.

⁸⁶ BN (Madrid) MSS 2929, «Instrucciones del Duque de Linares», f. 135. La que aparece en *Las instrucciones que dejaron los virreyes* (México, 1867) está incompleta y omite muchos detalles que aparecen en el manuscrito madrileño.

los buenos como el castigo para los malos»⁸⁷. A pesar de esta falta de espíritu cívico la Corona no mantenía tropas regulares en la colonia aparte de las guarniciones, reclutadas localmente, que estaban estacionadas a lo largo de la frontera norte y en Veracruz. El virrey no poseía más que una pequeña guardia apenas suficiente para defenderlo en caso de ataque del populacho⁸⁸.

Era la Iglesia, y no la fuerza militar, la que conservaba la paz en la Nueva España, y la que unía a las diversas razas de la colonia en una sola grey de fieles. Los indígenas buscaban en su cura párroco protección contra la rapacidad de los oficiales reales. El pueblo bajo de las ciudades y campos mineros recibía del clero regular y secular los sacramentos con que se celebraban el matrimonio, el nacimiento de un hijo, una enfermedad o la muerte. La Iglesia, a través de sus múltiples instituciones, administraba todos los hospitales, manicomios, asilos, orfanatorios y colegios de la colonia. Así pues, en muchos aspectos proporcionaba todos aquellos servicios sociales que en siglos posteriores el estado civil asumió la responsabilidad de proveer. Como resultado de este contacto íntimo tanto con las masas como con la *élite*, los sacerdotes tenían la posibilidad de intervenir para impedir los conflictos entre las clases. En el México colonial, cuando la plebe se amotinaba, era el clero, y no el ejército, el que se lanzaba a las calles para argumentar con la turba y para pacificarla.

IV

La estructura de la sociedad y de la economía coloniales que ha sido esbozada en las páginas anteriores es aplicable principalmente al período oscuro de la historiografía mexicana, que cubre de 1640 a 1750. Fue entonces cuando el control sobre la economía ejercido por los grandes comerciantes fue más fuerte, y cuando la influencia del clero sobre la sociedad fue más pronunciada. También fue el siglo en que la Corona de España prestó menos atención a sus vastas posesiones americanas y durante el cual, en consecuencia, posiblemente obtuvo de ellas menores ganancias. Los estadistas de la nueva dinastía borbónica no intentaron seriamente reformar el desordena-

⁸⁷ AGI, México 2256, José de Gálvez al Marqués de Grimaldi, 23 diciembre, 1765.

⁸⁸ Alamán, *Historia*, I, 57.

do y anticuado patrimonio de la Casa de Austria hasta las décadas medias del siglo XVIII. Entonces, alegando la necesidad fiscal y estratégica, lanzaron un fiero ataque contra las corporaciones privilegiadas y las instituciones privadas sobre las que se sostenía el viejo orden.

La biblia de los reformadores, es decir, el texto fundamental que inspiró esta revolución borbónica en el gobierno, fue el *Nuevo sistema de gobierno económico para la América*, de José del Campillo y Cossío. Escrito en 1743, este libro circuló en forma de manuscrito hasta 1762, fecha en que se le incorporó prácticamente intacto en el *Proyecto económico* de Bernardo Wall ⁸⁹. Campillo iniciaba su análisis mediante la simple comparación entre las grandes ganancias obtenidas tanto por los franceses como por los ingleses de sus islas del Caribe, y las ridículas utilidades que España recibía de su imperio continental. Para remediar este triste estado de cosas, recomendaba la introducción del *gobierno económico*, término con el que designaba los métodos de gobierno característicos del mercantilismo de Colbert. Exigía la terminación del monopolio comercial de Cádiz, la distribución de tierras a los indígenas y el fomento de la minería argentífera. Más que nada, Campillo veía en las colonias americanas un mercado ilimitado para los productos manufacturados españoles, pero ese mercado solo podría incrementar su poder de consumo si se reformaba su sistema de gobierno, si se libraba a su economía de los nefastos monopolios y trabas al comercio, y si la gran masa de sus habitantes, es decir, los indígenas, eran incorporados a la sociedad. Para poner en práctica su programa de reformas, Campillo propuso someter a las colonias a una inspección general a la que seguiría el establecimiento de intendencias permanentes.

Los métodos del extranjero no habrían despertado interés si el poder extranjero no hubiese tenido un aspecto tan amenazante. Pero España sufrió una humillante derrota en la Guerra de Siete Años y La Habana fue capturada por los ingleses ⁹⁰. Además, el Tratado de París, que prácticamente eliminó la influencia francesa en el Nuevo Mundo, dejó a España sola, ante un enemigo mucho

⁸⁹ José Campillo y Cossío, *Nuevo sistema de gobierno económico para la América* (Madrid, 1789), p. 32. Bernardo Wall, *Proyecto económico* (Madrid, 1779). Véase Miguel Artola, «Campillo y las reformas de Carlos III», *Revista de Indias*, 50 (1952), pp. 685-714.

⁹⁰ Véase John Lynch, *Spanish Colonial Administration* (Londres, 1958), pp. 12-18.

más poderoso y agresivo que antes. Aproximadamente en aquella época, José de Gálvez, por entonces abogado ministerial, escribió: «La América española expuesta cada día más a la insaciable ambición de algunas Potencias de Europa... Inglaterra... apropiarse en Jefe del comercio universal de ambos hemisferios»⁹¹. De la misma manera que la Austria de María Teresa después de la pérdida de Silesia, la España de Carlos III después de la Guerra de Siete Años tuvo que «modernizar» sus métodos de gobierno si no quería enfrentarse a la posibilidad de perecer⁹². Y modernizarse, en el contexto colonial, quería decir mayores impuestos y militarización, e implicaba lo que solo podemos definir como una revolución en el gobierno. Igualmente importante era el hecho de que el éxito dependía de la transformación económica y de una reordenación profunda de las capas de la sociedad colonial.

Desde 1764 sintió México el impacto de esta nueva política. En ese año llegaron a la colonia, para prestar servicio permanente, dos regimientos de soldados españoles mandados por el inspector general Juan de Villalba. La Corona le dio también instrucciones para que organizara un pequeño ejército formado por milicias. Sus esfuerzos para enganchar reclutas en estas fuerzas voluntarias muy pronto provocaron motines populares en Michoacán, Puebla y Guanajuato⁹³. Además, en la ciudad de México los soldados regulares se enemistaron con el populacho, y algunos años después el virrey Marqués de Croix comentaba que todavía ocurrían peleas callejeras casi todas las noches⁹⁴.

Casi al mismo tiempo, José de Gálvez, visitador general de la Nueva España de 1765 a 1771 y ministro de las Indias de 1776 a 1787, dedicó sus enormes energías a la gran tarea de recaudar más impuestos⁹⁵. Como primer paso, convirtió en monopolio real la manufactura y venta de tabaco. Para impedir el contrabando se

⁹¹ BRP, MSS 2816, Miscelánea de Ayala, 278, ff. 110, 117.

⁹² Véase R. R. Palmer, *The Age of the Democratic Revolution* (Princeton, 1959), pp. 103-7. Para el aspecto general véase Richard Herr, *The Eighteenth-Century Revolution in Spain* (Princeton, 1958).

⁹³ María del Carmen Velásquez, *El estado de guerra en Nueva España, 1760-1800* (México, 1958), pp. 80-5.

⁹⁴ Marqués de Croix, *Instrucción... que deja a su sucesor Antonio María de Bucareli*, prólogo y notas de Norman F. Martin (México, 1960), p. 53.

⁹⁵ Con relación a Gálvez, véase Herbert Ingram Priestley, *José de Gálvez. Visitor-General of New Spain (1765-71)* (Berkeley, 1916).

restringió su cultivo a varios distritos con licencia especial para ello, y desde entonces los consumidores tuvieron que comprar sus puros, a veces muy mal hechos, a los representantes de la Corona. Además, Gálvez exigió cantidades siempre mayores a los comerciantes provincianos que recaudaban los impuestos sobre las ventas en cada distrito. Naturalmente, fueron los consumidores los que resintieron esta medida.

Los amotinamientos contra la milicia, los nuevos impuestos y los monopolios reales, se convirtieron en rebelión cuando, en 1767, la Corona ordenó la detención y exilio de los jesuitas. Los indígenas de Patzcuaro y Uruapan y los mineros de San Luis Potosí y Guanajuato se rebelaron apoderándose de sus poblados y amenazando las vidas y propiedades de los peninsulares. Gálvez, apoyado por las tropas regulares de Villalba y por atemorizados mineros y terratenientes criollos, suprimió estas revueltas con severidad sin precedente. Mandó colgar a 85 personas, azotar a 73, desterrar a 117 y otras 674 fueron sentenciadas a períodos variables de prisión⁹⁶. Estos acontecimientos, en su conjunto, marcaron un fuerte cambio en la historia colonial de México. Llegaron soldados y recaudadores fiscales de la Península y los jesuitas nacidos en México, que eran más de cuatrocientos, fueron deportados⁹⁷. El pueblo, que no aceptó con gusto estos cambios, fue sometido brutalmente mediante la fuerza militar, cosa a la que no estaba acostumbrado. Toda una generación de intelectuales fue enviada al exilio, privándose así a los hijos de la *élite* de sus mejores maestros. El nuevo estado borbónico nació, como moriría más tarde, en medio de la violencia y del derramamiento de sangre.

Los acontecimientos de la década de 1760 a 1770 dieron la pauta de los siguientes cuarenta años. Los ministros de Carlos III, apoyándose en teorías legalistas de gobierno, lanzaron una serie de agudos ataques contra la jurisdicción eclesiástica y la inmunidad legal, campaña que culminó con el encarcelamiento de varios sacerdotes acusados de delitos comunes en prisiones civiles, lo cual no tenía precedente⁹⁸. Mientras los reyes Austrias habían empleado

⁹⁶ Priestley, *José de Gálvez*, p. 228.

⁹⁷ Los lugares de donde eran naturales los jesuitas expulsados se encuentran en Mariano Cuevas, ed., *Tesoros documentales de México, siglo XVIII: Priego, Zelis, Clavijero* (México, 1944), pp. 234-93.

⁹⁸ Véanse N. M. Farriss, *Crown and Clergy in Colonial Mexico 1759-1821*

sacerdotes, los Borbones se sirvieron de soldados, porque aunque el fuero eclesiástico sufrió ataques, el militar fue fortalecido y ampliado ⁹⁹. Para fines del siglo XVIII la Nueva España contaba con un pequeño ejército propio de 32 000 hombres, compuesto de 9 917 regulares y 22 277 milicianos ¹⁰⁰. Las clases acomodadas se alistaban en las milicias establecidas en las principales ciudades de la colonia, y todos los oficiales gozaban del fuero militar, es decir, del derecho a ser juzgados por sus superiores en el regimiento y no por los tribunales reales. Así pues, el ejército reemplazó a la Iglesia como instrumento predilecto de la Corona para lograr la lealtad de sus súbditos en la colonia. El inspector general de infantería escribió en 1804: «En América las partes más esenciales de la enseñanza de la juventud deben ser las de inculcar principios de amor y obediencia al soberano, convencer de la utilidad que producen y alejar cualquiera idea contraria a ellos» ¹⁰¹.

En la esfera económica se siguió una política muy similar. El visitador general José de Gálvez declaró: «Como la minería es el origen y fuente única de los metales que dan espíritu y movimiento a todas las ocupaciones humanas y al comercio universal en este mundo, en justicia exige la atención principal del gobierno» ¹⁰². Por ello organizó a los mineros en un gremio que poseía sus propios tribunales y que tenía jurisdicción sobre todos los litigios relativos a la minería. A la concesión de este nuevo fuero se agregó toda la fuerza de la política económica que por entonces se impuso ¹⁰³. Su objetivo, además de incrementar la producción de plata, era liberar a la minería del control mercantil, porque Gálvez, inspirándose en Campillo, estaba decidido a destruir el predominio económico de las grandes casas importadoras de la ciudad de México. En 1778 el famoso decreto del comercio libre suprimió el antiguo monopolio de Cádiz; a partir de entonces, todos los principales puertos de

(Londres, 1968), pp. 99-100, 173-96. Mora, *Obras sueltas*, «Escritos de Abad y Queipo: sobre la inmunidad personal del clero», pp. 195-8.

⁹⁹ Véase Lyle N. Macalister, *The fuero militar in New Spain 1764-1800* (Gainesville, Fla., 1957).

¹⁰⁰ Humboldt, *Ensayo político*, pp. 554-7.

¹⁰¹ AGS, Guerra Moderna 7299, Conde de Alcaraz, 24 septiembre, 1804.

¹⁰² José de Gálvez, *Informe general... al excelentísimo señor virrey d. frey Antonio Bucareli y Ursúa* (México, 1867), p. 40.

¹⁰³ Véase Walter Howe, *The Mining Guild of New Spain and Its Tribunal General 1770-1821* (Cambridge, Mass., 1949).

la península pudieron comerciar libremente con las colonias americanas. Algunos años después se establecieron en Veracruz y en Guadaluajara gremios mercantiles independientes. Este ataque contra los antiguos monopolistas tuvo bastante éxito, porque proporcionó independencia económica tanto a los mineros productores de plata como a los comerciantes de provincia. Más trascendental fue el hecho de que la producción de plata, en términos de la acuñación anual, aumentó de una cantidad inferior a los doce millones de pesos en 1762 a un máximo de más de veintisiete millones en 1804 ¹⁰⁴. Las cifras del comercio transatlántico, que están menos completas, indican una expansión igualmente dramática.

Si bien Gálvez dedicó muchas energías y meditaciones a la reestructuración y expansión de la economía de exportación, se ocupó muy poco de la agricultura e industria mexicanas. Los terratenientes no tenían privilegios legales, y el nuevo régimen no les dio gran aliento ni fiscal ni de ninguna otra especie. A los industriales locales, por su parte, se les condenó a la desaparición, porque Gálvez afirmó que las industrias coloniales hacían daño a España, «cuyo interés consiste en que los naturales de Indias no se acostumbren a vivir independientes de esta Monarquía, para el socorro de las necesidades» ¹⁰⁵. Años más tarde el ilustrado virrey que fue el segundo Conde de Revillagigedo reiteró esta opinión al declarar que «pero no debe perderse de vista, que ésta es una colonia que debe depender de su matriz la España, y debe corresponder a ella con algunas utilidades, por los beneficios que recibe de su protección y así se necesita gran tino para combinar esta dependencia y que se haga mutuo y recíproco el interés, lo cual cesaría en el momento que no se necesitase aquí de las manufacturas europeas y sus frutos» ¹⁰⁶.

La «ganancia» a que se refería Revillagigedo no era pequeña por ningún concepto. Mientras que en 1712 los ingresos reales provenientes de México ascendieron únicamente a tres millones de pesos, en la última década del siglo la Corona recibió anualmente, como promedio, más de veinte millones de pesos por concepto de impuestos y de monopolios ¹⁰⁷. Estos ingresos pueden dividirse

¹⁰⁴ Miguel Lerdo de Tejada, *El comercio exterior de México* (México, 1853), Ap. 54.

¹⁰⁵ BRP, MSS 2816, Miscelánea de Ayala, 278, f. 118.

¹⁰⁶ Conde de Revillagigedo, *Instrucción reseratisima que... dio al... Marqués de Branciforte* (México, 1831), p. 91.

¹⁰⁷ Humboldt, *Ensayo político*, p. 540.

en cuatro amplias categorías. Primero, los varios impuestos que se obtenían de la minería, el diezmo sobre la producción y las ganancias de los monopolios sobre el mercurio, la pólvora y la acuñación de moneda. El enorme monopolio del tabaco tenía sus propias características. Además había una gran variedad de impuestos de aduana y sobre las ventas que se cobraban sobre todos los productos vendidos en el mercado, inclusive sobre el pulque y la sal. La última categoría era el tributo por cabeza que pagaban indígenas y mulatos, ya para entonces de mucha menor importancia que los demás impuestos. La innovación principal que introdujeron los Borbones fue la imposición del monopolio real sobre el tabaco, los juegos de cartas y la pólvora, y en el empleo de funcionarios asalariados para que administraran estos monopolios y para que recaudaran las alcabalas. Después de 1776 la práctica, en vigor durante el reinado de los Habsburgos, de encargar a individuos o instituciones particulares de la recaudación de impuestos, fue suprimida. Un pequeño ejército de funcionarios, empleados y guardias estacionados en todas las ciudades principales de la Nueva España, administraban los impuestos, nuevos y viejos, imponiendo su recaudación con eficiencia y vigor hasta entonces desconocidos. El impulso de expansión y revitalización de la burocracia llegó a su clímax en 1786 con el nombramiento de unos doce intendentes.

Esta revolución en el gobierno sin duda fue productiva. En total la Corona obtenía unos catorce millones de pesos anuales de la Nueva España. De esta suma se necesitaban cuatro millones para mantener la administración civil, los tribunales, la burocracia fiscal, el ejército y para proteger las fronteras septentrionales. El resto, es decir, unos diez millones de pesos, se enviaba fuera de México. Cuatro millones se usaban para subsidiar la larga cadena de fuertes y guarniciones que existían entre Trinidad y Luisiana y entre California y las Filipinas. Los otros seis millones, que eran las utilidades de los monopolios, iban directamente a las arcas reales en Madrid, porque la monarquía no recaudaba en la Península más que unos treinta y cinco millones de pesos en impuestos. Así pues, dependía de las posesiones americanas para financiar su administración y defensa. Además, la Corona recibía de América un sobrante de ocho millones de pesos, de los cuales las tres cuartas partes procedían

de México ¹⁰⁸. Resulta entonces claro que, para fines del siglo, la Nueva España se había convertido en una fuente de ingresos superada en importancia únicamente por la metrópoli misma.

Para México, como por lo demás para la mayor parte de la América Española, las décadas que siguieron a la Guerra de Siete Años fueron una época característica en su historia colonial. Sin embargo, en lugar de ser la culminación de doscientos años de colonización, esta pretendida edad de oro de fines del siglo XVIII fue efecto de una profunda regeneración de la sociedad hispánica en el Nuevo Mundo. En cierto sentido, la dinastía borbónica reconquistó América. Transformó completamente su sistema de gobierno, la estructura de su economía y el orden de la sociedad que desde los días de los Habsburgos existía en las colonias. Al mismo tiempo una inmigración española más numerosa invadió el continente. Muchos llegaron para ocupar los puestos recién creados en el gobierno y en el ejército, pero la gran mayoría se dedicó al comercio para aprovechar la gran expansión económica de aquellos años. Mientras que en 1689 únicamente 1 182 españoles peninsulares residían en la ciudad de México, en 1792 dicho número se había duplicado ¹⁰⁹. El México Borbónico, si se nos permite designar así al período de 1763 a 1810, tuvo su origen en la exitosa colaboración de un gobierno despótico pero ilustrado, con un grupo vigoroso de comerciantes capitalistas y millonarios mineros. En gran medida, el éxito de las reformas económicas del gobierno dependió del espíritu de empresa y del capital de aquellos hombres de negocios. Así llegamos al tema de nuestra siguiente exposición.

¹⁰⁸ Humboldt, *Ensayo político*. p. 546-52.

¹⁰⁹ Véase Ignacio Rubio Mañé, *Gente de España en la ciudad de México. año de 1689* (México, 1966), p. 13.

PRIMERA PARTE

LA REVOLUCION EN
EL GOBIERNO

Todos los demás errores sólo perturban al estado; pero la innovación es el soplo del destino.

JOHN DRYDEN

Cuando en agosto de 1789 el virrey Manuel Antonio Flores elaboró su informe final para pasarlo a su sucesor el segundo Conde de Revillagigedo, se extendió mucho en el elogio de una *instrucción* equivalente escrita por el padre del conde, que fue virrey de la Nueva España de 1746 a 1755. Al mismo tiempo, indicaba que tal instrucción era completamente inaplicable a las condiciones presentes. «Comprende y explica todos los puntos interesantes al vasto gobierno de N.E., demostrando las felicidades de tiempos más inocentes; pero en los nuestros ha variado su sistema de tal modo que aquella sabia instrucción, testimonio auténtico del talento, celo y acierto de su Autor Excelentísimo, sólo puede servir a V. E. para cotejar las novedades ocurridas en la serie de treinta y cinco años» ¹.

El más notable de estos cambios en la administración de la Nueva España a que se refería Flores fue el establecimiento de las intendencias en 1786. El virrey tenía una opinión notablemente negativa sobre esta gran reforma: «Hasta ahora se oyen sordos lamentos que anuncian la rama del Reino y la próxima notable decadencia de los ramos de Real Hacienda». En este juicio Flores no sólo expresaba su propia opinión, sino el sentimiento de una gran parte de los funcionarios coloniales. Ese mismo año Teodoro de Croix, virrey del Perú, condenó con estridencia todo el sistema ². En Madrid mismo se levantaban voces que pedían su inmediata y total abolición ³.

¿Por qué razón provocaron los intendentes tal controversia? ¿Qué poderes o calidad poseían para provocar tal oposición? Después de todo, los Borbones habían establecido intendencias en España veinte años antes de introducirlas en América ⁴. Naturalmente que cualquier respuesta a esta pregunta debe tomar en cuenta el contexto

¹ AGI, México, 1525, Flores a Revillagigedo, 26 abril 1789; el informe de Revillagigedo el vicio se encuentra en AGI, Estado, 42, 28 noviembre 1754.

² Lillian Estelle Fisher, *The Intendant System in Spanish America* (Berkeley, 1929), pp. 83-6.

³ Luis Navarro García, *Intendencias de Indias* (Sevilla, 1959), pp. 115-23.

⁴ John Lynch, *Spanish Colonial Administration*, pp. 46-61.

de los treinta y cinco años de cambios casi continuos que mencionaba Flores, porque durante ese período fue transformada toda la estructura del gobierno colonial. Las antiguas instituciones de origen habsbúrgico vieron muy menguados los límites de su jurisdicción por la creación de nuevos puestos y dependencias. Sus miembros, a menudo ancianos y con frecuencia nacidos en América, se disgustaron amargamente ante la inesperada corriente de jóvenes funcionarios que llegaban de la península, designados por Gálvez para manejar los nuevos monopolios y ocupar otros cargos del Estado. Al mismo tiempo, la organización en todo el imperio de un real servicio postal eficiente y relativamente rápido, puso fin a la antigua libertad de acción que propiciaban las distancias y las malas comunicaciones. Para ellos, las intendencias representaban la culminación, el remate, por así decirlo, del nuevo estado borbónico. En este aspecto, aceptaron parcialmente la propaganda de sus contrarios. ¿Qué no había designado Campillo a las intendencias como la quintaescencia misma de su adorado *gobierno económico*? Para Gálvez, constituían el instrumento indispensable de su programa de reformas⁵. Consecuentemente, la totalidad del proyecto se convirtió en el objeto de una controversia esencialmente política, que fue al mismo tiempo el grito de guerra y el chivo expiatorio tanto de reformistas como de conservadores. Mientras tanto la gran cantidad de obligaciones impuestas a los funcionarios contenía una amenaza potencial prácticamente contra todas las demás dependencias del gobierno. Entonces no debe causar maravilla que desde el principio fuera discutida la autoridad, sus ordenanzas derogadas y su misma existencia puesta en duda. Nuestro interés en todo esto, debemos hacer hincapié, se orienta más a la estructura que al funcionamiento de la revolución en el gobierno.

I

Como siempre, la historia debe comenzar con la visita de Gálvez (1765-71), porque la burocracia colonial se molestó fuertemente con las medidas tomadas en aquel tiempo. La revuelta popular contra

⁵ Campillo y Cossío, *Nuevo sistema*, pp. 70-8, 93-101.

la expulsión de los jesuitas y el establecimiento de las milicias, los pleitos entre el Marqués de Cruillas, virrey de 1760 a 1766, tanto con el Visitador General como con el jefe de la misión militar Juan de Villalba, la oposición del virrey y del fiscal Juan Antonio Velarde a la enérgica reorganización que Gálvez realizó en el monopolio del tabaco, la alarma del Consejo de Indias ante el hecho de que inesperadamente se salvó su conducto y no se siguió el procedimiento de consulta como estaba establecido, todas estas son cosas que bien conocen los estudiosos de historia de México⁶. Lo que no ha sido acentuado suficientemente es el grado en que la Visita y la Expulsión señalaron el principio de un gran cambio en las relaciones entre la monarquía española y el pequeño grupo colonial que hasta entonces había gobernado a México. Algunos de sus miembros eran peninsulares que pasaron la mayor parte de su vida oficial en el Nuevo Mundo, y la mayoría de ellos probablemente criollos; además, o ellos mismos o sus hijos habían sido educados en el Colegio Jesuita de San Ildefonso en la ciudad de México, a propósito del cual el historiador de la Compañía Francisco Javier Clavijero declaró con orgullo: «Basta decir que algunas personas instruidas y desapasionadas que habían viajado por Italia, Francia y España, confesaban no haber visto en Europa seminario alguno comparable con el de San Ildefonso de México. Allí se formaban hombres insignes, obispos, oidores, canónigos y catedráticos de todas facultades»⁷. Contra estas personas el fiel aliado de Gálvez, el Marqués de Croix, virrey de 1766-71, puso en guardia a Madrid: «no oculto a V. E. que todo el clero y la toga que son enteramente suyos, son también los que más los han sentido»⁸.

La situación era sumamente peligrosa porque tanto la audiencia como el cabildo de la catedral de México estaban dominados por españoles americanos. Hay que hacer hincapié en el predominio de los criollos. Más tarde, los partidarios de la independencia gastaron mucha tinta elaborando listas de virreyes y obispos para demostrar que los españoles americanos estaban excluidos de los altos puestos

⁶ Véase Priestley, *José de Gálvez*, *passim*.

⁷ Cuevas, ed., *Tesoros documentales*, p. 307. Véase también Félix Osorio, *Noticias bio-bibliográficas de alumnos distinguidos de San Pedro y San Pablo y San Ildefonso de México* (2 vols.; México, 1908), *passim*.

⁸ AGI, México 1365, Croix a Arriaga, 26 agosto 1767.

en las colonias ⁹, pero no observaron que muchos oidores y probablemente la mayoría de los canónigos, diáconos y archidiaconos eran reclutados en realidad entre los nacidos en el Nuevo Mundo. Esta omisión no tuvo por único origen las exigencias de la retórica política, sino también el profundo cambio en la política imperial llevado a cabo a mediados del siglo anterior. Porque mientras los primeros reyes de la dinastía borbónica ascendieron liberalmente a los criollos a todos los cargos del gobierno colonial, salvo los de virrey y obispo, los ilustrados ministros de Carlos III, empeñados en reformar profundamente el viejo orden, otorgaron su confianza, en su mayor parte, a los soldados y burócratas que mandaban de Europa. La revolución en el gobierno no únicamente implicaba la creación de instituciones nuevas, sino que también exigía la importación de nuevos hombres.

El proponente más importante de esta política fue, naturalmente José de Gálvez, abogado malagueño que había sido pobre, casado con una francesa, que logró como muy pocos antes que él, provocar el odio de la *élite* colonial. Ya en un memorandum oficial que escribió varios años antes de su viaje a México, Gálvez había criticado la práctica, parece que común en esos tiempos, de designar a criollos para puestos importantes en el gobierno de América. Según sus propias palabras: «en todas las Audiencias de México se han provisto anteriormente de muchas plazas en naturales de la misma provincia o metrópolis donde está el Tribunal». Y en otra ocasión dijo: «muchas Presidencias, Gobiernos y Capitanías generales, las más importantes después de los tres virreynatos en que está dividida la América Española, se han provisto en criollos.» Condenaba esta política sobre la base de que los criollos estaban demasiado ligados por «lazos de familia y de facción en el Nuevo Mundo para poder ejercer un gobierno imparcial y desinteresado» ¹⁰. Sus peores temores fueron confirmados cuando fue a México y encontró que en la Audiencia, contrariamente a lo que prescribía la ley, «fue la de ver que las más son naturales del país» ¹¹. Esta situación no se limitaba a la Nueva España, porque el Visitador General del

⁹ Véase José Miguel Guridi Alcocer, *Censor extraordinario* (Cádiz, 1812), pp. 22-7.

¹⁰ BRP, MSS 2816, Miscelánea de Ayala, 278, ff. 129-30.

¹¹ Gálvez, *Informe general*, p. 3.

Perú, José Antonio de Areche, descubrió que cinco de los ocho odores de la Audiencia de Lima eran nacidos en América ¹². No es fácil decir cuándo se hicieron comunes tales nombramientos; en Lima, desde fines del siglo anterior, los criollos ya predominaban en la audiencia: respecto a México, carecemos de pruebas documentales ¹³.

Pero mientras Gálvez estaba en la Nueva España, fue convocado en Madrid en 1768 un consejo extraordinario de estado para discutir cuales eran los mejores métodos de reconciliar a las colonias con la monarquía después de la sacudida de la expulsión de los jesuitas. Los dos fiscales, Pedro Rodríguez de Campomanes y José de Moñino, futuro conde de Floridablanca, declararon que era aconsejable tratar de atraer a los criollos hacia la península, tanto como niños, para su educación, como mediante el ofrecimiento de puestos administrativos y militares en España a los adultos. Era igualmente necesario, afirmaron, «guardar la política de enviar siempre españoles a las Indias con los principales cargos, obispados y prebendas, y colocar en los equivalentes puestos de España a los criollos» ¹⁴. Las conclusiones de la junta pronto se hicieron públicas; además, la actuación de Gálvez demostró claramente cuáles eran sus propios pensamientos al respecto. Así, en 1771, el Ayuntamiento de la ciudad de México, antiguo baluarte criollo, mandó su famosa petición a la Corona. En primer lugar, condenaba rotundamente un informe secreto del arzobispo Francisco Antonio Lorenzana en el que el prelado regalista, según se decía, afirmaba que «el espíritu de los americanos es sumiso y rendido, porque se hermana bien con el abatimiento, pero si se eleva con facultades o empleos, están muy expuestos a los mejores yerros». Es muy natural que el ayuntamiento defendiera tanto la naturaleza como la capacidad de los criollos, y, lo cual tiene una significación mayor, éstos procedieron entonces a tildar a los peninsulares de extranjeros que simplemente no comprendían a México ni al Nuevo Mundo. Apelaban luego a las leyes de Castilla, insistiendo que era de derecho que todos los pue-

¹² Vicente Palacio Atard, *Areche y Guirior, observaciones sobre el fracaso de una visita* (Sevilla, 1946), p. 21.

¹³ Jorge Tovar Velarde, «La audiencia de Lima 1705-1707. Dos años de gobierno criollo en el Perú», *Revista de Historia*, 23 (Lima, 1957-8), pp. 338-448.

¹⁴ Jaime Eyzaguirre, *Ideario y ruta de la emancipación chilena* (Santiago de Chile, 1957), p. 53.

tos gubernamentales de la Nueva España fueran otorgados a los naturales del país ¹⁵. En una palabra, México para los mexicanos.

Tales declaraciones tan impolíticas, aunque templadas por muchas declaraciones de lealtad a la Corona, no podían sino confirmar los temores que ya existían en Madrid, y así en 1776, año en que Gálvez fue designado Ministro de las Indias, se emitieron decretos en los que se invitaba a los criollos a aspirar a puestos clericales y judiciales en la península; de allí en adelante, sólo una tercera parte de los cargos en las audiencias de América y en los cabildos catedralicios se reservarían a los criollos; el resto serían asignados a candidatos procedentes de Europa ¹⁶. Cuando se recibieron estas reales órdenes, varias reuniones tumultuosas tuvieron lugar en la ciudad de México, se hicieron planes para expresar públicamente las protestas, y el Ayuntamiento de nuevo envió un angustioso memorial a la Corona en el que se afirmaba que los hijos, si se veían sin esperanza de ascender en la escala clerical o judicial, perderían todo incentivo para el estudio ¹⁷. Gálvez les escribió inmediatamente para calmar sus temores, explicándoles que el decreto sencillamente reservaba una tercera parte de esos cargos para los americanos, pero que «no excluye que haya mucho más, como siempre lo ha habido, los hay y los habrá» ¹⁸.

La realidad fue que Gálvez pronto fue conocido no únicamente por su preferencia por los peninsulares, sino también por su persistente favoritismo por sus compatriotas los malagueños, y por su implacable nepotismo. Durante su ministerio (1776-87), cuando se crearon cientos de puestos administrativos en las grandes dependencias fiscales de recaudación de impuestos y del monopolio del tabaco, y en las intendencias, Gálvez dio rienda suelta a sus inclinaciones. En las antiguas instituciones, tales como las reales haciendas, las audiencias, los cabildos catedralicios y los tribunales de cuentas, el cambio, aunque bastante perceptible, fue menos pronunciado.

¹⁵ Publicado en Juan Hernández y Dávalos, *Colección de documentos para la historia de la guerra de independencia de México de 1808 a 1821* (6 vols.; México, 1877-82), I, 427-55.

¹⁶ Eyzaguirre, *Ideario y ruta*, pp. 53-4; AGI, México, 1863, Ayuntamiento de México a Gálvez, 22 mayo 1778.

¹⁷ Rómulo Velasco Ceballos, ed. *La administración de d. Frey Antonio María de Bucareli y Ursúa* (2 vols.; México, 1936), II, 314-20.

¹⁸ AGI, México 1863, Gálvez al Ayuntamiento, 2 enero 1778.

Naturalmente que la drástica reorganización de la política imperial fue advertida por los contemporáneos. Melchor Paz, cronista peruano de la revuelta de Tupac Amaru, citó una carta anónima, escrita h. 1781, que lamentaba que «así se ven regentes, y aumentando número de ministros en estas audiencias, todos consanguíneos, deudos y dependientes de Gálvez»¹⁹. Y el deán Gregorio Funes, de Córdoba, en la Argentina, comentó más tarde:

A todo eclesiástico americano le fue cerrada la puerta no sólo de las mitras, pero aún de los ascensos a las dignidades de sus coros... los demás empleos civiles y militares jamás se vieron distribuidos con una preferencia más parcial a favor de los españoles europeos... al paso que todo español, principalmente si era andaluz malagueño, tenía en éste sólo *meditado el mérito y la capacidad*²⁰.

Funes culpaba entonces de esta política directamente a Gálvez, al que describió como «un hombre tan atrevido en sus proyectos, como diligente en ejecutarlos; tan solícito por aumentar el erario como poco escrupuloso en los medios; en fin tan prevenido por los derechos de la metrópoli, como dispuesto a ultrajar los de sus colonias»²¹. No debe pensarse que esta opinión es demasiado apasionada, porque en el Archivo de Indias en Sevilla existe un documento anónimo, *Apuntes suscintos y prácticas de la América española*, escrito en 1775-6 por una persona que según indicación de otras pruebas documentales era un alto funcionario peninsular residente en Madrid²², en el que el autor dice sin rodeos que Gálvez era «un genio sin experiencias, sin tino y sin cordura». Lo pinta como «un ministro que desprecia para todo a sus estantes y habitantes» de América. Se habían multiplicado los puestos en el gobierno colonial, pero todos los que estaban vacantes se asignaban a hombres nuevos, reclutados directamente en España, pasando así por encima del «quitando el orden de ascen-

¹⁹ Melchor Paz, *Guerra separatista. rebeliones de indios en Sur América, la sublevación de Tupac Amaru*, ed. Luis Antonio Eguiguren (2 vols.; Lima, 1952), II, 131.

²⁰ Gregorio Funes, *Ensayo de la historia civil de Buenos Aires, Tucumán y Paraguay* (2 vols.; Buenos Aires, 1856), II, 211.

²¹ *Ibid.*, II, 210; véase también Paz, *Guerra separatista*, II, 131: «el perverso ánimo de Gálvez, que elevado al Ministerio por desgracia de estas Indias, se ha propuesto el objeto de destruirlas».

²² AGI, Estado 42/3, sin número de folio, sin fecha. Véanse *Apuntes*, 324-53.

son a los americanos» para los americanos. Los criollos tenían resentimiento de que se les excluyera del nuevo conjunto de cargos públicos creados por las recientes reformas. El autor notaba que los funcionarios peninsulares con largos servicios en las colonias estaban preocupados por la suerte que, bajo el nuevo sistema, correrían sus hijos. Pero, ¿por qué debía negarse a los criollos el acceso a los empleos gubernamentales, si «faltando los premios a las letras suceda a los americanos lo mismo que a los griegos sujetos al Imperio Otomano?» Y para que no se piense que estas opiniones son demasiado radicales, deben compararse con las instrucciones secretísimas que Gálvez envió a su favorito, Areche, al Perú, en las que le decía que los habitantes de Lima eran «de ingenio y comprensión fácil; pero de juicio poco sólido y superficial, aunque sumamente presuntuoso... son de poco espíritu, tímidos y reducibles». Es claro que si Gálvez se permitía expresiones de tanto desprecio en un documento oficial confidencial, sin duda en la conversación expresaba sus opiniones en una manera todavía más franca. No debe sorprender, entonces, que nuestro anónimo crítico afirme que la Nueva España «jamás dejaron de abominar el (gobierno) del Marqués de Croix con la época de la última Visita general». La colonia recibió con desaliento la noticia de que «el mismo Instrumento destructor... sea colocado en éstos con mayores facultades para que sacie su ambición de meter ruido en ambos hemisferios». Concluía con una afirmación profética: «Gálvez ha destruido más que ha edificado... su mano destructora va a preparar la mayor revolución en el Imperio Americano» ²³.

Los efectos de esta revolución, hecha desde afuera y desde arriba, pueden observarse mejor en la historia de la audiencia de México. Durante los años de la Visita, este Organismo protestó ante Madrid porque el virrey, Marqués de Croix, se negaba a darles a sus miembros las muestras ceremoniosas de respeto que eran tradicionales, y porque no hacía caso de los procedimientos de consulta acostumbrados ²⁴. Al mismo tiempo, por lo menos uno de sus jueces, llamado Francisco Javier de Gamboa y famoso autor de los *Comentarios a las ordenanzas de minas*, poco antes nombrado alcalde del crimen,

²³ AGI, Estado 42/3, sin folio, sin fecha. Véanse *Apuntes*, 310.

²⁴ AGI, México 1127, Audiencia al Consejo de Indias, 26 mayo 1769.

conspiró activamente con el fiscal Juan Antonio de Velarde contra las pretensiones del visitador general. Llegó hasta a calumniar a Calvez por su conducta personal, afirmando que en su casa tenían lugar diversiones desordenadas y «extrañas». Sin embargo, tanto como Velarde, a su vez, «siendo compañeros inseparables», fueron acusados por el virrey Croix de ser los dirigentes de un «grupo de la unión y partido anti-gubernativo»²⁵. El caso se hizo más serio cuando un rumor asoció a Gamboa con el canónigo Antonio López Portillo, clérigo entonces famoso por su erudición, designándolos como autores de un panfleto favorable a los jesuitas y contrario al Arzobispo Lorenzana²⁶. Aunque no había pruebas, Croix se convenció lo suficiente para recomendar a Madrid que Velarde, Gamboa, López Portillo y su primo, el archidiácono Ignacio Ceballos, fueran expulsados de la Nueva España. Y así, en 1768 los cuatro ascendidos: Gamboa pasó a ocupar un puesto en la Audiencia de Barcelona, Velarde en el tribunal de Granada, López Portillo en la catedral de Valencia y Ceballos fue enviado a otro puesto en la península. Croix también mandó una lista de otros miembros de este «partido», respecto a los cuales no recomendaba ninguna acción inmediata. Se trataba del prebendado Francisco Vives, del oidor Diego Antonio Fernández de Madrid, del contador de tributos José Rafael Rodríguez Gallardo, del contador mayor del tribunal de cuentas Ignacio Negreiros, del principal oficial de la secretaría virreinal, Martín de Aspiroz, y del superintendente de la Casa de Moneda, Pedro Villavicencio. Algunos de ellos habían atacado la Visita, otros apoyaban a los jesuitas y los demás eran amigos íntimos de los desterrados²⁷.

Un aspecto interesante de este «partido» es hasta qué grado representaba una resistencia criolla, y no conservadora, al exilio forzado en Italia de más de cuatrocientos jesuitas nacidos en México. Porque tanto Gamboa como López Portillo eran españoles americanos, educados en San Ildefonso. Es difícil saber cuánto apoyo recibieron de sus respectivas instituciones, pero la Audiencia, por lo menos, estaba formada principalmente por miembros de origen y formación muy similares. (Véase tabla 2.)

²⁵ AGI, México 1369, Croix a Arriaga, 27 agosto 1769.

²⁶ José Mariano Beristáin de Sousa, *Biblioteca hispano-americana septentrional* (3.^a ed., 5 vols.; México, 1947), II, 334-5; III, 155-8.

²⁷ AGI, México 1369, Croix a Arriaga, 27 agosto 1769.

TABLA 2

MIEMBROS DE LA AUDIENCIA DE MEXICO h. 1769

<i>Deán</i>	
Domingo Valcárcel y Baquerizo	Peninsular
<i>Oidores</i>	
Francisco Antonio Echevarri	Peninsular
José Rodríguez de Toro	Criollo
Félix Venancio Malo de Villavicencio	Criollo
Antonio Joaquín de Rivadeneira	Criollo
Antonio de Villaurrutia	Criollo
Ambrosio Eugenio Melgarejo y Santaella	Criollo
Francisco López Portillo	Criollo
<i>Alcaldes del crimen</i>	
Francisco Javier de Gamboa	Criollo
Diego Antonio Fernández de Madrid	Criollo
Francisco Leandro de Viana	Peninsular
Antonio Rojas y Abreu	?

Muchos de estos hombres venían de familias que tenían una larga historia al servicio del gobierno. El más distinguido era el deán, Domingo Valcárcel y Baquerizo, cuyo padre y abuelo habían servido en el consejo de Castilla. El había pasado toda su vida de servicio oficial en la Nueva España, a donde llegó en 1721 como alcalde del crimen. Contrariamente a lo que disponían los reglamentos relativos a su cargo, se casó con una mexicana, hija del Conde de Santiago, descendiente del segundo virrey de México, Luis de Velasco ²⁸. Además de sus obligaciones judiciales, Valcárcel también fue jefe del importante monopolio del mercurio, de 1761 hasta su muerte en 1783, de manera que su carrera duró 62 años. Los otros miembros no podían hacer alarde de tan largos servicios, pero varios de ellos tenían profundas relaciones con la Audiencia desde tiempo atrás. Tanto Fernández de Madrid como Melgarejo Santaella eran hijos de antiguos oidores ²⁹, y el padre de Villaurrutia había

²⁸ Una descripción de su carrera se encuentra en AGI, México 1317, Bucareli a Arriaga, 26 noviembre 1773.

²⁹ Respecto a Melgarejo, véase AGI, 1856, relación de servicios, 4 marzo 1761, y respecto a Fernández de Madrid, véase Alberto y Arturo García Carralla, *Enciclopedia heráldica y genealógica hispanoamericana*, XXXIV (Madrid, 1919-?), p. 74.

El gobernador de Tlaxcala ³⁰. Rodríguez de Toro pertenecía a una familia de Caracas muy prominente, y su padre fue el primer Marques de Toro ³¹. Por su parte, Rivadeneira era pariente cercano de los condes de Santiago, y conocía su ascendencia desde el siglo XVIII, toda ella residente en la Nueva España ³². Lo mismo era cierto de López Portillo, natural de Guadalajara que contaba con varios conquistadores en su árbol genealógico; era primo de un canónigo de Toledo y padre de un jesuita ³³. Malo de Villavicencio era pariente, por su hijo, del superintendente de la Casa de Moneda, Pedro Malo de Villavicencio ³⁴. Hata el peninsular recién nombrado alcalde del crimen, Francisco Leandro de Viana, pronto encontró a una mexicana aceptable como esposa, la Marquesa de Padro Alegre, nieta del rico comerciante inmigrado, el Conde de San Bartolomé de Jala ³⁵. Por supuesto, fue precisamente a este círculo de jueces criollos imparentados y educados por los jesuitas, al que Gálvez quería desplazar de su papel dirigente en la administración colonial, pero es claro que, dadas las conexiones que tenían tanto en el Nuevo mundo como en Madrid, tuvo que proceder lentamente y con extrema cautela.

No obstante, ya para fines del decenio de 1770 a 1780, la composición de la Audiencia había cambiado radicalmente, como lo indica la tabla 3.

Aquí el contraste entre los jueces criollos más antiguos y los *habiles del crimen peninsulares* es especialmente notable; la secuencia normal escalafonaria muy pronto destruyó a la antigua mayoría criolla. Gamboa regresó a México en 1774, gracias a sus contactos en Madrid. En 1778 otro abogado criollo notable Baltazar Ladrón de Guevara, fue por fin ascendido a un puesto en la Audiencia, como premio a treinta años de práctica legal, durante la mayor parte de los cuales se había ocupado de labores administrativas. En 1773 fue nombrado asesor general del virrey Antonio María de Bucareli.

³⁰ Rafael Nieto y Caravellas, *Los Villaurrutias* (La Habana, 1952), *passim*.

³¹ Guillermo Lohman Villena, *Los americanos en los órdenes nobiliarios 1529-1900* (2 vols.; 1947), II, 361.

³² Beristáin, *Biblioteca*, III, 210, 211.

³³ Osóres, *Noticias bio-bibliográficas*, II, 46.

³⁴ *Ibid.*, II, 66.

³⁵ AGI, México 1762, Viana a la Corona, 7 febrero 1777; véase también José Antonio Calderón Quijano, *El banco de San Carlos y las comunidades de indios de Nueva España* (Sevilla, 1963), nota a pie de página, p. 18.

El y Gamboa probablemente eran los juristas más brillantes de la colonia. Según el bibliógrafo José Mariano Beristáin de Sousa, Gálvez llamó a Ladrón de Guevara en una ocasión «el Ulpiano americano»³⁶. Prácticamente fue el único criollo que obtuvo el favor del gran ministro, ya que todos los demás nuevos jueces fueron peninsulares. Francisco Roma Rossel, designado para ocupar el puesto, creado poco antes, de regente o jefe de la Audiencia, era un catalán

TABLA 3

MIEMBROS DE LA AUDIENCIA DE MEXICO h. 1779

<i>Regente</i>		
Francisco Roma Rossel		Peninsular
<i>Deán</i>		
Domingo Valcárcel		Peninsular
<i>Oidores</i>		
Antonio de Villaurrutia		Criollo
Diego Antonio Fernández de Madrid		Criollo
Francisco Javier de Gamboa		Criollo
Baltazar Ladrón de Guevara		Criollo
Francisco Gómez Algarín		Peninsular
Ruperto Vicente de Luyando		Peninsular
Miguel Calixto de Acedo		Peninsular
Domingo de Arangoiti		Peninsular (?)
Juan Antonio Urrúela		Peninsular (?)
<i>Alcaldes del crimen</i>		
Ramón González Becerra		Peninsular
Cosme Antonio Mier y Trespalacios		Peninsular
Eusebio Ventura de Beleña		Peninsular
Simón Antonio de Mirafuentes		Peninsular
Juan Francisco Anda		Peninsular

sin experiencia anterior en las Indias³⁷. El predominio de los criollos continuó entre los miembros importantes de la Audiencia, en parte por el ascenso de Viana, ya para entonces Conde de Tepa, que fue designado para ocupar un puesto en el Consejo de Indias, y de Vicente Herrera Rivero, que fue nombrado regente de la Audien-

³⁶ Beristáin, *Biblioteca*, II, 393-34; véase también AGI, México 1139, Ladrón de Guevara al Consejo de Indias, 12 noviembre 1798.

³⁷ AGI, México 1930, Mayorga a Gálvez, 25 julio 1781.

ca de Guatemala. En 1777 el nuevo arzobispo de México Alonso de Haro, que no era muy partidario de los criollos, advirtió a Gálvez que si Valcárcel y Herrera salían de la Audiencia, correspondía el ascenso por escalafón a los jueces Villaurrutia, Fernández de Madrid y Gamboa, «todos tres americanos, y esto no es ciertamente lo que más conviene»³⁸. Gálvez comprendió, y arregló más tarde que Gamboa y Villaurrutia fueran nombrados regentes de las Audiencias de Santo Domingo y de Guadalajara, además de que llamó a Herrera Rivero a la Nueva España para que sucediese a Roma Rossel en el puesto de regente. Ya hacia fines del decenio de 1780 a 1790 la Audiencia de México estaba claramente dominada por españoles peninsulares, no quedando más que tres criollos entre los once jueces de aquella corte superior. Así cumplió Gálvez al pie de la letra los términos del decreto de 1776.

Al mismo tiempo, la importancia que se dio en el régimen borbónico a los militares y a los oficiales fiscales tendió a disminuir el prestigio de los oidores y de la Audiencia. Además, Gálvez arrebató a esta una parte de sus antiguas atribuciones al crear una serie de fueros o jurisdicciones particulares. Como era de esperarse, tal cosa irritó a los jueces, tanto peninsulares como criollos porque se les privó del papel central en la administración colonial que hasta entonces habían tenido. En 1782 Vicente Herrera Rivero, recién nombrado regente de la Audiencia de México, envió a Gálvez un largo memorándum en el que proponía el establecimiento en la nueva España de dos nuevas audiencias, y que se aumentara el número de miembros de las cuatro. Continuaba diciendo:

Aumentadas y arregladas en esta forma las Audiencias, conviene mucho restituirlas (a) su primitiva autoridad, que se ha disminuído notablemente con los fueros concedidos en todos los ramos de la Real Hacienda, de Correos, Alcabalas, Tabaco, Naipes, Pólvora y todas las Oficinas, Secretarías y Tribunal de Cuentas, de manera que la jurisdicción ordinaria sólo reconoce la menor parte del distinguido pueblo, y viene a quedar, sobre la infima, que también se va exceptuando con el establecimiento de Milicias.

Condenaba además la política de otorgar más fueros por ser contraria al ejercicio normal de la justicia. También criticó Herrera

³⁸ AGI, México 1862, Arzobispo a Gálvez, 27 febrero 1777.

severamente el empleo de militares en la administración civil: «los militares por lo común nada entienden en materias civiles.» Su preparación no los hacía aptos para gobernar a nadie, y menos aún en las colonias. Ahora bien, aunque en este punto parecía que el ataque esta dirigido contra el empleo de militares en la presidencia de la Audiencia, también era aplicable a los intendentes, muchos de los cuales procedían directamente de las fuerzas armadas ³⁹. Así pues, en efecto Herrero objetaba casi todas las características del nuevo régimen impuesto por Gálvez.

A pesar de todo, el ministro de las Indias no tomó en cuenta estas proposiciones, sino por el contrario en 1783 creó un nuevo fuero al establecer el gremio minero y los tribunales de minería con jurisdicción sobre todos los litigios que surgieran de sus contenciosas actividades. También, mediante las ordenanzas de intendentes promulgadas en 1786, se transfirió a la junta de real hacienda toda la autoridad sobre el tributo indígena y los fondos comunales, que anteriormente pertenecía a la Audiencia. Además, lejos de que el fuero militar fuese restringido en años posteriores, se le amplió y extendió. Casi todas las reformas administrativas importantes de aquel período implicaron, entonces, una disminución de la autoridad de la Audiencia en uno u otro campo.

Al mismo tiempo los jueces ya no gozaron de la posición única que tuvieron sus predecesores. En los primeros decenios del siglo la Corona designaba a miembros de la Audiencia para que dirigieran tanto el monopolio del mercurio como la Casa de Moneda. Parece que la Audiencia era el único grupo de funcionarios dignos de confianza existente por entonces en la Nueva España, pero después de 1763 apareció en escena una clase de intelectuales con diferente preparación, una nueva especie de oficiales fiscales que, aunque carecían de formación legal, demostraron ser muy capaces de dirigir las grandes dependencias del estado. Consecuentemente, los jueces se vieron limitados de nuevo a su función judicial. Además, si se toma el salario como medida de la posición en la administración pública, los oidores apenas llegaban a 6 000 pesos incluyendo los honorarios que cobraban por su participación en las distintas comiso-

³⁹ AGI, México 1645, Herrera a Gálvez, 10 noviembre 1782. El mejor estudio de una audiencia es J. H. Parry, *The Audiencia of New Galicia in the Sixteenth Century* (Cambridge, 1948).

mientras que esa cantidad era el sueldo básico tanto de los salientes como de los directores generales fiscales. Herrera Riquelme expresó este sentimiento de disminución personal al afirmar que «ya, en años anteriores, las mujeres materialmente se iban de casarse con un oidor, mientras que ahora «los ministros son personas que menos se buscan y estiman». A pesar de todo esto, él debe exagerar, pues en realidad Herrera mismo obtuvo la mano de una heredera, hija de un rico minero, el Conde de Regla⁴⁰. La Audiencia continuó teniendo un poder muy considerable, pero el rollo oficial dentro del que operaba verdaderamente se había vuelto más variado y autónomo, y por ello menos sensible a la influencia del dicho tribunal.

II

La principal institución heredada de la Casa de Austria a la que Gálvez quería despojar de su poder, si no es que abolirla completamente, era el virreinato. Cuando llegó a la Nueva España tuvo violentos altercados con el Marqués de Cruillas, y aunque su sucesor el Marqués de Croix resultó su fiel aliado, Gálvez nunca cambió de idea. En 1765 le escribió el Marqués de Esquilache: «Este Reino corre precipitadamente a su último exterminio, si dura más tiempo el presente gobierno de los Virreyes.» Quería sustituir a los virreyes por «el sistema que he propuesto de comandancias generales e intendencias». Tal cambio, especialmente si él mismo recibía el nombramiento de *superintendente general*, haría que la colonia, «remitir al año del segundo año tres millones de pesos». Proponía más concretamente «este rico país, cuando debiera ser el manantial de las riquezas de España... dividirlo en las tres Comandancias generales y en las siete Intendencias sujetas éstas a un superintendente general...»⁴¹. Ahora bien, aunque Gálvez nunca pudo poner en práctica estas ideas, logró inspirar en sus subordinados sentimientos parecidos. Poco antes de 1780 Areche, visitador general del Perú, le confió: «Mi dictamen será siempre que nunca conviene tener

García Caraffa, *Enciclopedia*, XLIII, 148.

AGN, México 2256, Gálvez a Esquilache, 24 diciembre 1765.

un jefe tan autorizado de unas provincias tan distantes como éstas»⁴². Y Gálvez más tarde dio el control sobre todos los asuntos fiscales a un funcionario nuevo e independiente, el superintendente subdelegado de real hacienda, que era responsable de supervisar y dirigir el trabajo de los intendentes. Luego creó las regencias, cuyos titulares eran los jefes de las audiencias, dándoles el derecho protocolario de sentarse en público en la presencia del virrey. Es claro que su objetivo era la creación de una especie de triunvirato en el que el virrey, el superintendente y el regente fuesen considerados como relativamente iguales, limitando así las funciones del virrey a lo político y a lo militar. Naturalmente que este intento de dividir el poder provocó una ola de acerbadas disputas sobre la jurisdicción, de tales proporciones, que antes de que transcurriera un año después de la muerte de Gálvez, la superintendencia fue de nuevo unida al virreinato. Las instituciones coloniales, aunque estaban sujetas a conflictos casi perpetuos sobre los límites de sus atribuciones, necesitaban obviamente un gobernador omnicompetente que gozara del prestigio y la autoridad tradicionales de los virreyes.

El instrumento elegido para destronar a los virreyes y a las audiencias fue, por supuesto, la intendencia. En 1768 Gálvez y el virrey Marqués de Croix presentaron un plan para establecer once intendencias en la Nueva España. Como deferencia a Croix, el virrey debía conservar para sí la superintendencia general. Se aducían tres argumentos en apoyo de la proposición⁴³. En primer lugar, España misma debía su rejuvenecimiento fiscal y económico a las intendencias, instituidas por la dinastía borbónica. La América Española, «han llegado a un punto de decadencia que amenazan con su total y próxima ruina», necesitaba con urgencia intendentes para que reformaran su economía y su gobierno. Igualmente importante era el hecho de que la institución de intendencias uniformaría la administración colonial a la de la península, facilitándose así el traslado de funcionarios entre uno y otro sistema. El segundo punto indicaba simplemente que el virrey, para gobernar con eficacia, necesitaba la ayuda de gobernadores provinciales preparados. El tercer argumento, y el más significativo, era la denuncia que hacían Gálvez y Croix de

⁴² Citado en Palacio Atard, *Areche y Guirior*, p. 32.

⁴³ Reproducidos en Navarro García, *Intendencias*, pp. 164-76.

que los alcaldes mayores existentes eran «la verdadera y ruinosa plaga de más de ciento y cincuenta hombres» cuyo único objetivo era el enriquecimiento personal, que mantenían e imponían la distribución de mercancías a precios inflados, y que defraudaban a la Corona, por concepto de tributos, en una suma anual de más de medio millón de pesos ⁴⁴.

Como lo que querían era reemplazar con intendentes a los alcaldes mayores, Gálvez y Croix dedicaban poco espacio a los problemas del gobierno local. Simplemente sugerían que la recaudación del tributo indígena estuviera a cargo de alcaldes ordinarios, que eran magistrados electos existentes en todas las ciudades españolas. En los lugares en que no existiera tal funcionario, el intendente podría nombrar subdelegados para el cobro del tributo, o comisionar a los administradores locales del monopolio del tabaco y a los oficiales locales para que lo hicieran. En una carta de apoyo a estas proposiciones, el obispo de Puebla inmediatamente señaló esta evidente debilidad del plan: once intendentes no podían sustituir a 150 alcaldes mayores, y además, estimaba que en toda la diócesis de Puebla no había arriba de cinco alcaldes ordinarios ⁴⁵. Sería peligroso, agregaba, dejar a los indígenas sin un magistrado local para que los gobernara.

En Madrid, el proyecto de Gálvez y Croix fue aceptado en principio, y en 1769 Gálvez nombró al primer intendente, para Sonora. Pero muy pronto surgieron dudas sobre cuál era el método de poner en práctica tan importante reforma, especialmente porque el plan original era muy esquemático. El nuevo virrey, Antonio María Bucareli y Ursúa, recibió pues la comisión de formular proposiciones más detalladas. Sin embargo, en lugar de hacerlo, Bucareli emitió una extensa condena de todo el sistema, ya que como capitán general de Cuba había tenido un altercado con el nuevo intendente de aquella isla.

Bucareli, que fue un gobernante hábil pero conservador, se oponía al espíritu de innovación radical que caracterizaba la actitud de Gálvez hacia los problemas del gobierno. Y escribió: «El mal no ha estado en el sistema o método de gobierno que prescriben las leyes,

⁴⁴ *Ibid.*, p. 166.

⁴⁵ Reproducida en Navarro García, *Intendencias*, pp. 176-9.

sino en la calidad de los empleados en aquellos tiempos oscuros»⁴⁶. En otra ocasión afirmó que «una de las principales máximas del buen gobierno es no hacer novedad en las costumbres antiguas, cuando ellas no eran pecaminosas»⁴⁷. Apoyándose en un extenso memorándum sometido a su consideración por el oidor Conde de Tepa, Bucareli atacó los artículos centrales del plan de Gálvez⁴⁸. Para empezar, la Nueva España, tanto por su geografía como por su composición social, era muy distinta de la Península: algunas de sus haciendas tenían una superficie igual a la de una provincia española; poseía apenas unas veinticinco ciudades dignas de ese nombre; la mayoría de sus habitantes eran indígenas miserables que vivían esparcidos en poblados aislados. Así pues, en ningún sentido traería una gran mejoría la creación de once intendencias en este vasto y despoblado territorio. Por otra parte, era una realidad que la Nueva España estaba progresando; la recaudación de impuestos iba en aumento y el sistema de cobro era más honesto. El virrey no dependía de la ayuda de los alcaldes mayores, sino de la de los oficiales de hacienda y de la de los directores de las nuevas dependencias del monopolio del tabaco y de las alcabalas. Estos oficiales fiscales «no son otra que unos Intendentes con sujeción a los Virreyes como Superintendentes». El establecimiento de intendencias no tendría otro efecto que el de confundir un sistema de recaudación de impuestos que era satisfactorio.

Bucareli y Tepa se esmeraron en proteger a los alcaldes mayores de la censura masiva de Gálvez y de Croix. No se embolsaban los reales tributos, y si se les suprimía no debía esperarse un aumento en la recaudación de impuestos. Además, como la Nueva España tenía tan pocos magistrados municipales, es decir, los alcaldes ordinarios, los intendentes tendrían que nombrar subdelegados para llenar el vacío dejado por los alcaldes mayores. Si a esos se les prohibía tener otras actividades económicas, habría que darles un sueldo no inferior a 2 000 pesos, de modo que el costo total del gobierno local ascendería a unos 300 000 pesos. Tepa defendía la práctica de los llamados repartimientos de comercio, según la cual los alcaldes mayores distribuían mercancías y animales domésticos entre los indí-

⁴⁶ Velasco Ceballos, *Administración de... Bucareli*, II, 186-204.

⁴⁷ AGI, México 1129, Bucareli a la Corona, 24 diciembre 1771.

⁴⁸ AGI, México 1973, Informe del Conde de Tepa, 1 julio 1775.

genas a crédito, y daban anticipos en efectivo sobre productos tales como el algodón y la cochinilla. Los indígenas, por su parte, querían créditos y su pobreza hacía indispensables estos anticipos. Afirmó además: «Los repartimientos son una especie de sociedad entre los alcaldes mayores y los indios, en que unos ponen el servicio y otros la industria» ⁴⁹.

En general, Bucareli defendió el *estatus quo* en el gobierno local. Sencillamente sugirió que los jueces de la Audiencia fueran enviados a hacer inspecciones regulares para controlar a los alcaldes mayores. Además, debía instaurarse un sistema escalafonario que permitiera a los alcaldes mayores ascender a oficiales de hacienda. Sus argumentos eran muy apreciados en Madrid, más especialmente porque su gobierno se caracterizó por mayores remesas a la Península. En la década de 1770 a 1780 la producción de plata registró un aumento sin precedentes, y además el estilo de gobierno de Bucareli, cauteloso pero concienzudo, le valió comentarios favorables por parte de la burocracia colonial. La Audiencia de México elogió su «aplicación, inteligencia, gigante talento, dulzura, moderación y el más religioso corazón», y profetizó que «será memorable en la posteridad la época de este prudente, juicioso y admirable Virrey» ⁵⁰. El hecho fue que las críticas de Bucareli retrasaron el establecimiento de intendencias en la Nueva España más de diez años ⁵¹.

Sin embargo, Gálvez no se amilanó. En 1777, inspirándose en el informe final de Manuel de Amat, virrey del Perú, en el cual se acusaba a los corregidores de provocar la destrucción total de los indígenas con su violencia y ambición, Gálvez dirigió una circular a los obispos de la Nueva España ⁵². Se preguntaba si debía permitirse que siguieran existiendo los repartimientos de comercio, o si era más conveniente aumentar el tributo a los indígenas para poder proporcionar un salario adecuado a los alcaldes mayores. Por supuesto que lo que Gálvez esperaba era obtener una censura absoluta

⁴⁹ AGI, México 1973, Informe del Conde de Tepa, 1 julio 1775, f. 181.

⁵⁰ AGI, México 1509, Audiencia a la Corona, 8 julio 1774, firmado por Valcárcel, Villaurrutia, Viana, Herrera y Fernández de Madrid.

⁵¹ Navarro García, *Intendencias*, pp. 28-31.

⁵² Manuel de Amat y Junient, *Memoria de gobierno*, edición y estudio preliminar de Vicente Rodríguez Casado y Florentino Pérez Embid (Sevilla, 1947), p. 820.

contra todo el sistema. De lograrlo, podía justificar su proyecto de *intendencias* señalando la *malignidad social* de los *repartimientos*, y así no habría tenido que rebatir los argumentos administrativos de Bucareli, sino sencillamente llamar la atención sobre la miseria y opresión en que vivían los indígenas. De este modo, la reforma quedó indisolublemente ligada a la antigua y tediosa cuestión de la naturaleza y condición del indígena. A pesar de todo, era posible por supuesto que existieran tanto los intendentes como los alcaldes mayores, con o sin repartimientos, ya que lo que estaba a discusión era otra cosa.

Para definir claramente los asuntos a discutir no era necesario negar que la estructura del gobierno local requería ser reformada. En la Nueva España, la dinastía borbónica había abandonado sus intentos de pagar un salario a los alcaldes mayores. Después de 1718 únicamente los magistrados de Tabasco y Zacatecas siguieron recibiendo el estipendio acostumbrado que fue fijado bajo los monarcas de la Casa de Austria, en los demás lugares, el pago se suspendió ⁵³. Así pues, los alcaldes mayores se vieron obligados a ejercer el comercio para poder subsistir. En 1751 la Corona finalmente reconoció el predicamento en que se hallaban y les otorgó un permiso general, a todos los alcaldes mayores de las Indias, de que hicieran repartimientos de comercio, práctica hasta entonces corriente pero ilegal. En la Nueva España, un plan para fijar una tarifa de precios fue pronto descartado ⁵⁴. En la realidad, el alcalde mayor se convirtió en comerciante, o más bien en agente mercantil. La mayoría de ellos eran militares empobrecidos que obtenían capital y abastecimiento de los comerciantes de México o de Oaxaca, a cambio de lo cual aceptaban al cajero que su patrocinador les designaba para que actuara como su lugarteniente en los asuntos judiciales. De esta manera, la autoridad judicial era ejercida, por no decir prostituida, junto con la búsqueda de ganancias comerciales. Las víctimas naturales de este sistema eran los indígenas, que tenían que aceptar mercancías y mulas a precios inflados, y que recibían por sus productos precios inferiores a los del mercado. La impuntualidad en los pagos a menudo tenía por resultado los azotes o la cárcel.

⁵³ AGI, México 1367, Croix a Arriaga, 18 junio 1768.

⁵⁴ AGI, Lima 1119, Informe de los contadores generales, 30 diciembre 1800.

Las utilidades variaban de una región a otra. En 1779 el fiscal Martín Merino estimó que de las 143 alcaldías mayores dependientes de la Audiencia de México sólo 13 eran muy productivas. Casi todas estas se encontraban en el sur, tenían una fuerte población indígena, y eran productoras de cochinilla, el segundo producto de exportación de la Nueva España, por lo que atraían fuertes inversiones comerciales. En otras regiones, por el contrario, los alcaldes apenas ganaban para vivir. Afirmaba Merino: «El gremio de alcaldes mayores, considerando en general, es un conjunto de menesterosos que comen de sus oficios mientras los sirven sin adelantamientos para lo sucesivo»⁵⁵. Un informe anterior decía más o menos lo mismo: «no dudando el que otros se hayan empleados en aquellos reinos, viven en miseria, y lamentando el engaño que los llevó a donde no pueden ni aún alimentarse»⁵⁶. No todos los alcaldes mayores resultaron aptos para el comercio.

Gálvez prefirió recurrir, en defensa de sus ideas, a las consecuencias de los repartimientos en el sur, porque el obispo de Oaxaca, en contestación a su interpelación, había censurado rotundamente el sistema de gobierno existente. Acababa de regresar de una gira de inspección por su diócesis, y estaba impresionado por las condiciones de los indígenas y por el grado en que los alcaldes mayores los oprimían. Todos sus curas párrocos habían criticado los repartimientos de comercio. El obispo entonces tocó un problema que iba a ser básico en los debates posteriores sobre el valor de las intendencias. ¿Qué clase de persona era el indígena? Aceptaba sus vicios, la embriaguez, la lujuria y la pereza, y sobre todo su «un odio implacable a los españoles». Apuntaba que algunos observadores, en especial los que tenían intereses establecidos «aspiran a poner por principio y origen de sus vicios la propia naturaleza del mismo Indio», pero quienquiera que haya tratado con ellos «pues claramente ven, que son de la misma índole e inclinaciones que todos los demás hombres accesibles a todas las virtudes y los vicios en lo político, moral y cristiano que los que nacieron en Castilla y por consiguiente encuentran el origen de la inaplicación y desorden en la crianza, abatimiento y abyección en que viven». Si se hubiera dejado que los indí-

⁵⁵ AGI, México 1868, Merino a Gálvez, 10 marzo 1779.

⁵⁶ AGI, México 1513, Fiscal a Aranda, 4 mayo 1763.

genas vivieran en su libertad natural en la que pudieran gozar del fruto de su trabajo, pronto se habrían hecho trabajadores, habrían prosperado y se habrían convertido tanto en buenos ciudadanos como en buenos cristianos ⁵⁷. Si se abolían los repartimientos de comercio, otros mercaderes comerciarían con ellos, y esto «restituirá al indígena su libertad natural de tratar y negociar con quien le resulte más provechoso». Es obvio que el obispo, en estas optimistas declaraciones, se inspiraba en la creencia, tan típica de la Ilustración, en la uniformidad de la naturaleza humana: eran las instituciones tiránicas las que degradaban al indígena, y sólo la libertad haría de él un ciudadano industrioso.

En 1783 Gálvez se valió de este informe episcopal para emitir una crítica pública de los abusos e injusticias cometidos por los alcaldes mayores de Oaxaca. Cada uno de los que por entonces se encontraban en funciones en la diócesis fue personalmente informado del real desagrado. Se denunciaron todas las tentativas de establecer monopolios comerciales locales. La mayoría de los alcaldes reaccionaron con vigor ante este decreto, presentando testimonios y otras pruebas de su impecable honradez y escasas ganancias. El corregidor de Oaxaca, por ejemplo, afirmó que en una ocasión había traído mil reses de Guatemala; 150 murieron en el viaje, y a las demás hubo que apacentarlas dos meses antes de poderlas vender. Las compró a 14 pesos cada una, y las vendió en 18, teniendo así una utilidad del 5 por 100. Observaba que otros comerciantes tenían tiendas en todos los poblados de su jurisdicción. El alcalde mayor de Zimatlán, por su parte, declaró haber comprado mulas a 16 pesos, que después vendió en 25 dando crédito por un año. La cochinilla la adquiría a 12 reales la libra y la vendía en 14, calculando su ganancia en un 12 por 100 ⁵⁸. *Casi todos los informes eran de este tenor: las utilidades eran moderadas y dentro de sus jurisdicciones territoriales participaban también en el comercio otros mercaderes. Sin embargo, muy poco se mencionaba al indígena, ya fuera hablando de su miseria o de su naturaleza. Por otra parte, ya en 1779 el fiscal Martín Merino había defendido la necesidad de que existieran*

⁵⁷ AGI, México 1872, Obispo de Oaxaca a Gálvez, 20 julio 1778.

⁵⁸ Estas declaraciones están en AGI, México 1461, Audiencia gobernadora a Gálvez, 28 marzo 1785.

los repartimientos fundándose en que «siendo co-natural a las Indias la indolencia y el abandono». Sin los alcaldes mayores no tendrían de dinero en efectivo ni de otros artículos, de modo que la agricultura de Oaxaca y en especial el comercio de la cochinilla, se arruinaría ⁵⁹.

Gálvez dio poca atención a estas declaraciones: estaba decidido a sustituir a los alcaldes mayores con intendentes. Para explicar su actitud, debemos distinguir tres argumentos. En primer lugar, la dinastía borbónica tendía a depender de funcionarios asalariados más y más; había suprimido en gran parte la práctica de la Casa de Austria de dar en concesión la recaudación de impuestos y otras funciones del estado a los particulares. No obstante, en el centro mismo de la administración local, se encontraba el alcalde mayor, un funcionario sin sueldo que tenía la concesión de la Corona para recaudar el tributo indígena a cambio del derecho a emplear su autoridad judicial para obtener ganancias comerciales. Los reformadores no podían seguir tolerando esta situación. En segundo lugar, el alcalde mayor frecuentemente ejercía un monopolio comercial *dentro de su jurisdicción, lo cual también escandalizaba a los reformadores borbónicos*, porque se oponían a todos los monopolios comerciales (excepto los de la Corona); habían puesto en vigor el decreto del comercio libre, y sin embargo en algunas localidades todavía se encontraban con algún nefasto monopolio. Además de estas críticas económicas y administrativas, aducían un argumento de carácter social: los repartimientos eran la causa principal de la degradación de los indígenas. Todos los observadores del siglo XVIII estuvieron de acuerdo en que el indígena vivía en condiciones de extrema escualidez, sólo difirieron en las causas a las que atribuían esta miseria. Los reformistas la achacaban a la opresión de instituciones tiránicas y esperaban que una reforma administrativa mejorase las condiciones del indígena. Los conservadores declaraban que su naturaleza era ser perezoso e imprevisor, que tenía que forzárselo a que trabajara, que los repartimientos eran necesarios para que subsistiera la agricultura. Y a veces este tercer argumento casi tocaba la metafísica: la controversia evocaba recuerdos de antiguas disputas y casi vulneraba las creencias «ilustradas» tan en boga sobre la uniformidad de

⁵⁹ AGI, México 1868, Merino a Gálvez, 10 marzo 1779.

la naturaleza humana y el poder del estado para promover el progreso económico. Lo que las encomiendas fueron para los misioneros del siglo XVI, tal fueron los repartimientos para los reformadores del siglo XVIII.

III

Muy poco del debate precedente tenía gran relación con lo que, después de todo, era la función primordial del intendente, es decir, recaudar más impuestos. Las críticas administrativas de Bucareli no tuvieron respuesta, pero ambos bandos de la controversia se dieron cuenta de que los intendentes eran solo un aspecto de una lucha mucho mayor entre reformistas y conservadores. Muchas instituciones antiguas de gobierno ya habían sufrido un cierto desplazamiento, si no una pérdida de prestigio y de atribuciones, y sus titulares tenían el temor de que los intendentes las debilitaran todavía más. La transformación de la burocracia fiscal claramente demostraba cuáles eran las fuerzas en pugna dentro del gobierno colonial. En este campo, hasta mediados del siglo, las reales haciendas habían dominado la escena. Cada una de ellas, en términos generales, comprendía un contador, un tesorero, a veces un factor, y un número variable de otros empleados. Hacia 1770 la Nueva España tenía por lo menos quince de estas instituciones, todas ellas dependientes de la real hacienda central de la ciudad de México ⁶⁰. No obstante, únicamente esta última tenía autorización para recaudar toda clase de impuestos. El resto de ellos era de dos clases —las de los puertos, que recaudaban derechos de aduanas y alcabalas, y las de los campos mineros, que administraban el monopolio del mercurio y recaudaban el diezmo de la plata. Cajas tales como las de Guanajuato, Zacatecas y Pachuca se dedicaban exclusivamente a esto y no manejaban ningún otro impuesto de importancia. Por otra parte, tanto las alcabalas como los tributos que grupos de mercaderes y alcaldes mayores recaudaban por cuenta de la Corona, eran remitidos directamente a la real hacienda central en forma de *libranzas*, como se les llamaba a las letras de cambio, giradas contra las grandes casas comerciales de la ciudad de México. En la capital, el gremio de mercaderes, llamado consulado, tradicionalmente recibía la concesión del cobro de alcabalas a cambio de la obligación de pagar a la Corona una suma anual fija.

⁶⁰ Gálvez, *Informe general*, p. 16.

El primer cambio importante en este sistema tuvo lugar en 1754, cuando la Corona dio por terminado su arreglo con el consulado y designó oficiales reales para que administraran la recaudación de alcabalas en la capital y sus alrededores ⁶¹. Luego, en 1776, después de ciertos experimentos realizados durante la visita de Gálvez, se nombraron directores de alcabalas asalariados para las 24 principales ciudades de la Nueva España. Cada uno de ellos, ayudado por un contador, empleados y guardias, recaudaba el impuesto normal del 6 por 100 sobre las ventas y la contribución especial impuesta al pulque, bebida alcohólica favorita del pueblo bajo. En los distritos alejados los ciudadanos de cada localidad siguieron encargándose de la recaudación de todos estos impuestos por cuenta del rey, cobrando por sus servicios el 14 por 100 de lo recaudado, en calidad de comisión ⁶². Este pequeño ejército de recaudadores de impuestos era gobernado por un director general que residía en la ciudad de México. Los directores locales recibían salarios que iban de 1 000 a 2 500 pesos, mientras que su jefe tenía un sueldo mínimo de 6 000 pesos. Nunca llegó a unificarse totalmente el sistema, porque Veracruz siempre fue independiente, y México tuvo siempre su propio alcabalero, que era igual, tanto en rango como en salario, al director general ⁶³.

La nueva organización pronto demostró su valor. La recaudación total se elevó de 1 488 690 pesos en 1775 a 2 360 252 en 1779, y en décadas posteriores aproximadamente a tres millones de pesos. También el producto del impuesto al pulque aumentó de 468.888 pesos en 1775 a 814 755 hacia 1779, cifra ya muy cercana al promedio alcanzado posteriormente de 900 000 pesos ⁶⁴. Por supuesto que en parte puede atribuirse el aumento a los efectos del comercio libre decretado en 1778, el cual eliminó los obstáculos que antes existían en el comercio transatlántico, pero como lo demuestra la recaudación sobre el pulque, también tuvo parte en la mejoría la eficiencia oficial. Claro que es muy probable que tanto los comerciantes como el populacho, de cuyos bolsillos salió este aumento en los reales ingresos, hayan sentido antipatía contra aquella nueva

⁶¹ Robert S. Smith, «Sales Taxes in New Spain, 1575-1770», *Hispanic American Historical Review*, 28 (1948), pp. 2-37.

⁶² Fonseca y Urrutia, *Historia general de Real Hacienda*, II, 101-18.

⁶³ *Ibid.*, II, 101-5.

⁶⁴ *Ibid.*, II, 93, 423-4.

especie de aduaneros y alcabaleros que tenían ansias de merecer un ascenso cobrando impuestos en donde se podía. La mayoría de sus jefes eran peninsulares. En ese período, el superintendente de la aduana de México fue Miguel Páez de la Cadena, andaluz natural de Sanlúcar de Barrameda ⁶⁵. Su colega el director general Juan Navarro y Madrid, era malagueño ⁶⁶. Ambos, podemos observar, actuaban como jefes de dependencias independientes entre sí, sujetas directamente solo al virrey en su capacidad de superintendente general de real hacienda.

El monopolio del tabaco, establecido por Gálvez durante su Visita, era igualmente autónomo y tenía un personal todavía más numeroso. Esta nueva dependencia del estado compraba el tabaco a los productores contratados de los distritos de Orizaba, Córdoba y Zongolica (ya que el cultivo en otras regiones fue prohibido), manufacturaba puros con las hojas, en fábricas ubicadas en Puebla, México, Querétaro, Orizaba y Guadalajara, y vendía el producto elaborado al público. Era notable la escala de sus operaciones. En total, incluyendo jefes, contadores, guardias, escribientes, vendedores y obreros, el monopolio empleaba a más de 17 000 personas, cuyos salarios totales hacia 1801 ascendían a 789 000 pesos. Ese mismo año los ingresos brutos del monopolio fueron de 7 825 000 pesos, suma que dejó una utilidad de casi cuatro millones de pesos. La Corona consideraba a esta gran empresa como su propiedad privada, no pudiendo usarse sus ganancias para sufragar los gastos normales del estado; tenían que ser enviadas directamente a Madrid ⁶⁷. Sus empleados estaban bajo la supervisión única del virrey. Como en el caso de la recaudación de impuestos, la mayoría de sus administradores procedían de la Península. Su primer director general en México fue Felipe del Hierro, natural de Madrid, que recibía un salario anual de 6 000 pesos ⁶⁸.

Poco después de 1790 el virrey Revillagigedo trató de consolidar

⁶⁵ García Caraffa, *Enciclopedia*, LXVII, 127; AGI, México 1426, Flores a Portier, 26 febrero 1789.

⁶⁶ AGI, México 1420, Conde de Gálvez a Gálvez, 30 junio 1786; AGI, México 1448, Lista de servicios, 25 febrero de 1799.

⁶⁷ Humboldt, *Ensayo político*, p. 453; Joaquín Maniau Torquemada, *Compendio de la historia de la Real Hacienda, escrita en el año de 1794* (México, 1914), pp. 50-1.

⁶⁸ García Caraffa, *Enciclopedia*, XLIII, 235.

estas dos ramas de la hacienda real a nivel provincial, nombrando a una sola persona como administrador tanto de la oficina de recaudación como de la agencia de ventas del tabaco. Estableció una junta de directores para que pusieran en práctica este plan, pero su sucesor el Marqués de Branciforte no lo llevó adelante⁶⁹. En realidad, a pesar de ciertos conflictos burocráticos la nueva estructura fue notablemente eficaz para recaudar dinero. Mientras que en 1765 la Nueva España producía a la Corona un ingreso de sólo 6 130 314 pesos, para 1782 esta cantidad se había triplicado hasta alcanzar la cifra de 19 594 490 pesos, incluyendo en esta suma los costos de los monopolios. Este gran aumento se originó por un avance en todos los frentes. Por ejemplo, los tributos, que en el decenio de 1760 a 1770 tenían un promedio anual de 596 220 pesos, alcanzaron la cifra de 955 813 pesos en 1779⁷⁰. Del mismo modo los diversos impuestos y ganancias de los monopolios relacionados con la minería, se elevaron al aumentar la producción de plata. La década que comenzó en 1770 fue el período clave para todo esto, porque durante el resto del siglo, y en realidad hasta 1810, el aumento fue ya relativamente pequeño⁷¹. Llegamos así a darnos cuenta por qué las objeciones de Bucareli al sistema de intendencias fueron tan fuertes. ¿Qué objeto tenía establecer otro grupo de oficiales fiscales, si el que existía tenía tan buen éxito? Y sus objeciones resultaron proféticas: los intendentes no tuvieron ninguna relevancia en lo relativo a la recaudación de impuestos. Si alguna importancia llegaron a tener, fue por sus funciones políticas y ejecutivas.

Nunca llegó a definirse claramente qué relación existía entre las nuevas dependencias recaudadoras y las antiguas instituciones fiscales. Hasta 1786, no existió ningún sistema fijo para los pagos de las reales haciendas; a veces el dinero proveniente de alcabalas y utilidades de los monopolios se remitía directamente a México; en otras ocasiones, se depositaba en la caja real de la localidad; pero lo que es más significativo es que la independencia ejecutiva de que gozaban aquellas dependencias las liberaba de la necesidad de presentar cuentas para su examen en el tribunal de cuentas. Esta situación subsistió por lo menos hasta la última década del

⁶⁹ AGI, México 2356, Revillagigedo a Gardoqui, 30 septiembre 1792.

⁷⁰ Fonseca y Urrutia, *Historia general de Real Hacienda*, I, 450.

⁷¹ Humboldt, *Ensayo político*, p. 540.

siglo, con el resultado de que el tribunal, que hasta entonces había sido la institución recaudadora central, *perdió una parte de su importancia* en la jerarquía oficial, en forma paralela a lo que sucedió al cuerpo de que dependía, es decir, a la Audiencia.

Antes de su creación en 1605, los tres contadores del tribunal eran los miembros fiscales de la Audiencia, de manera muy parecida a la forma como la contaduría fue siempre parte del Consejo de Indias. El nuevo tribunal recibió el título de Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas. Sus contadores, en 1776, le recordaron al virrey Bucareli que «este real tribunal... se desmembró de la real audiencia; pero conservando el nombre y la autoridad nativa, desgranándose la espiga, pero en cuanto al ser audiencia real no mudó de especie; y así por eso disfruta la regalía o pre-eminencia de despachar Provisiones con el real sello y en el augusto nombre de V. M.» ⁷². Sin embargo, a pesar del ilustre origen de la institución y de sus persistentes pretensiones, sus contadores principales nunca obtuvieron el derecho a ser llamados vuestra señoría honor que correspondía a los jueces de la Audiencia, a los intendentes, a los coroneles del ejército y a los jefes de los nuevos departamentos de recaudación fiscal ⁷³. Era especialmente irritante para ellos que estos jefes recibieran el honor nominal de ser miembros del Consejo de real hacienda. El tribunal de cuentas quería establecerse como la dependencia fiscal central, con una jurisdicción sobre los asuntos de impuestos igual a la que la Audiencia tenía en asuntos jurídicos. No obstante, estas pretensiones, alimentadas desde 1605 hasta la independencia, nunca fueron satisfechas por el Consejo de Indias.

La función original del tribunal fue controlar las cuentas de la real hacienda, tarea que en muy raras ocasiones pudo realizar con prontitud. Actuaba además como tribunal de primera instancia para examinar los errores encontrados, pero en el caso de que alguno de estos tuviera proporciones de delito, el tribunal se ampliaba con la inclusión de tres oidores de la Audiencia y de los dos principales contadores. Respecto a los oficiales de hacienda, el tribunal recomendaba su ascenso cuando era pertinente, basándose en los informes sobre el desempeño de sus obligaciones. Muy importante era, como afirmaban sus contadores principales, que «esta Contaduría Ma-

⁷² AGI, México 1380, Bucareli a Gálvez, 27 octubre 1777.

⁷³ AGI, México 1752, Azanza a Soler, 28 febrero de 1799.

yor de Cuentas es el verdadero archivo (en) donde constan los sucesos ocurridos en el vasto ramo de real hacienda». Consecuentemente, «todos (los virreyes) han acudido sin cesar pidiendo noticias, estados y otros documentos instructivos, empleando de continuo semanas y meses en aprontarlos» ⁷⁴. Este hecho fue corroborado por el virrey José de Iturrigaray, que protestó porque el tribunal había sido convertido en «una oficina de gobierno» de modo que «en una oficina gubernativa... sus mesas casi se ocupan todo el año en hacer informes, teniendo arruinado, la primitiva obligación del examen y glosa» ⁷⁵. Además, cuando el tribunal proporcionaba algún informe, siempre incluía los antecedentes que presentaban los contadores subordinados, costumbre que se tradujo en voluminosos expedientes. Las quejas de Iturrigaray provocaron que el contador general agregado al Consejo de Indias declarara, sin duda inspirado por el orgullo profesional: «El tribunal de cuentas es el eje importante, en que descansan o sobre que ruedan las ramas del vasto imperio mexicano, y él en fin es un baluarte firme del real erario» ⁷⁶.

En realidad, la mayoría de los virreyes hicieron las mismas críticas que Iturrigaray, porque casi desde que fue creado, el tribunal dejó acumular una enormidad de cuentas pendientes de revisión. Continuamente fue aumentado su personal, pero nunca logró ponerse al corriente. A principios del siglo XVIII esta institución constaba de un regente, tres contadores mayores, cuatro de segundo orden y seis de tercero; además contaba con unos 16 supernumerarios que por entonces fueron empleados y que se dividían entre las tres categorías. En 1753 el regente obtuvo permiso para nombrar a cinco contadores temporales, porque en ese momento el tribunal tenía 2 272 cuentas atrasadas por verificar ⁷⁷. El número de estos supernumerarios variaba según las necesidades, y podían ser despedidos en cualquier momento. En el período de que nos estamos ocupando, el tribunal fue sometido por lo menos a dos reorganizaciones, una en 1776 y otra en 1793. En la primera se abolió el cargo de regente, mediante un decreto que se hizo efectivo cinco años más

⁷⁴ AGI, México 2018, Tribunal de Cuentas a Valdés, 26 marzo 1790.

⁷⁵ AGI, México 1623, Iturrigaray a Soler, 26 noviembre 1804.

⁷⁶ AGI, México 1960, Informe del contador general Pedro de Aparici, 8 mayo 1807.

⁷⁷ AGI, México 1394, Cossío al Virrey, 26 marzo 1782.

tarde a la muerte del regente en funciones. En 1790 el tribunal, encabezado por sus tres contadores mayores, tenía 27 miembros permanentes de todas las categorías, y los salarios habían sido considerablemente aumentados. Por aquella época, los contadores mayores recibían 4 000 pesos anuales, en lugar de los 2 757 que se les pagaban antes de la Visita de Gálvez. También fueron beneficiados los contadores de segundo y tercer orden, a los que se les pagaban 2 500 y 1 800 pesos anuales respectivamente, lo cual los igualaba económicamente a los directores provinciales de recaudación ⁷⁸. Debe hacerse notar que el tribunal seguía necesitando los servicios de muchos empleados eventuales, y que el número de los miembros del personal fijo variaba considerablemente.

El virrey Revillagigedo identificó la causa principal de la ineficiencia del tribunal. «El origen del atraso de las cuentas el que sus principales individuos se hallen muy cansados y de demasiada edad» ⁷⁹. No que se les exigiera tampoco que trabajaran todo el día. En 1741 la Corona dispuso al tribunal de asistir en la tarde, y en 1756 estableció un horario de las 7.30 a las 11.30 de la mañana explicando que el examen y verificación de cuentas era una labor sumamente ardua ⁸⁰. Es claro que, como los contadores coloniales nunca se retiraban, ni aun ciegos o enfermos, cuatro horas de hacer cuentas aritméticas deben haber sido demasiado para los septuagenarios que formaban parte del tribunal.

Aunque ciertos virreyes anteriores se habían quejado amargamente de la lentitud del tribunal, fue Revillagigedo el que logró algo al respecto. En 1789 el tribunal todavía no empezaba a examinar las cuentas de las dependencias recaudadoras. El virrey, entonces, designó a un contador de su confianza, Ramón Gutiérrez del Mazo, para que se encargara de las cuentas fiscales de Puebla. Inmediatamente se descubrió un fraude de más de 164 000 pesos ⁸¹. Apoyándose en esta revelación, Revillagigedo obtuvo autorización de contratar a un personal provisional de diez contadores para que se encargasen de revisar toda la gran masa de cuentas fiscales, con la ayuda

⁷⁸ AGI, México 1382, Bucareli a Gálvez, 26 junio 1777; Revillagigedo, *Informe general*, p. 201.

⁷⁹ AGI, México 1394, Cossío al Virrey, 26 marzo 1782.

⁸⁰ AGI, México 1531, Revillagigedo a Valdés, 30 noviembre 1789.

⁸¹ AGI, México 1542, Revillagigedo a Larena, 7 mayo 1791.

de otros diez empleados; para terminar su enorme tarea, se tardaron hasta 1803 ⁸².

En 1792 la Corona, sin duda impresionada por las revelaciones de Revillagigedo, ordenó que el tribunal revisara las cuentas del monopolio del tabaco; hasta entonces, dicho monopolio había sido completamente independiente de las dependencias fiscales establecidas. El tribunal exigió sumariamente la presentación de cuentas, pero el director del monopolio, Silvestre Díaz de la Vega, pidió que la petición le fuera dirigida por el tribunal a través del virrey, en su calidad de superintendente subdelegado de real hacienda ⁸³. Protestó porque le parecía que el tribunal estaba tratando de dar a sus simples funciones de auditoría el carácter de autoridad ejecutiva. En 1802 el mencionado tribunal fue reforzado con cuatro nuevos contadores para emprender la gran auditoría, pero ignoramos qué tanto éxito tuvo. A pesar de ello, la disputa nos demuestra la precaria y mal definida relación existente entre las antiguas instituciones fiscales de los Habsburgos y las nuevas oficinas borbónicas de recaudación de impuestos.

Una breve descripción de los antecedentes familiares de los tres contadores mayores de 1795 nos revelará que para integrar el tribunal se usaban procedimientos de continuidad. El miembro más importante, Fernando de Herrera, de cincuenta y tres años, después de un breve período en la contaduría general de Madrid, trabajaba en América desde 1761. Posiblemente era el tipo común y corriente de funcionario peninsular en las colonias ⁸⁴. Sin embargo, los otros dos contadores mayores pertenecían a familias conectadas con el tribunal desde mucho tiempo atrás, Juan de la Fuente, de setenta y cinco años, que había ingresado al tribunal en 1741; su hijo Juan Ignacio siguió su ejemplo en 1767. Además de la Fuente también se había casado con una dama conectada con la burocracia; su suegro Juan de Ureña trabajó en el tribunal durante treinta y cuatro años, y su cuñado Juan José de Ureña, durante cuarenta y cinco. Cuando por fin murió de la Fuente en 1798, su hijo esperaba convertirse en su sucesor, pero se le negó el ascenso porque era insubordinado,

⁸² AGI, México 1960, Informe del contador general, 8 mayo 1807.

⁸³ AGI, México 1619, Iturrigaray a Soler, 26 noviembre 1803.

⁸⁴ AGI, México 1568, véanse hojas de servicios del tribunal, h. 1795.

epiléptico, y ya demasiado viejo ⁸⁵. El tercer contador mayor, Pedro María de Monterde y Antillón, de cuarenta y ocho años, era nieto de un rico comerciante peninsular que residía en la ciudad de México a principios del siglo XVIII. Su padre comenzó a trabajar en el tribunal en 1744, y él siguió su ejemplo en 1766, de manera que hizo toda su carrera en una sola institución, de la cual llegó a ser más tarde deán ⁸⁶. La presencia de miembros de familias que durante tanto tiempo ocupaban aquellos cargos oficiales dio al tribunal una cierta continuidad en su política y en sus pretensiones, que duraron todo el período de las reformas borbónicas y aun más.

En 1780, para vigilar este imperio burocrático en rápido crecimiento, la corona nombró un fiscal de real hacienda. Al igual que los dos oficiales fiscales ya existentes, encargados de la protección de los reales intereses en los asuntos civiles y penales, el nuevo funcionario recibió un salario anual de 4 500 pesos ⁸⁷. El abogado escogido para ocupar este nuevo puesto fue el asturiano Ramón de Posada y Soto, sobrino político del hermano de Gálvez, Matías ⁸⁸. Posada, funcionario público notablemente inteligente e ilustrado, fue elogiado entusiásticamente por el virrey Revillagigedo —en general tan poco inclinado a las loas— quien dijo de él que era «las sobresalientes de integridad, desinterés, celo y talento» ⁸⁹. Permaneció en México hasta 1794, año en que se le designó fiscal del Consejo de Indias. En Madrid tuvo ocasión de ayudar al patriota mexicano Fray Servando Teresa de Mier, quien elogió su rectitud, rara cualidad en el corrompido gobierno de Carlos IV ⁹⁰.

Se obtiene cierta idea de la diligencia de Posada y del alcance de su obra en una petición que presentó a la Corona. Parece que durante el decenio que comenzó en 1780 también tuvo a su cargo los deberes de fiscal de lo civil, por lo menos parcialmente. Posada

⁸⁵ AGI, México 1867, Mayorga a Gálvez, 7 septiembre 1780; AGI, México, 1587, Azanza a Saavedra, 26 septiembre 1798.

⁸⁶ AGI, México 2379, Iturrigaray a Soler, 26 febrero 1804.

⁸⁷ En BN (México) MSS 1380, ff. 77-9 se encuentra una lista de salarios escogidos y otros estipendios. Posada ganaba 8 500 pesos.

⁸⁸ AGI, México 1138. La esposa de Posada era hermana de Francisco Fernández de Córdoba, Superintendente de la Casa de Moneda. Consejo de Indias, 21 agosto 1797.

⁸⁹ AGI, México 1540, Revillagigedo a Lerena, 27 julio 1791.

⁹⁰ Fray Servando Teresa de Mier, *Memorias* (2 vols.; México, 1946), I, 235, 259, 275.

clasificó su trabajo por expedientes que entraban o salían de su oficina ⁹¹. (Véase tabla 4.)

TABLA 4

EXPEDIENTES DEL FISCAL DE REAL HACIENDA,
ENERO DE 1781-8

<i>Origen de los expedientes:</i>	<i>Número de expedientes</i>
Fiscalía de Real Hacienda	20 160
Fiscalía Civil	6 743
Fiscalía Criminal	504
Protectoría de Indios	977
Perilimentos fiscales	745
TOTAL	29 129
<i>Fiscalía de Real Hacienda</i>	
Secretaría virreinal	11 016
Notarías del gobierno	4 231
Audiencia	919
Propiedades jesuítas	2 000
Almojarifazgo y alcabala	423
Monopolio del tabaco	162
Monopolio de la pólvora	161
Casa de Moneda	7
Cajas reales	54
Tribunal de Cuentas	153
Secretaría de la Superintendencia y Junta Superior de Real Hacienda	812
Juzgado de Indios	222
TOTAL	20 160
<i>Fiscalía Civil</i>	
Secretaría virreinal	2 279
Notarías del gobierno	2 778
Audiencia	1 025
Miscelánea	661
TOTAL	6 743

⁹¹ AGI, México 1515, Posada a Flores, 21 febrero 1788.

Es difícil saber precisamente qué significación tienen estos totales, pero Posada atendía aproximadamente de tres a cuatrocientos casos al mes. No hay duda de que muchos de ellos no requerían más que su firma, pero otros deben haber exigido cierta meditación. En una carta de noviembre de 1782, afirmó haber escrito de su propia mano en diez meses más de 600 *pedimientos* —solicitudes formales de que se tomara alguna acción— y respuestas. Quizá para los asuntos más rutinarios dictaba su opinión a los escribientes. Los tres fiscales, ante la magnitud del trabajo que tenían enfrente, emplearon a algunos abogados llamados agentes fiscales para que despacharan los expedientes menos importantes. Hasta 1780 el número de estos ayudantes fue variable; sólo uno de ellos tenía sueldo fijo, los demás vivían de honorarios que cobraban por los litigios entre dos partes, pero ese año la Corona ordenó el nombramiento de 6 agentes fiscales permanentes, teniendo cada uno de ellos un estipendio anual fijo de 1 800 pesos; se estimó que entre el sueldo y los honorarios que cobrasen, sus ingresos ascenderían hasta a 3 500 pesos al año. Al principio, dos agentes fueron agregados a cada fiscal, pero en 1783 se transfirió a uno del fiscal de lo penal al de real hacienda⁹². Aun con todo este personal la labor de Posada debe haber sido extremadamente fatigosa.

La responsabilidad final en asuntos fiscales correspondía al virrey, que desde 1749 tuvo el título de superintendente subdelegado de real hacienda y las atribuciones consiguientes. El desarrollo simultáneo de la recaudación de impuestos y de los puestos militares, multiplicó sus obligaciones, ya que casi todas las innovaciones importantes, tales como los monopolios y el cobro de impuestos estaban bajo su supervisión directa. Consecuentemente, se hizo necesario que los virreyes dispusieran de una numerosa secretaría, en una escala hasta entonces desconocida.

En 1723 el virrey Duque de Linares escribió: «Los dos únicos órganos por donde los virreyes dan corriente a todos los negocios de este reino, así en lo político, como en lo militar, patronato, real hacienda, y guerra, son los oficios de gobierno»⁹³. Estas oficinas estaban a cargo de los dos grandes notarios del gobierno, los cuales habían comprado su puesto a la Corona y ganado

⁹² BN (México) MSS 1380, ff. 58-65.

⁹³ BN (Madrid) MSS 2929, f. 90.

buenas utilidades de los honorarios que cobraban sobre todos los documentos que preparaban. Eran los que certificaban la autenticidad de todos los documentos oficiales —nombramientos, decretos, presentación de demandas ocasionadas por medidas gubernamentales—, y además eran responsables de la preparación general de expedientes y despachos. La dependencia del virrey en la ayuda de los notarios reflejaba la naturaleza adjudicatoria tradicional del gobierno de los Habsburgos.

La mayoría de los virreyes también tuvieron un secretario privado que se ocupaba de los aspectos más secretos del gobierno, para el cual la Corona había fijado un sueldo de 300 pesos. No obstante, ya en la década que comenzó en 1740, el Marqués de Casafuerte ponía de su bolsillo otros 1 400 pesos para pagar al secretario y a tres escribientes que le ayudaran. No fue sino hasta 1756 que la Corona nombró a tres funcionarios, con sueldos respectivamente de 1 500, 1 000 y 500 pesos, para que constituyeran una secretaría permanente, no dependiente del virreinal capricho ⁹⁴. En 1761, ante las protestas de los grandes notarios, la Corona decretó que «la Secretaría sólo sirve para los casos providenciales en que no es preciso auto, notificación, ni otro acto de aquéllos que precisa la fe pública», y que «las providencias de la Secretaría sólo condujeron para inteligenciarse de los negocios, habilitarlos y promoverlos, dejando la actuación de ellos, los autos, despachos, títulos y demás diligencias judiciales a los escribanos para que se refrendase» ⁹⁵. No obstante, los notarios, al igual que la Audiencia, encontraban que su esfera de trabajo estaba cada vez más limitada.

En los años que siguieron a la Visita de Gálvez, la secretaría, a pesar de todo, experimentó un crecimiento numérico casi continuo. Para 1778 comprendía 15 personas encabezadas por el secretario en jefe, el cual recibía un sueldo de 4 000 pesos. La remuneración de los demás empleados iba de 450 a 2 000 pesos anuales. Aun así, el virrey Bucareli tuvo que contratar a otros seis ayudantes supernumerarios y sin sueldo, que trabajaban con la esperanza de que más tarde se les otorgara un nombramiento ⁹⁶. Diez años más tarde el número de empleados de la secretaría se había elevado

⁹⁴ BRP, MSS Miscelánea de Ayala, X, ff. 234-41.

⁹⁵ AGI, México 1773, Cossío a Gálvez, 20 octubre 1781.

⁹⁶ AGN, Historia 44/6, Revillagigedo a Valdés, 11 enero 1790.

a 30. El virrey Revillagigedo, sin embargo, se quejaba de que como los salarios eran bajos, el personal cambiaba continuamente porque sus funcionarios dejaban la secretaría virreinal para irse a ocupar en otro lado puestos más remunerativos. Los abundantes empleados supernumerarios eran generalmente oficiales peninsulares en espera de que ocurrieran vacantes en alguna otra dependencia del gobierno. Declaró el virrey que, aunque «la secretaría del virreynato es el eje, el taller, la dirección de todo lo que conduce el gobierno y felicidades del Imperio de la Nueva España», su personal «padece la casi general epidemia de ineptitud en sus dependientes, desorden en su gobierno, y torpe confusión en su perezoso despacho»⁹⁷. Protestaba contra el desorden existente en el archivo. Como siempre, Revillagigedo elaboró un complicado plan para reorganizar esta oficina, al que Madrid no hizo el menor caso.

Parece que cada empleado estaba a cargo de los asuntos que se originaban en una dependencia distinta del gobierno, tales como el monopolio del tabaco, las alcabalas, las temporalidades, California, el ejército, y los puertos de San Blas y Veracruz. Una gran parte de sus obligaciones se relacionaba con los asuntos fiscales, labor que la creación de intendencias hizo todavía más pesada. Durante el gobierno de Revillagigedo, de 1789 a 1794, el secretario Antonio Bonilla estimó que unos 30 000 expedientes diversos habían llegado a su oficina 100 771 veces. Además, 4 505 informes habían sido despachados a los distintos ministerios en Madrid. Todo esto había sido realizado por él mismo, ocho empleados permanentes, ocho supernumerarios y diez escribientes⁹⁸. Para lograr que esta enorme cantidad de papel se moviera de una a otra oficina del gobierno, la secretaría tenía que trabajar largas horas —hasta diez, y a veces aun catorce al día, en especial cuando la correspondencia dirigida a Madrid tenía que prepararse lo más rápidamente posible por estar próximo a zarpar el buque correo.

Poco después de 1780 la burocracia fiscal de la Nueva España ya estaba caracterizada tanto por su gran número como por su desunión. No existía una sola institución, oficina o ministro que tuviera suficiente poder para gobernar la enorme y pesada maquinaria. El mismo virrey, aunque recibía una gran ayuda de su secretaría, ya

⁹⁷ AGN, Intendencias 25, Revillagigedo a Valdés, 11 enero 1790.

⁹⁸ AGI, México 1555, Bonilla a la Corona, 15 septiembre 1790.

ampliada, estaba demasiado abrumado por las responsabilidades políticas, militares y eclesiásticas de su cargo para poder ocuparse de ello. Era claro que se necesitaba alguna medida unificadora, porque el monopolio del tabaco y las recaudaciones del almojarifazgo y de las alcabalas constituían prácticamente feudos independientes. A pesar de ello lo único que el virrey podía hacer para guiar y gobernar a esta burocracia en proliferación y a menudo destrozada por las luchas interiores, era convocar a la Junta de Real Hacienda, cuerpo consultivo sin poderes ejecutivos. *Consistía esta por entonces, en orden de jerarquías, del virrey, del regente y los dos jueces más antiguos de la Audiencia, del superintendente de la Casa de Moneda, del fiscal de Real Hacienda, de los dos contadores más antiguos del tribunal de cuentas, del superintendente y del director general de aduanas y recaudación de impuestos, del contador general de tributos y de dos oficiales de la Real Hacienda central*⁹⁹. Dentro de este cuerpo por lo menos se discutía, pero sus labores eran ocasionales y consultivas, además de que era un cuerpo incontrolable. Para dar fuerza legal a sus decretos se requería la firma del virrey.

Fue precisamente para proporcionar una fuerza directiva centralizada a esta confusa mezcla de dependencias fiscales que Gálvez, en su calidad de ministro de las Indias, favoreció el nombramiento de un superintendente general de Real Hacienda, independiente del virrey. Esperaba introducir este puesto al mismo tiempo que se estableciera el sistema de intendencias, una vez que lograra instalar a su hermano Matías como virrey de la Nueva España. Pero la inesperada muerte de Bucareli mientras era todavía virrey elevó automáticamente a Martín de Mayorga, presidente de la Audiencia de Guatemala, al trono virreinal. Gálvez exhibiendo su desprecio tanto por el hombre como por el cargo que ocupaba, se permitió hacer un extraño experimento. Designó a Pedro Antonio de Cossío para que fuera tanto secretario del virrey como intendente de todos los asuntos fiscales, con atribuciones de supervisión. Se privó a Mayorga de toda responsabilidad en esta esfera excepto la humillante tarea de tener que firmar los decretos y documentos que el intendente elaboraba¹⁰⁰. Por otra parte Cossío, antiguo comerciante monta-

⁹⁹ AGI, México 1870, Herrera a Gálvez, 27 febrero 1804.

¹⁰⁰ AGI, México 1510, Real orden de nombramiento, 14 agosto 1779. Véase también Navarro García, *Intendencias*, pp. 56-9.

ñés, cuya ayuda a Gálvez durante la creación del monopolio del tabaco le valió el puesto de director de la aduana de Veracruz, era un individuo especialmente carente de tacto. Las cartas que escribió al gran ministro, casi en forma de diario y en estilo informal, estaban llenas de desenfrenadas acusaciones contra otros funcionarios y de lamentaciones por sí mismo, pero contenían muy poco análisis y revelaban escasa comprensión de su propia posición tan particular. Porque en realidad su nombramiento fue un recurso temporal, y en ningún decreto se encuentran claramente definidos sus poderes.

Sin embargo, con el apoyo del virrey Mayorga, Cossío se atrevió a criticar a los jefes de la aduana y de la recaudación de alcabalas, cuyas cuentas nunca habían sido sometidas a una auditoría independiente; a la dependencia encargada de la recaudación de alcabalas todavía le faltaban 245 000 pesos del año 1777. Sus funcionarios, a causa de una supervisión impropia, con frecuencia recibían utilidades exorbitantes; por ejemplo, el director del monopolio del tabaco en Zamora, recibía 6 000 pesos al año por sueldo y comisiones. Además, los directores no aceptaron a las personas designadas por Mayorga y Cossío para ocupar ciertos puestos, y se quejaron directamente a Madrid cuando Cossío trató de nombrar a un oficial recaudador local. Cossío declaró con irritación que «cada uno quiere tener a su mando absoluto un ejército de hombres y muchas plazas que proveer, en lo que hay negocio». Acusó abiertamente a Miguel Páez y a Juan Navarro, los dos directores de aduanas y de recaudación, de corrupción ¹⁰¹. Además Páez se había negado a poner en vigor la decisión de imponer una contribución extra del 2 por 100 para financiar la guerra que en esos momentos se libraba con la Gran Bretaña, de manera que Cossío mismo se vio obligado a elaborar la tarifa de derechos aduanales. Cossío propuso el nombramiento de un director general de impuestos al que quedarían directamente subordinados todos los jefes del departamento ¹⁰². Su intento de establecerse a sí mismo en tal puesto fracasó miserablemente; se le reprendió severamente desde Madrid por sus ataques contra los directores.

Cossío también se enemistó con varios jueces de la Audiencia.

¹⁰¹ AGI, México 2504, Mayorga a Gálvez, 4 enero 1782.

¹⁰² AGI, México 1391, Mayorga a Gálvez, 28 septiembre 1781.

Deseaba fundar un banco de depósito en la Casa de Moneda de México, tanto para el capital privado como para los enormes fondos manejados por la Iglesia, lo cual tenía mayor importancia. Los detalles de este interesante plan nos son desconocidos, pero el hecho es que un asunto de tal importancia requería la aprobación de la Audiencia, que no era fácil de obtener. Cossío escribió: «Tengo noticia por los señores Regentes de la Audiencia y Becerra, que los demás señores Ministros (llevando la bandera Gamboa) representan contra mi proyecto de depósito en Casa de Moneda... especialmente aquellos que estaban acostumbrados a trabajar asuntos de secretaría, con cuyo motivo manoteaban en el Gobierno como, por ejemplo, Gamboa y Guevara» ¹⁰³. También en este caso la oposición tuvo éxito, porque nunca se volvió a oír hablar de aquel proyecto.

Los planes de Cossío para crear un secretariado central de asuntos fiscales también fracasaron rotundamente. Había traído de Veracruz a cuatro oficiales para que complementaran a los ocho oficiales permanentes que formaban parte de la secretaría virreinal, y además contrató a veinte escribientes. Con este personal tan aumentado decretó entonces que todos los asuntos de la real hacienda fueran tramitados únicamente por la secretaría; prohibió a las dos oficinas de gobierno manejadas por los grandes notarios, que recibieran demandas de tipo fiscal; debían limitar sus actividades a la simple autenticación legal de los decretos del gobierno. Cossío se quejaba con estas palabras: «Gotas de sangre me cuesta que estos malditos escribanos de gobierno saquen los testimonios de expedientes de oficio, y me han confundido y dado por perdidos algunos.» Hasta entonces todas las peticiones, reclamaciones y demandas relativas a asuntos fiscales habían sido promovidas ante los notarios; Cossío ordenó que a partir de entonces se presentaran directamente a la *secretaría*. Como en otros casos, su actuación no fue apoyada en Madrid. Los notarios alegaron que el decreto en cuestión privaba a sus oficinas de la mitad de sus ingresos, y apelaban a leyes anteriores que establecían que los asuntos fiscales que afectaran a los particulares debían promoverse con ellos. Madrid les dio la razón y Cossío recibió sumariamente la orden de regresar al sistema an-

¹⁰³ AGI, México 1511, Cossío a Gálvez, 20 octubre 1781.

terior. Tuvo que despedir a los 20 escribientes que había contratado para que se encargaran del papeleo adicional ¹⁰⁴.

El intento de Cossío de imponer una dirección centralizada al sistema fiscal de la Nueva España duró menos de tres años, de agosto de 1779 a marzo de 1782. Es claro que, siendo un simple intendente, carecía de la autoridad suficiente para lograrlo, y tampoco la secretaría virreinal daba una base de fuerza apropiada para tales planes. Además, su modo tan desatento de tratar a la burocracia superior puso en su contra a todo el mundo oficial. La orden en que se le despidió apuntaba el «clamor infinito de personas de todas clases sobre el despotismo, dureza y malos tratos» de su gobierno ¹⁰⁵. Si recordamos que José Antonio de Areche, visitador general del Perú, provocó una tempestad de protestas bastante parecida, podemos concluir que el juicio de Gálvez para elegir funcionarios o políticas estaba muy lejos de ser infalible.

IV

La oposición de Bucareli, el fracaso de Cossío y la muerte en funciones de los dos siguientes virreyes, Matías y Bernardo de Gálvez, fueron todos factores que impidieron el establecimiento de las intendencias. No fue sino hasta diciembre de 1786 que por fin fueron promulgadas las Ordenanzas de Intendentes para la Nueva España. Gálvez mismo no sobrevivió mucho a este triunfo final de su largo ministerio, porque murió en junio de 1787. Consecuentemente, sus enemigos muy pronto tomaron medidas para lograr la modificación de los aspectos más novedosos del código de intendencias. Las ordenanzas —que en líneas generales seguían lo propuesto por Croix y Gálvez en 1767— reformaron toda la administración colonial, cambiando su estructura a tres niveles distintos, local, provincial y central. El fracaso más estrepitoso del proyecto fue en la esfera local y trataremos de él extensamente más adelante. Sin embargo, en este momento es necesaria una breve descripción de la naturaleza general de la reforma.

En primer lugar, se establecieron doce intendencias: Yucatán, Oaxaca, Puebla, México, Veracruz, Valladolid, Guanajuato, Guada-

¹⁰⁴ AGI, México 1405, Matías Gálvez a Gálvez, 30 mayo 1783.

¹⁰⁵ AGI, México 1878, Cossío a Valdés, 20 octubre 1787.

lajara, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí y Sonora. Cada magistrado recibió un asesor legal y un lugarteniente; todos estaban sujetos a la autoridad del superintendente subdelegado de real hacienda, que también tenía a su cargo la provincia central de México. Gálvez siguió como siempre la política que acostumbraba, escogiendo a un solo criollo, Antonio de Villaurrutia, al que designó regente, presidente e intendente de Guadalajara. Para todas las demás designaciones se volvió hacia su familia, a Málaga y a sus subordinados. Fernando Mangino, que era su protegido favorito desde los días de la Visita, fue nombrado superintendente. Manuel de Flon y Juan Antonio de Riaño, cuñados del difunto virrey Bernardo de Gálvez, sobrino del ministro, fueron nombrados para Puebla y Valladolid, y así sucesivamente. De las doce personas designadas intendentes, cinco tenían antecedentes militares, cuatro habían sido oficiales de hacienda y por lo menos cuatro estaban emparentados con Gálvez ¹⁰⁶. Entre sus asesores legales la situación era muy similar. Únicamente se designó a tres criollos, los demás eran abogados peninsulares sin experiencia en el Nuevo Mundo.

El intendente, tal como lo definían las ordenanzas, tenía funciones de gobernador provincial prácticamente omnicompetente, cuyas tareas correspondían a los cuatro rubros generales de Justicia, Guerra, Hacienda y Policía ¹⁰⁷. Hasta entonces no habían existido en la Nueva España magistrados civiles de nivel intermedio, pues las líneas de autoridad, ya fueran judiciales, ejecutivas o fiscales, partían de las provincias y ciudades directamente hacia las autoridades de la capital del virreinato. Únicamente la Iglesia, en las personas de los obispos, contaba con centros de autoridad provinciales. Después de 1786 junto a los obispos estuvieron los intendentes, y en los casos de Mérida, Oaxaca, Puebla, Valladolid, Guadalajara y Durango, ambos residieron en la misma ciudad. El resultado fue que así se constituyeron verdaderas capitales locales, que tenían una posición intermedia entre los distritos y la ciudad de México, a través de las cuales tenía que pasar la acción del gobierno. Así pues, las intendencias, que en algunos casos se basaron en los límites

¹⁰⁶ En Navarro García, *Intendencias*, pp. 60-1, se encuentra una lista de intendentes.

¹⁰⁷ La mejor exposición de las obligaciones de los intendentes la hace John Lynch, *Spanish Colonial Administration, passim*; las ordenanzas de gobierno se reproducen en Fisher, *The Intendant System*, pp. 97-344.

diocesanos ya existentes, fueron progenitoras de los estados modernos de la República Mexicana.

El intendente se diferenciaba profundamente del alcalde mayor en que su cargo era representativo de una concepción activa del gobierno. Por ejemplo, bajo el rubro de *policía*, tenía la obligación de fomentar la industria y la agricultura locales, de reunir estadísticas, de inspeccionar los distritos de su jurisdicción, y de construir obras públicas tales como puentes, caminos y alumbrado. Su autoridad era muy amplia, era jefe del ejecutivo del gobierno provincial y debía hacer cumplir todos los reales decretos y edictos virreinales. También ejercía el patronato, es decir, el derecho real a designar a los beneficiarios de las prebendas y canonjías eclesiásticas. En el campo de la justicia sus poderes eran un poco limitados, ya que su asesor legal solo tenía jurisdicción sobre la capital de la intendencia y su distrito; las apelaciones contra decisiones jurídicas de primera instancia de los subdelegados se dirigían a la Audiencia, no a ningún tribunal de la intendencia. En cambio en lo relativo a asuntos fiscales el intendente tenía atribuciones de máxima autoridad provincial. Todas las quejas, delitos, o demandas que surgieran de cualquier dependencia local de hacienda o de sus funcionarios, pasaban por las manos del intendente para su adjudicación. Además, todos los impuestos recaudados debían concentrarse en la hacienda de la intendencia, y ya no era posible remitirlos directamente a México. Se crearon para este propósito tres nuevas haciendas, en Valladolid, Puebla y Oaxaca, y las antiguas cajas mineras, como las de Guanajuato y Zacatecas, comenzaron a ocuparse de recibir también los tributos y las alcabalas, y de vender tabaco, así como de recaudar el diezmo sobre la plata. Así pues, en la esfera fiscal, contrariamente a lo que sucedía en la judicial, el intendente servía efectivamente como autoridad intermedia. Por esta razón, molestó más a los directores de recaudación de impuestos y del monopolio del tabaco que a la misma Audiencia, el que los intendentes tuvieran estas atribuciones, por lo cual las atacaron. Debe hacerse notar, finalmente, que contrariamente a lo sucedido con los gobernadores anteriores, los intendentes eran funcionarios permanentes, cuyo período en el poder no estaba limitado, y algunos de ellos estuvieron en el cargo de 1786 a 1810. Por su salario, que era de 6 000 pesos anuales, eran superio-

res a los jueces de las audiencias y a los oficiales de hacienda, y de igual jerarquía que los jefes de las nuevas dependencias fiscales.

En el nivel central de la administración, Gálvez fue tenaz en su intención de disminuir el poder virreinal. Por ello nombró a un superintendente subdelegado de real hacienda para que asumiera la responsabilidad total de los asuntos fiscales. Los intendentes eran sus subordinados directos en lo relativo a sus obligaciones más características. En la Nueva España el primero y único superintendente independiente fue Fernando Mangino, que como recompensa por sus servicios durante la Visita de Gálvez había recibido la superintendencia de la Casa de Moneda y la dirección del monopolio del mercurio. Siendo ya un burócrata con experiencia, Mangino obtuvo inmediatamente, en la primera sesión de la junta superior de Real Hacienda, los servicios de los cuatro oficiales que Cossío había traído de Veracruz. La junta ordenó también que todos los litigios fiscales se iniciaran en esta secretaría y no en las oficinas de los grandes notarios del gobierno. Entonces procedió Mangino a designar a su propio notario, auxiliado por un oficial y un escribiente, para que se ocupara de la certificación legal de los títulos de nombramiento, decretos, etc. ¹⁰⁸. Además, nombró a un segundo lugarteniente legal y asesor, llamado José Ignacio Ruiz Calado, abogado criollo que había colaborado con él en el monopolio del mercurio, para que tuviera a su cargo los asuntos de la intendencia de México, separadamente de los de la superintendencia. En total, Mangino rápidamente creó tres cargos: su propia secretaría, y dos notarías, una dependiente de la superintendencia y la otra de la intendencia de México; además, tenía dos asesores legales ¹⁰⁹.

Como era de esperarse, Mangino se disgustó muy pronto con el virrey, que era el Arzobispo Haro, con relación a los límites de la autoridad de cada uno. Todas las disputas fueron relativamente de poca importancia. El superintendente de la Casa de Moneda, ¿de quién era subordinado, de Mangino o del virrey? ¿Quién de los dos debía tener la llave de las arcas donde se guardaban los fondos de las comunidades indígenas en la ciudad de México? ¿Quién tenía poder para autorizar el envío de 120 000 pesos a Yucatán, donde eran necesarios para fines militares, el virrey o el superin-

¹⁰⁸ AGI, México 1973, Mangino a Gálvez, 27 mayo 1787.

¹⁰⁹ AGI, México 1873, Mangino a Gálvez, 25 junio 1787.

...¹¹⁰ Tales conflictos de jurisdicción se originaron inevitablemente en el plan básico de separar la dirección fiscal del mando político. En el virreinato de Buenos Aires habían ya tenido lugar disputas mucho más serias. De todos modos, el sistema no sobrevivió mucho a Gálvez. El nuevo ministro, Frey Antonio Valdés y Bazán, por consejo del Conde de Tepa, antiguo consejero de Bucareli y para entonces miembro influyente del Consejo de Indias, reunió los cargos de virrey y de superintendente subdelegado. En octubre de 1787, Mangino fue ascendido a miembro del Consejo de Indias; su secretaría fue puesta bajo la dependencia del virrey y su notaría fue disuelta. Los grandes notarios del gobierno recobraron su posición perdida. El experimento de mando dividido duró únicamente nueve meses ¹¹¹.

Al desaparecer de la escena el superintendente, la Junta Superior de Real Hacienda surgió como la autoridad central en los asuntos fiscales y de las intendencias. Esta junta era muy diferente de su predecesora, la Junta de Real Hacienda, tanto por sus atribuciones como por sus miembros. Mientras que la antigua junta era un simple cuerpo consultivo a las órdenes del virrey, la nueva tenía el poder de «para mandar, cumplir y ejecutar sus resoluciones». El virrey sólo era su presidente, y todos los asuntos se decidían por mayoría de votos; la firma del virrey tampoco era necesaria, para dar validez a las decisiones así tomadas ¹¹². Aparte de sus funciones ejecutivas, la junta también tenía carácter de corte de apelación de todas las decisiones y medidas tomadas por los intendentes en asuntos fiscales, y tomó además el lugar de la Audiencia como autoridad suprema en asuntos de tributos indígenas y de fondos comunales, así como en lo relativo a los ingresos de las ciudades españolas. Para asegurar que la junta se ocupara efectivamente de sus numerosas responsabilidades, los dos empleados de mayor rango de los grandes notarios fueron designados secretarios. La tarea de estos, que eran ambos abogados titulados, fue recibir y elaborar los documentos de todos los casos que presentaran ante la junta. Registraban cuidadosamente las decisiones de ésta y despachaban las órdenes oficiales

¹¹⁰ AGI, México 1974, Mangino a Gálvez, 8 agosto 1787.

¹¹¹ García Navarro, *Intendencias*, pp. 114-16.

¹¹² AGI, México 1973, Mangino a Gálvez, 15 julio 1787.

para que fueran ejecutadas ¹¹³. El empleo de los notarios del gobierno evitaba la confusión y el conflicto con las oficinas virreinales, y confería inmediatamente patente legal a las decisiones de la junta.

La junta también era diversa de su predecesora en cuanto a su composición. Sus miembros eran únicamente el superintendente subdelegado, el regente de la Audiencia, el fiscal de real hacienda, el contador mayor del tribunal de cuentas y el oficial de mayor grado de la real hacienda central. Quedaban excluidos los jefes de las dependencias fiscales. Según había sido concebida por Gálvez, la junta debía estar encabezada por el superintendente, con el apoyo del regente y del fiscal; los tres funcionarios serían cuidadosamente seleccionados por el gran ministro en persona, para asegurar la eficacia de la reforma de las intendencias. Pero después de que murió, el equilibrio del poder interno de la junta cambió de dirección. El virrey, que ya estaba abrumado de obligaciones, asumió los deberes de superintendente mientras que la regencia se otorgó al miembro más antiguo de la Audiencia. Así pues, se presentó la situación paradójica de que la autoridad central encargada de dirigir la gran revolución borbónica en el gobierno, llegó a estar constituida en su mayor parte por funcionarios procedentes de las antiguas instituciones que veían todo el plan de reformas con serias sospechas, si no se oponían abiertamente a él. Varias de estas personas, además, eran criollos o peninsulares de tan larga residencia, que se identificaban más con los intereses de la colonia que con los de Madrid. Así, los amplios poderes otorgados a la junta permitieron a esos abogados y burócratas, algunos de ellos ya viejos que cancelaran o suspendieran los artículos centrales del código con que se regía el nuevo sistema. El virrey Revillagigedo, al notar esta situación, acusó rotundamente a la junta de ser «el origen de todos los males de Nueva España... adictos unos a las costumbres, estilos o abusos de la antigua práctica empeñándose en sostenerla, y otras con mejores fundamentos en abolirla» ¹¹⁴. Cierta tiempo después recomendó que, por deferencia a sus múltiples funciones, la junta se dividiera en dos cuerpos que sesionaran separadamente. El primero, que debía estar formado principalmente por oidores, se ocuparía del trabajo de revisión, que es esencialmente judicial;

¹¹³ AGI, México 1461, Revillagigedo a Portier, 26 noviembre 1790.

¹¹⁴ AGI, México 1532, Revillagigedo a Lerena, 26 septiembre 1790.

el segundo debería comprender a todos los directores fiscales del departamento y a otros funcionarios importantes, y debía tener a su cargo la política y las decisiones ejecutivas ¹¹⁵. La intención de esta proposición era impedir que los miembros de las antiguas instituciones, como el tribunal de cuentas, dominaran las intendencias. Pero estas sugerencias fueron ignoradas.

La junta sesionaba regularmente dos veces a la semana. Los asuntos de que se ocupaba variaban grandemente; podían incluir, por ejemplo, una exención del diezmo de la plata, un caso de contrabando, la aprobación del presupuesto para la construcción de un granero municipal, procedimientos penales contra oficiales acusados de fraude, la reducción del diezmo a los indígenas habitantes de pueblos víctimas del hambre, y cosas por el estilo. Estos asuntos podían ser promovidos por los particulares como en el caso de un minero, o por los intendentes y otros oficiales fiscales. En general, como los miembros de la junta tenían otras cosas de que ocuparse, se dejaba en manos del fiscal de real hacienda la presentación de *pedimientos* (solicitudes) de que se cumplieran las leyes o de que se protegieran mejor los reales intereses. En los asuntos rutinarios, a causa de la acostumbrada ineficiencia burocrática, era en los que su opinión tenía más peso. Además, la junta se atenía a los informes que el tribunal de cuentas, la real hacienda, y otras dependencias interesadas, presentaban cuando así se solicitaba. El fiscal mismo, como carecía de secretaría, dependía de esas mismas fuentes para obtener pruebas. Era un sistema lento y dependiente de muchos informes, pero razonablemente eficiente, y permitía un grado de independencia ejecutiva mucho mayor de lo que generalmente se ha creído. Supongamos, por ejemplo, que un minero solicitara una exención del diezmo de la plata. Debía presentar su petición en las oficinas de los grandes notarios del gobierno. Podía acompañar a su solicitud las declaraciones favorables que ya hubiese obtenido de los oficiales locales de real hacienda. Si la solicitud llegaba a la junta, se pediría más información al tribunal de minería. En esta fase, posiblemente, el fiscal se habría opuesto a la concesión, quizá trayendo a colación el número de exenciones que ya hubiesen sido concedidas. Entonces se recurriría al tribunal de cuentas; quizá un

¹¹⁵ Fisher, *The Intendant System*, pp. 79-80.

contador de segundo orden prepararía un largo informe exhaustivo, y el tribunal expresaría sus recomendaciones basadas en las investigaciones de este. La real hacienda central quizá también daba su opinión sobre el asunto. El intendente de la provincia en que estaba ubicada la mina también podía intervenir dando su opinión, y entonces el virrey probablemente pediría a su asesor legal general que examinara el caso; según el consejo recibido de este, el virrey emitía su voto. Entonces, la junta decidía el asunto por mayoría de votos, a veces en oposición a lo que el fiscal deseaba.

Para comprender la política de la junta en relación a ciertos asuntos, es de capital importancia, pues, el análisis de los antecedentes de sus miembros. Y aquí encontramos una revelación impresionante del grado en que las antiguas enemistades, tanto personales como políticas, podían tener éxito en la neutralización de grandes aspectos de la «revolución en el gobierno». Esto fue especialmente así durante los primeros meses, ya que desde abril de 1788 hasta la llegada del virrey Revillagigedo en octubre de 1789, la Junta Superior de Real Hacienda de México estuvo totalmente dominada por Francisco Javier de Gamboa, recién nombrado regente de la Audiencia ¹¹⁶. Y durante este breve período, varios artículos importantes del código de intendencias fueron derogados. ¿Cómo logró el viejo enemigo de Gálvez obtener una posición de tal influencia sobre el proceso reformista tan deseado por el gran ministro? En primer lugar, debe tenerse presente que las acusaciones que Croix y Gálvez lanzaron contra él no fueron aceptadas por Madrid; en 1772 se le restituyó en su puesto y en 1774 fue ascendido al cargo de oidor en la Audiencia de México. Allí estuvo hasta 1783. Además de su trabajo judicial normal se hizo cargo de varias comisiones: reformó la administración del Colegio Indio de San Gregorio, fue inspector del funcionamiento de las antiguas haciendas jesuitas de Jalpa, ya en manos de la Corona, investigó fraudes en la lotería real y sirvió de juez de intestados ¹¹⁷. Gamboa también atacó los planes de Cossío para establecer un banco de depósito en la Casa de Moneda.

Gálvez, quizá bajo el temor de que este famoso jurista llegara

¹¹⁶ AGI, México 1879, Gamboa a Porlier, 27 mayo 1788; tomó posesión 29 abril 1788. Obviamente Porlier era su amigo.

¹¹⁷ AGI, México 1404, Marías Gálvez a Gálvez, 31 julio 1783.

a ser regente de la Audiencia de México, o molesto por su oposición a Cossío, decidió trasladarlo de la Nueva España, y en 1781 lo nombró regente de la Audiencia de Santo Domingo. Como podía esperarse, Gamboa hizo cuanto pudo para evitar su traslado, obteniendo cartas de apoyo tanto del virrey como del arzobispo. El mismo escribió una larga carta de protesta. Tenía casi sesenta y cuatro años y había estado enfermo durante los pasados tres años: «Según mi público aspecto más estoy para el sepulcro que para viajes de mar y tierra.» Su anterior viaje forzado a España le había costado más de 40 000 pesos, afirmaba, de manera que «me hallo sin más caudal que mi biblioteca copiada en cuarenta años a fuerza de costos y paciencia aunque de las más completas que hay en este reino» ¹¹⁸. Otros jueces, y hasta Gálvez mismo, durante su visita, se habían servido de ella. En una palabra, Gamboa estaba demasiado viejo, enfermo y pobre, para poder viajar a Santo Domingo.

Sus condiciones, sin embargo, no le impidieron aceptar el cargo de albacea de la rica sucesión de su viejo amigo y compañero de estudios, el marqués del Jaral, que era uno de los mayores latifundistas de la Nueva España. El y la viuda, la condesa de San Mateo de Valparaíso, tenían que hacer cumplir un testamento que fue cuidadosamente redactado —quizá por el mismo Gamboa— para impedir a la única heredera, la joven marquesa de Moncada, vender las propiedades. Esta escribió enfurecida a Gálvez, quejándose de «la impiedad, codicia y sumo interés del autor de mi desgracia, el señor don Francisco Javier de Gamboa» ¹¹⁹. Pero por otro lado ella y su marido siciliano peleaban en público, estaban separados, probablemente se eran mutuamente infieles, y estaban ansiosos de dilapidar la cuantiosa herencia que les esperaba, como todo el mundo sabía. El sobrino político de Gálvez, Cristóbal Fernández de Córdoba, más tarde superintendente de la Casa de Moneda, logró algún tiempo después conquistar a la hija mayor de los Moncada ¹²⁰.

Gálvez no aceptó los alegatos de Gamboa, de manera que a los dos años de haber recibido la primera real orden que le designaba

¹¹⁸ AGI, México 1876, Mayorga a Gálvez, 16 marzo 1781.

¹¹⁹ AGI, México 1403, Mayorga a Gálvez, 7 febrero 1783.

¹²⁰ AGI, México 1893, Revillagigedo a Godoy, 30 junio 1794.

regente —en octubre de 1783— Gamboa partió por fin para Santo Domingo, dejando en México a su esposa y a tres hijas a cargo de su hijo Juan José, que poco antes había regresado de Europa y que recibió una prebenda en el cabildo de la Catedral de México. En Santo Domingo el nuevo regente, con la colaboración del oidor Agustín Emparán, elaboró un nuevo código para el tratamiento de los esclavos negros. Afirmó que era más humano que el que aplicaban los franceses en su vecina colonia. Es inútil decir que anhelaba escapar de «esta isla miserable» ¹²¹. Y antes de que pasaran seis meses después de la muerte de Gálvez, el nuevo ministro de Gobernación y Justicia para las Indias, Antonio Porlier, lo nombró regente de la Audiencia de México, puesto del que tomó posesión en abril de 1788. La reacción en Madrid contra el gran proyecto de Gálvez quedó de manifiesto entonces también en la Nueva España.

Fue Revillagigedo, en una carta a Floridablanca, ministro de Estado, quien llamó la atención sobre la singular carrera de Gamboa. Como agente del consulado de México enviado a Madrid, había expresado muchas de las pretensiones monopolísticas de ese organismo. Más tarde, fue expulsado de la Nueva España, primero por apoyar a los jesuitas y luego por su oposición a Cossío.

Toda su historia que no es la más recomendable porque lo acredita de discolo, perulante, nada afecta a los intereses del Rey, y por consiguiente perjudicial en extremo especialmente en estos reinos, por lo que se lo hizo salir de ellos y no hubiera vuelto sin haberle favorecido Porlier... La opinión de su mal carácter la veo confirmada en lo que experimento en todas las concurrencias de Acuerdos y Juntas por lo que me han instruido varios expedientes y lo que generalmente dicen cuantos le traten y conocen a fondo incluyendo los primeros en éste, a su concolejas que le dan el renombre de defensor de malas causas, y así a pesar de que pudiera considerarse ya en el escalón inmediato al sepulcro por la edad de cerca de 80 años que tiene ¹²².

¡Y todo esto se dice de un septuagenario que está listo para la tumba! En efecto, Gamboa, nacido en Guadalajara y educado en México por los jesuitas, atacó casi todas las reformas borbónicas importantes que Gálvez patrocinó, pero en razón de su talento y de sus excelentes relaciones en Madrid y México, alcanzó el puesto

¹²¹ BM, MSS Egerton 517, Gamboa a Bernardo de Iriarte, 25 marzo 1785. f. 156.

¹²² AGI, Estado 20, Revillagigedo a Floridablanca, 29 agosto 1790.

judicial más elevado de la Nueva España. Ya en él, pudo modificar la política de modo importante. No debe sorprender que su biógrafo del siglo XIX, Mariano Otero, haya escrito: «Si un día se escribe la historia literaria y social de México, este personaje... hará un gran papel porque es una grande época la suya y porque él fue también grande en ella»¹²³.

Cuando Gamboa llegó a México, el superintendente Mangino había sido llamado ya a España dejando al virrey Flores como presidente de la Junta Superior, pero como el virrey, a causa de su enfermedad, se hacía generalmente representar por su asesor legal, el nuevo regente se convirtió de hecho en presidente de la junta. Aprovechó con grandes resultados esta posición. Por ejemplo; el fiscal Ramón de Posada pidió durante varios años una auditoría y examen general de cuentas relativas a los tributos indígenas. El contador general de la dependencia responsable, Juan de la Riva Agüero, no había sometido su contabilidad al tribunal de cuentas durante varios años, y además, era público y notorio que la recaudación de 1787 había sido desastrosamente escasa. Pero Riva Agüero, miembro de una importante familia oficial (uno de sus hermanos era miembro del Consejo de Indias y otro era director del monopolio del tabaco en el Perú), logró que Madrid impusiera demoras. Además, en la Junta Superior, según acusación de Posada, «el regente don Francisco de Gamboa, que preside siempre, es con otros, declarado protector de Riva». En una sesión de mayo de 1789 en la que Posada reiteró sus exigencias de que se emprendiera una acción inmediata, Gamboa logró que el deán de la Audiencia, Ladrón de Guevara, fuera elegido miembro de la Junta, y así obtuvo un voto mayoritario que concedía a Riva Agüero otros cuatro meses de prórroga para que resolviera el asunto. Con indignación, pero inútilmente, Posada denunció esta táctica¹²⁴. La disputa se resolvió más tarde con la muerte de Riva Agüero; la auditoría que siguió reveló que en realidad era culpable de malos manejos en la dependencia a su cargo.

¹²³ Otero, «Apuntes para la biografía de don Francisco Javier de Gamboa», en *Obras*, II, 438-62. Véase también Toribio Esquivel Obregón, *Biografía de don Francisco Javier de Gamboa* (México, 1941). Las dos fuentes publicadas contemporáneas son: José Antonio Alzate Ramírez, *Gacetas de literatura de México* (4 vols. Puebla, 1831), III, 373-84, y Beristáin, *Biblioteca*, II, 334-6.

¹²⁴ AGI, México 1799, Posada a Valdés, 25 marzo 1789 y 22 mayo 1789.

Otra situación conflictiva entre el regente y el fiscal se presentó cuando la Junta Superior decidió derogar el artículo 137 de las ordenanzas de intendencias. Este artículo declaraba que de allí en adelante todos los varones indígenas de dieciocho a cincuenta y cinco años de edad, solteros o casados, tenían que pagar un tributo anual de dos pesos. Los mulatos y negros debían pagar tres pesos de tributo. Anteriormente los tributos eran variables según las provincias, pero en general una pareja casada pagaba dos pesos y medio, y un soltero o viudo, la mitad de dicha cantidad. Para imponer la reforma se obligó a los intendentes a que elaboraran nuevos padrones de tributarios, pero en 1787 la Nueva España estaba apenas recuperándose de las malas cosechas de los dos años anteriores, en los que miles de indígenas habían muerto de hambre ¹²⁵. Los intendentes, por esta razón, se abstuvieron de imponer el nuevo sistema, especialmente porque muchos indígenas habían abandonado sus pueblos en busca de alimentos.

No obstante, en la primavera de 1788, el fiscal Posada exigió que se cumpliera el artículo 137 de las ordenanzas, pero en la Junta Superior, a la que se convocó para discutir el asunto, se argumentó que el nuevo sistema de pagos aumentaría la cantidad total de tributo recaudado, y que en vista de los sufrimientos que por entonces abrumaban a los indígenas, habría sido contrario a las leyes divinas y humanas aumentarles el gravamen. «Ningún tiempo pues debe juzgarse menos apósito para hacer retasas ni para aumentar tributos» ¹²⁶. Así pues, en septiembre de 1788 la Junta suspendió el artículo 137, ordenando también a los intendentes de Nueva Galicia y Valladolid que continuaran recaudando el tributo anualmente y no cada cuatro meses como prescribían las ordenanzas ¹²⁷. La decisión de la Junta, inspirada en consideraciones tan prácticas como humanitarias, de todas maneras significó que una sección importante de la reforma de intendencias fuera derogada sin consultar a Madrid.

Pero ¿quiénes fueron responsables de esta decisión de la Junta? Sus miembros eran a la sazón el regente, Gamboa, el fiscal, Posada,

¹²⁵ Véanse Gibson, *The Aztecs*, p. 312; y Florescano, *Precios del maíz*, pp. 148-59.

¹²⁶ AGI, México 1521, decreto de la Junta, 9 septiembre 1788, en Flores a Valdés, 28 octubre 1788.

¹²⁷ AGI, México 1522, Flores a Valdés, 24 noviembre 1788.

dos contadores mayores del tribunal de cuentas, Martín José de Alegría y Manuel Campo Marín, y el contador de la Real Hacienda central, Francisco Sales Carrillo. Probablemente uno de los dos contadores mayores tenía la representación del virrey. A Gamboa y a Posada ya los conocemos. Alegría, vasco llegado a la Nueva España durante la visita de Gálvez, había sido por entonces nombrado administrador general de la Real Hacienda de Veracruz, y secretario interino del virreinato. No se sabe cómo, incurrió en el desagrado de Gálvez y de Croix en alguna ocasión, y en 1770 recibió la orden de dirigirse a La Habana para reunirse con su mujer ¹²⁸. Pedro Antonio de Cossío le sucedió en el puesto que tenía en Veracruz, pero Alegría de todos modos permaneció en la Nueva España y obtuvo varios empleos oficiales, entre ellos una alcaldía mayor, antes de llegar a ser contador mayor en el tribunal de cuentas. Revillagigedo dijo de él más tarde que «opuesto siempre al establecimiento de intendencias, sin otro fundamental que el de su voluntariedad, tenaz de sus caprichos, y lleno ya de impertinencias» ¹²⁹. Es claro que pertenecía a la facción contraria a Gálvez; su sobrino, el futuro virrey Miguel José de Azanza, había sido arrestado por Gálvez durante la Visita de éste, por haber divulgado el ataque de locura que el futuro ministro tuvo en Sonora ¹³⁰.

De los otros dos miembros de la Junta sabemos menos; parece que ambos eran criollos. Manuel de Campo Marín, en esa época ya viejo y enfermo, había ayudado a Gamboa a elaborar el inventario de la sucesión del Marqués del Jaral ¹³¹. Estudió en el antiguo Colegio de San Ildefonso, con los jesuitas. Francisco Sales Carrillo ocupaba su puesto en la Real Hacienda central desde 1779. Uno de sus hermanos, Joaquín José, era cura párroco en Guanajuato; otro, llamado Ignacio, fue un historiador muy conocido en su época, si bien hoy olvidado ¹³². Así pues, la Junta comprendía a tres criollos y a un antiguo enemigo de Gálvez, por lo que no sorprende que el fiscal Posada se sintiera aislado y se quejara amargamente a Madrid

¹²⁸ AGI, México 1724, Bucareli a Arriaga, 26 noviembre 1772.

¹²⁹ AGI, México 1540, Revillagigedo a Lerena, 1 mayo 1790.

¹³⁰ Priestley, *José de Gálvez*, p. 281.

¹³¹ AGI, México 1403, Mayorga a Gálvez, 7 febrero 1783; Beristáin, *Biblioteca*, II, 31.

¹³² AGI, México 1866, Sales Carrillo a Gálvez, 6 octubre 1780; Beristáin, *Biblioteca*, II, 56-7.

de que sus pedimientos, o solicitudes, de que se cumpliera la ley, eran ignorados o rechazados por la Junta. La situación cambió con la llegada del virrey Revillagigedo. Este ilustrado y vigoroso virrey escribió más tarde que siempre había puesto su celo para «en apoyar y acalorar los pedimientos del expresado rectísimo Fiscal de Real Hacienda que sin mi auxilio ciertamente hubieran quedado en mucha parte ilusorios» ¹³³.

La libertad de acción de la Junta en este asunto derivaba de la ausencia en Madrid de un ministro suficientemente fuerte para imponer su voluntad. Después de la muerte de Gálvez el antiguo Ministerio de las Indias fue dividido en dos dependencias, una de ellas responsable de Guerra, y la otra de la Real Hacienda, y cada una sujeta a un jefe distinto. Al mismo tiempo, el Consejo de Indias y su sección de auditoría, la llamada contaduría, parece que fueron inundados por una corriente siempre creciente de cartas e informes oficiales que llegaban de América. Así, fue casi por casualidad que solo a fines del último decenio del siglo, el Consejo de Indias discutió la decisión de la Junta relativa a los tributos indígenas. Las cartas del virrey Flores sobre el caso fueron traspapeladas al pasar del Ministerio de Hacienda a la contaduría del Consejo de Indias. El contador general no se enteró del asunto hasta 1795, y se tardó más de un año para localizar la correspondencia relativa. El resultado de todo esto fue una serie de *consultas* expedidas por el Consejo en 1796 y 1797 en las que se exigía la aplicación completa de las ordenanzas de intendencias ¹³⁴. Es claro que una institución colonial tal como la Junta Superior, si estaba encabezada por un presidente decidido como Gamboa, o como Revillagigedo, podía salirse con la suya entre todo el papeleo que abrumaba al sistema.

V

No obstante, el ataque más significativo contra las ordenanzas de intendencias tuvo lugar en la esfera del gobierno local. Porque en ella, ante la imposibilidad de hacerlas cumplir efectivamente, la Junta Superior abrogó la mayoría de las disposiciones más impor-

¹³³ AGI, México 1540, Revillagigedo a Lerena, 30 noviembre 1790.

¹³⁴ AGI, México 1799, Informe del contador general, 9 mayo 1796.

antes del nuevo sistema. Como resultado, el subdelegado se convirtió pronto en un alcalde mayor con amplias facultades. Las razones de este cambio fueron varias, pero debe recordarse en primer lugar que el código había establecido dos clases diferentes de subdelegados. La primera categoría, la de los que fueron nombrados para las zonas pobladas por indígenas, tenía más o menos los mismos deberes que el intendente, siendo responsables en los campos de la justicia, la *policía*, la guerra y hacienda. En calidad de salario recibían el 5 por 100 de los tributos que recaudaban. El problema estaba en la superficie de su jurisdicción, porque el código estipulaba que se nombrara un subdelegado en cada uno de los distritos que hasta entonces habían sido presididos por el alcalde mayor y sus lugartenientes, disposición que exigía entonces la división de las antiguas alcaldías mayores. La segunda clase de subdelegados, que únicamente se encontraban en las ciudades españolas, era sólo responsable de las obligaciones que caían bajo los rubros de guerra y hacienda. Al contrario de los antiguos alcaldes mayores, estos subdelegados no presidían el ayuntamiento, y, lo cual es más importante, no recaudaban los tributos indígenas porque esta era labor de los alcaldes ordinarios, que eran magistrados municipales elegidos. En suma, este funcionario tenía muy poco poder y carecía casi completamente de medios de sustentación. La cuestión de la remuneración era importante porque ambas categorías de subdelegados tenían estrictamente prohibido participar en repartimientos de comercio.

Sin embargo, casi todos los artículos del nuevo sistema fueron controvertidos y luego suspendidos. La primera dificultad surgió en septiembre de 1787 cuando el intendente de Puebla, Manuel de Flon, designó a un subdelegado para reemplazar al alcalde mayor de Amozoc y Totomehuacán. La junta, encabezada por el superintendente Mangino, le ordenó que diera posesión a dos subdelegados en cumplimiento del artículo 11 de las ordenanzas. Entonces, cuando remitió la lista de todos sus nombramientos, el fiscal Posada inmediatamente recomendó a la junta que negara su sanción, ya que había nombrado subdelegados para la recaudación de tributos en distritos en donde había ciudades españolas. Flon justificó sus nombramientos diciendo que los alcaldes ordinarios de los poblados pequeños no eran dignos de confianza en ningún aspecto, que defraudarían a

la real hacienda, y que «llamen gente de razón a todos los que no son indios aunque sean de la más inferior casta». Además, declaraba que si se nombraban subdelegados en todos los distritos, llamados *tenientazgos*, el salario, que ya era exiguo, se vería aún más reducido, y entonces sería imposible atraer aspirantes calificados para el empleo. Se quejaba del «... un caos de confusiones, en que ni el Intendente sabe que mandar ni su súbdito si le ha de obedecer; ninguno sabe sus facultades». Pero Mangino y Posada no cedieron respecto a que las ordenanzas tenían que cumplirse ¹³⁵.

En julio de 1788 ocurrió un caso similar con relación a la alcaldía mayor de Chalco, jurisdicción que comprendía los tres distritos de Tlamanalco y Chalco. Posada exigió que si la zona no era definida como indígena, entonces los alcaldes ordinarios debían encargarse de la recaudación del tributo y de la justicia, y debían nombrarse tres subdelegados de la segunda categoría con jurisdicción sobre guerra y hacienda. Naturalmente que la dificultad consistía en qué tan dignos de confianza eran los magistrados electos y en la remuneración de los subdelegados, especialmente los de la segunda clase ¹³⁶.

En agosto de 1788 la Junta Superior, al recibir otras quejas, decidió por votación suspender la aplicación de los artículos 11, 12 y 129 de las ordenanzas de intendencia. Ordenó a los intendentes que no nombraran alcaldes ordinarios en los lugares en donde dichos magistrados no hubiesen existido con anterioridad, y les recomendó una gran cautela en la selección de subdelegados, especialmente porque en vista del bajo salario no podían exigirse las garantías financieras acostumbradas ¹³⁷. Los miembros de esta Junta eran el virrey Flores, Gamboa, Posada, Alegría y el tesorero de la Real Hacienda central, Luis Gutiérrez, nativo de México e hijo de un antiguo «factor» de la misma Hacienda ¹³⁸. Otra vez había mayoría contra Posada.

El siguiente otoño los intendentes escribieron confirmando la cordura del decreto de la Junta. Existían poquísimos alcaldes ordinarios, y la mayoría de los que había no eran dignos de que se les

¹³⁵ AGI, México 1521; véase Flores a Valdés, 27 octubre 1788.

¹³⁶ AGI, México 1579, Posada a la Junta, 31 julio 1788.

¹³⁷ AGI, México 1521, decreto de la Junta, 12 agosto 1788, Flores a Valdés, 27 octubre 1788.

¹³⁸ AGI, México 1388, Mayorga a Gálvez, 4 marzo 1790. Era hijo de Juan Antonio Gutiérrez de Herrera.

confiaran los tributos. Y así, cuando los alcaldes mayores en funciones iban terminando sus períodos, generalmente se les sustituía por subdelegados de la primera categoría, responsables tanto del gobierno como de los tributos de toda la alcaldía mayor. Naturalmente que para ayudarles a administrar lo que muchas veces era una superficie extensa, estos subdelegados seleccionaban lugartenientes que se hicieran cargo de los distritos subordinados. Cuando en 1791 la Audiencia de México declaró esta práctica contraria a las ordenanzas de intendentes, señaló que el subdelegado se había convertido en un alcalde mayor con nombre distinto ¹³⁹. Y en realidad, este era el caso en la mayoría de los lugares. La decisión de la Junta de que no se empleara a los alcaldes ordinarios para la recaudación de tributos dejó toda la responsabilidad en manos de los subdelegados.

Así pues, en general, la mayoría de los intendentes mantuvieron la estructura del gobierno local existente antes de 1786, y sólo unas cuantas alcaldías mayores muy extensas fueron divididas. La excepción principal a esta regla fue Valladolid, donde el intendente Juan Antonio de Riaño aplicó completamente las ordenanzas: «estableció subdelegaciones en todos los partidos donde los corregidores tenían encargados de justicia» ¹⁴⁰. Parece que en total creó por lo menos trece nuevas jurisdicciones, pero éste fue el único caso en que se llevó a cabo un cambio tan drástico en el gobierno local.

Sin embargo, la vieja estructura cambió radicalmente en un aspecto. En las ciudades españolas que poseían ayuntamiento y magistrados, el intendente podía nombrar únicamente a un subdelegado de segunda clase, con atribuciones de guerra y hacienda. La situación provocó considerables controversias entre los subdelegados y los magistrados locales, de modo que en marzo de 1793 la Junta Superior, en un vano intento de resolverlas, decretó que los subdelegados tuvieran atribuciones en los cuatro campos: justicia, *policía*, hacienda y guerra, en todas las regiones donde no existiera una ciudad con ayuntamiento organizado y en el partido inmediatamente dependiente de tales poblaciones, lo cual provocó aun mayores controversias.

¹³⁹ AGI, México 1750, Audiencia a la Corona, 29 noviembre 1791.

¹⁴⁰ AGI, México 1890, Intendente de Michoacán a Azanza, 20 diciembre 1799; AGN, Intendencias 17, Intendente a Revillagigedo, 5 julio 1793.

En el interior de los poblados, sin embargo, los alcaldes ordinarios seguirían teniendo la responsabilidad de justicia y *policía*. Esta decisión aumentó la confusión y provocó disputas y conflictos de jurisdicción en Jalapa, Sombrerete, Catorce, Querétaro y otros lugares. En Jalapa, por ejemplo, hubo dos ventas en subasta del derecho a vender carne, una organizada por los alcaldes ordinarios para la población, y otra para el partido o distrito circundante, organizada por el subdelegado ¹⁴¹.

El ayuntamiento de Querétaro, citando el artículo 11 de las ordenanzas, apeló a la audiencia para que restituyera a los alcaldes ordinarios la responsabilidad completa en cuanto a justicia y policía en todo el partido dependiente y no únicamente en la ciudad. La Audiencia recibió la apelación y subsecuentemente ordenó que el subdelegado dejara de ocuparse de tales deberes de gobierno. Sin embargo, siendo Querétaro una ciudad rica y populosa, tenía necesidad de contar con un magistrado real con más autoridad que un simple subdelegado de segunda clase, para que controlara a su pependenciero ayuntamiento. Consecuentemente, el Consejo de Indias ordenó en 1794 que se nombrara un corregidor de letras para dicha ciudad, es decir, con preparación académica ¹⁴². Aunque este fue el único nombramiento de esta clase en toda la Nueva España, la misma necesidad de contar con un magistrado real de mayor autoridad, se satisfizo en otros lugares mediante la transformación del subdelegado. En respuesta a peticiones hechas por los intendentes de México, Veracruz y San Luis Potosí en marzo de 1797, la Junta Superior suspendió la aplicación de los artículos 11, 12 y 77 de las ordenanzas y dio instrucciones de que los subdelegados ejercieran la responsabilidad de los cuatro rubros de gobierno en los poblados que tuvieran ayuntamiento. Dos años después, en febrero de 1799, la Junta decretó además que el subdelegado presidiera y no sólo participara en las sesiones del ayuntamiento, y a pesar de las vigorosas protestas que surgieron en Jalapa y Córdoba, el Consejo de Indias confirmó estas decisiones ¹⁴³. El subdelegado de segunda clase, criatura de

¹⁴¹ AGI, México 1139, *consulta* del Consejo de Indias, 6 febrero 1800.

¹⁴² AGI, México 1812, Revillagigedo a la Corona, 28 febrero 1792; Real cédula, 17 julio 1794.

¹⁴³ AGI, México 1139, *consulta* del Consejo de Indias, 6 febrero 1800.

naturaleza indefinible, fue así finalmente suprimido. El lento regreso al antiguo sistema de gobierno local estaba casi completo.

La Junta Superior fue, cuando menos, liberal en su interpretación y aplicación de las ordenanzas, pero al tratar con los intendentes siempre defendió celosamente sus propias prerrogativas. Los ancianos abogados y burócratas que formaban parte de ella trataban con severidad cualquier manifestación de independencia de los oficiales recientemente llegados de Europa. En algunos casos se aliaron a la Audiencia para sofocar las pretensiones de sus subordinados, y en otros apoyaron a los subdelegados contra ellos. Manuel de Flon, intendente de Puebla, que según Revillagigedo tenía «un celo eficaz, tal vez ardiente... y de regular talento» se convirtió en objeto especial de su hostilidad ¹⁴⁴. Tan enérgico como iracundo, Flon trató de ejercer su autoridad hasta el máximo. Por ejemplo, en un caso de contrabando, confiscó los artículos ilícitamente introducidos por el comerciante, pero la Junta Superior invalidó su sentencia y condenó al culpable simplemente a pagar el doble de los impuestos correspondientes sobre la mercancía ¹⁴⁵. En otra ocasión pretendió poner bajo su jurisdicción todos los casos de intestado en Puebla, exigiendo que el valor de los bienes sucesorios, si eran subastados, se pagaran a la Real Caja provincial. De nuevo la Junta se le opuso, prohibiéndole que actuara hasta que la Corona hubiere decidido el asunto. En respuesta a esta actitud de la Junta, Flon, ayudado por su lugarteniente legal, escribió una larga diatriba contra el tribunal de bienes de difuntos el cual, según él, había ejercido su jurisdicción sobre los intestados en muchos casos en perjuicio de los herederos naturales ¹⁴⁶. De todos modos el Consejo de Indias ordenó que este tribunal y no el intendente se ocupara de tales casos.

Otro motivo de conflicto se presentó cuando Flon trató de imponer su autoridad sobre la ciudad y provincia de Tlaxcala. Ya en octubre de 1787 el ayuntamiento de Tlaxcala había obtenido la confirmación real de que las ordenanzas de intendencias no pretendían derogar los privilegios tradicionales de que gozaba la provincia por la ayuda proporcionada a los españoles durante la Conquista ¹⁴⁷.

¹⁴⁴ AGI, México 1532, Revillagigedo a Valdés, 3 julio 1790.

¹⁴⁵ AGI, México 1743, Flores a Valdés, 12 marzo 1788.

¹⁴⁶ AGI, México 1796, Mangino a Porlier, 22 diciembre 1787.

¹⁴⁷ AGI, México 1421, Arzobispo Haro a Gálvez, 26 junio 1787.

Así, cuando Flon ordenó la elección de alcaldes ordinarios para que recaudaran el tributo, el gobernador Francisco de Lissa, viejo soldado que se hallaba en ese puesto desde 1776, se negó rotundamente a poner en vigor las ordenanzas. El mismo actuaba como magistrado y cuatro alcaldes indígenas elegidos anualmente se encargaban de la recaudación del tributo. Además, se quejó del tono imperioso de Flon, y recibió el apoyo del ayuntamiento, que reafirmó sus privilegios e independencia tradicionales.

Para rebatir estas protestas Flon recurrió a los informes de los directores del almojarifazgo y alcabalas de Tlaxcala. Estos funcionarios habían afirmado que Lissa seguía otorgando repartimientos. También rentaba los potreros de la ciudad para su beneficio personal. En general, declaraban, la ciudad era administrada para el beneficio del gobernador y de sus amigos. Los regidores del ayuntamiento no eran indígenas, como podía indicar el nombre que llevaban, sino que en realidad eran mestizos cómplices en la opresión de que se hacía víctima a la comunidad indígena de Tlaxcala ¹⁴⁸.

La Junta Superior no hizo caso de este testimonio y en diciembre de 1789 recomendó que Tlaxcala siguiera siendo gobernada por un militar, el cual, no obstante, debía actuar como subdelegado del intendente de Puebla. Más tarde, en 1793, ante nuevas protestas y controversias, se otorgó a Tlaxcala una completa autonomía jurisdiccional, quedando su gobernador bajo la dependencia directa del virrey ¹⁴⁹. Lissa ocupó el cargo hasta 1800, cuando por fin se le despidió después de una encarnizada controversia con un antiguo amigo suyo, hacendado muy rico. El Consejo de Indias le impuso entonces una multa de 1 000 pesos por distribuir repartimientos, aunque él se defendió diciendo que únicamente había distribuido ganado entre los comerciantes y terratenientes de la localidad. Tenía setenta y cuatro años, y hacía veinticinco que era gobernador ¹⁵⁰.

Para Flon, el éxito de Lissa en evadir su jurisdicción era parte de un amplio complot de los jueces subordinados para oponerse a la autoridad del intendente. Mandó a Madrid una vehemente protesta en la que afirmaba que como «la autoridad de los intendentes sobre los demás jueces de sus provincias en los cuatro ramos de

¹⁴⁸ AGI, México 1796, Flon a Flores, 20 diciembre 1788.

¹⁴⁹ AGI, México 1136, consulta del Consejo de Indias, 16 febrero 1793.

¹⁵⁰ AHN, Consejos 20727, sentencia del Consejo de Indias, 17 diciembre 1803.

Justicia, Policía, Hacienda, y Guerra, se hallen tan contestada, contradicha y resistida por ellos que se hace necesaria una real declaración», era necesario expedir un edicto real que exigiera su total obediencia ¹⁵¹. Citaba a Lissa, a los alcaldes ordinarios de Puebla, y a los subdelegados de Tepeaca, Cholula y Atlixco, como personas culpables de esta insubordinación, pero el Consejo de Indias no se dejó impresionar. Su fiscal señaló que en los casos judiciales los subdelegados no estaban sujetos a los intendentes, sino que eran subordinados de la Audiencia, que era el único organismo con poder para revisar lo que hubieren sentenciado.

Casi al mismo tiempo Flon se vio embrollado en acres conflictos tanto con la Junta Superior como con la Audiencia. Había designado a un notario público, Mariano Zambrano, para que fuera el notario de la intendencia; pero más tarde, ante una acusación no comprobada de fraude, despidió de su empleo a Zambrano y colocó en su lugar a un notario real. Entonces Zambrano apeló a la Junta Superior alegando que Flon había actuado así contra él por venganza. La junta ordenó a Flon que restituyera en su empleo al notario, y al no ser obedecida, reiteró la orden. Revillagigedo se negó a admitir una apelación de Flon, en su capacidad de virrey, y al final, después de tres negativas, Flon accedió a cumplir la sentencia del fiscal según la cual, en materia hacendaria, se encontraba sujeto a la Junta y debía obedecer sus decisiones ¹⁵².

Entonces Flon escribió una furiosa carta de protesta al ministro Diego de Gardoqui, en la que acusaba a las autoridades de la ciudad de México de estar resueltas a minar su autoridad, ya que habían recibido con beneplácito y apoyado todas las apelaciones enviadas por los subordinados del intendente. Se quejaba de «la aversión, los celos con que fue mirado siempre el establecimiento de intendencias en América, por los que acostumbrados al despotismo no podían sufrir unos magistrados que partiendo con ellos la autoridad... México continúa siempre en la posesión de arrastrarlo todo a sí». Atribuía al regente la dirección de esta campaña para desacreditar las intendencias.

¹⁵¹ AGI, México 1751. Flon a Bajamar, 21 mayo 1792.

¹⁵² AGI, México 1548, Revillagigedo a la Corona, 30 junio 1792.

Un desorden tan general no dimana en el día de otro principio que del ascendiente que, así en la Junta Superior que en la Audiencia, tiene su vocal y regente don Francisco Javier de Gamboa... este hombre que, por natural de este mismo reino y su avanzada edad, no debía mandar en él y mucho menos en jefe, es el voto decisivo en uno y otro tribunal: por que su carácter fecundo en arbitrios atrae a los demás fácilmente a su partido ¹⁵³.

En los mismos meses en que escribía esta carta, a mediados de 1792, Flon emprendió un nuevo ataque contra Zambrano. El notario estaba entonces litigando sobre una herencia en el tribunal del subdelegado en Cholula. Flon ordenó que dicho caso fuera transferido a los alcaldes ordinarios de Puebla alegando que Zambrano era amigo del subdelegado y que sus intenciones eran fraudulentas. Por supuesto que el notario volvió a apelar a la audiencia, la cual después de examinar los documentos los regresó al subdelegado, imponiendo una multa de 30 pesos al asesor legal de Flon por haber aconsejado la intervención. El intendente, que anteriormente había comunicado su manera de pensar a Madrid, se dirigió entonces directamente a la Audiencia acusándola de tratar de destruir la autoridad de los intendentes fomentando que los subdelegados desobedecieran las decisiones de aquellos. Ambos fiscales inmediatamente expresaron su desaprobación de esta carta por ser «es un puro irreverente, inmodesto, insultante y atrevido desahogo contra aquella Audiencia y sus ministros». La Audiencia se quejó ante Madrid, señalando que, contrariamente a las afirmaciones de Flon, ése era el primer conflicto de jurisdicción con un intendente en que había participado. Pedían que el Consejo de Indias «tomara contra su persona las más serias providencias, así para reprimir y castigar su osadía, como para que con este ejemplo se contuviesen los demás magistrados de su clase» ¹⁵⁴. El Consejo ordenó a Flon que se presentara ante la Audiencia para ser censurado personalmente por su presidente, el virrey; además debía visitar a cada uno de los oidores en su casa para disculparse personalmente ¹⁵⁵. Enemistarse con la Audiencia siguió siendo peligroso hasta bajo los Borbones posteriores. Flon más tarde atribuyó su humillación a la riqueza de Zambrano

¹⁵³ AGI, México 1796, Flon a Gardoqui, 27 junio 1792.

¹⁵⁴ AGI, México 1793, Audiencia al Consejo de Indias, 9 enero 1793.

¹⁵⁵ BN (México) MSS 1405, ff. 267-8, Real cédula, 27 febrero 1795.

y a su influencia con Gamboa «cuya habilidad y destreza en el manejo del reino sabía proporcionar el logro de cuanto emprendió» ¹⁵⁶.

VI

Después de la muerte de Gálvez en 1787, el Ministerio de las Indias fue arbitrariamente dividido en dos partes; tres años más tarde la responsabilidad del gobierno colonial se distribuyó entre los cinco ministerios permanentes de la monarquía española, es decir, los de Guerra, Marina, Hacienda, Justicia y Estado ¹⁵⁷. El Consejo de Indias, encargado de la revisión judicial, de la auditoría fiscal y de la consulta política siguió siendo la única institución especializada en los asuntos de América. La tenaz energía ejecutiva con que Gálvez transformó el sistema colonial, desapareció para siempre, además de que sus sucesores abrigaban serias dudas sobre el valor de las reformas por él impuestas. Dejaron pasar apenas unos cuantos meses antes de suprimir a los superintendentes subdelegados, y un poco más tarde, insistieron en que los virreyes debían ser los intendentes de la provincia subordinada directamente a su capital ¹⁵⁸. Fue la división reinante en Madrid y las dudas que existían en los ministerios respecto al valor del nuevo sistema, lo que permitió que las autoridades coloniales suspendieran o derogaran tantos artículos básicos del código de intendencias.

Si los ministros no emprendieron una acción directa contra las intendencias fue porque les impresionó la vigorosa defensa del nuevo sistema que hizo en 1791 el conde de Revillagigedo ¹⁵⁹. El virrey de México declaró enfáticamente: «El golpe más funesto para Nueva España sería la extinción de sus nacientes Intendencias que debe sostenerse y llevarse a su perfecto arreglo» ¹⁶⁰. Tanto la vehemencia de la defensa —el informe constaba de 186 hojas— como la política en que se apoyaba eran típicas de este hombre, porque Revillagigedo trajo a la Nueva España el estilo y el espíritu del despotismo ilustrado. Al contrario de Bucareli, que era conserva-

¹⁵⁶ AGN, Intendencias 64, Flon a Iturrigaray, 2 julio 1803.

¹⁵⁷ C. H. Haring, *The Spanish Empire in America* (Nueva York, 1963), p. 107.

¹⁵⁸ García Navarro, *Intendencias*, p. 117.

¹⁵⁹ García Navarro, *Intendencias*, pp. 124-5.

¹⁶⁰ BN (México) MSS 432 (1391), f. 76.

dor, «quiso hacer todas las cosas nuevas» ¹⁶¹. Al mismo tiempo impuso la autoridad virreinal hasta sus extremos límites, con la convicción de que, como imagen del rey —su expresión favorita— sólo a él correspondía el gobierno de la Nueva España. Nadie le niega que, su mayor éxito, como el de los intendentes, fue el gobierno de su capital: la ciudad de México fue la más beneficiada por su gobierno. De todos modos, la mayor parte de las dependencias del gobierno recibieron la marca de su minuciosidad y de su energía reformista. Así pues, muy natural fue que el principal exponente de una concepción activa del gobierno apoyara a los intendentes por ser el instrumento principal de tal política.

Revillagigedo, el más grande de los virreyes de México en el siglo XVIII, era un criollo nacido en Cuba y educado en México, donde su padre, el primer conde, también fue virrey de 1746 a 1755 ¹⁶². Aunque Carlos III y quizá también Gálvez, no confiaban en él, en muchos aspectos Revillagigedo, nombrado por su amigo y protector el conde de Floridablanca, representó la culminación del iluminismo administrativo de los Borbones en la Nueva España. Porque su sucesor el marqués de Branciforte, cuñado siciliano de Manuel de Godoy, favorito de la reina, fue notorio por su avaricia y vanalidad.

Revillagigedo dio el tono de sus ideas de gobierno cuando prohibió a los guardias del palacio virreinal que recibieran ni al Arzobispo ni a la Audiencia con los honores que tradicionalmente se les hacían. Además, no prestó oídos a sus protestas y se quejó ante Madrid de que las ordenanzas pertirían que el regente permaneciera sentado en presencia del virrey, práctica que le parecía censurable por irrespetuosa de la imagen del rey ¹⁶³. El efecto de su personalidad y de su política sobre la alta burocracia fue resumido por el Arzobispo Haro, el cual observó que nunca anteriormente había tenido ninguna dificultad con un virrey, pero que Revillagigedo no le había tratado con el respeto debido a su jerarquía. El virrey había ordenado la detención de un sacerdote por los alguaciles civiles, y fueron solo las protestas del arzobispo las que impidieron que fuera sometido

¹⁶¹ AGI, México 1541, Branciforte a Campo de Alange, 5 octubre 1794.

¹⁶² Véase Ignacio J. Rubio Mañé, «Síntesis histórica de la vida del II Conde de Revillagigedo, virrey de Nueva España», *Anuario de estudios americanos*, VI (Sevilla, 1949), 451-96.

¹⁶³ AGI, Estado 20/45, 47, Revillagigedo a Porlier, 10 enero 1790.

a juicio. Apeló a la Audiencia para que impidiera sus arbitrariedades, pero «los odores, con el terror pánico que tienen al virrey y viendo lo tan acalorado y empeñado, no sabían qué hacer». Observó también al arzobispo que Revillagigedo «... trata a los odores con altivez y casi desprecio. Estos le tiemblan y en lo que toma parte proceden tímidos y con contemplación, y transciende el terror a los demás tribunales inferiores».

En términos más generales el arzobispo escribió que Revillagigedo «tiene continuamente vastísimos proyectos... sin dejar sosegar a nadie, tiene en movimiento a casi todo el reino con su fogosidad sin ninguna utilidad», y concluía diciendo que «el corazón del virrey, por lo que yo he advertido en sus conversaciones está penetrado de todas las máximas que los Filósofos de este siglo han esparcido en sus libros sobre lo que ellos llamen libertad de hombres, se le trasluce que aprueba él la sustancia, la revolución de Francia y sólo reprueba el exceso a que se han precipitado aquella acción» ¹⁶⁴. Obviamente el arzobispo Haro, cuando quería hacer daño a alguien, lo hacía sin miramientos. Sin embargo, hay pocas bases para dudar de la veracidad de esta descripción. Los despotas ilustrados y los jacobinos compartían el deseo de reducir el poder de la Iglesia. El contraste entre la descripción de Haro sobre Revillagigedo y los anteriores elogios de Bucareli hechos por la Audiencia, señalan la magnitud del abismo que separaba la concepción del gobierno de cada uno de estos dos virreyes.

La capacidad administrativa de Revillagigedo y su política se comprenden mejor al observar cómo manejó los problemas surgidos de la abolición de los repartimientos de comercio. En su informe de 1791 condenó rotundamente los abusos de los alcaldes mayores, con estas palabras: «pero por lo general ellos y sus mercaderes habilitadores han sido las langostas del reino» ¹⁶⁵, pero asociaba a su crítica una propuesta positiva de que se pagara un salario adecuado a los subdelegados, porque en la carta anexa declaraba que si no se concedían tales salarios, tendría que permitirse a los subdelegados el ejercicio del comercio. Para 1794 su opinión había cambiado un poco. En su informe final llegaba a la conclusión de que la supresión de los repar-

¹⁶⁴ AGI, Estado 41, Haro a la Corona, 27 enero 1792.

¹⁶⁵ BN (México) MSS 432 (1391), f. 60.

timientos había privado a los indígenas de su fuente de crédito, causándose así un perjuicio a la agricultura ¹⁶⁶. Afirmaba además que eran precisamente los oficiales que deseaban desprestigiar a los intendentes los que con más rigor imponían el cumplimiento de esta prohibición, y ya en 1794 Revillagigedo estaba menos convencido del valor de las intendencias, cuando declaró: «Es muy cierto que un establecimiento que a primera vista parece que debía haber sido tan útil ha producido proporcionalmente muy pocas de las ventajas que se debían esperar de él» ¹⁶⁷.

La causa de este cambio de opinión fue, en parte, un mayor conocimiento de la realidad local. Poco después de su llegada en octubre de 1789, Revillagigedo investigó si los intendentes habían suprimido en realidad los repartimientos y qué opinión tenían al respecto. Ya Manuel de Flon, intendente de Puebla, había enviado a la Junta Superior una petición de que se permitiera a los alcaldes mayores existentes, continuar vendiendo mercancías a crédito hasta que expirara su mandato. En su mayor parte, los intendentes al escribir en los primeros meses del año de 1790, atacaban el antiguo sistema. No obstante, los funcionarios del norte —de Guadalajara, Sonora, Durango y Zacatecas— señalaron que en sus provincias nunca habían sido comunes los repartimientos. Mientras más al norte iba uno, menos posibilidad de encontrarse con este sistema había; en Sonora era totalmente desconocido, y en San Luis Potosí sólo existían repartimientos en un distrito. Por otra parte, tanto en Guanajuato como en Valladolid había existido una considerable distribución de mulas, toros y telas, pero ya había sido suspendida. En cuanto a Guanajuato, el intendente afirmaba que los indígenas sufrían, más que por ninguna otra razón, por la carencia de tierras. Sin embargo, en Veracruz y en Yucatán los intendentes recomendaban que se permitieran de nuevo los repartimientos, con la condición de que se les vigilara bien, porque la agricultura de esas regiones ya había comenzado a declinar, a raíz de la abolición del viejo sistema ¹⁶⁸.

Bernardo Bonavía, intendente interino de México, acusó con vehemencia a aquellas personas que por sus intereses personales

¹⁶⁶ Revillagigedo, *Informe general*, p. 115.

¹⁶⁷ *Ibid.*, p. 210.

¹⁶⁸ Estos informes y los que siguen están contenidos en un extenso expediente en AGI, México 1974.

ya establecidos, defendían los repartimientos apoyándose en la naturaleza infantil de los indígenas. Exclamaba: «¿Por qué lo son? O ¿cuándo dejaron de serlo? ¿Cómo puede convenir que la mayor parte de la nación se mantenga en la infancia?... Las mismas leyes y providencias que se establecieron para su defensa se han convertido en su daño les mantienen en la infamia... las providencias oportunas las sacarán de la niñez y andarán con la firmeza y libertad de que los demás hombres». El intendente de Oaxaca afirmaba que la eliminación de los repartimientos había liberado a los indígenas de su antigua servidumbre, sin que la agricultura hubiera dejado de florecer. Señalaba que los indígenas de su provincia eran bastantes racionales».

Sin embargo, fue Flon el que dio la nota más práctica. «No hay empresa más ardua que desterrar abusos cuando en ellos es interesada la codicia.» Muchos subdelegados seguían ejerciendo el comercio, afirmando que las ordenanzas sólo prohibían la distribución forzada de mercancías. El era partidario de la supresión total para lograr «a los indios y demás castas se les re-establece en el goce de los derechos que por leyes divinas y humanas tiene todo hombre». Observaba que los repartimientos únicamente podían ser eliminados si los subdelegados recibían un salario suficiente, por lo que sugería que las subdelegaciones fueran divididas en tres clases, respectivamente con salarios de 1 200, 1 000 y 800 pesos, de manera que el ascenso de uno de estos grados al inmediato superior fuera un incentivo para gobernar con probidad. Para Puebla, el costo total de este plan sería de 19 200 pesos, de los cuales 11 353 pesos ya estaban cubiertos por el 6 por 100 de los tributos, que correspondía a los subdelegados. Podía obtenerse el dinero faltante de los fondos de las comunidades indígenas; y como alternativa podía emplearse como magistrados a los directores locales de la oficina de recaudación y del monopolio del tabaco ¹⁶⁹. Algún tiempo después, Revillagigedo aceptó este plan, que fue incluido en las nuevas ordenanzas de 1803.

Revillagigedo no quedó satisfecho con esta primera remesa de informes muy poco informativos, más especialmente porque él también había recibido protestas del consulado y de comerciantes parti-

¹⁶⁹ Flon a Revillagigedo, 4 enero 1790, en AGI, México 1974.

culares que afirmaban que la supresión de los repartimientos estaba arruinando a la agricultura en México. Por ello emitió una circular, dividida en dos partes, a todos los intendentes; la primera orden, que fue pública, exigía que los repartimientos fueran suprimidos con energía, y la segunda contenía instrucciones secretas que aconsejaban prudencia y clemencia para tratar a los transgresores. Además ordenaba que se emprendiera un estudio detallado de cuántos repartimientos existían anteriormente, y que se especificara también los salarios y comisiones que recibían los subdelegados.

Los informes de los intendentes, que fueron entregados durante el año de 1792, revelaron que los magistrados de distrito en la Nueva España habían sufrido una drástica disminución tanto en su posición como en sus ingresos. Como la mayoría de los subdelegados dependían de la comisión del 5 por 100 sobre los tributos que recaudaban, en las regiones donde los indígenas eran escasos sus ganancias pronto llegaron a ser risibles. Los ingresos totales de los 25 subdelegados de la intendencia de Guadalajara sólo llegaban a 3 756 pesos, y muchos de ellos recibían menos que un simple escribiente. Es claro que la mayoría de estos magistrados eran ciudadanos de la localidad que aceptaban el cargo por razones de prestigio o para aumentar su autoridad personal. Cualquiera que haya sido el caso, el hecho es que tenían que tener otra fuente de ingresos; en cambio, las ganancias de muchos subdelegados del centro y del sur del país eran suficientes, y en algunos casos superaban la cifra de 1 000 pesos. Las variaciones, sin embargo, eran muy considerables. El magistrado de Chalco recibía 2 400 pesos mientras que Texcoco sólo pagaba 895 pesos a su subdelegado. En el mejor de los casos estos salarios apenas permitían a un magistrado de distrito que se sostuviera; y en el peor, le obligaban a buscar otras fuentes de ingresos, pero es un hecho que de ninguna manera sus ganancias igualaban a las de los antiguos alcaldes mayores. En Izúcar, intendencia de Puebla, el alcalde mayor podía esperar tener una utilidad anual de 15 000 pesos, mientras que el subdelegado recibía 661 pesos al año; Tehuacán, en un período de cinco años, produjo a su alcalde mayor la cantidad de 80 000 pesos mientras que el salario de su subdelegado ascendía a 816 pesos anuales ¹⁷⁰.

¹⁷⁰ Este y los siguientes informes se encuentran en AGI, México 1579, informe del intendente de Guadalajara, 4 junio 1792; informe de Flon, 3 julio 1792.

Los intendentes también informaron de la anterior situación de los repartimientos. Varios cambiaron de opinión y favorecieron después el restablecimiento del antiguo sistema. Hacia 1793 Bonavía apoyaba que, dentro de ciertos límites, se retornara al antiguo sistema. El nuevo intendente de Valladolid, Felipe Díez de Ortega, declaró que varios distritos necesitaban urgentemente repartimientos de mulas. La industria azucarera, por ejemplo, había sufrido grandes daños porque ya no lograba obtener mulas ni para las haciendas ni para el transporte del producto a los mercados del Bajío. Igualmente la provincia costera de Colima necesitaba que se distribuyera manta y mulas por valor de 18 000 pesos. Así pues, en general afirmaba que el retiro del crédito había provocado una marcada decadencia de la agricultura en Michoacán. El intendente de Veracruz asumió una posición muy semejante, afirmando que las zonas costeras productoras de algodón requerían de modo especial el estímulo que significaban los repartimientos.

En Oaxaca, donde la producción de cochinilla tradicionalmente dependía de los repartimientos, la situación era un poco diversa. El intendente confesó que era sumamente difícil abolir totalmente el viejo sistema. Mencionaba un contrato, firmado en 1792 entre el subdelegado de Miahuatlán y un comerciante de Oaxaca, en el que este último se comprometía a proporcionar mercancías y efectivo para repartimientos y compra de cochinilla. Es verdad que el intendente mandó encarcelar al comerciante por esta infracción a las ordenanzas, pero se trataba de un caso en que el contrato había sido protocolizado por un notario de la misma ciudad de Oaxaca. Indudablemente que subsistían muchos otros arreglos, más discretos.

En lo relativo a Puebla, Flon proporcionó estimaciones detalladas que demostraban claramente la importancia de los repartimientos para los indígenas de su provincia ¹⁷¹. En Huejotzingo el alcalde mayor distribuía cada año 1 500 toros, 200 mulas y 1 000 pesos en efectivo para la cosecha. En Tlaxcala el valor anual de estos repartimientos ascendía a más de 25 000 pesos; allí el gobernador traía 1 300 toros, 35 mulas y 150 caballos. Estas cifras no eran raras. El magistrado de San Juan de Llanos invirtió en su distrito unos 20 000 pesos entregando a crédito unas 1 500 mulas, 1 200

¹⁷¹ AGI, México 1579, Flon a Revillagigedo, 23 noviembre 1793.

toros y 700 caballos. Sus utilidades, a su vez, eran muy altas. Los toros, que costaban 7 pesos, se vendían a 12, las mulas compradas en 20 pesos se vendían a 30, y así sucesivamente.

Esta serie de informes fue entregada entre 1792 y 1793. Tuvo el resultado de intensificar las dudas que tenían tanto Revillagigedo como la Junta Superior en cuanto a la conveniencia de la prohibición absoluta de los repartimientos que imponían las ordenanzas. Sin embargo, el fiscal Posada continuó atacando la práctica considerándola una forma de monopolio que destruía la libertad del indígena en cuanto al comercio con quien lo deseara. Por otra parte, en septiembre de 1794 el fiscal de lo civil Lorenzo Hernández de Alba, declaró que el paso de siete años había demostrado que la agricultura indígena dependía del abastecimiento de animales a crédito. Además, «que los hacendados de tierra adentro sólo de esta forma volverían a la antigua práctica de traer en tiempos oportunos las partidas de toros, mulas y caballos para vender por punto a los repartidores». En otras palabras, la supresión de los repartimientos había minado la estructura del comercio interno.

La Junta Superior pidió entonces al sucesor de Gamboa en el puesto de regente, Baltasar Ladrón de Guevara, que considerara el asunto. En un largo informe el anciano jurisconsulto criollo recomendaba el regreso al viejo sistema. Hacía notar en primer lugar que, contrariamente al espíritu de las ordenanzas, los subdelegados simplemente habían tomado el lugar de los alcaldes mayores; la única diferencia entre ambos magistrados consistía en que el subdelegado tenía mayor poder y más obligaciones que su predecesor, aunque recibía una remuneración burdamente insuficiente por sus servicios. Cada vez se dificultaba más a los intendentes encontrar aspirantes calificados para tales puestos. Afirmaba más adelante que el indígena necesitaba los repartimientos, porque «es necesario suponer que el carácter común del genio de los indios es la indolencia y abandono... si los repartimientos son absolutamente necesarios para que subsistan los subdelegados, no lo son menos para los indios y pobres porque de otra suerte no se puedan proveer y se hace mayor su miseria careciendo de las cosas más necesarias para su subsistencia cuales son las de su pobre vestuario, bueyes y mular para el cultivo de sus tierras y lo que utilizan con sus fletes» ¹⁷².

¹⁷² AGI, México 1794, declaración de Guevara, 8 noviembre 1794.

Así pues, de nuevo se expresaba la íntima relación existente entre la reforma de intendencias y la opinión por entonces aceptada sobre la naturaleza del indígena. Los conservadores señalaban la realidad presente, y los reformadores la futura. La solución práctica, que era dar a los subdelegados un salario suficiente, fue eliminada porque ya para entonces la Corona Española necesitaba hasta el último centavo que pudiera exprimirles a sus colonias para impedir la bancarrota que amenazaba a la monarquía.

Convencida por este informe, la Junta Superior decidió en noviembre de 1794 levantar la prohibición de repartimientos. El nuevo virrey, Branciforte, pasó entonces el asunto a una junta constituida especialmente, formada por seis jueces de la Audiencia de México, la cual, en junio de 1795 dio su apoyo por mayoría de votos a la decisión de la Junta Superior ¹⁷³. De allí en adelante, los subdelegados pudieron vender artículos a crédito a sus súbditos indígenas, y anticiparles dinero en efectivo sobre las futuras cosechas. La Junta tuvo mucho cuidado en advertir que aunque los subdelegados podían convertirse en comerciantes, no podían monopolizar el comercio en su distrito, ni imponer esta distribución de mercancías. Tenían que actuar, en todas sus transacciones, como cualquier otro comerciante, vendiendo y comprando mercancías al precio normal en el mercado. Para asegurar el cumplimiento de estos principios la Junta aconsejó que los intendentes hicieran inspecciones regulares en sus provincias, para supervisar las actividades de sus subordinados. Posiblemente también podía despacharse en gira a un oidor para escuchar las peticiones de los indígenas. La Junta claramente reconoció que su decisión podía producir algunos abusos, pero señalaba que, en realidad, muchos subdelegados habían seguido haciendo repartimientos, «aún en las goteras de México». Así pues, en parte no estaban haciendo otra cosa que dar sanción legal al *status quo*.

Branciforte aceptó la decisión tanto de la Junta Superior como de la Audiencia declarando que todas las quejas que surgieran de los repartimientos debían ser presentadas directamente al virrey, prohibiéndose a todos los demás tribunales que intervinieran. Aunque esta disposición nunca obtuvo la aprobación de las autoridades de Madrid, fue hecha cumplir en la Nueva España. El Consejo de

¹⁷³ AGI, México 1579, Branciforte a Gardoqui, 30 marzo 1797. Los miembros de la Junta eran Ladrón de Guevara, Hernández de Alba, Herrera y Monterde.

Indias siguió lanzando anatemas contra los repartimientos, y en 1797 exigió que el virrey se ajustara a las ordenanzas, pero el nuevo virrey, Azanza, se negó a mezclarse en el asunto, prometiendo sencillamente corregir los abusos que atrajeran su atención ¹⁷⁴. Después de 1795 las comunidades indígenas se quejaban de los abusos de los repartimientos, y si dicho abuso era grave, el virrey intervenía para castigar a los subdelegados ¹⁷⁵. En 1800 el Consejo de Indias obtuvo otra real cédula que prohibía la práctica, pero de nuevo las autoridades de México se abstuvieron de actuar. Y así quedó el asunto.

VII

Durante los años de 1801 a 1803 el Consejo de Indias se abocó a la elaboración de un nuevo conjunto de ordenanzas para el gobierno de las intendencias de América. Se reunió una extensa documentación relativa a las diversas controversias ocasionadas por esta gran reforma, que consistía de dieciséis voluminosos legajos. Pero la opinión de la que más caso hicieron los miembros del Consejo fue la del virrey segundo conde de Revillagigedo, ya para entonces difunto. La mayoría de las reformas importantes que se introdujeron en el nuevo código de 1803 eran derivaciones de su largo informe sobre el tema, escrito en 1791 ¹⁷⁶. En el Consejo de Indias, fue Jorge de Escobedo, el successor de Areche como visitador general del Perú, quien condujo las discusiones y quien hizo los comentarios más incisivos. Comenzó el debate con la observación de que «las intendencias han sido un puro efecto del conocimiento de los males y desórdenes de América y la necesidad y deseos de su reforma». Aceptado este hecho, la abolición era impensable.

De todas maneras, admitía que el nuevo sistema no había hecho realidad en ningún sentido las esperanzas de quienes lo propusieron. Su fracaso era especialmente evidente en la esfera del gobierno local, y sobre ello estaba de acuerdo con Revillagigedo en la absoluta necesidad de pagar a los magistrados de distrito un salario suficiente. Declaró que si los intendentes «si no han producido los favorables efectos que se esperaban era por no haberse arreglado el punto

¹⁷⁴ AGI, México 1890, Azanza a Caballero, 27 julio 1799.

¹⁷⁵ AGN, Civil 161/1. Véase la protesta del poblado de San Raymundo Jalpa.

¹⁷⁶ Navarro García, *Intendencias*, pp. 127-34.

de subdelegado y repartimientos», ya que hasta entonces «los subdelegados sólo en el nombre y prohibición de repartos se diferenciaban de los antiguos corregidores o alcaldes mayores» ¹⁷⁷. Hacía suya, entonces, la sugerencia de Revillagigedo (que a su vez había sido de Flon) de que se dividieran las subdelegaciones en tres clases con una escala de salarios y un plan escalafonario de ascensos, creando así un grupo permanente de administradores locales relativamente bien pagados. Los repartimientos debían ser, una vez más, prohibidos terminantemente. De este modo, las ordenanzas de 1803 eliminaron el defecto central de que adolecía el plan original de gobierno de Gálvez, que Bucareli ya había criticado durante la década de 1770-80. Porque la transformación de los subdelegados en magistrados que sólo de nombre eran diferentes de los alcaldes mayores, fue un resultado directo de la tentativa de Gálvez de aprovechar a los alcaldes ordinarios, y de su imposibilidad de proporcionar a dichos subdelegados una remuneración adecuada. Su incapacidad de concebir una estructura viable para el gobierno local provocó inevitablemente, como consecuencia lógica, que la Junta Superior decidiera permitirles emprender actividades comerciales. Hasta que no fue rectificado este error, la reforma de intendencias no pudo tener la esperanza de penetrar efectivamente más allá de las capitales provinciales.

Claro que, como el mismo Escobedo admitió, muy poco se había hecho para ayudar a los indígenas, a pesar del hecho de que para Campillo, la primera responsabilidad del intendente debía haber sido incorporarlos a la sociedad. Pero además, Gálvez seguramente había usado el asunto de los indígenas como pretexto para difamar al sistema antiguo y para promover la causa de su reforma. Escobedo, sin ofrecer ninguna solución, ponía el asunto en términos justos al afirmar que el problema «se reducen a buscar y proponer medios con que estimular los indios al trabajo y socorrerles sin violencias y por otra mano que los de sus mismos jueces». No obstante, fue el fiscal, Ramón de Posada, quien mejor expresó la razón por la que la controversia de los repartimientos había provocado tanta irritación y aflicción. Admitió francamente que, a pesar de la protección y las leyes de los reyes de España, los indígenas habían sido oprimidos durante casi tres siglos, y ahora

¹⁷⁷ AGI, Lima 1119, declaración de Escobedo, 23 noviembre 1801.

se les hacía víctimas de una nueva indignidad: «Tal ha sido la desgracia de los indios en aquellos tiempos, en que no habían desaparecido aún los monumentos de su civilidad, mayor que la de los egipcios, griegos y romanos en algunas de sus conocidas épocas, ya se defendía que su incapacidad los hacía esclavos por naturaleza». ¹⁷⁸

En fin de cuentas, muy poco de esta discusión tan prolongada tuvo algún efecto. A causa de un capricho inexplicable de Manuel de Godoy, el principal ministro de Carlos IV, las nuevas ordenanzas nunca fueron promulgadas. Debemos, entonces, buscar en México los datos que nos permitan hacer una evaluación final del sistema de intendencias. Y allí, como antes, la Junta Superior continuó teniendo una notable libertad de acción. En 1801 los mineros mexicanos productores de plata, al ver declinar su producción a causa del bloqueo naval inglés, clamaban porque se les aligerara la carga fiscal. El superintendente de la Casa de Moneda, el Tribunal de Minas, la Real Hacienda central y el Tribunal de Cuentas, recomendaron todos alguna medida de auxilio. El virrey Félix Berenguer de Marquina (1800-2) y el fiscal, Lorenzo Hernández de Alba, se opusieron a cualquier reducción porque la Corona, en guerra con la Gran Bretaña, necesitaba hasta el último peso que pudiera obtener mediante los impuestos. Sin embargo, la Junta Superior, después de que los mineros le aplicaron una fuerte presión, cedió y otorgó una reducción de impuestos del 50 por 100 sobre toda la plata que fuera presentada a la Real Hacienda, concesión que debía estar en vigor hasta que llegara mercurio a Veracruz. Esta rebaja, que duró 5 meses, costó a la Corona más de medio millón de pesos que no percibió ¹⁷⁹.

Los miembros de la Junta que estuvieron presentes al tomarse esta decisión fueron el regente, Baltasar Ladrón de Guevara, el fiscal, Hernández de Alba, dos contadores del Tribunal de Cuentas, llamados Fernando de Herrera y Pedro María de Monterde, y el tesorero de la Caja Central, José de Villosola. El regente y Monterde eran, por supuesto, criollos que habían pasado su vida en el real servicio. Un aspecto interesante de la composición de la Junta en

¹⁷⁸ AGI, Lima 1119, declaración de Posada, 6 marzo 1801.

¹⁷⁹ Véase más adelante el capítulo sobre «El Tribunal de Minería»; AGI, México 1608, Marquina a Soler, 26 febrero 1802.

aquella época es que el contador de Real Hacienda, José María Lasso Nacarino, natural de Veracruz, estaba ausente. Era primo de Monterde, y el virrey, pensando que era peligroso que tanto el Tribunal de Cuentas como la Tesorería Central estuvieran representados por miembros de la misma familia, les prohibió que asistieran juntos a las sesiones ¹⁸⁰.

Como era de esperarse, el Ministro de Hacienda censuró fuertemente tanto al virrey como a la Junta Superior por su violación de las prerrogativas reales, advirtiéndoles que «por ningún caso procedan a conceder semejante gracia, cuya dispensación es propia y privativa de la autoridad soberana» ¹⁸¹. Dándose cuenta, a pesar de todo, de la imposibilidad de recobrar los perdidos impuestos, dio a la rebaja el carácter de franco regalo a la minería. Este caso demostró claramente tanto el amplio poder de la Junta Superior, como la confianza que sentían sus miembros, como siempre criollos en su mayor parte, para no hacer caso de las opiniones y de la política emanadas de los ministerios madrileños.

Es mejor que dejemos la última palabra sobre el sistema de intendencias a Manuel de Flon, que en 1803 hizo unas francas reflexiones sobre el pasado y expresó ciertas esperanzas de que sus propuestas fueran útiles en el futuro. Sus logros principales, afirmó, se referían casi enteramente a la ciudad de Puebla. Allí había podido eliminar los desórdenes y motines públicos hasta entonces tan comunes. Había construido un granero municipal y una prisión, había limpiado la ciudad de modo que «el aspecto y comodidad de las calles, sus banquetas y empedrados, todo es diferente del que tenían a mi ingreso». En cuanto a la provincia, Flon confesaba que no se había molestado en hacer una gira de inspección general, como lo exigían las ordenanzas, porque ¿de qué habría servido? Todos sus informes fueron invariablemente archivados. «Pero nada hemos visto practicar, sin duda por falta de arbitrios» ¹⁸². Del mismo modo, no trató de impedir a sus subdelegados que emprendieran actividades comerciales, siempre que no obli-

¹⁸⁰ AGI, México 1614, Márquina a Soler, 27 diciembre 1802. En relación a Lasso véase AGI, México 1975, Iturrigaray a Soler, 27 abril 1808. Más tarde fue intendente de Oaxaca. Véase también Lohman Villena, *Los americanos*, I, 75.

¹⁸¹ AGI, México 1786, Consejo de Indias, 2 julio 1803.

¹⁸² AGN, Intendencias 64, Flon a Iturrigaray, 2 julio 1803.

que a sus sujetos a comprar artículos por la fuerza. Las injusticias eran mucho más fáciles de corregir ya que los indígenas podían quejarse ante los intendentes, mientras que antes de 1786, únicamente la Audiencia de México podía ofrecerles reparación a sus daños. También observó que los subdelegados, como ellos aunque más autorizados en lo sustancial que los *alcaldes mayores* no tienen la representación ni sostenimientos políticos con que estos podían sofocar las quejas de los oprimidos, como los indios no se hallen ya en estado de dejarse oprimir»¹⁸³.

Por otra parte, Flon atacó el poder y riqueza de la Iglesia, criticando fuertemente «la prepotencia de los eclesiásticos y abatimiento a que tienen reducida la real jurisdicción»¹⁸⁴. Severamente censuró el control clerical de la agricultura en Puebla: «Los poseedores de haciendas no son otra cosa que unos verdaderos contribuyentes a manos muertas de un cinco por ciento al año de todo o casi todo su valor que generalmente reconocen a favor de ellas.» Sugería que se dividieran las grandes propiedades entre los indígenas, porque «se verificaría el axioma... que más rinde una heredad pequeña bien mantenida, que un campo grande mal cultivado»¹⁸⁵.

En general, Flon estuvo de acuerdo con Escobedo en que las intendencias, aunque benéficas para el reino, absolutamente no habían respondido a las altas esperanzas depositadas en ellas cuando se establecieron. Las razones que daba, sin embargo, eran muy divergentes de aquellas a las que el antiguo visitador general atribuía el fracaso. Flon se lamentaba de que «la real ordenanza ha quedado no más el esqueleto y una ligera sombra de lo que los intendentes debían ser conforme a ella». Las autoridades de la ciudad de México se han unido para suspender sus artículos fundamentales y para minar el poder de los intendentes, de modo que estos magistrados se han convertido únicamente en «más que unos estafernos o meros conduitos de los tribunales superiores». Su propia batalla por la autonomía hacía mucho que la había perdido, y entre sus enemigos, Flon incluía al virrey. Contrariamente a la acostumbrada lamentación virreinal de que el cargo había perdido su antigua posición, Flon admitía que «desde que la superintendencia de Real Hacienda se reunió en el mando de los Exmos. Señores Virreyes

¹⁸³ AGN, Civil 189-1, Flon a Iturrigaray, 6 diciembre 1806.

¹⁸⁴ AGI, México 1976, Flon a Porlier, 18 julio 1789.

¹⁸⁵ AGN, Intendencias 48, Flon a Revillagigedo, 12 mayo 1790.

su autoridad... es mucho mayor que la de sus antecesores antes del establecimiento de las intendencias y casi sin límites». Hasta este grado habían sido neutralizados los planes de Gálvez ¹⁸⁶. Si además agregamos el vasto poder que el virrey tenía en su calidad de comandante en jefe de la milicia y del pequeño ejército regular, resulta evidente la verdad de lo declarado por Flon. Además, a partir de 1787, el virrey, en calidad de superintendente ejerció la supervisión directa del monopolio del mercurio, control que José de Iturrigaray usó para su provecho personal haciendo asignaciones privadas a ciertos mineros particulares.

Para poner remedio a esta peligrosa concentración de autoridad, Flon, en términos que recuerdan fuertemente la propuesta original de Gálvez, aconsejaba una descentralización radical. Recomendaba abiertamente «la extinción del virreynato, la creación de Capitanías Generales en el reino y la erección de pequeñas audiencias en las capitales de Provincias». Del mismo modo, cada intendencia debía poseer sus propios directores del servicio de recaudación y del monopolio del tabaco, y un Tribunal de Cuentas. En total, sugería que se nombraran cinco capitanes generales, que residirían en Oaxaca, Puebla, México, Valladolid y Guadalajara. (Yucatán y el norte, naturalmente, ya tenían funcionarios de esta clase.) Sólo entonces «esta capital dejaría de ser esta capital la madrastra de todas las ciudades que la están sujetas». Además, la división de la autoridad ayudaría a librar al reino de los peligros de una rebelión. «Pues aunque México, u otra de esas provincias se sublevara, las otras no la siguieran por independientes y no subyugadas como en la actualidad se miran» ¹⁸⁷. Es claro que todo esto no representaba más que las ideas fantásticas de un gobernador de provincia, resentido de los ataques de la burocracia central. Y sin embargo, a pesar de sus móviles dudosos, las propuestas tienen un tono sumamente parecido a las que presentaron los federalistas después de la Independencia. Entonces, aquí en este contexto improbable, encontramos la prueba de la continuidad básica que existió entre los principios del estado borbónico y sus herederos seculares, es decir, los liberales mexicanos de principios del siglo XIX.

¹⁸⁶ AGN, Intendencias 64, Flon a Iturrigaray, 2 julio 1803.

¹⁸⁷ AGI, Indiferente General 1713, Flon a Soler, 21 diciembre 1801.

SEGUNDA PARTE

MINEROS Y COMERCIANTES

Como la plata se prueba en la fragua, y el oro en el crisol; así pone a prueba el Señor los corazones, con la tribulación.

Prov., xvii, 3

CAPÍTULO I

COMERCIANTES

I

En 1599 Gonzalo Gómez de Cervantes comentó que la mayoría de los españoles de México preferían poner una tiendita o un puesto en la calle, a dedicarse a la agricultura. La razón es, declaraba, que «no hay en qué emplear sus haciendas, que sea cosa permanente, ni se puede emplear en más que mercaderías»¹. Un siglo más tarde, el virrey Linares (1711-16) afirmó que en América todos deseaban hacerse ricos «y para serlo quieren todos ser mercaderes»². Los célebres viajeros Jorge Juan y Antonio de Ulloa atribuyeron un significado económico más profundo a estas declaraciones: «el comercio, único ejercicio que hay en las indias capaz de mantener los caudales sin decaimiento»³. Ahora bien, por comercio estos observadores entendían la importación de mercancías del otro lado de los océanos, de Sevilla y Manila, y no el intercambio de productos locales. Las grandes fortunas a que se referían, estaban basadas en el comercio internacional y no en el interior, porque hasta fines de la época colonial, las clases acomodadas de la Nueva España siguieron exigiendo grandes cantidades de textiles, hierro y acero de Europa, vino, aceitunas y aguardiente de España, cacao de Caracas, cera de La Habana, sedas chinas y calicó hindú. A cambio de todo ello México exportaba monedas de plata, cochinilla y, después de 1790, un poco de azúcar. No existen cifras exactas anteriores a los años 1796-1820, relativas al volumen y valor del comercio exterior del país, y las de los años mencionados son inexactas por la alta incidencia de contrabando no registrado. El esquema de la tabla 5 puede servirnos de guía⁴.

¹ Gómez de Cervantes, *La vida económica*, pp. 94, 132.

² BN (Madrid) MSS 2929, f. 69.

³ Jorge Juan y Antonio de Ulloa, *Noticias secretas de América* (2 vols.; Madrid, 1918), II, 96.

⁴ Lerdo de Tejada, *Comercio exterior*, apéndices 3-7, 54.

TABLA 5

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES DE LA NUEVA ESPAÑA
(1761-75, VIA VERACRUZ)

<i>Flota de regreso</i>	<i>Efectivo</i>	<i>Cochinilla (en pesos)</i>	<i>Misc.</i>	<i>Total</i>
1761	5 295 560	1 541 728	622 515	7 459 803
1763	12 532 722	1 892 455	777 619	15 202 796
1766	13 264 518	1 457 943	899 823	15 622 284
1770	13 652 666	1 979 952	459 704	16 092 322
1775	6 392 401	2 997 253	152 612	9 542 266

1796-1820: Comercio exterior vía Veracruz

	<i>Pesos</i>
Promedio anual de importaciones	10 364 238
Promedio anual de exportaciones	11 141 372

1796-1820: Composición de las exportaciones

	<i>%</i>
Metal precioso	74.9
Cochinilla	12.4
Azúcar	2.9
Miscelánea	9.8
	100.0

Quinquenio 1802-6: Composición de las importaciones

	<i>%</i>
Textiles	64.2
Vino y aguardiente	10.4
Cacao	5.6
Papel	5.0
Hierro y acero	4.0
Miscelánea	10.8
	100.0

En términos actuales, el comercio de la Nueva España era esencialmente pasivo, es decir, que los artículos importados se compraban con moneda y no mediante la venta de productos domésticos. Además, su comercio era también pasivo en el sentido de que el intercambio transatlántico era dirigido por las casas mercantiles de la Península.

la, especialmente las de Cádiz, y, en el caso del contrabando, por los *tratables* ingleses de Jamaica. Los mercaderes de la Nueva España recibían la mercancía, que pagaban en efectivo; su función principal era la distribución interna de estas mercaderías importadas.

En gran medida, esta pasividad se originaba por el sistema colonial de comercio impuesto por la metrópoli. Desde la década de 1550 a 1560, hasta el año de 1778, todo el intercambio comercial entre España y México se llevó a cabo mediante flotas despachadas periódicamente desde un solo puerto peninsular, que primero fue Sevilla y más tarde Cádiz. En un principio estas flotas zarpaban anualmente, pero ya en el siglo XVIII eran frecuentes los retrasos hasta de cuatro años entre una y otra flota, y entre los años de 1739 y 1757 este sistema fue sustituido temporalmente por la concesión de licencias a barcos individuales para que zarparan de Cádiz⁵. El comercio con el Oriente estaba regido por un sistema similar: una vez al año un solo galeón zarpaba de Manila rumbo a Acapulco. El sistema de convoyes, que se introdujeron para proteger a los barcos del tesoro de las Indias de los ataques de piratas ingleses y holandeses, fue sostenido en épocas posteriores por los intereses de los comerciantes de Cádiz y de México, que obtenían grandes ganancias por la escasez y consecuentes altos precios que causaba dicho sistema. Pero si bien los convoyes producían ganancias para los intermediarios, fueron muy perjudiciales tanto para los productores españoles, que tenían que enviar sus mercancías a Cádiz, como para los consumidores americanos, que eran abastecidos mal y a precios altos.

Además, ya en el siglo XVIII eran los comerciantes de México y no los de Cádiz, los que tenían mayores ganancias. A partir de 1729 toda la mercancía, después de ser desembarcada, era enviada a la feria comercial de Jalapa, que tenía lugar en esa ciudad situada en las montañas que dominan el puerto de Veracruz. No se permitía a los comerciantes de Cádiz que pasaran de ese lugar. En la feria, se les acercaban los comerciantes más ricos de la ciudad de México y varios *comisionistas provincianos*, y es evidente que este arreglo favorecía a los comerciantes locales, porque tenían al tiempo de su lado ya que no debían sufragar los gastos de tener un barco

⁵ Véase en Lerdo de Tejada, *Comercio exterior*, apéndice 1-2, una lista de estos convoyes.

en el puerto ni que pagar costos de almacenamiento. Así, los españoles tenían prisa en vender para evitar pérdidas, mientras que los naturales no estaban obligados a comprar. Entonces, en realidad, como observó algún contemporáneo, los comerciantes mexicanos eran los que «dar la ley en los precios»⁶. El exportador gaditano o aceptaba estos precios o dejaba sus mercaderías almacenadas en Jalapa, por no haberlas podido vender. La única manera como podía ejercer una represalia era demorando la salida de la siguiente flota, limitando su cargamento para así obtener, mediante una escasez provocada, un aumento en los precios. Sin embargo, tales recursos fomentaban el contrabando procedente de Jamaica, de manera que cuando los convoyes llegaban, era probable que el mercado ya estuviera saturado de artículos de contrabando.

No obstante, aunque el intercambio en Jalapa era favorable para los comerciantes residentes en la colonia, tenía este efecto únicamente sobre los que poseían suficiente efectivo para comprar grandes cantidades de mercancías. Porque los exportadores, remiando que sus mercaderías más valiosas se vendieran inmediatamente, y que las demás tardaran mucho en venderse o no hubiera quien las quisiera, generalmente exigían la compra de lotes completos y pago inmediato⁷. Es obvio que esta condición eliminaba como posibles compradores a la mayoría de los comerciantes provincianos y menores, quedando así el mercado dominado en su mayor parte por un pequeño grupo de comerciantes ricos de la capital que eran llamados almaceneros. Cada una de estas personas llegaba a la feria llevando en los bolsillos entre 2 y cuatrocientos mil pesos en efectivo, cantidad suficiente para adquirir la existencia necesaria para abastecer a la colonia hasta la llegada de la siguiente flota. Entonces, en Jalapa misma, revendían parte de lo comprado a los comerciantes de provincia que o no disponían de suficiente efectivo, o solo deseaban comprar cantidades pequeñas, con un crédito de las dos terceras partes de su valor⁸. Después distribuían otra parte de lo adquirido en las ferias comerciales nortañas de San Juan de los Lagos y de Saltillo,

⁶ BRP, MSS 2815, Miscelánea de Ayala, 278/1, f. 119.

⁷ José Joaquín Real Díaz, *Las ferias de Jalapa* (Sevilla, 1959), pp. 10-25, 52. *El comercio de España y las Indias* (México, 1958), pp. 22-3.

⁸ Eduardo Arcila Farías, *El siglo ilustrado en América: reformas económicas del siglo XVIII en Nueva España* (Caracas, 1955), pp. 75-7.

almacenando el resto en la ciudad de México. De cuando en cuando hacían ventas a crédito a comerciantes residentes en todas partes de la colonia. Estos mismos almaceneros, eran quienes enviaban sus agentes a Acapulco para comprar el cargamento traído por el galeón de Manila.

Las grandes casas importadoras no se limitaban al comercio al mayoreo. Cada almacenero de la ciudad de México tenía una tienda en la capital para ventas directas al público. Un crítico contemporáneo observó: «Estos hombres además de vender en grueso en sus almacenes todos los géneros de Europa y China, tienen una tienda de mercaderías en la que dan salida a sus géneros por menor.» Tampoco tenían empacho en poseer tiendas «mestizas» más pequeñas, en las que vendían azúcar, cacao, aguardiente, verduras, velas y jabón⁹. Los almaceneros vendían cualquier cosa que pudiera producirles utilidad.

Muchos mercaderes de la ciudad de México, en busca de mercados directos, establecieron tiendas en las provincias, especialmente en los campamentos y poblados mineros del norte, donde los trabajadores de las minas, grupo conocido por sus altos salarios y por su tendencia al despilfarro, constituían un mercado lucrativo para los artículos de lujo importados¹⁰. Además, la minería misma requería una gran variedad de materias primas, entre ellas hierro y acero, y una vez establecido un mercado de este tipo, se recurría al comerciante para que financiara las empresas productivas. Pocos dueños de minas o de plantas de beneficio disponían de efectivo para pagar al contado los aprovisionamientos necesarios, y a muchos les faltaba dinero para pagar los salarios de sus trabajadores. Así pues, las tiendas en el norte tenían ante sí la amenaza de perder su mercado si la minería local fracasaba, por lo cual hacían préstamos en efectivo y vendían artículos a crédito por lo menos a los que se ocupaban del beneficio de minerales. Por ejemplo, en Sierra de Pinos, pequeño poblado situado en lo que hoy es el estado de San Luis Potosí, el beneficio local de minerales dependía de dos casas mercantiles de la capital, las de José de Arizmendi y José Andrés González, que tenían ambas sucursales en el pueblo y hacían préstamos en

⁹ AGI, México, 1858, descripción anónima.

¹⁰ West, *The Mining Community*, pp. 83-4.

efectivo a los refinadores para que compraran mineral en la región circundante. Arizmendi ejerció estas actividades durante treinta años. En la década que comenzó en 1780, distribuía 150 000 pesos cada cuatro meses a cambio de plata en barras. También tenía la concesión de recaudar los impuestos locales, a cambio del pago de una cifra anual fija a la Real Hacienda de la ciudad de México. Sus ganancias se derivaban tanto del comercio ordinario como de las operaciones financieras; el poblado, aunque pequeño, compraba alimentos y mercancías por un valor de un millón y medio de pesos al año ¹¹. Una dependencia semejante en dos o tres comerciantes de fuera era sumamente común en los campamentos mineros de menor importancia. Ciudades tales como Zacatecas y Guanajuato tenían sus propios comerciantes en plata.

Los almaceneros de México encontraron otro mercado para sus artículos en el sur indígena. En esa región se acostumbraba que los magistrados reales, es decir, los alcaldes mayores, se dedicaran al comercio. Distribuían a crédito grandes cantidades de mulas, toros y telas, cobrando a sus subordinados precios considerablemente mayores de los normales, a cambio del servicio. Además, prestaban dinero en efectivo, con seis meses de anticipación, sobre las cosechas de algodón, cacao y especialmente cochinilla. Para financiar estas operaciones, los alcaldes mayores —que en gran parte eran militares pobres asignados a las fuerzas de reserva— necesitaban tanto capital como crédito. Algunos los conseguían de los fondos de caridad de la Iglesia, otros de sus amigos, pero la mayoría recurrían a las grandes casas mercantiles de la ciudad de México o a los comerciantes ricos de Oaxaca y Puebla.

Así pues, el capital mercantil financiaba en gran parte la producción de la cochinilla, que era el segundo producto de exportación de la Nueva España, el cual se convirtió en artículo especialmente valioso en el decenio de 1770 a 1780, cuando su precio se elevó de 15 a más de 30 pesos la libra ¹². En algunas ocasiones se realizaron operaciones a escala muy grande. En tres años, de 1781 a 1784, el alcalde mayor de Jicayán, distrito costero, distribuyó 400 000 pesos en efectivo. Mantenía varias tiendas en las cuales los mestizos

¹¹ AGI, México, 1540, Revillagigedo a Lerena, 30 enero 1791; AGI, México, 1377, Bucarelli a Gálvez, 26 abril 1777.

¹² Lerdo de Tejada, *Comercio exterior, apéndice 55*.

y mulatos cambiaban el algodón que producían por otras mercancías. Los indígenas de la provincia le proporcionaban cochinilla. Enviaba el algodón a Puebla y la cochinilla a Veracruz. Las utilidades de la empresa, que se repartían entre el magistrado y su socio capitalista, el comerciante Pedro Alonso de Alles de la ciudad de México, se calculaban en el 20 por 100. Alles tenía hecho un arreglo parecido con el alcalde mayor de Tabasco, que le enviaba cacao ¹³.

La naturaleza exacta de estos contratos puede verse en el instrumento elaborado en 1782 por el alcalde mayor de Chichicapán y Zimatlán, distrito cercano a Oaxaca, y Manuel Ramón de Goya, mercader de la ciudad de México ¹⁴. Goya se comprometió a pagar al alcalde un salario anual de 1 500 pesos, a proporcionarle inmediatamente en Oaxaca de 60 000 a 70 000 pesos y otros 30 000 al año siguiente, y a pagar a la Real Hacienda central una suma equivalente al tributo indígena recaudado por el alcalde mayor. A cambio de todo esto, Goya nombró al lugarteniente principal de justicia encargado de administrar las tiendas del magistrado, adquiriendo así acceso a un mercado cautivo. Toda la cochinilla debía ser enviada directamente a su agente en Veracruz. Posiblemente el dinero del tributo se usaba en el lugar para financiar la producción de cochinilla. Las utilidades debían ser depositadas en manos del comerciante, y cuando pasaran cinco años serían divididas por partes iguales entre los dos socios. Por otra parte, todos los asuntos judiciales y las comisiones que de ellos se derivaban, quedaban estrictamente reservados para el alcalde mayor; el lugarteniente general, a pesar de su título, tenía prohibido entremeterse en tales asuntos. Claro que si los indígenas no hacían puntualmente sus pagos o no entregaban su producción, por supuesto que la autoridad del magistrado podía invocarse para castigarlos o encarcelarlos; éste era, en verdad, el punto básico que *hacía interesante el arreglo*. Podemos observar que Goya también apoyaba financieramente de este modo al alcalde mayor de Villa Alta, rico distrito de Oaxaca famoso por sus telas de algodón ¹⁵.

¹³ Parece que Alles era especialista en esta clase de negocios. Véase AGI, México, 1769, petición presentada por Alles, 27 septiembre 1778; AGI, México, 1416, alcalde mayor José González de Mesa al Virrey, 20 octubre 1784; AGI, México, 1400, Mayorga a Gálvez, 29 mayo 1782.

¹⁴ BN (México) MSS 1374, ff. 300-7.

¹⁵ AGI, México, 1400, Mayorga a Gálvez, 29 mayo 1782.

No obstante, aunque la financiación de empresas productivas era hasta cierto punto necesaria, el comerciante hábil procuraba no participar demasiado en la producción, prefiriendo dar crédito a plazo corto y no hacer inversiones fijas. En un país en donde era crónica la escasez tanto de dinero en efectivo como de capital, la fuerza de salvación del comerciante estaba en su liquidez, en su disponibilidad inmediata de contante. Esto era especialmente cierto de los comerciantes ricos de la capital que acumulaban grandes tesoros en pesos de plata para poder comprar a la llegada de la siguiente flota. Naturalmente que esta acumulación de moneda y su subsecuente exportación agravaban la escasez de moneda sólida en la colonia. El problema era todavía más grave porque no existían billetes de banco en la Nueva España, sino únicamente pesos, reales y medios reales de plata. Se acuñaba una cierta cantidad de oro, pero raramente circulaba. Y en el otro extremo de la escala, la colonia no disponía de moneda oficial circulante de cobre, aunque los comerciantes con frecuencia emitían fichas de ese metal que se aceptaban solo en sus propias tiendas ¹⁶. Así pues, México dependía de la moneda de plata que los principales comerciantes atesoraban con el objeto de exportarla.

El resultado ineludible de esta situación fue que se estableció una dependencia casi universal en el crédito para toda clase de transacciones. El examen de la contabilidad de cualquier comerciante, fuera en pequeño o fuera almacenero, revela inmediatamente que la mayor parte de su capital operativo existía en forma de créditos otorgados, llamados dependencias activas, o a otros comerciantes o al público. Igualmente importante es el hecho de que el método más común de pago entre comerciantes era la letra de cambio, preferencia que se veía acentuada, naturalmente por la abundancia de bandoleros en el territorio de Nueva España. Hacia 1807 el obispo electo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, afirmó que dos terceras partes de las transacciones comerciales se pagaban con documentos y no en efectivo. Las letras de cambio que los mineros giraban contra sus corresponsales en la ciudad de México eran especialmente aceptables, y llegaban a cambiar de manos diez o doce veces antes de ser finalmente redimidas tres o cuatro meses después de su fe-

¹⁶ AGI, Estado 42/4, informe del Consulado al Virrey, sin fecha, h. 1770.

cha ¹⁷. Los recaudadores fiscales, al igual que los comerciantes, usaban tales documentos. Por ejemplo, tanto los alcaldes mayores como los recaudadores de alcabalas, obtenían siempre que podían letras de cambio de los comerciantes locales giradas contra comerciantes de la ciudad de México, que entonces depositaban una suma equivalente en la Tesorería central de México ¹⁸. De esta manera el dinero recaudado como impuestos volvía a entrar al círculo local del comercio.

Pero ¿de qué naturaleza era la letra de cambio en la Nueva España? El consulado de la ciudad de México, en un informe que envió al virrey en 1796, discutía sus características. Explicaba que la *libranza*, como se le llamaba entonces, sólo se utilizaba para el comercio interno; con frecuencia se giraban por sumas muy pequeñas, y a menudo servía como una forma de moneda circulante ¹⁹. Así pues, no tenía la formalidad que tiene el instrumento internacional. Por otro lado, parece que era una verdadera letra de cambio, en el sentido de que comprometía a los tres participantes —el girador del documento, llamado librante, el beneficiario, llamado libratario, y el pagador, llamado mandatario. Algunos de estos documentos, como en Europa, llevaban fecha límite para su liquidación, pero según el Consulado, la mayoría no se regía por otra condición que la cantidad que debía pagar el mandatario. El beneficiario inicial, mediante su sola firma, a menudo cedía el documento a una cuarta persona, y la letra seguía circulando así prácticamente como dinero, hasta que al fin era presentada para su liquidación, inesperadamente, al mandatario. En tales circunstancias, el fraude era muy fácil, y el mandatario con frecuencia se negaba a pagar hasta no haber recibido la confirmación del librante original.

El siguiente caso nos ilustra cómo se usaban estas libranzas. En 1801 Diego Rul, rico minero y terrateniente de Guanajuato, vendió en Valladolid 2 000 ovejas a 23 reales por cabeza ²⁰. Remitió el

¹⁷ Mora, *Obras sueltas*, p. 235.

¹⁸ AGI, México, 2811, Administrador de alcabalas de Sierra de Pinos a la Caja Real de Zacatecas, 8 octubre 1796; AGI, México, 2255, informe de Pedro de Aparici, 2 febrero 1801; BN (México) MSS 1385, informe de Juan de la Riva al Virrey, 29 febrero 1788, ff. 261-3.

¹⁹ AGN, Consulado 44/4, informe del Consulado al Virrey, 2 mayo 1796.

²⁰ FV, 3, Diego Rul a Alonso Candamo, 5 enero 1801.

dinero al administrador de su hacienda de beneficio en Guanajuato mediante tres libranzas que adquirió.

1. Por 2 000 pesos, girada el 12 de noviembre de 1800, número 32 por Bernabé de Bustamante contra Antonio Uscola, endosada por Francisco Sánchez del Villar.

2. Por 3 610 pesos, girada el 22 de diciembre de 1800, por Miguel de la Parra contra Domingo de Ugarte y Acha, endosada por los jueces hacedores de la diócesis de Valladolid (encargados de los diezmos).

3. Por 122 pesos, girada el 22 de diciembre de 1800 por Pedro Telmo Primo contra Pedro Andrés Terreyro, endosada por José Quirino Marmolejo.

TOTAL, 5 732 pesos.

Rul endosó estas letras a favor de su administrador; le escribió de Valladolid el 5 de enero de 1801, lo que demuestra que las tres libranzas eran de emisión reciente. Tanto Bustamante como Telmo Primo vivían en Guanajuato y Rul los conocía personalmente.

En parte, la libranza ocupaba el vacío que dejaba la exportación de plata, pero su empleo era muy amplio porque lo propiciaba la naturaleza centralizada del sistema comercial y financiero de la Nueva España. De la ciudad de México partían las mercancías vendidas a crédito, y a ella llegaban toda la plata para su acuñación, la mayoría de los impuestos y las libranzas para el pago de mercancías. Mucha plata, una vez acuñada, no salía nunca de la capital, sino que casi inmediatamente entraba a las arcas de los almaceneros para esperar el momento de ser enviada al extranjero.

Pero, ¿cuál era el origen de las grandes casas mercantiles de México? ¿De dónde habían obtenido su capital? ¿Qué grado de permanencia como instituciones tenían? En primer lugar, la Nueva España no poseía ninguna de las grandes instituciones corporativas comerciales y financieras que se habían desarrollado en Europa. Por el contrario, la figura típica del mundo de los negocios en México era el comerciante individual. Hasta las sociedades, diferenciándolas de los arreglos de comisiones temporales, eran raras, y la práctica de *organizar empresas con varios socios* era casi desconocida. El comerciante de la Nueva España comenzaba su carrera detrás de

un mostrador, y la mayor parte de ellos manejaban una tienda durante toda su vida. La habilidad mercantil era esencialmente individual, y el éxito de una persona dependía principalmente del grado de confianza que era capaz de inspirar a los demás comerciantes. Se acumulaban fortunas con la inteligencia y perseverancia de toda una vida, y el capital de operación se aumentaba reinvertiendo las utilidades y procurándose crédito externo y depósitos. Ciertas instituciones eclesiásticas y algunas viudas o funcionarios ricos confiaban sus fondos a algún comerciante, generalmente a un interés del 5 por 100. Es muy natural que estos depósitos solo se hicieran en casas mercantiles bien establecidas, y no a comerciantes jóvenes y principiantes. Además, tenemos la impresión de que dichos depósitos eran menos importantes que los créditos a corto plazo concedidos por otros comerciantes. El porcentaje de utilidad que se obtenía en el comercio no era suficientemente alto como para permitir que dependiera de depósitos que costaban un interés del 5 por 100.

Si bien el ahorro y el talento mercantil podían crear juntos una fortuna, la muerte o una esposa muy fértil podían destruirla. En la Nueva España tenían vigencia las leyes castellanas sobre herencias, las cuales establecían que todo el capital adquirido durante el matrimonio pertenecía por partes iguales a los cónyuges, de manera que a la muerte de uno de ellos, el que sobrevivía tenía derecho únicamente a la mitad de los bienes ²¹. La parte correspondiente al difunto se dividía entonces entre sus hijos en partes iguales, tanto hombres como mujeres. La misma suerte aguardaba a la otra mitad correspondiente al supérstite. Esta igualitaria distribución entre los herederos estaba modificada por dos excepciones. Una tercera parte de los bienes de una persona, llamada la mejora, podía ser segregada del resto para dejársela al hijo predilecto, y del mismo modo, una quinta parte, llamada precisamente *quinta*, podía ser legada libremente a otras personas o para obras caritativas. Es claro que estas leyes propiciaban la disolución continua del capital acumulado.

Así pues, el comerciante triunfado tenía una gran probabilidad de que su negocio desapareciera a su muerte, de que se subastaran

²¹ Esta descripción está tomada de José María Ors de Capdequí, *Historia de América: instituciones* (Barcelona y Madrid, 1959), pp. 311-12, 320, 324. Las leyes en vigor eran las *Leyes de Toro*, 18, 28, 7. Véase también *Novísima recopilación de las leyes de España* (6 vols.; Madrid, 1805-26), Lib. X, tit. 4, 6, 20.

las mercancías en existencia, y de que lo así obtenido fuera dividido entre su viuda e hijos ²². No podía convertir su empresa en una sociedad con acciones, ni satisfacer a sus herederos con la compra de bonos y acciones que produjeran un interés, porque no existían. ¿Cómo entonces podía evitar la disolución de su fortuna? El modo mejor era retirarse completamente del comercio e invertir todo su capital en tierras. Entonces podía establecer un vínculo, llamado mayorazgo, sobre sus haciendas, el cual, una vez otorgado a alguno de los herederos, se convertía en exención del proceso divisorio acostumbrado. Tal arreglo generalmente era paralelo a la ambición tan común en los mercaderes ricos, de fundar una familia noble. Ni en la Península ni en el Nuevo Mundo fomentaron los comerciantes españoles que sus hijos continuaran sus actividades, sino que por el contrario, si tenían éxito, querían siempre «dar carrera a mis hijos», educándoles para las profesiones y para el servicio del gobierno, en una palabra, para hacerlos señores ²³.

Por otra parte, en muchos casos era provechoso conservar la firma de la familia, porque la suspensión súbita de las operaciones mercantiles o una rápida subasta de las existencias generalmente comportaba pérdidas económicas. Por ello muchos comerciantes se las arreglaban para casar a sus hijas con los jóvenes ayudantes a quienes empleaban para hacerse cargo de sus establecimientos. Estos jóvenes ya eran prácticamente socios porque en general ganaban, como comisión, una cuarta o una tercera parte de las ganancias; a menudo vivían en la casa de su patrón, y en muchos casos eran parientes, más comúnmente sobrinos, del comerciante. ¿Qué mejor método de perpetuar el negocio de la familia que traerse a un sobrino pobre, darle preparación, hacerle socio y luego casarlo con una hija? En cualquier forma, este fue sistema mediante el cual muchas casas

²² Compárese: «Pero la tendencia general era que un negocio se desintegrara en cada generación, principalmente porque sus propiedades y bienes tenían que ser realizados y distribuidos entre un número considerable de hijos.», W. G. Hoskins, «The Elizabethan Merchants of Exeter», en *Elizabethan Government and Society: Essays presented to Sir John Neale*, ed. S. T. Bindoff et al. (Londres, 1961). Véase también Walter E. Minchinton, «The Merchants in England in the Eighteenth Century», en *Explorations in Enterprise*, ed. Hugh G. J. Aitken (Cambridge, Mass., 1965).

²³ James Clayburn La Force, Jr., *The Development of the Spanish Textile Industry 1750-1800* (Berkeley y Los Angeles, 1965), p. 169. Juan López de Cancelada, *El Telégrafo Americano*, 20, 19 febrero 1812, p. 248.

mercantiles de la ciudad de México sobrevivieron a la muerte de su fundador. La verdad es que varias de las firmas más grandes llegaron a serlo gracias a la inteligencia y a la reinversión de por lo menos dos generaciones de comerciantes.

II

El comercio colonial no puede ser comprendido totalmente sin la exposición de la extraña sociología de que dependía gran parte de su estructura. Todas las pruebas de que disponemos indican que generación tras generación, desde la Conquista hasta la Independencia, los inmigrantes españoles dominaron el comercio colonial. La mayoría de los almaceneros de la ciudad de México, muchos comerciantes ricos de las ciudades de provincia y una gran parte de los comerciantes menores, eran todos originarios de la Península. No obstante, la prueba de esta hipótesis es literaria, no estadística: se basa en la serie de relatos de viajeros e historiadores de principios del siglo XIX que tuvieron experiencia personal en la colonia. Pero la casi completa uniformidad de estas fuentes es suficiente para comprobarla, por lo menos mientras no se emprenda una investigación más cuantitativa.

A fines del siglo XVII el viajero italiano Gemelli Carreri, observó que Simón de Haro, Domingo Lorenzana y Diego del Castillo, comerciantes que legaron fortunas de casi un millón de pesos, eran todos españoles peninsulares. Las iglesias y conventos de la ciudad de México, declaró, se construían en gran parte con las donaciones de personas semejantes²⁴. Medio siglo más tarde, poco después de 1760, José de Gálvez dividió a la comunidad mercantil en tres clases: almaceneros, que compraban mercancías directamente de las flotas, los comerciantes de la capital que tenían una tienda, y los distribuidores de telas que las enviaban a provincias²⁵. Y agregó: «casi todos los empleados en estas clases de comercio van de España porque los Criollos no se aplican por lo regular a seguir la mercancía, aunque sus padres hayan vivido en ella». Una situación muy similar prevalecía a fines del siglo. En 1809 Pedro de Fonte, que más tarde fue arzobispo de México, escribió: «El comer-

²⁴ Gemelli Carreri, *Viaje a la Nueva España* (2 vols.; México, 1955), II, 171-3.

²⁵ BRP, MSS 2816, Miscelánea de Ayala 278, f. 119.

cio en general, los ingenios de azúcar, las haciendas más bien cultivadas, las minasen gran parte... se hallen por fortuna en manos de Europeos» ²⁶. De la misma manera Lorenzo de Zavala, que era criollo de Yucatán, admitió que el comercio del país estaba en gran parte dominado por los inmigrantes, que eran gente «se ocupaban únicamente en acumular riquezas en la oscuridad de sus sucios almacenes» ²⁷. Y finalmente podemos citar a un observador inglés, el capitán Basil Hall, que visitó México en 1822: «Los comerciantes españoles, pues, que son los mayores y casi los únicos capitalistas... ya eran dueños del mercado mediante la posesión de la mayor parte del capital comercial activo» ²⁸.

Puede aplicarse una pequeña prueba a estas generalizaciones: durante el siglo XVIII por lo menos diez comerciantes compraron o se les otorgaron títulos de nobleza. Todos eran peninsulares ²⁹. (Véase tabla 6.)

TABLA 6

LA NOBLEZA MERCANTIL DE LA NUEVA ESPAÑA 1700-1812
(CREACIONES)

Título	Año de creación	Lugar de nacimiento
Marqués de Altamira	1704	Santander
Conde de San Bartolomé de Jala	1749	Logroño
Marqués de Rivascacho	1764	Santander
Marqués de Castañiza	1772	Vizcaya
Conde de la Torre de Cossío	1773	Santander
Conde de Rábago	1774	Castilla
Marqués de Santa Cruz de Inguanzo	1792	Asturias
Conde de Heras y Soto	1811	Santander
Conde de Agreda	1811	Asturias (?)
Conde de Bassoco	1811	Vizcaya

²⁶ AGI, México, 1895, Pedro de Fonte a Benito Hermida, 24 abril 1809.

²⁷ Lorenzo de Zavala, *Ensayo histórico de las revoluciones de Nueva España* (2 vols., París y México, 1831), I, 34.

²⁸ Basil Hall, *Extracts from a Journal written on the coasts of Chili, Peru and Mexico in the years 1820, 1821, 1822* (2 vols.; Edinburgo, 1824), II, 189.

²⁹ Esta lista ha sido elaborada de acuerdo con los datos de Ricardo Ortega y Pérez Gallardo, *Historia genealógica de las familias más antiguas de México* (3 vols., México, 1908-10).

Parece que el comercio atraía a la mayoría de los inmigrantes europeos, y que hasta los que más tarde fueron mineros o terratenientes, en muchos casos comenzaron a trabajar como aprendices de comerciantes o cajeros, como se les llamaba. En 1689 unos 628 varones, de los 1 182 peninsulares que en total residían en la ciudad de México, fueron empadronados como comerciantes, constituyendo así el grupo más numeroso. Por el contrario, los empleados en el servicio del gobierno no eran más que 124 ³⁰. Los comerciantes constituían la médula de la comunidad española y los que daban el sello a su estilo de vida. Justo Sierra, él mismo descendiente de uno de ellos, escribió: «Este abarrotero... fue quién formó la sustancia de la mezcla hispano-americana... el abarrotero y no el conquistador es el verdadero padre español de la sociedad mexicana» ³¹. Podemos también recordar la declaración que el virrey Mancera hizo en 1673: «Los mercaderes y tratantes, de que se compone en las indias buena parte de la nación española, se acercan mucho a la nobleza, afectando su porte y tratamiento... puede suponerse que en estas provincias por la mayor parte el caballero es mercader y el mercader es caballero» ³². En el México colonial el español peninsular siempre era un caballero sin importar su ocupación.

¿Cuál era el origen de estos inmigrantes? ¿Serían hidalgos en realidad? ¿Venían de familias mercantiles ya establecidas en la Península? Las pruebas que tenemos, de nuevo más literarias que estadísticas nos indican que la mayoría de ellos venían de las montañosas costas del norte de España. No obstante, esto sucedió únicamente a partir del siglo XVIII, porque todavía en 1689 los norteños residentes en la ciudad de México llegaban solo al 40 por 100 de la comunidad española; el grupo por provincia más numeroso eran todavía los andaluces, que comprendían el 25 por 100 del total ³³. Pero para 1724 Gerónimo de Ustáriz, el pensador mercantilista, declaró que el norte, como era normal tratándose de la región más densamente poblada de España, proporcionaba la mayor parte de los emigrantes: «Cantabria, Navarra, Asturias, Montañas de Burgos y Galicia,

³⁰ Rubio Mañé, *Gente de España*, pp. 357-65.

³¹ Justo Sierra, *Evolución política del pueblo mexicano* (México, 1957), pp. 128-9.

³² Instrucciones que los Virreyes, ... dejaron, p. 258.

³³ Rubio Mañé, *Gente de España*, pp. 349-51.

son las provincias de donde van más españoles a aquellas regiones»³⁴. En México surgieron dos grupos especialmente prominentes: los vascos y los montañeses de Santander. Años más tarde Humboldt señaló el contraste que existía entre México y Venezuela, pues mientras en el primero la hegemonía correspondía a los norteños, en la segunda dominaban andaluces y canarios³⁵.

La mayoría de los inmigrantes que llegaban a México eran campesinos del norte. Procedían de una región en la que la forma de empresa característica era la pequeña granja familiar. En las provincias vascas la mayoría de los campesinos eran dueños de sus tierras; en Santander y Asturias los aparceros o arrendatarios gozaban de mayor seguridad que en otras regiones de la Península y se beneficiaban de las extensas tierras que seguían siendo comunales³⁶. Las cabañas existían en todos los valles montañeses y no agrupadas en aldeas. Había muy pocas grandes propiedades, y en general los habitantes de la región tenían un cierto sentido de igualdad social.

Los vascos comenzaron a emigrar a México desde el siglo XVI. Se establecieron en Zacatecas y conquistaron el norte, como atestigua el hecho de que Durango, en tiempos coloniales, llevó el nombre de Nueva Vizcaya³⁷. Desde los primeros días de la Conquista, los comerciantes vascos se hallaban ya en la Nueva España³⁸. Además, el Nuevo Mundo era un mercado importante para el hierro y el acero que Vizcaya producía. A los vascos, famosos por su industriiosidad y su espíritu independiente, ha sido atribuida la raíz del carácter nacional chileno por una parte, y los éxitos económicos de Antioquía en Colombia³⁹. Durante tres siglos tuvieron un papel igualmente preponderante en la formación del carácter y en las actividades de la comunidad española de México.

³⁴ Gerónimo de Ustáriz, *Teórica y práctica de comercio y de marina* (2.^a ed.; Madrid, 1755), pp. 21-2. Véase también V. Aubrey Neasham, «Spain's Emigrants to the New World», *Hispanic American Historical Review*, 19 (1939), pp. 147-60.

³⁵ Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland, *Personal Narrative of Travels to the Equinoctial Regions of America during the years 1799-1804* (3 vols.; Londres, 1870), I, 395.

³⁶ Raymond Carr, *Spain, 1808-1939* (Oxford, 1966), pp. 6-8.

³⁷ Véase Mecham, *Francisco de Ibarra and Nueva Vizcaya*.

³⁸ Enrique Otte, «Los mercaderes vizcaínos Sancho Ortiz de Urrutia y Juan de Urrutia», *Boletín Histórico Fundación Boulton*, 6 (1964), pp. 3-32.

³⁹ Alberto Edwards Vives, *La fronda aristocrática* (Santiago de Chile, 1952), pp. 18-19. Benjamín Vicuña Mackenna, *Los orígenes de las familias chilenas* (3 vols.; Santiago de Chile, 1903), I, *Los vizcaínos*. Everett E. Hagen, *On the Theory of Social Change* (Homewood, I 11, 1962), pp. 371-3.

Por el contrario parece que no fue sino hasta el siglo XVIII cuando los montañeses surgieron como grupo dominante en la Nueva España. Venían de una provincia pobre desde la que la emigración estacional a Castilla era, hacía tiempo, frecuente ⁴⁰. Muchos se iban a Andalucía a hacerse taberneros ⁴¹. En 1712 el puerto de Santander no tenía más que 225 jefes de familia, pero en el curso del siglo la provincia y su capital, en parte por efecto de las promociones reales, en parte como consecuencia de un aumento en la población, experimentó un claro crecimiento en importancia y en prosperidad. Se construyó un camino para unir el puerto con Castilla, se creó una nueva industria del hierro, y la Corona deliberadamente propició el desarrollo del puerto de Santander como rival de Bilbao ⁴². El establecimiento del libre comercio con las Indias benefició a toda la provincia. Con todo y esto, para 1822 la población de Santander ascendía únicamente a 175 152 habitantes ⁴³.

En 1742 el predominio dieciochesco de estos norteños en la comunidad comercial peninsular fue oficialmente reconocido al dividirse el consulado de México, es decir, la asociación de comerciantes, en dos partidos, vascos y montañeses, cada uno de los cuales elegía un cónsul y, en años alternos, al prior. Los naturales de otras provincias y los criollos, debían abstenerse de votar y de formar parte de cualquiera de estos dos partidos ⁴⁴. La formación de estos grupos provinciales reflejaba el profundo sentido de *paisanaje* del inmigrante español, lealtad a su terruño acentuada además por las organizaciones comunales religiosas o caritativas. La mayor parte de los vascos se hacían miembros de la cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu, mientras que los montañeses se adherían a la que tenía por patrón al Cristo de Burgos. Los numerosos altares que en las Iglesias de México están dedicados a estos dos grandes cultos nos indican cuál de los dos grupos era el más fuerte en una localidad dada.

⁴⁰ Para una idea general, véase Fernando Barreda y Ferrer de la Vega, *Aportación al estudio de la historia económica de la Montaña* (Santander, 1957), pp. 481-612.

⁴¹ Lady Elizabeth Holland, *The Spanish Journal* (Londres, 1910), p. 55.

⁴² Vicente Palacio Atard, *El comercio de Castilla y el puerto de Santander en el siglo XVIII* (Madrid, 1960), pp. 51-70, 144-6, 180-7.

⁴³ Barreda y Ferrer de la Vega, *Aportación*, p. 506. Véase también Luis María de la Sierra, *Memoria sobre el estado de comercio que publica la real junta de Santander* (Santander, 1833), pp. 90-1.

⁴⁴ Alamán, *Historia*, I, 45; AGI, México, 1775, Consulado a la Corona, 14 agosto 1787.

Los vascos daban especial apoyo a la actividad comunitaria. La cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu terminó en 1754 la construcción de un colegio para huérfanas de origen vasco, espléndido edificio que hasta la fecha se llama «las Vizcainas» y que contiene varios grandes patios. Los nombres de los tres principales patrocinadores de esta construcción se encuentran grabados sobre la escalera principal del colegio. Se trata de Francisco de Echeveste, Manuel de Aldaco y Ambrosio de Meave, que fueron los tres cónsules o priores del Consulado de México⁴⁵. Las reglas para el gobierno interno del colegio fueron formuladas por Francisco Javier de Gamboa, el famoso jurisconsulto minero que era hijo y nieto de vascos. Estas personas se interesaron también en otra organización, la sociedad económica vasca llamada Amigos del País, fundada en 1764, en la que Meave fue especialmente activo. En 1773, él y el juez Leandro de Viana, más tarde conde de Tepa, obtuvieron las firmas de 171 nuevos socios⁴⁶. Ese año los vice-recaudadores de cuotas eran Antonio Bassoco, Manuel Ramón de Goya y Sebastián de Eguía⁴⁷. Cuatro años después Meave y Viana lograron recaudar 14 000 pesos de la sociedad local, para ayudar al nuevo colegio vasco de Vergara, en cuyo programa de estudios figuraban con prominencia la mineralogía y la metalurgia. Meave legó en su testamento 14 000 pesos para esa institución⁴⁸. Así pues, los vascos tenían una alta conciencia provinciana; su partido dentro del Consulado tenía por base la organización comunal, consistente en su cofradía, su sociedad económica, las asociaciones mercantiles y el compadrazgo. Sin duda que, si existieran las correspondientes pruebas documentales, podría encontrarse una organización semejante entre los montañeses.

Ambos grupos eran conocidos por sus pretensiones nobiliarias y por la pasión genealógica. Mientras que entre la población española en su conjunto únicamente el 10 por 100 tenían derecho a ser llamados hidalgos, en Guipúzcoa todo el mundo era hidalgo, en Vizcaya lo era la mitad de la población y en Asturias, una sexta

⁴⁵ Gonzalo Obregón, Jr., *El real colegio de San Ignacio de México* (México, 1949), pp. 47-9.

⁴⁶ Nicolás de Soraluce y Zubizarreta, *Real sociedad vascongada de los Amigos del País* (San Sebastián, 1880), pp. 34, 46-7.

⁴⁷ Robert Jones Shafer, *The Economic Societies in the Spanish World, 1763-1821* (Syracuse, N. Y., 1958), pp. 45-6.

⁴⁸ Soraluce y Zubizarreta, *Real sociedad vascongada*, p. 47.

parte ⁴⁹. Los montañeses también se distinguían por tener pretensiones de esta clase. «Hidalgo como el rey, porque era montañés», escribió Cervantes con ironía ⁵⁰. También en un diálogo del siglo XVII entre un vasco y un castellano, el primero declaraba:

Como nosotros los vizcaínos somos todos hijosdalgo, es natural el odio que tiene el villano con el hidalgo ⁵¹. En realidad, estos hidalgos norteños no eran en muchos casos más que campesinos cuya pobreza empujaba a sus hijos a la emigración en busca de fortuna.

Una vez en México, desaparecían las dudas con relación a la posición social. Los españoles, sin importar cuál hubiese sido su situación u ocupación anterior, eran considerados hidalgos. El padre Francisco de Ajofrín, viajero capuchino del decenio de 1760 a 1770, observó que «a todos los gachupines se les da don y se les trata con gran respeto, teniéndose todos por nobles, sea de la clase que quiera, pues sólo ser europeo basta» ⁵². Naturalmente que esto puede explicarse por la abundancia de hidalgos en el norte de España, pero también es importante el hecho de que un español, como miembro de la nación conquistadora, reclamaba una posición superior en la sociedad. No debe olvidarse que la Conquista fue celebrada todos los años con grandes festividades hasta el fin de la colonia ⁵³. Además, el color de la piel ayudaba en México a determinar la posición social. Un observador anónimo escribió en 1735: «Entre cuyos moradores no se hace más distinción que blancos o de mano prieta» ⁵⁴. A fines del siglo Humboldt confirmó esta opinión: «el más miserable europeo sin educación y sin cultivo a su entendimiento, se cree superior a los blancos nacidos en el Nuevo Continente... un blanco aunque monte descalzo a caballo, se imagina ser de la nobleza del país... Cuando un cualquiera del pueblo tiene algún altercado con uno de los señores

⁴⁹ Antonio Domínguez Ortiz, *La sociedad española en el siglo XVIII* (Madrid, 1955), pp. 81-99.

⁵⁰ Miguel de Cervantes Saavedra, *Don Quijote de la Mancha*, 2.^a parte, capítulo 48.

⁵¹ J. Zaragoza, ed., *Castellanos y vascongados* (Madrid, 1876), p. 32.

⁵² Francisco de Ajofrín, *Diario del viaje que hizo a la América en el siglo XVIII* (2 vols.; México, 1964), I, 63. Véanse también Juan y Ulloa, *Noticias secretas*, II, 102-3, e Hipólito Villaroel, *Enfermedades políticas que padecen la capital de esta Nueva España* (México, 1830), p. 131.

⁵³ En 1794 se erigió un nuevo y espléndido mausoleo para los restos de Hernán Cortés en el Hospital de Jesús. Véase *Gaceta de México*, VI (1794), 78, pp. 647-8.

⁵⁴ BRP, Miscelánea de Ayala, 55/14, f. 311.

de título del país, suele comúnmente decir el primero: ¿es que cree usted ser más blanco que yo?»⁵⁵.

De cualquier modo, estos hidalgos campesinos todavía tenían que adquirir las riquezas que eran lo único en que podían apoyar sus pretensiones. La mayoría se dedicaban al comercio, comenzando como aprendices o cajeros en el establecimiento de algún pariente, frecuentemente su tío, o de algún paisano, natural de su mismo valle o provincia. La preparación del cajero era estricta y severa, y su juventud se consumía en la axfisiante monotonía de la existencia tras un mostrador. La perseverancia y la sobriedad eran las características distintivas de aquellos hombres. El resultado fue la creación de una casta y no de una clase, que constituyó una *élite* colonial diferente tanto por sus concepciones como por su preparación, de los peninsulares y criollos con quienes convivía. Lucas Alamán observó que «los empleados de la casa vivían bajo un sistema casi monástico, por los estrictos que eran el orden y la regularidad, y esta clase de educación espartana hacía del español residente en América un tipo humano que no existía en la misma España»⁵⁶. La rutina con que este grupo se formaba fue objeto de una brillante y venenosa descripción de Lorenzo de Zavala⁵⁷.

La mayor parte de los que dirigían el comercio del país eran con pocas excepciones polizantes, nombre que se daba a los jóvenes pobres que salían de las provincias de España para pasar en América, llevando por todo vestido un pantalón, un chaleco y una chaqueta con dos o tres camisas. Muchos apenas sabían leer y escribir, y no tenían otra idea del mundo y de los negocios que la que podían adquirir durante su travesía; pues en su aldea apenas habían oído otra cosa que los sermones del cura y los consejos de sus madres. No tenían idea de lo que valía un peso fuerte de América; muchos creían que no había más que el rey de España en el mundo, otra religión que la cristiana, ni otro idioma que el español. Iban consignados a algún pariente que había hecho allí negocio, y entraban en su noviciado. Por la mañana temprano se vestían para ir a la iglesia a oír la misa diaria. Después volvían a casa a desayunarse con el chocolate; abrían el almacén y se sentaban a leer algún libro de devoción después de arreglar las cuentas. Almorzaban a las nueve y a las doce cerraban sus tiendas para comer y dormir la siesta. A las tres se rezaba el rosario y se abría después de este rezo la tienda hasta las siete de la noche en que se volvía a rezar el rosario

⁵⁵ Humboldt, *Ensayo político*, pp. 76, 90. Véase también Humboldt y Bonpland, *Personal Narrative of Travels*, I, 44-5.

⁵⁶ Alamán, *Historia*, I, 15.

⁵⁷ Zavala, *Ensayo histórico*, I, 67.

y se cantaban algunas alabanzas a la Virgen... Los dependientes seguían por lo regular a sus amos, y muy pocas veces se separaban de ellos. Las conversaciones se reducían al precio de los efectos que no ofrecía muchas variaciones, porque como había un monopolio riguroso desde Cádiz y Barcelona, todo estaba arreglado. No había papeles públicos, no había teatro, no había sociedad, no había bailes, ni ninguna de esas reuniones en que los hombres se ilustran por las discusiones, o de las que los dos sexos procurando agradarse mutuamente, refinan el gusto, endulzan sus costumbres y perfeccionan la naturaleza. Aquel género de educación debía hacer hombres muy distintos de los que conocemos hoy. ¿Pero cómo podían entrar en las ideas de reforma individuos envejecidos en estos hábitos y endurecidos, por decirlo así, en las rutinas de una vida semimonástica?

Se le atribuyen características espartanas, de noviciado, semimonásticas, y estas descripciones más bien definen una preparación para crear una casta selecta y no una clase mercantil. Además, viéndose en un medio irresponsable en el que abundan los borrachos y la pereza, los inmigrantes fortalecían la conciencia de su superioridad mediante su profunda devoción religiosa y con la consolidación de sus fortunas. Como para cualquier calvinista, su éxito material era la justificación de una carrera, y como para un victoriano, despreciaban a las masas de piel oscura de las que obtenían sus riquezas.

El famoso memorial que en 1811 el Consulado mexicano presentó a las Cortes de Cádiz nos da una idea de sus actitudes hacia la sociedad colonial. Tenía un tono un poco histérico como reacción a las matanzas de la rebelión de 1810; de todos modos, revelaba mucho de su cerrada mentalidad. Decían en él que «La Nueva España es, pues una gran región donde priva el humor y el genio indolente y sensual; donde se vive para los placeres; y en la disipación; donde los gustos sobre lo futuro ceden a la confianza de lo necesario permanente». Los indígenas se hallaban «sumergidos en una eterna infancia con todas las apariencias de vil autómatas». En realidad, se habían necesitado tres siglos de dominación española «se transformaron... súbitamente en hombres domésticos... los Orangutanes pobladores de las Américas»⁵⁸. Los mestizos y mulatos eran condenados sumariamente en los mismos términos por sus vicios y baja vida. El memorial atacaba a los crios-

⁵⁸ Este memorial está reproducido en Andrés Cavo, *Los tres siglos de México durante el gobierno español hasta la entrada del ejército trigarante*. Publicada con notas y suplemento por Carlos María de Bustamante (3 vols.; Jalapa, 1870), III, 346-76.

llos por negarse a trabajar, por la envidia que sentían por los europeos y por sus deseos de independencia. Por el contrario, únicamente los peninsulares eran trabajadores y ahorrativos, y eran ellos los que sostenían la sociedad, constituyendo «el alma de la prosperidad y de la opulencia del reino, por sus empresas en la minería, agricultura, fábricas y comercio, cuyos manejos gozan casi exclusivamente, no tanto por su energía o actividad codiciosa, como por la desaplicación e inconducta de los criollos»⁵⁹. He aquí unos prejuicios que verdaderamente son dignos de cualquier colono francés de Argelia.

Naturalmente que el pueblo mexicano consideraba de modo muy distinto a estos inmigrantes. Durante los motines de 1767 el clamor popular los acusó de ser judíos: «los gachupines son unos judíos, ambiciosos y llenos de avaricia, que no vienen más que a robarles sus caudales, desposeerlos de sus tierras, destronizarlos de sus empleos y dignidades y hacerse dueños hasta de sus propias hijas y mujeres»⁶⁰. Muchos años más tarde Justo Sierra comparó el prejuicio antiespañol tan común en México con el antisemitismo existente en Polonia; en ambos países los inflexibles pequeños tenderos y administradores rurales, que tenían diario contacto con las masas, fueron objeto del odio popular⁶¹.

El éxito económico del gachupín, que él personalmente atribuía a su propia industria y el populacho a la avaricia, puede explicarse en gran medida porque era amo y señor de los dos caminos que con mayor seguridad conducían a la riqueza en el México colonial: el comercio y el matrimonio. El español inmigrante se incorporaba a un gran grupo fraternal de parientes y compatriotas que se dedicaban todos al comercio. Los primeros años que pasaba como cajero le permitían no sólo aprender los elementos del oficio, sino también establecer un gran número de contactos útiles para el comercio. Una vez que terminaba su entrenamiento, su patrón, que muy a menudo era su tío o su paisano, lo convertía en socio o, si establecía su propio negocio, le proporcionaba capital y mercancías a crédito. La naturaleza misma del comercio colonial —su organización en empresas de un solo hombre y su dependencia en el crédito para las transacciones—

⁵⁹ *Ibid.*, III, 365.

⁶⁰ Fr. José Joaquín Granados y Gálvez, *Tardes americanas* (México, 1778), p. 528.

⁶¹ Justo Sierra, *Juárez, su obra y su tiempo* (México, 1956), p. 243.

daba a todas sus operaciones una calidad altamente personal de confianza individual. Y el mercader peninsular confiaba, por orden, en sus parientes, en sus compatriotas, en los demás comerciantes peninsulares y, en último lugar, en los criollos. Ya en el siglo XVIII habían cristalizado las actitudes de antipatía y desconfianza mutuas entre criollo y gachupín, que tendían a excluir del comercio al español americano.

En segundo lugar, los inmigrantes tenían derechos de preferencia en el mercado del matrimonio. Muchos peninsulares triunfados habían venido a sus sobrinos con la esperanza de que se casaran con sus primas y heredaran y continuaran así el negocio del tío. Del mismo modo, las viudas con frecuencia se casaban con el cajero de su difunto marido. Las hijas criollas, empujadas por el consejo y el ejemplo de sus madres, y por el afecto natural que sentían por el padre, tendían a escoger por esposos a hombres de su misma casta. Además, los estereotipos tradicionales de carácter criollo y del gachupín favorecían a este último en gran medida. En 1697 Gemelli Carreri observó a propósito de las mujeres mexicanas: «Son en gran manera afectas a los europeos, que llaman gachupines, y con éstos, aunque sean muy pobres, se casan mejor que con sus paisanos llamados criollos, aunque sean ricos, los cuales, a causa de ésto, se unen con las mulatas, de quienes han mamado juntamente con la leche las malas costumbres»⁶². Sea como haya sido, el caso es que parece que un número abrumador de herederas criollas daban su mano a españoles peninsulares. Si nos detenemos a meditar que un historiador de la aristocracia inglesa declaró que durante el siglo XVI las grandes fortunas se acumularon mediante dos grandes sistemas —los empleos en el gobierno y el matrimonio— entonces resulta claro que la inclinación de las criollas a casarse con peninsulares explica parcialmente la frecuencia del éxito económico del inmigrante⁶³. Así podía seguir incrementando el capital acumulado por su suegro.

Este esquema de preferencias matrimoniales se encontraba en

⁶² Gemelli Carreri, *Viaje*, I, 45.

⁶³ Lawrence Stone, *The Crisis of the Aristocracy, 1558-1641* (Oxford, 1965), p. 191. «... las causas de verdadera importancia para la ascensión a la aristocracia no eran ni el ahorro, ni la posesión de tierras, ni el comercio, ni la ley. Eran precisamente los dos mismos factores que en la Edad Media habían sido decisivos: en primer lugar, el favor real, y en segundo, el matrimonio.»

todos los niveles de la sociedad hispánica en el Nuevo Mundo, pero era especialmente evidente en la clase comerciante. Muchas casas mercantiles debían su supervivencia a una tal endogamia. Un ejemplo muy interesante es el de la familia Cossío, montañeses naturales de la aldea de Obesso en el Valle de Riona. Mateo González de Cossío fundó en Veracruz una casa mercantil a mediados del siglo XVII, firma que continuó existiendo en manos de sus sobrinos inmigrantes. En la tercera generación Pedro Antonio de Cossío, que llegó a México en 1736, se casó con la hija de su tío Juan Domingo de Cossío y se hizo cargo del negocio. Esta firma era importante porque representaba al duque de Veragua, en Santo Domingo, y al duque de Atlixco en México ⁶⁴. Los vascos seguían sistemas muy parecidos. Dos hermanos, Juan Antonio y Gabriel Joaquín de Yermo, naturales de la aldea de Sodupe en el Valle de Gordejuela en Vizcaya, emigraron a México, donde ya en el decenio de 1780 a 1790 eran ricos mercaderes. Entonces invitaron a tres sobrinos, llamados Gabriel, Juan Antonio y Juan José de Yermo, a que se les unieran. Gabriel se casó con su prima y así adquirió las propiedades de su tío ⁶⁵. Un sobrino de estos últimos, en la siguiente generación, llamado Gabriel Patricio de Yermo, también emigró a la Nueva España.

La naturaleza de la sociología peculiar que sostenía el comercio colonial estará, pues, suficientemente clara. Generación tras generación, nuevas oleadas de inmigración mantenían el control europeo en la economía de la Nueva España. Estos inmigrantes, lejos de ser pioneros, entraban a una *élite* mercantil y empresarial semihereditaria y prácticamente endógama, que era el grupo que dominaba la vida económica de la colonia. En muchos sentidos eran estos hombres, y no los grandes mineros y hacendados, los que formaban la verdadera aristocracia de la Nueva España.

Además, la influencia política e institucional seguía de cerca al

⁶⁴ AGI, 1878, Cossío a Valdés, 20 octubre 1787.

⁶⁵ Alamán, *Historia*, I, 156. Véase Juan Martín de Juan Martineña, *Verdadero origen, carácter, causas, resortes, fines y progresos de la revolución de Nueva España* (México, 1810), *Documentos*, pp. 54-7. Según las solicitudes de licencias de inmigración, hubo tres generaciones de Yermo en la Nueva España: dos tíos, Juan Antonio y Gabriel Joaquín, sus tres sobrinos, Juan José, Antonio y Gabriel, y el sobrino de éstos, Gabriel Patricio. Sobre este asunto, véanse AGI, México, 1765, solicitud de José de Yermo, 24 marzo 1775; y AGI, México, 1772, solicitud de José de Yermo, 18 mayo 1784. El más viejo Juan Antonio de Yermo vivía en San Miguel el Grande, AHGP, Presos, 14 mayo 1755.

poder financiero y al prestigio social. Desde que fue establecido en 1592, el Consulado de México, que era la asociación profesional y tribunal mercantil, fue un pilar fundamental del orden establecido. Ya en 1602 obtuvo la concesión de recaudar las alcabalas de la ciudad de México, y con excepción de interrupciones ocasionales, siguió recaudando este impuesto hasta 1754, cuando la Corona por fin nombró a oficiales reales asalariados ⁶⁶. La dinastía borbónica empleó al Consulado como medio para emprender varias obras públicas de importancia en la ciudad de México. Construyó un hospital, una prisión, un manicomio, la aduana central y varios pequeños caminos ⁶⁷. Entre 1767 y 1789 el Consulado, bajo la dirección de José González Calderón, Ambrosio de Meave y Juan de Castañiza en un principio, supervisó las obras finales del famoso canal de desagüe de Huehuetoca, vasto proyecto que tuvo un costo de 800 000 pesos ⁶⁸. Para algunas de estas obras el Consulado recaudaba alcabalas impuestas sobre los productos locales; financió lo demás con sus ingresos fijos, que consistían en el impuesto de *avería* del 2 por 100 que se cobraba sobre toda la mercancía importada, derechos que en los años posteriores a 1778 produjeron 100 000 pesos anuales ⁶⁹. Si los ingresos del consulado se dedicaban a obras públicas construidas para beneficio de la capital era porque los almaceneros ricos de la ciudad de México dominaban dicho tribunal. A pesar del gran número de comerciantes establecidos en la capital, únicamente 82 asistieron a la reunión general que tuvo lugar en 1787 y que eligió a los cónsules y al prior para aquel año ⁷⁰. Estos funcionarios y el tribunal que formaban representaban así, y defendían, los intereses de un grupo oligárquico y altamente exclusivista; esencialmente se limitaban a ser la voz política de las grandes casas importadoras.

⁶⁶ Robert Smith, «The Institution of the Consulado in New Spain», *Hispanic American Historical Review*, 24 (1944), pp. 61-83, y también del mismo autor, «Sales Taxes in New Spain, 1575-1770», *Hispanic American Historical Review*, 28 (1948), pp. 2-37.

⁶⁷ Alamán, *Historia*, I, 45.

⁶⁸ Humboldt, *Ensayo político*, p. 146.

⁶⁹ AGI, México, 1809, informe del contador general Pedro de Aparici a Soler, 23 septiembre 1805.

⁷⁰ AGI, México, 1775, Consulado a la Corona, 14 agosto 1787.

III

En los años que siguieron a la Visita de Gálvez, los almaceneros y su Consulado fueron objeto de continuos ataques lanzados desde Madrid. Primero José del Campillo presentó el caso contra ellos al distinguir claramente entre «comercio político» e «intercambio comercial»⁷¹, es decir, puso frente a frente un sistema de comercio regido por la Corona para el bien común, y un sistema monopolístico dominado por los gremios mercantiles y sus tribunales para el beneficio particular de sus miembros. Del mismo modo José de Gálvez, cuando todavía era abogado del ministerio, censuró a los comerciantes mexicanos por sus «exorbitantes ganancias» en la feria de Jalapa, afirmando que la escasez artificial que ocasionaba la periodicidad en las llegadas de las flotas, en realidad fomentaba el contrabando⁷².

Estas críticas recibieron la real aprobación cuando en 1778, mediante la cédula del comercio libre, la Corona española abolió por fin el sistema de convoyes para los envíos a Veracruz y puso fin al monopolio de Cádiz en el comercio con las colonias americanas. A partir de entonces, todos los puertos principales de la Península pudieron tener tratos directos con la Nueva España, primero mediante licencias individuales, y después, a partir de 1789, sin restricción alguna. Esta medida, naturalmente, fue una aplicación tardía de los principios mercantilistas al Imperio Español, porque el antiguo sistema, con sus dos mercados, uno en Cádiz y el otro en Jalapa, era por su espíritu más medioeval que mercantilista, y el sistema de flotas respondía a exigencias militares superadas desde hacía ya mucho tiempo. Como ha señalado Eli Heckscher, los gobernantes mercantilistas generalmente trataron de destruir los monopolios y barreras locales como estos, para promover el libre movimiento comercial dentro de los límites políticos del reino⁷³. José de Gálvez, que fue el ministro a quie más se debió el comercio libre, pertenecía claramente a esta escuela de pensamiento político.

Las consecuencias de este famoso decreto, tanto para la comunidad mercantil como para la economía en su conjunto, fueron de la

⁷¹ Campillo y Cossío, *Nuevo sistema*, p. 32.

⁷² BRP, MSS 2816, *Miscelánea de Ayala*, 278, ff. 119-21.

⁷³ Eli F. Heckscher, *Mercantilism* (2 vols.; Londres, 1934), II, 70-1.

mayor importancia. Benefició tanto al consumidor americano como al productor español. Las industrias, y las zonas agrícolas aledañas, de Bilbao, Santander, Málaga y Barcelona, incrementaron sus ventas en cuanto se les permitió el acceso directo al mercado americano; la creciente prosperidad de la industria catalana dependía de la libertad de los comerciantes barceloneses para entrar al Nuevo Mundo ⁷⁴. En general, la aceptada preponderancia económica de la periferia geográfica de la Península, que adquirió más importancia que las regiones centrales, tuvo una relación íntima con los nuevos contactos directos con los mercaderes coloniales al eliminarse el monopolio de Cádiz.

Para la Nueva España la reforma resultó de igual importancia. Durante el decenio que se inició en 1780 la colonia recibió una cantidad sin precedente de artículos europeos, y al saturarse sus mercados en poco tiempo cayeron tanto los precios como las ganancias. Cambió el sistema mismo de distribución: desapareció el monopolio de la ciudad de México, y de Veracruz, que anteriormente no era más que un punto de tránsito, pronto contó con un grupo de comerciantes que despachaban sus mercancías directamente hacia el norte, haciendo a un lado a los almaceneros de la capital y tratando directamente con los comerciantes de provincia. Además, surgió una nueva especie de agentes viajeros, que compraban en Veracruz y vendían en donde encontraran demanda para el producto ⁷⁵. También cambiaron las líneas de crédito. Los comerciantes de Veracruz obtenían los productos de importación de remitentes españoles que, contando en muchos casos con financiamiento de casas mercantiles extranjeras, no esperaban un pago inmediato en efectivo. Hacia 1807 Abad y Queipo estimó que los comerciantes mexicanos tenían deudas con los de ultramar por una suma cercana a los veinte millones de pesos, suma sobre la cual se les cobraba un interés del 15 por 100 ⁷⁶.

La Corona española dio un segundo golpe contra el antiguo sistema del comercio mexicano al prohibir, en 1786, que los alcaldes mayores emprendieran operaciones comerciales. En aquella misma década fundamental el precio de la cochinilla, que era el producto más

⁷⁴ Pierre Vilar, *La Catalogne dans l'Espagne Moderne* (3 vols.; París, 1962), III, 12, 559-66.

⁷⁵ Luis Chávez Orozco, ed., *El comercio exterior y su influjo en la economía de Nueva España en 1793* (México, 1960), pp. 6-12, 99-102, 139-40.

⁷⁶ Mora, *Obras sueltas*, pp. 234, 235.

valioso del comercio que fue prohibido, cayó de más de 30 pesos a 11 pesos la libra ⁷⁷. Los comerciantes respetables no desearon ya financiar a los alcaldes mayores que continuaron clandestinamente sus actividades comerciales, porque las ganancias ya no eran suficientemente atractivas para compensar el peligro de tener dificultades con la ley.

El efecto de estas dos reformas sobre las grandes casas mercantiles de la capital fue notable. Se encontraron con que la época de utilidades monopolísticas relativamente seguras había llegado a su fin, y tuvieron que enfrentarse a una competencia más vigorosa y numerosa, porque el aumento en el volumen del comercio muy pronto atrajo a un nuevo tipo de hombre, que se conformaba con utilidades moderadas siempre que se obtuvieran con rapidez ⁷⁸. Muchos mercaderes-capitalistas, para reducir sus ya considerables pérdidas después de experimentar brevemente con el nuevo sistema en la década de 1780 a 1790, decidieron abandonar el comercio. Invirtieron entonces sus capitales en la agricultura, la minería y el financiamiento. Manuel Ramón de Goya, por ejemplo, dejó de financiar a los alcaldes mayores del sur indígena para hacerlo con un minero que extraía plata en Zacatecas. Pedro Alonso de Alles compró una plantación de caña de azúcar. Gabriel de Yermo se hizo cargo de la administración de la hacienda que su tío tenía en Cuernavaca, y con un costo de 200 000 pesos la transformó en un ingenio capaz de producir un millón de libras de azúcar al año ⁷⁹. El fiscal Ramón de Posada atribuyó esta inversión de capitales mercantiles en empresas productivas casi enteramente a la cédula del comercio libre, y en 1792 exclamó: «Muchos de los más acaudalados están en compañías de minas y no se avergüenzan, como antes, de estas negociaciones importantes al estado; de los abastos públicos; de acopiar con extraordinaria diligencia y costo, azúcares y hacer a España nunca vistas y considerables remisiones. ¡Que feliz revolución!» ⁸⁰. En efecto, al reducirse la utilidad comercial en aquella década, toda una generación de comerciantes ricos abandonó el comercio para dedicarse a la

⁷⁷ Lerdo de Tejada, *Comercio exterior*, apéndice 55.

⁷⁸ Luis Chávez Orozco, ed., *El comercio exterior*, pp. 99-102.

⁷⁹ Véase Martineña, *Verdadero origen*, *Documentos*, pp. 54-7. AGI, México 2505, Revillagigedo a Gardoqui, 30 junio 1792; otros comerciantes de este tipo fueron Sebastián de Heras Soto y Juan Fernando Meoqui.

⁸⁰ AGI, México 2505, informe de Ramón de Posada, 27 enero 1792.

minería y a la agricultura, pero como de todos modos la mayor parte del capital mercantil estaba destinada a invertirse tarde o temprano en tierra, el efecto real de este cambio fue acelerar y concentrar en un quinquenio un proceso que de otra manera habría correspondido a movimientos individuales y esporádicos repartidos en un período mucho más largo.

No obstante, la oligarquía mercantil no recibió este retiro forzado con el mismo entusiasmo que Posada. Su organización, el Consulado de México, se opuso enconadamente a la nueva política y, después de 1778, se convirtió en general en un centro de oposición de los ricos resentidos. Después de todo, ya anteriormente, en 1756, el Consulado había obtenido que el sistema de flotas fuera restablecido después de una interrupción de 14 años, mediante la actuación de su agente en Madrid, Francisco Javier de Gamboa⁸¹. Así que en 1786, después de una corta experiencia del gran movimiento de mercancía y de la reducción de precios producida por el comercio libre, el Consulado había obtenido que el sistema de flotas fuera restablecido, taba el restablecimiento del monopolio gaditano y del sistema de convoyes⁸². La Corona resistió a la presión y ordenó una investigación detallada de la estructura colonial. En 1788 el Consulado de Santander, por ejemplo, elogió el comercio libre, que en aquella ciudad y en los valles cercanos había sido causa de un «prodigioso aumento». Las dificultades que se experimentaban en la Nueva España se debían, según aquel Consulado, a las especulaciones de los comerciantes de Cádiz, que *habían sobreabastecido el mercado*⁸³. Para 1792 el virrey Revillagigedo tuvo la posibilidad de calmar completamente los temores de la Corona al respecto. El comercio y la economía, en lugar de decaer, habían experimentado en general un notable crecimiento desde 1778. En su informe emprendió un ataque contra el Consulado mexicano, acusándole de querer subordinar tanto los intereses económicos españoles como los mexicanos al beneficio financiero de unos cuantos mercaderes ricos residentes en la ciudad de México. Sugería que dicho Consulado fuera abolido totalmente, o por lo menos que se establecieran otros similares en

⁸¹ Real Díaz, *Las ferias de Jalapa*, pp. 93-5.

⁸² AGI, México, 1554, Consulado a la Corona, 31 mayo 1788.

⁸³ APS, Consulado 2/21, informe del Consulado de Santander a Valdés, 24 abril 1788.

todas las principales ciudades de la colonia ⁸⁴. Al mismo tiempo el fiscal Ramón de Posada, que era el funcionario más honrado e ilustrado de la Nueva España, acusó directamente al Consulado, preguntándose «si el bien de una ciudad es preferible al de doscientas, si el común de este imperio opulentísimo debe ser sacrificado al interés de algunos comerciantes ricos» ⁸⁵. Por el contrario, señalaba que la inversión de capitales mercantiles en la agricultura y en la minería, era un resultado favorable del comercio libre.

Los comerciantes-capitalistas de México, sujetos así tanto a ataques oficiales como al desplazamiento económico, experimentaron también que se les disputara su dominio en el Consulado. En la sesión plenaria que tuvo lugar en enero de 1787, únicamente 29 personas aceptaron a los 30 electores escogidos por los cuatro calificadores de los dos partidos, montañeses y vascos. Las otras 56 votaron por una lista de electores distinta. Los cuatro calificadores, en la protesta que dirigieron a la Audiencia por no haberse respetado una costumbre muy antigua, afirmaban que comerciantes prominentes, tales como Antonio Bassoco, Juan Antonio de Yermo, Pedro de Vértiz, Miguel González Calderón y Miguel González de Cossío, habían sido rechazados dándose la preferencia a recién llegados. En la lista propuesta de electores vascos que se presentó en esa sesión se encontraban seis personas que apenas un mes antes se habían registrado en el Consulado, y otros cinco que eran miembros también desde muy poco tiempo atrás. La Audiencia dio la razón al grupo establecido y ordenó que se regresara a la antigua costumbre, contrariamente a lo recomendado tanto por el virrey como por el fiscal Ramón de Posada, de que se diera el derecho a elegir libremente a la asamblea. El Consejo de Indias confirmó más tarde la sentencia de la Audiencia ⁸⁶. Las antiguas instituciones de tiempos de la Casa de Austria se unían para defenderse contra las innovaciones borbónicas.

Más peligrosa que la rebelión interna para la dominación institucional de los almaceneros, fue la creación de gremios mercantiles independientes en Veracruz y Guadalajara. Estos Consulados, establecidos en 1795, tenían la función de fomentar el comercio, reunir

⁸⁴ Chávez Orozco, ed., *El comercio exterior*, pp. 31-4.

⁸⁵ AGI, México, 1775, Consulado a la Corona, 14 agosto 1787.

⁸⁶ AGI, México, 1775, Consulado a la Corona, 14 agosto 1787 (Consejo de Indias, 14 abril 1788).

información económica y construir caminos. Se les concedió el derecho al 0,5 por 100 sobre todas las mercancías que entraran en su jurisdicción⁸⁷. El de Veracruz, como representaba a comerciantes que querían evitar el paso de sus mercancías por México y tratar directamente con las provincias, tomó un papel preponderante, especialmente activo. Uno de sus miembros más destacados era un mallorquín descendiente de irlandeses llamado Tomás Morfi, correspondiente de la firma inglesa *Murphy and Eliot*; mantenía relaciones estrechas con los comerciantes británicos de Jamaica⁸⁸. El nuevo Consulado pronto demostró su valentía, al iniciar la publicación de los valiosísimos *Balances de Comercio* en que aparecía la lista de todos los artículos de importación y de exportación que pasaban por Veracruz. Más importante fue su iniciativa de que se construyera un camino de Veracruz a México vía Jalapa. Sus planes fueron inmediatamente obstaculizados por el virrey Branciforte que, irritado por la independencia del Consulado y porque sostenía correspondencia directa con la Corona, se quejó de que trataba de «procurar dar ideas de que a este Superior Gobierno le consideraba únicamente como auxiliar de todas sus operaciones»⁸⁹. Más tarde recomendó la supresión de ambos premios de nueva creación, porque no habían hecho nada de importancia aparte de provocar disensiones en el mundo mercantil, mientras que por otra parte defendía la autoridad y discreción del Consulado de México. Muy discreto había comprobado ser éste al regalar más de 7 000 pesos a Branciforte para sus «gastos» durante una visita al Desagüe de Huehuetoca⁹⁰. Pero los comerciantes veracruzanos contaban con apoyo en Madrid. En 1803 recibieron el permiso para comenzar la construcción del camino, la cual avanzó rápidamente hasta la rebelión de 1810. Se estimó su costo en tres y medio millones de pesos, suma que se reunió mediante la publi-

⁸⁷ AGI, México, 2512, Real Orden, 21 enero 1795, que estableció el Consulado de Veracruz.

⁸⁸ Murphy (Morfi) era hijo de Juan Murphy y Eliot, comerciante de Málaga; véase AGI, México, 1780. Llegó a ser prior en 1807; véase AGI, México, 2990, junta del Consulado de Veracruz, 2 abril 1807. Su esposa era pariente política del Virrey Miguel de Azanza; véase AHN, Consejos 20728, residencia de Azanza, 25 noviembre 1799.

⁸⁹ AGI, México, 1572, Branciforte a Gardoqui, 27 agosto 1796. Entre abril de 1795 y julio de 1797 Branciforte envió nueve cartas a Madrid en las que sugería la supresión de los dos nuevos consulados. Véase AGI, México, 1783, Branciforte a Saavedra, 31 marzo 1798.

⁹⁰ AGI, México, 1804, informe de Pedro Aparici, 23 septiembre 1805.

cación en la *Gaceta de México* de anuncios relativos a los bonos: se emitieron unos con una duración mínima de cuatro meses, con el acostumbrado interés anual del 5 por 100 que se reunía mediante el cobro de peaje a todos los que usaran el camino ⁹¹.

El Consulado mexicano tenía antipatía por el de Veracruz porque sus actividades le obligaron, después de dos siglos de abandono, a emprender la construcción de caminos. Poco después de 1790 dio apoyo financiero para la construcción de un camino de México a Toluca, de donde la capital obtenía parte considerable del trigo y del maíz que consumía. Además, el Consulado emprendió la construcción del camino a Puebla, que más tarde debía llegar a Veracruz por vía de Orizaba. Así pues, en la última década de paz de la colonia, se comenzó la construcción casi simultánea de dos caminos que debían unir a la capital con el puerto. Antonio Bassoco fue una de las personas que más directamente inspiraron esta racha de actividad del Consulado mexicano. En 1797 fue elegido prior del Consulado por segunda vez, hecho sin precedente, para que se encargara de vigilar los proyectos de construcción de caminos ⁹². Naturalmente que esta nueva atención a los caminos no era puramente por razones desinteresadas, sino que, siendo un comerciante retirado, buscaba nuevas oportunidades de inversión para su capital, y el interés del 5 por 100 garantizado por los ingresos del peaje era atractivo.

Con su prestigio e importancia reducidos por la creación de nuevos gremios, el Consulado de la ciudad de México fue aun más ofendido por las exigencias reales de que presentara cuentas detalladas de ingresos y gastos, y de que arreglara su contabilidad de acuerdo con las reglas que se habían fijado para los Consulados de Veracruz y Guadalajara ⁹³. En 1806 ocurrió un ataque todavía más molesto, cuando el virrey Iturrigaray pidió a Bassoco que arreglara la elección del joven conde de la Cortina como prior del Consulado de México. Bassoco rechazó la petición inmediatamente por la extremada juventud de Cortina y porque, en cualquier caso, el partido vasco tenía aquel año el derecho a elegir al prior, y Cortina era montañés. En respuesta a esta negativa Iturrigaray ordenó que el Consulado aban-

⁹¹ AGI, México, 1630, Iturrigaray a Soler, 18 noviembre 1807.

⁹² Humboldt, *Ensayo político*, pp. 464, 465. AGI, México, 1573, Branciforte a Garloqui, 27 octubre 1796.

⁹³ AGI, México, 1809, informe de Pedro Aparici, 23 septiembre 1805.

donara su sistema electivo tradicional, y que en cambio, de acuerdo con la práctica de los de Veracruz y Guadalajara, eligiera a sus funcionarios por suertes. A pesar de las fuertes protestas que esto provocó, el virrey se negó a admitir apelaciones o discusiones, amenazando con una multa de 6 000 pesos si el Consulado desobedecía sus órdenes. En 1807 el Consulado obedeció de mala gana, pero apeló al Consejo de Indias, que le dio permiso de regresar a sus antiguas costumbres, censurando acremente a Iturrigaray por haber «el virrey procedió con abuso y exceso de sus facultades a suspender las elecciones consulares»⁹⁴. Esta disputa entre el virrey y el Consulado tendría importantes repercusiones en 1808, pues para entonces la clase de los almaceneros y la institución que tenían bajo su control ya poseían excelentes razones para oponerse al nuevo régimen borbónico. Después de todo, ellos y la Iglesia habían sido las primeras víctimas del celo reformista del gobierno.

IV

DOS COMERCIANTES

La naturaleza del comercio colonial y los cambios que sufrió durante el siglo XVIII se comprenderán mejor mediante el examen de las dos casas mercantiles de mayor importancia en la ciudad de México. Su historia tiene la ventaja de que cubre todo un siglo.

En las últimas décadas del siglo XVII Juan Bautista Arosqueta, natural de Lequeitio en Vizcaya, estableció una casa importadora en la ciudad de México. La única heredera, su hija Josefa, se casó con Francisco de Fagoaga, rico tratante de plata, que entonces emprendió la operación de la firma comercial en combinación con la de sus negocios mineros. Fagoaga, natural del Valle de Oyarzu en Guipúzcoa, a su vez hizo venir a su sobrino Manuel de Aldaco, tanto para que manejara su banco de plata como para que se casara con una de sus hijas. Después de la muerte de Fagoaga en 1736, Aldaco nombró a Ambrosio de Meave, natural de Durango, en Vizcaya, para que dirigiera la casa mercantil, concediéndole el 13,5 por 100 de las ganancias al principio, y, después de 1747 una tercera parte de ellas.

⁹⁴ AGI, México, 1143, resolución del Consejo de Indias, 6 junio 1807; también AGI, México, 1632, Iturrigaray a Soler, 24 mayo 1808.

Meave estuvo al frente de la firma hasta que murió en 1781⁹⁵. Durante todo este período elaboró en varias ocasiones inventarios para presentárselos a Aldaco. De ellos podemos obtener alguna idea sobre el proceso de formación del capital y de la tasa de utilidad del capital comercial en el México colonial. Es conveniente presentar resúmenes de inventarios escogidos antes de pasar a discutirlos⁹⁶. (Véase table 7.)

Debe hacerse hincapié antes que nada en que se trata de una serie de inventarios, es decir, recuentos periódicos de existencias, y no del registro de movimiento total de mercancías ni de sus utilidades. Aquí, la utilidad quiere decir simplemente el aumento sobre el recuento de existencias anterior. El capital operativo representa la suma de las existencias más los créditos proporcionados, después de sustraer la deuda del momento. Con propósitos de claridad, la sección de «credits advanced translates dependencias activas» ha sido dividida en tres: una parte son los créditos corrientes o buenos, *otra los incobrables o perdidos*, y la última, los concedidos a la *otra casa*, es decir, el banco de plata que Aldaco manejaba y la hacienda de Zambrano de los Fagoaga. Se notará que las deudas incobrables nunca se eliminaban de la contabilidad, pues los 37 911 pesos originales todavía figuran en el inventario de 1781. Para tener una idea de cuál era el verdadero capital y de su producto, debe, por consiguiente, restarse esta cantidad antes que nada. El renglón «créditos actualmente concedidos» se componía de un gran número de deudores —en 1754 contenía 160 nombres— residentes tanto en la capital como en provincias, Chihuahua, Guadaluajara, Durango, Zacatecas, Parras, Mazapil, Valladolid, Pátzcuaro y Guanajuato. Es evidente que este renglón cubría toda la mercancía dada a crédito, pero en gran medida, como demuestran los inventarios, la firma existía para abastecer a la *otra casa*, es decir, al banco de plata. Por ejemplo en 1781, más del 57 por 100 de todos los créditos concedidos (sin tomar en cuenta los incobrables) fueron otorgados al banco de plata. Ambas instituciones se beneficiaban de este arreglo,

⁹⁵ AGN, Vínculos 7, ff. 103-18. Arosqueta se estableció en la Nueva España en 1677, y murió en 1730. Véase Rubio Mañé, *Gente de España*, pp. 31-2. Respecto a Meave y Aldaco, véase Obregón, *El real colegio*, pp. 48-50.

⁹⁶ AGN, Vínculos 10/3. Los balances están incluidos en la declaración hecha por Manuel Ramón de Goya, 15 mayo 1782. El resto de la información sobre Meave ha sido tomada de esta fuente.

porque por un lado Meave tenía un mercado para sus artículos, mientras que el banco seguramente obtenía los abastecimientos necesarios a precios moderados.

Otros renglones de la columna del activo se explicaban por sí mismo. Los grandes balances en efectivo se acumulaban en espera de la siguiente flota, aunque en el caso de 1781 fueron causados por la interrupción del comercio producida por la guerra con la Gran Bretaña. Para octubre de 1781 los 202 000 pesos que se tenían en marzo en efectivo, ya habían sido invertidos en la compra de mercancías. En lo que se refiere a la columna del pasivo, las deudas entonces vigentes representaban la suma de muchos pequeños créditos, la mayoría de los cuales habían sido concedidos a otros comerciantes y corresponsales. Meave mismo aparecía con frecuencia en la lista de acreedores, por ejemplo, en 1782 por la cantidad de 24 000 pesos. Los depósitos, tanto eclesiásticos como particulares, fueron relativamente cuantiosos durante los primeros años, pero después se hicieron insignificantes. En 1750 ascendían a 41 000, cantidad equivalente a un 16 por 100 del total de deudas, pero para 1757 ya se habían reducido a 9 163 pesos.

En general, la utilidad anual sobre el capital no era tan alta como podrían hacer suponer las condiciones monopolísticas del comercio colonial. Posiblemente el papel de la firma de Meave como abastecedora del banco de plata limitaba mucho sus ganancias. Pero sea cual fuere la explicación, el hecho es que si cancelamos los créditos incobrables para llegar a una idea más exacta del verdadero capital, las utilidades anuales de todos modos resultan bajas. En los veinte años transcurridos de 1738 a 1757, en promedio fueron del 9.6 por 100, y después de restarles la comisión de Meave, quedaban a lo más en el 5.6 por 100. Durante el decenio que comenzó en 1760 y más aun durante el siguiente, las utilidades sobre el capital se redujeron *tremendamente*. Como las ganancias de los años 1758-62 se pagaron al banco de plata, es muy probable que la firma haya sido desposeída de su capital por la otra casa. Por otro lado, después de la muerte de Meave en 1781, la familia Fagoaga descubrió con sorpresa, que su administrador había invertido 100.000 pesos de su propio capital en el negocio familiar. Por desgracia no podemos proponernos ninguna explicación de la risible ganancia del 3.2 por 100 sobre el capital. Aunque es cierto que Meave estaba viejo, se interesaba en asuntos públicos y cuidaba sobre todo sus propias inversiones, pero aun

TABLA 7

**INVENTARIOS Y COMPOSICION DEL CAPITAL DE LA CASA
MERCANTIL DE LA FAMILIA FAGOAGA, 1736-81 (EN PESOS)**

ENERO DE 1738

<i>Activo (*)</i>		<i>Pasivo (*)</i>	
Existencia en tienda	105 737	Deudas en cra. corriente	199 376
Créditos otorgados	230 238	Capital operativo en el úl-	
Créditos incobrables	37 911	timo inventario	162 205
		(Dic. 1736)	
	<u>373 886</u>		
menos	361 581		361 581
Utilidades del año	12 304	Utilidad sobre el capital no-	
Comisión de Meave	2 460	minal	7.5 %
Reinversión	9 844	Reinversión real	6 %
		Ganancias sobre el capital	
Nuevo capital operativo	172 049	después de cancelar cré-	9.9 %
		ditos incobrables	

FEBRERO DE 1762

<i>Activo (*)</i>		<i>Pasivo (*)</i>	
Existencia en tienda	106 223	Deudas actuales	280 428
Existencia en Jalapa	52 252	Capital operativo en el úl-	
Efectivo	100 077	timo inventario	374 508
Varios	13 430		
Créditos otorgados	90 591		654 936
Créditos a la otra casa y a la			
Hacienda de Zambrano	200 660		
Créditos incobrables	<u>121 939</u>		
	685 174		
menos	654 936		
	<u>30 237</u>		
Utilidad en tres años			
Comisión por administra-			
ción	10 079		
Utilidades	20 158		

FLOTA DE 1758: COMPRAS EN JALAPA

<i>Costos (*)</i>		<i>Ventas (*)</i>	
Costo de 740 tercios **	290 817	Venta de 632 tercios, etc.	294 518
Impuestos y transporte	26 305	103 tercios sobrantes	52 252
	<u>317 122</u>		
		menos	346 771
			<u>317 122</u>
		Utilidades en tres años	29 649
		Utilidad sobre precios de	
		costo	9.3 %

** tercios = buktos.

TABLA 7 (Continuación)

INVENTARIO DE MARZO DE 1781

<i>Activo (*)</i>		<i>Pasivo (*)</i>	
Existencias	164 148	Deudas actuales	371 232
Efectivo	202 891	Capital operativo en el úl-	
Varios	20 984	timo inventario	465 183
Créditos otorgados	175 875	(Enero 1770)	<u>836 415</u>
Créditos a la otra casa	241 737		
Créditos incobrables	138 221		
	<u>943 956</u>		
menos	<u>836 415</u>		
Utilidades de diez años	107 541		
Comisión por administra-	35 847	<i>Ganancias sobre el capital</i>	
ción	<u>143 388</u>	después de cancelar cré-	
Para la firma	71 694	ditos incobrables	3.2 %
		Producto anual menos gas-	2.1 %
		tos de administración	

DICIEMBRE DE 1736 A ENERO DE 1757

Incremento nominal anual medio	15 011	Utilidad sobre el capital	9.2 %
Incremento menos gastos de administración	10 599	Utilidad sobre el capital	6.5 %
Incremento real después de cancelar créditos incobrables	11 538	Utilidad sobre el capital	9.2 %
Incremento menos gastos de administración	7 117	Utilidad sobre el capital	5.6 %

FEBRERO DE 1762 A ENERO DE 1770

Utilidad sobre el capital	6.7 %
Utilidad sobre el capital menos gastos de administración	4.4 %

ENERO DE 1770 A MARZO DE 1781

Utilidad sobre el capital	3.2 %
Utilidad sobre el capital menos gastos de administración	2.1 %

(*) En esta y en las tablas siguientes en muchos casos los últimos dígitos no cierran en la suma. Esto se debe a la omisión de reales y granos, por ello los totales con frecuencia son mayores que la suma de sus partes.

tomando en cuenta estas consideraciones personales, sería apresurado aceptar la conclusión de que las ganancias mercantiles en general disminuyeron durante la década de 1770 a 1780; para ello sería necesario contar con más pruebas documentales.

Sin embargo, el inventario de 1762 registra la historia y las utilidades de una transacción en particular. En 1758 llegó a Veracruz la primera flota desde 1736, y cenero del año siguiente Meave anotó que había comprado en Jalapa mercancía por valor de 225 802 pesos. ¿Cómo logró financiar tal empresa? En primer lugar disminuyó las existencias que generalmente tenía en su poder, luego redujo los créditos otorgados en unos 100 000 pesos y aumentó sus deudas tomando prestados unos 34 937 pesos de su propio capital y 36 773 del banco de plata. Como comprueba el inventario de 1762, la empresa fué productiva: en tres años casi toda la existencia se vendió, declarándose una ganancia de casi 30.000 pesos, es decir, una utilidad del 9.3 por 100 sobre el precio de costo y los gastos efectuados durante tres años.

No sabemos qué suerte corrió el almacén de Fagoaga después de 1781, pero debe hacerse hincapié en que el fuerte capital que llegó a girar era el producto acumulado de por lo menos noventa años de constantes actividades mercantiles. Meave lo formó sobre los cimientos puestos por Fagoaga y Arosqueta, aunque ya en el decenio de 1780 a 1790 el nuevo clima comercial puso en entredicho la supervivencia de las antiguas casas mercantiles de la capital.

El segundo ejemplo nos permite examinar el efecto que tuvo la cédula del comercio libre sobre uno de los más importantes almaceneros. En alguna época durante la primera mitad del siglo XVIII, Juan de Castañiza, natural del Valle de Gordejuela en Vizcaya, estableció en México una casa de importación. Fue una empresa de mucho éxito, y antes de morir en 1771 Castañiza ya había comprado dos haciendas y un título de nobleza, el de primer marqués de Castañiza⁹⁷. Sin embargo, no abandonó sus actividades mercantiles, sino que confió a su sobrino Antonio Bassoco (1738-1814) la dirección de su empresa. Había hecho venir al sobrino cuando era muy joven, desde Gordejuela, para enseñarle el manejo del negocio. Bassoco recibía un salario de 3 000 pesos y la cuarta parte de las utilidades, de las que se deducían

⁹⁷ Ortega y Pérez Gallardo, *Historia genealógica*, I, *Marqués de Castañiza*, II, *Conde de Bassoco*.

los salarios del personal y gastos de administración. Habían decidido que en caso de desacuerdo no recurrirían nunca a los tribunales, sino que se someterían al arbitraje de los compadres vascos de Castañiza, Ambrosio de Meave y Manuel de Aladaco. Cuando Bassoco se hizo cargo de la firma en 1763, su capital de operación ascendía a 250 000 pesos, suma que hacia 1771 se había casi triplicado, al rebasar la cifra de 600 000 pesos, lo cual significó un crecimiento de un 20 por 100 anual aproximadamente. Esto demuestra el talento excepcional de Bassoco. En la tabla 8 aparece la lista de todos los bienes de Castañiza ⁹⁸.

El inventario corresponde a un conjunto de actividades económicas muy similar al de la firma de Meave. La relación precisa que existía entre la casa mercantil y las dos haciendas que Castañiza administraba es un poco oscura, más todavía porque entre las deudas de la firma se incluían 110 047 pesos que se debían al marqués y a su mujer. Quizá esta suma, junto con los 48 000 pesos que se debían a Meave, era la razón por la cual había un balance tan alto de efectivo y documentos, probablemente para compras masivas de mercancía a la llegada de la siguiente flota. El inventario no distingue entre deudas actuales y depósitos recibidos, pero parece que los depósitos clericales no ascendían a una suma apreciable en comparación al capital total de operación. La importancia de la tienda de Durango como salida hacia los mercados del norte es evidente; sus bajas existencias podían ser fácilmente resarcidas por el almacén; su administrador recibía una tercera parte de las ganancias del establecimiento.

La muerte de Castañiza hubiera acabado fácilmente con la casa. Es cierto que las haciendas estaban vinculadas, pero según la ley el resto de los bienes sucesorios tenían que ser divididos, la mitad para la viuda y el resto en partes iguales para los cuatro hijos. Así se llegó, después de liquidar ciertos legados particulares y de caridad, a que correspondía a cada hijo la cantidad de 90 000 pesos. El mismo Bassoco, que había reinvertido sus ganancias, tenía derecho a 80 000 pesos. A pesar de todo, la firma no se disolvió. La marquesa viuda pidió a su sobrino que siguiera al frente de la mitad del haber sucesorio que le correspondía a ella; el hijo mayor, heredero del título, se

⁹⁸ AGI, México, 1427, inventario de la sucesión hecho por Juan Lucas de Lassa-ga, 17 mayo 1769. El anterior y los siguientes detalles referentes a Bassoco han sido tomados de esta fuente.

dedicó a las haciendas del mayorazgo; los dos hijos menores emprendieron la carrera del sacerdocio, y la hija, María Teresa, se casó con su primo ⁹⁹. Con este feliz sistema, casi inevitable, Bassoco heredó los negocios de su tío.

En los años que siguieron, Bassoco amplió sus operaciones. La

TABLA 8
INVENTARIO DE LOS BIENES DE CASTAÑIZA, MAYO DE 1769
(EN PESOS)

Activo		Depósitos y deudas en cuenta corriente
Existencia en los almacenes de México, Jalapa y San Miguel el Grande	377 074	218 263
Efectivo y documentos	279 078	—
Tienda en Durango, existencias y créditos	62 150	—
Créditos otorgados:		
Recuperables	180 912	—
Perdidos	5 219	—
	<u>904 433</u>	<u>218 263</u>
Haciendas de Xochiapan, El Carmen y Ventorrillo	82 308	59 258
Hacienda de Agranla	57 016	—
Capital de operación	118 995	—
Existencias	25 174	—
Créditos otorgados:		
Recuperables	23 668	—
Perdidos	17 198	—
	<u>324 359</u>	<u>59 258</u>
Efectos personales	20 146	—
Varios	10 925	—
	<u>324 359</u>	<u>59 258</u>
GRAN TOTAL	1 259 863	277 521
Menos	<u>277 521</u>	
	<u>982 342</u>	
		Capital en el momento de contraer matrimonio (dote)
		62 939
		Ganancias de Bassoco
		<u>45 978</u>
Menos	<u>108 917</u>	108 917
Incremento neto	873 425	

⁹⁹ AGN, Vinculos 25/4-6, sin fecha.

tienda de Durango elevó el precio que pagaba por la plata, y con ello aumentó sus utilidades considerablemente. Cuando el padre Juan Agustín de Morfi visitó la ciudad, comentó favorablemente la política comercial tan inteligente de Bassoco ¹⁰⁰. En julio de 1781, entrando a un campo completamente diferente, Bassoco obtuvo del virrey el permiso de establecer pulquerías en la ciudad de México ¹⁰¹. Sin duda el maguey abundaba en las haciendas de la familia.

No obstante, el comercio libre puso fin a este desarrollo tan diversificado. En los años de 1783-5 Bassoco expidió a Cádiz más de medio millón de pesos en efectivo y en productos coloniales, pero esta empresa fue desastrosa. Recibió mercancías por valor de 250 000 pesos cuando el mercado se encontraba saturado; no logró vender a ningún precio una gran parte de los artículos recibidos, y del resto tuvo que deshacerse a bajos precios. Arregló que se le remitieran de Cádiz 100 000 pesos en letras de cambio, pero los otros 150 000 tuvo que dejarlos en España. Como muchos hombres de su generación, Bassoco, ante esta experiencia, decidió retirarse del comercio transatlántico. Más tarde comentó: «Estos continuos malos sucesos me han obligado a desistir de empresas mercantiles y tomar el arbitrio de imponer el caudal a réditos» ¹⁰². Siempre había girado su propio capital en los negocios, agregaba, pero a pesar de sus recursos y relaciones había sufrido pérdidas muy considerables.

Sin duda por el apoyo de la amistad de los Fagoaga (su cuñado se casó con una Fagoaga), Bassoco decidió entrar al campo de la producción de plata. Ya en 1784, en sociedad con otras dos personas, ofreció comprar las principales minas de Bolaños en la suma de 600 000 pesos ¹⁰³. Más tarde, en 1786, se convirtió en accionista principal de una compañía formada por los Fagoaga para desaguar la mina de Vetagrande, en Zacatecas. Además, invirtió en otras minas en Bolaños y en Capula, siempre, debemos observar, en sociedad con mineros expertos ¹⁰⁴, pero a pesar de esta precaución ninguna de estas inversiones fue inmediatamente productiva. Tuvo que esperar veinte

¹⁰⁰ Fray Agustín de Morfi, *Viaje de Indias y diario del Nuevo México*, ed., Vito Alessio Robles (México, 1935), pp. 75-6.

¹⁰¹ AGI, México, 1394, Mayorga a Gálvez, 31 diciembre 1782.

¹⁰² AGN, Consulado 123, Bassoco a Revillagigedo, 22 julio 1791.

¹⁰³ AGN, Minería 225, Oficiales de Real Hacienda de Pachuca al Virrey, 10 junio 1805.

¹⁰⁴ AGN, Minería 46/3, declaración del 31 enero 1805.

años para que sus acciones de Veragrande comenzaran a producirle una utilidad, y ya para entonces había invertido 235 000 pesos en la rehabilitación de la mina ¹⁰⁵. Ya en 1791 el desconsolado Bassoco comentó, refiriéndose a sus diversas empresas, que «nada hay menos seguro que los cálculos que se forman sobre gastos de minas y tiempo de sus obras, y esto retrae a muchos del ejercicio; el que comúnmente se mire con horror entre comerciantes» ¹⁰⁶.

Hacia 1800 se presentó una forma de inversión más segura. La muy transitada ruta entre Veracruz y México se vio favorecida de repente y durante la última década de paz del régimen colonial, con dos carreteras, que requerían ambas un gran capital que tenía que obtenerse del público. Bassoco aprovechó al máximo la oportunidad de obtener una utilidad garantizada sobre el capital, colocando 347 000 pesos en las obras del camino que estaba siendo construido por el Consulado, y otros 93 000 pesos en las del camino del Consulado rival de Veracruz ¹⁰⁷. Casi al mismo tiempo el Tribunal de Minas comenzó a patrocinar préstamos públicos a la Corona, sobre los que pagaba un interés del 5 por 100, también garantizado por sus ingresos procedentes de los derechos que pagaban los productores mineros. Ya en 1813 Bassoco, convertido en el contribuyente mayor, había invertido 633 000 pesos en estos fondos ¹⁰⁸. También hizo inversiones que le proporcionaban una seguridad más definitiva: invirtió 300 000 pesos en la construcción de la iglesia de Nuestra Señora de Loreto en México, bella estructura neoclásica ¹⁰⁹. También el patriotismo le empujó a la acción: en 1809 donó 200 000 pesos al acusado gobierno de la metrópoli, regalo que le valió recibir el título de conde de Bassoco, inferior únicamente en un grado al marquesado de su suegro ¹¹⁰. Murió en 1814, dejando a su viuda un haber sucesorio valuado en 2 646 000 pesos, que era una de las fortunas más considerables de la Nueva España. En muchos sentidos, Bassoco es el paradigma mismo del mercader colonial triunfante. Se diferenciaba de la

¹⁰⁵ AGI, México, Iturrigaray a Soler, 26 febrero 1805.

¹⁰⁶ AGN, Minería 87/6, Bassoco a Revillagigedo, 15 junio 1791.

¹⁰⁷ *Discurso sobre el testamento de la señora María Teresa Castañiza de Bassoco* (México, 1830), p. 17. AGI, México 2990, informe del agente del Consulado de Veracruz, 30 enero 1808.

¹⁰⁸ Howe, *The Mining Guild*, pp. 371-83. AGN, Minería 211/1, Lista de deudores reconocida por el Tribunal de Minería en 1826.

¹⁰⁹ Ortega y Pérez Gallardo, *Historia genealógica*. II, *Condado de Bassoco*.

¹¹⁰ Chávez Orozco, ed., *Comercio exterior*. Introducción, pp. XIV-XV.

generación de su tío en que su campo de inversión fue mucho más amplio, porque a Castañiza una sola hacienda le ofrecía seguridad, mientras que Bassoco aprovechó los nuevos fondos institucionales que, por lo menos hasta 1810, garantizaban ganancias seguras sobre el capital.

Tanto Bassoco como su cuñado, el segundo marqués, murieron sin descendencia, mientras que los otros dos hermanos, como hemos visto, se hicieron sacerdotes. Así pues, en una sola generación, la familia y el título de Castañiza se extinguieron. El destino de esta gran fortuna nos permite una conclusión interesante. En mayo de 1816 la Compañía de Jesús fue por fin restablecida en la Nueva España, patrocinada por dos canónigos del cabildo de la Catedral de México, llamados el doctor Juan José de Gamboa y el licenciado Andrés Fernández de Madrid. Ambos eran hijos de jueces de la Audiencia de México que, en 1767, se habían opuesto a la expulsión. Gamboa era hijo del famoso jurisconsulto minero, y los dos ancianos sacerdotes eran los únicos sobrevivientes de los largos años de exilio en Italia. La ceremonia inaugural se arregló de tal manera que cayera en 19 de mayo, el mismo día en que, cincuenta y seis años antes, el nuevo padre provincial José María de Castañiza había entrado a la Compañía; dicha ceremonia fue presidida por el obispo de Durango, Juan Francisco, tercer marqués de Castañiza¹¹¹. Estuvo presente en esta conmovedora escena la hermana de ambos, María Teresa de Castañiza, condesa viuda de Bassoco.

La familia ya no sobrevivió mucho tiempo a esta reunión: el padre provincial murió en noviembre, y apenas un año después su hermana le siguió al cementerio. En su testamento, esta viuda sin hijos legó la totalidad de su fortuna, estimada en más de tres millones de pesos, para el establecimiento de una obra pía, que debía ser una fundación caritativa cuyo objetivo sería promover y difundir el culto al Embarazo de la Virgen María. Se encargó a los jesuitas de dirigir la fundación. Ciertos objetivos secundarios, tales como la educación de los pobres y la ayuda a los enfermos, se mencionaban en el testamento, pero de todos modos, es claro que la dicha obra pía fue el medio

¹¹¹ Juan Francisco de Castañiza González de Agüero, *Relación del restablecimiento de la sagrada compañía de Jesús en el reino de Nueva España* (México, 1816). José María Ramírez, *Elegía de la muerte del padre José María Castañiza, provincial de la compañía de Jesús de México* (Guadalajara, 1817); Ignacio Lerdo de Tejada, *Discurso que en la profesa solemne del cuarto voto...* (México, 1816).

mediante el cual los jesuitas obtuvieron el control de los cuantiosos bienes de la sucesión de Bassoco ¹¹². La paciente acumulación de capital por parte de dos generaciones de comerciantes vascos llegó así a su fin tradicional, encontrando reposo en manos clericales, y la familia Castañiza desapareció casi totalmente, pues su único representante fue un sobrino peninsular de Bassoco que llegó de España a establecerse en México.

¹¹² *Discurso sobre el testamento de la señora María Teresa Castañiza de Bassoco, y también Observaciones sobre el acuerdo de la cámara de senadores... relativo a la testamentaria de la señora doña María Teresa Castañiza de Bassoco* (México, 1830).

CAPÍTULO II

LA ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION DE PLATA

La estructura y el desarrollo de la extracción de plata en México ofrece un tema de un interés absorbente sea para quien se ocupe de la historia económica como para el estudioso de México. Tanto el mercado doméstico como el equilibrio de la balanza exterior dependían de la producción de plata. Lucas Alamán, el más perceptivo historiador mexicano declaró en la primera década después de la independencia que «sin la minería, ni la agricultura, ni el comercio interior, ni ninguna ocupación industriosa, prosperan; la población disminuye o se estaciona, el consumo decae y a todo esto sigue el aniquilamiento del comercio exterior»¹. Por supuesto que escribía estas palabras todavía a la sombra del gran florecimiento minero del siglo XVIII, que hizo aumentar la producción más de cuatro veces². También recibía sus efectos la prosperidad de la Península: Vilar escribió a propósito de la industria textil catalana que «los productos catalanes en general eran intercambiados por cantidades crecientes de productos coloniales, particularmente por plata mexicana»³.

A pesar de su papel central tanto en la economía colonial como en el Imperio Español en su conjunto, la minería extractiva de plata en México no ha sido estudiada como amerita. Este descuido se explica en parte por la abrumadora excelencia del *Essai Politique* de Alexander von Humboldt, en el que aquel viajero prusiano, ayudándose con informes oficiales y particulares, por su propia experiencia y conocimientos de minería, y por sus visitas a Guanajuato y a otros centros, reunió suficientes datos para hacer una descripción de primera mano de la minería, que nunca ha sido superada. Desde entonces, todos los

¹ United Mexican Mining Association, *Reports* (Londres, 1827-9), Informe de Lucas Alamán y Lewis Agassiz, 7 marzo 1827, apéndice I, p. xxiv; de aquí en adelante citado como UMMA, *Reports*.

² Humboldt, *Ensayo político*, p. 386.

³ Vilar, *La Catalogne*, III, 12.

estudiosos de la economía mexicana en el siglo XVIII han parafraseado a Humboldt en mayor o menor grado. Unicamente Sir Henry Ward, primer ministro británico enviado a México, en razón de sus extensos viajes, pudo agregar algún dato de importancia. Sin embargo, detrás de la brillante obra de Humboldt se encuentra una amplia literatura mexicana de la cual el Barón tomó datos copiosamente. Los *Comentarios a las ordenanzas de minas* de Francisco Javier de Gamboa daban un cuadro completo de los problemas y condiciones de la minería en los años anteriores a las grandes reformas emprendidas por José de Gálvez. Por lo menos cuatro libros fueron escritos sobre el método de amalgamación para el beneficio del mineral argentífero ⁴. En muchos aspectos Humboldt era tan bueno como las fuentes a que recurría, y las obras de Gamboa, Joaquín Velásquez de León, José Garcés y Eguía, y Fausto de Elhuyar eran excelentes. Humboldt llegó a México durante la escena final del desarrollo de la minería, apenas siete años antes de que el telón ocultara para siempre a la sociedad colonial que la había creado. Sin embargo, el crecimiento de la producción de plata fue una tendencia continua que duró todo el siglo: en cada decenio, con la excepción del de 1760 a 1770, se registró un aumento en la producción sobre el anterior. Además, esta expansión obedecía a mecanismos internos; al contrario de la que tuvo lugar en el siglo XIX, no fue dependiente ni de la técnica ni del capital extranjeros, ni tampoco fue, como la del siglo XVI, un florecimiento espontáneo por consecuencia de nuevos descubrimientos. Muchos de los antiguos campos mineros, tales como los de Zacatecas, Real del Monte y Guanajuato, siguieron siendo productores importantes hasta el fin de la colonia ⁵. (Véase figura 1.)

El gran florecimiento del siglo XVIII es más interesante si nos detenemos a pensar que, en general, las industrias extractivas, cuando envejecen, tienen que enfrentarse al agotamiento de los recursos, que las somete a una ley de disminución de ingresos ⁶. Generalmente se extrae en primer lugar el mineral más rico; después, al irse ha-

⁴ Juan Moreno y Castro, *Arte o nuevo modo de beneficiar los metales de oro y plata* (México, 1758). Francisco Javier de Sarria, *Ensayo de metalurgia* (México, 1784). José Garcés y Eguía, *Nueva teoría y práctica del beneficio de los metales* (México, 1802). Frederick Sonneschmid, *Tratado de amalgamación de Nueva España* (París, México, 1825).

⁵ Véase Humboldt, *Ensayo político*, p. 333.

⁶ Harold Barger y Samuel H. Schurr, *The Mining Industries 1899-1939. A Study of Output, Employment and Productivity* (Nueva York, 1944), pp. 250-3.

ciendo más profundos los tiros, los costos de producción aumentan y la calidad del mineral decae, hasta que llega el momento en que la extracción deja de ser productiva. Al llegar a esta fase, las minas son abandonadas hasta que se inventa una nueva técnica que reduzca los costos, o hasta que aumente el precio en el mercado del metal producido. Los metales preciosos, además, tienen la desventaja de que las variaciones en su precio se miden por siglos y no por años y meses. Por otra parte, México no contaba con un mercado de la plata,

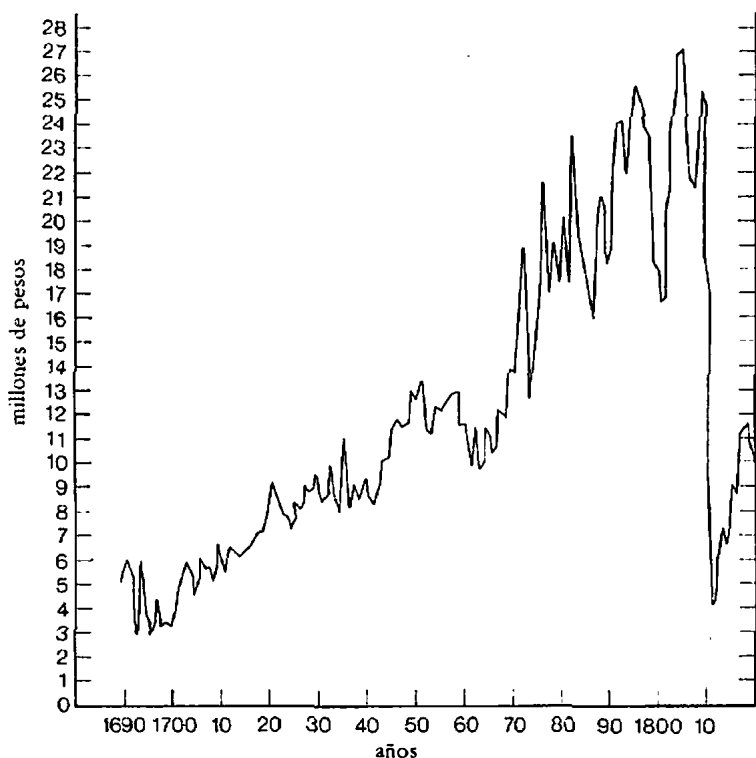


Figura 1. *Acuñaación de oro y plata en México, 1690-1820*

estrictamente hablando, porque la ley disponía que toda la plata fuera acuñada; el producto final de la minería era la moneda, principalmente las famosas piezas de a ocho conocidas por todos. Así pues, sus minas y haciendas de beneficio no hacían más que producir la materia

prima con la que se manufacturaba el producto terminado, y como la moneda de plata tenía una equivalencia fija con el oro que no sufrió cambios apreciables durante el curso del siglo XVIII, así el minero mexicano no recibió nunca ningún estímulo del mercado que abastecía ⁷. El análisis de la minería puede dejar a un lado la función de la demanda, porque la curva de la producción fue determinada solamente por los cambios en la organización de los abastecimientos.

La producción minera de plata en México estaba organizada según tres fases: la extracción de la tierra del mineral que contenía la plata; el beneficio, o sea la separación de la plata del metal básico, y la conversión final de la plata en moneda. La estructura de la producción se definía tanto por las técnicas empleadas, como por los reglamentos y exigencias fiscales de la Corona de España. Analizaremos en primer lugar esta estructura, para describir después, en un capítulo siguiente, el desarrollo de las empresas individuales. Debe hacerse notar que la mayor parte de nuestro material se refiere a la segunda mitad del siglo XVIII.

I

Según una definición legal de 1584, una mina incluía un rectángulo de terreno de 120 por 60 varas situado sobre ella ⁸. Como era de esperarse, esta disposición dio lugar a innumerables disputas referentes a la demarcación interior, de manera que en el nuevo código de 1783 se dispuso que todas las minas, ya entonces ampliadas a una superficie de 200 por 100 varas, fueran medidas bajo tierra a lo largo de la veta real ⁹. Aunque se prohibió a los particulares que poseyeran minas contiguas, las compañías sí recibieron permiso de ser dueñas de grupos de cuatro minas, y la persona que descubriera una veta, de tres ¹⁰. Ya en el siglo XVIII se acostumbraba dividir una mina en 24 participaciones, pero la propiedad dependía de la explotación efectiva porque la Corona siempre consideró todos los metales preciosos como de su real propiedad, concediendo sólo los derechos de explotación. Todos los mineros tenían que hacer sus denuncias en la Real Hacienda más cercana. Si no tenían por lo menos cuatro trabajadores

⁷ Humboldt, *Ensayo político*, pp. 426-7.

⁸ Gamboa, *Comentarios*, pp. 495-7.

⁹ Beleña, *Recopilación*, II, 242-5.

¹⁰ *Ibid.*, II, 258-62.

en el lugar durante un período de más de cuatro meses consecutivos, perdían la propiedad. Cualquier recién llegado quedaba entonces libre de abrir otra vez la mina ¹¹.

Pero tales definiciones escritas nos dan muy poca luz sobre las tres mil minas que aproximadamente se encontraban en la Nueva España en las últimas décadas de la Colonia. La mayoría de ellas eran explotadas mediante un tiro perpendicular perforado directamente desde la superficie hasta la veta. Ciertamente es que en los primeros años y en algunas regiones, especialmente en Chihuahua, estos tiros eran poco más que pequeños hoyos en la tierra ¹², pero durante el siglo XVIII la minería profunda se convirtió en la regla general. En Parral, según registros existentes, ya había a principios de siglo minas de 130 varas de profundidad ¹³, y hacia 1797 la Compañía de Vetagrande en Zacatecas había perforado un tiro general de 360 varas ¹⁴. La importancia del cambio se observa en el caso de la Veta Vizcaína en Real del Monte, donde la profundidad de los tiros aumentó de 143 varas entre 1720 y 1730, a 375 hacia 1790 ¹⁵. No son éstos casos aislados, pues en Bolaños, campo descubierto apenas en 1736, el tiro principal tenía hacia 1790 una profundidad de 272 varas, y la compañía propietaria tenía el proyecto de perforarlo hasta 345 varas ¹⁶. Sin embargo, ninguna de estas minas podía compararse con la de La Valenciana, que hacia 1810 alcanzó en su tiro una profundidad de 635 varas, la mayor del mundo en ese momento ¹⁷. En Europa, por ejemplo, las profundidades eran mucho menos espectaculares: en las minas de carbón en Inglaterra la mayor profundidad de tiro era de 331 varas, y en las minas de plata de Sajonia, de 393 varas ¹⁸. Además, el tiro de La Valenciana fue construido a una escala que sorprendió a los observadores extranjeros, ya que tenía 32 varas de circunferencia.

Aunque muchas minas mexicanas superaban con facilidad a las

¹¹ *Ibid.*, II, 249.

¹² Gamboa, *Comentarios*, pp. 503-4.

¹³ West, *The Mining Community*, pp. 17-18.

¹⁴ AGI, México, 1587, declaración del administrador de la compañía de Vetagrande, marzo 1797.

¹⁵ Humboldt, *Ensayo Político*, pp. 361-2; José Rodrigo de Castelazo, *Manifiesto de la riqueza de la negociación de minas conocidas por la Veta Vizcaína* (México, 1820), p. 18.

¹⁶ AGN, Minería 94/5, agente de la compañía de Bolaños, 18 julio 1791.

¹⁷ Ward, *México in 1827*, II, 440.

¹⁸ T. S. Ashton y Joseph Sykes, *The Coal Industry of the Eighteenth Century* (Manchester, 1964), p. 10; Humboldt, *Ensayo político*, pp. 353, 356.

européas en profundidad y magnitud, tecnológicamente estaban muy atrás. Ni siquiera se intentaba excavar mediante secciones medidas, y como no se perforaban casi ningunas galerías horizontales, muy poco podían usarse las mulas y los vagones. Por el contrario, de la base de tiro una serie de pequeños túneles de extracción partían en todas direcciones, siguiendo la veta hasta donde fuera ¹⁹. Una mina mexicana era parecida a un inmenso panal de abejas, como una especie de ciudad subterránea formada por callejuelas torcidas y en ángulo que existían a diferentes niveles.

Para extraer el mineral de la veta los mineros empleaban un zapapico de hierro, pesado y poco manejable, que era un instrumento casi idéntico al que los mineros alemanes introdujeron en el siglo XVI ²⁰. Muchas minas establecían bajo tierra fraguas para afilar esta herramienta. Los zapapicos en su mayor parte eran forjados localmente, con barras de hierro importadas de España, pero durante el siglo XVIII el minero mexicano comenzó a usar la pólvora cada vez más ²¹. No se sabe a ciencia cierta cuándo se difundió el uso de cartuchos explosivos en la Nueva España, pero la tradición local de Guanajuato afirma que José de Sardaneta, propietario de Rayas, fue el primer mexicano que usó esa técnica. Lo que sí es cierto es que en 1730 la *Gaceta de México* llamaba la atención sobre un tiro de 152 varas de profundidad, que Sardaneta había perforado en dos años usando «a fuerza de barrenos y pólvora» ²². Es evidente que los explosivos todavía no se usaban comúnmente, porque en 1732 Zacatecas no compró más que 1 300 libras de pólvora, cantidad insignificante si la comparamos con las 90 000 libras que Guanajuato consumió anualmente de 1778 a 1795 ²³. Aquí encontramos, entonces, una importantísima innovación técnica que abarató e hizo más eficientes las operaciones mineras. La rápida perfora-

¹⁹ Howe, *The Mining Guild*, apéndice C, pp. 472-89.

²⁰ Humboldt, *Ensayo político*, p. 366.

²¹ West, *The Mining Community*, p. 21. Podemos señalar que la explosión subterránea se empleó por primera vez en Cornwall en 1689. En la industria de extracción del carbón la técnica se propagó lentamente durante el siglo siguiente. Véase John Rowe, *Cornwall in the Age of the Industrial Revolution* (Liverpool 1953), p. 9; Ashton y Sykes, *The Coal Industry*, p. 150.

²² *Gacetas de México*, ed. Francisco González de Cossío (3 vols., 1944-50), I, 262.

²³ Joseph de Rivera Bernárdez, Conde de Santiago de la Laguna, *Descripción breve de la muy noble y leal ciudad de Zacatecas* (México, 1732), p. 46. AGI, México, 1795, informe de los oficiales de Real Hacienda de Guanajuato, 27 octubre 1795.

ción de grandes tiros y de galerías en el siglo XVIII fue una consecuencia de la introducción del uso de la pólvora para explosiones subterráneas.

Una vez que se extraía el mineral y que se ponía en grandes recipientes de cuero, los cargadores (llamados tenateros) lo llevaban a hombros, trepando a gatas por los túneles y subiendo por angostas escalerillas hasta llegar a la base del tiro vertical. Desde ese punto, en las minas menos profundas, es decir, las que no llegaban a cien varas, o en las regiones más remotas, como Durango, los tenateros tenían que subir utilizando una burda escalera de mano hecha de madera ²⁴. Los accidentes no eran raros, porque cargaban un peso que fluctuaba entre 150 y 330 libras ²⁵. Gemelli Carreri, que realizó la ascensión por una de esas escaleras de mano sin llevar carga alguna, relató que esa fue la experiencia más aterradora de su vida ²⁶.

Sin embargo, en el curso del siglo XVIII, al hacerse más profundos los tiros, los mineros mexicanos comenzaron a emplear malacates —mecanismos simples de una polea que eran tirados por grupos de cuatro o más mulas o caballos— para subir el mineral por el tiro hasta la superficie. Eran máquinas de mayor complejidad relativa, con poleas sobre la salida del tiro y el carrete situado a casi 30 metros de distancia. En la Mina de Mellado en Guanajuato en 1738, los dos malacates que se empleaban en su tiro principal subían cada 24 horas unas 400 cargas de mineral, cada una de ellas con un promedio de 875 libras ²⁷. Esta cifra fue más tarde superada en Real del Monte, donde en 1803 Humboldt encontró grandes malacates de doble tamaño, operados por grupos de ocho caballos, con una capacidad de carga de 1 250 libras ²⁸. Este informe concuerda con la estimación de las minas de Veta Vizcaína, las cuales, según se afirma, cuadruplicaron durante el curso del siglo su capacidad de subir mineral ²⁹. De todos modos, muchos mineros encontraban más práctico instalar varias máquinas de mediana capacidad en un solo tiro. En este aspecto, La Valenciana era la mina mejor equipada, ya que contaba con no menos de ocho

²⁴ Ward, *México in 1827*, II, 565.

²⁵ Luis Chávez Orozco, ed., *Conflicto de trabajo con los mineros de Real del Monte, año de 1766* (México, 1960), pp. 36, 104, 228; Humboldt, *Ensayo político*, p. 368.

²⁶ Gemelli Carreri, *Viaje*, I, 130.

²⁷ *Gacetas de México*, III, 143.

²⁸ Humboldt, *Ensayo político*, p. 369.

²⁹ Castelazo, *Manifiesto*, p. 26.

malacates colocados alrededor del tiro principal, el cual tenía sección octogonal ³⁰. Ya en esa época era bastante común que en un solo tiro hubiera cuatro máquinas, mientras que al principio de aquel período no se encontraban más de una o dos.

Estos malacates de mayor capacidad se hicieron más y más necesarios al aumentar los problemas de desagüe, porque las minas más profundas estaban en constante e infructuosa lucha contra la elevación del nivel acuático, hasta el grado de que sacaban a la superficie mucha más agua que mineral, escribió el jurisperito mexicano Francisco Javier de Gamboa, «son las aguas la mayor borrasca de las minas: elemento insuperable en sus mismos manantiales; picándose las vetas de las minas, saltan las aguas, como la sangre de las venas del cuerpo» ³¹. Únicamente existían dos métodos para desaguar una mina. El primero y más sencillo era perforar un tiro, o conectar el que ya existiera, con el lugar desde donde manaba el agua, más allá de la zona de trabajo, y luego bajar el nivel mediante el uso diario del malacate. Si no tenía lugar una inundación continua, este sistema era posible y con frecuencia tenía éxito, pero si el escurrimiento de agua era fuerte, continuo y persistente, y no una simple filtración, entonces el uso de los malacates únicamente para desaguar podía ser prohibitivamente costoso. El conde de Regla calculó que en 1801 gastó 250 000 pesos durante ese año para mantener 28 máquinas semejantes en sus minas de Veta Vizcaína ³². El costo principal, aparte de la inversión inicial, era el forraje y mantenimiento de las mulas o caballos. Los 14 o 16 malacates existentes en la Mina de Quebradilla en Zacatecas requerían 800 caballos para su operación, y estos animales consumían 18 000 fanegas de maíz al año ³³. La Mina de Veta Negra en Sombrerete requería 29 malacates operados por mil caballos ³⁴. Cualquier aumento en el precio del maíz o del forraje fácilmente ponía al minero al borde de la bancarrota. Además, el cuero y el cordel de los recipientes, que no duraban más que ocho días, eran muy caros. En 1732 los mineros de Zacatecas gastaron

³⁰ Ward, *México in 1827*, II, 444.

³¹ Gamboa, *Comentarios*, p. 354.

³² Juan Burkart, «Memoria de la explotación de las minas de Pachuca y Real del Monte», *Anales de la Minería* (México, 1861), p. 44.

³³ Carlos de Berghes, *Descripción de la terranía de Zacatecas formada por I. A. Bustamante* (México, 1834), pp. 22-3.

³⁴ AGI, México, 2214, Marqués del Apartado al Virrey, 31 agosto 1793.

14 000 pesos en tales artículos, suma similar a la que pagaron por el hierro y el acero usado ese año (14 960 pesos) y muy superior a lo que gastaron en pólvora (1 950 pesos) ³⁵.

El segundo método de desagüe era excavar un túnel horizontal o en declive al pie de la montaña bajo la veta. Así el agua corría naturalmente dejando la veta relativamente seca. En América se usaban los túneles inclinados en las minas desde el siglo XVI; en 1617 se terminó uno en San Luis Potosí que tenía 250 varas de largo ³⁶. Pero para el minero mexicano un túnel de desagüe de esa clase exigía un gasto inicial demasiado fuerte, y representaba una inversión fija de capital, llamada en obras muertas, sobre la que no había utilidades inmediatas. Su perforación exigía además una cierta habilidad matemática, la cual no siempre poseía, y, lo que es más importante, presuponía un apoyo financiero a una escala que muy rara vez tenía. El túnel de desagüe de más éxito en la Nueva España fue el que se perforó en la Mina de Veta Vizcaína en Real del Monte. Aunque los trabajos dieron principio en 1739, los errores de cálculo hicieron que se desperdiciaran nueve años de labores; pasaron otros veinte años antes que el propietario, el conde de Regla, obruviera algún beneficio del proyecto. Hacia 1781 el túnel llegó a una longitud de 2.881 varas. Era un hecho sin discusión que la longitud del túnel de desagüe de Veta Vizcaína fue tan excepcional como la profundidad del tiro principal de La Valenciana ³⁷. En Tehuilotepic, por ejemplo, José Vicente de Anza se tardó doce años en perforar un túnel de sólo 477 varas de longitud ³⁸.

Ambos métodos eran costosos, y como tanto los tiros como los desagües representaban fuerte inversión en obras muertas, muchos mineros, acostumbrados a obtener utilidades fáciles y rápidas, preferían abandonar sus minas y no arriesgar su fortuna. El período de productividad de una mina mexicana era breve; pocas tenían un ciclo de producción ininterrumpida de más de treinta años, y la mayor parte de ellas experimentaban cortos períodos de un florecimiento sorprendente, alternados con otros de inundaciones y abandono. En el curso del siglo XVIII la Mina de Quebradilla, en Zacatecas tuvo tres

³⁵ Rivera Bernárdez, *Descripción breve*, pp. 44-6.

³⁶ Borah, *Un gobierno provincial*, pp. 538-9.

³⁷ Castelazo, *Manifiesto*, pp. 10, 16; Gamboa, *Comentarios*, p. 477.

³⁸ AGI, México, 1571, Branciforte a Gardoqui, 28 septiembre 1793.

períodos de florecimiento distintos, separados entre sí por largos años de inundación. La Veta Vizcaína de Real del Monte fue abandonada tres veces por sus dueños. La minería seguía siendo un juego con la suerte, y la clave para no perder era saber en qué momento retirarse.

Dentro de este ciclo de descubrimiento, abandono y rehabilitación, existía la tendencia de que las unidades de producción se hicieran más grandes. En parte, esto sencillamente significaba que los tiros se excavaban a mayor profundidad, pero también tuvo el efecto de que, a fines del siglo, muchas minas contaran con varios tiros. La Mina de Pabellón, en Sombrerete, constaba de cinco tiros «tres de ellos con caja para ocho malacates cada uno, los otros dos, uno para cuatro, y el restante para dos»³⁹. La de Quebradilla tenía cinco tiros y la de La Valenciana en Guanajuato cuatro⁴⁰. En varios campos mineros toda la veta estaba bajo el dominio de una sola empresa. Hacia 1762 el conde de Regla, por ejemplo, había unificado todas las minas situadas a lo largo de la Veta Vizcaína, con lo cual llegó a dominar efectivamente todo el campo de Real del Monte⁴¹. En 1761 las cinco principales minas de Bolaños fueron abandonadas a raíz de ciertos graves problemas de desagüe. Durante el decenio de 1770 a 1780 fue desaguada toda la veta, y Antonio de Bibanco unificó su explotación⁴². En gran medida, esta tendencia hacia la existencia de empresas mayores fue impuesta por los altos costos de las obras de desagüe, y tuvo por resultado un sorprendente aumento en el número de personas empleadas. Hacia 1766 el conde de Regla contrató a más de un millar de trabajadores en Veta Vizcaína⁴³, cantidad entonces enorme, pero en 1809 la Mina de Quebradilla requería 2.550 hombres y mujeres, y La Valenciana, que era la empresa más grande de la Nueva España, tenía más de 3 000 trabajadores⁴⁴.

Así pues, a fines del siglo la minería mexicana había alcanzado un alto grado de concentración. Sus firmas mayores representaban in-

³⁹ AGI, México, 2214, Marqués del Apartado al Virrey, 31 agosto 1793.

⁴⁰ Berghes, *Descripción*, pp. 22-3; Humboldt, *Ensayo político*, pp. 553-4.

⁴¹ Chávez Orozco, ed., *Conflicto de trabajo*, p. 71.

⁴² Véase D. A. Brading, «La minería de la plata en el siglo XVIII: El caso Bolaños», *Historia mexicana*, 18 (1969), 3, pp. 317-33.

⁴³ AGN, Minería 148/8, informe de Pedro José de Leoz, 11 junio 1770.

⁴⁴ Berghes, *Descripción*, pp. 22-3; Humboldt, *Ensayo político*, pp. 553-4.

versiones fijas de más de un millón de pesos y empleaban a más de mil trabajadores. Tales minas se encontraban en la mayoría de los campos mineros de importancia y producían una parte muy considerable de la plata extraída y refinada en la Nueva España. Sin embargo, quizá nunca existieron al mismo tiempo más de unas 10 empresas de esa clase. Además, los campos de menor importancia también producían una gran cantidad de plata, así como las minas solitarias. A menudo tenían una vida efímera, pero en esos períodos tan breves algunos inversionistas especuladores obtenían frecuentemente grandes utilidades. Había una gran gama de importancia en las unidades productivas de la minería, una escala que iba desde un simple hoyo en la tierra, hasta La Valenciana. No existía una mina típica, de media importancia en México.

II

Como todavía tenía que definirse la explicación química de cómo se separaba la plata del metal básico, el beneficio siguió siendo un arte altamente empírico, casi como la cocina, regido por las pruebas prácticas de los trabajadores experimentados. Podían usarse dos métodos: o un hervor rápido, o uno lento. El metal podía fundirse o someterse a un lento procedimiento de amalgamación con mercurio. De la calidad del mineral dependía cuál proceso era preferible para beneficiarlo. Todo el mineral de alta ley, y el que contenía plomo o sus compuestos, se fundía, mientras que el de contenido mediano o bajo de plata, se amalgamaba.

Aunque la fundición era un procedimiento relativamente sencillo, requería un equipo complicado. El mineral era triturado por un molino de piones hasta tener el tamaño de granos de arroz, después de lo cual se metía en pequeños hornos para eliminar el azufre. Entonces se mezclaba con litargirio ^a, plomo y escoria volcánica, y se fundía en una gran fragua castellana de forma piramidal. Según las costumbres locales y la calidad del mineral, se agregaban otros materiales, tales como el hierro o piritas de cobre, en esta fase central del procedimiento, y al final, el compuesto resultante era de nuevo fundido en fraguas pequeñas para separar el plomo de la plata ⁴⁵. Toda la

^a Oxido de plomo.

⁴⁵ West, *The Mining Community*, pp. 27-30. También Garcés, *Nueva teoría*, p. 105.

fundición tardaba únicamente 24 horas, de modo que ofrecía al minero la ventaja de disponer inmediatamente de la plata. Después de 1780 se mejoró el sistema, pues José Garcés y Eguía, agregando una sal conocida en la región como tequesquite, logró separar más plata ⁴⁶. Porque el defecto principal de este método era su ineficiencia, ya que no extraía toda la plata contenida en el mineral. Además era caro por la gran cantidad de carbón vegetal y leña que consumían las fraguas, combustibles que en los centros mineros más viejos tenían que traerse desde grandes distancias porque los campos circundantes hacía mucho que estaban desforestados. También se requerían grandes cantidades de compuestos químicos, plomo, litargirio y sales, y algunos centros mineros, tales como Guanajuato, Pachuca y Zacatecas, tenían que traer los compuestos de plomo desde San Luis Potosí o Zimapán ⁴⁷. El tequesquite se producía en Peñón Blanco, entre Zacatecas y San Luis Potosí, de manera que el descubrimiento de Garcés fue aplicado principalmente en los centros que no estaban muy alejados de aquel lugar. Por todas estas razones el procedimiento de fundición sólo era claramente productivo cuando se aplicaba a minerales de alto contenido de metal, y por ello fue usado más comúnmente en los primeros tiempos de la bonanza minera. También se encontraban a veces, en todos los campos mineros, trozos casi sólidos de plata para los que únicamente la fundición era posible. En San Luis Potosí y Mazapil el mineral que tenía un alto contenido de plomo no se prestaba a la amalgamación con mercurio; consecuentemente, en Zimapán se usaba la fundición para todo el mineral ⁴⁸.

La amalgamación o método de patio, era un procedimiento largo y complicado que duraba hasta dos meses. El mineral era primero triturado en un molino de pisones operado hidráulicamente en Pachuca y en otros campos montañosos, o más generalmente con mulas en los lugares situados más al norte. El mineral, una vez triturado, era llevado a un arrastre o tahona, artefacto movido por mulas, en el que era reducido a un polvo fino mediante el movimiento constante de las pesadas piedras de los arrastres ⁴⁹. A veces se agregaba el mercurio en esta fase. Entonces se extendía el polvo en un patio, dividiéndolo en

⁴⁶ Garcés, *Nueva técnica*, pp. 49-60.

⁴⁷ *Representaciones del real tribunal de minería a favor de su importante cuerpo* (México, 1781), p. 6.

⁴⁸ Ward, *Mexico in 1827*, II, 335-6.

⁴⁹ Bergher y Schurr, *The Mining Industries*, p. 151.

montones de entre 15 y 32 quintales. Se le agregaban y mezclaban cuidadosamente los siguientes materiales por cada quintal de mineral: de 2 $\frac{1}{2}$ a 5 libras de sal, de 5 a 10 de piritas de cobre y de 15 a 20 de cal. Se agregaba mercurio no en proporción al mineral, sino de la cantidad de plata que se esperara extraerle: se necesitaban de 3 a 4 libras de mercurio para separar un marco de plata ⁵⁰.

Los montones permanecían en el patio, al aire libre, donde se les revolvió de cuando en cuando. Los expertos vigilaban la mezcla y le agregaban mercurio, sal o piritas de cobre según el avance que, en su opinión, hubiese logrado el procedimiento. Este podía durar de dos semanas a dos meses, variando según ciertos factores, tales como la estación del año, la calidad del mineral y la habilidad de los trabajadores. La mezcla resultante se lavaba entonces en el río, porque las haciendas de beneficio se situaban invariablemente junto a una corriente. Una vez eliminado el metal base, la amalgama que quedaba era fundida para separar el mercurio de la plata. Se perdía en todo el procedimiento aproximadamente una cuarta parte del mercurio usado, o sea unas 12 onzas por cada marco de plata producido ⁵¹.

El método de patio, desde su introducción en el siglo XVI hasta que fue definitivamente eliminado en el último decenio del siglo XIX por el procedimiento de cianuro, sufrió pocas o ningunas modificaciones importantes. En 1802 José Garcés y Eguía, experto refinador, explicó: «Lo general del beneficio se llega hasta cierto punto, del cual no se ha pasado en el espacio de dos siglos.» ⁵². Es difícil encontrar ocasiones en que haya habido algún cambio significativo. En 1777 José Cornejo empleó mulas en lugar de hombres para revolver los montones de mineral que se encontraban en la fase del patio. Hizo pruebas en Taxco y demostró que las mulas eran más económicas y efectivas que los hombres. Este «invento» fue rápidamente aceptado por todos los mineros ⁵³.

En Catorce el método *de cazo*, inventado en el siglo XVII por el peruano Alonso Barba, era usado comúnmente. Consistía en la amalgamación rápida por medio del fuego. El mineral se ponía en un cazo o caldero de cobre, se mezclaba con sal, piritas de cobre y mercurio, y

⁵⁰ Garcés, *Nueva teórica*, p. 91.

⁵¹ Sonneschmid, *Tratado de amalgamación*, p. 53.

⁵² Garcés, *Nueva teórica*, p. 105.

⁵³ AGI, México, 1577, Branciforte a Gardoqui, 26 junio 1796.

se fundía; pero no se lograba separar así más que dos tercios o a lo más tres cuartos de la plata, además el cobre del recipiente tendía a mezclarse con ella ⁵⁴. Por estas razones fue un método que no alcanzó gran difusión, aunque un minero vasco, Francisco Miguel de Aguirre, lo mejoró sustancialmente en Catorce, durante la última década del siglo XVIII. Instaló dos discos circulares de cobre en la fragua, sobre los que se ponían las cantidades acostumbradas de mercurio, sal, piritas de cobre y mineral. Durante las 24 horas de fundición los discos de cobre daban vueltas bajo la acción de una palanca movida por mulas. No se perdían más que de cuatro a seis onzas de mercurio por marco de plata producido, pero la inversión inicial era alta, ya que se necesitaban unos 80 quintales de cobre para construir la fragua. Así se extraía del mineral aproximadamente la mitad de su contenido de plata, y entonces el que quedaba era sometido normalmente al procedimiento de patio ⁵⁵.

No hubo ninguna innovación técnica dramática que transformara los métodos de beneficio de la minería mexicana de la plata, pero ya en el siglo XVIII las técnicas existentes habían sido mejoradas y se empleaban más generalmente; además, los pequeños progresos en la tecnología se difundían más rápidamente en toda la minería. Lo que T. S. Ashton escribió sobre la extracción de carbón en la Gran Bretaña es igualmente aplicable a la minería de la plata mexicana: «Ninguna chispa de genio de un Crompton, ni de un Watt, pudo transformar la extracción del carbón. La penosa experiencia de hombres comunes y corrientes tenía que ir poco a poco elaborando métodos mejores, y toda nueva idea o invención se propagaba de una mina a otra o de un centro minero a otro con lentitud» ⁵⁶.

No obstante, durante el decenio de 1770 a 1780 ocurrió un cambio significativo en el sistema de refinación. Anteriormente hasta un tercio de la plata se producía mediante la fundición, mientras que en 1803 Humboldt afirmó que por cada parte que se fundía tres y media se amalgamaban, tal era la proporción en el uso de ambos métodos, y por aquel mismo tiempo Garcés y Eguía calculó que no se

⁵⁴ Garcés, *Nueva teórica*, pp. 80-2; Sonneschmid, *Tratado de amalgamación*, pp. 88-9.

⁵⁵ AGI, México, 2247, informe de Fermín de Reigadas, contenido en carta de Pablo Macedo y Gama a Soler, 23 agosto 1803; Ward, *Mexico in 1827*, II, 512-15.

⁵⁶ Ashton y Sykes, *The Coal Industry*, p. 12.

⁵⁷ Humboldt, *Ensayo político*, p. 372; Garcés, *Nueva teórica*, p. 126.

fundía más del 13.5 por 100 ⁵⁷. Puede demostrarse que la década decisiva en este cambio fue la de 1770 a 1780 con los registros de la Real Hacienda de Zacatecas. En 1763, el 34 por 100 de la plata producida en aquel campo se refinaba mediante fundición; en 1770, el 30 por 100; en 1779 el 18 por 100; y hacia 1806, únicamente el 15 por 100 ⁵⁸. Este cambio hacia un método de beneficio más eficiente se debió principalmente a la real decisión de reducir a la mitad el precio del mercurio. Esta disminución en el precio del componente más costoso necesario en el proceso de amalgamación permitió que se aplicara el método a minerales de ley mucho más baja. Hablaremos de los efectos precisos de esta reducción un poco más adelante.

Una hacienda de beneficio era una gran empresa industrial. Requería un galerón para los molinos de pisones y arrastres, un gran patio, fraguas, cobertizos de lavado, almacén para el mercurio y otras materias primas, y establos para las mulas. Generalmente se estimaba su importancia por el número de arrastres que existían, ya que esto era la medida de su capacidad de beneficiar mineral. Las unidades de producción, como también en la extracción minera, variaban mucho, desde un pequeño caserío con uno o dos arrastres o una pequeña fragua, hasta un gran establecimiento fortificado. También como en la minería las empresas de beneficio tendieron a hacerse más grandes durante el curso del siglo. El conde de Regla, para refinar el mineral producido en las minas de Veta Vizcaína, mandó construir una gran hacienda de beneficio que costó casi medio millón de pesos ⁵⁹. Tenía 24 arrastres movidos por ruedas hidráulicas, fraguas y dos patios cubiertos. En Zacatecas la hacienda de beneficio de la Sagrada Familia, propiedad de José de la Borda, en 1775 era la más importante del norte, tenía 70 arrastres y 10 molinos de pisones, pero en 1800 la hacienda de la familia Fagoaga en Sombrerete tenía 84 arrastres y 14 fraguas ⁶⁰. Tales establecimientos, los mayores de su tiempo, claramente representaban una inversión de capital a una escala que únicamente era posible mediante la adquisición, por parte de un solo propietario, de vetas mineras completas, pero junto a estas enormes haciendas siguieron existiendo los refinadores en pequeño que com-

⁵⁸ AGI, Guadalajara, 477, 478; AGI, México, 2032, cuentas de los oficiales de Real Hacienda en Zacatecas.

⁵⁹ Humboldt, *Ensayo político*, p. 361; Ward, *Mexico in 1827*, II, 538.

⁶⁰ AGN, Minería 115/1, informe del administrador de Borda, 6 marzo 1780; Ward, *Mexico in 1827*, II, 540.

praban poca cantidad de mineral a los mineros de menor importancia o a los trabajadores de las grandes minas. Del mismo modo como no existía una mina típica, por su gran variedad, tampoco existió una hacienda de beneficio de tipo medio.

III

La Corona española cargaba un impuesto del 10 por 100 sobre toda la plata producida, monopolizaba la venta de mercurio y pólvora, y exigía que la plata fuera enviada a la ciudad de México para ser acuñada en la Real Casa de Moneda. Así pues, el minero mexicano cargaba el peso de fuertes obligaciones legales y fiscales que tenía que cumplir en todas las fases de la producción.

Después de 1663 la Corona encargó a los oficiales de Real Hacienda que distribuyeran el mercurio, estableciendo casi simultáneamente cajas provinciales en los principales campos mineros ⁶¹. Estos oficiales distribuían el mercurio entre los refinadores, mineros y sus socios capitalistas, en grandes partidas y con créditos a seis meses. Antes de que terminara el año, los compradores tenían que pagar a la tesorería una cantidad de plata exactamente proporcional a la de mercurio que habían recibido. La proporción que se acostumbraba era 100 marcos de plata por cada quintal de mercurio, aunque había variaciones de un centro a otro. Por ejemplo, en San Luis Potosí se pagaban 80 marcos, mientras que en Guanajuato se exigían 125 ⁶². La supervisión suprema del monopolio estaba a cargo de un grupo de jueces de la Audiencia de México ⁶³. Después de que Domingo Valcárcel se retiró en 1783, la dirección del monopolio fue primeramente unida a la superintendencia de la Casa de Moneda y más tarde, en 1786, al recién creado cargo de superintendente subdelegado de Real Hacienda. Pero como este cargo, un año después, fue suprimido como entidad independiente, fue el virrey quien asumió la responsabilidad directa. José de Iturrigaray, virrey de la Nueva España de 1803 a 1808, convirtió el cargo en fuente de pingües ganancias

⁶¹ Fonseca y Urrutia, *Historia general de Real Hacienda*, I, 311.

⁶² *Ibid.*, I, 383.

⁶³ *Ibid.*, I, 325, 330, 357; véase también AGI, México, 2207, Revillagigedo a Valdés, 21 abril 1789.

personales aceptando sobornos de los mineros individuales a cambio de concederles cantidades mayores de mercurio ⁶⁴.

El abastecimiento de este catalizador indispensable fue siempre precario, pero en este aspecto la dinastía borbónica, con la ayuda de expertos mineros alemanes, logró renovar totalmente las minas de Almadén. Por consiguiente, esa gran mina de mercurio, que al iniciarse el siglo XVIII casi no tenía nunca la capacidad de proveer los 4 000-5 000 quintales que consumía la minería mexicana, hacia 1775 ya exportaba no menos de 10 000 quintales hacia la Nueva España ⁶⁵. Al mismo tiempo, es evidente que los costos de producción y de transporte disminuyeron, puesto que Gálvez, en dos etapas, redujo el precio del mercurio de 82 pesos, 4 reales, 9 granos el quintal, a 41 pesos, 2 reales, 11 granos ⁶⁶. Aun con este nuevo precio la Corona siguió teniendo una utilidad de 10 pesos por quintal. Los costos del transporte desde la ciudad de México a las distintas agencias de Real Hacienda se cargaban a la cuenta de los compradores, sistema que naturalmente colocabá en posición desfavorable a los mineros norteros. En 1796 costaba 10¹/₃ pesos llevar un quintal de mercurio a Chihuahua, mientras que a Zacatecas costaba 4¹/₂, a Guanajuato menos de 3 y a Pachuca ni siquiera un peso ⁶⁷. La Corona se hacía cargo del pago de los 3 pesos que costaba el transporte de Veracruz a México.

Muy cerca de 1790 el consumo de mercurio de la minería mexicana superaba a los 16 000 quintales anuales, siendo Guanajuato el campo que más consumía, más de 4 000 quintales ⁶⁸. Temerosa de que Almadén no lograra satisfacer esta creciente demanda, la Corona firmó un tratado con la corte austríaca para recibir de Alemania una cuota anual de no menos de 8 000 quintales de mercurio durante un período de seis años ⁶⁹. Sin embargo, tan fuerte dependencia en una materia prima importada hizo que la minería fuera sumamente vulne-

⁶⁴ AGI, México, 1633, declaración de la representación de Guanajuato, 31 octubre 1808.

⁶⁵ AGI, México, 2202, Tomás Ortiz de Landázuri a Gálvez, 27 febrero 1777.

⁶⁶ Elhuyar, *Indagaciones*, pp. 125-7; Fonseca y Urrutia, *Historia general de Real Hacienda*, I, 343, 348. El precio antiguo era de 82 pesos 5 reales 9 granos; el 24 de noviembre de 1767 fue reducido a 62 pesos 4 granos, y el 4 de octubre de 1766, a 41 pesos 2 reales 2 granos.

⁶⁷ AGI, México, 1580, Branciforte a Varela, 28 marzo 1797.

⁶⁸ AGI, México, 1545, Revillagigedo a Lerena, 29 noviembre 1791.

⁶⁹ AGI, México, 2208, Mangino a la Corona, 26 septiembre 1787.

nable a los frecuentes bloqueos navales ingleses que la alianza entre España y Francia provocó. Cada vez que España declaraba la guerra a la Gran Bretaña la producción de plata en México disminuía. Por ello la Corona levantó en 1781 la antigua prohibición contra la explotación de las minas locales de mercurio, y Gálvez envió en 1778 a un experto alemán en minas llamado Rafael Helling, el cual desde 1755 trabajaba en Almadén, a estudiar el problema. Acompañado por el sabio mexicano José Antonio Alzate Ramírez, examinó todos los depósitos conocidos de mercurio e hizo pruebas, pero no encontró más que unas cuantas vetas de superficie, muy pobres. Esta expedición costó a la corona 151 000 pesos y no obtuvo ningún resultado ⁷⁰. También se intentó acumular una reserva: entre el 13 de noviembre de 1801 y el 18 de mayo de 1803 se enviaron a la Nueva España 85 093 quintales de mercurio, pero en enero de 1804 el virrey informó que ya había distribuido 64 011 quintales, quedando así una existencia un poco mayor a la necesaria para el abastecimiento de un año ⁷¹.

Por ley, toda la plata, una vez que estaba en barras, debía presentarse a la agencia más cercana de Real Hacienda. Allí se deducían el impuesto del 10 por 100, el 1 por 100 que se cargaba por el ensaye, y el costo del mercurio proporcionado a crédito. Durante el siglo XVII se distinguía entre mineros, refinadores y aviadores mercantiles; estas dos últimas categorías pagaban un impuesto del 20 por 100. En realidad, casi toda la plata era registrada a nombre de mineros; durante los años de 1671-3 en Pachuca, únicamente 45 marcos se recaudaron en calidad de quintos, en comparación con los 8 381 marcos recaudados como diezmos ⁷². En junio de 1723 se abolió por fin esta distinción, imponiéndose un diezmo sobre toda la plata ya fuera presentada por mineros o por comerciantes ⁷³.

Un cambio significativo en la carga tributaria tuvo lugar después de 1769. Ese año, Gálvez, para animar a José de la Borda a que fuera a Zacatecas a desaguar la Mina de Quebradilla, le otorgó al famoso minero una exención total del diezmo sobre la plata hasta que hubiera

⁷⁰ AGI, México, 2203, Bucareli a Gálvez, 24 febrero 1779. Real cédula que autoriza a extraer mercurio, 21 mayo 1781, en Mayorga a Gálvez, 1 octubre 1781.

⁷¹ AGI, México, 1620, Iturrigaray a Soler, 27 marzo 1804; AGI, México, 2213, Iturrigaray a Soler, 27 mayo 1803.

⁷² *Instrucciones que los virreyes dejaron*, p. 293.

⁷³ Fonseca y Urrutia, *Historia general de Real Hacienda*, 1, 20-2.

recobrado la inversión del costo total de la rehabilitación de la mina, a la cual seguiría otra del 50 por 100 de los impuestos durante los quince años subsecuentes. Durante todo aquel período Borda recibió también mercurio a precio de costo, o sea a 30 pesos el quintal ⁷⁴. Casi al mismo tiempo otros dos mineros, José de Moya, de Pachuca, y Cayetano Núñez de Ibarra, de Temascaltepec, recibieron exenciones fiscales similares ⁷⁵. A partir de entonces, los incentivos fiscales concedidos a mineros que emprendían la rehabilitación de minas viejas e inundadas, se hicieron bastante comunes. Hacia 1810, tres de las mayores minas de Zacatecas, las de Vetagrande, Quebradilla y San Francisco, gozaban todas de reducciones de impuestos. Los Fagoaga, en Sombrerete y Juan Sierra Uruñuela, en Bolaños, también fueron alentados por beneficios semejantes ⁷⁶. Por otra parte, en Guanajuato y en Catorce, que eran los campos mineros de mayor éxito, no se hicieron concesiones de este tipo. Únicamente en los campos más antiguos y lejanos que tenían minas inundadas, concedió la Corona estos subsidios fiscales a la producción, aunque naturalmente conservó para sí las ganancias de la acuñación.

Después de recaudar los impuestos la Real Hacienda despachaba en recua de mulas todas las barras de plata rumbo a la ciudad de México, donde la Real Casa de Moneda acuñaba 69 reales de cada marco de plata, de los cuales entregaba al dueño 65, que eran el precio oficial ⁷⁷. A principios del siglo la acuñación era un proceso largo, especialmente porque la Corona había concedido el privilegio de acuñar, mediante una renta fija, a ciertos individuos particulares que carecían de fondos suficientes para comprar todas las barras de plata que llegaban a la capital. Así pues, la mayoría de los mineros preferían vender su plata a comerciantes o a bancos de plata con sede en México, con un descuento de un real sobre cada marco cambiado ⁷⁸. Este sistema tan insatisfactorio fue abolido en 1729, cuando la Corona nombró oficiales asalariados, dotó a la Casa de Moneda de un espléndido edificio, y estableció un fondo revolvente de medio millón de pesos para la compra inmediata de toda la plata. En 1732 se

⁷⁴ AGI, México, 2235, informe del contador general Tomás de Landázuri, 21 noviembre 1767; real orden que aprueba la exención, 12 abril 1768.

⁷⁵ Fonseca y Urrutia, *Historia general de Real Hacienda*, I, 348, 355-6.

⁷⁶ Véase más adelante, capítulo sobre «Las Grandes Empresas».

⁷⁷ Fonseca y Urrutia, *Historia general de Real Hacienda*, I, III-2.

⁷⁸ *Ibid.*, I, 145-6; Elhuyar, *Indagaciones*, pp. 8-9.

redujo la ley de la plata acuñada, de 11 dineros 4 granos (268 granos) a 11 dineros exactos. En la realidad esto significaba que, de un marco, pudieran acuñarse $69\frac{3}{10}$ reales ⁷⁹. También al mismo tiempo se redujo de 65 reales, a 64 reales 2 maravedíes, el precio que la Casa de Moneda pagaba al público. La diferencia quedaba a beneficio de la Corona. Una nueva devaluación en la ley del metal acuñado tuvo lugar en 1772, cuando fue reducida a 10 dineros 20 granos (260 granos), y otra más en 1786, al estabilizarse en 10 dineros 18 granos ⁸⁰. Las ganancias originadas por esta reducción, aunque fuertes, eran naturalmente ocasionales y no se aproximaban en lo absoluto al producto anual. Para 1804 la Casa de Moneda de México tenía más de 400 empleados, y una capacidad de acuñación de más de treinta millones de pesos al año ⁸¹. Su eficiencia mejoró considerablemente, porque mientras en 1733 costaba 1 real y $\frac{3}{4}$ convertir un marco de plata en monedas, hacia 1804 este costo había sido reducido a $\frac{3}{4}$ de real ⁸². Ya en esa fecha las ganancias de la Corona alcanzaban un promedio mínimo de un millón y medio de pesos al año.

El monopolio de la Corona en la tercera fase del proceso de la primera industria nacional de México era una pesada carga sobre los productores de la materia prima. Para los mineros norteños era especialmente alto el costo en tiempo, porque los de Catorce y Durango a veces tenían que esperar seis meses para recibir su plata convertida en monedas. El tardío desarrollo de los campos mineros de Sonora fue causado en parte por la insistencia de la Corona de que la plata fuese acuñada únicamente en la ciudad de México. No fue sino hasta la última década del siglo XVIII que se aligeró un poco esta condición, cuando cada tesorería estableció un fondo revolvente en efectivo, con el cual se compraba directamente la plata al ser presentada por los mineros para efectos fiscales. Los descuentos en este procedimiento todavía eran variables, según la proximidad a la capital. Los mineros de Guanajuato recibían 62 reales 25 maravedíes, mientras que la Real Hacienda de Durango les pagaba 62 reales 17 maravedíes ⁸³.

⁷⁹ Elhuyar, *Indagaciones*. pp. 14-39.

⁸⁰ Florescano, *Precios del maíz*, p. 80.

⁸¹ Humboldt, *Ensayo político*, p. 458.

⁸² Elhuyar, *Indagaciones*, p. 36.

⁸³ María Pilar Mariscal Romero, *Los banos de rescate de plata* (Sevilla, 1964), p. 19, nota a pie de página.

La nueva eficiencia y flexibilidad de la Corona también benefició a la minería cuando Gálvez, durante su visita, designó a funcionarios *asalariados para que administraran la producción y venta de pólvora*, que hasta entonces había estado en manos de los particulares que adquirirían la concesión. Redujo su precio de 8 a 6 reales la libra. Se construyó una gran fábrica de pólvora en las afueras de la capital, que empleaba a 80 obreros y que en 1801 produjo más de 786 000 libras ⁸⁴. Ese mismo año se redujo nuevamente el precio a 4 reales la libra ⁸⁵.

Finalmente se exceptuó a los mineros del pago de alcabalas o sea impuestos sobre las ventas, sobre las materias primas y abastecimientos que necesitaban. La nueva aduana establecida en 1776 intentó al principio recaudar un 6 por 100 de derechos sobre casi todos los *materiales usados tanto por los mineros como por los refinadores*, pero en 1781, ante la vigorosa protesta de todos los mineros, el virrey Mayorga dispuso que todas las herramientas mineras fueran exceptuadas del impuesto ⁸⁶. Cuatro años después se amplió esta exención a todas las materias primas necesarias tanto para la fundición como para la amalgamación. Los oficiales fiscales protestaron contra tales concesiones, y la controversia entre las distintas dependencias del gobierno sobre el alcance exacto de las exenciones a la alcabala duró hasta 1810. Esta disputa se concentró principalmente sobre el maíz que se introducía a los campos mineros para alimentar a las mulas y a los trabajadores empleados allí. Además, con el objeto de fomentar el que se hicieran descubrimientos importantes, la Corona con frecuencia otorgaba exenciones temporales sobre todas las alcabalas. Tanto en Catorce en 1779 como en Guarisamey en 1787 se disfrutó de exenciones totales de estos impuestos, durante periodos hasta de cuatro años ⁸⁷.

⁸⁴ Fonseca y Urrutia, *Historia general de Real Hacienda*. II, 203, 210, Primera reducción, 3 febrero 1767. Humboldt, *Ensayo político*, pp. 454-5.

⁸⁵ AGI, México, 2247, Iturrigaray a Soler, 26 abril 1804, Real Orden, 27 abril 1801.

⁸⁶ AGI, México, 1133, Consulta del Consejo de Indias, 22 marzo 1786. Véanse también las *Representaciones...* publicadas por el Tribunal de Minería (México, 1781).

⁸⁷ Sobre Catorce, Véase AGI, México, 1730, Audiencia Gobernadora a Gálvez, 22 agosto 1779. Sobre Guarisamey, véase AGI, México, 2242, Flores a Valdés, 26 septiembre 1789.

TABLA 9

INGRESOS REALES POR CONCEPTO DE LA MINERÍA EN MÉXICO, 1789
(en pesos)

	<i>Brutos</i>	<i>Netos</i>
Diezmos sobre la plata	2 019 576	2 019 576
Cobros por acuñación	1 766 202	1 417 140
Pólvora	702 714	405 864
Mercurio español	297 415	262 096
Mercurio alemán	495 388	465 297
TOTAL	5 281 295	4 569 973

Así pues, en general, en las décadas subsecuentes a la Visita de Gálvez, la política real hacia la minería mexicana de plata se hizo más flexible y más inteligente. Se aligeraron o eliminaron las antiguas cargas y se concedieron varios subsidios fiscales extraordinarios a mineros individuales o a ciertos campos en particular. Tanto las concesiones generales como las particulares se justificaban, para la mente oficial, con el argumento de que todas las reducciones en los impuestos o en los precios de los productos monopolizados tenían por resultado un incremento en la producción de tales proporciones, que el producto total de los impuestos sumado a las utilidades de los monopolios, en lugar de decrecer, aumentaba casi inmediatamente. Además, las ganancias por acuñación se elevaban continuamente, de manera que en total la Corona española obtenía de la minería mexicana de plata, las ganancias que figuran en la tabla 9 ⁸⁸.

Se estima que los impuestos y el costo de la acuñación absorbían el 16²/₃ por 100 de toda la plata producida, pero como parte de las utilidades por acuñación procedían de una ligera reducción en la ley de la plata, en realidad el minero pagaba en total una suma cercana al 13 por 100 ⁸⁹.

⁸⁸ AGI, México, 2026, Revillagigedo a Lerena, 8 febrero 1791.

⁸⁹ Elhuyar, *Indagaciones*, p. 59; Humboldt, *Ensayo político*, p. 400.

IV

Los trabajadores mineros de México, lejos de haber sido los peones oprimidos que la leyenda nos presenta, constituían una fuerza laboral libre, bien pagada y geográficamente móvil que en muchas regiones era prácticamente socia de los patrones. Sir Henry Ward observó: «Hay algunas tribus particulares de nativos que han sido mineros generación tras generación, y que llevan una vida errabunda, emigrando con sus mujeres e hijos de una región a otra, atraídos por la fama de mayores riquezas»⁹⁰. Sus observaciones eran especialmente aplicables al norte: la rapidez con que los nuevos descubrimientos, tales como Bolaños y Catorce, lograron en pocos años atraer y mantener poblaciones de 12 000 y 20 000 personas, nos indica la movilidad del minero norteño. Eran gente principalmente mulata y mestiza. Lucas Alamán señaló el contraste existente entre la fuerza laboral de los campos mineros cercanos a la capital con la de los del norte.

Los habitantes no son en ningún sentido mineros capaces, porque la mayoría son indígenas, que tienen más inclinación para la agricultura; mientras que en los distritos del primer grupo (Guanajuato, Zacatecas, Sombrerete) son principalmente mulatos y mestizos, castas ambas que se adaptan mejor a las ocupaciones que requieren energía del cuerpo o de la mente; los primeros son trabajadores torpes e ineptos que emplean mucho más pólvora de la necesaria⁹¹.

La gran mayoría de los mineros mexicanos —no eran más de unas 45 000 personas— trabajaban voluntariamente⁹². Sin embargo, todavía se reclutaban trabajadores indígenas forzados, especialmente en campos tales como Real del Monte y Pachuca, cercanos a la ciudad de México. El conde de Regla obtuvo una leva del 4 por 100 de la fuerza laboral masculina en todos los poblados que se encontraban dentro de un radio de 48 kilómetros de Real del Monte, pero los alcaldes mayores, los hacendados y los curas párrocos de la región se opusieron a sus exigencias, alegando que sus indígenas eran más aptos

⁹⁰ Ward, *Mexico in 1827*, II, 145.

⁹¹ UMMA, *Reports*, Lucas Alamán y Lewis Agassiz, 2 octubre 1826.

⁹² Humboldt, *Ensayo político*, p. 48.

para la agricultura ⁹³. En otras partes otros mineros también recurrieron a esta leva, pero aun donde se logró reclutar a tales indígenas, no podía empleárseles más que como trabajadores auxiliares. En la minería mexicana en su conjunto, el papel del trabajador forzado indígena disminuyó hasta ser insignificante durante el curso del siglo XVIII.

Por otro lado y contrariamente a su preocupación por el indígena, la Corona permitía explícitamente la leva forzada de todos los mestizos o mulatos vagabundos o desocupados ⁹⁴. Así, muchos campos mineros de México se parecían a los puertos británicos de aquella misma época. Los dueños de minas enviaban reclutadores armados de azótes que en muchos casos capturaban a cualquier persona con que se cruzaran y que no vistiera como gente decente. En 1792 el empleado encargado del real ensaye en Pachuca se quejó de que los reclutadores se habían llevado a sus peones: «llegó ocasión que saliendo de la fundición para ir a desayunarse a sus casas, se los llevaban...» ⁹⁵. De Guanajuato se informó de casos parecidos, pero es muy probable que la mayoría de tales trabajadores reclutados por la fuerza fueran mineros en ese momento desempleados.

El sistema de pago por el trabajo libre variaba de un campo a otro. La práctica más común era dar a todos los trabajadores, ya fueran barreteros, barrenadores, tenateros o malacateros un salario diario normal de 4 reales. Puede compararse esta cifra con lo que ganaban los peones de hacienda, de 1½ a 2 reales diarios más comida y tierra ⁹⁶. Pero lo que en verdad atraía a los hombres hacia las minas no era el salario, sino el hecho de que se les daba una comisión en forma de mineral. El monto de estas participaciones, llamadas partidos, también era muy variable. En Guanajuato y Real del Monte, una vez que el trabajador completaba su cuota diaria de mineral, obtenía el 50 por 100 de lo demás que extrajera durante el resto del día. La otra mitad correspondía al patrón. El capataz estaba encargado de que la división fuera justa ⁹⁷. En otros campos, en cambio, correspondía al

⁹³ AGN, Minería 45/1, petición al Virrey, 18 junio 1776.

⁹⁴ Beleña, *Recopilación*, II, 258-61.

⁹⁵ AGN, Minería 56/6, Administrador de la oficina de ensayo de Pachuca, 2 mayo 1792.

⁹⁶ Gibson, *The Aztecs*, pp. 250-1, da una tabla de los salarios en la agricultura.

⁹⁷ Chávez Orozco, ed., *Conflicto de trabajo*, pp. 100-2.

trabajador un porcentaje sobre la totalidad del mineral extraído. En Zacatecas y más al norte, éste llegaba a una cuarta parte del total, pero en Tlalpujahua José de la Borda sólo daba un doceava parte ⁹⁸. En Catorce, en los primeros tiempos, la proporción llegó a elevarse hasta la tercera parte, y aun la mitad ⁹⁹, pero cuando los partidos eran tan grandes, los trabajadores generalmente no recibían salario; en Bolaños, por ejemplo, no se les pagaba más que la tercera parte del mineral que extrajeran ¹⁰⁰. Este último arreglo era semejante a la práctica, común en toda la minería, de que los patrones pobres admitieran a sus trabajadores como socios, concediéndoles la mitad del mineral, pagando ellos casi únicamente los costos generales, tales como los de desagüe. Esto, a pesar de todo, podía ser la ruina de una mina, porque los buscones pronto sentían la tentación de destruir los pilares de mineral que eran el único elemento de sostén de los túneles de trabajo ¹⁰¹. De todas maneras, cualquiera que fuera el sistema de pago, la mayoría de los trabajadores mineros de México esperaban una participación en las ganancias, y siempre trataban de colocar en sus propias bolsas el mineral más rico. Se hicieron varios intentos para reformar este sistema, pero no tuvieron éxito, ya que los mineros eran bien conocidos por su tendencia al desorden y al motín. Muchos patrones, entonces, toleraban que el mejor mineral de sus minas fuera vendido por sus trabajadores a los refinadores independientes.

En la esfera de las relaciones obrero-patronales, como en otras, la Visita de Gálvez señaló el principio de una nueva época. La inmisericorde supresión de las rebeliones de San Luis Potosí y Guanajuato, aunada al subsecuente alistamiento de las clases respetables en los regimientos milicianos, fortaleció la posición de los dueños de minas antes sus trabajadores, y en general la disciplina se hizo más severa, además de que en ciertos campos se redujeron las ganancias de los trabajadores. En Real del Monte, por ejemplo, el conde de Regla trató tanto de reducir el salario diario de los peones de 4 a 3 reales, como de disminuir la participación en el mineral que se daba a los barreteros. Como respuesta a esto, los trabajadores declararon una huelga, cerraron las minas de Veta Vizcaína y mataron al alcalde local.

⁹⁸ UMMA, *Reports*, 26 mayo 1826, p. 75.

⁹⁹ Ward, *Mexico in 1827*, II, 496.

¹⁰⁰ AGN, *Subdelegados 2, Oficiales de Hacienda a Azanza*, 17 agosto 1798.

¹⁰¹ UMMA, *Reports*, 28 mayo 1826, p. 22.

Francisco Javier de Gamboa, por entonces juez de la Audiencia de México, fue enviado como árbitro ¹⁰². Restauró en gran parte el antiguo orden, estipulando que todos los trabajadores, fueran peones o barreteros, recibieran 4 reales diarios. Como antes, se encargó a los capataces que asignaran cuotas variables de participación, según la calidad del mineral, poniendo especial cuidado en impedir a los trabajadores que reservaran para sí mismos el más rico. Tanto los tenateros como los trabajadores que repararan los apoyos de los túneles y del tiro tendrían derecho a extraer, para su propio beneficio, hasta una bolsa de mineral, pero sujeto a compartirlo con el patrón. Resulta claro que las minas en México eran operadas tanto para beneficio de su dueño como de los trabajadores.

En Guanajuato, por otra parte, la Mina de Rayas tuvo éxito en la supresión de los partidos, pero otras sólo siguieron su ejemplo poco a poco. No fue sino hasta poco después de 1790 que la gran Mina de La Valenciana suprimió definitivamente esta práctica, viéndose así obligada a aumentar el salario a los barreteros a más del doble. Hacia 1803 recibían 10 reales diarios en vez de los antiguos 4 reales más partido ¹⁰³. En Zacatecas tuvo lugar un movimiento similar para reducir el costo de la mano de obra. Cuando en 1767 José de la Borda fue a esa ciudad, aprovechó el desempleo entonces imperante para reducir el salario diario de 6 reales a 4, que era una cifra más común. También redujo la participación de los trabajadores en la totalidad del mineral producido, de la cuarta a la octava parte ¹⁰⁴. Más tarde, durante la primera década del siguiente siglo, los nuevos propietarios de la Quebradilla lograron por fin eliminar el pago de todos los partidos. En vano enviaron los trabajadores sus peticiones al virrey para que fuera restablecido el antiguo sistema ¹⁰⁵. Parece, entonces, que en los años subsecuentes a la visita de Gálvez los empresarios mineros de México lanzaron de concierto un ataque contra lo que consideraban ganancias excesivas de sus trabajadores. A pesar de todo, en la mayoría de los centros mineros, especialmente en el norte,

¹⁰² Chávez Orozco, ed., *Conflicto de trabajo*. Todo el libro se refiere a esta disputa.

¹⁰³ AGN, Minería 58/5, Oficiales de Hacienda de Guanajuato al Virrey, 30 marzo 1774; AGN, Minería 114/4, José Gómez Campos al Virrey, 5 mayo 1791. Con relación a sueldos véase Silva Herzog, *Documentos*, pp. 75-81.

¹⁰⁴ AMZ, leg. 23, carta del cura José Antonio Bugarín al intendente Felipe Cleere, sin fecha, 1788/9.

¹⁰⁵ Miguel Othón de Mendizábal, *Obras completas* (6 vols.; México, 1946-7), V, 207.

los trabajadores continuaron recibiendo una participación considerable en el mineral, y fueron en realidad socios, si no es que rivales activos, de los propietarios de las minas.

V

Dentro de la minería mexicana existía una gran variedad tanto en el tamaño de las empresas como en el grado de integración vertical. Sin embargo, eran las grandes minas, como las de Veta Vizcaína y de La Valencia, las que atraieron la atención de los viajeros de aquella época, aunque no todas refinaban su propio mineral. Es verdad que Regla en Real del Monte y la familia Fagoaga en Sombrerete dirigían firmas integradas verticalmente, pero en Guanajuato y Catorce las grandes minas frecuentemente vendían una parte considerable del mineral extraído a refinadores independientes. En Zacatecas la mayoría de las minas también tenían su propia hacienda de beneficio, pero aun allí los socios de La Quebradilla se dividían el mineral extraído para beneficiarlo individualmente ¹⁰⁶.

Además de estas grandes empresas la minería contaba con un gran número de pequeñas minas, en los mismos campos o en veras aisladas, cuyos dueños frecuentemente se veían obligados a vender inmediatamente el metal para poder liquidar sus costos de operación. Los trabajadores, por su parte, siempre vendían sus partidos. De esta manera, un personaje natural de la minería mexicana era el refinador independiente o rescatador, que compraba el mineral a la entrada misma de la mina, después de examinarlo someramente. El precio que pagaba dependía de la competencia y de su propio avalúo informal, pero en general era suficientemente bajo para permitirle obtener ganancias considerables. Naturalmente que a veces, si su avalúo casi adivinatorio resultaba errado, el rescatador perdía dinero, pero sus pérdidas, contrariamente a las del minero, eran siempre marginales y acumulables, nunca totales. Un observador inglés afirmó: «Los grandes propietarios de minas en México, en términos generales, obtenían anteriormente más ganancias de sus haciendas de beneficio que de sus mismas minas.» ¹⁰⁷

¹⁰⁶ UMMA, *Reports*, 28 mayo 1826, pp. 73-5.

¹⁰⁷ Edward James, *Remark on the Mines. Management. Ores etc. of the District of Guanajuato, belonging to the Anglo-Mexican Mining Association* (Londres, 1827), p. 42.

Tanto los que se dedicaban únicamente a la minería, como los refinadores y las empresas integradas, todos tenían necesidad de patrocinadores financieros, llamados aviadores. En 1772 un informe inteligente afirmaba que no existían más que doce mineros capaces de autofinanciarse ¹⁰⁸. De la misma manera, como los refinadores independientes tenían que pagar todo el mineral que compraban en efectivo, también se veían forzados a vender inmediatamente su plata, o a conseguirse su propio aviador. Los mineros eran los que más padecían de falta de apoyo financiero, porque la mayor parte de los comerciantes preferían prestar a los refinadores, y cuando llegaban a conceder préstamos a un minero exigían el pago en ocho o quince días, y rápidamente suspendían el crédito si una mina dejaba de producir ¹⁰⁹. Por esta razón muchos mineros se veían obligados a vender el mineral apenas extraído.

Así pues, el aviador, que generalmente era un comerciante de la localidad, era un tercer agente indispensable para la producción minera. Proporcionaba hierro, madera, cuero y mulas a los mineros, y sal, piritas de cobre, cal, maíz y mercurio a los refinadores. Cargaba estos productos en cuenta al precio vigente en el mercado; a los productos europeos les agregaba el 25 por 100 para cubrir los costos posteriores al desembarco en Veracruz ¹¹⁰. Además, el aviador pagaba las libranzas giradas contra él cuando el minero o refinador compraba sus propios materiales. También anticipaba al refinador el efectivo necesario para comprar mineral. A cambio de este apoyo financiero se vendía al aviador, con descuento, toda la plata producida. Era raro que se firmara un contrato formal; se hacían balances a intervalos irregulares, y nada era más común que los mineros o refinadores se sobregiraran en sus cuentas. Muchos aviadores, mediante sucesivos procedimientos ejecutivos, llegaban a adquirir la propiedad, primero de una hacienda de beneficio, y luego de una mina. En la minería extractiva, pero no en el beneficio, algunos aviadores se convertían en socios de la mina desde el principio, y entonces participaban en las ganancias totales en lugar de comprar la plata con

¹⁰⁸ Lucas de Lassaga y Joaquín Velásquez de León, *Representación que a nombre de la minería de esta Nueva España hacen al Rey* (México, 1774), pp. 19-20.

¹⁰⁹ José Antonio Fabry, *Compendiosa demonstración...* (México, 1743), p. 109. De una introducción sin paginación, por Manuel de Aldaco.

¹¹⁰ UMMA, *Reports*, 28 mayo 1826, apéndice, p. v.

descuento. De todas maneras siempre recibían la utilidad comercial normal en las mercancías de que eran abastecedores ¹¹¹.

La mayoría de los aviadores de provincia tenían cuenta con los almaceneros de México, a los que antes de 1729 acostumbraban vender su plata. Aun en épocas posteriores, todavía cambiaban la plata por mercancías en la capital, de manera que relativamente muy poca moneda acuñada regresaba en realidad a los campos mineros. Muchos de los almaceneros de México también tenían tiendas en las ciudades del norte, y los administradores de estas sucursales actuaban como aviadores o compraban plata en el mercado libre ¹¹². El período de seis meses que transcurría entre la entrega de las barras de plata a la agencia local de Real Hacienda y su restitución al dueño en forma de moneda, en realidad favorecía al comerciante.

Así pues, la plata tenía dos precios: el que la Casa de Moneda pagaba por ella, y el que se obtenía mediante el trueque de barras en los campos mineros. Este último, al contrario del primero, estaba sujeto a fluctuaciones considerables. En el primer caso la plata producida mediante fundición, siempre valía menos que la producida por amalgamación, a causa de la abundancia de impurezas que contenía. Además el valor de ambos tipos se incrementaba con la proximidad a la capital. En fin, los precios variaban según que la plata fuera vendida a un aviador o en el mercado libre. Ward afirmó que en el extremo norte muchos mineros no lograban obtener más de 4½ pesos o sea 36 reales por marco de plata, que valía 64 reales 2 maravedíes en la Casa de Moneda ¹¹³. Sin embargo, Gamboa, en un escrito de 1762, afirmaba que en Zacatecas los mineros recibían 54 reales por un marco de plata amalgamada y 52 por uno de fundida ¹¹⁴. Por otra parte, ya desde 1742 en Guanajuato un aviador pagaba 56 y 52 reales respectivamente por cada una de las dos clases de metal ¹¹⁵. Algún tiempo después, posiblemente en la década de 1770 a 1780, los precios comenzaron a elevarse. En Durango, poco antes de 1777, las dos tiendas propiedad de Antonio

¹¹¹ Beleña, *Recopilación*, II, 271-2.

¹¹² West, *The Mining Community*, pp. 83-4.

¹¹³ Ward, *Mexico in 1827*, II, 126.

¹¹⁴ Gamboa, *Comentarios*, p. 382.

¹¹⁵ AGN, Civil 256, Contrato entre Juan Antonio Mendizábal y Andrés de Contreras, I, diciembre 1742.

Bassoco y Pedro Vértiz aumentaron el precio de 52 a 54 reales por marco de plata amalgamada ¹¹⁶. Hacia 1790 los aviadores de Zacatecas pagaban 56 y 54 reales respectivamente, y en el mercado libre el precio era de 57½ y 56 reales para ambos tipos ¹¹⁷. De la misma manera, ya en 1786 los aviadores de Guanajuato comenzaron a pagar 58 reales por la plata amalgamada, cuando en el mercado libre valía 59 ¹¹⁸. También en este caso tuvo lugar un cambio significativo, pues el precio de la plata en el mercado local subió y las ganancias obtenidas por los aviadores disminuyeron, quedando la diferencia a favor del productor y no del acreedor.

Estos precios presentan un problema de interpretación. ¿Quién pagaba los impuestos del 10 y del 1 por 100 que cobraba la Corona, el refinador o su patrocinador financiero? Este asunto se relaciona con el descuento que cobraban los aviadores y todos los compradores de plata en barras. Un informe de 1770 estimaba que un aviador podía esperar ganar de 3 a 4 reales por marco ¹¹⁹. Si aceptamos el testimonio de Gamboa de que pagaban 54 reales por la plata amalgamada, sumándole el descuento el precio ascendía a 57 o 58 reales. El 11 por 100 en impuestos importaba entonces un poco menos de 7 reales por marco, reduciendo el valor real a un poco más de 57 reales. ¿Cómo podían entonces los aviadores en años subsecuentes, pagar 59 reales por marco de plata? Este es un problema que no he podido resolver, pero en cualquier caso es claro que las tasas de descuento se redujeron hasta en un 50 por 100 en el último tercio del siglo.

En general la minería mexicana sufría de una escasez crónica tanto de crédito para gastos de operación, como de capital para inversiones fijas. Mientras que por una parte la minería estaba ya en una fase en la que eran necesarias fuertes inversiones en obras muertas tales como tiros profundos, largos túneles e inmensas haciendas de beneficio, por la otra los comerciantes-aviadores de que dependían la mayoría de los mineros, preferían proporcionar solo créditos a corto plazo para los gastos de operación. Muchos de estos comerciantes no se

¹¹⁶ Morfi, *Viaje*, pp. 75-6.

¹¹⁷ AGI, México, 2811, Informe del resorero de Zacatecas, Juan de Aranda, 18 noviembre 1790.

¹¹⁸ AGN, Minería 120/1, Diputación minera de Guanajuato al Tribunal de Minería, 22 noviembre 1786; AGN, Minería 76/18, Diputación de Guanajuato al Tribunal de Minería, 20 septiembre 1791.

¹¹⁹ Lassaga y Velásquez de León, *Representación...*, p. 80.

arriesgaban, limitándose simplemente a comprar plata en el mercado libre. Es claro que los efectos del decreto sobre el comercio libre de 1778 fueron sumamente importantes; entre otras cosas, hizo que el capital mercantil se invirtiera en la minería de plata precisamente en el momento en que esta estaba más necesitada, y cuando, además, se justificaba dicha inversión por una mayor reutilizabilidad. Esta mayor ganancia era resultado de las diversas rebajas en los impuestos y en los precios de los productos monopolizados que Gálvez había recomendado. Así pues, las utilidades en la minería aumentaron y las del comercio declinaron. Por ello los antiguos aviadores y comerciantes en plata decidieron intervenir directamente en la fase productiva de la minería, la cual hasta entonces habían eludido.

VI

Al acercarse a su fin el siglo XVIII José Garcés y Eguía estimó que para producir tres millones de marcos de plata —que en aquel período era la producción total anual de la Casa de Moneda de México— tenían que extraerse no menos de diez millones de quintales de mineral, sacarse a la superficie y refinarse ¹²⁰. Nunca será posible conocer el costo de tan vasta operación ni siquiera con aproximación, porque una mina requería el mismo número de trabajadores para extraer una cantidad dada de mineral y este podía ser de alto o de bajo contenido. Al mismo tiempo, los problemas de desagüe y su gravedad variaban de un tiro a otro, de manera que una inesperada descarga de agua podía echar a perder los cálculos. Además no sería posible comparar un depósito rico y superficial que se agotaba en pocos meses, con una mina vieja de 300 varas de profundidad, que produjera mineral de media o de baja calidad. Una veta podía agotarse lentamente, llegando a producir solo metal base, o, en el caso opuesto, proporcionar de repente masas casi sólidas de plata. Los costos de producción, entonces, eran infinitamente variables y, como tales, estaban en función no de la calidad, sino de la ubicación y de la cantidad. Las minas producían mineral argentífero, no plata.

¹²⁰ Garcés, *Nueva teórica*, p. 125. Dictamen de la comisión especial nombrada para informar sobre el importante ramo de minería (México, 1821), p. 6.

Los cálculos se hacen todavía más hipotéticos cuando consideramos que el renglón básico de gastos de los propietarios de minas era la mano de obra. En La Valenciana, los salarios de mineros y empleados absorbían aproximadamente el 75 por 100 de la totalidad de gastos. Del mismo modo en una mina cercana a Temascaltepec el sueldo de barreteros y peones ascendía al 73 por 100 del total de costos ¹²¹. Además, como el sistema de remuneración variaba de un campo a otro, ya que los trabajadores recibían partidos diferentes, es particularmente difícil deducir ni siquiera con relativa precisión un esquema

TABLA 10

COSTO SEMANAL MEDIO DE UNA HACIENDA DE BENEFICIO CON UN MOLINO DE PISONES Y 12 ARRASTRES, CON UNA CAPACIDAD DE 193 CARGAS (580 QUINTALES DE MINERAL) DE UNA CALIDAD MEDIA DE NUEVE ONZAS DE PLATA POR CARGA (TRES ONZAS POR QUINTAL)

	Pesos	Reales
Mantenimiento de 12 mulas del molino a 1 3/4 reales diarios	18	3
Consumo de hierro y depreciación de molino por semana	6	0
Cuatro peones para operar el molino a 4 1/2 reales diarios	10	0
Cinco días de salario de seis peones para los arrastres, a cuatro reales diarios; muelen 580 quintales y forman 29 montones de 20 quintales cada uno	15	0
Cuarenta y ocho mulas para los arrastres, a 1 3/4 reales	73	4
Consumo de plomo y litargirio en arrastres a un real diario, durante cinco días	7	4
Sesenta y cinco fanegas de sal cruda para 29 montones, a un peso c/u.	65	0
Nueve quintales 25 libras de pititas de cobre a 1 2/3 pesos el quintal	15	3
Revolver los 29 montones a un peso	21	6
Lavar y cargar los montones de mineral	5	0
Separación de la plata, costo del carbón a tres pesos cuatro reales	4	4
Salarios: administrador, 16 pesos; azoguero, 12 pesos; cargador, cuatro pesos, y otros	44	0
Cuidado de las mulas en establo y potreros	12	0
Rueda hidráulica para llevar agua a los arrastres con dos mulas a 1 3/4 pesos a la semana	3	0
Cuatro días de salario de un peón para que cuide dicha rueda a tres reales diarios	1	4
Cubetas y cables para la rueda hidráulica	1	0
Cal, velas y peones para la limpieza	8	0
Pérdida de mercurio, usando 580 quintales 173 libras para producir 217 marcos cuatro onzas de plata	108	1
COSTO TOTAL POR 193 CARGAS (dos pesos, un real cuatro gramos por carga)	419	5

¹²¹ Humboldt, *Ensayo político*, pp. 354-6; Ward, *Mexico in 1827*, II, 389-90.

general de cuánto costaba producir un quintal de mineral. A pesar de ello, es claro que en comparación al costo de la mano de obra, todos los demás, tales como los de la pólvora, el hierro, la cordelería, la madera, el cuero y las velas, tenían una importancia muy pequeña.

Una vez que el mineral estaba ya fuera del tiro, el cuadro cambiaba. El refinador sabía cuánto le costaría aproximadamente producir un marco de plata. En términos generales, el costo de amalgamar un quintal de mineral de ley media, que contenía $2\frac{1}{2}$ onzas de plata en promedio, era de 4 a 6 reales ¹²². Si nos referimos de nuevo a la cifra estimada por Garcés y Eguía, entonces el gasto total de beneficiar diez millones de quintales de mineral ascendería a una suma de entre cinco y siete y medio millones de pesos, es decir, del 20 al 30 por 100 del valor de toda la plata acuñada. Sin embargo, en lugar de dar crédito a estimaciones tan aproximadas, es preferible examinar una cuenta en particular que presenta el análisis de los costos de amalgamación de mineral de calidad media en Zacatecas ¹²³. (Véase tabla 10.)

Si reducimos los renglones de la tabla 10 a grupos un poco diferentes, obtenemos los siguientes resultados:

	<i>Pesos</i>	<i>Reales</i>
Mano de obra	~0	4
Mulas	106	~
Materias primas	103	7
Mercurio	108	1
Varios	30	2
	419	5

Las materias primas, y no la mano de obra, representaban la mayor parte de los costos de producción. Las mulas, sin tomar en cuenta su costo de adquisición y de depreciación, ocasionaban sobre todo gastos en maíz y forraje para alimentarlas. El refinador, mucho más que el minero, era afectado por la variación en los precios de las materias primas. Por desgracia, hasta ahora poseemos muy poca información relativa a la tendencia en los precios de productos tales como la sal, el plomo, la leña y las piritas de cobre. Igualmente, todavía está espe-

¹²² Sonneschmid, *Tratado de amalgamación*, p. 92.

¹²³ AGN, Minería 82/3, Representación minera de Zacatecas, 16 mayo 1801.

rando ser trazada la curva de los precios del maíz, pero sin duda alguna durante la gran sequía de los años 1785-6 muchos refinadores se vieron obligados a suspender la producción por incapacidad de alimentar a sus mulas. Además, el conocimiento del precio del maíz en el mercado no nos sacaría de dudas en cuanto al costo que tenía para el refinador, porque los mineros más ricos a menudo tenían sus propias haciendas que los abastecían.

Falta un componente básico en el esquema que presentamos más arriba, es decir, el precio inicial que se pagaba por el mineral. El cálculo que sigue, elaborado en 1801 por el administrador de la hacienda de beneficio del conde de Regla en Real del Monte, nos indica la magnitud de tal renglón. Sus cálculos se refieren al beneficio de minerales de bajo y medio contenido de metal ¹²⁴. (Véase tabla 11.)

Podemos partir de la hipótesis de que este sea un esquema teórico, porque la hacienda formaba parte de una empresa integrada propiedad del conde de Regla, y existía para refinar el mineral de Veta Vizcaína. El precio estimado del mineral debe representar, entonces, o su costo efectivo de producción, o su valor convencional en el mercado. Parece más probable esto último, pero cualquiera que sea el caso, el hecho es que el precio de adquisición era el que mayormente determinaba las diferencias en el costo final de producción. Para el mineral de baja ley ascendía al 36.2 por 100 de dicho costo, y para el de ley media llegaba hasta el 54.2 por 100. En el conjunto de la minería, las ganancias por el beneficio dependían de un factor que, para el historiador, sigue siendo desconocido: el precio que se pagaba por el mineral en las subastas que tenían lugar a la entrada misma de la mina.

El esquema a que nos estamos refiriendo también nos aclara el papel particular que tenía el mercurio. El gasto por otros conceptos —mano de obra, mulas y materias primas— variaba muy poco entre una y otra calidad del mineral, porque estaba en función de la cantidad beneficiada y no de su calidad. Por otra parte, el mercurio variaba en proporción a la calidad, es decir, al valor de la plata producida. Dejando a un lado el precio de adquisición, encontramos que el costo

¹²⁴ AGI, México, 1608, Informe del administrador, 20 abril 1801, en Marquina a Soler, 26 febrero 1802.

TABLA 11

COSTO DE LA AMALGAMACION EN REAL DEL MONTE DE DOS CANTIDADES IGUALES DE MINERAL CON PESO DE 30 QUINTALES CADA UNA, PERO CON DIFERENTE CONTENIDO DE PLATA, LA PRIMERA CON UNA PRODUCCION DE UNA ONZA DE PLATA POR QUINTAL, Y LA SEGUNDA DOS ONZAS Y MEDIA POR QUINTAL

<i>Costos</i>	<i>Para 1 onql.</i>		<i>Para 2 1/2 onql.</i>	
	<i>Pesos</i>	<i>Reales</i>	<i>Pesos</i>	<i>Reales</i>
Costo del mineral	10	0	25	0
Transporte a la hacienda	3	1	3	1
Triturarlo en molino de pisones	2	2	2	2
Setenta y cinco libras de sal marina	3	6	3	6
Once barriles de piritas de cobre	3	7 1/2	4	2 1/2
			(12 barriles)	
Revolver la amalgama en el patio	2	4	2	6 1/2
Lavado		1 1/2		1 1/2
Pérdida de mercurio	1	7	4	5 1/2
COSTO TOTAL	27	5	46	1
Plata producida, a 60 reales el marco	28	0	70	2 1/2
Costos	27	5	46	1
<i>Utilidad</i>		3	24	1 1/2

del mercurio necesario para refinar una cantidad de mineral que valía una onza de plata por quintal, ascendía a sólo el 13 por 100 aproximadamente de los costos totales de producción. En cambio, para el mineral de grado medio, de 2 1/2 onzas de plata, dicha proporción aumentaba al 25 por 100. Este último porcentaje ratifica el dato del esquema anterior, elaborado con relación a Zacatecas, en el cual, para un mineral con una ley de 3 onzas de plata por quintal, el mercurio importaba un poco más del 25 por 100 de los costos de producción. Ahora bien, para refinar una cantidad mayor de plata era necesario más mercurio, y de este modo, si la calidad de la mena zacatecana se elevaba a 10²/₃ onzas de plata por quintal, entonces el costo total de su beneficio aumentaría de 419 a 734 pesos, y el gasto en mercurio de 108 a 386 pesos, es decir, del 25 por 100 a más del 52 por 100 del costo total. Llegaba así un punto en que era más productivo el procedimiento de fundición que el de amalgamación.

Se comprende entonces el significado de la reducción, ordenada por Gálvez, del precio del mercurio a la mitad. Si duplicamos el

precio del mercurio para tener una idea de la situación que prevalecía antes de 1767, su proporción en los costos totales del beneficio se eleva al 41 por 100 para la mena de 3 onzas de plata por quintal, y a casi el 69 por 100 para la de 10½ onzas de plata. En Real del Monte hubiera sido incosteable el beneficio del mineral de 1 onza. La reducción en el precio del mercurio permitió que se refinara una variedad mayor de calidades de mineral. Durante el decenio de 1720 a 1730, los oficiales de Real Hacienda en Zacatecas, Guadalajara y Guanajuato, estuvieron todos de acuerdo en que una ley constante en el mineral de 2 onzas de plata por quintal proporcionaba buenas utilidades al minero. En ciertos casos se beneficiaban minerales con ley de 1 ó 1½ onzas para que las haciendas no suspendieran sus actividades. Parece que únicamente en Pachuca era incosteable beneficiar un mineral de semejante ley; allí el mínimo necesario era de 2 onzas ¹²⁵.

Fausto de Elhuyar, director general del Tribunal de Minería, en un documento de 1814, afirmó: «habiéndose considerado como causa principal para este aumento anual en la acuñación la baja del precio del azogue, que importaba 3 reales 11 maravedíes en cada libra». Efectivamente, como para refinar un marco de plata se necesitaba una libra de mercurio, el minero vio sus costos disminuidos en un 5 por 100 aproximadamente ¹²⁶. Así pues, la reducción en el precio del mercurio aumentó las utilidades del beneficio de mineral de media ley, pero igual importancia tuvo el hecho de que la gama de variedades de mena aprovechable y productiva mediante la aplicación del procedimiento de patio, se amplió en ambos extremos de la escala. Podía amalgamarse ya una mayor cantidad de mineral tanto de muy alta como de muy baja ley, y además como la amalgamación era un método de separación de la plata más eficaz que la fundición, cualquier regreso al antiguo procedimiento significaba una mayor reducción en la plata obtenida de una misma cantidad de mineral que anteriormente se fundiera.

¹²⁵ Joseph Antonio de Villaseñor y Sánchez, *Respuesta que... a la apología* (México, 1742) introducción de Bustamante, sin paginación, pp. 24, 51-2, 68.

¹²⁶ Elhuyar, *Ludagaciones*, pp. 126-7.

VII

Cualquier explicación que se presente para el gran florecimiento de la minería debe ser tentativa. Veamos dos opiniones contemporáneas. En 1793 el virrey Revillagigedo escribió: «Las causas de este aumento, no son el que haya habido mayores bonanzas, ni más ley en los metales: se debe principalmente al mayor número de personas que se han dedicado al laborio de las minas, al corto adelantamiento que se han hecho en el modo de beneficiarlas, a las comodidades en el precio de azogue, rebaja en la pólvora y exención de alcabalas.» También señalaba que se habían formado compañías mercantiles para explotar algunas de las minas más viejas ¹²⁷.

En 1803 Humboldt expresó su acuerdo en líneas generales con la opinión de Revillagigedo.

El enorme aumento que se observa en los últimos tiempos debe atribuirse al gran número de causas que han concurrido a un mismo tiempo, y entre las cuales debe ponerse en primera línea el aumento de población en la meseta de México, los progresos de las luces y de la industria nacional, la libertad de comercio concedida a la América en 1778, la facilidad de proporcionarse más barato el hierro y el acero necesarios para las minas, la baja de precio del azogue, el descubrimiento de las minas de Catorce y la Valenciana y la creación del Tribunal de Minería ¹²⁸.

Obviamente, en esta búsqueda de causas, el virrey de México superó al viajero prusiano, porque varios de los factores apuntados por Humboldt eran sencillamente fenómenos concurrentes. Cuando más, el crecimiento de la población fue el requisito previo, y por lo que se refiere al comercio libre, quizá su éxito fue más bien el efecto de una mayor producción de plata. Revillagigedo señaló más precisamente la cuestión de los costos y la entrada de capital y de empresarios en el campo de las actividades mineras. A este respecto, es preciso aclarar bien lo que tratamos de explicar.

En este contexto, hay tres factores que requieren explicación. El primero es el ascenso de la curva de producción de plata, que había comenzado un siglo antes; cada década que pasaba se acuñaba siem-

¹²⁷ Revillagigedo, *Instrucción*, p. 118.

¹²⁸ Humboldt, *Ensayo político*, p. 385.

pre más plata que en la anterior, con la sola excepción de la de 1760 a 1770. En segundo lugar, el gran incremento ocurrido entre 1770 y 1780, cuando la producción saltó de 12 a 18 millones de pesos al año; y el tercero, que este nivel haya sido sostenido, siguiéndolo después otro aumento lento. No tomamos en cuenta en este momento las fluctuaciones anuales, causadas principalmente por el bloqueo naval inglés y por la sequía. La ascensión continua de la curva es lo que presenta la mayor dificultad y parcialmente rebate los varios argumentos posibles que pueden presentarse. En especial revela el peligro de aceptar el falaz argumento de *post hoc propter hoc*. La eficacia de cualquier medida en particular, ya sea el comercio libre o la expulsión de los jesuitas, siempre puede comprobarse por el subsecuente aumento en la producción de plata. No es necesario señalar que este era un argumento predilecto tanto de los estadistas como de los mineros de aquella época, deseosos de elogiar una medida de su simpatía o de obtener nuevas concesiones, según el caso. Claramente es absurdo recurrir a una sola causa para explicar un proceso que tardó un siglo. En épocas diversas actuaron diferentes factores para producir los mismos efectos.

Señaladas estas dificultades, parece mejor concentrarse en el gran florecimiento del decenio que se inició en 1770, el cual siguió a la recesión de la década anterior. Aquí podemos advertir la actuación de varios factores, que se combinaron para reducir sensiblemente los costos de producción, tanto, que permitieron un considerable incremento en las utilidades. En las actividades extractivas, los dueños de minas obtuvieron un control mayor de sus trabajadores, y en algunos casos lograron reducirles el salario y los partidos. Luego, la difusión del uso de la pólvora fue propiciada por una reducción en su precio y por un abastecimiento más eficaz. En fin, las exenciones fiscales fomentaron varias empresas arriesgadas. La industria del beneficio también resultó favorecida. El aprovisionamiento más abundante de un mercurio a precio reducido fue causa de un mayor empleo del método de amalgamación, en lugar del de fundición. Al mismo tiempo el precio local de la plata en barras aumentó sensiblemente, y también en este aspecto las exenciones individuales comprendían una nueva reducción en el precio del mercurio a 30 pesos. Por el contrario, los comerciantes-aviadores que financiaban la minería se vieron

desplazados. Tanto las utilidades del comercio de la plata en general, como las bonificaciones en particular, se redujeron durante la década de 1780 a 1790. Aquí encontramos una posible secuencia causal. El *gran florecimiento del decenio iniciado en 1770* fue resultado tanto de la reducción general en los costos que favoreció a toda la minería, como de una serie extraordinaria de bonanzas concurrentes en varias minas. Además, después de 1780 la prosperidad fue sostenida y fomentada por la amplia participación del capital mercantil en la minería, a la que se aunó una gran disposición de reinvertir las utilidades. Por otra parte, más y más mineros y compañías de los antiguos campos obtuvieron exenciones fiscales. Puede ser que todas estas reducciones en los costos hayan servido de cebo y es muy posible que el factor determinante haya sido la entrada de capital inversionista. A pesar de todo esto, carecemos de pruebas. En última instancia, mientras no se descubran y estudien grandes libros de contabilidad que cubran largos períodos, cualquier explicación que presentemos tiene que ser, en el mejor de los casos, hipotética.

CAPÍTULO III

EL TRIBUNAL DE MINERÍA

La ayuda más efectiva que la dinastía borbónica dio a la minería de plata en México, fue la disminución de la pesada carga fiscal y de utilidad de los monopolios oficiales que la Casa de Austria había impuesto; pero además de los incentivos fiscales, la Corona también trató de elevar la posición social de quienes se dedicaban a la minería, a fin de que alcanzaran un nivel igual al de los comerciantes coloniales. Para ello, organizó el gremio minero, con su propio tribunal central y con diputaciones en cada campo; estableció también tanto un banco para financiar a la minería, como una gran escuela técnica para capacitar a los jóvenes. Es muy digno de notarse el hecho de que, mientras los comerciantes se lanzaban a una campaña contra el comercio libre, varias de estas reformas fueron efecto de las proposiciones y peticiones de los mismos mineros. Es más, en México se discutía desde casi medio siglo antes, tanto pública como oficialmente, la necesidad de aplicar unas medidas que resultaron muy semejantes a las que fueron finalmente puestas en práctica.

Ya en 1716 el virrey Duque de Linares declaró que la minería mexicana de plata tenía una técnica deficiente, señalando como prueba de ello el difundido empleo de la fundición como método de beneficio. Además, le faltaba capital; muchos mineros importantes terminaron su carrera en la bancarrota, por ello los comerciantes despreciaban el oficio y se negaban a darle apoyo financiero. El remedio principal que aplicó el virrey a esta deplorable situación fue la abolición de la distinción entre las tarifas de impuestos que pagaban los mineros, los refinadores y sus aviadores al presentar la plata en barras en la Tesorería.

Al eliminar esta diferencia, afirmó, los comerciantes se mostrarán más dispuestos a comprar plata y a pagarles un mejor precio a los

mineros ¹. En 1723 esta sugerencia fue aceptada por la Corona y convertida en ley.

La siguiente proposición virreinal para fomentar la minería no obtuvo tan pronto la real aprobación. En 1727 el virrey marqués de Casafuerte convocó a los principales funcionarios a una reunión general para definir si era aconsejable la reducción del precio del mercurio. Grandes cantidades de mineral de baja ley, se argumentaba, quedaban sencillamente a un lado por el alto costo del mercurio, que hacía insostenible la amalgamación. Convencida por este tipo de argumentos, la junta recomendó una reducción en el precio de 82½ a 55 pesos por quintal, recomendación que, a pesar de todo, no obtuvo la real aprobación ². El debate sobre este asunto se hizo público durante la década iniciada en 1740, cuando el erudito José Antonio Villaseñor y Sánchez, contador del monopolio del mercurio, publicó una pequeña obra en la que sostenía, con el apoyo de José Alejandro Bustamante, dueño de Veta Vizcaína, que el mercurio representaba una parte insignificante de los costos de la amalgamación, ya que otras materias primas eran o igualmente o más importantes. Una reducción en su precio no tendría por resultado un aumento general en la producción de plata suficientemente considerable para cubrir la pérdida en los reales ingresos que provocaría dicha disminución en el precio ³. Estos argumentos fueron rebatidos detalladamente por Manuel Fabry, funcionario de la Casa de Moneda que afirmaba que muchos mineros apenas cubrían sus costos, que trabajaban con la esperanza de bonanzas futuras y que por ello una disminución en los costos estimularía seguramente la producción. Fabry recibió el apoyo de Manuel de Aldaco, banquero de plata, el cual señaló que una reducción del 50 por 100 en el precio del mercurio daría al minero 3½ reales por marco, cantidad que, para las grandes empresas, no representaba un aliento despreciable ⁴.

En aquellos años de discusiones surgió una segunda proposición importante. En 1743 el genovés Domingo Reborato y Soler propuso que se formara una compañía general de inversiones con un capital de dos millones de pesos, para financiar a la minería. El virrey conde de

¹ BN (Madrid) MSS 2929, f. 41.

² Gamboa, *Comentarios*, pp. 28-30.

³ Villaseñor y Sánchez, *Respuesta*, *passim*.

⁴ Fabry, *Compendiosa demostración*, introducción sin paginación por Aldaco, *passim*.

fueron lara, impresionado favorablemente por la proposición, pidió su opinión a dos banqueros de plata, Francisco Manuel Sánchez de Tagle y Manuel de Aldaco. A pesar de que Aldaco había achacado anteriormente las dificultades por que pasaba la minería en aquellos tiempos, a la escasez de capital, tanto él como su compañero atacaron el plan. La nueva compañía perdería dinero, o, si llegaba a tener éxito, desplazaría a las instituciones existentes, y provocaría su extinción. Estos argumentos impresionaron al virrey, el cual descartó entonces la idea ⁵. A pesar de todo, José Alejandro Bustamante presentó un plan similar en 1748, según el cual se integraría una compañía con un capital de cinco millones de pesos; dicha compañía recibiría un real por cada marco de plata producido, y administraría la distribución del mercurio y de otras materias primas ⁶.

Las proposiciones de la década de 1740 a 1750 fueron repetidas, con ciertas transformaciones, por Francisco Javier de Gamboa en su obra publicada en Madrid en 1761 *Comentarios a las ordenanzas de minas*, que tanta influencia tuvo. Este libro no era un simple comentario legal, sino que contenía también una descripción de las condiciones en que se hallaba la minería, proposiciones reformistas para mejorarla, y mucha información técnica muy valiosa. La obra pronto adquirió una gran fama y fue más tarde traducida al inglés ⁷. El jurista Pedro Cañete y Domínguez, americano como Gamboa, declaró rotundamente en su compendio del Potosí: «Yo venero todas las opiniones de nuestro sabio autor, tanto por la ingeniosa solidez y fecundidad de su doctrina, como por su magisterio en materias de minas» ⁸. La obra también tuvo gran utilidad práctica para el minero, porque Gamboa incluyó en ella extensas descripciones y diagramas de los mejores instrumentos y métodos para la medición interior y excavación de las minas, agregando además las tablas matemáticas pertinentes. Recurrió a fuentes manuscritas mexicanas, especialmente las obras del fiscal criollo José Sáenz de Escobar el cual, según

⁵ Gamboa, *Comentarios*, pp. 144-8.

⁶ *Ibid.*, pp. 151-5.

⁷ *Commentaries on the mining ordinances of Spain: dedicated to his Catholic Majesty, Charles III. By Don Francisco Xavier de Gamboa....* trad. del original español por Richard Heathfield (2 vols.; Londres, 1830).

⁸ Pedro Vicente Cañete y Domínguez, *Guía histórica, geográfica, física, política, civil y legal del gobierno e intendencias de la Provincia de Potosí* (Potosí, 1952), p. 718.

Gamboa, fue «tan experto geómetro como grave jurisconsulto»⁹. También proporcionaba una valiosa guía para la literatura minera de aquella época, incluyendo obras recientemente publicadas en francés y alemán. Fray Christian Rieger, S. J., antiguo profesor de física experimental en el Colegio Teresiano de Viena, le tradujo las obras más importantes escritas recientemente en alemán¹⁰. *El objetivo de Gamboa en todo esto era combatir lo que consideraba la deplorable ignorancia técnica de los mineros coloniales.*

No obstante, el argumento básico del libro era esencialmente político. En el prólogo Gamboa declaraba que las minas de México apenas si producían un décima parte de la plata que habrían producido bajo una mejor administración. Restó importancia al hecho de que la acuñación había aumentado considerablemente durante los diez años anteriores, atribuyéndolo a descubrimientos fortuitos, especialmente a las minas de Bolaños. Hacía hincapié, en cambio, en la ruina de Zacatecas, Sombrerete, San Luis Potosí y Parral, y en la decadencia de Guanajuato y Taxco. Parece que entre los antiguos campos mineros únicamente Pachuca y Real del Monte prosperaban. Para remediar este desastroso estado de cosas, Gamboa recomendaba que el precio del mercurio se redujera y que se diera permiso de extraerlo libremente de las minas de la Nueva España. Censuró que la acuñación estuviera limitada a la capital, por ser esto perjudicial para los campos norteños, y recomendó que se estableciera en Guadalajara, su ciudad natal, una nueva Casa de Moneda. Además sugirió que se aplicara una ley existente de antiguo pero nunca invocada, que concedía exenciones fiscales a las empresas muy difíciles o arriesgadas¹¹.

Un hecho más importante, y aquí estamos acercándonos a la *raison d'être* política del libro, es que Gamboa, haciendo suyas las ideas expresadas en la década de 1740 a 1750, proponía que fuera constituida una compañía general o banco, encargado de resolver la crisis financiera de la minería. Esta compañía debía tener un capital de cuatro millones de pesos dividido en acciones de 500 pesos cada una. Se encargaría de comprar mercurio a la Corona en Veracruz a 40 pesos el quintal, para distribuirlo luego entre los mineros, sin inter-

⁹ Gamboa, *Comentarios*, prólogo, sin paginación, y p. 229.

¹⁰ *Ibid.*, p. 247.

¹¹ *Ibid.*, p. 61.

vención de las tesorerías de Real Hacienda. En un sentido más general, la compañía tendría la función de aviador principal de los mineros, abasteciéndolos tanto de dinero en efectivo como de materias primas, a cambio de plata. Sin embargo, la originalidad del plan de Gamboa estaba en la sugerencia de que la dirección de la compañía fuera concedida al Consulado de México, cuya garantía según él, bastaría para atraer al capital eclesiástico a participar en el banco. Además, los litigios entre mineros podían ser resueltos sumariamente en el tribunal del Consulado, evitándose así las largas demoras de que eran objeto en la Audiencia ¹². Para dotar al consulado de un ingreso que le permitiera sufragar los gastos de administración, aconsejaba que la recaudación de alcabalas en la ciudad de México (que había pasado de nuevo a manos de la Corona en 1754) fuera concedida de nuevo al Consulado. Aquí conviene recordar que en la época en que fue compuesto el libro, entre 1755 y 1765, Gamboa era agente del Consulado de México en Madrid. También era amigo personal de Manuel de Aldaco, director del banco de plata de la familia Fagoaga y jefe de la comunidad vasca en la capital del virreinato ¹³. Es obvio inferir que, a pesar de la brillantez legal y técnica de sus comentarios, Gamboa surgió como el abogado político de las grandes casas importadoras y de los bancos de plata de la ciudad de México. Precisamente en el momento en que los estadistas al servicio de la dinastía borbónica empezaban a tomar medidas para minar la posición de los comerciantes coloniales monopolistas, Gamboa expresaba el deseo de someter a toda la minería de plata en México al control del Consulado y de la oligarquía mercantil.

El decenio de 1760 a 1770 resultó ser el único de todo el siglo XVIII en que la acuñación fue menor que en el anterior, es más, en realidad la producción decayó hasta el nivel de quince años atrás. En 1764 Tomás Ortiz de Landázuri, contador general, pintó un cuadro tétrico de la situación en los principales campos mineros. Hasta las minas de Bolaños, el fénix de 1750, estaban inundadas. Únicamente en Sonora y Sinaloa parecía existir alguna esperanza para el futuro ¹⁴.

¹² Gamboa, *Comentarios*, prólogo y pp. 160-72.

¹³ Véanse Real Díaz, *Las ferias de Jalapa*, p. 93; Obregón, *El real colegio*, p. 72; y también AGN, Vínculos 6-3, donde Aldaco, dirigiéndose a José Joaquín de Fagoaga, se refiere al «Amigo Gamboa», y carta de Gamboa a Aldaco.

¹⁴ BRP, MSS 2824, Miscelánea de Ayala X, Informe de Tomás de Landázuri, ff. 132-59.

Advertido por este memorándum, el visitador general José de Gálvez consultó inmediatamente a los demás mineros principales de la colonia —Manuel de Aldaco, al que llamó «padre de su patria», y el conde de Regla, «el restaurador del oficio»¹⁵. Aceptó una larga petición que le presentaron José de la Borda y Juan Lucas de Lassaga, en la que proponían una reducción del 50 por 100 tanto en el diezmo de la plata como en el precio del mercurio¹⁶. Parece que también habló con Gamboa, que para entonces ocupaba el puesto de alcalde del crimen en la Audiencia de México. El resultado de estas gestiones fue un ambicioso programa de reformas, que alteró profundamente tanto los costos de producción como la posición de la minería en la sociedad.

Los efectos económicos de este programa ya han sido descritos, la reducción del precio del mercurio y de la pólvora, las exenciones individuales de impuestos concedidas a Borda y a otros mineros, el mayor control de los trabajadores como resultado del establecimiento de las milicias, y la entrada del capital mercantil a las actividades mineras después de que fue abolido el sistema de flotas. Sin embargo, Gálvez llevó a cabo también otras reformas más institucionales, cuyo objeto fue dar una voz pública y prestigio social a los mineros. Para ello aceptó las ideas que el sabio mexicano Joaquín Velásquez de León y el minero vasco Juan Lucas de Lassaga expresaron en un memorándum. Es más, la aceptación casi absoluta de este plan parece indicar que fue Gálvez mismo el instigador de dicho informe.

Velasquez de León y Lassaga, al igual que Gamboa y Landázuri, partían de la premisa de que la minería en México estaba en decadencia. Rechazaban las esperanzas que Landázuri tenía respecto a Sonora, porque aunque aquella región era rica en minerales, carecía de población suficiente, y abundaban los indígenas hostiles. Hacían hincapié en la ignorancia técnica del minero mexicano y en el mal concepto en que se tenía a la minería: no se hacían mineros más que quienes eran presas de la más ciega avaricia o de la desesperación económica. Señalaban la escasez de capital, a pesar de todo, como la causa principal de su decadencia. Después de la muerte de Aldaco no quedó ni un solo banco de plata en operación¹⁷. El remedio que proponían

¹⁵ Gálvez, *Informe general*, pp. 42-3.

¹⁶ BM Add. MSS 20999, ff. 559-605.

¹⁷ Lassaga y Velásquez de León, *Representación*, pp. 4-7, 19.

era sumamente distinto del plan de Gamboa, porque querían que se organizara el gremio de los mineros, gobernado por representaciones locales y con un tribunal central en la ciudad de México. Este tribunal debía administrar tanto un banco de fomento como una escuela técnica, recibiendo un real por cada marco de plata producido, cobro que ya la Corona hacía desde 1732 como monedaje extra. Contando con tan segura fuente de ingresos, fácilmente podría reunir el capital necesario para financiar la minería ¹⁸.

Después de que fue nombrado ministro de las Indias en 1776, Gálvez tomó rápidamente medidas para llevar a efecto estas propuestas. Ese mismo año el virrey Bucareli reunió a seis delegados, uno de cada campo minero importante, para establecer el tribunal y la asociación gremial. Velasquez de León, delegado de Sultepec, fue el primer director general, encargado especialmente de la capacitación técnica y de la experimentación. Lassaga, representante de Bolaños, fue elegido administrador general. Tres diputados generales: Tomás de Liceaga, de Guanajuato; Marcelo de Anza, socio de Borda en Zacatecas, y Julián del Hierro, de Temascaltepec, eran los restantes miembros del tribunal. Aniceto del Barrio, delegado de Taxco y comerciante, fue nombrado factor, o sea, gerente administrativo ¹⁹. Ninguno de los grandes mineros de aquella época se dignó asistir a la reunión ni aceptar un puesto en el Tribunal de Minería. De los seis, únicamente Anza se dedicaba completamente a la minería, mientras que Lassaga y Liceaga habían abandonado sus minas.

El primer triunfo del tribunal fue la publicación de un nuevo Código de Minas en 1783, para reemplazar las ordenanzas existentes promulgadas por Felipe II en el siglo XVI ²⁰. Velásquez de León, abogado y matemático, fue su principal autor; aprovechó mucho los *Comentarios* de Gamboa y tuvo una intensa correspondencia con Gálvez. El objetivo del nuevo código era fomentar la producción de plata. Los derechos de patente sobre descubrimientos, la limitación de las responsabilidades civiles de los mineros, la definición cuidadosa de los contratos de aviadores, la remuneración de la mano de obra y la medición de las minas fueron todos asuntos lúcidamente

¹⁸ *Ibid.*, pp. 41-74.

¹⁹ Howe, *The Mining Guild*, pp. 46-59. Un crítico posterior afirmó que los representantes eran «desconocidos... que nunca fueron mineros...»; véase AGI, México, 2241, Miguel Pacheco Solís a Gálvez, 26 marzo 1787.

²⁰ Están reproducidas en Beleña, *Recopilación*, II, 212-92.

expuestos en un lenguaje fácilmente comprensible para los miembros de los tribunales provinciales encargados de la aplicación del código. Es difícil medir el impacto que tuvo, pero tenemos la impresión de que, después de su promulgación, fueron muy pocas las minas que tuvieron que cerrarse o que se arruinaron a causa de litigios.

La segunda realización del tribunal fue el establecimiento de un banco financiero, pero resultó un desastre. Comenzó sus operaciones en 1784, pero antes de dos años el virrey intervino para impedir mayores inversiones. Durante este breve período el banco reunió y colocó 1 204 903 pesos en más de 20 empresas diversas, recobró plata por valor de 509 397 pesos y perdió entonces 702 000 pesos. Además de que siguió una política muy imprudente para los préstamos, la corrupción entró en escena; el gerente administrativo se embolsó 126 938 pesos; Velásquez de León mismo recibió 20 000 pesos en recompensa por sus servicios en la creación del tribunal. Un grupo de minas mal administradas de Pachuca, propiedad de una sociedad mercantil, desperdició una gran parte de los préstamos del banco ²¹.

Después de la suspensión de las operaciones del banco, que había sido la *raison d'être* de la creación del tribunal, éste recibió un nuevo golpe en 1786 cuando murieron tanto Velásquez de León como Lassaga, ambos en bancarrota. La Corona ordenó una investigación sobre las posibilidades del tribunal en el futuro, y el virrey nombró a dos comerciantes, Antonio Bassoco, nuestro viejo amigo, y Antonio Barroso, como diputados generales interinos. Durante la última década del siglo la Corona obtuvo del tribunal tres préstamos con un monto total de dos millones y medio de pesos; la mayor parte de los ingresos del banco tuvieron que ser dedicados al pago de intereses sobre estos préstamos ²². Entonces es posible que el efecto del tribunal, en última instancia, haya sido el de desviar el capital hacia otras actividades distintas de la minería, y de poner las bases de la deuda nacional de México.

De este modo, el tribunal se quedó únicamente con la función de difundir los conocimientos técnicos. En 1786 la Corona designó al distinguido mineralogista español Fausto de Elhuyar como director general. Su labor inicial fue la de servir como guía por la Nueva España a una misión técnica alemana, para introducir el método de

²¹ Howe, *The Mining Guild*, pp. 136-55.

²² Howe, *The Mining Guild*, pp. 95, 371-83.

amalgamación que el barón de Born había descubierto en Austria. Los mineros mexicanos la recibieron con entusiasmo. En Sombrerete la familia Fagoaga permitió a un profesor alemán que realizara experimentos en sus instalaciones de beneficio y en sus minas; en Guanaxuato, Elhuyar pudo servirse de la hacienda de beneficio propiedad del conde de La Valenciana. No obstante, los resultados de estos experimentos fueron muy desalentadores²³. El método de Born resultó ser apenas una variación del antiguo procedimiento de *cazo*, o sea la amalgamación en caliente inventada por Alonso Barba en el siglo XVII. Costaba más y producía menos plata que el procedimiento acostumbrado de patio. En total la Corona gastó 145 371 pesos en una misión de la que el virrey Revillagigedo dijo que era un fracaso completo²⁴.

De todas maneras, Elhuyar, alentado por el virrey, promovió el establecimiento de una escuela tecnológica según el modelo del Instituto de Vergara, en Vizcaya, donde él había sido profesor. La primera escuela secular de México comenzó a preparar en 1792 a un puñado de alumnos enseñándoles los elementos de la mineralogía, de la metalurgia, y de otras materias menos especializadas, tales como francés y matemáticas. El colegio pronto se convirtió en una institución de moda, gracias al prestigio que le dieron sus distinguidos profesores, entre los que se encontraba Andrés del Río, distinguido mineralogista que había estudiado con Humboldt en Friburgo²⁵. En agosto de 1809 el tribunal afirmó que «muchos sujetos de la primera nobleza, cuyos hijos queriendo dedicarse por lo general a las ciencias conducentes a su esfera y carrera militar que no se enseñan en los demás colegios, hallaban en el nuestro las que convenían a su jerarquía y utilidad»²⁶. Los que criticaban al colegio, sin embargo, lo acusaban de haber adquirido la reputación de ser «una

²³ Arthur Whitaker, «The Elhuyar Mining Mission and the Enlightenment», *Hispanic American Historical Review*, 31 (1951), pp. 558-83. Véase la Introducción a Sonneschmid, *Tratado de amalgamación*, escrita por D. J. M. F. (¿Don José María de Fagoaga?), quien llegaba a esta conclusión: «Los mineros alemanes que fueron a enseñar a la América a pesar de los conocimientos científicos que tenían, no pudieron adelantar cosa alguna, ni en el modo de labrar las minas, ni en el beneficio de los metales.» Howe, *The Mining Guild*, pp. 302-19.

²⁴ Revillagigedo, *Instrucción reservada*, pp. 122-8. Clement G. Motten, *Mexican Silver and the Enlightenment* (Filadelfia, 1950), pp. 46-63.

²⁵ Howe, *The Mining Guild*, pp. 320-45.

²⁶ AGI, México, 2248, Informe del Tribunal de Minería, 5 agosto 1809.

posada para caballeros». Los estudiantes entraban y salían según su voluntad, muchos abusaban de sus libertades, y varios tuvieron que ser expulsados por mala conducta ²⁷. Un folleto anónimo, escrito poco después, afirmaba que sus alumnos muy rara vez demostraban ser capaces de aplicar sus conocimientos teóricos a los problemas prácticos de la minería. Los profesores emprendían muy poco trabajo de investigación. El autor de tal folleto concluía diciendo que la institución debía ser trasladada a un centro minero donde los estudiantes pudieran adquirir alguna experiencia práctica ²⁸. De cualquier forma, y a pesar de las persistentes críticas, no hay duda de que el colegio capacitó a varias personas que fueron aceptadas por la minería. El más brillante de ellos, Casimiro Chovel, llegó a ser administrador de la Mina de La Valenciana. En general, el colegio no realizó las altas esperanzas de sus fundadores, porque contribuyó más al progreso de la educación en México que al de la minería.

Fausto de Elhuyar y Andrés del Río trataron, a pesar de todo, de proporcionar a la minería de una maquinaria de desagüe más eficaz. En la mina de Morán en Pachuca hicieron experimentos con bombas hidráulicas de tipo húngaro. Se inclinaban más por la fuerza hidráulica que por los motores de vapor, ya que estos no sólo eran más caros, sino que también era más costosa su operación debido al precio de los combustibles. Cuatro años de trabajo y 40 000 pesos proporcionados por el tribunal fueron invertidos en este experimento, pero el primer tiro en que se instaló una bomba se derrumbó bajo el peso del aparato, y en el segundo, después de un éxito limitado, una inesperada penetración de agua nulificó todo el trabajo ²⁹. Una vez más, habían fallado los métodos importados.

Si fracasaron tanto sus empresas técnicas como las financieras, ¿dónde estaba el valor del tribunal para la minería mexicana? En primer lugar, era el portavoz de la minería en sus tratos con la burocracia fiscal. Fue el tribunal el que, en 1778, expresó las protestas de los mineros contra las exacciones de los nuevos oficiales de Ha-

²⁷ AGI, México, 2254, Defensa de Elhuyar ante los ataques del Tribunal, 11 abril 1811.

²⁸ *Discurso sobre la minería de este imperio* (México, 1822). Respecto a su ataque contra Elhuyar véanse pp. 34-5.

²⁹ Véase AGI, México, 1617, Iturrigaray a Soler, 26 junio 1803, donde se encuentra una descripción de la máquina; véase también AGI, México, 2254, Elhuyar a Lizana, 24 agosto 1809.

cienda, y el que obtuvo del virrey Mayorga la declaración de que los abastecimientos esenciales para la minería quedaban exentos de alcabalas ³⁰. Además, apoyó casi invariablemente las solicitudes de exención de impuestos por parte de los mineros individuales que participaban en empresas peligrosas. El servicio más valioso lo hizo en 1801. Ese año, el bloqueo naval británico provocado por la alianza de España con Napoleón interrumpió los envíos de mercurio hasta el grado de que muchas haciendas de beneficio suspendieron sus operaciones, mientras que otros mineros recurrían al procedimiento de fundición para obtener dinero con que sufragar los gastos de desagüe de las minas. El tribunal, entonces, después de muchos y difíciles regateos, obtuvo de la Junta Superior de Real hacienda de la colonia una reducción temporal del 50 por 100 en todos los impuestos que gravaban a la producción de plata. Esta exención, concedida por un período de siete meses, de enero a agosto de 1802, equivalía a un subsidio fiscal de 515 798 pesos. El tribunal había recurrido a un lenguaje vigoroso para obtener dicha concesión, protestando que «la minería víctima siempre y nunca protegida de las circunstancias...». Llegó hasta acusar a la Corona de «...tanta lentitud para beneficiar y tanta prontitud para perjudicar» ³¹. Naturalmente que Madrid no aprobó la medida: ordenó al virrey que reprendiera tanto a la Junta Superior como al Tribunal por vulnerar las reales prerrogativas. Los impuestos perdidos, sin embargo, no fueron recobrados.

El Tribunal tenía mejores posibilidades de representar a la minería porque, después de 1793, obtuvo los servicios de varios de los principales mineros. Entre 1787 y 1793 su porvenir había sido dudoso. Una investigación virreinal del fracaso financiero que tuvo lugar poco antes, dio a sus antiguos opositores una oportunidad de atacarlo. En 1790, por ejemplo, Francisco Javier de Gamboa, por entonces regente de la Audiencia de México, propuso la abolición del Tribunal acusándolo de haber fracasado totalmente en el cumplimiento de los objetivos para los que se le creó. Criticó el nuevo código, el cual, según él, era inferior al antiguo; se lamentó de que la Audiencia

³⁰ *Representaciones del real tribunal de minería a favor de su importante cuerpo y declaración del excelentísimo señor virrey de estos reinos* (México, 1781).

³¹ AGI, México, 1608, Tribunal de Minería al Virrey, 29 diciembre 1801, que se encuentra en Marquina a Soler, 20 febrero 1802. Agi, México, 1786, Consejo de Indias, *Consulta*, 2 julio 1803.

hubiera sido eliminada de los litigios mineros, y seguía siendo partidario de que el Consulado se hiciera cargo del banco de financiamiento³². No obstante, las críticas de Gamboa fueron rechazadas, y en cambio el Tribunal surgió de la disputa mucho más fuerte que antes. Se le asignaron las funciones de corte de apelación para asuntos mineros. La jurisdicción exclusiva sobre todos los casos mineros, que había sido concedida a las diputaciones de elección local existentes en cada campo minero, fue causa de innumerables controversias. Se dio entonces al Tribunal el poder de revocar las sentencias de los tribunales locales y, consecuentemente, se convirtió en la verdadera cabeza del gremio minero. Dos de los tres administradores generales elegidos entre 1793 y 1810 fueron representantes de Guanajuato, que era el campo minero más importante. Dos de ellos, el marqués de San Juan de Rayas, dueño de la Mina de Rayas en Guanajuato, y José Mariano de Fagoaga, administrador de las minas de su familia en Sombrerete, venían de familias dedicadas a la minería desde hacía casi un siglo. Cuando en 1801 el Tribunal, confiando demasiado en sí mismo, atacó a la Junta Superior de Real Hacienda por su lentitud para auxiliar a la minería, tenía como director general a Fausto de Elhuyar, como administrador general a José Mariano de Fagoaga, y como diputados generales al marqués de San Juan de Rayas y a Marcelo José de Anza, de Zacatecas. Dos años más tarde el Coronel Ignacio de Obregón, principal minero de Catorce, entró al Tribunal en calidad de diputado general. Fueron estos hombres lo que en 1803 dijeron a la Corona: «Cuerpo general de Minería, cuyos intereses íntimamente ligados con los del estado, son transcendentales al comercio, a los artes, a la industria, a Vuestra Real Hacienda, y a la Europa toda».³³

El Tribunal de Minería logró cambiar el clima de la opinión pública. En 1716 el virrey Linares escribió: «Son los mineros lastimosamente de desprecio común de los comerciantes»³⁴. Este desprecio por todos los mineros, excepto los más grandes, continuó hasta los tiempos de la visita de Gálvez, pero entonces, poco a poco, al hacerse la minería más productiva y menos arriesgada, el oficio fue adquiriendo respetabilidad. El magnífico palacio neo-

³² Howe, *The Mining Guild*, pp. 182-91.

³³ AGI, México, 2246, Agente del Tribunal de Minería, 18 junio 1803.

³⁴ BN (Madrid) MSS 2929, f. 28.

clásico que era sede del Tribunal demostró visiblemente al mundo la nueva categoría social del gremio minero. Y como afirmó el Tribunal mismo: «es innegable que de ella (Tribunal de Minería) proviene principalmente si se atiende por una parte al influjo, tanto moral como político, que ha tenido en mudar la opinión pública, disipando la preocupación general que había contra este giro, y abriendo en alguna manera la puerta a la franqueza con que las gentes de otros se han dedicado a él o aplicado parte de sus caudales»³⁵. Naturalmente que es imposible comprobar esta afirmación, porque quizá el aumento en las ganancias explica suficientemente que una mayor parte del capital se haya dirigido hacia la minería, pero sobre todo, es un hecho innegable que la existencia del Tribunal fue expresión de la preferencia real por la minería frente al comercio.

Gálvez tuvo un brillante éxito en sus planes para incrementar la producción de plata en México. Este éxito, ya lo hemos dicho, puede ser atribuido con más justicia a sus reformas estrictamente económicas, y no es fácil medir los efectos de su programa institucional, pero parece que ni las iniciativas técnicas ni las financieras del Tribunal promovieron un mayor incremento en la producción. Lo que sí es innegable es que la minería adquirió una posición más respetable en la sociedad. Gálvez, como buen mercantilista, le confirió prestigio público organizándola como gremio, al que se le otorgó jurisdicción particular y un Tribunal central que tenía ingresos mayores que los consulados. Liberó a la minería de la jurisdicción de la Audiencia y rechazó el plan de Gamboa de someterla a la administración económica del Consulado. A pesar de todo, ni los incentivos fiscales ni la independencia institucional habrían incrementado la producción de plata si no hubiesen existido en México tantos empresarios como inversionistas que pudieran sacar provecho de los cambios hechos por Gálvez. Nuestra atención se vuelve ahora hacia esos hombres y hacia sus empresas.

³⁵ AGN, Minería 193/1, Tribunal de Minería, 22 abril 1815.

CAPÍTULO IV

LAS GRANDES EMPRESAS

La sociología de la minería de plata en México presenta un problema casi insoluble para el historiador: la ausencia de información sobre los fracasos, las quiebras, y sobre la deprimente tragedia social que el progreso ocultaba. Velásquez de León afirmó en una ocasión que de cada diez personas que emprendían actividades mineras, ocho perdían todo su dinero. La gente se metía en el negocio de minas «arrastrados de una ciega codicia o de una desesperada necesidad»¹, pero los que huían hacia los campos mineros en busca de la redención económica con demasiada frecuencia descendían aún más en la escala social, perdiéndose entre la grosera camaradería y mala vida que en ellos prevalecía. Gamboa observó que «el primer enemigo del minero es el minero mismo. Suelen ser pródigos, sin modo, ni fin en gastos, lujos, superfluidades y aún vicios»².

Por otra parte, muchas de las mayores fortunas coloniales se hicieron con la minería de plata. Los mineros mexicanos adquirieron, durante el siglo XVIII, por lo menos dieciséis títulos de nobleza, número considerablemente más alto de los que obtuvieron sus cautelosos rivales, los comerciantes. En ocasiones abunda la información sobre estas personas y sobre sus empresas, la cual, sin embargo, no es totalmente digna de fe en todos los casos, porque procede principalmente de demandas judiciales y peticiones de exenciones fiscales. De cualquier forma, con estas pruebas documentales pueden emprenderse varios estudios sobre las empresas. Esta discusión, ante la ausencia de libros de contabilidad que cubran períodos largos, debe concentrarse en la formación de capitales y en las personas de los empresarios. En la tabla 12 se da una lista de la nobleza titulada³.

¹ Lassaga y Velásquez de León, *Representación*. p. 42.

² Gamboa, *Comentarios*, pp. 378-9.

³ Tomada de Ortega y Pérez Gallardo, *Historia genealógica*.

TABLA 12

LA NOBLEZA MINERA MEXICANA EN EL SIGLO XVIII (CREACIONES)

<i>Título</i>	<i>Año de creación</i>	<i>Campo minero</i>	<i>Origen</i>
Conde de Santiago de la Laguna	1727	Zacatecas	Peninsular
Conde de San Mateo Valparaíso	1727	Zacatecas	Peninsular
Marqués de San Clemente	1730	Guanajuato	Criollo
Conde de San Pedro del Alamo	1734	Banco de plata Zacatecas, Ma- zapil	Peninsular
Marqués de Valle Ameno	1740	Real del Monte	Peninsular
Conde de Nuestra Señora de Guadalupe del Peñasco	1768	Guadalcázar, Ca- torce	Criollo
Conde de Regla	1768	Real del Monte	Peninsular
Marqués de Pánuco	1772	Rosario	Criollo
Marqués del Apartado	1772	Banco de plata Sombrerete	Criollo
Marqués de San Juan de Rayas	1774	Guanajuato	Criollo
Conde del Valle de Súchil	1776	Durango, Som- brerete	Peninsular
Conde de la Valenciana	1780	Guanajuato	Criollo
Conde de la Cortina	1783	(?)	Peninsular
Marqués de Bibanco	1791	Bolaños	Peninsular
Conde de Pérez Gálvez	1805	Guanajuato	Peninsular
Conde de Casa Rul	1804	Guanajuato	Peninsular

Causa impresión el cambio de Zacatecas, en la primera mitad del siglo, a Guanajuato, en los años que siguieron a 1770. A estos dos campos corresponde la mitad de los títulos, siendo una sola mina, la de La Valenciana, la causa de creación de tres condados por lo menos. Igualmente notable es el hecho de que mientras los mineros principales de Zacatecas parece que eran peninsulares, en Guanajuato en cambio, como se verá más adelante, eran casi todos criollos. En todos los niveles de la minería existía una competencia activa entre estas dos mitades de la nación española. Aunque algunos de los más importantes mineros peninsulares comenzaron su carrera como comerciante-aviadores y dueños de bancos de plata—por ejemplo, el conde de San Pedro del Alamo, el de Regla, y Manuel de Aldaco—otros peninsulares, tales como el Conde de Bibanco y José de la Borda se lanzaron, como los criollos, directamente a las actividades mineras.

Además, estos títulos pueden servirnos como guía esquemática de la importancia relativa de cada campo minero. Guanajuato siem-

pre produjo entre la quinta y la cuarta parte de toda la plata mexicana. Bolaños y Catorce fueron los dos grandes descubrimientos del siglo, pero los demás campos, tales como Taxco, Real del Monte y Pachuca, y muy especialmente Zacatecas, experimentaron todos un ciclo irregular de inundaciones y bonanzas. El gran florecimiento de la producción que comenzó después de 1770 y que duró hasta 1810, fue resultado tanto de la rehabilitación de antiguas minas como de una explotación más eficiente de las nuevas. Como ilustración de estas complejas tendencias, hemos seleccionado a Bolaños y a Zacatecas para discutir las en detalle. pero para comprender enteramente la situación que prevalecía antes de 1770 es preciso que emprendamos el examen de una institución que hasta este momento nos es relativamente desconocida.

I

En 1716 el virrey duque de Linares afirmó que aunque la minería mexicana requería los servicios de unos cuatro o cinco bancos de plata, en realidad existían sólo dos, propiedad de Isidoro Rodríguez y Luis Sánchez de Tagle respectivamente ⁴. Un tercer banquero, llamado Nicolás de Landa, había quebrado poco antes, y algo más tarde Rodríguez corrió la misma suerte ⁵. Hacia 1730 encontramos que se mencionan dos bancos, pertenecientes respectivamente a Francisco de Valdivieso y a Francisco de Fagoaga ⁶, pero parece que en ningún momento durante el siglo XVIII existieron al mismo tiempo más de tres de estas instituciones, y hacia 1770 las tres habían desaparecido ⁷.

El origen de estos bancos se encontraba en la demora de seis meses que implicaba la decisión de la Corona de dar en concesión la acuñación a individuos particulares. Surgió un grupo de comerciantes que cambiaban los trozos de plata por moneda acuñada tan pronto como el metal llegaba a la ciudad de México, cargando una comisión de un real por marco. Entonces estas personas arreglaban que la plata fuera sometida al ensaye final y que fuera fundida en barras, con frecuencia alquilando el local y la maquinaria a la misma Casa de

⁴ BN (Madrid) MSS 2929, f. 137.

⁵ Gamboa, *Comentarios*, pp. 149, 355.

⁶ Fonseca y Urrutia, *Historia general de Real Hacienda*, I, 152.

⁷ Lassaga y Velásquez de León, *Representación*, p. 19.

Moneda ⁸. Los banqueros de plata, pues, eran simples comerciantes que, hasta 1730, controlaron la tercera fase de la industria de la plata en México. La familia Fagoaga, por ejemplo, alquilaba de la Corona la oficina del Apartado, donde se separaba («apartaba») finalmente el oro que contenía la plata en barras. Pero además de este negocio de trueque y de acuñación, los banqueros de plata tenían la función de ser los principales aviadores de México, les abrían cuentas a los mineros prominentes, pagaban las libranzas que se giraban en su contra, y les remitían dinero en efectivo, mercurio y otras materias primas. Según Gamboa, únicamente cobraban una comisión de 1³/₄ reales sobre la plata producida por los mineros con quienes tenían contratos ⁹. Lo que diferenciaba a los bancos de plata de los aviadores comunes y corrientes era que disponían de mayores recursos de capital, sus tasas de comisión eran más generosas y participaban en la Casa de Moneda. Estas firmas en muchos casos aceptaban préstamos de instituciones e individuos particulares, a los que les pagaban el interés normal del 5 por 100. No obstante, en ningún sentido eran bancos de depósito o de emisión; en lo relativo al tipo de transacciones que hacían, no eran más que versiones ampliadas del comerciante en plata tradicional.

A pesar de todo, la escala de sus operaciones era a veces extraordinariamente amplia. En 1738 Francisco de Valdivieso, ya para entonces conde de San Pedro del Alamo, se comprometió a proporcionar apoyo financiero a Manuel Ginoesio, dueño de las minas y de la hacienda de beneficio de Sombrerete, campo situado en lo que hoy es el estado de Zacatecas ¹⁰. Valdivieso le dio inmediatamente la suma de 20 000 pesos en efectivo, despachó a Sombrerete materiales tan indispensables como mercurio, cuerdas, hierro y pólvora, y pagó todas las libranzas que Ginoesio giró contra su banco en pago de abastecimientos tales como maíz, forraje, mulas, sal y piritas de cobre. A cambio de tan extensos servicios, el contrato estipulaba que Ginoesio debía pagar una comisión de 2¹/₂ reales por cada marco de plata que enviara a la ciudad de México. Como era caso frecuente en aquellos arreglos, el minero sobregiró su cuenta. Valdivieso en represalia, aumentó la comisión primero a 4 reales, después, en 1742,

⁸ Elhuyar, *Indagaciones*, p. 8, 39.

⁹ Gamboa, *Comentarios*, p. 149.

¹⁰ AGN, Vínculos 174, contiene un relato completo de la demanda.

designó un administrador para que aumentara la producción, y, finalmente, en 1749, demandó judicialmente a Ginoesio con el objeto de embargarle y rematarle sus bienes. Afirmó que durante todo aquel período, de 1738 a 1749, le había dado 703 645 pesos en efectivo, abastecimientos y libranzas, a cambio de los cuales únicamente había recibido plata por valor de 472 183 pesos. Ginoesio se defendió, declarando que había entregado al banco plata por valor de 1 106 474 pesos, de modo que en realidad el conde resultaba su deudor por más de 350 000 pesos. Como actualmente carecemos de información más precisa, no tenemos ninguna razón para dar crédito al testimonio de ninguna de las dos partes.

Pero, ¿de dónde obtuvo Valdivieso, simple inmigrante montañés suficiente capital para establecer su banco de plata? Como era tan frecuente el caso en México, parece que la respuesta fueron sus matrimonios. Su primera esposa, Luisa Sánchez de Tagle, hija del segundo marqués de Altamira, llevó al matrimonio una dote de 200 000 pesos ¹¹. Posiblemente doña Luisa también heredó el banco de plata fundado por su abuelo el primer marqués de Altamira, que fue prior del Consulado, Luis Sánchez de Tagle. Tanto este, como el padre de doña Luisa, como Valdivieso, eran naturales de Santillana del Mar ¹². La hermana de doña Luisa también se casó con un montañés. A la muerte de su esposa, Valdivieso, insatisfecho todavía después de haber obtenido tan enorme premio matrimonial, logró obtener la mano de la marquesa de San Miguel de Aguayo, heredera de vastas propiedades en lo que hoy es el estado de Coahuila. A causa de alguna particularidad genética la herencia de este enorme mayorazgo establecido en el siglo XVI por el famoso Francisco de Urdiñola, había pasado por cuatro generaciones de hijas, cada una de las cuales a su vez escogió por esposo a un español peninsular ¹³. Valdivieso, en sus dos alianzas matrimoniales, se benefició de tan arraigadas preferencias sociales.

¹¹ Francisco González Cancino y Aguirre, «Santillana del Mar en el año de 1753», *Altamira*, 2 (1934), pp. 73-178. También *Aportación al estudio de la historia económica de la montaña*, pp. 707-11.

¹² Rubio Mañé, *Gente de España*, pp. 258-9.

¹³ AGI, México, 1370, Bucareli a Arriaga, 24 junio 1772, contiene impreso un memorial de los servicios del marqués de Aguayo. Leopoldo Martínez Cossío, *Los caballeros de las órdenes militares en México* (México, 1946), pp. 88-9, 193-4, 290.

Pocos documentos han sido descubiertos que nos iluminen sobre el resultado del gran número de inversiones mineras en que Valdivieso colocó las fortunas de sus esposas. Figuró prominentemente como aviador en Pachuca y en Guanajuato, y él mismo fue dueño de minas en Zacatecas y en Mazapil¹⁴, pero parece que a su muerte en 1749 sus dos hijos encontraron que su vasto patrimonio estaba abrumado por las deudas. Una fuente menciona la cifra de medio millón de pesos «en depósitos»¹⁵. Lo que es cierto es que cuando los fondos de la Iglesia mexicana fueron amortizados entre 1805 y 1808, obligándose a todos los deudores a pagar lo que debían en fondos eclesiásticos, el marqués de San Miguel de Aguayo de aquel tiempo fue requerido del pago de no menos de 450 000 pesos¹⁶. No obstante, no está claro si el origen de esta enorme hipoteca fue la prodigalidad de Valdivieso cuando era banquero de plata.

II

Si alguna familia podía pretender ser la primera familia minera de México, esta era sin duda la de los Fagoaga. Durante todo el siglo XVIII y a través de tres generaciones, participaron en muchas de las mayores empresas de la minería. Hasta el decenio de 1770 a 1780 operaron el banco de plata más importante de la colonia; luego, durante la siguiente década, surgieron como los principales mineros de la provincia de Zacatecas. Además, esta familia siempre estuvo cercana al poder, pues tanto Francisco de Fagoaga como su yerno Manuel de Aldaco fueron priores del Consulado de México. Por otra parte, José Mariano de Fagoaga, a quien se debió principalmente la gran bonanza de Sombrerete, fue elegido administrador general del Tribunal de Minería¹⁷. Después de la independencia, los Fagoaga, junto con sus primos los Villaurrutia, fueron jefes del partido aristocrático borbónico¹⁸. Frances Calderón de la Barca, esposa del minis-

¹⁴ BRP, MSS 2824, Miscelánea de Ayala, I, ff. 132, 136, 137.

¹⁵ AGI, México, 1511, Cossío a Gálvez, 26 noviembre 1780.

¹⁶ Romeo Flores Caballero, «La consolidación de vales reales en la economía, la sociedad y la política novohispanas», *Historia Mexicana*, 18 (1969), 3, pp. 334-78.

¹⁷ *Gacetas de México*, II, 79. Fagoaga fue elegido prior en 1733. Su nieto José Mariano fue administrador general en 1800-6. Véase AGI, México, 2246, Azanza a Soler, 30 enero 1800.

¹⁸ Mora, *Obras sueltas*, p. 27.

tro español en México durante la década que comenzó en 1840, conoció bien a esta familia y visitó sus posesiones ¹⁹. Obviamente estaba pensando en ellos cuando escribió: «Hay en México unas cuantas familias de la vieja escuela, gente de alto rango pero que se mezcla muy poco con la sociedad... Estando casi todos emparentados por nacimiento o por matrimonio, forman una especie de clan... y cualesquiera elementos de la buena sociedad que existan en México deben buscarse entre ellos» ²⁰.

Fue en 1706 cuando Francisco de Fagoaga, vasco del Valle de Oyarzu, en Guipúzcoa, puso los cimientos de la prosperidad de sus futuros descendientes al rentar la oficina del Aparrado al administrador nominal ²¹. Porque dicha institución, que era una dependencia real que se rentaba a los particulares, tenía la función de separar el oro de la plata en barras que se enviaba a la capital del Virreinato. Naturalmente que, bien manejada, podía proporcionar ganancias atractivas al dueño. Además, como era más práctico cambiar la plata en bruto por dinero en efectivo a la presentación, la oficina era una base ideal para un banco de plata. Por ello no es de sorprender que ya hacia 1730 se decía de Fagoaga, junto con Valdivieso, que eran los dos banqueros de la plata más importantes. Ya para entonces había comprado los derechos de alquiler al anterior concesionario en la cantidad de 60 000 pesos. La Corona cobró 36 000 por autorizar la transacción. El matrimonio completó el círculo de las empresas de Fagoaga cuando su esposa Josefa heredó la casa mercantil establecida por su padre en el siglo anterior, la cual tenía un valor de 118 464 pesos. Era hija del comerciante vasco Juan Bautista de Arosqueta ²². Nuestro conocimiento tanto de la estructura como del desarrollo del grupo de empresas de Fagoaga se limita principalmente a lo que puede deducirse del inventario de su sucesión, elaborado en diciembre de 1736, poco después de su muerte ²³. (Véase tabla 13.)

Es necesario interpretar este inventario con cautela, porque se trata de un balance de las existencias, el efectivo, los créditos y las

¹⁹ Francés Calderón de la Barca, *Life in Mexico* (Londres, ed. Everyman, 1960), p. 420.

²⁰ *Ibid.*, pp. 223-4.

²¹ AGN, Vínculos 8/6, relato del lic. Oláez, 1808.

²² Respecto a Arosqueta, véase Rubio Mañé, *Gente de España*, pp. 31-2. Murió en 1730.

²³ AGN, Vínculos 7. El inventario fue elaborado a fines de 1736 y aprobado el 8 abril 1737.

TABLA 13

INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA SUCESION DE
FRANCISCO DE FAGOAGA, DICIEMBRE DE 1736
(En pesos)

<i>Activo</i>		<i>Pasivo</i>	
Equipo e inmueble de la oficina del Apartado	167 775	Depósitos al 5 % de int.	68 500
Efectivo	757 259	Depósitos sin int.	95 920
Oro y plata en barras	131 293	Deudas en cuenta corriente:	
Banco de plata:		Domingo de Mateos	418 274
Créditos cobrables	262 582	Francisco de Vértiz	236 772
Créditos dudosos	107 507	Marqués de San Clemente	96 896
Créditos perdidos	67 358	Juan Domingo Guraja	78 638
Almacén:		Varios diversos	203 969
Existencias actuales	125 013	Legados, etc., que se deben a la familia Fagoaga	121 612
Mercancía última flota	216 843		
Mercancía flota actual	308 011	Varios	20 066
Créditos cobrables	97 632		
Créditos dudosos	6 951		
Créditos perdidos	37 582		
Existencias, efectivo y créditos del almacén de Oaxaca	45 422		
Efectos personales	34 421		
Miscelánea	14 072		
ACTIVO TOTAL	2 379 721		
PASIVO	1 331 647		1 331 647
TOTAL NETO	1 048 074		
		Capital de Josefa de Arosqueta	159 070
		Fagoaga al contraer matrimonio	176 909
		Cargos menores	12 742
	348 721		348 721
Incremento neto	699 353		

deudas, que se refiere a un momento determinado, y no del resumen de un año de operaciones. En realidad Fagoaga dirigía tres negocios distintos: la casa mercantil, la oficina del Apartado, y el banco de plata. Por desgracia, aunque todos los créditos concedidos por el almacén y por el banco aparecen separados, las deudas que tenía en cuenta corriente se presentan en conjunto. Sin embargo, de otro

balance elaborado por Ambrosio de Meave, administrador del almacén, podemos estimar que las deudas corrientes de la firma no superaban la cifra de 200 000 pesos. *De ser esto justo, entonces los otros 750 000 pesos representaban las sumas que debían el banco de plata y el Apartado.* En realidad, dos comerciantes, llamados Domingo Mateos y Francisco de Vértiz, tenían créditos por las sumas de 418 274 y 236 722 pesos respectivamente. Estas deudas son la explicación de la sorprendentemente alta existencia de efectivo en la caja de Fagoaga, o, por el contrario, de la gran existencia de mercancías que era muy superior a lo que la firma tenía costumbre de guardar en sus bodegas. Según una estimación posterior, el Apartado requería un fondo revolviente de 400 000 pesos para la compra de plata en barras. El resto del efectivo probablemente pertenecía a algunos mineros y comerciantes en plata.

La sección de depósitos estaba dividida en dos partes: una, por la que se pagaba un interés del 5 por 100, y otra, por la que no se pagaba interés alguno. La primera comprendía una serie de pequeñas sumas prestadas por instituciones eclesiásticas y unos cuantos particulares. Una gran parte de esta segunda categoría eran fondos depositados por los jueces en casos testamentarios; la aduana tenía otros 30 000 pesos. Parece que Fagoaga era muy seguro para depositar dinero, pero cualquiera que haya sido su origen, estos depósitos representaban una fuente más de capital y no una base importante del negocio.

Puede medirse mejor la gama de actividades del banco de plata mediante los créditos que otorgaba. Abastecía a clientes de Guanajuato, Zacatecas, México, Tlalpujahua, Taxco, Pachuca, Temascaltepec y Chihuahua. Las sumas variaban desde los 234 pesos prestados a Francisco y José de la Borda, hasta los 57 493 pesos concedidos a Simón Francisco de Arroyo, socio de la Mina de Rayas en Guanajuato. Más del 40 por 100 de todos los créditos «seguros» iba a Guanajuato. La columna del pasivo de esta contabilidad confirma la importancia de aquella ciudad para el banco: Fagoaga debía al marqués de San Clemente, principal condueño de las Minas de Mellado y de Cata, unos 96 896 pesos. Zacatecas tenía menos importancia: el banco había prestado 27 895 pesos a un minero y debía 20 150 a otro. Las actividades de los bancos de plata también implicaban riesgos considerables: los créditos dudosos o perdidos ascendían a más de 150 000 pesos.

Después de la muerte de Fagoaga, su viuda nombró administrador general de todos los bienes a Manuel de Aldaco, sobrino peninsular de su difunto esposo, que se había casado con la hija mayor. Desde 1736 hasta su muerte en 1770 recibió la mitad de las utilidades de la empresa. Parece, sin embargo, que este arreglo tenía alguna cláusula secreta, ya que a la muerte de Aldaco, su único hijo no recibió más que una tercera parte de los bienes, y la diferencia volvió a manos de la viuda, que todavía vivía. Cualquiera que hayan sido las condiciones precisas del arreglo, el hecho es que la gran firma de Fagoaga no fue dividida por razones testamentarias. Aldaco, con la fuerza que le daba su matrimonio y el parentesco, se convirtió en el banquero de plata más importante de su época, prior del Consulado, y cofundador del Colegio de las Vizcaínas. Dio apoyo financiero a muchas de las principales empresas mineras, y fue aviador de José de la Borda, que era el minero más hábil de su tiempo, y obtuvo grandes ganancias de la bonanza de este último en Tlalpujahua durante el decenio de 1740 a 1750. No obstante, la mayoría de los negocios en que intervino no resultaron tan provechosos ²⁴. En Real del Monte, donde el conde de Regla haría más tarde una enorme fortuna, Aldaco, asociado con Juan de Barandiarán, trató de desaguar la Mina de Santa Brígida mediante la excavación de un socavón. Designó administrador a Pedro de Anza, un colaborador cercano de José de la Borda. A pesar de toda esta combinación de recursos financieros y tecnología, Aldaco perdió aproximadamente medio millón de pesos en la empresa ²⁵.

Los riesgos de los bancos de plata fueron demostrados más claramente cuando en 1749 el minero más importante de Guanajuato, el marqués de San Clemente, murió debiendo 160 000 a Aldaco. Los herederos no pudieron ni pagar el capital, ni abonar los intereses anuales sobre esa inmensa suma. Consecuentemente, Aldaco recurrió a los tribunales, y en 1753 la Audiencia ordenó a los herederos que le entregaran su principal propiedad, la Hacienda de Villachuato ²⁶. Otras de sus inversiones resultaron igualmente improductivas. En 1757 Aldaco emprendió acción judicial contra ciertos mine-

²⁴ Véanse José Antonio Ximénes y Frías, *El fenix de los mineros ricos* (México, 1779), p. 55; y también Manuel Toussaint, *Tasio* (México, 1931), p. 90.

²⁵ AGI, México, 2240, Domingo Valcárcel a la Corona, 29 agosto 1777.

²⁶ AGI, México, 2214, marqués del Apartado al virrey, 31 agosto 1793. Véase también Chávez Orozco, *Conflicto de trabajo*, pp. 96-9.

ros deudores de Fresnillo; nombró a su propio administrador, pero perdió 80 000 pesos ²⁷. Por aquella misma época y de manera semejante, José de la Borda, a pesar de sus primeros éxitos en Tlalpujahua y en Taxco, no pudo desaguar la Mina de la Canal en Zacualpan. Hacia 1766 le debía 102 000 pesos a Aldaco ²⁸.

Es evidente que sólo una firma riquísima podía resistir tan gran número de pérdidas. Probablemente —porque los registros de que disponemos distan mucho de estar completos— otras inversiones sí eran productivas. Además, durante los años de 1758 a 1762, todas las ganancias del almacén, administrado por Ambrosio de Meave, se pagaron directamente al banco de plata ²⁹, y según una estimación independiente, el Apartado produjo un ingreso anual medio de 25 435 pesos durante el período de 1742-62, que por lo menos era suficiente para cubrir la pérdida de Santa Brígida ³⁰. No obstante, un documento relativo a una demanda familiar ofrece una escala de ganancias distinta, después de deducir el 5 por 100 por el capital representado por las instalaciones de la planta ³¹.

UTILIDADES DEL APARTADO, 1751-78

Agosto 1751 - noviembre 1756	Pérdida de 10 604 pesos (se pagaron 42 388 pesos de interés)
Noviembre 1756 - enero 1767	98 124 pesos de utilidad
Enero 1767 - octubre 1772	194 495 pesos de utilidad
Doce años 1766 - 78	392 045 pesos de utilidad

Una explicación obvia de las pérdidas sufridas durante el decenio de 1750-60 podría ser que Aldaco financiaba el banco con los ingresos del Apartado. El asunto era bastante delicado, ya que para entonces dicha oficina había sido heredada por su cuñado José Joaquín de Fagoaga, coronel residente en la corte de Nápoles. En 1764 Aldaco le escribió una carta muy paternal a Fagoaga, informándole de las dificultades financieras porque estaba pasando la familia. Le pedía que fuera más económico, «excusando todo gasto superfluo que sólo

²⁷ AGN, Vínculos 150, la Audiencia adjudicó la hacienda a Aldaco, 7 junio 1753.

²⁸ BRP, MSS 2824, Miscelánea de Ayala X, informe de Tomás de Landázuri, ff. 133-4, 157; AGN, Minería 202, Manuel de Aldaco al virrey, 13 febrero 1768.

²⁹ AGN, Vínculos 106/4, José de la Borda al virrey, marzo 1775.

³⁰ Véanse balances en AGN, Vínculos 10/3, declaración de Manuel Ramón de Goya, 15 mayo 1782.

³¹ AGI, México, 1382, Bucareli a Gálvez, 27 julio 1777. AGN, Vínculos 6/3, declaración de J. A. Rangel, 7 julio 1794.

conduce a desacreditar las casas de negocios por opulentas que sean porque se hacen objetos de la censura y murmuración de todas las personas de buen seso...»³². ¡Muy buenos consejos de una persona que acababa de perder 500 000 pesos en una mina! El resultado final de la gestión de Aldaco resulta más claro del inventario de la sucesión de Fagoaga elaborado después de su muerte³³. (Véase tabla 14.).

La diferencia principal entre este inventario y el anterior estaba en la adquisición de haciendas y en la gestión directa de minas ubicadas en Fresnillo y en Sombrerete. Principalmente mediante juicios hipotecarios los Fagoaga adquirieron empresas productivas. La concentración geográfica de sus intereses en lo que hoy es el estado de Zacatecas se haría mucho más pronunciada en los años subsiguientes. El banco de plata continuó sus operaciones, pero como no aparecen en el inventario los renglones particulares, carecemos de indicación sobre su monto. También aquí los grandes fondos en forma de barras de plata y efectivo reflejan el modo de operar tanto del Apartado como del banco de plata, y no un activo de fácil realización. Por lo que se refiere al pasivo, la firma había aumentado algo sus depósitos, que como en casos anteriores, representan la acumulación de sumas pequeñas que proporcionaban las cofradías, los conventos y los particulares. Domingo Valcárcel, juez mayor de la Audiencia de México, había colocado con Aldaco la cantidad de 22 529 pesos. No sabemos si todos los depósitos, o solo una parte de ellos, recibían el interés del 5 por 100. Como en casos anteriores, las cuentas corrientes comprendían un gran número de pequeñas deudas, y además la firma debía 400 000 pesos al Consulado y 310 849 a la Casa Echeveste, que fue quien, conjuntamente con Meave y Aldaco, promovió la construcción del Colegio de las Vizcaínas. A lo largo de treinta años, el valor total de estos negocios combinados aumentó en 741 845 pesos, lo cual representa un incremento anual medio de 21 819 pesos. De esta cifra, naturalmente, está excluido el ingreso del cual vivía la familia Fagoaga, pero de todos modos es indicativa de que la decisión de Aldaco de participar fuertemente en las actividades mineras no le produjo grandes utilidades.

³² AGN, Vínculos 6/3, Aldaco a José Joaquín de Fagoaga, 22 octubre 1764.

³³ AGN, Vínculos 6/3, inventario aprobado 31 diciembre 1770 y AGN, Vínculos 8/8.

TABLA 14

**INVENTARIO PARCIAL DE LOS BIENES DE LA SUCESION
DE FAGOAGA, AGOSTO DE 1772 (*)**
(En pesos)

<i>Activo</i>		<i>Pasivo</i>	
Oficina del Apartado, equipo y local	138 000	Depósitos	280 186
		Deudas en cuenta co- rriente:	
		Al Consulado	400 000
Metal en barras y efec- tivo	1 412 718	Al Almacén de Eche- veste	310 815
		Varios	417 318
Créditos, actuales y co- brables	318 280	Deudas de la Hacienda de Villachuato	17 601
Créditos en Fresnillo	271 665	Al Marqués del Apartado	73 296
Créditos en Sombrerete	170 881		
Almacén:		Libranzas de Sombrerete y Fresnillo	18 000
Existencias, efectivo y créditos	525 000	A Manuel Aldaco, costos personales	19 084
Haciendas:		Varios	55 577
Villachuato	253 544		
Zambrano	111 303		
Temepantla	44 769		
Propiedades menores	54 682		1 591 927
Efectos personales	43 000		
Varios	8 004		
GRAN TOTAL	3 381 846	Capital de Josefa de Arosqueta (h. 1736)	546 508
menos	1 591 927	Capital de Aldaco (h. 1736)	80 000
TOTAL NETO	1 789 919		626 508
menos	626 508	(Dividido en partes igua- les entre Aldaco y Arosqueta)	
INCREMENTO TOTAL	1 163 411		

(*) Debe hacerse notar que el inventario de 1772 da únicamente el total de deudas y depósitos en cuenta corriente. El análisis parcial en esta sección ha sido tomado de un inventario anterior elaborado en enero de 1771.

Cuando por fin murió la viuda de Fagoaga en 1772, le sobrevivieron dos hijos únicamente, que eran Francisco Cayetano, marqués del Apartado, y Juan Bautista, a quien había hecho venir de España poco antes. Por iniciativa de la madre, los dos herederos habían convenido ya en no dividir la inmensa fortuna. Nombraron a un primo peninsular llamado José Luis de Fagoaga como administrador general. Sin embargo, ya en el decenio que comenzó en 1780 los dos hermanos, después de unos cuantos años de prosperidad, empezaron a tener dificultades financieras muy considerables, porque en 1778 la Corona, instigada por Gálvez, dió por terminado el contrato de concesión del Apartado, pagándoles una indemnización por el equipo, local y planta industrial de poco menos de 100 000 pesos³⁴. Unos cuantos años más tarde, en 1781, murió Ambrosio de Meave, dejando al almacén expuesto a todas las vicisitudes comerciales que se presentaron en la década de 1780 a 1790. En otras palabras, dos de los tres grandes pilares que sostenían la gran empresa de la familia Fagoaga desaparecieron de improviso, y simultáneamente las minas de Sombrerete comenzaron a perder dinero. En 1779, mediante la amenaza de abandono completo, obtuvieron de la Corona una exención total de impuestos para iniciar la rehabilitación de la Mina de Veta Negra, exención a la que debería seguir una reducción del 50 por 100 durante un período de dieciséis años, en el cual se les abastecería de mercurio a precio de costo. Estas concesiones, que se otorgaron en vista de que Sombrerete dependía completamente de los Fagoaga, conservaron a flote la firma³⁵. De todas maneras, ya en 1790 los tiros de la mina, que tenían una profundidad de 290 varas, necesitaban diez malacates para controlar las continuas inundaciones, y la producción de plata no cubría los costos de operación³⁶. Hacia fines de aquella década que tan traumática fue para tantas casas financieras y comerciales establecidas, los Fagoaga habían acumulado deudas, tanto en Sombrerete como en otros lugares, que llegaban casi a la suma de 716 000 pesos. Parecía entonces que, al faltar el apoyo de la operación del Apartado, el destino de la familia era seguir la suerte de

³⁴ Bernard Bobb, *The Viceroyalty of Antonio María Bucareli, 1771-79* (Austin, 1962), p. 239.

³⁵ AGI, México, 1533, Revillagigedo a Lerena, 29 julio 1790.

³⁶ AGI, México, 2214, marqués del Apartado al virrey, 31 agosto 1793.

muchos mineros menores que terminaron en los tribunales de quiebra.

Sin embargo, llegados a este punto, José Mariano de Fagoaga, hijo de Juan Bautista, nacido en la Península, que administraba las minas de Sombrerete, decidió excavar un túnel transversal entre la Veta Negra y la Mina de Pabellón, que estaban a 400 varas de distancia. Se estimó el costo en 200 000 pesos, con muy fuerte probabilidad de que la obra fuera un fracaso. Con esta base, los Fagoaga hicieron una petición de que se les concediera una exención total del diezmo de la plata por quince años, y una reducción del 50 por 100 durante los quince años subsecuentes, proveyéndoseles de mercurio durante la totalidad de los treinta años a precio de costo. Estas concesiones, aplicables únicamente a la mina de Pabellón, fueron aprobadas por el Consejo de Indias en vista del costo y riesgos del proyecto ³⁷. Pero apenas dieron principio los trabajos de excavación del túnel, se descubrió una masa de mineral extraordinariamente rica, y entre octubre de 1791 y junio de 1793 la mina produjo 185 882 marcos de plata. El virrey, irritado, protestó contra las exenciones fiscales, pero no fue sino hasta 1801 que la Corona se decidió finalmente a cancelar las concesiones, exigiendo el pago retroactivo de una tercera parte de los impuestos hasta entonces exceptuados. Los Fagoaga se opusieron a esta exigencia, alegando tener una historia impresionante al servicio de la minería de plata y presentando relación de sus inversiones más recientes. La lista que aparece en la tabla 15, sospechosa como cualquier otra declaración fiscal, señala tanto sus ganancias como el uso a que fueron destinadas ³⁸. La tabla 16 presenta el cuadro general de las inversiones mineras de los Fagoaga en aquella época.

La Corona perdió 939 110 pesos en impuestos sobre la Mina de Pabellón, pero como señalaban los Fagoaga, sus trabajadores ganaban una octava parte de toda la plata producida, sobre lo que se cobraba el diezmo completo. Además, toda la plata siguió pagando derechos de acuñación. Afirmaban que la Corona había recibido 943 451 pesos en impuestos directos atribuibles a la Mina de Pabellón, aparte de que otros ramos fiscales tales como el tabaco y las alcabalas se habían

³⁷ AGI, México, 1554, Revillagigedo a la Corona, 31 agosto 1793; real orden que concede las exenciones, 11 septiembre 1792.

³⁸ AGI, México, 1815, Iturrigaray a Soler, 27 enero 1806, declaración de José Mariano Fagoaga, 15 febrero 1805.

TABLA 15
 PRODUCCION DE LA MINA DE PABELLON, 1790 - NOVIEMBRE
 DE 1804

<i>Año</i>	<i>Producción (en marcos)</i>	<i>Exención de impuestos (en pesos)</i>
1792-3	336 608	320 243
1794	162 778	154 987
1795	101 074	96 237
1796	97 881	93 190
1797	96 211	91 607
1798	60 908	57 993
1799	57 368	54 622
1800	26 248	24 992
1801 (enero - 28 octubre)	22 696	21 616
1801 (28 octubre - diciembre)	3 828	1 822
1802	16 628	7 916
1803	17 970	8 555
1804 (enero - 31 octubre)	11 195	5 330
	<u>1 011 393</u>	<u>939 110</u>
<i>Costos y utilidades, 1791-1804</i>		
	<i>Costos (en pesos)</i>	<i>Producción (en pesos)</i>
Costos de producción	4 758 013	8 834 820
Costos de transporte, ensayo y cargos del Tribunal de Minería	<u>550 703</u>	
	5 308 716	<u>5 308 716</u>
Utilidades		3 526 104

beneficiado con el poder adquisitivo generado por el pago de salarios a los trabajadores. Entre 1791 y 1803 la Caja Real de Sombrerete recibió 1 042 167 pesos de los oficiales locales del monopolio del tabaco. La Junta de hacienda del Virreinato; convencida por estos impresionantes alegatos, aceptó el ofrecimiento de los Fagoaga de pagar 38 188 pesos de impuestos atrasados y de proporcionar inmediatamente el préstamo de 50 000 pesos que la Corona había convenido con el marqués del Apartado.

José Mariano de Fagoaga, que representó los intereses de la familia, hizo hincapié en que la bonanza efectiva en Pabellón únicamente había durado de 1792 a 1795. A partir de este último año los

TABLA 16
 INVERSIONES MINERAS DE LA FAMILIA FAGOAGA, h. 1804
 (En pesos)

	<i>Pérdidas en que se incurrió</i>	<i>Impuestos pagados (*)</i>
En Fresnillo hasta 1801	43 321	103 964
En Sultepec hasta 1803	156 365	45 118
En Zacualpan	25 108	696
En Veragrande, Zacatecas	549 500	exenta
En Las Animas, Guanajuato 1800-4	105 259	Impuestos pagados por los refinadores de Guanajuato
En Sombrerete:		
Quebradilla 1796-1804	379 338	150 594
Santa Catalina	123 428	13 426
(ambas abandonadas)		
San Nicolás, desde 1802	49 129	518
Pérdida en obra muerta en Veta Negra y Pabellón	412 566	156 892
TOTAL	1 844 014	471 208
Cobro por acuñación		227 266
TOTAL		698 474

(*) Incluyendo un real para el Tribunal de Minería, ensaye, etc.

costos habían consumido parte de las ganancias, ya que la mina pronto necesitó cinco tiros separados atendidos por 29 malacates. Simultáneamente, había sido preciso desaguar continuamente la Veta Negra para impedir que las aguas invadieran la de Pabellón. Parece que los 412 566 pesos que aparecen mencionados en la lista de inversiones como «perdidos» en estas dos minas se referían al costo de perforación de estos tiros. En Sombrerete los Fagoaga operaban una vasta empresa integral que comprendía minas, una hacienda de beneficio con 84 arrastres y 14 fraguas, y las haciendas que abastecían de maíz, forraje y mulas ³⁹. También administraban tiendas de la compañía, hasta el punto que un comerciante dijo que en el pueblo estaba «una puerta cerrada» para los demás comerciantes ⁴⁰. Durante casi 40 años Sombrerete fue feudo reservado de una sola familia que casi nunca residió allí.

³⁹ Véase Ward, *Mexico in 1827*, II, 534-43.

⁴⁰ FV 3, Manuel García Herreros a Diego Ruí, 22 enero 1793.

Los Fagoaga se diferenciaban de otras familias mineras de México por lo menos en dos aspectos. Mantuvieron una administración unificada durante un siglo, y a lo largo de todo ese período reinvirtieron sus utilidades en la minería. Tuvieron pérdidas fantásticas, y sus ganancias fueron la recompensa de muchos años de fuertes y persistentes inversiones. La transición de banquero de plata a simple minero era muy peligrosa y, además, su retirada del comercio y la recisión de la concesión del Aparato fueron golpes mortales a los cimientos de sus empresas. Sólo el extraordinario éxito que tuvieron en Sombrerete, después de veinte años de exiguas ganancias, les permitió seguir siendo la familia más importante de la minería. Obviamente fue esa bonanza la que les permitió invertir más de medio millón de pesos en la Vetagrande de Zacatecas.

En el último decenio del siglo XVIII, al acercárseles la muerte, los dos hermanos, el marqués del Apartado y Juan Bautista, decidieron por fin dividirse los bienes hasta entonces administrados conjuntamente, porque ambos tenían numerosos herederos. Para entonces habían emparentado con personas sumamente distinguidas. El marqués mismo se había casado con una hija del juez criollo Antonio de Villaurrutia, por lo cual tenía dos influyentes cuñados: Jacobo, alcalde del crimen en la Audiencia de México, y Antonio, regente de la de Guadalajara. Una hija de Juan Bautista, por su parte, se había casado con el segundo marqués de Castañiza, hijo de un antiguo compradre de Manuel de Aldaco. Ante estas circunstancias quizá debía esperarse que, al verse envueltos en una disputa sobre la repartición de los bienes, los dos hermanos recurriesen a su socio y pariente político Antonio de Bassoco (prior del Consulado durante aquel año), para que hiciera la adjudicación. Sin embargo, no aceptaron su veredicto y llevaron el caso ante la Audiencia. Al final, los bienes fueron divididos entre 8 hijos y 26 nietos⁴¹. Los herederos demostraron mucho menos afición a la minería que sus antepasados, e invirtieron su capital en haciendas y en los nuevos fondos establecidos por el Tribunal de Minería y por los Consulados, que pagaban un interés. En 1813 el Tribunal incluyó en su contabilidad una deuda de 242 000 pesos que se debían al conde de Alcaraz, esposo de una Fagoaga, y otra de 240 000 pesos que pertenecía a la marquesa viuda del Aparta-

⁴¹ Respecto a esta disputa véase AGN, Vínculos 6/3.

do ⁴². Naturalmente que para entonces los Fagoaga ya habían perdido esa unidad de dirección que durante casi un siglo había colocado a sus empresas a la cabeza de la minería en México, y como fue siempre el caso, las leyes sobre herencias y la ausencia de sociedades anónimas concurren para destruir las acumulaciones de capital en el México colonial.

III

La historia de Real del Monte y Pachuca, dos campos situados no lejos de la ciudad de México, hacia el noreste, demuestra claramente la tendencia a que campos mineros enteros cayeran bajo el dominio de una sola compañía o familia. Ambos habían sido descubiertos en el siglo XVI y tuvieron períodos de bonanza a principios del siglo XVIII ⁴³. El nivel del agua en ascenso puso fin a su prosperidad, requiriéndose medidas extraordinarias, que en un caso fueron tomadas. Ya en el decenio que se inició en 1760 la mina principal de cada uno de estos dos campos era explotada por un solo propietario, el conde de Regla en Real del Monte y una compañía mercantil en Pachuca. La diversa suerte que corrieron nos indica cuáles eran los requisitos previos para tener éxito en la rehabilitación de las antiguas minas.

Pedro Romero de Terreros, natural de Cortegana, en Andalucía, se dirigió primeramente a la Nueva España para tomar posesión de una considerable fortuna heredada de su difunto hermano. Se trasladó a Querétaro para trabajar con su tío, el prominente comerciante Juan Vasquez de Terreros. Cuando éste murió heredó a su sobrino todos sus bienes en este mundo. Esta sucesión de herencias, tan común entre los españoles inmigrados, fue la base de la fortuna de Regla ⁴⁴. La consolidó gracias a su amistad con José Alejandro Bustamante, un minero a quien financió con todo el peso de sus recursos.

En 1739 Bustamante decidió rehabilitar la Mina de Veta Vizcaína en Real del Monte, mediante un gran túnel de desagüe o socavón. Las betas de ese campo ya eran famosas por sus riquezas: en un solo año,

⁴² AGN, Minería 211/1, declaración 1826. Después de junio de 1813 el Tribunal ya no pagó intereses sobre sus fondos.

⁴³ Gemelli Carteri, *Viaje*. I, 130-2. Lassaga y Velásquez de León, *Representación*, p. 87.

⁴⁴ Ortega y Pérez Gallardo, *Historia genealógica*, II, *Conde de Regla*.

el de 1726, las minas de Veta Vizcaína y del Jacal habían producido 292 774 marcos de plata amalgamada. También eran igualmente renombradas estas minas por sus graves problemas ocasionados por el agua. El banquero de plata Isidoro Rodríguez de la Madrid había quebrado en Real del Monte por importar maquinaria inglesa con un costo de 100 000 pesos, tratando en vano de desaguar sus minas. Para compartir los costos de la rehabilitación, Bustamante formó una compañía con otros propietarios de minas de la zona, que eran el marqués de Valle Ameno y Juan de Barandiarán. El mismo contaba con el apoyo financiero de Romero de Terreros, y Barandiarán con el de Manuel de Aldaco. Sin embargo, después de nueve años de trabajos, las obras del túnel de desagüe tuvieron que ser abandonadas, porque habiéndose ya excavado 1 200 varas de longitud, no se había logrado desaguar la veta ⁴⁵. Se emprendieron trabajos en un nuevo túnel, pero poco después, en 1750, Bustamante murió dejando a Romero de Terreros como herencia tanto sus propiedades como sus compromisos. El túnel no fue terminado sino hasta 1762 y entonces dio principio la verdadera bonanza de Veta Vizcaína. Para entonces, las otras minas de Real del Monte se habían inundado. Veta Vizcaína, sin embargo, no había todavía producido grandes utilidades, ya que entre 1741 y 1758 solo se extrajeron 216 093 marcos de plata. Romero de Terreros afirmó haber invertido 1 428 906 pesos en la excavación de tiros, túneles de desagüe, y en la famosa hacienda de beneficio de Regla, que costó, ella sola, 425 708 pesos ⁴⁶.

En los años subsiguientes y a pesar de serias dificultades laborales de las que ya hemos hablado, la Veta Vizcaína hizo de su dueño el hombre más rico de la Nueva España. En total, entre 1738 y 1781, la producción de la mina ascendió a unos veinte millones de pesos en plata, de los cuales posiblemente dos fueron partidos correspondientes a los mineros ⁴⁷. Las ganancias fueron tan altas como la producción y Romero de Terreros dispuso de su fortuna con bastante prodigalidad. Primero se compró un título, y luego otros dos para sus hijos menores. El se convirtió en conde de Regla, y los hijos en marqueses de San Cristóbal y de San Francisco respectivamente. Obtuvo el real favor mediante el regalo de un buque de guerra, construido en La

⁴⁵ Gamboa, *Comentarios*, p. 477-8.

⁴⁶ AGI, México, 2251, declaración de Regla, sin fecha, h. 1758.

⁴⁷ Castelazo, *Manifiesto*, pp. 8-10.

Habana con un costo de un millón de pesos. Hombre no solo patriota, sino también piadoso, ayudó con sus actividades misioneras en el norte al Colegio Franciscano de Querétaro; un primo suyo fue muerto por los apaches al tomar parte en aquella obra. También donó 300 000 pesos para fundar el Nacional Monte de Piedad, que sigue operando hasta el día de hoy en el mismo masivo edificio ubicado en la plaza central de México ⁴⁸. Al contrario de los Fagoaga, Regla no reinvertió sus utilidades en la minería, sino que parece que aparte de una mina de plomo que poseyó en Zimapán, limitó sus actividades a Real del Monte, campo que dominaba tanto como los Fagoaga el de Sombrerete ⁴⁹. Por el contrario, interesado en ser el tronco de una noble familia, compró cadenas de haciendas. En 1777 adquirió todas las tierras que habían pertenecido a los antiguos colegios jesuitas de Tepotzotlán y de San Pedro y San Pablo en la ciudad de México. Aunque estaban valuadas en 1 979 595 pesos, las compró al contado en 1 020 000 pesos ⁵⁰. Estos bienes fueron divididos después entre sus tres hijos, formando mayorazgos separados con valor de unos 300 000 pesos cada uno.

Mientras Regla estaba ocupado con estas nuevas posesiones, la fuente de sus riquezas, la Veta Vizcaína, comenzó a tener dificultades al llegar los tiros más abajo del nivel desaguado por el gran túnel. Consecuentemente, poco después de la muerte de Regla en 1781, las minas fueron abandonadas. No obstante, el segundo conde, rehabilitó de nuevo la mina, de modo que entre 1794 y 1801 produjo otros seis millones de pesos, pero ya para entonces el costo de sus 28 malacates se elevaba a un cuarto de millón de pesos al año, de modo que cuando el bloqueo inglés interrumpió el suministro de mercurio, no logró sostener estos enormes gastos generales y suspendió el trabajo ⁵¹. Su hijo el tercer conde, emprendió de nuevo la restauración de la mina, pero sus esfuerzos fueron interrumpidos por la insurrección de 1810. El éxito financiero del conde de Regla, coronado en 1762, ofreció una clara lección a todos los mineros en potencia. Podemos sospechar, por otra parte, que la mayoría de los

⁴⁸ Ortega y Pérez Gallardo, *Historia genealógica*, II, *Conde de Regla*.

⁴⁹ Ward, *Mexico in 1827*, II, 335.

⁵⁰ AGI, México, 1772, declaración del contador general de Temporalidades, 16 diciembre 1777.

⁵¹ Castelazo, *Manifiesto*, pp. 10-11. Burkart, *Memoria*, pp. 22-3, 44.

inversionistas estaban más impresionados por la enormidad de la fortuna que por sus largos años de paciente inversión en túneles y socavones de desagüe. En los términos en que lo ponen los economistas, su éxito presentó un efecto demostrativo: hizo que la minería fuera más atractiva para los inversionistas. Y fue un oficial real quien en 1764 comprendió el esfuerzo que estaba detrás de ese triunfo: «Don Pedro Romero de Terreros ha emprendido y concluido una obra magnífica a costa de su tesón, espíritu, constancia y sumo costo» ⁵².

No todos los mineros tenían ni la perseverancia de Regla ni sus recursos financieros. En 1767 Manuel José de Moya hizo un denuncia de un grupo de minas inundadas de Pachuca que se conocían colectivamente como los Cuatro Picos, proponiéndose excavar un socavón de desagüe con un costo estimado de 700 000 pesos. Para ayudar a Moya en este ambicioso proyecto a que rehabilitara este antiguo campo minero por entonces en decadencia, el virrey Croix le otorgó una exención fiscal completa y el suministro de mercurio a precio de costo ⁵³. No obstante, al contrario de Borda y de Regla, los dos grandes ejemplos de la minería, a Moya le faltaba tanto el capital como la habilidad. Entre febrero de 1770 y septiembre de 1773, las minas produjeron 255 426 pesos, pero el costo de la rehabilitación y de la construcción de una hacienda de beneficio ascendió a 462 406 pesos ⁵⁴. Para entonces Moya ya había muerto, dejando más de 200 000 pesos de deudas. Su principal acreedor, que era su aviador el conde de San Bartolomé de Jala, rico comerciante y terrateniente de México a quien debía más de 96 000 pesos, se negó a invertir más dinero en el proyecto. Otro comerciante de la capital, José de la Torre Calderón, a quien Moya debía 52 000 pesos, formó entonces una compañía compuesta de los principales acreedores, para mantener la mina en producción y cobrarse así las deudas ⁵⁵. A pesar de ello, la compañía no quiso invertir un mayor capital en la Mina de Cuatro Picos, sino que concedió a los mineros la mitad del mineral extraído en lugar de salario, insistiendo únicamente en que los partidos se vendieran solo a la hacienda de beneficio de la propia compañía y no a

⁵² AGI, México, 2251, informe fiscal, 30 mayo 1764.

⁵³ AGI, México, 2200, Ortiz de Landáuzuri a Arriaga, 30 abril 1769.

⁵⁴ AGI, México, 1765, declaración del contador general, 6 abril 1775.

⁵⁵ AGI, México, 1768, reunión de acreedores, 29 agosto 1772.

refinadores independientes. Gastaron muy poco dinero en hacer más profundo el tiro, que Moya había excavado hasta 73 varas, faltando 160 para alcanzar las 233 que se estimaban necesarias. No obstante, entre 1773 y 1779 se llegó a 34 varas más de profundidad ⁵⁶, aunque durante todo aquel período y hasta 1801, la compañía gozó de exención total del diezmo y recibió mercurio a precio de costo. Un oficial real indignado que más tarde inspeccionó la descuidada mina, exclamó: «Los dueños no han contribuido un real para su fomento» ⁵⁷. A pesar de ello, el Tribunal de Minería suministró a esta ruinosa empresa en 1784-6 la suma de 472 272 pesos en avíos. La producción de la mina aumentó un poco, pero no lo suficiente para cubrir los préstamos. Hacia junio de 1787 la compañía debía 170 855 pesos al Tribunal ⁵⁸. Parece que estos fondos se invirtieron en el tiro principal, que para 1789 había alcanzado una profundidad de 140 varas.

Durante la última década del siglo la compañía fue objeto de investigaciones oficiales, porque no parecía merecer las exenciones fiscales. El trabajo de todos modos continuó, realizado en parte por la compañía y en parte por particulares que habían alquilado varias de sus minas. Finalmente, en 1801, la Corona dio por terminada la asistencia fiscal; los oficiales de Hacienda estimaron entonces que entre 1770 y febrero de 1801 la compañía había producido 511 695 marcos de plata con un valor de 4 469 814 pesos. El valor de las concesiones reales ascendió en ese período a la cantidad de 553 376 pesos. No obstante, a pesar de ello los administradores de la compañía afirmaron que los costos totales superaban el valor de la producción en la suma de 213 258 pesos ⁵⁹. En total la compañía tenía deudas por la cantidad de medio millón de pesos aproximadamente. Por supuesto que estas cifras eran muy sospechosas, como lo declararon los oficiales de Hacienda, porque la compañía había gastado muy poco en mejorar la mina. Es difícil saber si las pérdidas se debían simplemente a la ineficiencia o si las cuentas eran falsas, pero cualquiera que sea el caso, el hecho es que ni las exenciones fiscales, ni los préstamos del Tribunal de Minería, ni el apoyo del capital mercantil

⁵⁶ AGI, México, 1728, oficiales de Hacienda de Pachuca, 1 mayo 1778.

⁵⁷ AGN, Minería 26/1, Francisco Saavedra al virrey, 21 septiembre 1790.

⁵⁸ AGN, Minería, 30/9, contrato, diciembre 1784.

⁵⁹ AGN, Minería, 75/3, oficiales de Hacienda de Pachuca, 25 septiembre 1804.

lograron salvar a la empresa. Por otra parte, su método de pagar a los trabajadores era una invitación a la ruina, y la falta de inversiones en tiros y túneles impidió su efectiva explotación.

IV

Como en muchos aspectos la historia de la mina de Bolaños resume el desarrollo general de la minería mexicana en el siglo XVIII, este campo, hasta hoy poco estudiado, merece nuestra atención más detenida. Situado en la sierra del norte de Jalisco y aproximadamente equidistante entre Zacatecas y Guadalajara, Bolaños era un lugar remoto, porque la provincia de Nayarit apenas poco antes había sido sometida por los españoles. La fuente de mano de obra más cercana era la antigua colonia tlaxcalteca de Colotlán. Descubierta en 1736 por un indígena, Bolaños atrajo pronto a mineros más experimentados, pero la verdadera bonanza minera no comenzó sino hasta 1747. Entonces, y en los años subsiguientes, hasta 1761, Bolaños produjo casi dos millones de pesos al año, cantidad que durante aquel período ascendió al 15 por 100 del total de toda la producción de plata en México ⁶⁰. Esta es una estimación mínima, porque según Francisco Javier de Gamboa, Bolaños, en su primera época, producía entre tres y cuatro millones de pesos, o sea casi la tercera parte de toda la plata acuñada ⁶¹. La importancia de este campo fue señalada por el hecho de que el virrey, primer conde de Revillagigedo, estableció en Bolaños en 1752 una caja real. Dos años más tarde también designó a un corregidor independiente para el pueblo, para que se encargara de imponer un cierto grado de orden público ⁶². Para entonces Bolaños contaba con una población de 12 000 personas, que después aumentó a 16 000, lo cual es prueba clara de la movilidad de la mano de obra minera en el norte ⁶³.

Después de 1760, sin embargo, la minería de aquel lugar tuvo que enfrentarse a una crisis. Sus minas principales, La Conquista, La Castellana, La Perla, La Montañesa y Zapopa, estaban situadas a lo

⁶⁰ Ward, *Mexico in 1827*, II, 139.

⁶¹ Gamboa, *Comentarios*, p. 502.

⁶² *Instrucciones que dejaron los virreyes* (2 vols.; México, 1873), I, 379-92. Véase también AGI, Guadalajara, 203, virrey marqués de las Amarillas a la Corona, 18 julio 1757.

⁶³ AGN, Civil 142/19, corregidor al virrey, 21 julio 1760.

largo de la misma veta, por lo que requerían las mismas obras para su desagüe; sin embargo, cada mina era propiedad de un grupo distinto de personas, muchas de las cuales vivían en México o en Guadalajara, y la participación de uno de los mineros más importantes, Juan de Echazaureta, había sido dividida entre sus hijos y era administrada por un tutor. En 1757 comenzó una serie de disputas sobre los límites de cada una de las minas, y en ese momento, después de catorce años de producción continua, las minas de Bolaños sufrieron grandes inundaciones que requerían una fuerte inversión de capital para perforar un nuevo tiro central de suficiente profundidad que permitiera el desagüe efectivo ⁶⁴. Ya las cuatro minas principales estaban perdiendo 500 pesos a la semana porque habían duplicado el número de malacates en operación. Ante esta situación, los propietarios de Bolaños acordaron colectivamente abandonar sus propiedades; ya habían hecho una cierta fortuna que prefirieron no arriesgar en un intento, quizá inútil, de desaguar las minas.

En los dos años que siguieron la producción declinó tanto que, para 1762, ascendía a la mitad de la cifra anterior, y en el curso de la siguiente década, hacia 1775, se redujo hasta un nivel que apenas alcanzaba la cuarta parte de lo que producía poco después de 1750 ⁶⁵. La población del lugar, que tan rápidamente había crecido, huyó con la misma rapidez, y en poco tiempo no ascendía más que a la cuarta parte del total anterior ⁶⁶, lo cual significaba que para reactivar las minas en el futuro sería preciso resolver el problema de una grave escasez de mano de obra. Igualmente alarmante para el futuro era el descenso en la calidad del mineral extraído en Bolaños, que resultó cada vez más impropio para el proceso de amalgamación porque consumía más mercurio del que era corriente. El superintendente del monopolio del mercurio reconoció oficialmente en 1772 el empeoramiento de la calidad, ya que en la mayoría de los campos mineros la Real Hacienda exigía 100 marcos de plata por quintal de mercurio, mientras que en Bolaños se conformaba con 75 ⁶⁷.

Antonio de Bibanco fue quien devolvió la prosperidad a Bolaños.

⁶⁴ BRP, MSS 2824, Miscelánea de Ayala X, f. 136.

⁶⁵ Ward, *México in 1827*, II, 139.

⁶⁶ AGN, Minería, 151/3, tesorero Sebastián de la Torre y León al virrey, 16 octubre 1772.

⁶⁷ AGI, México, 2235, superintendente a la Corona, 26 mayo 1772; véase también Fonseca y Urrutia, *Historia general de Real Hacienda*, I, 383.

Era natural de Villalazara, distrito de Montija, en Castilla, y probablemente de familia de origen vasco ⁶⁸. No sabemos por qué Bibanco se dedicó a la minería, ni cuándo llegó a Bolaños, ni cuál fue su anterior ocupación, pero el hecho es que ya en 1771 estaba registrado como propietario de dos pequeñas minas, La Cocina y el Espíritu Santo. Evidentemente era hábil minero, y pronto llamó la atención al emprender la perforación de su tiro principal hasta un nivel suficientemente profundo para permitir el desagüe de toda la veta. Fue entonces, en 1773, cuando obtuvo el apoyo financiero de Juan de Sierra Uruñuela, comerciante de México que tenía tiendas en Bolaños. Sierra le prestó 25 000 pesos a Bibanco, el cual entró entonces en posesión de La Conquista, La Perla, La Castellana y La Montañesa, que eran minas inundadas e inexploradas ⁶⁹. Además recibió un fuerte apoyo de los oficiales de Real Hacienda de la localidad, que con anterioridad habían sugerido al virrey que buscara a un comerciante rico en la capital que quisiera rehabilitar las minas de aquel lugar, de cuya producción dependía la prosperidad de toda la provincia circundante. Se concedió a Bibanco un precio del mercurio reducido en una tercera parte, en relación al que era oficial en 1775 ⁷⁰. Además, se prohibió al corregidor de Bolaños que se inmiscuyera en asuntos mineros, de manera que Bibanco quedó sujeto únicamente a la caja real del lugar, en su calidad de representante del virrey.

Con la ayuda de esta combinación de apoyo financiero y benevolencia oficial, Bibanco hizo más profundo su tiro principal hasta llegar a las 250 varas que eran necesarias para el desagüe efectivo. Más tarde afirmó haber invertido en ese trabajo la suma de 300 000 pesos, cantidad que reunió principalmente mediante la reinversión de las utilidades, ya que a partir de 1775 sus minas empezaron a producir grandes cantidades de plata. A pesar de esto, declaró en su testamento que todavía en febrero de 1780, fecha en que murió su esposa, únicamente poseía un capital de 40 000 pesos y que tenía deudas con Sierra, su socio, y con la caja real por la cantidad de 160 000 pesos aproximadamente ⁷¹. Además, en julio de 1781 sufrió un gran per-

⁶⁸ En cuanto a su lugar de nacimiento, véase AGI, México, 1745, Bibanco a la Corona, 23 junio 1789. Nótese que su sobrino Pedro Manuel de Bibanco era natural de Vizcaya; véase AGN, Historia, 130-3.

⁶⁹ AGS, Guerra Moderna 7015, oficiales de Hacienda al virrey, 5 marzo 1784.

⁷⁰ AGI, México, 2235, 18 mayo 1775.

⁷¹ AGN, Vínculos 214, Testamento de Antonio de Bibanco, 20 agosto 1799.

juicio al desbordarse el río, inundándole el tiro central hasta una profundidad de 150 varas. *Cierto es que Bibanco solicitó y obtuvo una exención total del diezmo para reparar los daños, pero Gálvez le retiró esta concesión, de manera que tuvo que restituir a la Real Hacienda unos 25 000 pesos* ⁷².

Para resolver el problema causado por el anegamiento, Bibanco excavó un nuevo tiro de 257 varas de profundidad, en el que invirtió más de 400 000 pesos. Sin embargo, *es indudable que este segundo tiro fue parte esencial de la rehabilitación general de las minas* ⁷³. Por otra parte, es seguro que la inundación de 1781 no hizo disminuir mucho la producción, la cual se conservó a un alto nivel desde 1776 hasta 1783, cuando decayó abruptamente. Posiblemente la gran hambre de 1785-6, que afectó a todos los campos mineros, privó a Bolaños de mano de obra. De cualquier forma, Bibanco, que estaba en ese momento envuelto en una serie de disputas con la diputación local y con la Audiencia de Guadalajara, decidió abandonar sus minas. Cedió la propiedad a su aviador o socio capitalista Sierra Uruñuela en la exigua suma de 73 000 pesos, por lo que es claro que estaba seguro de que una mayor inversión no era costeable ⁷⁴.

Bibanco, aunque menos conocido que José de la Borda y que el conde de Regla, debe figurar entre el selecto grupo de hombres de empresa a cuyos méritos debe atribuirse directamente el gran florecimiento de la minería en el decenio de 1770 a 1780. También él aprendió la lección de que el éxito minero, sin tomar en cuenta la suerte en el descubrimiento inicial, dependía de una fuerte y continua inversión de capital. Los cimientos de su éxito fueron la perforación de los dos tiros profundos de desagüe. Su talento fue reconocido por los oficiales de Hacienda del lugar, que desde 1772 habían escrito al virrey que «don Antonio Bibanco puede decirse sin agravio de los demás, que es el único y principal minero que hoy puebla el Real por su infatigable actividad, pericia en el arte» ⁷⁵. El mismo Bibanco escribió que el costo del desagüe de las minas anegadas había ahuyentado a sus competidores anteriores. «Entonces (1773) fue cuan-

⁷² AGI, México, 1396, virrey Mayorga a Gálvez, 28 febrero 1782; AGI, México, 1046, Posada a Gálvez, 2 febrero 1782.

⁷³ AGI, México, 2242, virrey Flores a Valdés, 26 febrero 1789.

⁷⁴ AGN, Minería, 25/1, declaración de Bibanco, 3 octubre 1787.

⁷⁵ AGN, Minería, 151/3, oficiales de Hacienda al virrey, 16 octubre 1772.

do movido a impulso a mi espíritu y confiado en mi pericia, denuncié las expresadas minas, sin lograr el menor auxilio aún exigiéndolos las grandes obras que era preciso construir a costa de un caudal inmenso, cuya consideración pudiera acobardar el más animoso» ⁷⁶.

La rehabilitación de Bolaños provocó una cierta escasez de mano de obra porque la población residente no podía suministrar suficiente fuerza de trabajo. Bibanco recurrió a la colonia tlaxcalteca de Colotlán y aumentó los salarios a sus trabajadores indígenas de cuatro a cinco y hasta a seis reales diarios. Apeló al alcalde para que se encargara de despachar contingentes de trabajadores, pero parece que los de aquella fuente le causaron dificultades, ya que se trataba de indígenas indisciplinados y con tendencia al motín ⁷⁷. Para afrontar este problema Bibanco sugirió el reclutamiento de una numerosa milicia que él, por supuesto, debía encabezar con el grado de coronel, cargo que prácticamente le habría dado el control de Colotlán. En 1781 el virrey otorgó su conformidad, y Bibanco procedió a reunir a unas catorce compañías de dragones y diez de infantería, reclutadas en una extensa región que incluía Bolaños, Colotlán, y las alcaldías mayores de Fresnillo, Aguascalientes y Jerez ⁷⁸. Inmediatamente comenzaron las dificultades, porque todas las autoridades locales —los alcaldes mayores, los ayuntamientos y la Audiencia de Guadalajara— se opusieron al establecimiento de dicha milicia. Bibanco mismo provocó una fuerte reacción cuando sofocó enérgicamente un motín en Colotlán, capturando a los cinco jefes del alboroto enviándolos a México para que se les juzgara. En la diligencia que tuvo lugar subsecuentemente, el abogado de Bibanco tuvo dificultades para refutar la acusación que estaba en boca de todos: «Dícese que mi parte solicitó y obtuvo el Coronelato a fuerza de pesos para tener el arbitrario de sujetar los indios Coletecos al trabajo de sus minas» ⁷⁹. También señaló que desde 1783 Bibanco pagaba hasta seis reales diarios a los trabajadores no calificados, en comparación con el salario normal de cuatro reales que prevalecía en los demás campos. Además había financiado

⁷⁶ AGN, Minería, 25/1, Bibanco al virrey, 30 octubre 1787.

⁷⁷ AGN, Minería, 138/3, Bibanco, 4 abril 1774.

⁷⁸ AGI, México, 1396, Mayorga a Gálvez, 26 marzo 1782.

⁷⁹ AGS, «Guerra Moderna» 7015, declaración de Pedro Manuel de Bibanco, 14 febrero 1784.

la construcción tanto de una escuela como de una iglesia, pagando los sueldos de dos sacerdotes y un maestro. Cualquiera que haya sido la verdad contenida en las acusaciones y refutaciones, el hecho es que perdieron su interés al retirarse Bibanco de la región.

No partió, sin embargo, con las manos vacías. En 1789 solicitó y obtuvo que la Corona le diera el título de marqués de Bibanco y vizconde de Bolaños. Para justificar su petición presentó una estimación de su fortuna, fruto de largos años de actividades mineras⁸⁰. Era dueño de dos haciendas, la de Chapingo, antigua propiedad de los jesuitas que compró en 136 000 pesos, y la de Ojo de Agua, finca pulquera valuada en 162 000 pesos adquirida mediante compra al conde de San Bartolomé de Jala. En la ciudad de México era propietario de una casa y de una pulquería, esta última con un valor de 13 000 pesos. Además de estas propiedades, que proponía vincular al marquesado, tenía 440 000 pesos invertidos en el comercio, en préstamos y objetos personales de plata. Así pues, en total su fortuna ascendía a tres cuartos de millón de pesos.

Con todo, en los años que siguieron y hasta su muerte, ocurrida en julio de 1799, el marqués de Bibanco no aumentó su fortuna, pero la conservó. En sociedad con Antonio Bassoco, el comerciante de la capital, invirtió unos 80 000 pesos en las minas de Capula, pero sin lograr obtener ninguna ganancia⁸¹. También adquirió una participación en la compañía de Vetagrande en Zacatecas, pero la muerte le impidió ver el éxito final de esa empresa. En fin, participó también en la compañía que planeaba rehabilitar una vez más las minas de Bolaños, pero ninguna de estas empresas produjo ganancias inmediatas, y Bibanco murió dejando a su heredero, el segundo marqués, una fortuna de 590 000 pesos⁸².

Gran importancia tuvo para Juan de Sierra Uruñuela, dueño de un almacén en México y de tres tiendas en Bolaños, la continua prosperidad de aquel campo minero, porque era el mercado principal para sus mercancías. Desde 1752 hasta aquellas fechas, había sido aviador de varios de los principales mineros del lugar⁸³. Entonces, ante la

⁸⁰ AGI, México, 1745, petición de Bibanco, 23 junio 1784. El título fue concedido el 17 octubre 1791; véase Ortega y Pérez Gallardo, *Historia genealógica*, II, *Marqués de Bibanco*.

⁸¹ AGN, Minería, 225, oficiales de Hacienda de Pachuca al virrey, 10 junio 1805.

⁸² AGN, Vínculos, 213/2, lic. Oláez, julio 1809.

⁸³ AGI, México, 2243, fiscal del Consejo de Indias, 23 abril 1789.

disolución de su sociedad con Bibanco y el virtual abandono de las principales minas del pueblo, se vio obligado a elegir entre un retiro similar o la continuación de sus inversiones. Si las minas dejaban de producir, sus tiendas de Bolaños no serían productivas, y si este mercado norteño se le cerraba, el almacén que poseía en México sin duda perdería importancia. Además, como el decenio de 1780 a 1790 fue una época de crisis para los comerciantes establecidos de tiempo atrás, tales como Sierra Uruñuela, se vio forzado a depender aún más del mercado de Bolaños. Bibanco había abandonado sus minas en un momento en que la producción decrecía y cuando era necesaria una fuerte inversión. Sierra Uruñuela formó entonces una nueva sociedad con Isidoro Sarachaga, minero vasco residente en Bolaños, y entre abril de 1786 y marzo de 1787 excavaron un nuevo tiro central con una profundidad de más de 250 varas y con un costo estimado en 390 000 pesos. A ese nivel encontraron mineral de buena ley, pero en marzo de 1787 un incendio que estalló en la mina destruyó la obra ⁸⁴. Sierra Uruñuela se vio ante la ruina más completa, porque había invertido en la mina toda su fortuna más otros 261 000 pesos adquiridos en calidad de préstamo. Lo único que le quedó fue la existencia de sus tiendas y el equipo minero y de beneficio que se salvó del incendio.

Sierra Uruñuela se entrevistó entonces con sus trece acreedores y, con la aprobación del Consulado, obtuvo una moratoria para el pago de sus deudas de cinco años ⁸⁵. Además solicitó de la Corona una exención total del diezmo de la plata por un período de quince años, que le fue concedida en mayo de 1789, en vista de sus largos servicios a la minería y de que Bolaños dependía completamente de sus esfuerzos ⁸⁶. Igualmente importante fue el hecho de que obtuvo un préstamo de 160 000 pesos de *Temporalidades*, que era la dependencia real encargada de la administración de las antiguas propiedades de los jesuitas. Debe hacerse notar que este préstamo fue garantizado por dieciséis de los mayores comerciantes de la capital del virreinato, entre ellos Antonio de Bibanco ⁸⁷, pero a pesar de todo

⁸⁴ AGI, México, 1533, virrey Revillagigedo a Lerena, 29 julio 1790.

⁸⁵ AHN, Consejos, 20688, contiene una lista de estos acreedores y una descripción de los problemas de Sierra; véase fiscal del Consejo de Indias, 6 octubre 1794.

⁸⁶ AGI, México, 1533, Revillagigedo a Lerena, 29 julio 1790.

⁸⁷ BN (México) MSS 1388, ff. 244-9, préstamo aprobado 19 enero 1789.

Sierra Uruñuela, que para entonces era con seguridad un anciano, no sobrevivió mucho a su desastre financiero. Murió durante el año de 1790, porque en una demanda judicial presentada en mayo de 1791 por sus acreedores *se le menciona como difunto. La existencia de sus establecimientos tuvo que ser vendida en pública subasta, en la cantidad de 88 000 pesos, para pagar deudas*⁸⁸.

Antes de su muerte, Sierra Uruñuela había emprendido por cuarta vez, y por última, la rehabilitación de las minas de Bolaños. En aquella ocasión formó una compañía integrada por los dieciséis almaceneros de México que habían avalado el préstamo concedido por Temporalidades. Esta compañía se encargó de la gestión de las minas, heredó la exención fiscal de Sierra Uruñuela, y logró elevar la producción de Bolaños hasta el nivel de principios del decenio de 1780-90. Entre los accionistas de esta compañía se hallaban varios de los mayores comerciantes mexicanos. El Marqués de Rivascacho, Antonio Bassoco, Sebastián de Heras Soto, Francisco Baso Ibáñez, Manuel Ramón de Goya, Juan Fernando de Meoqui y Juan Fernández Peredo, eran todas personas muy ricas, y muchos de ellos habían hecho varias inversiones en la minería. Fernández Peredo era socio de la compañía de Vetagrande en Zacatecas, junto con Bibanco y Bassoco⁸⁹. Francisco Martínez Cabezón, que era el agente general de la compañía, era dueño de dos pequeñas haciendas de beneficio en Bolaños y tenía propiedades menores en Fresno y Matchuala⁹⁰.

Pero estos comerciantes, en busca de nuevas inversiones para su capital, pronto se dieron cuenta de que las minas de plata, en especial las más antiguas, *enriquecían tan fácilmente como arruinaban*. El agente de la compañía estimó hacia julio de 1791 que, de las 345 varas que para entonces se consideraban necesarias, se habían excavado 275 en el nuevo tiro. Hasta ese momento se habían invertido 825 000 pesos en las minas, incluyendo sin duda en esta cifra las ganancias reinvertidas⁹¹. Esta inversión dio buenos frutos, porque en 1792 la compañía produjo 115 474 marcos de plata, o sea, aproximadamente

⁸⁸ AHN, Consejos, 20688, declaración de Antonio de Bibanco en 1792.

⁸⁹ La lista de accionistas se encuentra en BN (México) MSS 1388, f. 247. En cuanto a Goya, véase AGI, México, 2212, virrey Azanza a la Corona, 27 julio 1799.

⁹⁰ AGI, México, 2206, virrey Matías Gálvez a Gálvez, 30 abril 1785.

⁹¹ AGN, Minería, 94/5, declaración de Francisco Martínez Cabezón, 18 julio 1791.

el 4.5 por 100 de la acuñación total de México durante aquel año ⁹². Este éxito inicial no resolvió, sin embargo, los problemas de la compañía. La mano de obra era costosa e inepta, y el mineral extraído era de baja ley. En 1792 el agente de la compañía se lamentaba de que los indígenas de Colotlán no estaban dispuestos a trabajar en las minas, solicitando al presidente de la Audiencia de Guadalajara que se obligara a todos los pueblos indígenas situados dentro de un radio de 40 leguas, a que enviaran contingentes de trabajadores a Bolaños. Pero la Corona ratificó la ordenanza establecida que disponía que la mano de obra indígena solo podía forzarse a una distancia de diez leguas, y que no debía ascender a más del 4 por 100 de los tributarios varones de cada pueblo ⁹³.

Otra amenaza al reclutamiento de mano de obra de la compañía se presentó porque la calidad de la mena iba en descenso, porque en Bolaños los barreteros y barrenadores más hábiles dependían totalmente de sus partidos, que ascendían a la tercera parte de todo el mineral que extrajeran. Ya en 1796 los trabajadores tropezaban con grandes dificultades para vender el mineral de sus partidos a los refinadores independientes, a causa de su mezquina calidad. Así pues, se veían obligados a vendérselo a la propia compañía, la cual lo compraba más con el objeto de dar medios de subsistencia a sus trabajadores que porque le resultara provechoso. La compañía presentó entonces una petición a la Corona, la cual fue rechazada, de que los partidos de sus trabajadores también fueran exceptuados del pago de impuestos ⁹⁴.

Si la mena de los trabajadores era de tan baja calidad, podemos inferir que la de la compañía era igualmente mala. No poseemos mayor información, pero sabemos que para 1797 la producción se había reducido a la mitad, y en agosto de 1798 el río se desbordó de nuevo, anegando las minas y causando grandes daños en el poblado ⁹⁵. Llegada a ese punto, la compañía cerró sus cuentas y abandonó a Bolaños a su suerte. De los registros de la caja real podemos obtener

⁹² Véase la contabilidad de la caja real de Bolaños, AGI, México, 2119, del año 1792.

⁹³ AGI, México, 2243, petición de la compañía, 23 abril; real orden 11 mayo 1792. Véase también AGN, Minería, 97/3, gobernador de Colotlán a Revillagigedo, 11 junio 1791.

⁹⁴ AGN, Minería, 137/3, petición de la compañía, 28 junio 1796.

⁹⁵ AGN, Subdelegados 2, oficiales de Hacienda a Azanza, 17 agosto 1798.

una idea del grado de la decadencia que siguió. En los tres años de 1794-6 se recaudaron alcabalas por valor de 70 796 pesos, mientras que en los de 1798-1800 los ingresos por este concepto ascendieron a sólo 9 106 pesos ⁹⁶. Así terminó la historia de Bolaños como gran centro minero y aparece que la causa fue que la compañía sufrió la enfermedad crónica de las minas viejas, que es la disminución constante de las utilidades. La producción era abundante, pues en los años de 1792-6 alcanzó una cifra media anual de 103 327 marcos de plata, es decir, aproximadamente el 3.7 por 100 de toda la acuñación de México durante aquellos años ⁹⁷, pero la inversión inicial necesaria fue muy fuerte y el mineral, de tan baja ley que casi no valía la pena beneficiarlo. A pesar de las exenciones fiscales, por consiguiente, la producción casi no cubría los costos. Antonio Bassoco, que fue uno de los principales accionistas, declaró más tarde: «sin embargo de la gracia de quintos que gozaron las abandonaron los socios de aquella compañía por no arruinarse en ellas sin haber utilizado un maravedí después de haber carecido de sus caudales, perdiendo los socios que no permanecieron en la habilitación, lo que a los principios contribuyeron para ella» ⁹⁸. En otras palabras, la compañía de hecho subsidió durante ocho años al pueblo de Bolaños, sin obtener ninguna utilidad sobre el capital invertido.

V

El procedimiento mediante el cual se rehabilitó a Bolaños nos revela un sistema que prevalecía en toda la minería. La sorprendente generosidad de las exenciones fiscales, el mayor influjo de capital mercantil, la reinversión de la ganancia minera, y la creciente dependencia en una fuerte inversión de capital para el desagüe de tiros y túneles, son elementos que se encuentran no únicamente en Bolaños, sino también en Pachuca, Sombrerete, Zacatecas y Taxco. No obstante, no fueron tan importantes para la operación minera en Guanajuato o Catorce, que fueron los dos campos que produjeron, entre los dos, por lo menos las dos quintas partes de la plata mexicana en la

⁹⁶ AGI, México, 2120, cuentas de Hacienda de los años 1794-1800.

⁹⁷ Cálculo según cuentas de Hacienda, AGI, México, 2119, 2120.

⁹⁸ AGN, Minería, 108, declaración de Bassoco, 27 julio 1804.

última década del siglo XVIII. Ni un solo minero de estos dos campos obtuvo exenciones fiscales, ni tampoco dominaron los comerciantes la minería local, aunque participaron en ella. Hemos descrito, pues, el proceso mediante el cual una reducción especial en los costos y una fuerte inversión de capital lograron rehabilitar a ciertos sectores antiguos y más bien marginales de la minería mexicana haciéndolos efectivamente productivos, campos de los cuales procedía entre la cuarta y la tercera parte de la totalidad de la plata acuñada. Pero el contraste no debe exagerarse, porque el capital mercantil operó tanto para la rehabilitación de antiguas minas como para el desarrollo de las nuevas. Dos ejemplos pueden ilustrarnos esta tendencia.

En 1780 José Gómez Campos, comerciante de la ciudad de México, hizo el denuncia de un grupo de minas en Jilotlán, distrito remoto de Colima. Tuvo que contratar trabajadores en Real del Monte, Valladolid y Zapotlán. Además tuvo que alquilar y cultivar tierras para dar de comer a hombres y a mulas carne y maíz. Más tarde, Gómez Campos afirmó que estaba dispuesto a invertir hasta 200 000 pesos en la empresa, y todavía en 1788 no había recibido ni un centavo de utilidades ⁹⁹. En el Distrito de Villa Alta, por otra parte, un rico comerciante vasco residente en Oaxaca, llamado Juan Francisco Echarri, invirtió 200 000 pesos para explotar seis minas de plata en Talea, una de cobre en Ixtepeji, y una hacienda de beneficio. La mina de cobre debía suministrar a la hacienda piritas de cobre para el procedimiento de amalgamación. Importó trabajadores de Pachuca, Taxco y Real del Monte. Afirmó que en los primeros cinco años la mina produjo solo 6 831 marcos, pero luego durante un año y medio entre 1785 y agosto de 1786, la producción aumentó a 8 112 marcos. Estando en esa fase obtuvo de la Corona exención total de impuestos, especialmente porque estimaba que su empresa requería la inversión de otros 450 000 pesos repartidos en catorce años ¹⁰⁰. En realidad, estos dos comerciantes abrieron minas en zonas en donde hasta entonces se había encontrado muy poca plata, y por esta razón se vieron obligados a importar la mano de obra de los antiguos campos mineros en decadencia. El monto del capital que invirtieron y la década misma en que lo hicieron —1780-90— cuando comenzaron sus

⁹⁹ AGI, México, 1540, Revillagigedo a Lerena, 15 enero 1791.

¹⁰⁰ AGI, México, 1533, Revillagigedo a Lerena, 29 julio 1790; AGI, México, 2242, Flores a Valdés, 24 diciembre 1788.

actividades mineras, son igualmente indicativos de las tendencias generales.

Mientras tanto, ¿qué pasaba en Guanajuato? Seguramente que como campo descubierto en el siglo XVI debía estar en las mismas condiciones en que se hallaban Zacatecas y Real del Monte, y en parte lo estaba ¹⁰¹. En el decenio de 1760-70 varias de sus mayores minas, tales como la de Mellado, la de Cata y la Sirena, se anegaron y los trabajadores explotaban únicamente sus partes más altas. Por otro lado, la Mina de Rayas, a pesar de estar abrumada por las deudas seguía prosperando, obteniendo mineral más rico de tiros más profundos. Pero fue un nuevo descubrimiento, La Valenciana, ubicada en una parte de la veta entre Mellado y Rayas, que se había considerado anteriormente estéril, lo que transformó a Guanajuato, porque produjo siempre buenas utilidades, desde 1770 hasta 1810. Además, sus dueños nunca trataron de integrar sus empresas, y una gran parte del mineral extraído siempre se vendió a refinadores independientes. La minería guanajuatense, entonces, tenía una compleja estructura de producción (descrita más adelante) que no existía ni en Zacatecas ni en Real del Monte. Pero el éxito de La Valenciana fue el resultado de una fuerte reinversión de utilidades en la excavación de tiros nuevos y extraordinariamente profundos. Su única diferencia con las demás minas fue que una administración experta la libró del ciclo acostumbrado de abandono y rehabilitación. En otros lugares de Guanajuato varias minas antiguas fueron rehabilitadas por casas mercantiles o por los socios de La Valenciana. Haciendo a un lado los incentivos fiscales, en Guanajuato estuvieron en juego los mismos factores que revivieron a la minería en otros campos de México, pero el motor de su prosperidad, La Valenciana, da una perspectiva diferente a dichos factores.

No abunda la información sobre Catorce. Descubierto en 1778, el crecimiento de este campo fue notablemente rápido, como lo demuestran los siguientes datos ¹⁰².

¹⁰¹ Véase la tercera parte, «Guanajuato».

¹⁰² AGN, Minería, 110/6, oficiales de Hacienda de San Luis Potosí, 24 enero 1785.

PRODUCCION DE CATORCE EN LOS PRIMEROS AÑOS (1779-84)

	<u>Mina</u>		<u>Marcs</u>
1779	169 007	1782	295 522
1780	181 767	1783	368 187
1781	273 144	1784	372 000

Las ganancias eran altas: el padre Flores recibió tres y medio millones de pesos durante los años de 1781-3. La mina era tan rica que venían a comprarla los refinadores de Guanajuato, Sierra de Pinos y León. No obstante, poco antes de 1790 terminaron aquellos días felices: la rica masa de mineral que se encontraba cerca de la superficie se agotó. A pesar de ello, la posición de Catorce, en lugar de entrar en decadencia, se consolidó mediante métodos de producción más eficientes. Una nueva mina, la de La Purísima, fue desarrollada por dos personas asociadas, Miguel Francisco de Aguirre, talentoso minero vasco, e Ignacio de Obregón, hijo del primer conde de La Valenciana. Estimaciones posteriores arrojan una cifra de utilidades de dicha mina entre 1788 y 1806, de unos 200 000 pesos anuales en promedio. Para esta última fecha su tiro principal había alcanzado una profundidad de 550 varas, convirtiéndose así en la segunda de México¹⁰³. Durante aquellos años Catorce produjo aproximadamente cuatro millones de pesos anuales; por desgracia, aparte de esta contamos con muy poca información sobre aquel campo que, como Bolaños, inesperadamente ocupó el segundo lugar entre todos los de México, pero por el contrario progresó a partir de su primera bonanza mediante la excavación de tiros profundos sin pasar por la acostumbrada interrupción por el anegamiento y el abandono. Además, parece que los mineros de Catorce siguieron el ejemplo de La Valenciana, vendiendo su mineral a los refinadores independientes.

Finalmente, para concluir nuestro catálogo de omisiones, debemos aclarar que no hemos intentado analizar la minería del extremo norte —Durango y más allá— donde había campos, tales como Guariamey, Santa Eulalia, Batopilas, Cosalá y Alamos, que producían una cuarta parte del total de la plata mexicana. Varios de estos campos tuvieron grandes épocas de prosperidad en el decenio de 1780-90 y más tarde. Están en espera de un historiador.

¹⁰³ Ward, *Mexico in 1827*, II, 489-502; Santiago Ramirez, *Noticia histórica de la riqueza minera de México* (México, 1884), pp. 566-7.

VI

Durante casi doscientos años Zacatecas se sostuvo en el primer puesto de la minería mexicana, produciendo plata con un valor medio anual de dos millones de pesos, cifra que aproximadamente ascendía a la cuarta parte de la acuñación total durante las primeras décadas del siglo XVIII. En 1732 había en la ciudad 25 haciendas de beneficio que usaban el procedimiento de amalgamación y 20 fraguas para fundición ¹⁰⁴. Pero poco a poco en los años que siguieron, las minas de Zacatecas se anegaron una por una y fueron abandonadas por sus dueños. Hasta 1760 Francisco Javier de Gamboa comentó que «sus minas han sido opulentísimas y hoy no están en su corriente por las profundidades y aguas» ¹⁰⁵. La disminución en la industria del beneficio dio una clara prueba de la decadencia de la ciudad, pues para 1767 no seguían en operación más que 5 molinos y 2 fraguas ¹⁰⁶.

Las causas de esta decadencia no han sido hasta la fecha bien identificadas. El conde de Santiago de La Laguna, minero prominente de aquella ciudad, citaba en un escrito de 1732 varias causas de la bancarrota de otros mineros, afirmando que él mismo, en los dos años anteriores había perdido 50 000 pesos. Achacaba sus pérdidas a la baja calidad del mineral que por entonces se producía en Zacatecas y al alto precio del mercurio, que no permitía un beneficio productivo de una gran variedad de calidades medias y bajas de mineral. El margen que quedaba entre costos e ingresos era exiguo por lo que la bancarrota estaba a la vuelta de la esquina. Además, parece que las disputas sobre los derechos de desagüe fueron causa del abandono de algunas minas, y en otras, especialmente en la Mina de Quebradilla, la técnica de desagüe no era apropiada para contrarrestar el nivel del agua, siempre en ascenso ¹⁰⁷. Zacatecas sufría por los problemas típicos de un centro minero envejecido: sus minas eran profundas, lo cual hacía muy alto el costo del desagüe, y a pesar de ello producía mineral de media y baja ley, por lo cual los costos de producción tendían a absorber las ganancias. Además, la técnica de desagüe usada en el lugar era defectuosa, y los mineros zacatecanos especialmente pen-

¹⁰⁴ Rivera Bernárdez, *Descripción breve*, pp. 44-50.

¹⁰⁵ Gamboa, *Comentarios*, p. 510.

¹⁰⁶ BM Add. MSS 20999, «Representación sobre el estado de los reales de minas, por Juan Lucas de Lassaga y José de la Borda», f. 565.

¹⁰⁷ BRP, MSS 2824, Miscelánea de Ayala, 10, f. 132.

dencieros. Cualquiera que haya sido la causa, el hecho es que para cuando José de Gálvez llegó a México, Zacatecas ya no conservaba más que la sombra de sus pasadas glorias. No obstante, cuando en 1803 Humboldt se hallaba de visita en la Nueva España, encontró que la ciudad ocupaba el tercer lugar entre las regiones productoras de México, siendo inferior sólo a Guanajuato, otro centro establecido hacía mucho tiempo, y a Catorce, que era de descubrimiento relativamente reciente ¹⁰⁸.

El paso decisivo para la rehabilitación de Zacatecas lo dio José de la Borda, que fue el minero más notable de su tiempo y que, en una carrera iniciada en 1716, ya había ganado y gastado varias fortunas obtenidas en Taxco y Talpujahuá, dos campos cercanos a la ciudad de México ¹⁰⁹. Hacia 1767 Borda, a pesar de todo, era famoso, aunque estaba prácticamente en bancarrota; había invertido casi medio millón de pesos en la construcción de la famosa iglesia de Santa Prisca en Taxco, que todavía figura entre las glorias arquitectónicas de México. Además, Borda debía 400 000 pesos a varias personas, incluyendo 112 000 a Manuel de Aldaco ¹¹⁰, y aunque su mina de Chontalpa, cerca de Taxco había producido más de dos millones de pesos, su más reciente empresa había sido un fracaso. Para pagar sus deudas y reconstruir su fortuna, Borda decidió abandonar los campos mineros centrales e irse al norte, a Zacatecas. Ya había alegado, en un autorizado informe que envió a José de Gálvez, que la Corona debía dar una ayuda especial a los mineros que emprendiesen obras de rehabilitación arriesgadas o costosas, señalando la existencia de una antigua y casi olvidada ley que disponía reducciones fiscales para la explotación de minas antiguas y profundas ¹¹¹. Poco después de este argumento general presentó la proposición de emprender él mismo la rehabilitación de La Quebradilla, mina zacatecana tan rica en mineral como en el agua que la inundaba.

Gálvez y el virrey marqués de Croix, que ya habían discutido con Borda cuáles eran los mejores medios para el desarrollo de la minería, aprobaron inmediatamente su proyecto y le dieron una extraordina-

¹⁰⁸ Humboldt, *Ensayo político*, p. 333; para entonces su participación en la producción total ascendía, aproximadamente, al 12 por 100.

¹⁰⁹ Ximénes y Frías, *El fénix de los mineros ricos*, pp. 90-2.

¹¹⁰ AGN, Minería, 106/4, José de la Borda a Bucareli, marzo 1775.

¹¹¹ BM Add. MSS 20999, ff. 562, 598, 604.

ria ayuda fiscal. Se le exceptuó totalmente del diezmo de la plata durante el período que duraran las primeras obras de rehabilitación y luego, una vez que hubiese recobrado su inversión inicial, se le concedió una reducción del 50 por 100 en los impuestos durante veinte años. Además, durante la totalidad de este tiempo se le proporcionaría mercurio a precio de costo, o sea, a 30 pesos el quintal ¹¹². Estas exenciones, que fueron las primeras de su especie que se concedieron, sirvieron después de modelo para muchas concesiones individuales semejantes. Por supuesto que la fama de Borda le fue de gran ayuda, pues ya desde 1761 Gamboa había escrito lo siguiente: «don José de la Borda, que puede señalarse como el primer minero del mundo por su vasta comprensión y grandes manejos en esta línea» ¹¹³, y el virrey mismo hizo hincapié en su superioridad técnica para justificar las concesiones fiscales, afirmando que «José de la Borda es sin contradicción el sujeto más inteligente que en ese reino se conoce en minas y en la maquinaria para su excavación y desagües..., a vista de su habilitación aprenderán los mineros de Zacatecas y otros de tierra adentro el manejo de sus máquinas exteriores y el modo de desaguar y habilitar las muchas ricas minas» ¹¹⁴. Así, la Corona se servía de armas fiscales para fomentar la difusión de los conocimientos técnicos.

Sin embargo, al principio Borda demoró la iniciación de las obras en La Quebradilla, mina conocida por las dificultades que presentaba, ya que a pesar de su fama y del apoyo real no lograba encontrar quien le apoyara financieramente. Dirigió en cambio sus esfuerzos a otra veta del campo de Zacatecas, llamada Veragrande, en la que abrió siete minas. Con todo, se vio obligado a pedir 30 000 pesos prestados a sus amigos, y una vez que los gastó, pidió y obtuvo otros 18 000 de la Corona antes de que empezaran a verse los frutos de la empresa, pero en los ocho años subsiguientes estas minas produjeron más de un millón y tres cuartos de pesos. Con las utilidades Borda construyó

¹¹² AGI, México, 2235, real orden, 12 marzo 1768; véase también Fonseca y Urrutia, *Historia general de Real Hacienda*, I, 38, 343.

¹¹³ Gamboa, *Comentarios*, p. 380.

¹¹⁴ AGI, México, 2235, Croix a la Corona, 26 mayo 1767. Podemos hacer notar que el ayudante de Borda, Juan Pablo Echegoyen, vasco, había estudiado técnicas mineras en Inglaterra; en 1761 fue denunciado a la Inquisición por ser inglés. Véase Manuel Toussaint, *Don José de la Borda restituido a España* (México, 1933), p. 9.

una enorme hacienda de beneficio, llamada Saucedá, que, según sus afirmaciones, tenía una capacidad de refinar 3 000 quintales de mineral a la semana, siendo por ello en aquellos tiempos la mayor del norte. También adquirió la cercana Hacienda de Malpaso en la cantidad de 102 000 pesos para que proporcionara a las 1 400 mulas de su hacienda maíz y forraje, y a sus trabajadores el maíz para su alimentación ¹¹⁵. Como las minas de Veragrande no estaban cubiertas por las exenciones de impuestos, Borda aprovechó el desempleo que había en la localidad para reducir el gasto en salarios. Hasta entonces, los mineros de Zacatecas habían ganado 6 reales diarios, recibiendo como partidos la cuarta parte del mineral que producían; tales eran las ganancias de barreteros y barrenadores, pero Borda les bajó el salario a 4 reales y redujo sus partidos a la octava parte ¹¹⁶.

Hacia 1775 Borda se encontró con que San Acasio, su mejor mina, había llegado a una profundidad de 240 varas; el mineral que producía se volvió mediocre, con un rendimiento de dos onzas de plata por quintal, lo cual hacía su explotación casi incosteable. Se decidió entonces por fin a desaguar La Quebradilla, donde una compañía de comerciantes del lugar había perdido anteriormente 300 000 pesos. No obstante, la técnica superior de Borda pronto venció a la mina, de manera que más tarde escribió triunfalmente: «todos confiesan que las aguas que eran insuperables para ellos, son como un juguete para mí, cotejada el agua que sacan mis malacates con la que sacaban los suyos» ¹¹⁷. Además, desde abril de 1775 hasta noviembre de 1779, periodo en que la mina produjo 93 774 marcos de plata, gozó de exención completa de impuestos lo cual, aunado al bajo precio del mercurio que se le proporcionaba, equivalía a un subsidio de 98 053 pesos que de otra manera habría tenido que pagar a la Corona. Con esta suma, más una parte de sus ganancias, construyó otra enorme hacienda de beneficio, llamada La Sagrada Familia ¹¹⁸. Los datos de la tabla 17 nos proporcionan una idea de la producción de La Quebradilla y de las conce-

¹¹⁵ AGN, Minería, 106/4, Borda a Bucareli, marzo 1775.

¹¹⁶ AMZ, 23, doctor Antonio Bugarín al intendente Felipe Cleere, sin fecha, 1788/9.

¹¹⁷ AGN, Minería, 106/4, Borda a Bucareli, marzo 1775.

¹¹⁸ AGN, Minería, 115/1, informe del administrador de Borda, Ventura de Artega, 6 marzo 1780.

siones fiscales de que gozó; fue elaborada por la caja real de Zacatecas ¹¹⁹.

TABLA 17

PRODUCCION Y EXENCION FISCAL DE LA MINA DE QUEBRADILLA

Año	Producción total (en marcos)	Diezmo nominal sin ninguna reducción (en pesos)	Valor de la exención del diezmo (en pesos)	Cantidad de mercurio proporcionada a 30 p.ql. (en quintales)	Valor del descuento en el precio del mercurio (en pesos)
1777	2 103	2 002	2 002	—	—
1778	36 768	35 005	35 005	321	3 648
1779	62 179	59 203	55 690	539	6 125
1780	32 841	31 270	15 635	—	—
1781	52 356	49 851	24 925	400	4 545
1782	30 282	28 832	14 416	250	2 842
1783	35 010	33 335	16 667	—	—
1784	3 001	2 858	1 429	—	—
1790	1 820	1 733	866	—	—
	256 360	244 089	166 635	1 510	17 160

La falta de una contabilidad más detallada nos hace difícil determinar la importancia relativa de varias ventajas financieras de que Borda se aprovechó. En comparación con sus predecesores pudo reducir el costo tanto de la fase minera como de la del beneficio en sus empresas, además de que obtuvo cuantiosas exenciones fiscales. Su técnica superior, requisito indispensable para el éxito, no reducía los costos por sí misma, según podemos suponer. No obstante, todos los cálculos tienen el defecto de que no podemos tomar en cuenta, porque lo ignoramos, una proporción fundamental: la distribución del costo total de la producción entre producción y beneficio, por lo cual no podemos calcular cuál puede haber sido la importancia relativa de la reducción proporcional de costos en una u otra fase. De todas maneras, podemos señalar ahorros considerables. Si se da por buena la cifra (que nos proporcionan otros campos mineros) de que la mano de obra costaba aproximadamente el 75 por 100 de los gastos totales para la extracción, entonces Borda, al reducir el salario de 6 a 4 reales diarios redujo el costo total de la producción de mineral aproximadamente en un 25 por 100. Además se quejaba con una

¹¹⁹ AGN, Minería, 115/1, informe de la caja real de Zacatecas, 23 marzo 1791.

proporción mayor del mineral producido. Por lo que se refiere a la fase del beneficio, ya hemos señalado que la amalgamación de mineral de media ley, es decir, de tres onzas de plata por quintal, requería una cantidad de mercurio que, al nuevo precio de 41 pesos 2 reales 11 granos por quintal, absorbía más o menos el 25 por 100 de los costos totales del beneficio. El mercurio suministrado a Borda a 30 pesos por quintal reducía el costo proporcional de esta materia prima a una cifra cercana al 18 por 100. Y además de que este precio inferior del mercurio permitía una mayor ganancia en el mineral de ley media, Borda tenía también la posibilidad de refinar una gama más amplia de mineral de baja ley. En fin, el hecho es que las reducciones fiscales que obtuvo ascendieron en los años de 1778-90 a 166 639 pesos, suma que, si la comparamos con relación a la producción total, asciende al 7.3 por 100, que ya es en sí una ganancia considerable sobre el capital. Es claro que Borda no dependía de las exenciones fiscales, las cuales fueron únicamente un estímulo, especialmente porque había explotado las minas de Vetagrande sin un apoyo de esa clase. De cualquier forma, quizá sin ese incentivo nunca se habría atrevido a trasladarse a Zacatecas. El hecho es que, cuando murió en 1779, Borda estaba libre de deudas, y su único hijo, el sacerdote Manuel de la Borda, estimó en 1790 el valor de sus propiedades en un millón de pesos, de los cuales 300 000 estaban invertidos en propiedades urbanas en la ciudad de México. Pero ya para entonces La Quebradilla estaba de nuevo anegada y el heredero de Borda no tuvo éxito en sus peticiones a la Corona de que se le concediera un préstamo de 100 000 pesos para rehabilitarla ¹²⁰. En México el éxito y las bonanzas mineras rara vez duraban más de una década sin que se presentara la necesidad de hacer nuevas inversiones muy fuertes en forma de excavación de nuevos tiros y túneles de desagüe.

Las actividades de Borda en Zacatecas ocasionaron una gran renovación del personal minero. Un informe de 1784 declaraba que los principales mineros del lugar eran Ventura Arteaga, que era el antiguo administrador de Borda, Marcelo de Anza, sobrino de su socio principal, y sus dos «sobrinos» franceses, Francisco Javier y Julián Penmartin ¹²¹. Una nueva oleada de inmigrantes vascos co-

¹²⁰ AGN, Vínculos, 123/3, Manuel de la Borda a la Audiencia, 22 agosto 1790.

¹²¹ AGI, México, 2205, superintendente de la Casa de Moneda a Gálvez, 26 septiembre 1790. Los Penmartin eran naturales de Oloron, en Francia, y durante

menzaron a dedicarse a la minería, como comerciantes-aviadores y como refinadores, pues debe tenerse presente que los trabajadores siempre vendían sus partidos a los refinadores independientes, de modo que todas las grandes empresas integradas que extraían y refinaban su propio mineral, estaban siempre rodeadas por un grupo de pequeños refinadores y comerciantes.

Si bien Borda logró el éxito mediante una técnica superior, la siguiente generación recurrió en cambio a la fuerte inversión de capital. Zacatecas llegó a la fase en que las compañías, en razón de su mayor estabilidad, tenían más posibilidades de éxito que los empresarios individuales. En 1783 dos compañías competidoras se formaron para desaguar y explotar el grupo de minas de Vetagrande. La primera, integrada por Marcelo de Anza y Ventura de Arteaga y con el apoyo financiero de Antonio de Bibanco, principal minero de Bolaños, y de Manuel de Goya, comerciante de la capital, solicitó exenciones fiscales a la Corona en vista de que estimaban el costo de las obras iniciales de desagüe en medio millón de pesos. La segunda compañía sin embargo, organizada por el cura párroco del lugar, doctor Antonio Bugarín, y apoyada por un grupo heterogéneo de abogados, curas y viudas, calculó el costo de la rehabilitación en la baja cifra de 50 000 pesos ¹²². Por fin, en julio de 1786, se estableció una compañía unificada. Anza y su socio capitalista, Goya, se retiraron; Arteaga se convirtió en administrador general y un grupo de varios residentes de Zacatecas y de comerciantes y financieros de México adquirió unas 40 acciones.

Anza decidió entonces seguir explotando las minas de Canteras y San Francisco, que había heredado de su tío. La producción se sostuvo bastante bien, pero los costos aumentaron extraordinariamente. Durante los veinte años transcurridos entre 1772 y 1792 la producción de dichas minas ascendió a 720 329 marcos de plata, pero el precio de esta producción continua fue pagado por el socio capitalista de Anza,

el último decenio del siglo XVIII estuvieron en peligro de ser arrestados. Su garante zacatecano Fausto de Arce escribió entonces, el 25 febrero 1795, al virrey, a propósito de Francisco Penmartin: «un hombre tan adicto a la dominación Española como lo fue su tío don José de la Borda». Contrariamente a la afirmación de Manuel Toussaint de que Borda era español, continuaba diciendo: «Se condujo don José de la Borda, sin acordarse de su origen francés procurando y consiguiendo el restablecimiento de muchos minerales». Véase AGN, Historia, 503/47.

¹²² AGN, Minería, 107/I, se estableció la compañía unida, 19 julio 1786.

el comerciante Manuel Ramón de Goya, el cual perdió medio millón de pesos en la empresa. En la reunión de acreedores que siguió, se descubrió que Goya, haciendo mal uso de su posición como agente receptor en México de la plata del conde de La Valenciana, había malversado 300 000 pesos de dicha cuenta. La fortuna personal de Goya ascendía a 200 000 pesos ¹²³. Como acto de benevolencia, más bien a los acreedores que a esas dos personas, la Junta de Real Hacienda concedió a Anza una reducción del diezmo a la mitad, ordenando que se le suministrara mercurio a precio de costo, concesiones ambas que debían durar diez años ¹²⁴. Es evidente que las minas de Zacatecas operaban con márgenes muy estrechos, y la mayoría de ellas necesitaban apoyo fiscal, y lo obtuvieron. El triste destino de Goya, antiguo cajero de Meave en el almacén de Fagoaga, demuestra claramente la razón por la que tantos comerciantes temían emprender negocios mineros.

Durante el decenio de 1780 a 1790 Zacatecas atrajo a otro importante empresario. Manuel de Rétegui, un inmigrante vasco, había labrado una fortuna durante el período de 1772-87 en el cercano campo de Fresnillo. Se trasladó entonces a Zacatecas, donde en poco tiempo logró rehabilitar la antigua mina de Malanoche, hazaña que lo colocó entre los mineros más ricos de la ciudad. A pesar de ciertos fracasos —perdió 150 000 pesos en la mina de San Bernabé y otra suma similar cuando trató de invadir el territorio de la compañía de Vetagrande— hacia 1804 Rétegui estimaba el valor de sus bienes en medio millón de pesos. Esta suma estaba invertida en minas, haciendas de beneficio y en el comercio. El monto de su producción resistía la comparación con la de Anza y la de Vetagrande: entre 1787 y 1805 presentó 756 785 marcos de plata a la caja real del lugar ¹²⁵. Además, casi era el único minero importante de Zacatecas que no llegó a recibir exenciones fiscales, aunque las solicitó durante su fracasado intento de rehabilitar la mina de San Bernabé.

Un poco antes de 1790 estaban en producción por lo menos tres grupos de minas: las de San Francisco, de Anza, las de Vetagrande, y las de Malanoche de Rétegui, y en todas ellas los trabajadores recibían

¹²³ BN (México) MSS 1374, en la petición de José Antonio Ansao, 19 junio 1786; respecto a la malversación véase AHGP, Cabildo, 25 octubre 1791 y 1 diciembre 1792.

¹²⁴ AGI, México, 2212, Azanza a la Corona, 27 julio 1799.

¹²⁵ AGI, México, 2248, Iturrigaray a la Corona, 26 septiembre 1806.

partidos de lo que extraían. Rétegui, por ejemplo, les permitía llevarse una sexta parte, mientras que Borda había establecido el partido en la octava parte. De todos modos, cualquiera que fuera la proporción, el hecho es que bastaba para vender suficiente mineral a un grupo de refinadores independientes, principalmente de origen vasco, que se enriquecieron tanto hasta llegar a pensar en la rehabilitación de las minas del lugar. Dos de estos, Fermín de Azpezechea y Bernardo de Iriarte, ambos vascos, primero se apoderaron prácticamente del control del tribunal local de minería, llamado diputación, y después, en 1792, actuando con la colaboración de Manuel de Rétegui, denunciaron minas que se encontraban dentro del territorio concedido a la compañía de Vetagrande, aprovechando la autoridad de la Diputación para otorgar legalidad a esa invasión. Sin embargo, la compañía protestó ante el virrey y exigió que el caso fuera llevado al Tribunal de Minería de la ciudad de México ¹²⁶. Resultó de ello una tregua, según cuyos términos Azpezechea y sus socios renunciaban a las minas de la compañía, a cambio de lo cual, según parece, se le dieron manos libres para que se apoderara de los bienes de la familia de la Borda. El caso es que hacia 1794 las minas de La Quebradilla y de Cibras fueron adquiridas por una compañía formada por Azpezechea, mientras la Diputación local rechazaba las protestas de los nietos de Borda. La familia no negaba que carecía de capital para rehabilitar la mina inundada, pero este caso fue indudablemente resultado de una trapacería legal ¹²⁷.

La nueva compañía, que como se acostumbraba estaba dividida en 24 acciones, se integró totalmente con gente de Zacatecas: Azpezechea se quedó con 8 acciones, Bernardo de Iriarte con seis, y Francisco Javier Penmartín, desleal «sobrino» de Borda, tres. En abril de 1804 se iniciaron los trabajos para esta segunda rehabilitación de la mina de La Quebradilla, continuando hasta enero de 1808 sin que los socios recibieran ninguna ganancia. Gastaron 150 000 pesos antes de producir su primer marco de plata, y, según afirmaron, para 1808 su inversión ascendía a 862 606 pesos. En esta suma, sin embargo, los socios incluían sin duda las utilidades reinvertidas, y en vista de las dificultades que tenía, la compañía recibió en enero de 1809 una reducción fiscal del 50 por 100 y el suministro de mercurio a precio

¹²⁶ AGN, Minería, 107, agente de la compañía al virrey, sin fecha 1792.

¹²⁷ AGI, México, 2245, Branciforte a la Corona, 26 junio 1797.

de costo ¹²⁸. Para facilitar esta concesión la compañía suscribió 50 000 pesos del Fondo de Guerra que con fines patrióticos se reunió por entonces, lo cual es clara demostración de cuán valiosas eran las exenciones.

La empresa era sorprendente por su tamaño. Unos cinco tiros, con 14-16 malacates, fueron necesarios para desaguar la mina. El tiro central, aunque no era muy profundo —en 1804 había alcanzado únicamente 168 varas— necesitaba otros ocho malacates él solo. Los malacates recibían la fuerza motriz de unos 800 caballos que consumían 18 000 fanegas de maíz al año. La fuerza de trabajo era igualmente alta, unas 2 500 personas, de las cuales 1 415 trabajaban bajo tierra. Con tal fuerza laboral los gastos semanarios eran muy altos: en 1809 quizá de 18 000 a 20 000 pesos ¹²⁹.

Ante tan altos costos la compañía, que dominaba la Diputación local, dio el paso decisivo de suprimir el sistema de dar a los trabajadores una parte del mineral que producían; se les puso simplemente a sueldo diario y además se les pagaba una parte de él en especie y no en efectivo, a pesar de que las leyes prohibían esa práctica. En 1810 los trabajadores protestaron sin resultado ante el virrey, afirmando que «pues a más de que no nos pagan en esa mina de Quebradilla como ha sido uso y costumbre (ie. con partidos) nos están aniquilando con estarnos dando en efectos nuestros salarios» ¹³⁰.

A pesar de todo, para 1810 la compañía había hecho una fortuna, y además de las utilidades normales, los socios gozaban de reducciones fiscales y de la parte del mineral que en condiciones normales habría correspondido a los trabajadores. Cuánto producía la mina y qué tan fuertes fueron las utilidades son hechos que ignoramos, pero un documento posterior afirmaba que en menos de nueve años la compañía de La Quebradilla pagó impuestos a la Corona por la suma de 528 413 pesos, que a una tasa del 5 por 100 representarían una producción aproximada de más de un millón de pesos anuales ¹³¹.

La empresa más importante de Zacatecas era la compañía propietaria del grupo de minas de Vetagrande. No obstante, su camino hacia

¹²⁸ AGI, México, 1634, Garibay a la Corona, 16 julio 1809.

¹²⁹ Berghes, *Descripción*, pp. 22-3.

¹³⁰ Citados por Mendizábal, *Obras completas*, V, 207.

¹³¹ AGN, Minería, 1806, Diputación minera de Zacatecas a la Corona, 20 mayo 1818.

el éxito económico fue especialmente largo y difícil, porque la rehabilitación de sus minas fue mucho más costosa de lo que todos habían pensado. Ya en diciembre de 1788 la compañía había recibido y gastado sin recibir utilidades unos 3 000 pesos por acción. La mayoría de los residentes de la localidad, que eran los socios originales del doctor Bugarín, se retiraron al ver esos resultados, de modo que sólo 22 de las 40 acciones originales siguieron colocadas ¹³². Y a pesar de un breve período de florecimiento de la producción en 1791-2, cuando se distribuyeron algunas utilidades, los costos siguieron superando a los ingresos, de modo que los accionistas tuvieron que aportar bastante más de los 10 000 pesos por acción originalmente estipulados. Consecuentemente la mayoría de los demás socios se vieron obligados a retirarse, algunos de ellos después de haber hecho una fuerte inversión. Por ejemplo, Gaspar Martín Vicario, comerciante de México, perdió 88 550 pesos en la empresa; Juan Fernández Peredo, 55 000; el doctor Luis Beltrán, 38 500; y así sucesivamente. Al final no quedaban más que cinco accionistas ¹³³.

Es difícil estimar el tamaño de la mina. Hacia 1797 el tiro principal había llegado a 360 varas de profundidad, de las 450 que se consideraban necesarias. Para el desagüe de este tiro, y de otros, se requerían unos 17 malacates, movidos por 660 mulas con un costo de 2 400 pesos semanarios. En total, costaba 6 000 pesos a la semana operar la mina. Naturalmente que la mayor parte de los gastos de operación se financiaban con la producción, porque el capital de los accionistas se invertía principalmente en la planta. Así, para 1803 la compañía había comprado o construido tres haciendas de beneficio (incluyendo Saucedá, antigua propiedad de Borda). El valor total de estas haciendas junto con la planta de la mina fue calculado en 931 768 pesos, es decir, que ascendía a la mayor parte del capital hasta entonces suscrito ¹³⁴. Así pues, la compañía de Vetagrande era una vasta empresa integral que figuraba entre las mayores de México, y con seguridad era la mayor de Zacatecas. En 1803 el intendente declaró que de los 460 arrastres por entonces en operación, la compañía poseía 138, mientras que los refinadores que seguían en importancia, Marcelo de

¹³² AGI, México, 1587, Azanza a la Corona, 27 agosto 1798.

¹³³ AGN, Minería, 46/3, encuesta de los accionistas de la compañía, 31 enero 1805.

¹³⁴ AGI, México, 1587, declaración del agente de la compañía, marzo 1797.

Anza, la familia Borda y Manuel de Rétegui, tenían respectivamente 64, 50 y 24 arrastres ¹³⁵.

Tratando de equilibrar sus cuentas, los accionistas sobrevivientes ya habían solicitado a la Corona, en 1797, que les concediera auxilio fiscal. La Junta Superior de Real Hacienda, obviamente impresionada por el relato de sus desdichas, otorgó a la compañía una exención completa de impuestos durante seis años, y el suministro de mercurio y pólvora a precio de costo. Estas concesiones debían entrar en vigor una vez que se levantara el bloqueo naval británico causado por la alianza de España con Napoleón. No puede dudarse que la compañía tenía buenas razones, ya que hacia 1804 el déficit total, es decir, el capital invertido sin ganancias ascendía a 1 198 930 pesos ¹³⁶. Así pues, después de unos 17 años de producción, la mina casi no había proporcionado utilidades a sus dueños. La escala a que operaba puede comprenderse mediante la tabla 18 ¹³⁷.

Como demuestra esta tabla, no fue sino hasta 1805, después de unos 17 años de inversiones casi continuas, que la mina resultó ser el gran negocio. Para entonces los cinco socios que quedaban habían aportado 922 205 pesos sobre sus 11 ³/₄ acciones. La recompensa que recibieron fue inesperada y proporcional. En los tres años de 1805-7, de los que tenemos cifras, la compañía de Vetagrande pagó 3 021 647 pesos de dividendos ¹³⁸. Pero veamos ahora quiénes eran los cinco hombres que fueron capaces de resistir la fuerte presión financiera sobre sus recursos y cuál era el origen de su capital.

Los dos principales socios, que poseían respectivamente cuatro y tres acciones, eran los hermanos Fagoaga, el marqués del Apartado y Juan Bautista. Los 549 000 pesos que aportaron procedían, por supuesto de la bonanza de Sombrerete que tuvo lugar en 1792-4. Así, la mismísima familia que en la generación anterior había perdido casi medio millón de pesos en Real del Monte, apenas escapó de sufrir la misma suerte en Zacatecas. En realidad, los dos murieron antes de

¹³⁵ AGN, Historia, 49/26, Rendón al virrey, 3 mayo 1803.

¹³⁶ AGN, Minería, 108, declaración del agente de la compañía, sin fecha 1805.

¹³⁷ Para el período 1786-93, véase AGN, Minería, 46/3, informe de la caja real de Zacatecas, 5 marzo 1793. Para el de 1795-1801, véase Ward, *Mexico in 1827*, II, 45.

¹³⁸ AGN, Vínculos, 213/3, declaración del abogado de la sucesión de Bibanco, julio 1809. La hija de Bibanco recibió 377 164 pesos como importe de una acción y media. No hay razón para suponer que se le haya dado una proporción mayor que la que correspondía a los demás accionistas.

que sus inversiones en ese lugar produjeran ninguna utilidad. Tanto Bolaños como Sombrerete ayudaron a sostener a Zacatecas. El marqués de Bibanco aportó 117 500 pesos sobre una acción y media que tenía. El otro socio importante era Antonio Bassoco, el comerciante de la capital que aportó 235 000 pesos sobre sus tres acciones. El último socio, Vicente Olloqui, únicamente aportó 19 625 pesos sobre su cuarto de acción ¹³⁹. La compañía de Vetagrande debió su éxito, pues, al pequeño grupo de comerciantes capitalistas y de casas mercantiles de la ciudad de México que durante el siglo XVIII dominaron secciones enteras de la minería. Forman un círculo cerrado de magnates. El segundo marqués de Castañiza, cuñado de Bassoco, estaba casado con la hija de Juan Bautista Fagoaga. La hija de Gaspar Martín Vicario, otro accionista que demostró ser poco adaptable a las circunstancias, se casó con el segundo marqués de Bibanco. La viuda de Bassoco comentó años más tarde: «El señor Marqués de Bibanco y don Gaspar Martín Vicario tuvieron con mi difunto marido la más estrecha amistad» ¹⁴⁰.

TABLA 18
PRODUCCION DE LA COMPAÑIA DE VETAGRANDE,
ZACATECAS, 1786-1810

Año	Marcos	Onzas	Año	Marcos	Onzas
1786	167	2	1795	41 900	3
1787	6 296	1	1796	35 570	4
1788	2 947	3	1797	10 533	3
1789	7 262	5	1798	15 702	6
1790	18 419	3	1799	8 178	5
1791	27 057	4	1800	17 348	3 1/2
1792	77 060	4	1801	14 326	7
1793 (hasta marzo)	14 359	4	1802	20 996	1
	153 570	2	1803	64 291	3
			1804	136 836	3 1/2
			1805	299 944	7 1/2
			1806	193 533	2
			1807	102 999	6
			1808	184 230	2
			1809	65 293	6
			1810	101 550	4
				1 313 237	2 1/2

¹³⁹ AGN, Minería, 46/3, encuesta de los accionistas de la compañía, 31 enero 1805.

¹⁴⁰ AGN, Guerra 5 (B), condesa de Bassoco a Calleja, 28 octubre 1805.

Tanto para los dos Fagoaga como para Bassoco, la crisis del decenio que se inició en 1780 marcó una época en su vida. Las diversas reformas que Gálvez realizó en la estructura misma del comercio y de la minería amenazaron claramente sus intereses, por lo que se vieron obligados a cambiar los métodos de sus negocios. La prolongada gestación de la bonanza de Vetagrande demostró los peligros que se afrontaron en esta transición, pero mientras hombres menores, como Manuel Ramón de Goya, fueron destruidos, a ellos sus vastos recursos les permitieron sobrevivir a la tormenta, llegando a ser más ricos que antes. La misma facilidad con que obtuvieron concesiones fiscales para sus inversiones en Sombrerete, Bolaños y Zacatecas, demostró que seguían estando en posición cercana al poder, y sus ganancias en la minería dependieron en parte de estos amplios subsidios fiscales. Si se puede decir que un grupo de familias constituyera un centro del poder colonial, lo constituían los hermanos Fagoaga y Bassoco, junto con sus cuñados Castañiza y Villaurrutia que ocupaban puestos tanto en la Iglesia como en la judicatura ¹⁴¹. Todos ellos, por sus relaciones y riqueza, se las arreglaron para que la ola de las reformas borbónicas no se los tragara, para surgir después tan fuertes e influyentes como siempre. No los derrocaría más que la marea más fuerte de la revolución jacobina posterior a la independencia, años después. Cuando el estado de Zacatecas emprendió el ataque contra el dominio de la ciudad de México sobre las provincias, ¿no habrán estado presentes los Fagoaga en la mente de los políticos? Después de todo, Francisco García, gobernador radical y federalista, los había tenido un día como patrones en la mina de Vetagrande ¹⁴².

¹⁴¹ Durante los veinte años transcurridos de 1796 a 1816, se hallaban entre los miembros de este grupo un prior del Consulado, un administrador general del Tribunal de Minería, un obispo de Durango, el primer provincial jesuita de la resucitada compañía, el regente de la Audiencia de Guadalajara, un canónigo del cabildo de la catedral de México, un alcalde del crimen de la Audiencia de México y tres títulos nobiliarios.

¹⁴² Salvador Vidal, *Señor Francisco García Salinas. «Tata Pachito»* (Zacatecas, 1962), p. 10.

CAPITULO V

LA HERENCIA CRIOLLA

Durante el siglo XVIII la Corona otorgó unos 50 nuevos títulos de nobleza a personas residentes en la Nueva España. En la mayoría de los casos el único criterio obvio para la selección fue la posesión de grandes riquezas. La aristocracia mexicana salió de las filas de la *élite* financiera y en general puede ser aceptada como muestra representativa de las clases ricas de la colonia. Un análisis de su composición, entonces, nos dará pruebas reveladoras del proceso de formación de las grandes fortunas de la Nueva España ¹. Los datos de la tabla 19 nos ilustran mejor sobre dicho proceso.

TABLA 19

LA NOBLEZA MEXICANA EN EL SIGLO XVIII (CREACIONES)

	<i>Peninsulares</i>	<i>Americanos</i>	<i>De origen desconocido</i>	<i>Total</i>
Mineros	9	6	1	16
Comerciantes	10	—	—	10
Terratenientes	2	10	—	12
Funcionarios	7	1	—	8
De actividad desconocida	1	2	—	3
TOTAL	29	19	1	49

Dos hechos resultan claros de este cuadro. En primer lugar la importancia de la minería y del comercio en comparación con la propiedad rural y con la carrera gubernamental. La importancia de la minería aumenta si observamos que los dos hijos menores ennoblecidos del conde de Regla están incluidos en la categoría de terratenien-

¹ Cifras calculadas según Ortega y Pérez Gallardo, *Historia genealógica*. Véase también Fonseca y Urrutia, *Historia general de Real Hacienda*, IV, 234, 243, 350-1.

res aunque sus posesiones fueran adquiridas con el dinero ganado por su padre en la minería, y que un funcionario obtuvo riqueza y título mediante su matrimonio con una hija del conde. El segundo fenómeno que se observa es la gran cantidad de españoles peninsulares, no solo en el comercio y en el gobierno, sino también en la minería. A ellos correspondió el 60 por 100 de todas las nuevas creaciones de títulos de nobleza.

Ante esta tabla y los argumentos de los capítulos anteriores que en gran parte confirma, surge claramente esta cuestión: ¿Por qué los criollos no pudieron competir con los inmigrantes españoles? Porque nos encontramos ante una sociedad establecida hacía más de doscientos años que aún necesitaba —o permitía— que inmigrantes de extracción relativamente humilde se apoderaran del control del comercio y de gran parte de la minería, que amasaran grandes fortunas, y que coronaran sus triunfos con la compra de títulos de nobleza. El éxito de los gachupines tenía por fundamento el fracaso de los criollos. ¿Por qué no pudo competir el criollo con su primo el inmigrante, y cuáles fueron las consecuencias de este fracaso?

La mayoría de los observadores contemporáneos de la sociedad colonial dieron una respuesta directa y áspera a esta cuestión. El español americano de clase respetable, afirmaron, era ocioso. Es verdad que los que tenían mayor simpatía se apresuraban a modificar este juicio, declarando que el criollo espresaba mejor su talento en las profesiones, en la literatura y en las artes, pero la mayoría estaban de acuerdo en que carecía de sentido para los negocios. Por consiguiente, existía una tendencia universal entre los españoles americanos a consumir los bienes que heredaban. Por otra parte hay que admitir que las pruebas de estas generalizaciones son casi enteramente literarias, pero la unanimidad de criterio tanto de los viajeros que pasaron por el país, como de los residentes permanentes y hasta los relatos escritos por los mismos criollos, es suficientemente fuerte para justificar una discusión del asunto. Porque si damos crédito a estos testimonios, entonces llegamos a una conclusión inesperada y muy controvertida de nuestro estudio sobre mineros y comerciantes mexicanos.

En 1763 el Padre Ajofrín, fraile capuchino viajero, afirmó: «No obstante que los naturales o criollos son tan capaces y aptos para las letras y facultades, se han experimentado que no tienen la

mayor economía para el comercio, manejo de las haciendas y gobierno de sus casas; sucede todos los días que sus padres, que fueron gachupines, dejan a sus hijos crecidos caudales en el comercio o en haciendas, ya al poco tiempo se hallen, o consumido o deteriorado.»²

En 1809 Pedro de Fonte, más tarde arzobispo de México, hizo una observación similar, pero todavía más hostil:

Como su educación es en la opulencia y molicie, miran con fastidio las ocupaciones serias y caen pronto en una lánguida inercia, que al mismo tiempo los sepulta en los vicios y miseria. Los más de ellos puedan gloriarse de que sus padres y antepasados fueron ricos; y se hallarán pocos que no hayan disipado sus caudales y fincas, o si conservan algunas, su producto excede en poco a los réditos de capitales a que están afectas. Envanecidos con su noble origen desprecian a los Indios y castas, y avergonzados con sus vicios y disipaciones tienen una oculta aversión y envidia al Europeo, que con sus tareas, sobriedad y afanes disfruta de consideración y haberes. Esta clase, rival de todas las demás, quisiera ser la única que gozase las ventajas de este suelo³.

Estos dos curas eran, naturalmente, españoles peninsulares; expresaban las opiniones y prejuicios de los gachupines residentes en México. No obstante, varias declaraciones de los mismos criollos *mexicanos confirman* en cierto modo sus opiniones. A principios del siglo XVIII, por ejemplo, Juan Antonio de Ahumada, en una carta abierta dirigida al nuevo rey, Felipe V, afirmaba que los españoles americanos eran como peregrinos en su propio país. Nunca, o casi nunca, se les designaba para puestos altos en la Iglesia o en la administración real. Sin tales recompensas les faltaba todo incentivo para el estudio o para emprender empresas arduas, y consecuentemente caían en una pereza viciosa, fuente de todos sus males y fracasos⁴.

El ayuntamiento de la ciudad de México, bastión criollo, coincidía en gran medida con el argumento de Ahumada. En una petición que presentó a la Corona española en 1771, los regidores solicitaron que los puestos en el gobierno de la Nueva España se reservaran a los naturales del país. Hicieron cuanto pudieron para poner énfasis en el

² Ajofrín, *Diario*, I, 85.

³ AGI, México, 1895, Pedro de Fonte a Benito Hermida, 24 abril 1809.

⁴ BN (Madrid) MSS 1187, «Representación política y legal de Juan Antonio de Ahumada a Felipe V», ff. 33-8.

noble origen de los españoles de América; muchas de las mejores familias de la península, afirmaban, habían enviado a sus hijos menores al Nuevo Mundo. La insinuación que tan comúnmente se hacían los gachupines de que la mayoría de los criollos tenían sangre indígena fue negada con vehemencia. Además, afirmaban, sus hijos «se crían y educan con el mismo esplendor, gozan de la delicadeza de las viandas, del ornato, de los vestidos, de la pompa y aparato de criados y domésticos, de la suntuosidad de los edificios, de lo exquisito de sus muebles... Ignoran lo que es trabajo corporal, se dedican los más a los estudios... los oficios mecánicos ni se compadecen bien con el lustre de nacimiento ni sufragen en Indias para una decente subsistencia» ⁵. Por esa educación, el español americano dependía, para subsistir, de un puesto en el gobierno. Sin él, argüía el ayuntamiento de la capital, los criollos se veían obligados a dedicarse al sacerdocio o quedarse solteros. Si se arriesgaban a casarse, las necesidades económicas hacían que sus hijos cayeran en la plebe.

En efecto, tanto Ahumada como el autor de la petición de 1771 confirmaban las observaciones tanto de Ajofrín como de Fonte; la única diferencia estaba en que la explicación que daban era distinta. Para los clérigos peninsulares el fracaso de los criollos se debía a su carácter y a la calidad de sus talentos, mientras que los dos mexicanos explicaban la desastrosa situación de su clase por su casi total exclusión del gobierno. Ninguno de ellos negaba que el criollo tuviera tendencia al ocio y a malgastar su fortuna.

Es claro que lo que tenemos frente a nosotros es la descripción de una *élite* colonial a la que se le negaba su primer derecho hereditario: el gobierno del país. El español americano, por razones de familia y raza, nacía, se criaba y se educaba dentro de una clase socialmente privilegiada que contaba con todas las comodidades materiales, evidentemente superior a la población de color que la rodeaba. «Todos los criollos han nacido para caballeros», escribió Juan López de Cancelada, agudo observador ⁶. Ahora bien, los hidalgos en términos generales, muy rara vez trataban de dedicarse a los negocios, sino que

⁵ Juan Hernández y Dávalos, *Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821* (6 vols.; México, 1877-82), I, 427-55.

⁶ Juan López de Cancelada, *El Telégrafo Americano*. N.º 20, 19 febrero 1812, p. 254.

siempre esperaban un nombramiento oficial. Y en el Nuevo Mundo los españoles americanos, desde el siglo XV hasta la independencia, asediaron a la Corona con peticiones de empleos públicos y quejas por su exclusión. El criollo quería ser virrey, gobernador, obispo, general o juez de la corte suprema, porque del ejercicio del poder político esperaba obtener tanto prestigio como ganancias. Al negársele el acceso a tales cargos, no podía emprender actividades económicas, a menos que le obligara una necesidad extrema, sino *que vivía consumiendo sus bienes, se dedicaba a una profesión, y acababa con su herencia*.

Juan López de Cancelada escribió un divertido diálogo sobre las consecuencias del desprecio de los negocios por parte de los criollos, vistas por el primo gachupín y por el hijo criollo ⁷.

Gachupín.—Yo he venido de España sin un real: saqué de casa de mi tío 20 mil duros en los diez años que trabajé al tercio de utilidades, que dando para éste 350 000; y mi primo luego que los heredó, los ha tirado, y *ahora quiere que lo mantenga con mujer e hijos, sin saber más que latines*.

Criollo.—Quién no lo vio venir de España sin calzones a casa de mi padre, hecho un bruto, y ahora rico presumiendo ser ya Cónsul. Estos gachupines se vienen aquí a ser gentes y a apoderarse de lo que produce nuestra tierra: la culpa la tenemos nosotros en consentirlos.

Fue Lucas Alamán el que resumió el efecto final del carácter y ambiciones del español de América:

El efecto de estas funestas propensiones era la corta duración de las fortunas, y el empeño de los europeos en trabajar para formarlas y dejarlas a sus hijos, pudiera compararse al tonel sin fondo de las Danaides, que por más que se le echara, nunca llegaba a colmarse. De aquí resultaba que la raza española en América necesitaba para permanecer en prosperidad y opulencia, una refacción continua de españoles europeos que venían a formar nuevas familias, a medida que las formadas por sus predecesores caían en el olvido y la indigencia ⁸.

Siendo él mismo hijo de un comerciante inmigrado, Alamán cita el proverbio andaluz, «el padre mercader, el hijo caballero, el nieto pordiosero». Naturalmente que en este proverbio se oye el eco del ciclo de tres generaciones, cómo sucede en los probervios de tantas otras naciones. La elevación y caída de familias ricas es un fenómeno

⁷ *Ibid.*, p. 251.

⁸ Alamán, *Historia*, I, 16, 17.

constante en la mayoría de las sociedades, e igualmente frecuente es el ingreso de comerciantes triunfados a las filas de las clases terratenientes, y la preferencia de sus hijos por las profesiones liberales ⁹, pero la Nueva España se diferenciaba en un aspecto importante de otras sociedades tradicionales. En México eran generalmente los inmigrantes los que amasaban fortunas, y eran los naturales los que las perdían. Esto rompía, pues, el círculo normal de elevación y caída. En su mayoría eran los españoles de Europa los que ascendían en la escala social, y los de América los que descendían. Un criollo cualquiera tenía muy pocas esperanzas de movilidad social ascendente, y así, la Nueva España poseía una sociedad fuertemente colonial, en el sentido de que tanto el prestigio como la riqueza eran para los inmigrantes y no para los naturales. Nuestro argumento depende, naturalmente, de la hipótesis según la cual el populacho, por su composición racial y su falta de educación, no podía elevarse al nivel de las clases respetables, de manera que una familia criolla, una vez sumergida en las masas, muy poco podía esperar en recobrar su posición. Por supuesto que este proceso de decadencia social no afectaba a todas las familias con igual rapidez, pues en general eran los nietos de un emigrante triunfado los que sentían con más fuerza la presión de la necesidad económica. Para entonces, los bienes sucesorios originales habían sido ya objeto de dos divisiones testamentarias sucesivas, de modo que en esta generación la batalla por la existencia tenía que comenzar en serio.

Nuestra presentación de la teoría de Alamán ha sido tan extrema como esquemática; podían encontrarse muchas excepciones a la regla, y en todo caso reduce demasiado lo que en muchos casos fue una lucha de un siglo por la supervivencia social. Además, lo que hasta ahora hemos expuesto quizá nos deje poco convencidos y confundidos, porque Alamán, como Ajofrín y Fonte, explicó el proceso de decadencia social mediante la educación y carácter de los criollos.

⁹ Compárese lo siguiente: «Una característica general de la historia social y económica de las ciudades inglesas fue la notable constancia con que las familias urbanas de éxito iban y venían en el curso de tres generaciones cuando más. En las ciudades inglesas nunca se formó una clase patricia mercantil. Los comerciantes triunfados, que procedían principalmente de la prole no primogénita de los campesinos libres e hidalgos menores de la región circundante, regresaban a sus tierras antes de que transcurrieran cien años, y generalmente mucho más pronto; y sus negocios se disolvían en granjas y campos, cosechas y ganado.» W. G. Hoskins, *Provincial England* (Londres, 1963), p. 74.

Pero seguramente deben invocarse también razones económicas si queremos explicar por qué el capital heredado era consumido o dilapidado. ¿Eran sólo la indolencia y las ambiciones políticas insatisfechas lo que impedía que el criollo acumulara riquezas o conservara su fortuna? ¿O era esta ruina financiera el producto de cómo elegía ocupación? ¿Qué podía hacer en realidad el criollo? ¿Qué posibilidades de trabajo tenía?

Una vez planteado en estos términos, el problema se hace más manejable, porque el examen más superficial nos revela inmediatamente el hecho de que las profesiones liberales —que eran el campo de actividades escogido por los criollos— sostenían a unas cuantas personas. Una encuesta oficial realizada en 1803 arrojó el resultado de que en la Nueva España había 386 abogados, de los únicamente 210 estaban en ejercicio. La gran mayoría de ellos (más de 171) vivía en la ciudad de México ¹⁰. No obstante, aun para este pequeño número resultaba difícil ganarse la vida. En 1807 Carlos María de Bustamante se quejaba de que después de ocho años de trabajar, «después de tanto trabajo esta es la hora en que apenas tengo un escaso pan para mi familia». Afirmaba que un puñado de personas monopolizaba los litigios en la Audiencia, amasando grandes fortunas mientras «el resto de los abogados gimen en la indigencia» ¹¹.

Las demás carreras eran más difíciles. Había menos médicos que abogados; en 1793 no llegaban más que a unos 140. Los notarios eran igualmente escasos, ya que no eran más de 180 ¹². El ejército regular, formado desde el decenio de 1760-70, era una fuente nueva pero muy limitada de ocupación, y hacia 1800 no tenía arriba de 200 oficiales criollos ¹³. Podemos así apreciar la importancia de la burocracia real, pero no es fácil calcular cuántos empleos había. Mientras casi todos los abogados, médicos y notarios eran criollos, la burocracia era precisamente la profesión más dominada por los españoles peninsulares. Posiblemente había aproximadamente un millar de

¹⁰ AGI, México, 1811, Audiencia al Consejo de Indias, 21 octubre 1806.

¹¹ AGI, México, 1817, Petición de Carlos María de Bustamante, 1 septiembre 1807.

¹² En 1790 había en la ciudad de México 51 médicos y 237 cirujanos y «barberos». La intendencia de Guanajuato, donde residía aproximadamente una décima parte de la población, tenía nueve médicos, nueve cirujanos y 97 «barberos». Véase AGN, Historia 523, ff. 76, 90.

¹³ Véase AGS, «Guerra Moderna» 7276-7, donde las hojas de servicios que aparecen en la lista de todos los oficiales dan el lugar de nacimiento.

empleos con salario suficiente para sostener cómodamente a una familia de clase respetable ¹⁴ pero no sabemos en qué proporción de este número se encontraban los criollos.

No obstante, todas estas ocupaciones pierden importancia cuando se comparan con la Iglesia. Hacia 1809 había en la Nueva España 7 431 sacerdotes y religiosos, siendo la abrumadora mayoría de ellos españoles naturales del país ¹⁵. Es verdad que muchos curas, especialmente los párrocos del campo, procedían de los niveles bajos de la sociedad, y que no habían nacido en el seno de familias «decen-tes» los siete mil. Además se encontraban españoles peninsulares en los altos puestos y en las órdenes religiosas, pero en general la gran variedad de instituciones eclesiásticas—cabildos catedralicios, la universidad, los colegios, hospitales, monasterios y parroquias—estaban llenas de criollos, porque la Iglesia ofrecía tanto el prestigio social como generosa remuneración; los clérigos eran los jefes naturales de la sociedad mexicana.

Por supuesto que el ingreso de numerosos jóvenes criollos de clase alta al sacerdocio, y el consecuente celibato, terminaba abruptamente la historia de muchas familias acomodadas. Indudablemente que la Iglesia ofrecía un asilo para quien carecía de fortuna, y un refugio para la prole de las familias que iban descendiendo en la escala social, pero pueden citarse muchos casos en que la inesperada muerte de un hermano mayor proporcionaba una herencia cuantiosa al hermano sobreviviente, que era sacerdote. Y tales bienes no podían heredarse legalmente a hijos ilegítimos, por lo cual la Iglesia se convirtió en una institución clave que, con su insistencia sobre el celibato, contribuyó a minar la estabilidad de la *élite* colonial.

Aparte de las profesiones, el criollo sin dinero podía siempre emprender alguna actividad económica, pero en este campo, especialmente en el comercio, tropezaba con la fraternidad cerrada y con la mentalidad del clan de los comerciantes gachupines, que no tenían confianza en su capacidad ni en su honradez, y que en muchos casos se negaban a concederle el crédito indispensable. Muchos españoles americanos se hicieron comerciantes, pero muy pocos lograron un éxito apenas mediocré. Los estereotipos convencionales del carácter

¹⁴ Véase López de Cancelada, *El Telégrafo americano*, 13, 1 enero 1812, pp. 139-41. También *Guía de forasteros* (México, 1809), *passim*.

¹⁵ Navarro y Noriega, *Memoria*, hoja plegable, p. 30.

criollo —su carencia de sentido de los negocios y la poca confianza de que se le creía digno— se comprobaban mediante sus propios efectos. Además, como señaló el doctor Mora, mientras al gachupín lo apoyaba un grupo numeroso y organizado de sus paisanos, el criollo tenía que luchar individualmente ¹⁶.

Si bien en general la lenta y mezquina rutina del tendero no atraía al español americano, en cambio la minería de plata, por su carácter especulativo y casi de lotería, ejerció sobre él una fascinación perenne. Desgraciadamente, la minería de plata tendía a atraer a hombres que eran o estúpidamente ambiciosos o desesperadamente pobres ¹⁷. Era facilísimo que un criollo de posibilidades económicas moderadas perdiera toda su fortuna en una mina improductiva, y fue aun más común que un criollo de buena familia pero sin dinero, se hundiera sin dejar rastro en la poco refinada sociedad de un campo minero. Además, en una actividad que dependía tan fuertemente del capital mercantil, el minero o refinador criollo sufría los efectos de los prejuicios y competencia de los gachupines. De todas maneras, y a pesar de su naturaleza arriesgada, la industria minera ofrecía indudablemente al español americano muchas mejores oportunidades de redención social que el comercio, aunque como medicina era un remedio que con más frecuencia mataba de la que curaba. Lo que es indudable, es que daba un cierto carácter febril a la sociedad colonial.

En última instancia, ni el limitado número de oportunidades en las profesiones, ni el celibato del clero, ni el control del comercio por parte de los gachupines, ni la arriesgada naturaleza de la minería bastan para explicar la debilidad económica y social de la *élite* nativa de la Nueva España, porque el baluarte y la base de la clase criolla era la tierra. Los comerciantes inmigrados y los mineros ricos, ya fueran criollos o gachupines, todos invertían sus fortunas comprando haciendas. En un país sin sociedades anónimas ni bancos, sólo la tierra ofrecía a los empresarios ricos la perspectiva de un futuro rico y seguro para sus descendientes. La teoría de Lucas Alamán, entonces, se sostiene o se derrumba de acuerdo a la viabilidad económica de la institución mexicana de la hacienda. Si aquellas grandes propiedades eran productivas, entonces no es fácil explicarse por qué las familias

¹⁶ José María Luis Mora, *México y sus revoluciones* (3 vols.; México, 1950), I, 76-8.

¹⁷ Tassaga y Velásquez de León, *Representación*, p. 42.

propietarias de ellas estaban sujetas a un proceso de desplazamiento social continuo. La descripción de la *élite* mexicana no estará completa sin una discusión de lo que era la hacienda y de cuáles eran sus problemas.

Mientras que los 6 680 ranchos y los 4 680 pueblos indígenas que aparecen en una lista de 1809, forzosamente deben haber vivido de lo que cultivaban, las 4 945 haciendas y estancias de la Nueva España producían para vender sus productos en el mercado ¹⁸. La hacienda existía, pues, para proporcionar ganancias a su dueño. Es cierto que muchas estaban abandonadas y servían de pastizales a manadas y rebaños semisalvajes, pero en tal caso no tenían objetivo claro. En general, la mayoría de los terratenientes preferían vivir en las ciudades, visitando sus propiedades, si acaso, unos cuantos meses al año; el resto del tiempo confiaban su manejo a un administrador ¹⁹. Los hacendados mexicanos formaban una clase propietaria ausente que de sus bienes obtenía un ingreso suficiente para mantener cómoda y elegantemente a una familia urbana de clase alta. Casi nadie compraba una hacienda para irse a vivir en ella, y menos aun para consumir sus productos. Muchas grandes haciendas con frecuencia tenían que mantener a dos familias acomodadas, la del dueño y la de su administrador.

No obstante, la hacienda era claramente defectuosa como unidad productiva, porque había una desproporción muy especial entre el número y superficie media de las haciendas de México, por una parte —algunas tenían más de 250 kilómetros cuadrados de superficie— y el pequeño mercado que abastecían, por la otra. Los viajeros de aquel tiempo, tales como el padre Morfi, lamentaron que los dueños dejaran sin producir grandes extensiones de tierra ²⁰. Pero, ¿qué objeto hubiera tenido cultivarla, si las cosechas no podían venderse? El único mercado apropiado era la cadena de pueblos y campos mineros dispersos. Es verdad que ciertas regiones como el Bajío y el Valle de México representaban mercados urbanos situados a distancia mode-

¹⁸ Navarro y Noriega, *Memoria*, hoja plegable, p. 30.

¹⁹ Francisco Pimentel, *La economía política aplicada a la propiedad territorial en México* (México, 1866), p. 116. Véase en Eric R. Wolf y Sidney W. Mintz, «Haciendas and Plantations in Middle America and the Antilles», *Social and Economic Studies*, 6 (1957), pp. 380-412, una caracterización general de las haciendas.

²⁰ Morfi, *Viaje*, pp. 46-75. Véase también Andrés Molina Enríquez, *Los grandes problemas nacionales* (México, 1909), pp. 80-93.

rada, pero en las demás regiones la mayoría de las haciendas no aprovechaban más que una parte de sus tierras y rentaban lo demás a sus peones, aventureros vagabundos o pueblos indígenas cercanos. Además, el bajo nivel de los precios de casi todos los productos agropecuarios no permitía a los propietarios, aún a los de las haciendas ubicadas más favorablemente, obtener grandes ganancias. Por ejemplo, el distrito de Chalco, con un poco de ayuda del de Toluca, satisfacía por sí solo la demanda de maíz de la ciudad de México; con todo, en 1773 se estimó que la producción media por hacienda no superaba las 3 000 fanegas anuales, lo cual, considerando que el precio del maíz variaba de uno a dos pesos la fanega, proporcionaba un ingreso cuando más de 6 000 pesos, cantidad de la que debía restarse el costo de la producción ²¹.

En general, la hacienda mexicana producía muy bajas ganancias sobre la gran cantidad de capital que en la mayoría de los casos se invertía en su compra. La marquesa de Bibanco era propietaria de dos haciendas, Chapingo, cerca de Texcoco, y Ojo de Agua, en Sepuala. Esta última producía pulque. En la tabla 20 aparecen los ingresos y el producto medio del capital con que contaba la marquesa ²².

TABLA 20

INGRESO Y UTILIDAD SOBRE EL CAPITAL DE DOS HACIENDAS, 1800-5
(en pesos)

Año	Chapingo	Ojo de Agua
1800	19 825	10 368
1801	4 695	8 844
1802	10 365	9 047
1803	8 217	10 914
1804	6 414	10 250
1805	16 325	10 034
	65 843	59 459
Ingreso anual medio	10 940	9 909
Valor de las haciendas (capital)	193 082	140 442
Ganancias anuales sobre el capital	5.6 %	7 %

²¹ Florescano, *Los precios del maíz*, p. 92; y Gibson, *The Aztecs*, pp. 328-9.

²² AGN, Vínculos, 213/3, declaración del lic. Oláez, julio 1809.

Los jesuitas se ganaron la fama de ser los más eficientes administradores de haciendas, aunque M. Berthe, en su estudio sobre los cañaverales de la Compañía en Xochimancas, encontró que sus utilidades, especialmente a principios del siglo XVIII, eran sumamente bajas ²³. Puede comprobarse que las grandes propiedades que pertenecían al Colegio de San Pedro y San Pablo de México, y al Seminario de Tepotzotlán, producían utilidad muy baja considerando el fuerte capital que representaban. Estas haciendas, que comprendían «una parte muy considerable de todas las tierras situadas en la parte norte del Valle», pasaron en 1767 a manos de la real administración después de la expulsión de los jesuitas, y en 1775 fueron vendidas al conde de Regla ²⁴. En la época en que se hizo esta venta fue elaborado un cuadro de los ingresos correspondientes a los años inmediatamente anteriores y siguientes a la confiscación, del cual presentamos un resumen en la tabla 21 ²⁵.

Así pues, las pruebas del siglo XVIII que han llegado hasta nosotros confirman las estimaciones de Francisco Pimentel, que en los años 1860-70 calculó que en la agricultura mexicana la utilidad media sobre el capital no excedía al 6 por 100 ²⁶.

Una causa concomitante del bajo ingreso de las haciendas coloniales eran los impuestos a que estaban sometidos sus productos. La Corona cobraba una alcabala del 6 por 100, y a veces del 8, sobre el valor de todas sus ventas. Además la Iglesia recaudaba su diezmo sobre todos los productos. Las propiedades jesuitas mencionadas, una vez que fueron confiscadas, pagaban más del 14 por 100 de su ingreso total, por concepto de diezmos y alcabalas. La Iglesia imponía una pesada carga a la agricultura mexicana, porque en el período de 1779-89, sus diezmos en la Nueva España, sin incluir Yucatán, ascendieron a un promedio anual de 1 835 000 pesos ²⁷.

Además, la Iglesia también actuaba como el banco hipotecario de la colonia. Hacia 1805 poseía un capital de unos 44 millones de pesos, invertido principalmente en hipotecas y préstamos con garantía de

²³ Berthe, «Xochimancas», pp. 104-5.

²⁴ Gibson, *The Aztecs*, p. 290.

²⁵ AGI, México, 1772, declaración del contador general de *Temporalidades*, 16 diciembre 1777.

²⁶ Pimentel, *La economía política*, pp. 208, 236-7.

²⁷ Humboldt, *Ensayo político*, p. 85.

TABLA 21

VALOR E INGRESOS DE LAS ANTIGUAS HACIENDAS JESUITAS
ADQUIRIDAS POR EL CONDE DE REGLA, h. 1775
(en pesos)

	HACIENDAS					
	<i>Jalpa y anexas</i>	<i>Santa Lucía y San Javier</i>	<i>García</i>	<i>Portales</i>	<i>Melina</i>	<i>Total</i>
Valor	575 830	1 151 694	184 440	52 186	2 500	1 966 650
Precio de venta	—	—	—	—	—	1 020 000
Ingreso anual antes de la ocupación	35 000	23 065	5 979	3 594	436	68 074
Después de la ocupación: promedio de 8 1/2 años (1767-75)	28 793	16 486	2 733	336	314	48 662
Diezmos y alcabalas, promedio anual (cobrados sólo después de la ocupación)	—	—	—	—	—	8 317
Utilidad media sobre el capital bajo los jesuitas	—	—	—	—	—	3.5 %
Utilidad sobre el capital después de la ocupación, incluyendo diezmos y alcabalas	—	—	—	—	—	2.9 %
Utilidad sobre el precio de compra pagado por Regla	—	—	—	—	—	4.7 %

propiedades urbanas o, con más frecuencia, rurales ²⁸. Esta enorme suma representaba el producto acumulado de tres siglos de donaciones piadosas, legados testamentarios e intereses invertidos. Comprendía las anualidades con que se sostenía el clero secular, y las dotaciones con que se mantenían hospitales, asilos, orfanatorios y colegios. Así pues, la hacienda mexicana, sobre la que pesaba principalmente la carga de pagar el 5 por 100 de interés que causaban las hipotecas y anualidades eclesiásticas, no sólo mantenía la estructura y la liturgia de la Iglesia, sino también todos los institutos caritativos, médicos y educativos de la colonia.

La explicación de esta carga particularmente pesada se halla en las

²⁸ Mora, *Obras sueltas*, «Escrito de Abad y Queipo», p. 231.

necesidades mutuas tanto de la Iglesia como de la clase terrateniente. La mayor parte de las haciendas necesitaban créditos, y por ello tendían a acumular deudas. Una mala cosecha, un período de sequía, una empresa minera o comercial, una donación de caridad, la dote de una hija, una anualidad para un hijo menor y el simple gasto en lujos, eran todas erogaciones que se hacían mediante hipotecas que gravaban las haciendas, y aunque en primera instancia tales préstamos se contraían en general por períodos de cinco años, era muy común que el período se extendiera casi a perpetuidad ²⁹. No era raro encontrar haciendas con gravámenes hereditarios que llegaban hasta el 50 por 100 de su valor comercial. Por su parte la Iglesia —que era casi la única fuente de crédito a largo plazo de que disponía el hacendado— claramente consideraba que las haciendas ofrecían más seguridad que las minas de plata o los obrajes: únicamente la propiedad urbana ofrecía ventajas semejantes. Además, dichas hipotecas proporcionaban un interés del 5 por 100 sin las complicaciones que significaba la posesión de una hacienda en propiedad, de manera que la mayoría del capital eclesiástico pesaba sobre la hacienda, es decir, se invertía en la tierra, que era la única inversión tangible que producía un ingreso en la colonia. Naturalmente que esta reciprocidad de intereses entre la Iglesia y el terrateniente pronto condujo a situaciones en las que un hacendado empobrecido no era más que el administrador de sus acreedores clericales. El intendente de Puebla informó que las 38 haciendas y 17 ranchos de Cholula valían 788 442 pesos, de los cuales 550 504 pertenecían a la Iglesia ³⁰. Aunque es probable que Cholula no fuera típica, representaba una tendencia universal, y para fines del siglo XVIII la mayor parte de las haciendas estaban fuertemente gravadas por las deudas.

La hacienda mexicana, entonces, constituía una base muy débil para una clase terrateniente estable. El ciclo que Gómez de Cervantes observó en funciones en el siglo XVII resultó ser un proceso continuo, aplicable igualmente al siglo XVIII. Aparte de un puñado de magnates dueños de provincias enteras, tales como los Rincón Gallardo y los marqueses de San Miguel de Aguayo, la familia hacendada típica sorteaba con dificultad el paso de las generaciones. Un estudioso de la

²⁹ *Ibid.*, p. 221; véase también Chevalier, *Los grandes latifundios*, pp. 201-5.

³⁰ AGN, Intendencias, 48, intendente Flon al virrey, 12 mayo 1790.

época que se interesó en las hipotecas eclesiásticas, afirmó que en general muy pocas familias conservaban sus propiedades por más de tres generaciones ³¹. Francisco Pimentel declaró que casi no existía hacienda que no hubiese sido comprada con capital adquirido en la minería, la industria o el comercio ³². Si este era el caso, entonces la hacienda mexicana era un barril sin fondo que consumía sin cesar el capital excedente acumulado por el comercio exterior. Las fortunas amasadas en la minería y en el comercio se invertían en la tierra, para desde allí ser lentamente dilapidadas o transferidas poco a poco a las arcas de la Iglesia. Consecuentemente, tenía lugar un continuo desplazamiento de la clase hacendada. La *élite* de la Nueva España era inestable en su composición precisamente porque la base económica que había elegido, la hacienda, absorbía y desperdiciaba la mayor parte del capital acumulado en la colonia, inestabilidad que no terminó sino hasta la Revolución Mexicana.

³¹ José María de Jáuregui, *Discurso en que se manifiesta que deben bajarse los réditos a proporción del quebranto que hayan sufrido en la insurrección los bienes y giras de los deudores* (México, 1820), p. 76.

³² Pimentel, *La economía política*, p. 59. Véase también Otero, *Obras*, I, 26-32.

TERCERA PARTE

GUANAJUATO

*La verdadera comprensión es... en primer lugar
una experiencia o información sobre lo concreto.*

CARDENAL NEWMAN

CAPÍTULO VI

EL BAJIO

Cuatro días a caballo al norte de la ciudad de México llevaban al viajero a una planicie fértil y baja que ya en el siglo XVIII se llamaba el Bajío. Esta llanura se extiende de Celaya a León y está limitada al sur por el Lago de Yuririapúndaro y al norte por una sierra que interrumpe abruptamente el plano paisaje circundante. Es precisamente en estas montañas donde se halla la ciudad minera de Guanajuato, conectada con la llanura mediante el angosto valle descendente de un río. Antes de la Conquista española, esta región se encontraba fuera tanto del imperio azteca como del tarasco, y estaba habitada por chichimecas salvajes de las tribus cuachichile, guamare y pame¹. Para fines de la época colonial el Bajío era renombrado tanto por la fertilidad de su suelo como por el número y la riqueza de sus ciudades; únicamente el Valle de México le superaba en densidad de población².

Las fases exactas de la colonización de la región no han sido identificadas, pero las pruebas documentales de que disponemos indican que no fue sino hasta el siglo XVIII que se convirtió en el centro económico de la Nueva España, porque la colonización primitiva fue tentativa, y principalmente tuvo el objeto de ocupar y proteger los territorios casi despoblados que se extendían entre el Valle de México y el norte, rico en minería. San Felipe (1562), San Miguel el Grande (1555) y León (1585) fueron establecidos como guarniciones contra los indígenas chichimecas aun belicosos, y para servir de estaciones en el largo camino que conducía hacia el norte, hasta Zacatecas y Durango³. Casi al mismo tiempo un cacique otomí

¹ Wigherto Jiménez Moreno, *Estudios de historia colonial* (México, 1958), p. 57.

² Eric R. Wolf, 'The Mexican Bajío in the 18th Century: An Analysis of Cultural Integration', *Synoptic Studies of Mexican Culture*, ed. Munro S. Edmundson (Nueva Orleans, 1957), *passim*.

³ Jiménez Moreno, *Estudios*, pp. 57, 81-2, 89.

llamado don Fernando de Tapia, fundó la ciudad de Querétaro ⁴. También llegaron a establecerse algunos indígenas tarascos de Michoacán. Sin embargo, la ulterior prosperidad del Bajío tuvo su origen en el decenio de 1550-60, cuando se delimitó en las montañas un pequeño campo minero llamado Santa Fe de Guanajuato ⁵. Se cerró el círculo de la colonización al fundarse Celaya en 1571 como centro de producción agrícola.

Durante el siglo siguiente la región fue más conocida por su agricultura que por sus minas. Mientras Celaya recibió el título de ciudad en 1655, Guanajuato no alcanzó ni siquiera el de villa hasta 1679 ⁶. La población del campo minero era igualmente pequeña; fue estimada en 4 000 habitantes en 1600 y se incrementó lentamente hasta alcanzar los 16 000 en 1700 ⁷. De la misma manera, su producción de plata no alcanzó importancia hasta las últimas décadas del siglo. En la distribución de mercurio de 1636 se asignó a Guanajuato el 7.2 por 100 del total, en comparación con la tercera parte que se destinó a Zacatecas. Además, la comparación de la masiva pero sencilla parroquia de Guanajuato, construida en los años 1671-96, con su equivalente zacatecano, de un espléndido barroco, construido casi en el mismo periodo, nos revela que Guanajuato seguía siendo muy provinciana ⁸.

Sin embargo, ya en el siglo XVIII el Bajío se había convertido en una zona intermedia muy próspera y bien diferenciada tanto de las despobladas sierras y campos mineros aislados del norte, como de los valles del centro, donde las comunidades indígenas se alternaban con los latifundios. En primer lugar tenía una población principalmente mestiza y muy urbanizada, además de que sus poblaciones eran industriales: Querétaro y San Miguel Allende eran los centros productores de telas de lana más importantes de la Nueva España; Celaya y Salamanca tejían el algodón; León producía artículos de piel; y Guanajuato se había convertido en el centro productor de plata más importante de México. Con tan amplio mercado urbano que aprovi-

⁴ José María Zela e Hidalgo, *Glorias de Querétaro* (México, 1803), p. 147.

⁵ Lucio Marmolejo, *Efemérides guanajuatenses* (4 vols.; Guanajuato, 1884), I, 145-166.

⁶ Silva Herzog, *Documentos*, p. 75; José Guadalupe Romero, *Noticias para formar la historia y la estadística del obispado de Michoacán* (México, 1862), p. 157; Marmolejo, *Efemérides*, I, 102.

⁷ Manilla Tascón, *Minas de Almadén*, p. 223.

⁸ Marmolejo, *Efemérides*, I, 212, 226.

sionar, la agricultura de la región prosperó enormemente, siendo precisamente esta combinación de urbanización, industria textil, minería y agricultura lo que hacía del Bajío una zona excepcional no sólo en México, sino en toda la América española.

II

Sin una fuerza de trabajo numerosa y móvil, el progreso económico de la región habría sido imposible. Al mismo tiempo, la amplia gama de posibilidades de empleo o atraía inmigrantes de Michoacán y del centro, o en cambio ofrecía un medio particularmente propicio para el incremento demográfico natural. Cualquiera que haya sido la causa, el hecho es que la población de los cinco distritos que más tarde formaron la intendencia de Guanajuato, creció con mayor rapidez que en los valles centrales o en el sur. Mientras que para la Nueva España en su conjunto el crecimiento demográfico entre 1742 y 1793 fue aproximadamente del 33 por 100, en la intendencia de Guanajuato alcanzó el 155 por 100. En 1742 el territorio de la intendencia estaba poblado por el 4.6 por 100 de los habitantes de la Nueva España, pero este porcentaje se incrementó al 9.4 hacia 1793⁹. Es difícil encontrar las razones de este fantástico aumento. Los registros parroquiales sugieren que en gran parte se debió a que los nacimientos claramente superaban a las defunciones, y parece que ni siquiera la *gran mortandad causada por las grandes hambres y epidemias de 1759-60, 1779-80 y 1784-6* afectaron esta tendencia favorable. Los datos de la tabla 22 y la figura 2 indican mejor estas tendencias¹⁰.

Por supuesto que de estas cifras dispersas no se puede sacar en claro gran cosa. Una persona tenía más probabilidades de ser cristianamente bautizada, que de ser enterrada con solemnidad; además, durante los años de hambre muchos indígenas y peones vagaban en

⁹ Con relación a 1742 véase Gerhard, *México en 1742*, pp. 21-8; a 1793, véase AGN, Historia 523, f. 88; y a 1810, véase Navarro y Noriega, *Memoria*, hoja plegable, p. 30.

¹⁰ En lo relativo a los distritos, véanse las referencias en la nota 9. Las cifras parroquiales fueron tomadas de Humboldt, *Ensayo político*, p. 40; las cifras de Querétaro, de BN (Madrid) MSS 18636, informe elaborado por los curas párrocos de Querétaro, 10 julio 1802. Respecto a los datos de la gráfica relativa a Marfil sobre bautismos y entierros, véase AHG, Insurgencia 1812-14, informe del párroco de Marfil Lic. José Ignacio Franco, 10 mayo 1813.

TABLA 22

POBLACION DE LA INTENDENCIA DE GUANAJUATO, CON VARIOS REGISTROS DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, 1742-1812

<i>Intendencia de Guanajuato</i>	<i>Población</i>		
	1742	1793	1810
<i>Alcaldías mayores:</i>			
Guanajuato	48 750	114 344	—
León	16 970	54 952	—
Celaya	55 200	141 918	—
San Miguel	23 800	55 965	—
San Luis de la Paz	11 420	30 745	—
	156 140	397 924	576 600
<i>Registros parroquiales 1797-1802</i>	<i>Nacimientos</i>	<i>Muertes</i>	<i>Incremento</i>
Ciudad de Guanajuato	12 666	6 294	6 372
Marfil	3 702	1 904	1 798
Santa Ana	3 629	1 857	1 772
<i>Jurisdicción de Querétaro</i>			
14 enero 1784 a 13 abril 1795 (6 años 3 meses)	44 179	13 759	20 420
1 enero 1796 a 13 diciembre 1801 (6 años)	40 024	24 308	15 716
<i>Dolores Hidalgo</i> 1756-1801	61 258	24 123	37 135
<i>Marfil</i> 1743-1812	53 594	21 680	31 914

busca de comida por los campos y morían sin atención en zonas despobladas. Tal movilidad distorsiona, si no es que lo destruye, el valor de las listas parroquiales. De todas maneras sirven de indicación útil, como la paja que señala la dirección del viento.

El grado de urbanización, aunque difícil de calcular, era notablemente alto. En 1790 la ciudad de Querétaro tenía casi 30 000 habitantes y San Juan del Río 6 173 ¹¹. Guanajuato tenía 32 000 personas en su centro, pero si le agregamos la población de los centros mineros y de beneficio que se encontraban dentro de un radio de cinco kilóme-

¹¹ José Antonio del Raso, *Notas estadísticas del departamento de Querétaro, año de 1845* (México, 1846), p. 97.

tros, que en realidad eran casi suburbios de la ciudad, el total alcanza la cifra de 55 000 ¹². Carecemos de cifras exactas en lo relativo a las ciudades de Celaya, San Miguel y León, pues las que tenemos se refieren a sus distritos, pero Celaya posiblemente tenía más de

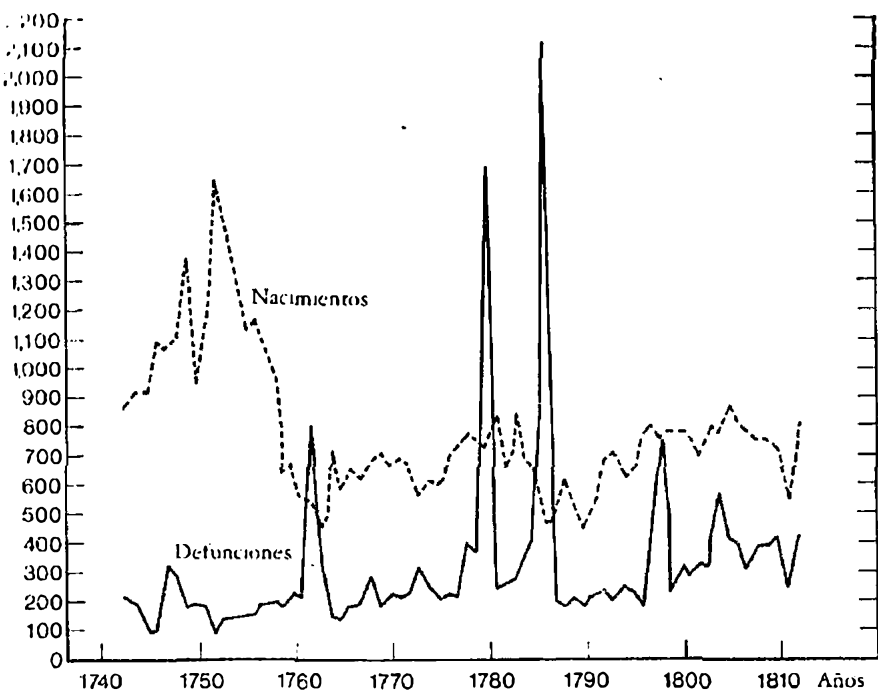


Figura 2. Nacimientos e inhumaciones registrados en la parroquia de Marfil, Guanajuato, 1743-1811.

20 000 habitantes y San Miguel por lo menos 12 000; León era mucho más pequeña, pues en 1781 no llegaba a 6 000 ¹³. Además de estos centros urbanos importantes el Bajío contaba con un gran número de poblaciones menores, tales como Irapuato, Silao, Salamanca, Salvatierra, Acámbaro, San Felipe y Dolores Hidalgo. Quizá sea razonable suponer que hacia 1793 cerca de un tercio de la población de la intendencia de Guanajuato vivía en poblados de más de

¹² AGN, Historia 523, f. 88.

¹³ Romero, *Noticias*, p. 190. Pero se dice que para 1810 la población de León había aumentado a los 18 000 habitantes.

5 000 habitantes. Un porcentaje similar era aplicable a la zona del corregimiento de Querétaro.

Siendo esta la situación, no es de sorprender que en el Bajío predominara la población mestiza. Un resumen extractado de los sumarios publicados del censo de 1792 ilustra las proporciones ¹⁴.

POBLACION DE LA INTENDENCIA DE GUANAJUATO, 1793

Españoles	103 584	(26.1 %)
Mulatos	72 281	(18.2 %)
Castas	46 982	(11.5 %)
Indígenas	175 182	(44.2 %)
	398 029	(100.0 %)

Como la mayoría de las personas consideradas como españoles indudablemente tenían alguna mezcla de sangre indígena o africana, podemos entonces dar por hecho que el Bajío, hacia fines del siglo XVIII, había logrado lo que otras provincias alcanzarían mucho más tarde: la formación de una población predominantemente mestiza, estando ya los indígenas en minoría. Además, las pruebas que han llegado hasta nosotros indican que la población indígena estaba considerablemente hispanizada y en camino de perder su identidad como grupo cultural separado.

Históricamente los otomíes y tarascos del Bajío eran grupos colonizadores que habían fundado pueblos organizados en número relativamente escaso. En 1810 aparecen en las listas únicamente 62 pueblos de esta especie, y en el censo de 1793 no se mencionaban más que 37 ¹⁵. Además, como lo reveló una encuesta hecha en 1797, estos pueblos conservaban muy pocas tierras comunales. En San Felipe y en Dolores no quedaban pueblos que tuvieran ni fondos comunales ni siembras de milpas comunes. En la zona de San Luis de la Paz había cuatro pueblos que conservaban algo de tierra, pero los cuatro estaban litigando con los terratenientes locales sobre la posesión de dichas tierras. Más hacia el Sur, en la región de Salamanca, los dos pueblos que todavía eran propietarios de tierras las daban en alquiler, y en Salvatierra, la pequeña extensión que pertenecía a dos pueblos cercanos, no producía nada. Ni en Celaya, ni en las poblaciones

¹⁴ AGN, Historia 523, f. 88.

¹⁵ AGN, Historia 523, f. 75.

menores de su jurisdicción, tales como Apaseo, Jerécuaro o Chamacuero, tenían tierras los indígenas. En León, los 702 tributarios de San Francisco del Rincón carecían de tierras comunales. De San Miguel el Grande se informaba: «no hay repartimientos entre los indios laboríos que viven en las haciendas y ranchos de la comprensión y los que habitan en esta villa se mantienen con la industria de artesanos»¹⁶.

La debilidad de los pueblos era demostrada, además, por el método particular de recaudación de tributos que se empleaba en el Bajío. En 1776 el alcalde mayor de San Miguel el Grande se quejó de que «por ser aquella jurisdicción la única en que el todo de sus tributarios se compone de vagos, sin que haya medio que baste a reducirlos que pague en pueblos como se acostumbra en todo el reino»¹⁷. Casi al mismo tiempo, el alcalde mayor de Guanajuato señalaba que el número de tales vagos —tanto trabajadores migratorios como aparceros— iba en aumento, y «cuyo tributo no es pagado ni por su pueblo ni por su hacienda». Sugirió que se hiciera a los hacendados de la localidad responsables de la recaudación del tributo¹⁸. Fue en vista de estas quejas que el virrey Bucareli concedió a los alcaldes mayores de Guanajuato, León, San Miguel y Celaya una comisión del 9 por 100 sobre todos los tributos que recaudaran directamente de los individuos particulares, a diferencia de los que pagaban los pueblos y haciendas¹⁹. Para fines de siglo la mayor parte de los indígenas de la intendencia de Guanajuato estaban clasificados como vagos, es decir, unos 168 879 contra 76 852, cuyo tributo era recaudado por sus pueblos²⁰. Si esta proporción se compara con la que existía en la vecina intendencia de México, donde de un total de 982 621 indígenas sólo 13 554 estaban clasificados como vagos, se nos revela claramente la naturaleza particular de la población indígena del Bajío.

Otras pruebas, más literarias, apuntan en la misma dirección. Juan López de Cancelada, que fue agudo observador y que había vivido en Silao, afirmó en 1811: «Los indios desde Querétaro para tierra adentro casi no se distinguen de los demás castizos, ni en presencia

¹⁶ AGI, México 1454, Riaño al Virrey, 25 septiembre 1797.

¹⁷ AGI, México 1378, Bucareli a Gálvez, 24 febrero 1777.

¹⁸ AGI, México 1370, Baltazar de Bersabal al Virrey, 9 marzo 1771.

¹⁹ AGI, México 1370, Bucareli a Gálvez, 20 junio 1772.

²⁰ Wolf, *The Mexican Bajío*, p. 191.

ni en civilización»²¹. Sin embargo, parece que el proceso de aculturación era un fenómeno bastante reciente, y que tenía lugar más rápidamente en las ciudades que en el campo. José Villaseñor y Sánchez, en su *Theatro Americano*, estimó, en 1746, que en Marfil vivían mil familias tarascas; también observó que en Silao y en Irapuato existían grandes grupos de otomíes y tarascos²². Pero en 1779 el hospital que había en Guanajuato para esos grupos se encontraba en desuso porque los indígenas se habían «se mezclaron con los lobos y murieron los más de éstos o todos en la epidemia que se padeció el año de 1737»²³. El grado de aculturación es demostrado por un edicto municipal expedido en 1781 por el conde de La Valenciana, que en ese momento era alcalde en funciones de Guanajuato. Prohibió que los indígenas se vistieran a la europea, ya que por ello era difícil localizarlos para cobrarles el tributo, fomentándoles que se sintieran iguales a los mestizos y a los mulatos²⁴. Se sabe que el edicto fue derogado por el virrey, ya que la política real deseaba promover la forma europea de vestir para beneficiar a la industria española, pero el incidente ilustra claramente la mezcla de razas en aquella ciudad minera. Una implicación interesante de este edicto es que un «indígena» únicamente podía distinguirse de un «mestizo» si llevaba un vestido particular.

Si bien las comunidades indígenas carecían de estabilidad y de propiedades, no hay razón para suponer que los mestizos o la mayoría de los españoles estuvieran mejor. Pero, ¿a qué ocupaciones se dedicaba esta masa de trabajadores? El intendente elaboró un cuadro para el año 1793 que arroja cierta luz sobre este asunto²⁵ (véase tabla 23).

El cuadro es poco satisfactorio, porque no tenemos modo de saber lo que en realidad hacían los llamados jornaleros, ya que podían ser peones agrícolas, trabajadores ocasionales en las ciudades, o mineros eventuales. Además, los arrieros, cuyo número no era despreciable, fueron omitidos o incluidos en alguna categoría no especí-

²¹ López de Cancelada, *Rutina de la Nueva España*, p. 70.

²² José Antonio Villaseñor y Sánchez, *Theatro americano* (2 vols.; México 1746-8), II, 41.

²³ BN (Madrid) MSS 17.618. Venta de las tierras jesuitas en Guanajuato, Vicente Herrera a Gálvez, 26 abril 1785.

²⁴ AGI, México 1396, Mayorga a Gálvez, 14 febrero 1782.

²⁵ AGN, Historia 523, ff. 76, 90.

TABLA 23

DISTRIBUCION DE OCUPACIONES EN LA INTENDENCIA
DE GUANAJUATO (h. 1793)

<i>Ocupación</i>	<i>N.º de personas empleadas</i>	<i>Porcentaje</i>
Agricultores	53 867	48.7
Mineros	9 369	8.5
Comerciantes	1 031	0.9
Fabricantes (trabajadores industriales)	10 753	9.8
Artesanos	16 605	14.9
Jornaleros	17 680	15.9
Empleados públicos y militares	250	0.2
Profesionales	272	0.2
Religiosos	299	0.2
Nobleza e hidalgos	807	0.7
<i>Población total que trabajaba</i>	<i>110 933</i>	<i>100.0</i>
<i>Población total</i>	<i>388 029</i>	
<i>Porcentaje que trabajaba del total</i>		<i>28.6</i>

ficada. La distinción entre fabricantes y artesanos probablemente denota una diferencia como la que existe entre un tejedor y un sastre o entre un curtidor y un zapatero. Sin embargo, lo que el cuadro no demuestra es la naturaleza relativamente compleja de la economía del Bajío. Contrariamente a lo que se piensa de ciertas sociedades «tradicionales», la agricultura empleaba cuando más el 60 por 100 de la fuerza de trabajo y quizá aun el 50. Por otra parte, la industria, incluyendo en ella a la minería, daba ocupación aproximadamente al 18 por 100 de la totalidad de los trabajadores. Igualmente notable es la pequeñez del número de personas de las que se puede decir que pertenecían a la *élite*, por todo, no podían haber llegado a más del 3 por 100 de la población total.

No hay razones para suponer que esta distribución de ocupaciones no cambiara, porque los trabajadores fácilmente podían conseguir empleos eventuales en muy distintas actividades. Un breve examen de la economía del Bajío nos demostrará, tanto la movilidad de la mano de obra como la interdependencia de sus diversos sectores. La agricultura, que absorbía por lo menos la mitad de la fuerza de trabajo, estaba especialmente organizada en forma de una estructura

flexible. El intendente, en 1793, consideró las siguientes divisiones ²⁶.

Pueblos	37
Estrancias	29
Haciendas	438
Ranchos dependientes	1 046
Ranchos independientes	360

Como los pueblos indígenas tenían muy pocas tierras comunales, sus habitantes seguramente trabajaban, en compañía de trabajadores mestizos y mulatos, en haciendas o ranchos. Las unidades de producción, pues, se reducían a esas dos categorías principales, pero como la mayoría de los ranchos se clasificaban como dependientes, es claro que la razón de ello era que muchos hacendados preferían dividir y dar en alquiler una gran parte de sus propiedades. Actualmente todavía carecemos de pruebas que nos permitieran afirmar qué tan común era esta práctica, pero sabemos que en 1772 el mariscal de Castilla José Pedro de Luna, dueño de tres grandes haciendas llamadas La Rosita, en la jurisdicción de San Miguel, Las Arandas, en Guanajuato, y Nuestra Señora de la Concepción, en Piedra Gorda, no se ocupaba de cultivar directamente ninguna de sus propiedades ²⁷, sino que daba en alquiler estas haciendas a unos 594 arrendatarios, que pagaban rentas variables, desde ocho hasta 550 pesos anuales; recibía de ellos un total de 21 820 pesos. Muchos arrendatarios subarrendaban parcelas menores, y casi todos empleaban peones y trabajadores de temporada. El administrador de los negocios del mariscal se quejaba de que, con frecuencia, ignoraba el número de personas que vivían en esas tierras.

Este ejemplo no debe aceptarse necesariamente como típico, porque aunque el arrendamiento de tierras era claramente una práctica normal, muchos hacendados se dedicaban a cultivar la tierra directamente. Esto era especialmente cierto de los dueños de minas, haciendas de beneficio y talleres de tejido, casos en que los hacendados realizaban una especie de integración vertical. De sus haciendas obtenían materias primas—maíz para las mulas y hombres y lana para sus telares—, de manera que la hacienda existía, tanto para alimentar a la población urbana como para servir a la industria.

²⁶ Véase más arriba y AGN, Historia 523, f. 76.

²⁷ AGI, México 1370, informe del administrador, 4 febrero 1772.

Si los mercados eran extensos, el suministro era todavía más abundante. Las fértiles llanuras del Bajío producían los cultivos básicos de México en grandes cantidades. En la jurisdicción de Celaya la producción media de maíz iba de 100 a 150 granos por cada uno que se sembraba. El trigo daba menos: de 40 a 50 granos por uno en tierras de riego ²⁸. El chile, el frijol, las frutas y los pastos para el ganado completaban el cuadro. En cuanto a productos tropicales, Guanajuato era dependiente de la tierra caliente de Michoacán, donde, en 1793, según cálculos del intendente local, se producían tres millones de libras de azúcar al año, cantidad de la que la mitad se vendía en Guanajuato ²⁹. Esto daba a la intendencia un consumo anual «per cápita» de cuatro libras de azúcar.

Carecemos de cifras exactas, tanto en relación al valor como al monto de la producción agrícola del Bajío, ni tampoco poseemos series continuas de precios. Dada la fertilidad de su suelo y la proximidad de su mercado parece razonable suponer que los precios fueran algo más bajos que en la ciudad de México. Una fuente de 1808 afirmaba que en la intendencia de Guanajuato se sembraban unas 26 160 fanegas de maíz ³⁰. Si la producción en granos era de cien por uno, esta cantidad produciría una cosecha de unos tres millones de fanegas, con valor de tres a seis millones de pesos. Como para entonces el consumo anual de la ciudad de Guanajuato—incluyendo el de sus 14 000 mulas—ascendía a 400 000 fanegas, esta estimación no parece exagerada ³¹. Un cálculo algo posterior relativo al vecino estado de Querétaro dio la cifra de 624 880 fanegas de maíz como producto de esa árida provincia ³².

No obstante, a pesar de su fertilidad, el Bajío sufría ocasionalmente los efectos de una mala cosecha causada por una sequía o por una helada. Durante tales períodos los precios del maíz podían aumentar excesivamente. Cuando se llegaba a los 20 reales por fanega, las haciendas de beneficio que dependían de las mulas como fuerza motriz comenzaban a suspender el trabajo ³³. Si los precios subían

²⁸ Humboldt, *Ensayo político*, pp. 251, 257; véase también Raso, *Notas estadísticas*, p. 37.

²⁹ AGI, México 1887, informe del intendente de Michoacán a Revillagigedo, 4 octubre 1794.

³⁰ Romero, *Noticias*, p. 29.

³¹ AGI, México 2213, Marquina a Soler, 27 julio 1801.

³² Raso, *Notas estadísticas*, p. 38.

³³ AGI, México 1418, Ayuntamiento de Guanajuato al Virrey, 10 octubre 1785.

aún más, entonces miles de personas de las clases pobres podían morir. Los años de 1785-6 fueron especialmente desastrosos. En Guanajuato los precios subieron hasta cinco pesos la fanega de maíz. El ayuntamiento pidió 165 000 pesos prestados para fomentar los cultivos en tierra caliente y en tierras de riego, y para comprar cualquier existencia sobrante de grano que pudiera encontrar ³⁴. A pesar de estas medidas extraordinarias, el clero de la ciudad estimó que unas 19 000 personas murieron sólo en el año 1786, nada menos que el 35 por 100 de la población. Otras poblaciones se vieron igualmente afectadas. San Miguel perdió a 3 356 personas; Celaya, a 4 049; León, a 3 794, y así sucesivamente. En total la intendencia sufrió 64 000 defunciones durante el año de 1786, pero los párrocos que daban estas cifras hacían hincapié todos en que muchos cientos más habían expirado en el campo y en otros lugares. Por ejemplo, el vicario de Salvatierra registró 2 460 entierros, pero calculaba que en su parroquia probablemente habían fallecido unas 6 000 personas ³⁵. De cualquier forma, la proporción de muertes en relación a la población total ascendió por lo menos a la quinta parte.

Tales crisis eran mucho más devastadoras porque una proporción considerable de la población urbana trabajaba en la floreciente industria textil de la región. En 1804, el corregidor de Querétaro contó 18 fábricas (obrajes) y 327 talleres (trapiches) en esa ciudad, teniendo el primer grupo 280 telares, y el segundo, cerca de 1 000. Las firmas mayores tejían la lana en forma de ponchos, mantas, sargas y sarapes, mientras que las de menos importancia producían manta de algodón. Además había otros 35 talleres que hacían sombreros y 10 que producían artículos de piel y gamuza. Las estimaciones del número de personas que trabajaban en esta industria eran variables ³⁶. En 1803, los dueños de fábricas reconocieron que tenían a más de 2 000 hombres encerrados dentro de los muros de sus establecimientos, que casi parecían prisiones ³⁷. Ese mismo año, el Corregidor declaró que unas 9 000 personas de uno y otro sexo se ocupaban de hilar,

³⁴ AGN, Minería 18-8, informe de Manuel García de Zeballos, 28 marzo 1786.

³⁵ ACM, 598, contiene informes de todas las parroquias de la intendencia de Guanajuato; todos dan cifras precisas con excepción de la ciudad de Guanajuato, sobre la que no se da más que una simple estimación.

³⁶ Zelaa e Hidalgo, *Glorias de Querétaro*, p. 5. BM, Add. MSS 17 557, ff. 147-9. Informe del Corregidor, Lic. Miguel Domínguez, 1804.

³⁷ AGI, México 1809, Iturrigaray a la Corona, 27 julio 1806.

tejer y acabar telas. La industria consumía un promedio anual de un millón de libras de lana, y el valor de su producción fue calculado más tarde en una cifra que superaba el millón de pesos al año ³⁸. Estas cifras, por otra parte, no incluían a los 3 000 trabajadores empleados por el monopolio del tabaco. La información relativa a los demás centros textiles del Bajío es particularmente escasa y, sin embargo, San Miguel el Grande, por ejemplo, era famoso por sus tapetes, alfombras, sarapes y telas finas de lana. A pesar de todo, la escala de su producción era mucho menor que la de su vecina, ya que nunca hubo en la población más de cuatro obrajes, y en 1802 su capacidad total ascendía únicamente a 318 telares ³⁹. En fin, aunque Celaya y Salamanca hilaban una gran cantidad de algodón, no se sabe casi nada de la organización de su industria.

Para las materias primas los fabricantes se dirigían a Nuevo León, Coahuila y Michoacán. En un año bueno esta última provincia vendía hasta medio millón de libras de algodón a la intendencia de Guanajuato, o sea, aproximadamente, una cuarta parte de su producción ⁴⁰. El Norte suministraba tanto lana como algodón. Muchos dueños de obrajes, tratando de lograr una integración vertical, compraban haciendas no sólo en las jurisdicciones de San Miguel y Querétaro, donde existían grandes rebaños de ovejas, sino también en el Norte, en las provincias de Nuevo León y San Luis Potosí. Esta tendencia, sin embargo, aumentaba el resentimiento que tenían los naturales de esas regiones ⁴¹. Se quejaban de que los comerciantes e industriales del Bajío las trataban como colonias, comprándoles o produciendo materias primas a precios bajos, enviándolas a Querétaro o a San Miguel para su aprovechamiento en las manufacturas y regresándolas en forma de producto elaborado para su venta con grandes utilidades en las ferias comerciales de Saltillo y San Juan de los Lagos ⁴². Cualquiera que haya sido la verdad de estas acusaciones, debemos recordar que existía un mercado muy rico a la vuelta de la esquina, por así decirlo, en la ciudad y poblados mineros de Guanajuato, cuyos 50 000 habitantes necesitaban vestirse y tenían suficiente dinero para

³⁸ Estas estimaciones varían considerablemente. Véase Raso, *Notas estadísticas*, pp. 57-61.

³⁹ Silva Herzog, *Documentos*, pp. 83-4.

⁴⁰ AGI, México 1887, intendente de Michoacán al Virrey, 4 octubre 1794.

⁴¹ AGN, *Boletín*, 2.ª serie, II (1961) 3, pp. 371-2.

⁴² Ramos Arizpe, *Memoria*, pp. 85, 89-92.

aún más, entonces miles de personas de las clases pobres podían morir. Los años de 1785-6 fueron especialmente desastrosos. En Guanajuato los precios subieron hasta cinco pesos la fanega de maíz. El ayuntamiento pidió 165 000 pesos prestados para fomentar los cultivos en tierra caliente y en tierras de riego, y para comprar cualquier existencia sobrante de grano que pudiera encontrar ³⁴. A pesar de estas medidas extraordinarias, el clero de la ciudad estimó que unas 19 000 personas murieron sólo en el año 1786, nada menos que el 35 por 100 de la población. Otras poblaciones se vieron igualmente afectadas. San Miguel perdió a 3 356 personas; Celaya, a 4 049; León, a 3 794, y así sucesivamente. En total la intendencia sufrió 64 000 defunciones durante el año de 1786, pero los párrocos que daban estas cifras hacían hincapié todos en que muchos cientos más habían expirado en el campo y en otros lugares. Por ejemplo, el vicario de Salvatierra registró 2 460 entierros, pero calculaba que en su parroquia probablemente habían fallecido unas 6 000 personas ³⁵. De cualquier forma, la proporción de muertes en relación a la población total ascendió por lo menos a la quinta parte.

Tales crisis eran mucho más devastadoras porque una proporción considerable de la población urbana trabajaba en la floreciente industria textil de la región. En 1804, el corregidor de Querétaro contó 18 fábricas (obrajes) y 327 talleres (trapiches) en esa ciudad, teniendo el primer grupo 280 telares, y el segundo, cerca de 1 000. Las firmas mayores tejían la lana en forma de ponchos, mantas, sargas y sarapes, mientras que las de menos importancia producían manta de algodón. Además había otros 35 talleres que hacían sombreros y 10 que producían artículos de piel y gamuza. Las estimaciones del número de personas que trabajaban en esta industria eran variables ³⁶. En 1803, los dueños de fábricas reconocieron que tenían a más de 2 000 hombres encerrados dentro de los muros de sus establecimientos, que casi parecían prisiones ³⁷. Ese mismo año, el Corregidor declaró que unas 9 000 personas de uno y otro sexo se ocupaban de hilar,

³⁴ AGN, Minería 18-8, informe de Manuel García de Zeballos, 28 marzo 1786.

³⁵ ACM, 598, contiene informes de todas las parroquias de la intendencia de Guanajuato; todos dan cifras precisas con excepción de la ciudad de Guanajuato, sobre la que no se da más que una simple estimación.

³⁶ Zelaa e Hidalgo, *Glorias de Querétaro*, p. 5. BM, Add. MSS 17 557, ff. 147-9. Informe del Corregidor, Lic. Miguel Domínguez, 1804.

³⁷ AGI, México 1809, Iturrigaray a la Corona, 27 julio 1806.

tejer y acabar telas. La industria consumía un promedio anual de un millón de libras de lana, y el valor de su producción fue calculado más tarde en una cifra que superaba el millón de pesos al año ³⁸. Estas cifras, por otra parte, no incluían a los 3 000 trabajadores empleados por el monopolio del tabaco. La información relativa a los demás centros textiles del Bajío es particularmente escasa y, sin embargo, San Miguel el Grande, por ejemplo, era famoso por sus tapetes, alfombras, sarapes y telas finas de lana. A pesar de todo, la escala de su producción era mucho menor que la de su vecina, ya que nunca hubo en la población más de cuatro obrajes, y en 1802 su capacidad total ascendía únicamente a 318 telares ³⁹. En fin, aunque Celaya y Salamanca hilaban una gran cantidad de algodón, no se sabe casi nada de la organización de su industria.

Para las materias primas los fabricantes se dirigían a Nuevo León, Coahuila y Michoacán. En un año bueno esta última provincia vendía hasta medio millón de libras de algodón a la intendencia de Guanajuato, o sea, aproximadamente, una cuarta parte de su producción ⁴⁰. El Norte suministraba tanto lana como algodón. Muchos dueños de obrajes, tratando de lograr una integración vertical, compraban haciendas no sólo en las jurisdicciones de San Miguel y Querétaro, donde existían grandes rebaños de ovejas, sino también en el Norte, en las provincias de Nuevo León y San Luis Potosí. Esta tendencia, sin embargo, aumentaba el resentimiento que tenían los naturales de esas regiones ⁴¹. Se quejaban de que los comerciantes e industriales del Bajío las trataban como colonias, comprándoles o produciendo materias primas a precios bajos, enviándolas a Querétaro o a San Miguel para su aprovechamiento en las manufacturas y regresándolas en forma de producto elaborado para su venta con grandes utilidades en las ferias comerciales de Saltillo y San Juan de los Lagos ⁴². Cualquiera que haya sido la verdad de estas acusaciones, debemos recordar que existía un mercado muy rico a la vuelta de la esquina, por así decirlo, en la ciudad y poblados mineros de Guanajuato, cuyos 50 000 habitantes necesitaban vestirse y tenían suficiente dinero para

³⁸ Estas estimaciones varían considerablemente. Véase Raso, *Notas estadísticas*, pp. 57-61.

³⁹ Silva Herzog, *Documentos*, pp. 83-4.

⁴⁰ AGI, México 1887, intendente de Michoacán al Virrey, 4 octubre 1794.

⁴¹ AGN, *Boletín*, 2.^a serie, II (1961) 3, pp. 371-2.

⁴² Ramos Arizpe, *Memoria*, pp. 85, 89-92.

comprar sus productos. Así, pues, en última instancia, aunque el Bajío tenía la ventaja de su posición geográfica sobre las líneas de comunicación y de transporte que unían al Norte con los valles centrales, su propia economía interna era notablemente autónoma.

III

Para los habitantes del Bajío los acontecimientos que tuvieron lugar en la década de 1760-70 marcaron una época en su educación política, en la que adquirieron una conciencia mucho mayor que antes de su situación colonial. En Guanajuato, el pueblo bajo recibió con enorme desagrado el nuevo régimen impuesto por José de Gálvez. Ya en julio de 1766 unas 6 000 personas trataron de saquear la caja real, gritando «¡Viva el Rey, y muera el mal Gobierno!». Protestaban contra la imposición de alcabalas sobre el maíz, la harina, la carne y la leña, contra los puros de baja calidad que el nuevo monopolio del tabaco quería venderles y contra la formación de una milicia en la cual se les podría obligar a servir. El ayuntamiento y el párroco lograron pacificar a los amotinados sólo cuando abandonaron el proyecto de establecer un regimiento de milicianos⁴³. No se encarceló ni se castigó en ninguna forma a los amotinados.

Un trastorno mucho más serio tuvo lugar al año siguiente, después del anuncio de que los jesuitas eran expulsados de México. En julio de 1767, «un gran número de trabajadores de las minas y de las haciendas de beneficio, junto con muchos vagos de la ciudad y de la región, se amotinaron, apedreando las sedes de la caja real, de los monopolios del tabaco y de la pólvora y muchos otros edificios». Durante más de tres días los amotinados controlaron las calles, obligando a los ciudadanos respetables a encerrarse en sus casas⁴⁴. No obstante, tanto ricos como pobres se unieron para deplorar la expulsión. Los jesuitas habían llegado a Guanajuato apenas durante la vida de la anterior generación, y las clases ricas habían hecho generosas donaciones para la construcción de su colegio y de su iglesia. Los trabajadores de las minas trabajaron sin paga para terminar la construcción. La espléndida nueva iglesia de la Compañía fue terminada y consagrada públicamente apenas en noviembre de 1765, y escasa-

⁴³ AHG, Insurgencia 1767, informe del notario municipal, 17 julio 1766.

⁴⁴ AHG, Insurgencia 1767, informe del alcalde mayor, 16 julio 1767.

mente un año y medio después la orden de que se les exiliara de América destruyó el fruto de la generosidad de los habitantes ⁴⁵.

Para José de Gálvez, los levantamientos que tuvieron lugar simultáneamente en Guanajuato, San Luis de la Paz y San Luis Potosí fueron señal de lo que él pensó era una extensa conjura jesuita. Más tarde, escribió al virrey Croix que «si tarda la expulsión de los negros enemigos muy pocos meses más, hubiera perdido la América o para conservarla tendríamos sus vasallos que regar la tierra con mucha sangre» ⁴⁶. Con el apoyo de los regimientos españoles que poco antes habían llegado a México, Gálvez sofocó la revuelta con una severidad sin precedentes. Solamente en Guanajuato se encarceló a 600 personas para interrogarlas, y de ellas mandó colgar a nueve, condenó a 31 a prisión perpetua en los presidios fronterizos, y sentenció a otras 148 a períodos de seis a diez años de cárcel ⁴⁷. Para impedir nuevos disturbios prohibió a los mineros que portaran armas de fuego, y a los indígenas que se vistieran a la española, e hizo responsables a los dueños de las minas del mantenimiento del orden entre los trabajadores, que «están inmediatamente sujetos a los administradores, sobresalientes y mandones, de unas y otras teniendo estos facultad de contenerlos y castigarlos domésticamente y por vía de corrección económica en los excesos que no sean graves y que no pidan autoridad de Justicia para su averiguación y castigo» ⁴⁸. Gálvez también abolió la exención del pago de tributos de que hasta entonces gozaban los trabajadores mineros indígenas y mulatos en la ciudad.

Con estas medidas Gálvez quería no únicamente castigar la revuelta, sino acabar con «el trastorno universal y escándalo desenfreno en que su plebe y minería se han mantenido muchos años». Escribió que «es indispensable establecer y vincular en este gran pueblo el respeto y la obediencia que hasta aquí no ha conocido a las órdenes superiores del alto Gobierno» ⁴⁹. El instrumento que escogió para consolidar este nuevo régimen fue el ejército. Gálvez aprovechó la oportunidad para reclutar a los ciudada-

⁴⁵ *Rasgo breve de la grandeza guanajuatense* (Puebla, 1767), p. 12; véase también Marmolejo, *Efemérides*, II, 108, 161, 170, 217.

⁴⁶ AGI, México 1365, Gálvez a Croix, 24 septiembre 1767.

⁴⁷ Priestley, *José de Gálvez*, pp. 223-5.

⁴⁸ AGI, México 1365, Croix a la Corona, 26 noviembre 1767.

⁴⁹ AGI, México 1365, Gálvez a Croix, 24 septiembre 1767.

nos respetuosos de las leyes de Guanajuato, San Miguel, León y San Felipe, en un nuevo regimiento, llado del Príncipe, que estaba compuesto por 1 700 hombres. Con satisfacción observó que «en esta ciudad, donde antes se opusieron por errados principios a la formación de milicias, han clamado ahora por tenerlos, con la experiencia repetida de que sin ellas vive el honrado vecindario a merced de la baja plebe y de la chusma de minería» ⁵⁰. Era claro que, eliminados los jesuitas, tenían que usarse nuevos métodos de control social.

Igualmente decisiva fue la creación de un pelotón permanente de 46 soldados para que patrullara las calles. Esta fuerza policiaca paramilitar fue más tarde ampliada a 75 hombres encabezados por cuatro sargentos. El ayuntamiento, que les pagaba de dos y medio a tres reales diarios, dependía de ellos «para contener los insultos de un pueblo tan numeroso como vicioso e insolente» ⁵¹. Parece que estas medidas tuvieron éxito, porque no ha llegado hasta nosotros ningún documento que mencione nuevos disturbios públicos en Guanajuato, hasta 1810, cuando las masas, finalmente, se vengaron.

Para equipar el regimiento y para mantener el piquete permanente Guanajuato tenía necesidad de un ingreso adicional. Gálvez impuso entonces una nueva alcabala municipal sobre todo el maíz y harina que entraran a la ciudad, cuyo resultado fue un aumento considerable en el precio de los alimentos. Cada carga de maíz pagaba entonces 2 1/2 reales de derechos y cada carga de harina cuatro. Para 1770 este impuesto, combinado con ciertos fondos de otro origen, producía a la ciudad un ingreso anual de más de 41 000 pesos, el cual era más que suficiente para financiar los nuevos institutos militares ⁵². El sobrante debía utilizarse, por decreto de Gálvez, para obras públicas y, especialmente, para la construcción de un camino pavimentado al poblado de Marfil, que era un centro de refinación de minerales.

Un cuadro que posteriormente elaboró el intendente, en 1800, indicaba el destino preciso de los ingresos municipales, muy acrecentados mediante los recursos mencionados. Para entonces los ingresos de la ciudad ascendían a 51 418 pesos, de los cuales, cuando menos, 45 813 procedían de las alcabalas sobre el maíz y la harina; las subastas

⁵⁰ AGI, México 1857, Gálvez a Arriaga, 25 octubre 1767.

⁵¹ AGI, México 1528, Azanza a Saavedra, 27 noviembre 1798.

⁵² Gálvez, *Informe general*, pp. 339-40.

de puestos en el mercado y de la plaza para las corridas de toros anuales producían el resto de esa cantidad ⁵³. Los gastos que con ella se hacían aparecen en la tabla 24.

La mayor parte de esta tabla se explica por sí sola. Los gastos en la milicia ascendían a unos 9 519 pesos, que era la mayor partida individual. Básicamente la ciudad se ocupaba de dos cosas: de conservar el orden público mediante el pago de una fuerza policiaca y sosteniendo una prisión, y en segundo lugar, de regular la venta y suministro de granos manteniendo una alhóndiga municipal.

TABLA 24

GASTOS ESTIMADOS DEL AYUNTAMIENTO
(h. 1 800)

<u>Salarios</u>	<u>Pesos</u>
Teniente letrado	1 000
Notario del Cabildo	500
Escribiente	50
Dos mozos del Cabildo	500
Abogado, consejero legal del Cabildo	200
Representante legal de los prisioneros	200
Abogado de los pobres	300
Doctor de la prisión	150
Cirujano de la prisión	150
Relojero de la parroquia	150
Administrador de la alhóndiga	700
Escribiente para la alhóndiga	208
Administradores de los graneros menores	1 000
Dos centinelas para el camino de Marfil	1 248
Dos guardias de alcabalas	900
Dos guardias de las presas	400
Dos guardias del depósito de leña y matadero	737
Verdugo y pregonero	100
Varios	710
	9 203
<u>Donativos:</u>	
A los franciscanos	100
A los berlemitas, para la escuela de primeras letras	300
Al Hospital de San Hipólito de México, para los enfermos guanajuatenses	200
Igualmente, al Hospital de San Lázaro de México	600
A la Academia de San Carlos	200
	1 400

⁵³ AGI, México 1463, Marquina a Caballero, 26 septiembre 1802.

	Pesos	Reales
<i>Festivales:</i>		
Misa dicha al Espíritu Santo antes de las elecciones	12	5
Procesión del Viernes Santo	97	5
Procesión del Corpus	250	5
Fiesta del Apóstol Santiago	100	
Fiesta de San Ignacio de Loyola	141	6
Misa de acción de gracias por el rey	63	2
Fiesta del Santísimo Sacramento	61	
Fiesta de la Virgen de Guadalupe	100	
Jueves Santo en la capilla de Guadalupe	50	
	876	7
<i>Gastos extraordinarios:</i>		
Renta de garita del centinela en Marfil	162	
Renta de la alhóndiga	240	
Renta de los granceros menores	144	
Gastos de limpieza de las presas	1 085	
Gasto de limpieza del río	1 690	4
Alimentación de los presos	1 071	1
Medicinas para los presos	688	6
Tuque de queda	50	
Salarios y mantenimiento de la milicia	7 779	
Uniformes de la milicia	1 500	
Uniforme del portero	28	
Sillas para el Cabildo	89	6
Mayordomo de ingresos, al 1.5 por 100 de comisión sobre todos los cargos	793	6
4 por 100 de los ingresos para la Contaduría General de Propios y Arbitrios	2 116	5
Escribiente de cuentas	129	4
Misa de rogativa	358	2
Reparación del cuartel de la milicia	300	3
Salario de los guardias de expedición de metales	51	
Recepción del intendente	431	1
Gastos del juez de Residencia	130	
Fondo para celebraciones reales	88	4
Medias annatas de la ciudad	23	4
Gastos postales del Cabildo y correspondencia	71	8
Costo de las demandas presentadas por la ciudad	1 413	1
Reparación de obras públicas	2 414	3
	23 470	2
Salarios	9 203	
Donaciones	1 400	
Festivales	876	7
Gastos extraordinarios	23 470	2
Gastos totales	34 950	1
Ingresos	52 918	
Superávit	17 967	7

Si bien Gálvez fue el iniciador de la militarización de la sociedad colonial, tocó al virrey siciliano Branciforte terminar esa obra. Bajo el gobierno de Revillagigedo varios regimientos de la milicia, incluyendo el del Príncipe, fueron disueltos por la muy convincente razón de que no servían para nada. Sin embargo, Branciforte, viendo en ello una gran oportunidad de malversar fondos, revivió a escala aun mayor las fuerzas de voluntarios de la Nueva España. Los coroneles de esos nuevos regimientos pagaron fuertes sumas por el grado, pues generalmente se esperaba que proporcionaran unos 40 000 pesos, que era lo que costaba equipar a 300 hombres. Hacía 1810, como resultado de las ambiciones locales y de la virreinal avaricia, el Bajío contaba nada menos que con cuatro regimientos de caballería y un batallón de infantería. Querétaro, Celaya y San Miguel formaron cada una un regimiento de caballería que tenía entre 350 y 400 hombres. La ciudad de Guanajuato mantenía un batallón de infantería, con 407 hombres, incluyendo sargentos, y contribuyó a la formación de un nuevo regimiento de caballería del Príncipe, al que también ingresaron hombres de León, Silao e Irapuato ⁵⁴. Los oficiales de esta pequeña brigada fueron reclutados entre los ricos del lugar, y comprendían tanto a gachupines como a criollos, comerciantes, mineros y terratenientes. El estado borbónico confiaba bastante ciegamente en que su generosa distribución de honores militares unificara a la *élite* colonial, especialmente a los jóvenes, colocándola al servicio de la Corona.

La lealtad militar de las clases altas se hizo más necesaria, porque, por otra parte, se ponía mayor presión sobre la población en su conjunto. Para fines del siglo, cada población del Bajío tenía, tanto un director como un contador de la oficina de recaudación de alcabalas y del monopolio del tabaco, funcionarios que, por supuesto, tenían a su servicio un numeroso grupo de guardias y de empleados. Además, se hizo más riguroso que antes el registro de indígenas y mulatos para cobrarles el tributo. En todo esto, la década decisiva fue la de 1770-80. Por ejemplo, en León, Rafael de Monterde y Antillón, comisionado por Gálvez para elaborar nuevas listas de tributarios, recaudó, en 1771, 19 000 pesos, en comparación con los 7 000 pesos que se recaudaban anteriormente ⁵⁵. El beneficio para Guanajuato fue muy

⁵⁴ AGI, Estado 23, Branciforte a Alcudia, 30 agosto 1795.

⁵⁵ AGI, México 1370, Bucareli a Arriaga, 26 junio 1772.

considerable después de la creación de las intendencias en 1786, pues, mientras antes de aquella fecha los tributos, alcabalas y ganancias del monopolio del tabaco de los demás distritos eran despachados directamente a México, después de la promulgación de las ordenanzas todo ese dinero ingresaba a la tesorería de Guanajuato. Como muchos recaudadores de impuestos preferían finiquitar sus cuentas mediante la expedición de libranzas giradas contra comerciantes o mineros de Guanajuato, este tráfico de documentos ayudó a convertir a la ciudad en el centro no sólo administrativo, sino también financiero de la provincia. Una comparación de las cuentas de la caja real de 1742 y de 1793 demuestra mejor el cambio en el sistema fiscal. Debe hacerse notar, sin embargo, que los pagos del monopolio del tabaco variaban grandemente de un año a otro ⁵⁶ (véase tabla 25).

TABLA 25

INGRESOS DE LA TESORERIA DE GUANAJUATO EN 1742 y 1793
(en pesos)

	1742		1793
	Ingresos		Ingresos
Plata amalgamada (*)	167 068	Plata amalgamada (**)	515 811
Plata fundida (*)	87 317	Plata fundida (**)	89 226
Oro amalgamado	42 092	Oro amalgamado	1 295
Oro fundido	10 891	Oro fundido	648
Ventas de mercurio	179 617	Mercurio castellano	68 481
Transporte de mercurio	3 747	Mercurio alemán	208 600
Media anata	1 336	Transporte de mercurio	15 727
Papel sellado	2 016	Tributos	70 786
Aguardiente doméstico	147	Alcabalas	190 869
Varios	10	Monopolio del tabaco	94 702
		Varios	62 406
	494 241		1 318 551

(*) Diezmo, 1 por 100 y monedaje.

(**) Diezmo y 1 por 100.

⁵⁶ AGI, México 2122, contabilidad de la caja real de Guanajuato, 1742. AGI, México 2125, contabilidad de la caja real de Guanajuato, 1793.

Para 1792, la ciudad de Guanajuato por sí sola tenía unos 50 oficiales de recaudación fiscal. De ellos, la caja real tenía 17, que eran: un contador, un tesorero, tres ayudantes, dos escribientes, un portero y otras ocho personas, que estaban a las órdenes del ensayador en jefe. Aparte de los dos funcionarios mayores, sólo tres peninsulares. En la recaudación de alcabalas la situación era idéntica, donde el director, el contador, cuatro guardias y un escribiente eran españoles *peninsulares*, mientras que los otros nueve guardias eran *criollos*. También en el monopolio del tabaco el director, el recibidor, un guardia y dos tercianistas eran peninsulares, mientras que los cuatro vendedores de los pueblos mineros cercanos y un guardia eran naturales de América. En fin, podemos hacer notar que los tres recaudadores de tributo eran *criollos* ⁵⁷.

El establecimiento de la intendencia de Guanajuato hizo de esa ciudad la capital política de una provincia que comprendía las cinco antiguas alcaldías mayores de San Miguel, Celaya y Salvatierra, San Luis de la Paz, Guanajuato, y León. Querétaro formaba parte de la intendencia de México, pero en 1793 el virrey nombró a un corregidor de letras para que gobernara esa ciudad; éste fue el único puesto de su especie en la Nueva España. Hasta entonces Guanajuato había sido gobernada por militares, capitanes a media paga que esperaban hacerse ricos, pero que al llegar se daban cuenta de que la ciudad ofrecía muy pocas oportunidades de obtener ganancias a sus magistrados. El alcalde mayor no podía emprender un repartimiento de comercio, porque existía un activo grupo de comerciantes. Los frutos de la justicia eran absorbidos principalmente por los magistrados municipales, y después de 1768 la diputación minera se encargó de la recaudación de tributos. Los medios normales de ingresos se habían hecho tan insignificantes, que en 1770 el Cabildo asignó mil pesos anuales de fondos municipales para la manutención de su presidente. Cuando en 1782 el capitán Manuel de Sello y Somoza, hijo de una distinguida familia malagueña, fue nombrado alcalde mayor, se encontró con que los cargos del puesto ascendían a 200 pesos, y que sólo recibía 600 del Cabildo porque los otros 400 habían sido asignados a la viuda de un antiguo magistrado ⁵⁸.

⁵⁷ Cálculos hechos según AGN Padrones, 30-3.

⁵⁸ AGI, México 1859, Ayuntamiento al Virrey, 17 noviembre 1770; AGI, México 1871, Sello y Somoza a Gálvez, 22 septiembre 1782.

Los subdelegados, que reemplazaron a los alcaldes mayores en todas partes excepto en la ciudad misma de Guanajuato, no eran muy distintos de sus predecesores. En su mayor parte siguieron siendo una mezcla de militares peninsulares en reserva y unos cuantos criollos ricos. Por otra parte, la creación de tres nuevas subdelegaciones redujo el valor de los distritos de León y de San Miguel, de manera que únicamente Celaya ofrecía ciertas posibilidades de obtener ganancias. En 1792 el intendente envió una lista de las ganancias de los subdelegados ⁵⁹ (véase tabla 26).

TABLA 26
INGRESOS DE LOS SUBDELEGADOS DE LA INTENDENCIA
DE GUANAJUATO EN 1792
(en pesos)

	5 % de los Tributos	Honorarios por justicia y co- misiones del cargo
Celaya, con Salvatierra, Salamanca y Valle de Santiago	2 267	500
San Miguel y San Felipe	478	100
Dolores	205	700
León	688	45
Pidragorda	508	—
Pénjamo	420	—
San Luis de la Paz	452	250

Muy poca información sobre los subdelegados puede entresacarse, aparte de los que ocuparon el puesto en Celaya. Esa ciudad fue gobernada en 1791-6 y en 1802-7 por el capitán José Belloquín, riojano que llegó a la Nueva España para preparar a la milicia montada de Querétaro ⁶⁰. Después de su segundo período en el gobierno de Celaya obtuvo la subdelegación de San Miguel el Grande, donde permaneció hasta 1810. En el período de 1796-1802 Celaya fue gobernada por Antonio Pedro de Septién Montero y Austri, alférez real de Querétaro, criollo rico, que pertenecía a una distinguida familia de la localidad ⁶¹. Su hijo Manuel de Septién y Primo, después

⁵⁹ AGI, México 1579, Riaño al Virrey, 6 agosto 1792.

⁶⁰ AGI, México 1975, Belloquín a la Corona, 21 abril 1809.

⁶¹ AGI, México 1790, Marquina a Caballero, 26 junio 1802.

de ser lugarteniente general de su padre, fue nombrado subdelegado de San Luis de la Paz ⁶².

Para la ciudad de Guanajuato la reforma de 1786 significó una gran diferencia. Como capital provincial, residía en la ciudad el intendente, que era un gobernador semipermanente y con amplios poderes, gran prestigio, y un sueldo de 6 000 pesos. Sus ayudantes eran un lugarteniente legal y un abogado titulado, cuyo salario de 1 500 pesos se pagaba en su mayor parte con fondos municipales. Los dos intendentes, Andrés Amat y Tortosa (1786-90) y Juan Antonio de Riaño (1792-1810) fueron peninsulares que pertenecían a las fuerzas armadas. Amat, que era teniente coronel de artillería, había estado de servicio en las Islas Canarias, donde trató de publicar «un semanario variado, especie de enciclopedia elemental». En Guanajuato hizo poca cosa, y en 1790 se volvió loco tratando de pegarse un balazo ⁶³. Su lugarteniente legal, de nombre José Soriano, abogado peninsular que al tomar posesión del cargo ya tenía sesenta y tres años, era perezoso y muy pronto fue conocido por su venalidad. Riaño, claramente con una mala impresión de él, escribió al final de su hoja de servicios: «Aptitudes - escasas; talento - dudoso; conducta - regular aplicación - ninguna» ⁶⁴.

No obstante, Soriano no era un funcionario mayor típico de los que Riaño encontró en Guanajuato a su llegada. El contador de la caja real, por ejemplo, de nombre Ramón Gutiérrez del Mazo, fue comisionado en 1787 para introducir a la Nueva España el sistema de contabilidad por partida doble. Fue el contador interino de la ciudad de México, donde el virrey Revillagigedo lo elogió con entusiasmo ⁶⁵. Siendo un hombre evidentemente capaz, el virrey Iturrigaray lo escogió más tarde para que dirigiera la fábrica de tabaco de la capital. Su mayor recompensa la recibió en 1810, cuando fue nombrado intendente de México. Gutiérrez del Mazo fue más tarde jefe de otras dependencias fiscales, y conservó el puesto hasta 1824, bastante tiempo después de la independencia ⁶⁶. Su colega el tesorero

⁶² AHGP, Cabildo, 25 febrero 1803.

⁶³ AGI, México 1883, Viuda de Amat a la Corona, 8 abril 1791; *Jorellanos en la real academia de la historia* (Madrid, 1911), pp. 206-8; AGI, México 1973, Revillagigedo a Valdés, 3 julio 1790.

⁶⁴ AGI, México 1793, Revillagigedo a Lerena, 27 mayo 1791; AGI México 1555, Revillagigedo a Gardoqui, 30 octubre 1793.

⁶⁵ AGI, México 1532, Revillagigedo a Lerena, 29 octubre 1790.

⁶⁶ AGI, México 1975, toma de posesión como intendente, 26 mayo 1810.

Norberto de Corres fue menos distinguido. Antes de llegar a Guanajuato había sido empleado de correos en La Habana, y de las cajas reales de Veracruz y Alamos. Corres, Natural de Burgos, probablemente avanzó en su carrera burocrática gracias a la intervención de su influyente hermano Francisco Javier de Corres, que fue contador de Gálvez durante su visita ⁶⁷. Permaneció en Guanajuato desde 1780 hasta su muerte en 1797.

Los otros funcionarios importantes habían hecho carreras similares. José Pérez de Becerra, director de alcabalas, trabajó en la caja real de Acapulco, en la secretaría virreinal, y como jefe de alcabalas de Querétaro, antes de llegar a Guanajuato en 1782, donde vivió hasta su muerte en 1802. Parece que era un hombre de cultura y de empresa, que poseía una biblioteca con 450 volúmenes valuada en 3 700 pesos, y una planta de beneficio ⁶⁸. Conservó el puesto durante largo tiempo, sólo superado por Francisco de Bustamante, el director del monopolio del tabaco, que llegó a Guanajuato en 1766 y permaneció en él hasta 1805, cuando finalmente se le despidió porque se encontraron ciertos errores en sus cuentas. La subsecuente investigación reveló que, aunque su sueldo fijo ascendía a 1 600 pesos únicamente, menor que el de Pérez Becerra, el cual recibía 2 500, había aumentado sus ingresos con varias comisiones hasta superar la suma de 6 000 pesos ⁶⁹.

Las carreras de estas dos personas, si las consideramos simultáneamente, nos revelan las características principales de la burocracia fiscal bajo los Borbones. No se respetaban los límites estrictos entre una y otra dependencia, pues era muy fácil pasar de la aduana y de las alcabalas a la caja real, o de la secretaría del virrey al monopolio del tabaco. No obstante esto, una vez que recibían un nombramiento para Guanajuato, la mayoría de los funcionarios ya no ascendían, conservando el puesto en esa ciudad durante períodos extraordinariamente largos que iban desde los treinta y ocho años de Bustamante, hasta los 17 de Corres. Si aceptamos la hipótesis de que la duración en esos puestos sea representativa de la burocracia colonial en su

⁶⁷ AGI, México 1554, Revillagigedo a Gardoqui, 1 marzo 1793; AGI, México 1377, Bucareli a Gálvez, 27 mayo 1777.

⁶⁸ AGI, México 1396, Mayorga a Gálvez, 6 marzo 1782; en cuanto a su biblioteca, véase Henry Bernstein, 'A Provincial Library in Colonial México', *Hispanic American Historical Review*, 26 (1946), pp. 162-83.

⁶⁹ AGI, México 1140, Consulta del Consejo de Indias, 6 febrero 1807.

conjunto, vemos claramente que el nuevo estado borbónico que se estableció con la visita de Gálvez fue particularmente estable en cuanto a su personal, pues apenas cubrió a dos generaciones de funcionarios.

Mientras que todos los funcionarios importantes de Guanajuato fueron peninsulares y hombres de gran experiencia con amigos y parientes influyentes tanto en Madrid como en México, la mayoría de sus ayudantes eran criollos originarios en su mayoría de la misma Guanajuato. La caja real nos ilustra mejor este contraste. Entre 1787 y 1810 el oficial mayor fue Francisco Marino, nativo de la ciudad que empezó a trabajar en Hacienda en 1771. Durante tres años trabajó como supernumerario sin sueldo, hasta ser designado segundo oficial, categoría en la que estuvo durante 13 años. Su sueldo como oficial mayor era de 800 pesos anuales, en comparación con los 3 300 que ganaba Gutiérrez del Mazo⁷⁰. El contraste de antecedentes personales era aun más marcado en el caso de José María Robles, que en 1787 sucedió a Marino como segundo oficial, porque su abuelo, natural del Perú, había sido alcalde del crimen en la Audiencia de México y su padre ocupó el puesto de oficial mayor en la caja real de Guanajuato. Robles trabajó seis años como supernumerario sin sueldo hasta obtener el puesto, que tenía una remuneración anual de 500 pesos⁷¹. Ninguno de los dos fue ascendido antes de 1810, porque los criollos podían alcanzar altos puestos dentro de la burocracia borbónica, siempre y cuando tuvieran el apoyo necesario en Madrid o en la ciudad de México.

El funcionario más talentoso y con mejores conexiones que hubo en Guanajuato fue sin duda el intendente Juan Antonio de Riaño. Los historiadores posteriores de todas las tendencias, han elogiado unánimemente su gobierno. Tanto Carlos María de Bustamante como José María Luis Mora lo ensalzaron como miembro de la escuela de Floridablanca, Jovellanos y Gálvez, y como el modelo mismo del gobierno ilustrado⁷². Lucas Alamán, que lo conoció bien, lo describe con atractivos colores como hombre culto y ansioso de promover el bienestar público. Su casa de Guanajuato y su familia, eran el centro

⁷⁰ AGI, México 1544, Revillagigedo a Lerena, 26 septiembre 1791.

⁷¹ AGI, México 1554, Revillagigedo a Gardoqui, 1 marzo 1793; AHGP, Presos, 4 marzo 1787.

⁷² Carlos María de Bustamante, *Cuadro histórico de la revolución mexicana* (3 vols.; México, 1961), I, 41. Mora, *México y sus revoluciones*, III, 45-6.

de la lengua y las ideas francesas ⁷³. A su mesa acudían personas como Manuel Abad y Queipo, obispo electo de Michoacán y el enérgico cura párroco de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla.

Riaño, siendo un simple teniente de marina de servicio en Luisiana, aseguró su futuro al obtener la mano de Victoria de Saint-Maxent, hija de un rico criollo francés. Su hermana Felicitas se casó con Bernardo de Gálvez, sobrino del ministro de las Indias y más tarde virrey de México. Cuando Riaño fue nombrado intendente de Valladolid, era pariente político de los intendentes de Puebla y Oaxaca, del superintendente de la Casa de Moneda y del Fiscal de Real Hacienda. No quiere esto decir que Riaño dependiera de sus parientes. Logró ser transferido de Valladolid a Guanajuato por recomendación del virrey Revillagigedo, el cual dijo de él: «está bien impuesto en sus obligaciones, y las desempeñará en todas partes con conocimiento, discreción y conducta» ⁷⁴. El virrey Azanza —otro «afrancesado»— quería nombrarlo intendente de México ⁷⁵. Es evidente que Riaño pertenecía a aquel grupo central de funcionarios ilustrados que en esa época hicieron mucho para transformar a la Nueva España.

Poco después de llegar a Guanajuato en 1792, Riaño dio la prueba de sus habilidades como administrador al abolir todas las restricciones y reglamentos impuestos a los trabajadores por los gremios de artesanos. Declaró que a partir de ese momento todo el mundo podía dedicarse a la ocupación que le acomodara y que podía comprar y vender sus productos en el mercado sin traba alguna ⁷⁶. No obstante, al mismo tiempo insistió en que se alcanzara un mayor grado de disciplina social. Se dio nombre a todas las calles y número a todas las casas y se dividió la ciudad en once distritos presidido cada uno por un alcalde de barrio responsable del mantenimiento del orden público. En noviembre de 1792 Riaño hizo una evaluación del efecto de estas medidas:

El pueblo numeroso de que pasó hasta ahora por inquieto e insubordinado le halló dócil y obediente. Si mi antecesor no se cría seguro sin guardias y armas, yo recorro los lugares más ocultos sin otras defensas que el

⁷³ Alamán, *Historia*, I, 55-6, 274.

⁷⁴ AGI, México 1973, Revillagigedo a Valdés, 3 julio 1790.

⁷⁵ AGI, México 1581, Azanza a Soler, 2 junio 1799.

⁷⁶ AGI, México 1660, Riaño a la Corona, 24 diciembre 1792.

Bastón y el Sombrero, sirviéndome de particular gusto ver el agrado con que me saludan todos y la docilidad con que sufren mis correcciones: correcciones más repetidas que antes y más severas, porque sujetos a una policía que nunca conocieron, les es más difícil eludir el castigo ⁷⁷.

En contraste con esta política de más gobierno para las masas, Riaño decidió no interferir en lo relativo al poder de la oligarquía local. En una ocasión declaró: «la experiencia preferente a todo raciocinio me ha demostrado las efectivas ventajas que trae a los pueblos el ser gobernador inmediatamente por vecinos de facultades suficientes y de buena opinión en ellos» ⁷⁸. Negaba su apoyo a quienes querían apelar de las decisiones de los funcionarios municipales, y apoyó el derecho de los dueños de minas a castigar a sus trabajadores por delitos menores. Riaño sometía a la consideración del ayuntamiento su elección de los lugartenientes de justicia en los centros mineros. Su actitud frente a las elecciones anuales de magistrados municipales fue descrita por una persona de la siguiente manera: «El intendente en estas cosas es cero, pues ni estira ni afloja; ni sabe quienes son los electos hasta que ya está el pastel hecho» ⁷⁹. Riaño, a pesar de esto, tenía una ventaja importante para sus tratos con la *élite* local: era montañés, natural de Liérganes en Vallecarriedo, precisamente la misma región de España de la que procedían los gachupines más influyentes de Guanajuato ⁸⁰. Su hija se casó con el hijo de un rico comerciante y minero montañés, Francisco de Septién y Arce ⁸¹. Además el intendente confió unos 30 000 pesos a otro compatriota suyo de Vallecarriedo, para que los invirtiera en una hacienda de beneficio ⁸². El poder y prestigio de Riaño, entonces, se fundaba en parte en que era el jefe no oficial de la comunidad peninsular en la ciudad.

Al mismo tiempo, el intendente contaba con la simpatía de los criollos ricos. Carlos María de Bustamante escribió más tarde que Riaño «amaba a los americanos». Es cierto que no vaciló en designar al alférez real Lic. Fernando Pérez Marañón, natural de Guanajuato,

⁷⁷ AGN, Minería 23/2, Riaño a Revillagigedo, 3 mayo 1792.

⁷⁸ AGN, Intendencias 8, Riaño al Virrey, 4 abril 1800.

⁷⁹ FV, 5, José Joaquín Peláez a Diego Rul, 13 diciembre 1805.

⁸⁰ Fermín de Sojo y Lomba, *Liérganes* (Madrid, 1936).

⁸¹ AHGP, Cabildo, 10 junio 1809.

⁸² AHGP, Cabildo, 13 octubre 1810; Bustamante, *Cuadro histórico*, 1 41.

como su lugarteniente y asesor legal, después de la muerte del incompetente Soriano ⁸³. Este nombramiento interino, que según recomendación de Riaño debía recibir el carácter de permanente, no fue aceptado en Madrid, y el inevitable abogado peninsular llegó a hacerse cargo del puesto. De todos modos, la elección del intendente es ilustrativa de sus estrechas relaciones con la *élite* local.

Poder para los ricos y disciplina para las masas sería una reducción certera de la actitud de Riaño, pero no haría justicia a su carácter humano. Nombrado intendente durante un año en que miles de personas morían de hambre, tomó medidas firmes para evitar desastres futuros. Poco después de llegar a Guanajuato contrajo un préstamo de 20 000 pesos para establecer en la alhóndiga un depósito público de maíz que, si se hacía necesario, podía venderse en cantidad suficiente para «basta a sujetar a un precio justo lo demás que introducen los particulares» ⁸⁴. No satisfecho todavía con lo que existía, obtuvo del virrey y de acuerdo con el ayuntamiento, el permiso de construir una nueva alhóndiga. Los trabajos dieron principio en 1797 y tuvieron un costo tal de 218 306 pesos que fueron cubiertos con el superávit anual del municipio. Fue la Alhóndiga de Granaditas, edificio construido en sencillo estilo neoclásico, pero sus amplias proporciones y austera fachada le dan un aspecto de fortaleza, mientras que las columnatas del patio la hacen parecer una mansión y no un granero ⁸⁵. Ya en la última década del siglo XVIII el estilo neoclásico en arquitectura era el predilecto de la *élite* de México. Los esplendores churriguerescos de los decenios anteriores eran ya entonces objeto de ridiculización. Así pues, tanto el estilo como el propósito de la alhóndiga fueron simbólicos del nuevo espíritu del despotismo ilustrado que Riaño y su generación de funcionarios e inmigrantes peninsulares llevaron a la Nueva España. La Alhóndiga de Granaditas fue la expresión y la representación arquitectónica del nuevo estado borbónico. Es irónico que más tarde serviría de tumba a Riaño y al régimen que este representaba.

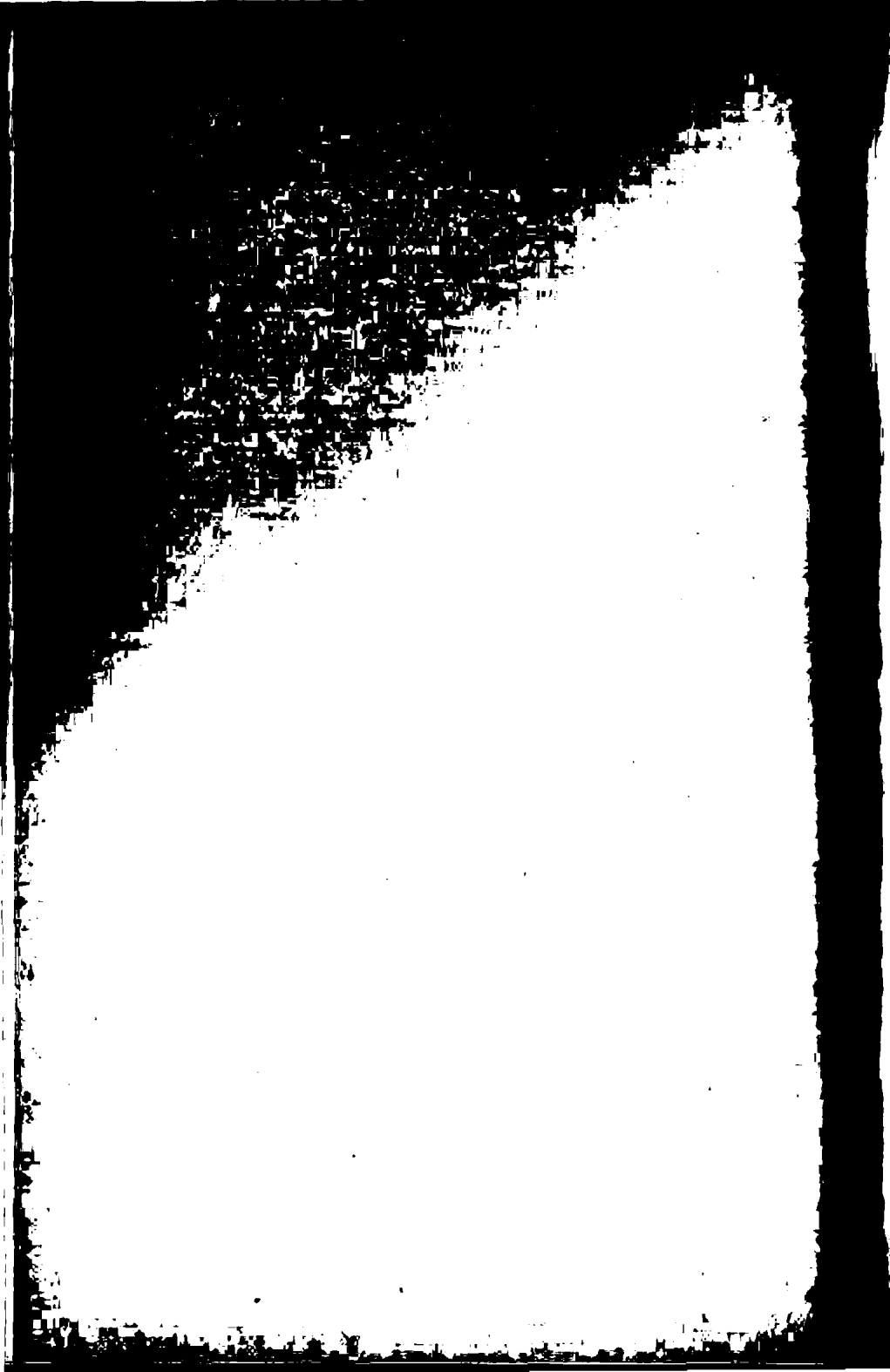
No obstante, las medidas públicas del intendente, por muy beneficiosas que hayan sido, en última instancia no afectaron mucho ni

⁸³ AGI, México 1893, Iturrigaray a Caballero, 26 noviembre 1804.

⁸⁴ AGI, México 1660, Riaño a la Corona, 24 diciembre 1792.

⁸⁵ AHG, Alhóndiga, proposición inicial enviada a Branciforte, 6 agosto 1796.

alteraron en forma notable la sociedad y la economía a que fueron aplicadas. Su influencia se limitó principalmente a la ciudad de Guanajuato, y allí, en cierto sentido, fue una especie de decorado del pastel. Mediaba en las disputas entre los miembros de la oligarquía local, influenció a los jóvenes de dicha clase, promovió la construcción de un puñado de edificios públicos, difundió el estilo neoclásico en la arquitectura, conservó la paz y gobernó honestamente. Y a pesar de todo esto, si Riaño hubiese sido corrompido, pendenciero, perezoso e inculto, ¿hubiera sido Guanajuato muy distinta de lo que fue? Es claro que no. La estructura de su sociedad y la prosperidad de sus minas de plata no se basaban en los esfuerzos de un intendente, sino en el espíritu de empresa y frugalidad de los mineros y comerciantes de la ciudad. Estos fueron los hombres que hicieron de Guanajuato lo que fue, los mineros criollos y los comerciantes inmigrados. Son ellos los que ocuparán la mayor parte de las páginas que siguen, pero antes será útil señalar, mediante los datos del censo de 1792, algunas nociones elementales sobre la estructura racial y ocupacional de la población económicamente activa de la ciudad.



CAPITULO VII

UN CENSO

Es extraordinariamente escasa la información sobre la estructura social del Guanajuato colonial. Es verdad que un puñado de viajeros nos han legado sus impresiones de los mineros de esa ciudad, de su libertinaje, de sus grandes ganancias y de las duras condiciones en que trabajaban. Una serie de ejercicios genealógicos y prosopográficos nos dan también un cuadro bastante convincente de las clases superiores, a los que pueden agregarse algunas estadísticas dispersas, pero todo este material, por su naturaleza descriptiva, particular y ocasional, no nos dice gran cosa sobre las clases y razas en que estaba dividida la sociedad, ni sobre la distribución de ocupaciones, ni sobre el significado de estas divisiones, si acaso tenían alguno, sobre el individuo. La única fuente útil con que contamos a este respecto es el censo militar de 1792 del distrito y ciudad de Guanajuato ¹, documento que comprende cuatro gruesos volúmenes manuscritos y que proporciona el nombre, edad, lugar de nacimiento y de residencia, ocupación y raza de todos los varones adultos con excepción de sacerdotes e indígenas plebeyos. Da además datos similares, aunque no tan completos, de sus esposas e hijos.

Debe hacerse hincapié, sin embargo, en que como carecemos de medios para comprobar la exactitud del censo, todas nuestras tablas derivarán de la exégesis de una fuente posiblemente mendaz, y en que, en principio, no necesariamente nos revelarán una realidad histórica. A pesar de ello podemos preguntarnos ¿por qué razón habrían conspirado los funcionarios y residentes de Guanajuato para registrar una información errónea? ¿Para qué podría servir mentir sobre la edad, el lugar de nacimiento y la ocupación? Podemos responder que no habría servido para nada. Así pues, los errores en esta clase de preguntas no podían ser causados más que por la igno-

¹ Véase AGN, Padrones 30-3. Todas las tablas de este capítulo están basadas en esos cuatro volúmenes.

rancia, el descuido o la falta de precisión. Por ejemplo, muchas personas probablemente no recordaran su edad, otros podían ser clasificados como comerciantes en vez de como tratantes, o como mineros en vez de como trabajadores de las minas, pero de todos modos es plausible dar por sentado que la mayoría conociera su edad por lo menos con aproximación de una década, y que sería difícil decir que un sastre era zapatero o un notario abogado. Es decir, que las posibilidades de errar eran limitadas. Por otra parte, en lo relativo a un aspecto de la información, sí había una fuerte posibilidad de distorsión consciente, porque el individuo en el México colonial era hipersensible a cómo se le designaba desde el punto de vista racial. Tanto los indígenas como los mulatos eran víctimas de un estigma de inferioridad social, además de que tenían que pagar un alto precio por ello en la forma de un impuesto personal especial. Es claro entonces que quienes formaban parte de estos grupos (nos referimos a los habitantes de las poblaciones), luchaban, cuando les fuese posible, por ser incluidos entre los mestizos o los españoles. No obstante, esto era una cosa difícil de lograr para los que permanecían en sus lugares de origen, porque los curas párrocos llevaban tres registros bautismales separados para indígenas, mulatos y españoles. En cierta medida, entonces, la movilidad social ascendente dependía de la movilidad geográfica, y como en Guanajuato las cuatro quintas partes de todos los adultos eran nacidos en la ciudad y pueblos circundantes, la probabilidad de mentir con éxito al oficial del censo, que era sin duda nativo de la misma región, era sumamente pequeña.

Aunque así podemos eliminar la ignorancia y hasta las distorsiones, no es posible hacer lo mismo con las omisiones. A este respecto todos nuestros cálculos se ven viciados en parte por la deficiencia evidente del censo: no enumera más indígenas que a los caciques que no pagaban tributo y a las mujeres que habían contraído matrimonio fuera de su grupo racial. Por otro lado, se tiene cierta noción del número de indígenas por el sumario del censo, impreso en 1793, que afirma que ascendían aproximadamente a 11 800 personas, o sea, una quinta parte de la población ², pero el sumario publicado no concuerda en lo absoluto con los totales que da el manuscrito. La tabla 27 nos presenta la magnitud de esta divergencia.

² Véase AGN, Historia 523, ff. 88, 90.

Pocas esperanzas existen de conciliar las dos versiones. Las diferencias en los grandes totales pueden explicarse mediante la exclusión de las unidades territoriales periféricas, y en el caso de la ciudad de Guanajuato, mediante diferentes definiciones de sus límites, pero de cualquier forma la discrepancia en las cifras en lo relativo al análisis racial es inexplicable e irreconciliable. El sumario impreso afirma que había 24 160 españoles, mientras que el manuscrito únicamente enumera a 15 374; el primero dice que había 922 españoles peninsulares, mientras que el segundo sólo hace referencia a 314. Es obvio que muchas personas que el sumario considera españolas, habían sido contadas en el manuscrito como mestizos y mulatos. Como carecemos de pruebas que nos permitan dilucidar el punto medio, parece más sabio confiar en la fuente más amplia que se encuentra a nuestra disposición, haciendo a un lado el sumario impreso como documento *tendencioso*.

TABLA 27

POBLACION DE LA CIUDAD Y DISTRITO DE GUANAJUATO, 1792-93

<i>Sumario impreso (*)</i>	<i>Ciudad</i>	<i>Ciudad y distrito (incl. cifras de la ciudad)</i>
Españoles	18 068	24 160
Indígenas	1 385	11 814
Castas	9 645	19 038
	32 098	55 012
Españoles peninsulares	922	
Españoles americanos	17 146	
Castas	2 428	
Mulatos	7 217	
Indígenas	4 385	
	32 098	
<i>Totales del Manuscrito del Censo (**)</i>		
Españoles	7 446	15 374
Castizos	1 194	2 308
Mestizos	5 260	11 281
Mulatos	3 481	10 733
	17 381	39 696
Más indígenas (véase arriba)	4 385	11 814
	21 766	51 510

(*) Fuente: AGN, Historia 533, ff. 88, 90.

(**) Fuente: AGN, Padrones, 30-3.

II

Procedamos a hacer ahora el análisis. Después de una cierta cantidad de cálculos laboriosos, hemos podido elaborar las tablas 28 y 29, que se refieren a la distribución de ocupaciones y razas y al lugar de origen geográfico de los individuos.

Contrariamente a nuestra impresión acostumbrada de las ciudades mineras, la población de Guanajuato era en sí misma geográficamente inmóvil. El 77.7 por 100 de los varones adultos eran nacidos en la ciudad y en la zona circundante, en pueblos mineros y ranchos. Únicamente se encontraban inmigrantes en número considerable entre la *élite*, especialmente en la clase mercantil. Los trabajadores de las minas, por ejemplo, procedían principalmente de la ciudad misma, y sólo el 21 por 100 de ellos venían de fuera. En parte podemos atribuir esta relativa inmovilidad al prolongado período de prosperidad que procedió al censo de 1792; si se hubiese hecho uno en el decenio de 1770-80 quizá habría revelado una mayor proporción de trabajadores migratorios.

La distribución de ocupaciones nos ofrece escasas sorpresas. La minería en su conjunto absorbía el 55 por 100 de la fuerza de trabajo masculina que figura en el censo. El resto se ocupaba de una gama de trabajos que iban desde aguador, carbonero y arriero hasta los oficios igualmente comunes de sastre, zapatero remendón y herrero. Algunos renglones merecen ser comentados, como los siguientes: el número de sirvientes domésticos aumentaría mucho si se incluyera a las mujeres; los agricultores, dejando aparte a los productores de flores para el mercado, eran tanto campesinos como peones que vivían en ranchos y haciendas que quedaban dentro de la jurisdicción municipal, y su número era relativamente insignificante. El renglón de *ropa* se componía principalmente de sastres, sombrereros y zapateros, ya que Guanajuato no tenía más que a unos cuantos hilanderos y tejedores. Con una perspectiva más amplia, la población puede dividirse en tres grupos: los trabajadores de la minería, la *élite* a quien dichos trabajadores mantenían, y los artesanos y obreros que servían a los dos grupos precedentes.

El principal punto de interés y el verdadero problema de interpretación que presenta el censo es seguramente la importancia que debemos atribuir a las categorías raciales en que está dividida la

TABLA 28

LUGAR DE ORIGEN DE LA MANO DE OBRA ADULTA MASCULINA,
GUANAJUATO, 1792

	<i>Guanajuato</i>	<i>Provincia de Guanajuato</i>	<i>Otros</i>	<i>Total</i>	
				<i>Número</i>	<i>Porcentaje</i>
Españoles	3 176	461	461	4 098	38.4
Mestizos	2 389	282	111	2 782	26.0
Mulatos	2 469	481	182	3 132	29.3
Caciques	166	39	26	231	2.2
Castizos	98	18	6	122	1.1
Europeos	—	—	314	314	3.0
	8 298	1 281	1 100	10 679	100.0

TABLA 29

DISTRIBUCION POR OCUPACION DE LOS VARONES ADULTOS
GUANAJUATO, 1792

<i>Ocupación</i>	<i>Número</i>	<i>Porcentaje</i>
Minería	5 057	47.3
Beneficio	792	7.6
Comercio	681	6.4
Ropa	590	5.5
Alimentos y bebidas	364	3.4
Sirvientes	511	4.8
Transporte	283	2.6
Agricultura	686	6.4
Trabajadores del metal y la madera, de la construcción, cerámica	596	5.6
Combustible, velas, jabón, cal, etcétera	271	2.5
Profesiones, escribientes	117	1.0
Funcionarios del gobierno y del municipio	118	1.1
Bellas artes, espectáculos	96	0.9
Varios	517	4.9
	10 679	100.0

población y en la relación de dichas categorías con la jerarquía ocupacional y social de la ciudad. ¿Era la raza la que imponía la selección de la ocupación, o era por el contrario la clase social? Aquí el cuadro se vuelve confuso tanto por la ausencia de los indígenas como por la extraordinaria propincuidad y número de los españoles americanos, que cubrían toda la escala ocupacional desde abogado y sacerdote

hasta trabajador de las minas y arriero. Aceptadas estas dificultades se puede ya incursionar en el terreno más firme de las clases altas de la sociedad, antes que nada, para de allí proceder hacia abajo en la escala.

III

Un estudio detallado de los 314 españoles peninsulares residentes en Guanajuato, como el que puede verse en la tabla 30, nos

TABLA 30

PROVINCIA DE ORIGEN Y OCUPACION DE LOS ESPAÑOLES
PENINSULARES DE GUANAJUATO, 1792

<i>Provincia de origen</i>		<i>Ocupación</i>	
Santander	92	<i>Comercio</i>	
País Vasco y Navarra	43	Comerciantes	77
Andalucía	30	Aprendices	72
Castilla	26	Agentes	1
Galicia	20	Tratantes	14
Asturias	11	Taberneros	7
Canarias	6		171 (54.4 %)
Extremadura	4	<i>Minería</i>	
La Rioja	2	Mineros	37
Murcia	1	Administradores	6
Granada	1	Capataces, obreros	11
Cataluña	1		54 (17.5 %)
Orán	1	<i>Beneficio</i>	
Españoles europeos	36	Refinadores	16
Reinos de Castilla	27	Administradores	8
Extranjeros	13	Rescatadores en	4
		pequeño	
	314	Azogueros	8
			36 (11.5 %)
		<i>Al servicio de la Corona</i>	
		<i>en el municipio</i>	
		Oficiales, asistentes	11
		guardias	17
			28 (8.9 %)
		<i>Varios</i>	
		Artisanos	8
		Agricultores	3
		Sacerdotes	3
		Varios	11
			25 (8.0 %)
		TOTAL	314 (100 %)

ofrece una doble ventaja. En primer lugar, podemos tomar a estas personas como medida de las condiciones de la *élite*, y en segundo, podemos someter a prueba ciertas hipótesis más generales que ya han sido presentadas sobre la naturaleza de la comunidad inmigrada. La característica que más salta a la vista, en relación a la provincia de origen, es el predominio de los montañeses, ya que por lo menos una tercera parte de todos los inmigrantes residentes en Guanajuato estaba formada por hombres procedentes de la costa y de las montañas de la provincia de Santander. Por desgracia nuestros porcentajes no pueden ser completamente exactos a causa de las 62 personas que declararon ser españoles europeos y de las que dijeron haber nacido en los reinos de Castilla, las cuales no pueden atribuirse con precisión a ninguna provincia. Técnicamente, toda España, con excepción de los reinos de Aragón (que incluía Cataluña y Valencia) y de Navarra, pertenecía a los reinos de Castilla. Si no tomamos en cuenta a estas personas y a los extranjeros, del resto, cuya provincia de origen nos es conocida, los montañeses formaban el 38 por 100, y todos los que procedían de las costas del cantábrico, el 69 por 100.

La ocupación que escogía el inmigrante seguía las líneas de la tradición (véase la tabla 31). La inmensa mayoría se dedicaba a actividades comerciales, pero como podía esperarse en una ciudad como Guanajuato, un gran porcentaje de ellos escogía la minería. En cambio la burocracia, incluyendo en este término tanto a guardias como a oficinistas, daba trabajo a menos del 10 por 100 del total de españoles peninsulares. Se trataba, pues, de una comunidad trabajadora, pero no todos sus miembros lograban obtener trabajos atractivos. El grupo de comerciantes en pequeño o tratantes, como se les llamaba, puede definirse con bastante exactitud como de hombres que hacían pequeños trabajos comerciales, teniendo que competir con muchos criollos, mestizos y mulatos que también se dedicaban a hacer pequeñas transacciones comerciales. De la misma manera, los cinco mineros registrados con los capataces eran gente que claramente había fracasado en el aspecto financiero. Los artesanos —dos sastres, un panadero y un peluquero— eran en su mayoría extranjeros. Entre las personas que figuran en el renglón de varios, podemos apuntar la presencia de un «autor de comedias», así como de un ciego, un paralítico y un soldado retirado. No existen correlaciones signifi-

TABLA 31

OCUPACION, EDAD Y ESTADO CIVIL DE LOS ESPAÑOLES
PENINSULARES DE GUANAJUATO, 1792

Ocupación	Grupos de edad												Totales		
	11-20		21-30		31-40		41-50		51-60		61-70				
	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	Total
Comerciantes	4		15	4	20	10	5	8	3	4	1	3	48	29	77
Aprendices	19		42		5	1	4	1					70	2	72
Tratantes			1		3	3	1	2	1	1	1	1	7	8	15
Taberneros			3	1	1		1	1		1			5	2	7
Mineros (*)			6	4	10	7	11	6	4	4	1	1	32	22	54
Refinadores	1		6	1	6	4	1	5		3		1	14	14	28
Azogueros	2		5					1					7	1	8
Gobierno	1		3	3	2	5	3	6	2	2		1	11	17	28
Varios					4	3	2	3	4	3		1	10	12	22
Sacerdotes															3
TOTALES	27		81	13	51	33	28	33	14	20	3	8	204	107	314

Clave: S = Solteros; C = Casados.

(*) Entre los mineros se incluyen a los trabajadores y a los capataces; en los refinadores se incluyen los administradores; el único agente ha sido agregado a los tratantes. Los 19 viudos han sido contados como casados.

cativas entre la provincia de origen y la elección de ocupación. Por ejemplo, casi un tercio de los comerciantes peninsulares eran montañeses, y esta proporción era común en todos los oficios. Una excepción parcial a esta regla era que sólo un vasco estaba al servicio del rey, mientras que había en él diez montañeses. También el grupo designado como españoles europeos se componía en su mayoría de jóvenes cajeros, es decir, comerciantes aprendices, pero por lo demás no se encuentran divergencias notables en la distribución normal de ocupaciones.

Se entraba a distintos empleos según la edad. Cerca de la mitad de los españoles peninsulares de Guanajuato menores de treinta años declararon ser cajeros, es decir, comerciantes aprendices o a sueldo por día. Los administradores de haciendas de beneficio y los azogueros, que eran los que dirigían el procedimiento de amalgamación eran igualmente jóvenes. Sin embargo, la mayoría ya habían terminado su aprendizaje cuando llegaban a los treinta años, y entonces se convertían en comerciantes o en tratantes. Entre los mayores de treinta años

figuran más propietarios que administradores de haciendas de beneficio. Ahora bien, mientras entre los veinte y los treinta años y, en menor proporción entre los treinta y los cuarenta, la mayoría de los inmigrantes se dedicaban al comercio, después de los cuarenta años había tantos mineros como comerciantes. Es difícil valorizar el significado que tiene esta circunstancia, pero posiblemente es indicativa de que la mayoría de los jóvenes comenzaban siendo cajeros, ascendían a comerciantes y entonces, si tenían éxito, diversificaban sus inversiones y emprendían actividades mineras. Igualmente, el predominio de los jóvenes en números absolutos puede ser reflejo de una corriente relativamente reciente de inmigrantes, la mayoría de los cuales se dedicaban al comercio. Después de todo, las cifras se refieren a 1792, es decir, apenas catorce años después de la declaración de la libertad de comercio, que tanto había ampliado las oportunidades comerciales. No obstante, tales hipótesis no son más que especulaciones, porque un censo es una especie de inventario referido a un momento específico y no un balance de pérdidas y ganancias. Algunos inmigrantes regresaban a España; otros llegaban ya bastante maduros, y no sabemos cuál era la edad promedio a la que llegaban a la Nueva España y mucho menos cuál era el período medio de residencia en la colonia.

Al pasar la juventud, se abandonaba la soltería. Por definición, un cajero era soltero y, lo cual es más significativo, la mayoría de los comerciantes preferían no casarse hasta llegar a los cuarenta años, y muchos se quedaban solteros para siempre. Esta regla era válida también entre los que se dedicaban a otras ocupaciones. Muy pocos inmigrantes se casaban antes de los treinta años y la mayor parte esperaban llegar a los cuarenta, cuando menos, antes de tomar tal decisión. Resulta claro que los españoles peninsulares preferían no arriesgarse, ya que por elección o por necesidad su carrera comercial se basaba tanto en la soltería como en la frugalidad. En términos numéricos, predominaba como *gachupín típico en Guanajuato* el joven soltero procedente del norte de España que trabajaba detrás de un mostrador.

IV

¿Qué tan diferentes eran los españoles peninsulares de sus parientes americanos? Sólo una comparación entre los dos grupos puede indicarnos qué era lo característico en la conducta de los inmigrantes y qué era lo común a las dos partes de la nación española, aunque aquí entramos a un terreno decididamente traicionero. La comparación de 314 personas que tenían una alta posición en la sociedad con el 38 por 100 de la población de la ciudad del cual se afirma que era español, sería manifiestamente impropio pero, ¿cómo distinguir a los criollos de las masas mestizas? En este contexto el único modo plausible de definir a un español de clase alta es mediante su elección de ocupación. Pero, ¿cómo podemos determinar el prestigio social que comportaban las diversas ocupaciones ejercidas en Guanajuato? Parece que aquí el argumento se mueve en círculo, ya que la medida básica para determinar la posición en sociedad era racial. De todas maneras, el elemento medio de la escala, es decir, los españoles americanos, puede distinguirse porque estaba asociado a los dos polos, mutuamente excluyentes, de peninsulares y mulatos. Los criollos que tenían la misma ocupación que los peninsulares probablemente formaban parte de una capa social superior a la de aquellos que trabajaban junto a los mulatos. Por el contrario, debemos considerar que los empleos disponibles para un gran número de mulatos eran socialmente inferiores a aquellos trabajos de los que se les excluía. Si nos parecen presuntuosas estas afirmaciones, recurramos inmediatamente a las pruebas documentales (véase tabla 32).

Podemos inmediatamente observar que el censo, en sus definiciones, es bastante fidedigno. El término «comerciante», con el significado de tendero, y el de «cajero», en el de aprendiz o asalariado del comercio, se usaron discretamente y con un cierto grado de precisión. La posición ambigua de los tratantes, en la que claramente predominaban los españoles americanos, con un fuerte elemento de mestizos y mulatos, resulta también muy clara. En la industria de la refinación resulta el mismo esquema, ya que un «hacendado de plata», es decir, el dueño de una hacienda de beneficio, se distinguía claramente de los «rescatadores», que eran los refinadores en pequeño. Los azogueros eran claramente una clase superior a los rescatadores. Por desgracia, el cuadro relativo a la minería adolece de una cierta impre-

TABLA 32

ESTRUCTURA OCUPACIONAL DEL COMERCIO Y LA MINERÍA,
GUANAJUATO, 1792

Ocupación	Españoles peninsulares	Españoles americanos	Criollos	Mestizos	Caciques	Mulatos	Total
<i>Comercio</i>							
Comerciantes	77	75	—	6	—	4	162
Aprendices	72	71	—	4	2	—	149
Tratantes	14	215	5	58	10	39	341
Agentes	1	15	—	—	—	—	16
Taberneros	7	5	—	1	—	—	13
	171	381	5	69	12	43	681
<i>Refinación</i>							
Refinadores	16	24	—	2	—	—	42
Administradores	8	18	—	—	—	—	26
Azogueros	8	58	1	5	—	2	74
Rescatadores	4	85	1	86	4	79	259
Trabajadores	—	143	8	138	6	101	396
	36	328	10	231	10	182	797
<i>Extracción minera</i>							
Mineros	37	201	—	66	2	23	329
Administradores (capataces)	12	57	—	—	—	—	69
Trabajadores	5	1 323	46	1 332	72	1 881	4 659
	54	1 581	46	1 398	74	1 904	5 057

cisión en el uso de la palabra «minero» por oposición al término «operario de minas», o sea, el trabajador. Podía referirse al propietario, a un técnico experto, o a algún buscador de vetas independiente y paupérrimo.

Habiendo así comprobado la eficacia de nuestra varita de adivino, procedamos a comparar a los españoles europeos con los españoles americanos. La tabla 33 muestra las principales ocupaciones a que se dedicaban los criollos. Los tratantes y los rescatadores han sido excluidos de ella por las razones ya apuntadas, y han sido agregadas las ocupaciones de platero (de la que el 87.7 por 100 eran españoles) y las profesiones más comunes tales como abogados y doctores.

El número total ha sido aumentado con la inclusión de tantos «mineros», pero de todas maneras resultan inmediatamente ciertas conclusiones generales. La capa superior de la sociedad de Guanajuato comprendía, cuando más, un millar de varones adultos, es decir,

TABLA 33

OCUPACIONES DE LA ELITE CRIOLLA, GUANAJUATO, 1792

<i>Ocupación</i>	<i>Número</i>	<i>Porcentaje del total</i>
Comerciantes	75	
Aprendices	71	
Agentes	15	
Taberneros	5	
	166	21.2
Mineros	201	
Administradores	24	
Capataces	33	
	258	33.0
Refinadores	24	
Administradores	18	
Azcueros	58	
	100	12.7
Oficiales de la Corona	4	
Guardias y asistentes de la Corona	33	
Oficiales, guardias y asistentes municipales	21	
	58	7.4
Notarios	6	
Abogados	11	
Doctores	12	
Sacerdotes	52	
	81	10.4
Plateros	86	10.9
Escribientes	35	4.4
	TOTAL	100.0

aproximadamente una décima parte de la población, y de este número por lo menos la cuarta parte eran inmigrantes. También es notable la falta de oportunidades para los profesionales, ya que la ciudad contaba con un sacerdote por cada mil habitantes, y un abogado y un médico por cada cuatro mil. La Corona y la municipalidad ofrecían empleos en un número que igualaba el total de todas las profesiones juntas. Una característica que puede sorprendernos es el gran número de comerciantes criollos y de sus asistentes, fenómeno que otro tipo de pruebas documentales generalmente no indica. No obstante, si examinamos más de cerca los que parecen ser dos grupos humanos

muy similares, advertiremos las diferencias principales, como nos lo revela la tabla 34.

Tomando primeramente la categoría comercial, podemos advertir que los cajeros criollos hacían su aprendizaje en la soltería, igual que sus coetáneos peninsulares, pero en cambio preferían o empe-

TABLE 34
OCUPACION, EDAD Y ESTADO CIVIL DE LOS CRIOLLOS
DE GUANAJUATO, 1792*

Ocupaciones	Grupos de edades												Totales		
	11-20		21-30		31-40		41-50		51-60		61-70		S		Total
	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C			
Comerciantes	6	—	4	9	3	13	7	17	—	8	—	8	20	55	75
Aprendices	38	—	21	1	6	2	1	1	—	—	—	—	67	4	71
Agentes	—	—	—	2	2	1	1	5	—	4	—	—	3	12	15
Taberneros	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—	5	5
Mineros	28	3	26	13	11	55	7	45	2	24	—	14	74	184	158
Refinadores	1	1	6	4	1	13	2	8	1	2	1	2	12	30	42
Azogueros	12	—	12	12	2	7	1	8	—	3	1	—	28	30	58
Gobierno	2	1	7	11	3	12	2	13	—	6	—	1	14	44	58
Profesionales	1	—	1	4	2	5	2	10	1	3	—	—	7	22	29
Plateros	19	1	14	14	5	17	3	8	—	4	—	1	41	44	85
Escribientes	3	1	5	6	3	10	1	3	—	3	—	—	12	23	35
Sacerdotes															52
	110	7	96	108	38	136	27	118	5	59	2	26	278	453	783

Clave: S = Solteros; C = Casados

(*) Se ha excluido a los rescaradores; los viudos (54) están incluidos en los casados.

zarlo o terminarlo a edad algo más temprana. Por otra parte, aunque sea muy raro, los comerciantes criollos tendían a ser de mayor edad que sus competidores peninsulares y así, mientras en el grupo de edades de treinta y uno a cuarenta años había 16 comerciantes criollos en comparación con 30 peninsulares, en la década de edades siguiente la proporción equivalente era de 24 a 13. Igualmente significativo es el hecho que los criollos se casaban a edad mucho más temprana. Ya antes de los treinta años las dos terceras partes de los comerciantes nacidos en América habían encontrado esposa, mientras que de los españoles europeos entre los treinta y uno y los cuarenta años únicamente una tercera parte eran casados. Encontramos entonces aquí

dos esquemas de conducta muy diversos, en hombres de la misma profesión y de igual origen nacional. En efecto, en cualquier competencia por el éxito comercial, el gachupín tenía la notable ventaja de ser más joven y además soltero, por regla general. Este esquema no se limitaba a la comunidad mercantil, ya que en la refinación de metales casi la mitad de los criollos se casaban antes de cumplir los treinta años, en comparación con uno de cada veinte peninsulares. Todos los once dueños de haciendas de beneficio nacidos en América eran casados, mientras que cinco de cada ocho peninsulares de la misma categoría permanecían solteros. Y así sucesivamente. Ya se ha dicho bastante para demostrar cuál era la idiosincracia del inmigrante, ya que, después de todo, los criollos seguían una conducta bastante normal.

V

Los otros nueve décimos de la población pueden dividirse en dos grandes categorías: los trabajadores industriales que laboraban en las minas y en las haciendas de beneficio, y la variada hueste de artesanos, sirvientes, tratantes y arrieros. De acuerdo con el método que hemos usado hasta ahora, procedamos a examinar la correlación, si es que existe, entre la raza y la ocupación. En el esquema de la tabla 35 se mencionan todas las profesiones que empleaban a más de cien personas. Por claridad, los pocos castizos (mezcla de español con mestiza) se incluyen entre los mestizos.

Para ordenar estas ocupaciones hemos usado el porcentaje de mulatos de cada una de ellas como índice de la jerarquía del oficio en la sociedad. En general, corresponde a la ausencia o presencia proporcionalmente inversa de españoles, mientras que los mestizos, como de costumbre, forman una capa media y ambigua, sin características propias. En realidad, varios oficios, tales como el de sastre, herrero, carpintero y tratante, pueden separarse de las masas para constituir una capa social que se define con bastante exactitud diciendo que era la clase trabajadora alta. ¿Nos encontramos aquí con un elemento blanco empobrecido, víctima de una sociedad móvil descendente? Por lo demás (aparte de los zapateros remendones), la divergencia de las proporciones acostumbradas, aunque muy pronunciada a veces, no aparece con ninguna claridad. Ni tampoco debe

darse demasiada importancia a los porcentajes precisos de los renglones pequeños, tales como el de panaderos y el de albañiles, porque la suma de sólo diez hombres a cualquier grupo cambiaría fundamen-

TABLA 35

RAZA DE LOS TRABAJADORES VARONES ADULTOS EN ALGUNOS
OFICIOS, GUANAJUATO, 1792

<i>Ocupaciones</i>	<i>Españoles</i>		<i>Mestizos</i>		<i>Caciques</i>		<i>Mulatos</i>		<i>Total</i>
	N.º	C%	N.º	C%	N.º	C%	N.º	C%	
Carpinteros	85	62.5	10	29.4	—	—	11	8.1	136
Tocineros	69	58.9	35	29.9	—	—	13	11.2	117
Tratantes	229	67.2	63	18.5	10	2.9	39	11.4	341
Sastres	138	48.2	104	36.2	9	3.4	35	12.2	286
Herreros	81	48.1	60	36.8	1	0.6	24	14.5	166
Agricultores	320	54.1	125	21.3	7	1.1	139	23.5	591
Albañiles	23	20.2	47	41.3	12	10.6	32	27.9	114
Sirvientes	185	36.3	177	31.7	5	0.9	143	28.1	510
Trabajadores de beneficio	143	36.2	146	36.8	6	1.5	101	25.5	396
Rescatadores	89	34.4	87	33.5	4	1.6	79	30.5	259
Panaderos	34	33.0	25	21.3	12	11.6	32	31.1	103
Carboneros	39	36.9	29	27.2	—	—	38	35.9	106
Zapateros									
remendones	24	11.8	90	44.5	15	7.5	73	36.2	202
Trabajadores de minas	1 328	28.5	1 378	29.6	72	1.6	1 881	40.3	4 659
Arrieros	71	30.8	47	20.5	5	2.3	108	46.4	231
Total fuerza de trabajo masculina (menos la capa más alta)	3 324	34.7	2 904	30.3	231	2.4	3 132	32.6	9 589

talmente el cuadro. Advertida la existencia de esta dificultad, parece mejor concentrarse en los trabajadores de las minas, donde, por desgracia, no se hizo ninguna distinción, a pesar de la gran diferencia de salarios, entre barreteros y barrenadores o entre malacateros y peones. No obstante, se manifiesta una notable divergencia si calculamos el porcentaje de miembros de cada grupo racial (dejando también a un lado a los miembros de la capa superior española) que se dedicaban a la minería. Esto nos proporciona los siguientes resulta-

PORCENTAJE POR GRUPOS RACIALES DE PERSONAS DEDICADAS
A ACTIVIDADES MINERAS

Mulatos	60
Mestizos	47.4
Caciques	31.6
Españoles (menos capa superior)	39.6
Población (menos capa superior)	48.6

A primera vista, entonces, parece que entre el populacho la raza sí condicionaba, hasta cierto punto, la selección de ocupación. Los mulatos, además, seguían líneas de conducta bien diferenciadas de las de los demás. Sin embargo, si del total de españoles quitamos las ocupaciones en que la proporción de mulatos era muy baja, como eran los carpinteros, tocineros, sastres, tratantes y herreros, y si damos por sentado que formarían una capa media de la sociedad, entonces las divergencias se atenúan. Del resto de los españoles verdaderamente proletarios, aproximadamente el 48.9 por 100 eran trabajadores de las minas. La diferencia de los mulatos se reduce así aproximadamente a un 10 por 100 de variación respecto a lo que eran las líneas más comunes de selección de ocupación.

Nuestra investigación queda así reducida a una sencilla pregunta: ¿Qué significado tenía, si es que tenía alguno, la diversidad racial para hombres que trabajaban hombro con hombro en las minas y que vivían de manera muy semejante? ¿Puede concluirse que entre el 85 por 100 de la población de Guanajuato que no se dedicaba a los oficios especializados, el comercio y la administración, las designaciones étnicas eran apenas marbetes arbitrarios que ya sin significado sobrevivían del pasado y que habían sido perpetuados únicamente por las obligaciones fiscales y por los registros parroquiales? Nos queda por hacer una última prueba a la homogeneidad de los grupos: la del matrimonio. ¿Escogían estos trabajadores de las minas a sus cónyuges al azar entre las distintas razas? La tabla 36 nos da la respuesta.

Una mirada rápida puede sugerirnos que la tasa general de matrimonios interraciales del 29.5 por 100 fuese lo suficientemente alta para impedir la formación de grupos étnicos estables. Si dicha tasa fue continua durante un siglo, entonces al cabo de cuatro generaciones no existiría ninguna diferencia apreciable entre las varias categorías raciales, dos de las cuales, de cualquier forma, los mestizos y los

TABLA 36

LOS MINEROS: TASA DE MATRIMONIO ENTRE RAZAS DIVERSAS

Hombre	Mujer							Total	Matrimonio entre razas
	Española	Castiza	Mestiza	Cacique	Indígena	Mulata	Soltera		
Español:									
Número	566	6	150	7	33	13	548	1 323	199
Porcentaje	73.0	0.8	19.4	0.9	4.3	1.6			27.0
Castizo (*):									
Número	5	2	14	1	1	1	22	46	8
Porcentaje	20.8	8.3	58.3	4.2	4.2	4.2			33.4
Mestizo:									
Número	127	4	491	7	76	26	601	1 332	236
Porcentaje	17.4	0.5	67.2	0.9	10.4	3.6			32.9
Cacique (**):									
Número	12		20	13	9		18	72	32
Porcentaje	22.2		37.0	24.1	16.7				59.4
Mulato:									
Número	71	6	79	3	198	875	649	1 881	357
Porcentaje	5.8	0.5	6.4	0.3	16.0	71.0			28.9
TOTAL							1 838	4 654	832 29.5

(*) El matrimonio con mestizas no ha sido considerado interracial.

(**) El matrimonio con indígenas no ha sido considerado interracial.

mulatos, estaban ya definidas en términos de su mezcla genética. No obstante, tal conclusión no sería exacta. Un examen más detallado de la tabla nos muestra que el matrimonio interracial, cuando tenía lugar, seguía las líneas de los valores sociales. En general, los españoles se casaban con mestizas, los mulatos, con indígenas, y los mestizos, con *españolas o indígenas*. Rara vez escogían los españoles a mujeres mulatas, mientras que los varones mulatos con frecuencia se casaban con mujeres españolas o mestizas; porque tanto para los españoles como para los mestizos, el matrimonio con mujeres indígenas era preferible a casarse con una mulata. Además, si suponemos que el proletariado español y mestizo en realidad *formaba una sola comunidad*, entonces su tasa de matrimonio interracial con indígenas y mulatos baja hasta una cifra apenas superior al 10 por 100. Después de dos siglos de endogamia los mulatos y los indígenas formaban dos grupos separados e inferiores con los cuales el grupo hispano-mestizo

prefería no mezclarse racialmente a pesar de su proximidad social. La única excepción a esta regla eran los «caciques» indígenas, pero estos, a juzgar por su tasa de matrimonio interracial, eran simplemente mestizos que por alguna razón se aferraban a la condición de indígenas nobles.

Las pruebas documentales relativas a Guanajuato que han llegado hasta nosotros, sugieren, pues, que las distinciones raciales, aunque no indicaban por sí mismas la clase social, definían en parte la posición de los individuos en la estimación de los demás y, lo que es más importante, a los ojos del sexo femenino. Las siete décimas partes de la población masculina se casaban con mujeres de su propio grupo étnico. La conciencia racial seguía siendo fuerte, y por ello, dentro de una misma actividad, las personas de diversas razas tenían diferente posición. La jerarquía de las razas bisecaba y ponía el desorden en la pirámide de las clases sociales.

CAPITULO VIII

LAS MINAS

A fines del siglo XVIII Guanajuato era el mayor centro productor de plata del mundo. Su producción anual de más de cinco millones de pesos correspondía a una sexta parte de todos los metales preciosos producidos en América, es decir, el oro y la plata combinados, e igualaba la producción total de cada uno de los virreinos de Buenos Aires y del Perú. No obstante, a pesar de la importancia que Humboldt, en su *Essai Politique*, atribuyó a la ciudad, Guanajuato nunca ha recibido de los historiadores la atención que su importancia merece y además, contrariamente a Potosí, nunca tuvo ni siquiera un cronista contemporáneo. Aparte del invaluable estudio de Humboldt, muy pocas fuentes impresas existen sobre Guanajuato en su apogeo colonial. Consecuentemente, el historiador moderno depende forzosa y casi exclusivamente del material de archivo para reconstruir las características de su historia económica. Por desgracia, una gran parte de los archivos de la intendencia y de hacienda fueron destruidos en 1810, cuando las fuerzas de Hidalgo se apoderaron de la ciudad. En el curso del siglo pasado se perdieron otros documentos y en tiempos más recientes los libros de contabilidad de las grandes minas—hasta entonces religiosamente conservados— fueron vendidos como pulpa a una fábrica de cartón de la localidad. Nuestros conocimientos, pues, se limitan a lo que puede reconstruirse de demandas judiciales, peticiones a la Corona y protocolos notariales. Carecemos de información sobre muchos asuntos, y sobre otros, las pruebas documentales de que se dispone son escasas y a veces confusas. De cualquier forma, hasta el más superficial examen del material existente pronto revela que la extracción de plata en Guanajuato era considerablemente distinta del resto de la minería. Su producción era mucho más consistente que en otros centros, de modo que aunque las minas individualmente estuvieran sujetas a grandes fluctuaciones, la región en su conjunto produjo regularmente entre una quinta y una cuarta

parte de la totalidad de la plata mexicana durante todo el siglo XVIII. Este hecho es sumamente notable porque se trataba de un campo minero en el cual varias de las principales minas se explotaban desde el decenio de 1550-60, y además, ningún otro campo poseía una mina como la de La Valenciana. Esta gran empresa, que entre 1769 y 1810 produjo sin interrupción grandes utilidades, prácticamente liberó a Guanajuato de su anterior dependencia en las casas mercantiles y bancos de plata de la ciudad de México. Además, su éxito fue causa de que se creara una compleja estructura de producción y de crédito dentro de la misma ciudad, al mismo tiempo que dicho éxito dependía de tal estructura. En fuerte contraste con lo que sucedió en Zacatecas, en el Guanajuato de fines del siglo XVIII la minería local había alcanzado una completa autonomía financiera. En las páginas que siguen, por consiguiente, será nuestro objetivo describir como fue lograda dicha autonomía. Necesariamente, dada la carencia de libros de contabilidad detallada, tendremos que concentrarnos en el abastecimiento de capital y en los cambios en la organización de la producción.

I

Es necesario describir brevemente la base física de la minería para comprender la exposición subsecuente. Todas las mayores minas del Guanajuato colonial —la de Rayas, la de Mellado, la de Cata, La Sirena, el Tepeyac y La Valenciana— se hallaban situadas sobre una línea de aproximadamente 2 000 metros a lo largo de la Veta Madre, que sigue una dirección bastante recta del sureste al noroeste de la ciudad. La veta en sí se inclinaba 45 grados hacia el suroeste y tenía una anchura aproximada de 60 metros, dividiéndose en tres filones paralelos en esa zona. Tanto horizontal como verticalmente los filones variaban en calidad, ya que en algunos lugares convergían para formar una masa sólida de mineral de plata, mientras que en otros degeneraba en mineral pobre. Según Humboldt, la mena más rica se encontraba entre las 83 y las 290 varas de profundidad¹. Parece que la veta era relativamente seca, de manera que los tiros centrales con malacates operados por caballos bastaban para mantenerlas libres del

¹ Humboldt, *Ensayo Político*, pp. 350-1, UMMA, *Reports*, informe de Lucas Alamán, 28 mayo 1826, VIII-XIII, pp. 8-9. Rafael Orozco, *La industria minera de México, distrito de Guanajuato* (México, 1921).

agua, y que no se necesitaban socavones ². El desagüe, pues, no era un problema técnico demasiado grande para el minero guanajuatense.

En cualquier año en que fijemos nuestra atención, el gran número de tiros superficiales y efímeros que se perforaban tanto a lo largo de la Veta Madre como de otras vetas menores de la región, producía una gran cantidad de mineral, pero a la larga fueron las pocas grandes minas ubicadas a lo largo de la Veta Madre y que ocupaban una fuerte proporción de ella, las que dominaron la producción. Aun cuando se inundaban, sus partes altas eran explotadas por barreteros independientes con buenas ganancias. Además, casi todas esas minas —la de La Valenciana, la de Rayas, la de Mellado y la Sirena— siguieron produciendo grandes cantidades de mineral durante el siglo XIX. Si algunas minas, entonces, permanecían inundadas durante muchos años, se debía a la falta de capital para invertirlo en tiros suficientemente profundos para desaguar el área de trabajo, o a la superabundancia de mineral de baja ley que no cubría los costos de producción de aquella época.

II

Puede comprobarse mediante la historia de las minas de Guanajuato en la primera mitad del siglo XVIII que lo que impidió su desarrollo fue la escasez de capital y el sistema de crédito, que era costoso e inadecuado, porque en esa época la minería estuvo caracterizada por su dependencia del capital procedente de la capital del virreinato, por su endeudamiento con la caja real de la localidad con relación a los pagos de mercurio, por la excesiva división de los derechos de propiedad sobre las minas y, como consecuencia de todo esto, por las frecuentes quiebras de los principales mineros, que a menudo tenían por resultado el abandono de sus minas. El estudio de algunos casos particulares ilustrará mejor la frecuencia de estos factores.

De 1694 a 1699 el doctor Juan Díez de Bracamonte produjo en Rayas 1 200 000 pesos. Calculando que la empresa requiriese avíos por valor de 200 000 pesos para financiar sus costos de operación, hizo un contrato con el banco de plata de Sánchez de Tagle en México para que recibiera la plata producida, pagara sus libranzas, y le enviara

² Humboldt, *Ensayo Político*, p. 352.

efectivo y abastecimientos. Con este apoyo financiero compró cuatro pequeñas haciendas en las proximidades de Guanajuato para abastecer de maíz a la mina, y construyó una planta de beneficio y un horno en la hacienda de Burras muy cerca de Marfil, para procesar el mineral que producía ³. A pesar de estas instalaciones, parece que ni Bracamonte ni el siguiente propietario tuvieron éxito.

En 1712 el superintendente del monopolio del mercurio intervino para embargar y rematar la mina de Rayas a fin de pagar las deudas por el abastecimiento de mercurio, que ascendían a más de 60 000 pesos ⁴. Los embargos de esta clase eran por entonces muy comunes, ya que casi al mismo tiempo tres de los mayores mineros de Guanajuato corrieron la misma suerte ⁵. Es más, tan severas fueron las medidas que la Caja Real del lugar tomó para el cobro de deudas, que por lo menos en dos ocasiones, en 1725 y en 1740, la diputación minera de Guanajuato protestó ante el superintendente del monopolio para señalar que la prosperidad de la ciudad dependía del cuidado con que se hicieran los arreglos para el pago del suministro de mercurio ⁶.

En el caso de Rayas, como no se presentó ningún comprador, el superintendente accedió a rentar la mina a Pedro de Sardaneta en la suma de 10 000 pesos anuales, pero este, aunque logró saldar la deuda del mercurio se atrasó en los pagos a sus aviadores de la capital. La mina de Rayas fue entonces adquirida por su hermano José, que era un minero más experto y emprendedor y que en 1727 compró la totalidad de la propiedad ⁷. En tres años perforó un nuevo tiro de 150 varas de profundidad, servido por dos malacates ⁸, y según la tradición, fue el primer minero que usó pólvora para explosiones subterráneas. Además, Sardaneta fue el inventor del arrastre, instrumento para moler que era mucho más eficaz que el antiguo molino de

³ Juan Díez de Bracamonte. *Por la justicia...* (México, 1699, pp. 3-5, 23-31. AGI, México 1045. Audiencia a Bracamonte, 22 septiembre 1704.

⁴ AGN, Minería 50, declaración de José de Sardaneta, 27 octubre 1724.

⁵ AGN, Minería 111/2, 3, 6, contiene los casos de embargo que tuvieron lugar de 1714 a 1725.

⁶ AGN, Minería 111/4, Diputación minera de Guanajuato al superintendente del monopolio del mercurio, 14 agosto 1725; AGN, Minería 40/1, Diputación minera de Guanajuato al superintendente del monopolio del mercurio, 11 octubre 1740.

⁷ AGN, Minería 50/1, declaración de José de Sardaneta, 13 octubre 1740.

⁸ *Gacetas de México*, 1, 262-3.

pisones ⁹. No obstante, a pesar de sus conocimientos como minero y de la abundante producción de Rayas en esos años, cuando Sardaneta murió en 1741 dejó una sucesión cargada de deudas, que ascendían a 508 000 pesos. Consecuentemente, los acreedores nombraron a Juan Jiménez, *comerciante y aviador del lugar, para que administrara la mina*. No fue sino hasta 1757 que el hijo de Sardaneta, Vicente Manuel, recobró el control de las propiedades de la familia. Tuvo entonces que reconstruir la empresa, porque Jiménez, tratando de reducir los costos, había vendido sencillamente el mineral bruto en la boca de la mina, abandonando todo intento de refinarlo en la hacienda de Burras ¹⁰. Así, aunque Rayas produjo una cantidad considerable de plata —quizá diecisiete millones de pesos entre 1715 y 1777— sus dueños tuvieron ganancias exiguas. Parte de su problema era la mina misma, porque el mineral que producía era, en el mejor de los casos de media ley. Muy importante fue el hecho de que los Sardaneta se hicieron cargo sin mucho dinero de la mina de Rayas, en una época en que claramente requería fuertes inversiones de capital en obra muerta en la forma de tiros nuevos y más profundos. El bajo nivel de utilidades junto con la descapitalización los hundió más en el endeudamiento, aunque en el decenio de 1720-30 un oficial de hacienda declaró que «es la mejor joya que adorna con su riqueza los dominios de la Real Corona» ¹¹.

Las otras dos grandes minas del Guanajuato de aquella época, la de Mellado y la de Cata, se encontraban ambas casi arruinadas por factores muy parecidos, combinados con el efecto de las leyes sobre herencia y la incapacidad de sus propietarios de elaborar un sistema de administración eficiente y unificado. Descubierta en la década de 1550-60, la mina de Mellado fue rehabilitada a fines del siglo XVII por Francisco de Busto y Jerez, pero las 32 acciones de propiedad de la mina fueron después divididas entre sus cuatro hijos, de manera que el mayor, que fue el primer marqués de San Clemente, únicamente recibió ocho acciones. En realidad, el marqués obtuvo la mayor parte de sus riquezas de la mina de Cata, que tuvo una notable bonanza en

⁹ AGI, México 1130, Consejo de Indias, *Consulta*, 22 diciembre 1777.

¹⁰ AHGP, Cabildo, Testamento de Vicente Manuel de Sardaneta, 19 diciembre 1786.

¹¹ AGN, Minería 51, Oficiales de Hacienda al Virrey, 19 noviembre 1727. También dieron testimonio del uso de la pólvora por parte de Sardaneta.

los años de 1724-35; de sus 24 acciones él era dueño de la mitad ¹². El otro accionista principal de ambas minas era Manuel de Aranda y Saavedra, comerciante y aviador de Guanajuato casado con la hermana del marqués, Josefa.

Cada uno de estos hombres ganó una fortuna de unos 300 000 a 400 000 pesos de su mina, cantidad suficiente, podríamos suponer, para establecer sus empresas sobre bases sólidas, pero tanto el marqués como Aranda engendraron diez hijos cada uno, y como ninguno de los dos estableció un mayorazgo, los bienes fueron divididos en partes iguales entre sus herederos. Aranda murió hacia 1730, mientras la mina de Cata pasaba por una gran bonanza, de modo que la distribución de su fortuna entre su viuda y sus hijos tuvo muy pocos efectos inmediatos, aparte de obligar al marqués a obtener inmediatamente crédito en el banco de plata de los Fagoaga. Y ya para fines de la década de 1730-40 tanto Cata como Mellado requerían nuevos tiros. A pesar de todo, la viuda de Aranda había donado 60 000 pesos para la fundación del Colegio Jesuita en Guanajuato, y el marqués había comprado dos haciendas ¹³. El resultado fue que, cuando el marqués murió en 1747, dejó sus bienes enormemente abrumados por las deudas, entre ellos dos minas en decadencia que necesitaban urgentemente ser rehabilitadas ¹⁴ (véase tabla 37).

TABLA 37
BIENES DE LA SUCESION DEL PRIMER MARQUES DE SAN CLEMENTE
h. 1747 (en pesos)

<i>Activo</i>		<i>Pasivo</i>	
Hacienda de Villachuaro	325 000	Manuel Aldaco	160 000
Hacienda de San José		A la Iglesia	80 000
de la Cañada	54 834		
Hacienda de beneficio	28 943		
Casa	45 162		
8 acciones de la			
Mina de Mellado	} No se les asigna nin- gún valor		
12 acciones de la			
Mina de Cata			
	453 939		240 000

¹² Marmolejo, *Efemérides*, I, 145, 165-6; II, 29. Véase también AGN, Minería 5/1, testimonios.

¹³ AGN, Historia 109/5, 23 mayo 1732.

¹⁴ AGN, Vínculos 158/1, contiene el inventario de estos bienes.

La distribución de los bienes sucesorios fue demorada hasta que no se liquidara la enorme deuda que tenían con Aldaco, pero las minas producían muy poco y no se presentó ningún comprador dispuesto a pagar los 200 000 pesos en que al final querían vender la hacienda de Villachuato. Aldaco agregó además a su cuenta 20 000 pesos por concepto de intereses. En 1753, a demanda suya, la Audiencia falló que la hacienda de Villachuato fuera entregada en su totalidad a Aldaco ¹⁵. Eliminada la carga de las deudas, los bienes de la sucesión de San Clemente fueron por fin adjudicados en 1756. La viuda (*segunda esposa*), recibió 115 800 pesos, $3\frac{2}{3}$ acciones de la mina de Cata y $2\frac{2}{3}$ de la de Mellado. Los diez hijos recibieron sumas que iban de 24 000 a 30 000 pesos, y a cada uno se le adjudicaron $1\frac{1}{3}$ de acciones de Cata y $\frac{4}{3}$ de acción de la de Mellado, pero esta repartición era en gran parte nominal, ya que comprendía dotes matrimoniales ya pagadas y deudas totalmente incobrables. Cualquiera que haya sido el caso, el hecho es que provocó intensos disgustos entre los herederos y su efecto fue la destrucción del capital acumulado por dos generaciones. Otra consecuencia, más inmediata, de esta división testamentaria, fue el abandono en la práctica de las minas de Mellado y de Cata.

Las relaciones de San Clemente con el banco de plata de Fagoaga y su endeudamiento cada vez mayor, es ejemplo de un problema general que tenían muchos de los mineros de Guanajuato en aquella época, ya que dependían de los establecimientos de la capital para que les proporcionaran crédito. En 1736 los Fagoaga llevaban a los mineros de Guanajuato ¹⁶ las cuentas que aparecen en la tabla 38.

El banco de plata propiedad del conde de San Pedro del Alamo también tenía tratos con los mineros guanajuatenses. En los años de 1737-40 Bernardo Fernández de Riaño, a quien según la tabla anterior los Fagoaga consideraban un deudor dudoso, giró libranzas contra el conde por valor de más de 31 000 pesos ¹⁷. De la misma manera, Antonio Jacinto Díez Madroñero dependía fuertemente del

¹⁵ Con relación a las demandas y pleitos judiciales subsecuentes, causadas por la división de los bienes de San Clemente, véase AGN, Vínculos 150.

¹⁶ AGN, Vínculos 7, inventario de los bienes de Fagoaga, verificado el 10 diciembre 1736.

¹⁷ AGN, Vínculos 176/2, demanda del Conde de San Pedro del Alamo, 12 mayo 1741.

TABLA 38

CONTABILIDAD DEL BANCO DE PLATA DE FAGOAGA EN RELACION
A LOS MINEROS DE GUANAJUATO, h. 1736

<i>Créditos proporcionados</i>	<i>Pesos</i>
Buenos: Simón Francisco de Arroyo	57 493
José Antonio Mendizábal	44 464
Tomás de Zertuche	13 331
Dudosos: Bernardo Fernández de Riaño	24 800
Alonso Fernández	19 787
	159 875
<i>Deudas del banco</i>	
Marqués de San Clemente	96 896
Baltazar Pardo de Figueroa	19 995
Manuel González de Zedillo	7 417
Francisco Alipasolo	513
	124 821

ba para el financiamiento de sus empresas mineras¹⁸. No obstante, el uso de los bancos de plata para obtener el crédito y efectivo necesarios para sufragar los gastos de operación se hizo difícil cuando varios mineros prominentes siguieron al marqués de San Clemente en la carrera de endeudamiento. Es de hacerse notar que tres de los seis yernos del marqués dejaron bienes sucesorios con un valor inferior al de las deudas que tenían. Dos de los tres yernos de Manuel de Aranda murieron en bancarrota¹⁹.

Durante la década de 1750-60, al empeorar la situación minera en Guanajuato, se iniciaron dos proyectos importantes de rehabilitación de minas, con la ayuda de los bancos de plata. En 1749 Juan de Quintana, yerno de Manuel de Aranda, obtuvo un préstamo de 51 000 pesos de Manuel de Aldaco para rehabilitar la mina de Mellado. No tuvo éxito, y después de su muerte en 1756 sus bienes sucesorios fueron embargados para liquidar 61 000 pesos a Aldaco,

¹⁸ AHG, Bienes Difuntos, 1761-79, Testamento de Madroñero, 16 noviembre 1779.

¹⁹ Se trata de Lorenzo de Olazábal, Antonio Jacinto de Díez Madroñero y Gonzalo de Aranda Saavedra: AGN, Minería 158/3, Testamento de Olazábal, 18 septiembre 1733. Respecto a Díez Madroñero véase la nota precedente, y respecto a Aranda véase AHGP, Cabildo, 11 octubre 1770 y 26 junio 1777. Los yernos de Aranda eran José Antonio Mendizábal y Juan Antonio de Quintana; véanse, respectivamente, AGN, Vínculos 144/1, embargo de mercancías, 11 octubre 1751, y nota 20.

15 715 a la Caja Real por concepto de mercurio y 11 040 a la Iglesia ²⁰. Durante aquella misma década el banco de plata de Valdivielso patrocinó económicamente a otro minero importante, Lorenzo de Incháuregui, para que emprendiera una rehabilitación a fondo de la mina de la Sirena. Se invirtieron unos 400 000 pesos pero, por lo que parece, con poco éxito ²¹. Así pues, las dos principales empresas de la década de 1750-60 fueron financiadas por bancos de plata, y ambas tuvieron un resultado igualmente desastroso. Después de aquella década de reveses, no debe sorprendernos que los bancos de plata hayan suspendido sus operaciones en Guanajuato.

III

Al retirarse de la escena los bancos de plata con graves pérdidas, un grupo de comerciantes-aviadores residentes en Guanajuato ocupó su lugar. Actuando con gran cautela y talento, varios comerciantes habían logrado amasar una fortuna precisamente mientras muchos mineros del lugar se precipitaban hacia la bancarrota. Ya en 1760 estos negociantes importaban artículos europeos directamente de la feria de Jalapa, sin ninguna intervención de los almaceneros de México ²². Distribuían esas mercancías a crédito a los comerciantes menores de la ciudad y de los pueblos mineros, comerciaban intensamente con los abastecimientos industriales que la minería requería, y tenían función de aviadores de los rescatadores menores. En algunos casos también financiaban a los mineros. La competencia era fuerte: en 1743 se contaron en la ciudad 80 «tiendas de gruesa», que eran tiendas que vendían artículos de importación, y otros 73 establecimientos ubicados en los pueblos mineros de las cercanías. En 1793 el intendente contó a 335 comerciantes sólo en la ciudad, es decir, uno por cada 96 habitantes ²³. Tal concentración inevitablemente obligó a muchos

²⁰ AHG, Bienes Difuntos, 1742-61, arreglo sucesorio, 27 julio 1756. Véase también AHGP, Cabildo, 29 febrero 1804.

²¹ BRP, MSS 2824, Miscelánea de Ayala 10, f. 154.

²² BN (México) 1396, f. 415, protesta de los comerciantes de Veracruz contra la supresión de las ferias de Jalapa, 8 enero 1785: «ni los poderosos comerciantes de México, ni los ricos de Guanajuato, ni de otras ciudades opulentas del reino han venido aquí como lo hacían a Jalapa a emplear sus caudales en la compra de nuestros efectos».

²³ Villaseñor y Sánchez, *Theatro americano*, p. 41. AGN, Historia 523, ff. 76, 88.

negociantes a actuar como aviadores para obtener mercados para sus mercancías, porque debe recordarse que el aviador tenía el derecho a proveer a su aviado todos los materiales industriales que eran necesarios, ya fuera para la extracción o para el beneficio de mineral.

Los materiales necesarios para el beneficio, tales como el plomo, la sal y el cobre, eran muy atractivos para una empresa mercantil. Naturalmente que a veces los comerciantes trataban de aumentar los precios maniobrando en el mercado, como sucedió por ejemplo en 1790 cuando un rico comerciante de Guanajuato, llamado José Pérez Marañón, firmó un contrato con el dueño de la mina de plomo de Targea, ubicada en la jurisdicción de San Luis de la Paz, y que era la principal fuente de abastecimiento de los fundidores de Guanajuato. Compró mil cargas a 10 pesos cada una, con la condición de que el propietario de la mina no le vendiera plomo a ninguna otra persona durante un período de seis meses. Luego aumentó el precio, pero la maniobra le salió mal porque la diputación minera intervino y fijó un precio de 13 pesos por carga, imponiendo a Pérez Marañón una multa de 500 pesos ²⁴. La diputación también defendía a la minería contra la especulación comercial externa. En 1804 un grupo mercantil de Guadalajara compró toda la existencia de sal de Colima, que era el abastecedor principal de Guanajuato. La diputación, que estimaba las necesidades de la ciudad en 500-600 cargas semanales, entró al mercado comprando 4 000 cargas en el campo norteño de Guarisamey, y logró localizar otras 2 000 en Tonatlán y en la misma Colima ²⁵. No cabe duda que maniobras semejantes también ocurrieron en algunas ocasiones para comprar magistral, o sea, piritas de cobre, en Tepezala, cerca de Zacatecas ²⁶.

Podemos darnos cierta idea del consumo anual de algunos artículos en la ciudad de Guanajuato mediante la lista que aparece en la tabla 39, elaborada por los oficiales de alcabalas del lugar ²⁷. Por desgracia sólo aparecen las cantidades y no los valores.

Cualesquiera que fuesen las ganancias al alcance de quienes se dedicaban al comercio al mayoreo o al menudeo, no podían compararse con las que se obtenían en la minería. Todos los comerciantes

²⁴ AGN, Minería 52/16, Diputación de Guanajuato al Virrey, 28 febrero 1790.

²⁵ AGN, Minería 80/4, declaración de la Diputación de Guanajuato, 9 julio 1804.

²⁶ Henri St. Clair Duport, *De la Production des Métaux Précieux au Mexique* (Paris, 1843), pp. 94-5.

²⁷ AGI, México-1391, Informe del director de alcabalas, 7 octubre 1778.

TABLA 39

ENTRADA DE MERCANCIAS A GUANAJUATO, ENERO A AGOSTO
(inclusive) de 1778

Sal	10 802 cargas
Piritas de cobre	1 903 cargas
Litargita (óxido de plomo)	549 cargas
Plomo	108 cargas
Ocote	832 ¹ / ₂ cargas
Jarcia	131 cargas
Rodillos de madera	747 ¹ / ₂ docenas
Partes de madera para arrastres	577 piezas
Tablas	517 060
Clavos	480 512
Hierro	1 926 quintales
Acero	300 quintales
Mulas	162
Caballos para malacates	58

más ricos de Guanajuato se hacían llamar «comerciantes y mercaderes de plata». Estas personas a menudo comenzaban comprando plata en el mercado libre a los rescatadores independientes, pero pronto se convertían en aviadores de éstos por contrato y, en pocos casos, de los mineros. ¿De dónde procedía el capital para financiar estas operaciones? Generalmente empezaban su negocio con un pequeño préstamo de algún otro comerciante, con frecuencia un pariente o un paisano, o de la Iglesia o de una viuda rica. También emprendieron el camino del éxito varios comerciantes principales de Guanajuato al casarse con una heredera. Con unos cuantos miles de pesos en bolsillo era posible amasar una fortuna convirtiéndose en aviador. Era posible, pero bien difícil, porque lograrlo exigía una inteligencia considerable para los negocios, a fin de obtener ganancias de rescatadores y mineros sin comprometerse demasiado con ellos. La llave del éxito era saber mantener la liquidez. Para sustanciar esta generalización, examinemos las operaciones mercantiles de un «mercader de plata» de éxito.

Hacia 1761, es decir, después de un decenio de reveses para los dueños de minas de Guanajuato, Martín de Septién y Montero, comerciante montañés, tenía establecido un negocio que valía más de 300 000 pesos. Había amasado esta fortuna «por mi propia cuenta y a expensas de mi industria, cuidado y trabajo personal». Su éxito no fue fortuito, porque tenía dos tíos que eran comerciantes en el lugar, uno de los cuales, Agustín de Septién y Montero, valía más de 200 000

pesos. Tales parientes le proporcionaron un valioso apoyo. Por ejemplo, en 1744 Juan Fernando, hermano de Martín, obtuvo un préstamo de 20 000 pesos de una viuda residente en la ciudad de México mediante el aval de su tío y de sus hermanos ²⁸. No obstante, tal apoyo se empleaba de acuerdo al talento comercial de cada negociante individual. Ninguno de los dos hermanos de Martín de Septián, Francisco y Juan Fernando, se hizo particularmente rico. ¿Cómo entonces pudo Martín amasar su fortuna? El examen del inventario de sus bienes sucesorios que aparece en la tabla 40 puede darnos alguna indicación ²⁹.

No podemos identificar a todos los deudores; López, Miera, Uribarrem y Díaz de Cossío recibían mercurio del monopolio real, y

TABLA 40

BIENES DE MARTIN DE SEPTIEN Y MONTERO,
mayo de 1761 (en pesos)

	<i>Activo</i>	<i>Pasivo</i>
Tienda y mercancías	19 186	
Propiedades urbanas	18 700	
Plata y oro en barras	135 028	
Créditos proporcionados	144 926	
Renglones menores	1 625	16 314
Menos pasivo	319 465	16 314
Saldo	303 151	
(Contiene una lista de deudores, entre los cuales los más importantes son los siguientes):		
Pedro Gerardo López	20 589	
Fernando de Miera	27 090	
José Antonio de Uribarren	9 883	
Francisco Díaz de Cossío	10 000	
Juan José de Angulo	11 002	
Francisco Javier de Rodríguez	13 134	
José Pérez Marañón	5 549	
Joaquín Pérez Marañón	6 000	
Pedro Luciano Otero	1 719	
Varios menores	39 960	
	144 926	

²⁸ AHGP, Cabildo, 13 febrero 1744.

²⁹ AHG, Bienes Difuntos, 1742-61, Inventarios, 6 mayo 1761.

por consiguiente eran mineros o cuando menos rescatadores. Por otra parte, los dos Pérez Marañón y Otero eran también comerciantes; Otero era un comerciante en pequeño que vendía en los pueblos mineros, y sin duda Septién lo abastecía de mercancías a crédito.

La curiosa distribución de recursos que nos revela el inventario es difícil de explicar, a menos que supongamos que Septién estaba acumulando en aquella época deliberadamente fuertes sumas en efectivo. El hecho de que la fecha de mayo de 1761 fue intermedia entre la llegada de dos flotas, la de 1760 y la de 1762, fortalece esta hipótesis; de cualquier forma, no hay duda de que Septién mismo fue o mandó un agente a Jalapa³⁰. Esto explicaría entonces por qué conservaba en efectivo una tercera parte de su capital, y por qué su existencia de mercancías era tan baja. La gran cantidad de barras de oro y plata la reunió, ya fuera mediante una compra casual en el mercado libre, o mediante contratos con los rescatadores a quienes proporcionaba efectivo y mercancías. Por desgracia la lista de deudores no nos indica si se trataba simplemente de préstamos al 5 por 100 garantizados por hipotecas, o créditos otorgados mediante contratos de avío.

La característica más sobresaliente de los bienes de Septién es su extrema liquidez; era dueño de varias casas y tenía mercancías en existencia, sin embargo estos bienes apenas ascendían a poco más de la décima parte de su capital, mientras que el resto estaba invertido en efectivo, barras de metal precioso y préstamos. Y al contrario de los Bassoco y de los Fagoaga no recurría ni a depósitos ni a préstamos para financiar sus operaciones, de manera que era totalmente dueño de su capital. Más que comerciante, era aviador y financiero.

Sus negocios continuaron prosperando en los años que siguieron a 1761, de modo que cuando se hizo un segundo inventario en diciembre de 1779, después de su muerte, sus bienes valían casi el doble. Fueron entonces clasificados como aparece en la tabla 41³¹.

Septién se había siempre negado a adquirir haciendas de beneficio, minas o haciendas; la única inversión fija que le interesaba era la propiedad urbana dentro de la ciudad de Guanajuato. Sin embargo, al abolirse el sistema de convoyes desapareció la necesidad de acumular

³⁰ Lerdo de Tejada, *Comercio exterior*. Apéndice 1, 2, sin paginación.

³¹ AHG, Bienes Difuntos, 1761-79. Testamento de Septién, 19 diciembre 1778; Inventario aprobado 10 diciembre 1779.

TABLA 41

BIENES DE LA SUCESION DE MARTIN DE SEPTIEN Y MONTERO.
DICIEMBRE DE 1779. (En pesos).

Tienda administrada por Francisco de Septiën y Arce	36 325
Tienda administrada por Manuel García de Quintana	274 975
Propiedades urbanas	94 044
Plata y joyas, etc., particulares	10 881
Préstamos concedidos con garantía hipotecaria	110 073
Legados ya pagados	47 928
Varios renglones menores	19 600
	593 926

TABLA 42

CONTABILIDAD DE LA CASA MERCANTIL DE FRANCISCO
DE SEPTIEN Y ARCE, DICIEMBRE DE 1779 (en pesos)

	<i>Activo</i>		<i>Pasivo</i>
Mercancía	17 558	Capital en nov. 1776	33 344
Efectivo	1 705		
Créditos proporcionados	24 160		
TOTAL	43 423		
Capital	33 344		
Utilidades	10 078		
Utilidades por restar	7 097		
Saldo para la sucesión	36 325		

grandes cantidades de efectivo, de manera que se colocó un capital mayor en mercancía y en préstamos. Los inventarios de las dos tiendas que aparecen en las tablas 42 y 43 nos permiten comprender el alcance de sus negocios.

De los créditos concedidos por el almacén dirigido por Septiën, el reglón mayor ascendía a 16 793 pesos en avíos proporcionados al rescatador Felipe de Soria. Francisco de Septiën y Arce, el administrador, recibió 547 pesos como participación en las utilidades del período de 1776-9.

El inventario del almacén dirigido por Quintana, que era más importante, es más extenso y más confuso.

En su calidad de administrador, Quintana recibía un porcentaje de

TABLA 43

CONTABILIDAD DE LA CASA MERCANTIL DE MANUEL GARCIA
DE QUINTANA (en pesos)

	<i>Activo</i>	<i>Pasivo</i>
Mercancía	82 679	
Efectivo	15 679	Invertido en la tienda de Arce 32 965
Plata en barras	20 757	Capital de Quintana más 1/3 o sea utilidades
Avíos a rescatadores	122 978	desde 1776 36 803
Créditos proporcionados a comerciantes	45 537	Deudas por pagar 21 146
Inversión para el abaste- cimiento público de carne al matadero municipal	42 153	Otros 9 616
Inversión en el almacén de Arce	32 965	100 530
Gastos de Quintana	9 613	
Deudas incobrables	602	
Varios renglones menores	2 542	
Total bruto en 1779	375 505	
Menos total anterior (1776)	308 942	
Utilidades en tres años	66 563	
Total neto en 1779, restando el pasivo	274 975	

las utilidades, y luego lo reinvertía en el negocio para que le produjera, de modo que ya en 1776 tenía 24 224 pesos como participación en el capital de la firma. Está bastante claro cuáles eran las actividades del almacén: todavía distribuía mercancías a crédito a los comerciantes menores, y avíos a los rescatadores; también había extendido sus actividades al obtener un contrato para abastecer de carne al municipio. La lista de rescatadores indica la concentración de los financiamientos que proporciona la firma.

	<i>Pesos</i>
Pedro de Palencia	31 611
Alejandro de Araujo	21 996
Pedro de la Riva	22 576
Pedro de Quijano	5 073
José Campero Montero	10 115
Manuel Güemes de la Concha	31 604
	122 978

Es difícil cuantificar la importancia que tenía este apoyo financiero para la minería, pero el hecho es que en 1782 la firma de Septién

recibió un poco más del 9 por 100 del mercurio distribuido aquel año, para que lo proporcionara a sus rescatadores.

Además, Septián también prestaba dinero al 5 por 100 de interés, como se acostumbraba; sus principales deudores eran:

	<i>Pesos.</i>
Bernardo Fernández de Riaño	38 000
Manuel Roderio de Garnica	10 000
Antonio de Briones	12 000
Antonio de Septián y Castillo y su mujer María Gertrudis Jordán y Primo	16 000
Varios menores	—
	110 073

Fernández de Riaño, prominente minero, había obtenido en 1763 un préstamo de 18 000 pesos a diez años, dando como garantía sus haciendas de Silao; en 1776 renovó el préstamo y obtuvo otro por la suma de 20 000 pesos ³². Antonio de Septián era un pariente lejano residente en Querétaro.

Si procedemos a organizar el inventario, obtenemos el siguiente balance de los principales renglones:

	<i>Pesos</i>
Mercancías	100 237
Efectivo y metal en barras	38 141
Total de créditos y préstamos	302 748
Inversión en la compra de carne	42 153
Propiedades urbanas	94 044

Más que nada, Septián vivía de sus posibilidades como fuente de crédito; en una minería que sufría de descapitalización crónica evitó siempre la inversión en obra muerta y en cambio tuvo mucho cuidado en conservar la liquidez de su capital, colocándolo principalmente en préstamos a corto plazo; y cuando los llegaba a conceder a largo plazo exigía una garantía firme y un interés del 5 por 100. Así, Septián representaba al típico comerciante capitalista que financiaba la industria del beneficio de metales. Podemos apuntar que sus ganancias sobre el capital no eran exageradas, ya que lo duplicó en un período de dieciocho años; el 5 por 100 que recibía sobre los préstamos a largo plazo no era muy inferior a lo que le producían sus negocios

³² AHGP, Cabildo, 26 febrero 1776.

como comerciante o como aviador; el almacén de Quintana tuvo una utilidad media sobre el capital del 5.9 por 100 en los tres años de 1776 a 1779, mientras que el promedio de Septién y Arce fue del 9 por 100. Tales cifras no discrepan mucho de las estimaciones de Meave en los primeros veinte años en que estuvo al frente de la casa mercantil de Fagoaga.

Septién heredó todos sus bienes a su joven esposa y a su única hija. La viuda volvió a casarse, con el sobrino de su difunto marido, Francisco de Septién y Arce ³³. La íntima relación entre el éxito en los negocios y el parentesco se ilustra aún más con el hecho de que el otro administrador, Manuel García de Quintana se casó con una sobrina de su patrón. El tercer cajero, Martín de la Riva, llegó a ser más tarde un comerciante importante. Su hermano Pedro tenía una planta de beneficio que contaba con el apoyo financiero de la casa Septién. Todos ellos, como la mayoría de los rescatadores que figuran más arriba, eran montañeses.

Otra numerosa familia mercantil eran los Pérez Marañón. Su caso nos ilustra el hecho de que las fortunas mercantiles, al igual que las mineras, podían fácilmente desintegrarse por las leyes de herencia. Como en el caso de los Septién, llegaron a Guanajuato tres hermanos; dos de ellos murieron en circunstancias económicas modestas, pero el tercero, José Pérez Marañón, llegó a ser comerciante y aviador importante. A su muerte en 1793 dejó una herencia valuada en 327 572 pesos que comprendía tres tiendas, una pequeña planta de beneficio, un pequeño rancho y dos casas. La existencia de mercancía valía 158 106 pesos y las tiendas habían proporcionado créditos por la cantidad de 130 466 pesos ³⁴. El valor de los inmuebles, entonces, solamente ascendía aproximadamente al 12 por 100 de todos los bienes sucesorios. Pérez Marañón era aviador de no menos de 19 rescatadores, pero tuvo buen cuidado de no verse envuelto en la minería extractiva ³⁵. Parece que la única pequeña planta de beneficio de la que era propietario la había adquirido en pago de una deuda. Su sistema de invertir era, así, muy similar al de Martín de Septién.

Este negocio, evidentemente floreciente, fue destruido casi totalmente por una adjudicación testamentaria clásica entre la viuda de

³³ La hija murió poco después. AHGP, Cabildo, 10 noviembre 1789.

³⁴ AHGP, Cabildo, 20 diciembre 1790, 17 agosto 1793.

³⁵ AGI, México 2209, Valcárcel a Mangino, 15 julio 1782.

Pérez Marañón y sus siete hijos. Después de que pagaron algunos legados de caridad y de que se restó de la parte de la viuda el pequeño capital prenupcial, cada hijo recibió 15 085 pesos en propiedades y mercancías, y 12 598 pesos de participación en los créditos pendientes, es decir, en total apenas una cifra de 27 687 pesos. Por ejemplo, María Manuela, la hija que se casó con el licenciado José María de Seprién y Montero, recibió una pequeña casa que valía 7 313 pesos y el resto de su herencia en mercancía y en créditos por cobrar. Es muy raro que las existencias y los créditos de las tres tiendas hayan sido divididos en partes iguales entre todos los hijos, pero el hecho es que en el curso de una generación una fortuna mercantil importante se disolvió, y la mayor parte de la gran empresa desapareció.

IV

A principios del decenio de 1760-70 la situación de la minería en Guanajuato parecía ser francamente precaria. Varias de las mayores minas estaban inundadas y las que seguían en producción apenas si daban utilidades a sus dueños. Un representante de la ciudad se quejó ante la Corona «que su vecindario se disminuía notablemente y se hallaba en suma pobreza. Que las más de las minas descubiertas no se trabajan. Que los mineros empobrecían y desamparaban las labores». Y en apoyo de su declaración, el rector del Colegio Jesuita, *Padre Ignacio Coromina*, declaró que: «de los que verdaderamente trabajan las minas, no hay ni un solo acomodado, ni que no está lleno de necesidades, censos y deudos». ³⁶ Es significativo que *Coromina* haya limitado su comentario a los propietarios, porque evidentemente había varios comerciantes ricos en la ciudad. Además, en aquella época los trabajadores de las minas eran conocidos por sus altos ingresos. Muchos tiros eran explotados únicamente por *buscones*, que recibían la mitad del mineral que extrajeran. Hasta el año de 1757 la mina de Rayas también vendía su mineral. En consecuencia, había en la ciudad numerosos rescatadores que compraban el mineral tanto a los dueños como a los trabajadores de las minas.

Era curioso que los propietarios de minas altamente productivas se encontraran endeudados y sin posibilidades de obtener crédito,

³⁶ AGI, México 2251, Diputación minera de Guanajuato al Virrey, 30 octubre 1760.

mientras que lo que debían haber sido sus ganancias caía en manos de los trabajadores de los rescatadores y de los comerciantes. Además, el retiro de los bancos de plata hizo que estos propietarios de minas cayeran en las manos de los aviadores locales, los cuales, sin embargo, como ya se ha visto, tenían muy poca disposición a proporcionarles apoyo financiero. Por ejemplo, Vicente Manuel de Sardaneta, dueño de la mina de Rayas, tuvo grandes dificultades para obtener el crédito necesario para financiar sus operaciones, y en el curso de siete años después de haber recuperado el control de su mina, hacia 1764, fue de nuevo obligado a ceder la administración a sus aviadores Juan José de Compains y Gabriel de Arechederreta, dos comerciantes vascos casados con miembros de la familia Busto³⁷. No logró liquidar sus deudas sino hasta 1769.

Esta nueva dependencia en los comerciantes-aviadores locales está comprobada, a mayor abundamiento, por el testimonio de Bernardo Fernández de Riaño, principal accionista de la mina de San Lorenzo. En su testamento dejó la lista de todos los que habían sido sus aviadores desde la década de 1720-30 hasta 1784³⁸. En los primeros años había recibido apoyo financiero de los alcaldes mayores de Guanajuato y de los dos bancos de plata que los Fagoaga y el conde de San Pedro del Alamo operaban en la ciudad de México, pero más tarde estos fueron sustituidos por comerciantes residentes en la misma Guanajuato. Juan Compains y su socio Gabriel de Arechederreta y más tarde por Martín de Septién. Pero de este último sólo pudo obtener prestados 38 000 pesos únicamente por la razón de que podía dar la garantía de varias pequeñas haciendas en la cercana región de Silao, de las que era propietario. Septién no era su aviador, sino que simplemente le hacía préstamos a diez años y con un interés anual del 5 por 100. Además, Fernández de Riaño, ofreciendo también la garantía de sus tierras, obtuvo de la Iglesia un préstamo de 23 000 pesos³⁹. Todo esto nos indica claramente que el retiro de los bancos de plata había creado un vacío en el crédito que las casas mercantiles del lugar no estaban dispuestas a llenar, excepto con la mayor cautela en cuanto a la garantía.

Sin embargo, durante el decenio que se inició en 1770, se invirtie-

³⁷ AHGP, Cabildo, Testamento, 19 diciembre 1786.

³⁸ AHGP, Cabildo, 26 febrero 1776.

³⁹ AMM 150, 13 septiembre 1806.

ron las tendencias que parecían dominar en el anterior. Surgió una nueva estructura de la producción, en la cual el balance de utilidades cambió a favor de la minería extractiva. Hasta entonces, los trabajadores mineros de Guanajuato habían sido bien conocidos tanto por su indisciplina como por la gran cantidad de mineral que recibían por concepto de partidos. Ya desde 1663 el ayuntamiento había patrocinado el establecimiento de un convento franciscano en la ciudad porque los frailes tenían mayor influencia sobre el pueblo que el clero secular, y por ello podían ser un mejor elemento para la supresión de disturbios. Declaró: «que la plebe minera, de condición indomable y altura, promovía frecuentemente y por las más leves causas alborotos y tumultos terribles» ⁴⁰. Se esperaba que los franciscanos lograsen controlar tales desórdenes.

Es dudoso que los motines se hayan hecho menos frecuentes, ya que, por ejemplo, en 1732 un intento de la Corona de recaudar el tributo entre los trabajadores mineros provocó inmediatamente una sublevación armada que exigió la presencia de un oidor para su pacificación, otorgándoseles la exención del tributo ⁴¹. La descripción de Guanajuato que nos ha dejado el capuchino español padre Ajofrín, que visitó la ciudad en 1763, corrobora este hecho. Según él, el modo de vida de los mineros era desenfrenado y pródigo. Afirmaba el fraile que no era raro que un trabajador terminara la semana con 300 pesos en los bolsillos ⁴², ganancias que se gastaban siempre inmediatamente. «Compran tafetanes, cambra y fino, encajes delicados, telas ricas, se visten como príncipes; se hallan el lunes sin un real y para comer aquel día venden sus galas por cuatro reales y bajan desnudos a las minas». Opinó que eran hombres muy extraños: «Es cosa risible ver a estos tiznados con una cara como diablos, unas manazas negras y feas en extremo, vestidos de gala, con calzón de terciopelo, casaca de tisú, franjones de oro, camisola rica de Holanda etc. que les cae como se deja discurrir». Relata que un mulato había descubierto una pequeña mina; durante la breve bonanza, que duró cinco semanas, llegaron unas dos mil personas para participar en la gran francachela en la que el mulato gastó sus ganancias, en total unos 40 000 pesos.

⁴⁰ Marmolejo, *Efemerides* I, 207-9.

⁴¹ AGN, Minería 7612, Informe de la Diputación minera, 6 abril 1735.

⁴² Véase Ajofrín, *Diario* I 213-15.

El dinero para estas orgías no procedía tanto de los salarios, ya que el sueldo normal era de 4 reales diarios, sino de los partidos. Pedro de Anza, que fue colaborador cercano de José de la Borda, declaró: «en cuanto a la costumbre de partidos hay mucha diversidad... Ví partir a la cuarta parte, a la octava, doceava y hasta la veintena por ser rico el metal, pero en Guanajuato es tan exorbitante, que pidiendo corte requio les parten la mitad de lo más que sacan, y en mi inteligencia a ahí y de otros abusos a favor de la gente resulta el atraso de aquel Real» ⁴³.

Tanto la indisciplina como las ganancias excesivas terminaron en los años que siguieron a la severa represión de la revuelta de 1767. El nuevo regimiento militar y más aun el piquete de vigilancia permanente, dieron a los propietarios de minas un control más efectivo de sus trabajadores. Y no fueron lentos para aprovecharse de su nuevo poder. En 1774 los oficiales de Hacienda observaron que Manuel Jiménez, administrador de Rayas, había ya abolido en la mina el pago de partidos. Además, se negaba a pagar más de cuatro reales diarios y estableció una tienda de raya en la que se gastaba la mayor parte de tan exigua paga. Los oficiales de Hacienda se quejaban en estos términos: «Jamás se ha visto su comercio tan aniquilado y abatido que en el tiempo presente. Originado de que a los operarios de las minas les han quitado los partidos que les daban y era costumbre antiquísima hasta pocos años y en la tierra adentro aún permanezcan» ⁴⁴. Parece, entonces, que la mina de Rayas estaba tratando de obtener las utilidades que hasta entonces habían ido a parar a manos de los trabajadores y de los comerciantes. Una petición de estos últimos, que solicitaron en 1793 el permiso para cerrar sus establecimientos los domingos, corrobora que había ocurrido un marcado cambio en los hábitos del pueblo en cuanto a las compras. Anteriormente se había otorgado el *permiso episcopal para que las tiendas permanecieran abiertas*, para poder vender a los trabajadores que los domingos acudían a la ciudad, para gastar en su centro sus ganancias de la semana. Pero ya en 1793 los mineros hacían sus compras en los pueblos ⁴⁵. Es evidente que los

⁴³ Chávez Orozco, ed., *Conflicto de trabajo*, p. 99.

⁴⁴ AGN, Minería 11/1, Caja Real de Guanajuato a Bucareli, 3 febrero 1774.

⁴⁵ ACM, 688, petición de los comerciantes de Guanajuato, 2 enero 1793.

motines y la disipación de fin de semana de que nos habla Ajofrín había desaparecido desde hacía mucho tiempo.

Con la eliminación de los partidos, el siguiente paso obvio del propietario minero inteligente era establecer una empresa integrada verticalmente. Tal era ciertamente el sistema en uso en campos tales como Real del Monte y Sombrerete. En Guanajuato, el intento más notable de lograr esto lo hizo la mina de Rayas. Hacia 1773 esta mina producía de 600 a 700 cargas de mineral a la semana, y todo era refinado en la hacienda de Burras, propiedad cercana a Marfil, que era de beneficio al mismo tiempo que se cultivaban sus campos. Se establecieron tiendas de raya tanto en la mina de Rayas como en la hacienda de Burras. Esta medida, aunada a la supresión de los partidos de los trabajadores, tuvo por consecuencia que los dueños, que era la familia Sardaneta, por fin recibieran utilidades en proporción a la escala de sus operaciones. Vicente Manuel de Sardaneta, que era el accionista principal, estimó que la mina tuvo, en el período de 1757 a 1774, *una ganancia total de 480 768 pesos, o sea, un poco más de un promedio de 28 280 pesos anuales*. Pero no fue sino hasta 1772 que logró finalmente liquidar las deudas que gravaban a la mina desde 1729. Durante la década de 1770-80, al aumentar por fin los ingresos de la empresa integrada, Sardaneta compró una cadena de haciendas y ranchos en Irapuato y Silao ⁴⁶. Se convirtió entonces en marqués de San Juan de Rayas. Sin embargo, esta racha de prosperidad terminó con la década, pues en 1780 la mina se inundó inesperadamente y no fue rehabilitada sino hasta 1799.

A pesar de todo, el sistema de integración vertical seguido en Rayas no se convirtió en regla para el futuro. Los dueños de la mina de La Valenciana, recientemente descubierta, siguieron una política distinta. En 1760 Antonio de Obregón y Alcocer abrió la mina en una sección de la veta que, según se creía hasta entonces, era de mineral de baja ley. Y así fue, hasta una profundidad de unas 60 varas. Obregón se tardó ocho años en perforar un tiro para llegar hasta la zona central de la veta, que era muy rica. Durante ese período tuvo el apoyo financiero de un comerciante en pequeño llamado Pedro Luciano de Otero, que a su vez obtenía mercancía a crédito del almacén de Martín de Septién. Cada uno era propietario de diez

⁴⁶ Véase el testamento de Sardaneta, AHGP, Cabillo, 19 diciembre 1786.

acciones de la mina, y las cuatro restantes estaban en poder de un socio inactivo llamado Juan Antonio de Santa Ana ⁴⁷.

A partir de 1769 la producción de La Valenciana aumentó vertiginosamente, tanto que para 1774 ya producía entre 800 y 1 000 cargas de mineral a la semana, es decir, más que la mina de Rayas ⁴⁸. Un desarrollo tan rápido naturalmente implicaba fuertes costos de operación y una cuantiosa inversión en la perforación de tiros, en la instalación de malacates y en el establecimiento de haciendas de beneficio. ¿Dónde obtuvieron Obregón y Otero, ninguno de los cuales disponía de recursos financieros, el capital para tales inversiones?

En primer lugar, redujeron los costos de mano de obra concediendo a sus trabajadores un partido moderado, pero insistiendo en que los barreteros y barrenadores compraran, de lo que les producía su participación en el mineral, su propia pólvora, mechas y picos ⁴⁹. En segundo lugar, Obregón y Otero vendían su mineral a los rescata-dores independientes, de manera que las ventas semanarias les proporcionaban suficiente efectivo para solventar los costos de operación y financiar el desarrollo de la mina. Bien haya sido voluntaria u obligada por las circunstancias, el hecho es que esta política tuvo un mismo efecto, que fue el de librarlos de la dependencia contractual de los comerciantes-aviadores. A pesar de ello, eran precisamente estos quienes proveían de efectivo a los rescatadores para que compraran el mineral a los dueños y trabajadores de La Valenciana.

Por otra parte, no había nada excepcional en esta triple estructura, ya que muchas minas habían comenzado a operar de la misma manera, pero la situación de La Valenciana era diversa porque la mina resultó ser extraordinariamente rica, y porque sus dueños aumentaron la producción muy rápidamente mediante la reinversión de sus primeras ganancias en la construcción de nuevos tiros. Además, aunque tanto Obregón como Otero compraron plantas de beneficio, en ninguna ocasión intentaron siquiera refinar todo el mineral que producía su mina. No hay pruebas que nos sugieran que hayan tratado de establecer una empresa integrada verticalmente.

A primera vista parece que su política fuera contraproducente.

⁴⁷ AHGP, Minas, 15 y 24 septiembre 1760; Humboldt, *Ensayo Político*, p. 353.

⁴⁸ AGN, Minería 11/1, informe de la Caja Real de Guanajuato, 3 febrero 1774.

⁴⁹ AGN, Minería 114/4, informe de Francisco Pallares, 5 mayo 1791.

¿Sería la mayoría de las utilidades de la mina para los rescatadores y sus aviadores? ¿Trabajarían en beneficio de otros? Al principio, tal era claramente el caso, pero al ir aumentando las ventas de mineral produciendo ganancias constantes, los dos socios, en vez de invertir todo su capital en la compra o construcción de otras plantas de beneficio, se convirtieron ellos mismos en aviadores. Es decir, proporcionaban a los rescatadores independientes el efectivo necesario para comprar mineral tanto de La Valenciana como de otras minas. En parte este era un sistema de participar en las utilidades de la venta de sus propios partidos, ya que los trabajadores nunca vendían el mineral a sus patrones, pero sus efectos fueron mucho más amplios. En resumidas cuentas, Obregón y Otero lograron establecer la circulación de un capital relativamente líquido, evitando así la pesada carga de la inversión en obra muerta que habría significado una hacienda de beneficio. De esta manera obtenían ganancias sobre el mineral que producían por dos conceptos. Naturalmente que esta política dependía de la existencia de un gran número de rescatadores independientes financiados en primer lugar por los comerciantes-aviadores, y por ello no debe maravillarnos que el tribunal de minería haya escrito en 1781 sobre La Valenciana: «cuya famosa mina ha mantenido casi ella sólo por más de diez años el crecido número de operarios, rescatadores, comerciantes y moradores que se hallen en aquella ciudad»⁵⁰. Ese mismo año la Caja Real elaboró un proyecto de distribución del mercurio que demostraba la enorme importancia de aquella mina⁵¹.

La tabla 44 nos da una clara imagen de la compleja estructura que por entonces predominaba en la producción en Guanajuato. No es necesario hacer hincapié en la importancia, tan obvia, de los socios de La Valenciana. Refinaban aproximadamente una quinta parte de toda la plata separada por amalgamación, y también figuraban entre los mayores aviadores, de modo que en conjunto recibían un total de 1 506 quintales, o sea, el 38.9 por 100, de todo el mercurio distribuido. Esta cifra puede ser comparada con el 9.3 por 100 que recibían los Septién y con el 7.1 del marqués de San Juan de Rayas.

El número de mineros efectivos era sorprendentemente pequeño: unos 15 hombres y aun cuando se agregaran las asignaciones

⁵⁰ AHH, 204/15, Tribunal de Minería al Virrey, 19 julio 1781.

⁵¹ AGI, México 2209, Valcárcel al Virrey, 15 julio 1782.

suspendidas únicamente se llegaría a un total de 23. Como carecemos de suficiente información, es difícil comprender la importancia de las minas que figuran en la lista. Sus dueños, sin embargo, tenían todos parientes reconocibles: Fernández de Riaño, Ramón de Aranda, Francisco Azpilcueta y Ramón Liceaga, eran todos miembros del gran clan de Busto y Aranda; José María de Irizar era hijo del comerciante vasco Lucas de Irizar; Manuel Otero era hermano de Pedro Luciano; y Ventura Carrasco era administrador de La Valenciana. Manuel García de Zeballos era montañés. De la misma manera, los comerciantes-aviadores formaban un pequeño grupo muy homogéneo. Aparte de los dos socios de La Valenciana, había cuatro almacenes de montañeses que eran propiedad de Septién, Pérez Marañoñ, Bustamante y Revuelta. Mientras que Martín de Septién financiaba a ocho rescatadores importantes, Pérez Marañoñ y Revuelta patrocinaban un gran número de empresas menores. Menos importantes eran las dos firmas vascas propiedad de Compains y Alamán (heredero de Arechederreta). También figura aquí Irizar, ya que su padre se había asociado en ciertas ocasiones con Arechederreta.

TABLA 44

ESTRUCTURA DE LA MINERÍA EN GUANAJUATO, 1780-1,
SEGUN LA DISTRIBUCION DE MERCURIO

<i>Mercurio asignado a:</i>	<i>Quintales</i>
Mineros	1 799
Aviadores	1 648
Rescatadores independientes	420
TOTAL	3 867
<i>Mercurio asignado a mineros</i>	
Socios de La Valenciana:	
Antonio de Obregón	512
Pedro de Otero	218
Manuel de Santa Ana	100
Otros mineros:	
Marqués de Rayas	275
Bernardo Fernández de Riaño	184
Ramón de Aranda	150
Francisco Azpilcueta	61
José María de Irizar	140
Ventura Carrasco	36
Manuel de Otero y socio	30
Manuel García de Zeballos	30
Ramón Liceaga	15
Lucas de Arriaga	18
José de Obregón	30
TOTAL	1 779

TABLA 44 (Continuación)

<i>Mercurio asignado a aviadores</i>	<i>Quintales</i>	<i>Haciendas</i>	<i>Zangarreros</i>
Antonio de Obregón	476	16	—
Pedro de Otero	200	6	7
Martín de Septién	360	8	—
Juan de Revuelta y Manuel Cobo García	115	1	24
José Pérez Maraño	100	2	17
Bernabé Bustamante	69	?	?
José María de Irizar	50	2	—
Juan Compains	70	—	—
Juan Vicente Alamán	69	2	5
Pedro Aguirre	42	1	6
Miguel Mendizábal	9	—	6
Agustín Pérez Maraño	18	—	—
Francisco Zamora	35	—	—
Francisco Sierra	9	—	6
Cayerano Cobo	8	—	—
Francisco de Septién	6	—	—
Varios menores	12	—	—
TOTAL	1 648	38	71

Mercurio asignado a rescatadores independientes

55 personas —asignación media a cada una 18 1/2 quintales
 Las más importantes eran:

	<i>Quintales</i>
Domingo Aribé	39
Hipólito de Busto	32
Juan Villanor	30
Gregoria de Busto	25
Salvador de Ocio	29
Francisco Múquiz	24
Carlos Villaseñor	20
Félix Aguirre	20
Varios menores	201
TOTAL	420

Los socios de La Valenciana recibieron: 1 506 quintales (38.9 por 100).

Martín de Septién recibió: 360 quintales (9.3 por 100).

El Marqués de Rayas recibió: 275 quintales (7.1 por 100).

El cuadro nos revela el alto grado de autonomía que existía entre los dos sectores de la minería, la extracción y el beneficio. Cerca de la mitad del mineral producido se vendía en el mercado libre a los refinadores. Esta falta de integración vertical era más acentuada de lo que la tabla nos sugiere, porque los tres socios de La Valenciana

eran dueños de haciendas de beneficio que refinaban su participación en el mineral extraído en la mina. La estabilidad de Guanajuato puede ser atribuida en gran parte al desarrollo de un sector independiente de beneficio de minerales.

Por desgracia no sabemos gran cosa sobre las haciendas de beneficio que existían en Guanajuato. La mayoría de ellas se ubicaban a lo largo del río en la villa de Marfil. Las mayores constituían empresas industriales de importancia, aunque ninguna de ellas fue construida a la escala de los establecimientos que el conde de Regla fundó en Real del Monte, o de los de los Fagoaga en Sombrerete. En 1780 la Hacienda Real estimó que la ciudad tenía 50 haciendas de beneficio grandes y medianas y otras 300 de una variedad menor, llamadas zangarreros, que no eran sino cobertizos provisionales con valor de unos cuantos miles de pesos. Para 1803 se había llevado a cabo una cierta concentración, ya que en aquel año había 75 plantas mayores de beneficio y unas 200 pequeñas ⁵². La mayor que existía por entonces, llamada Salgado, tenía 42 arrastres ⁵³. Durante ese período también se desarrolló la capacidad total de refinación, de 1 164 arrastres en 1760 a 1 866 en 1803 ⁵⁴.

Como toda la minería, los refinadores de Guanajuato también se beneficiaron con la reducción del precio del mercurio efectuada por Gálvez. Se amplió considerablemente la variedad de leyes del mineral cuyo beneficio era costeable. Mientras que en el decenio de 1720-30 la Real Hacienda afirmó que el mineral que contuviera menos de 1 onza y cuarto de plata por quintal no era costeable, hacia 1793 esta proporción había descendido a $\frac{3}{4}$ de onza de plata por quintal ⁵⁵. No obstante, aquí como en los demás centros, el efecto más importante fue el aumento en la utilidad que podía obtenerse del mineral de media ley. La proporción de plata separada mediante amalgamación comparada con la que se obtenía por fundición se elevó de dos tercios

⁵² AHH, 204/15, Caja Real de Guanajuato a Domingo Valcárcel, 22 noviembre 1780; AGI, México 1622, Iturrigaray a Soler, 27 julio 1804.

⁵³ AGN, Minería 221, informe de la Caja Real de Guanajuato, 21 junio 1797; Ward, *México in 1827*, II, 434.

⁵⁴ AGI, México 2251, Diputación minera de Guanajuato al Virrey, 12 septiembre 1760; Humboldt, *Ensayo Político*, p. 357.

⁵⁵ Villaseñor y Sánchez, *Respuesta*, pp. 68, 82-3, 102-3; Humboldt, *Ensayo Político*, p. 381.

en la década de 1740-50 a casi siete novenos al finalizar el siglo (véase figura 3).

Además de la reducción de costos favoreció también a los refinadores la baja en la tasa de descuento que cobraban los aviadores. Mientras que antes de 1770 el precio que los aviadores pagaban por la

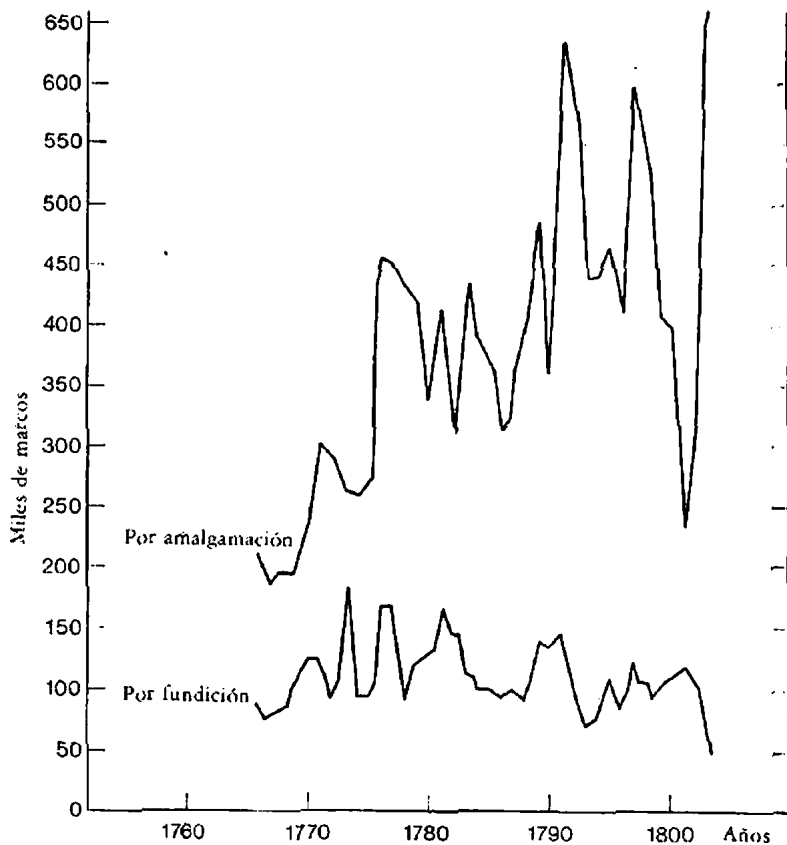


Figura 3. Producción de plata en Guanajuato, 1766-1803.

plata en la localidad era de 56 y 52 reales por marco de plata amalgamada y fundida respectivamente, en la década de 1790-1800 sus precios habían subido a 58 y 56 reales. Es más, algunos comerciantes pagaban a sus refinadores el precio total en vigor en el mercado libre

⁵⁶ AGI, México 2122, cuentas de la Caja Real de Guanajuato, 1742-44; Humboldt, *Ensayo Político*, pp. 346, 372.

de 59 reales ⁵⁷. Esta variación en los precios podría ser fácilmente motivo de un malentendido. A fines del siglo, un cierto refinador llamado Francisco Aguilar transfirió su cuenta de Juan Vicente Alamán a José María Irizar. En tres años recibió unos 260 000 pesos y produjo unos 18 000 marcos de plata amalgamada y 20 000 marcos de plata fundida. Después de efectuar su balance, Irizar declaró que Aguilar le debía 13 000 pesos. Sólo entonces se dio cuenta el refinador que Irizar le había estado pagando 56 y 52 reales por marco respectivamente, en lugar del nuevo precio de 58 y 56 reales ⁵⁸.

La baja en la tasa de descuento naturalmente redujo las utilidades de los aviadores. Ciertas pruebas nos sugieren que varias casas establecidas comenzaron a retirarse de los negocios de esta especie. Algunas especialmente en el decenio 1780-90, compraron haciendas de beneficio, y otras, en fecha algo posterior, simplemente se dedicaron a hacer préstamos con un interés del 5 por 100. Los hermanos Irizar, por ejemplo, prefirieron emplear de esta manera su capital. Hacia 1808 dos importantes refinadores debían aproximadamente 70 000 y 90 000 pesos respectivamente a los Irizar y a los Otero; en ambos casos la deuda correspondía a préstamos al 5 por 100 y no a una cuenta general de avío ⁵⁹.

Aunque no hay duda de que las ganancias de los refinadores se incrementaron, el sistema de vender el mineral semanalmente fue muy favorable para el minero. Es necesario, a este punto, que consideremos el modo exacto como se realizaban estas ventas. A fines del siglo las minas, en su mayor parte, acostumbraban realizar subastas semanales. Los refinadores se reunían a la entrada del tiro, examinaban a mano las distintas calidades de mineral y comunicaban en secreto su oferta al minero encargado. Se vendía el mineral al mejor postor ⁶⁰. Los precios variaban de una estación a otra y de año en año, pero carecemos casi totalmente de información sobre los factores que gobernaban estas tendencias. De cualquier forma algunos fragmentos que más adelante presentaremos, nos indican que ya en 1788 los

⁵⁷ AHGP, Minas, 6 agosto 1785; AHGP, Cabildo, 4 mayo 1809; AGN, Minería 76/18, *Diputación de Guanajuato al Tribunal de Minas*, 20 septiembre 1791.

⁵⁸ AHG, Minería, sin fecha ni número, legajo h. 1804-5.

⁵⁹ AHGP, Cabildo, 13 enero 1808, Fernando de la Concha debía a Pedro Otero la suma de 91,789 pesos; 15 julio 1808, Bartolomé Villaseñor debía la suma de 69,482 pesos a los hermanos Irizar.

⁶⁰ J. R. Poinsett, *Notas sobre México*, 1822 (México, 1950), p. 227.

precios de mineral en La Valenciana comenzaban a aumentar. Además, en una fecha posterior, en 1798, el administrador de la hacienda de Salgado declaró que los rescatadores estaban comprando mineral de baja ley de La Valenciana «con gran atrevimiento», según dijo, con lo cual quizá quería dar a entender que tendrían pérdidas ⁶¹. Posiblemente, en la última década del siglo el balance de las utilidades, que ya había cambiado más todavía para favorecer menos al aviador y más al refinador, estaba cambiando para beneficiar al minero. Esta hipótesis, ciertamente, explicaría que minas tales como la de Mellado y la del Tepeyac, rehabilitadas por aquel entonces, hayan también adoptado el sistema de ventas semanales de mineral. Explicaría también el movimiento del capital mercantil, primero hacia el beneficio y luego hacia las actividades extractivas. Cualquiera que haya sido el caso, el hecho es que las pruebas documentales son tan escasas que en realidad no demuestran nada, pero es claro que la creación de esta compleja estructura de producción de plata ayudó a liberar al minero de su antigua dependencia de los comerciantes-aviadores y de los bancos de plata.

V

Para comprender en su totalidad la estructura de la minería guanajuatense debemos examinar el caso de La Valenciana con más detenimiento, porque esa gran mina, según estimaciones elaboradas por su administrador general, producía aproximadamente las dos terceras partes de toda la plata refinada en Guanajuato. Estas estimaciones, publicadas por Humboldt, muestran que en los cuatro años y medio transcurridos de enero de 1787 a junio de 1791, La Valenciana produjo 1 737 052 marcos de plata, de un total de 2 569 081 marcos que registró la Caja Real. Por otra parte, Humboldt calculó que la mina producía regularmente unos 360 000 marcos de los 551 319 que cada año se presentaban a Real Hacienda, es decir, que durante unos treinta años, de 1780 a 1810, correspondió a La Valenciana entre el 60 y el 70 por 100 de la producción total ⁶². Disponemos de cifras precisas en relación a los años de 1788-1810, que se refieren al

⁶¹ FV, 3, Manuel de Villamor a Rul, 3 octubre 1798.

⁶² Humboldt, *Ensayo Político*, pp. 353-6.

valor de la producción, costos de operación y utilidades de La Valenciana (véase tabla 45) ⁶³.

Debe hacerse hincapié en que este cuadro indica el valor del mineral vendido y los costos de producción. Debemos suponer que el término «vender» incluya también la cantidad de mineral que se repartía a los socios de la mina. Dicho mineral se valuaba al precio corriente en el mercado y el administrador general de la mina llevaba

TABLA 45

PRODUCCION, COSTOS Y UTILIDADES DE LA VALENCIANA 1788-1810
(en pesos)

Año	Producción	Costos	Utilidades
1788	1 571 216	429 159	1 142 057
1789	1 633 459	448 131	1 185 328
1790	1 499 939	454 523	1 045 416
1791	1 639 085	733 321	905 764
1792	1 049 753	757 173	292 580
1793	1 042 876	738 354	304 522
1794	1 282 042	799 328	482 714
1795	1 696 640	815 817	880 823
1796	1 315 425	832 347	483 078
1797	2 128 439	878 789	1 249 650
1798	1 724 437	890 735	833 702
1799	1 584 393	915 438	668 955
1800	1 480 933	977 314	503 619
1801	1 393 438	991 981	401 457
1802	1 229 631	944 309	285 322
1803	1 232 045	937 931	294 114
1804	1 185 265	941 121	244 144
1805	1 113 756	946 346	167 410
1806	1 040 632	914 662	125 970
1807	1 191 582	1 019 781	171 801
1808	1 523 815	1 205 924	317 891
1809	1 385 611	1 204 333	181 278
TOTAL	30 944 412	18 776 827	12 167 585

⁶³ Esta lista ha sido tomada de Pedro L. Monroy, 'Las minas de Guanajuato, memoria histórico-descriptiva de este distrito minero', *Anales del ministerio de fomento de la república mexicana* X (1888), pp. 69-740. La lista que damos aparece en pp. 101-2; Ward, *Mexico in 1827*. II, 140, contiene la misma lista, con ligeras diferencias. Los totales contienen pequeños errores de computación.

las cuentas estrictamente. Parece que se obtenía de ellos suficiente efectivo para solventar los gastos de operación ⁶⁴, pero las utilidades de la mina se basaban en una escala nominal que presuponía que los socios pagaran el precio actual por el mineral que recibían. Cualquiera que haya sido el método de contabilidad, todos los socios operaban plantas de beneficio para refinar la parte del mineral que les correspondía, pero estas plantas, que no eran más de una docena, ciertamente no tenían capacidad suficiente para refinar la enorme producción de mineral de La Valenciana.

Es difícil obtener información relativa al movimiento de los precios en aquellas ventas semanales, pero las tablas 46 y 47 nos dan cierta indicación de las posibles tendencias ⁶⁵.

TABLA 46

PRODUCCION TOTAL ESTIMADA DE LA VALENCIANA, 1774-86,
SEGUN SU VALOR ANTES DE SER REFINADA

<i>Tipos de metal</i>	<i>Cargas</i>	<i>Valor medio (en pesos)</i>	<i>Valor total (en pesos)</i>
Meral	320	350	112 000
Polvillos	8 911	175	1 559 325
Jabones	4 740	70	331 800
Apolvillados	212 840	21	4 469 640
Limosnas de iglesia	245	7	1 715
Partidos de barreteros	32 506	5	162 530
Ordinarios	263 805	3.5	1 055 220
Granza	22 282	7	155 974
Tierras apolvilladas	21 140	7	147 980
Tierras ordinarias	54 660	3.5	197 310
Granzón	17 698	3.5	61 945
TOTAL	639 127		8 255 439
Venta total correspondiente a las 24 acciones			1 590 995
TOTAL			9 846 434
Costos de producción			4 697 766
Utilidades			5 148 668

⁶⁴ Véase Poinsett, *Notas* p. 223.

⁶⁵ AHGP, Presos, 5 noviembre 1807; con relación al año de 1788 véase AGN, Minería 114/4, informe de José Gómez Campos, noviembre 1789.

TABLA 47

PRODUCCION DE LA VALENCIANA DURANTE SEIS MESES
DEL AÑO 1788

	<i>Enero a Marzo</i>			<i>Julio a Septiembre</i>		
	<i>Cantidad en cargas</i>	<i>Precio medio</i>	<i>Producto</i>	<i>Cantidad en cargas</i>	<i>Precio medio</i>	<i>Producto</i>
	<i>(3.5 qls.)</i>	<i>(ps. rls.)</i>	<i>(pesos)</i>	<i>(3.5 qls.)</i>	<i>ps. rls.</i>	<i>(pesos)</i>
Polvillos (únicamente en quintales)	75	60	4 500	355	92 2	30 903
Jabones (cargas)	50	80	4 045	233	109 5	25 605
Apolvillados	414	36	14 904	1 866	41 7.5	78 255
Tierras de jabones				259	25	6 485
Blancos	9 192	8	73 536	11 400	9 4	108 300
Partidos	1 188	5 3	6 385	696	5 3	3 741
Tierras de limpia, maduros	3 219	4 6	15 290	4 656	4 6	22 116
Granza de Dolores				2 940	4 3.5	13 046
TOTAL			118 661			288 453
Venta total correspondiente a las 24 acciones			37 385			78 053
TOTAL			156 046			366 506
Costos			111 679			106 802
Utilidades			44 366			259 704

TABLA 48

PRODUCCION DE LA VALENCIANA, 1791: TIPOS Y VALOR
DEL MINERAL PRODUCIDO

<i>Proporción</i>		<i>Contenido medio de plata por quintal</i>
5/1 000	Polvillos, jabones	22 marcos, 3 onzas
28/1 000	Apolvillados	9 marcos, 3 onzas
152/1 000	Blanco y bueno	3 marcos, 1 onza
815/1 000	Granzas, tierras ordinarias, etc.	3 onzas

Una simple comparación de estas dos tablas revela que los precios iban en ascenso, y que además variaban de acuerdo a la estación del año. En segundo lugar, parece que la variedad de calidad del mineral disminuía en valor, es decir, que proporcionalmente aparece en la

lista una mayor cantidad de mineral de baja ley en 1788 que en fechas anteriores. Sin embargo, esta tendencia se invirtió por lo menos en el año de 1791, para el cual Humboldt encontró pruebas que sugieren que el mineral de ley más alta comprendía las dos terceras partes de la producción total. También nos informa del contenido de plata que se esperaba tuvieran ciertas clases de mineral (véase tabla 48) ⁶⁶.

Tomemos la categoría de los «apolvillados». Parece que en 1788 los refinadores pagaban de 36 a 42 pesos por carga de mineral, del que se pensara obtener 238 pesos de plata. Por otra parte, pagaban 4 1/2 pesos por carga de un mineral de ley inferior llamado «granza» o «tierras ordinarias», del que se esperaba obtener poco más de 11 a 12 pesos de plata. Es notable la diferencia proporcional.

Aquella mina, cuya capacidad sostenía la mayor industria de la plata en el mundo, no era un simple agujero en la tierra, sino una ciudad subterránea compuesta de una multitud de túneles de cuatro a cinco varas de diámetro, que seguían la veta a todas las profundidades y en todas direcciones. Antes de 1786 el mineral, una vez extraído, se sacaba a la superficie por los grandes tiros, que eran tres, mediante malacates ⁶⁷. Estos tiros eran:

	<i>Costo de su construcción</i>
1. El tiro cuadrado de San Antonio, de 188 varas de profundidad y con 4 malacates	396 000 pesos
2. El tiro cuadrado del Santo Cristo de Burgos, de 125 varas de profundidad y con 4 malacates	95 000 pesos
3. El tiro exagonal de Nuestra Señora de Guadalupe, de 290 varas de profundidad, con 6 malacates	700 000 pesos

Este capital de un millón de pesos invertido en los tiros probablemente ascendió a más del 25 por 100 de los costos de operación entre 1774 y 1786, pero la rápida y eficaz explotación de La Valenciana pronto hizo que se excavaran túneles de trabajo por abajo de los niveles a que llegaban estos tiros. En 1803 Humboldt encontró que los túneles llegaban hasta 125 varas más abajo del fondo del tiro más cercano, situación que presentaba la amenaza de una elevación en el costo del movimiento del mineral hasta el grado de que podía hacer

⁶⁶ Humboldt, *Ensayo Político*, pp. 353-6.

⁶⁷ Humboldt, *Ensayo Político*, p. 353.

incosteable la explotación. Pero ya para entonces se habían comenzado los trabajos de perforación de un nuevo tiro, el de San José, de sección octogonal para poder recibir ocho malacates, y con un diámetro de 11 varas. Proyectado con un presupuesto estimado en un millón de pesos, este tiro, para 1810, había ya alcanzado una profundidad de más de 600 varas, excavado en la roca viva ⁶⁸, y representaba una inversión de capital a una escala que generalmente no se encuentra en las sociedades no industrializadas. En total, los socios de La Valenciana invirtieron más de dos millones de pesos en lo que los mineros mexicanos tenían costumbre de llamar «obras muertas», pero su recompensa fue un ingreso continuo durante un período de más de cuarenta años.

Tanto en la perforación de tiros como en los trabajos de producción cotidiana, el principal renglón de costos era la mano de obra. En la primera época de La Valenciana este gasto se redujo mediante la concesión de partidos, pero durante la última década del siglo XVIII un nuevo administrador, llamado José Quijano, montañés, decidió abolir el sistema sustituyéndolo por un jornal mayor, de 8 a 9 reales para barreteros y barrenadores. Naturalmente que se vio entonces obligado a proporcionarles la pólvora, las mechas y los picos, que hasta entonces ellos mismos compraban con el producto de sus partidos. Aunque las causas de esta decisión nos son desconocidas, sus resultados fueron claros e inmediatos. De los mil hombres que trabajaban bajo la superficie, únicamente trescientos aceptaron el nuevo arreglo ⁶⁹. Los costos aumentaron enormemente, de 454 000 pesos en 1790 a 733 000 pesos al año siguiente, además de que la producción, calculada por la venta de mineral, declinó de 1 639 000 pesos en 1791 a 1 042 000 pesos en 1792. Consecuentemente, las utilidades también disminuyeron, de más de un millón de pesos a 292 580 pesos. Pero esta disminución tan dramática resultó ser un ajuste temporal, ya que para 1795 las ganancias volvieron a aproximarse a la cifra de un millón de pesos. Los gastos, por su parte, siguieron siendo altos y hasta tendieron a aumentar lentamente al irse haciendo la mina más y más profunda.

La supresión de los partidos provocó una escasez de mano de obra de tal gravedad, que la administración de La Valenciana tuvo que

⁶⁸ *Ibid.*, p. 354; Ward, *Mexico in 1827*, II, 440.

⁶⁹ AGN, Minería 114/4, informe de Francisco Pallares, 5 mayo 1791.

recurrir a métodos de reclutamiento forzoso de obreros. Por supuesto que era esta una costumbre perfectamente lícita, ya que el nuevo código minero de 1783 la mencionaba expresamente. De todas maneras, la introducción de este método provocó que el regidor José Hernández Chico se quejara ante el virrey ⁷⁰. Protestaba diciendo que «andan por las calles noche y día los ministros de Justicia con título de recogedores y lazadores de ellos por los trabajos y labor de la mina de San Cayetano de la Valenciana». Las pelcas eran muy comunes, ya que a menudo se apoderaban de los sirvientes y artesanos, y se hizo peligroso para estas clases andar por las calles. Afirmaba que «gente operaria de minas útil y provechosa está sobrante en el día».

Un visitante que en 1790 pasó por Guanajuato confirmó que la supresión de los partidos había sido la causa de las deserciones en masa. Encontró que solamente quinientos hombres descendían a la mina en cada turno, en comparación con los ochocientos que eran necesarios. Este visitante, llamado Francisco Mourelle, conocido capitán naval español, escribió una interesante descripción de las condiciones de trabajo en el interior de la mina ⁷¹. Le escandalizó lo pesado de las cargas transportadas por los tenateros, protestando por «aquella degradación de los racionales que inferiores a las bestias». Hasta una mula era cargada únicamente con 350 libras, mientras que algunos de los tenateros subían escalones y se encaramaban por escaleras marinas llevando a sus espaldas hasta 450 libras. Detuvo a un muchacho de diez años, el cual le informó que, para el medio día, había subido 600 libras de mineral en cuatro viajes. En fin, Mourelle se horrorizó de todo lo que vio. «Las cavernas de Vulcano apenas fueron símbolo de estos conductos infernales.» También afirmó que se obligaba a innumerables personas a trabajar contra su voluntad en La Valenciana. El robo era una ocurrencia común, y a la salida de la mina se sometía a todo trabajador a un cacheo personal repugnante. Comentó que:

Con todo oí muchas veces que a este estado les condujo la abolición de partidos, y después la continua baja de jornales, pues es muy frecuente para obligarles a entrar en la mina, valerse del brazo de la Justicia, porque como se llega a trabajar en muchas labores con la precisión de refrescarles

⁷⁰ AGN, Minería 94/7, José Hernández Chico al Virrey, 8 diciembre 1790.

⁷¹ BN (México) MSS 454 (1791), ff. 15-60.

las espaldas a fuerza de cubos de agua y donde suele haber vapores que los sofocan, huyen de semejante exposición cuando el interés no les empeña.

Todas las pruebas de que disponemos nos indican que hubo una baja decisiva tanto en las ganancias como en la posición social de los trabajadores mineros de Guanajuato. Antes de la Visita de Gálvez, los obreros habían sido prácticamente socios de los propietarios, pero después, primero en la mina de Rayas y luego en la de La Valenciana, se les redujo a la condición de jornaleros y se les sometió a una rigurosa disciplina. Además, como la mayoría de las minas, especialmente la de La Valenciana, se hicieron más y más profundas, las condiciones de trabajo empeoraron ya que la temperatura aumentaba de acuerdo con la profundidad. De cualquier forma, no debe pintarse un cuadro demasiado negro, porque los trabajadores de las minas seguían constituyendo una especie de aristocracia proletaria. Una tabla elaborada por el intendente Riaño en 1803 puede darnos alguna idea de sus ganancias (tabla 49) ⁷².

TABLA 49

FUERZA LABORAL Y ESCALA DE SALARIOS EN LA VALENCIANA,
h. 1803/(Resumen)

<i>Clasificación de los trabajadores</i>	<i>Número</i>	<i>Salario reales/día</i>
Administrador general y asistentes	4	
Capataces, mineros calificados, artesanos, todos ellos a salario semanal	203	
Barrenadores y piquiadores (barreteros)	684	10
Tenateros (cargadores)	680	5-8
Peones	83	4-3
Norieros	64	5
Malacareros	111	6
Faeneros (trabajadores de mantenimiento y de perforación)	180	4
Despachadores (de metal)	91	5-6
Pepenadoras (mujeres que separaban y clasificaban el mineral)	720	3
Quebradores y cajoneros	377	4
Jornaleros varios	135	4-6
Número total de trabajadores	3 332	

⁷² BN (México) MSS 454 (1791), ff. 31-2.

⁷³ Silva Herzog, *Documentos*, pp. 75-8.

Los barreteros y barrenadores, que siempre fueron los trabajadores mejor pagados, ganaban 10 reales diarios, es decir, unos 375 pesos anuales, los cargadores o tenateros recibían comisión, pero llegaban a un máximo de 8 reales diarios. Por el contrario, los demás trabajadores ganaban únicamente sus 4 reales acostumbrados. Comparemos estos salarios con los que eran comunes en otras ocupaciones. En la agricultura, un peón de hacienda ganaba de 1 a 2 reales diarios, aunque por otra parte generalmente se le proporcionaban ciertos productos alimenticios y una parcela de tierra ⁷⁴. Los peones que trabajaron en la construcción de la Alhóndiga de Guanajuato cobraban 3 reales diarios; los picapedreros que hicieron el camino al cercano pueblo de Santa Ana ganaban 5 reales. Un minero calificado, pues, podía ganar por lo menos el doble de lo que ganaba un obrero de calificación semejante en otras actividades que no fueran las mineras. Debe hacerse notar que los salarios que se pagaban en La Valenciana, eran ligeramente más altos que en las demás minas. En la de Rayas, por ejemplo, los barreteros y barrenadores ganaban sólo 8 reales diarios, en comparación con los 10 reales que se pagaban en La Valenciana ⁷⁵.

Sin embargo, la característica más notable de la fuerza laboral de La Valenciana era su tamaño y su composición. La mina requería más de 3 332 personas para producir 720 000 quintales de mineral ⁷⁶, pero únicamente una cuarta parte de ellos trabajaban bajo tierra dinamitando y extrayendo el mineral. El simple traslado de este de los túneles a la base de los tiros requería otra cuarta parte de la fuerza de trabajo. Una vez que había sido subido por los malacates hasta la boca de la mina, el mineral tenía que ser entonces triturado, clasificado según su diversa ley, y empacado. Además, tenían que efectuarse los trabajos de mantenimiento de los tiros, de su desagüe, y de los malacates. La Valenciana empleaba a un pequeño ejército de trabajadores, la mayoría de los cuales no se ocupaba precisamente de la extracción, sino de cargar, clasificar y empacar la gran cantidad de mineral producido. Mientras más profundos y extensos eran los túneles de trabajo, más cara era la técnica necesaria para su explotación, además de que al declinar la calidad del mineral, aumentó el

⁷⁴ Gibson, *The Aztecs*, pp. 250-1.

⁷⁵ AHG, Haciendas, Cuentas 1770. Estos salarios se refieren al año de 1804.

⁷⁶ Silva Herzog, *Documentos*, pp. 79-81.

costo proporcional de la mano de obra, ya que tenía que extraerse en mayor cantidad para producir la misma cantidad de metal.

La mano de obra era, por supuesto, el costo más alto, ya que llegaba por lo menos al 75 por 100 del total. No quiere esto decir que otros renglones fueran despreciables, ya que Humboldt calculó que la mina consumía 160 000 libras de pólvora al año, y 150 000 libras de acero para picos⁷⁷. Pero lo que persuadió a los dueños de perforar el nuevo tiro de San José fue el aumento en los costos de la mano de obra. A pesar de ello, para 1808 los costos de operación habían superado la cifra anual de 1 200 000 pesos. La eficientísima explotación de La Valenciana la llevó a un punto que ninguna otra mina mexicana alcanzó en trescientos años de producción, pues hacia 1810 ya se había extraído de ella la mayor parte del mineral cuyo beneficio era costeable.

VI

Hubo años en que La Valenciana produjo a sus dueños utilidades superiores a la cifra de un millón de pesos. ¿Cómo emplearon tan enormes sumas? En primer lugar, no descuidaron sus obligaciones religiosas. Ellos y sus trabajadores aportaron más de 391 000 pesos para la construcción de la espléndida iglesia de San Cayetano, edificio que hasta el día de hoy es una de las principales glorias de la *arquitectura churrigueresca mexicana*. Donaron otros 30 720 pesos para la restauración de la exquisita fachada de la iglesia de San Diego, en la ciudad de Guanajuato⁷⁸.

Pero aparte de esos gastos, los dos accionistas principales de La Valenciana principalmente reinvirtieron sus ganancias en la minería guanajuatense. Antonio de Obregón fue el guía, y sus eminentes servicios como contribuyente le fueron recompensados con el título de conde de La Valenciana. Ya en 1780 la Real Hacienda había observado: «siendo el Conde de Valenciana el particular sostenedor de toda esta Minería, viendo que entre muchos mineros y hacendados tiene repartido centenares de miles de pesos solamente por apadrinar su Patria y fomento la minería en beneficio del Rey y Público»⁷⁹. Esta generosa distribución de dinero pronto fue la

⁷⁷ Humboldt, *Ensayo Político*, pp. 353-6.

⁷⁸ AHGP, Presos, 5 noviembre 1807.

⁷⁹ AHH, 204/15, Caja Real de Guanajuato a Domingo Valcárcel, 22 noviembre 1780.

causa de que Obregón dominara una gran parte de la minería local. En 1788 su sucesión registró en la Caja Real 158 266 marcos de plata, cantidad que ascendía al 38 por 100 de la totalidad de la plata presentada en aquel año ⁸⁰.

A su muerte en 1786, Obregón legó bienes por valor de 1 549 564 pesos, suma que en 1791, año en que se hizo la adjudicación entre sus herederos, había aumentado a más de cuatro millones de pesos. Sin considerar el dinero en efectivo necesario para financiar los gastos de operación de las haciendas de beneficio, podemos clasificar la herencia de Obregón en los renglones señalados por la tabla 50 ⁸¹.

TABLA 50

PRINCIPALES BIENES DE LA SUCESION DE OBREGON,
h. 1791 (en pesos)

Plata	68 000
Efectivo	719 809
Avíos	370 172
Créditos proporcionados (buenos)	929 791
Créditos proporcionados (malos)	168 533
Valor de las haciendas de beneficio de Barreda, Flores y Salgado	265 038
Haciendas	300 740
Casas	113 365

La gran acumulación de efectivo sin duda es reflejo del deseo de los albaceas de no hacer más inversiones hasta que fueran adjudicados los bienes sucesorios. La característica más importante de estos bienes era el total de préstamos, buenos y malos, y de avíos que se proporcionaron a un gran número de comerciantes, mineros y rescatadores locales, todo ello por la cantidad de 1 768 496 pesos. Los préstamos se hicieron al interés acostumbrado del 5 por 100, mientras que los avíos, por su parte, implicaban naturalmente la entrega de la plata mediante contrato, con descuento. Entre los deudores principales se encontraban las siguientes personas:

	Pesos
Juan de Villamor	74 429
Ignacio de Obregón	63 645
Manuel Portu	74 171
Fernando de Miera	30 354
Juan Vicente Alamán	20 000
Manuel Ramón de Goya	300 000

⁸⁰ AGI, México 1795, informe de la Caja Real de Guanajuato, 27 octubre 1795.

⁸¹ AHGP, Cabildo, 19 agosto 1793.

Parte de los préstamos a estas personas tenían por origen el fraude. Un yerno del difunto conde afirmó que Juan de Villamor abusó de las facultades de albacea y apoderado tomando por sí y repartiendo entre varios sujetos más de 500 000 pesos; consintió y toleró a don Ramón de Goya que disipase otros 300 000 pesos». Este Goya, comerciante de México que era agente de Obregón, se había apoderado de las remesas de plata que le llegaban, invirtiendo las ganancias en las minas de Marcelo de Anza, en Zacatecas ⁸². Ignacio de Obregón empleó sus préstamos para financiar la compra y desarrollo de la mina de la Purísima en Catorce, con la cual amasó una enorme fortuna. De todas maneras, la mayor parte de estos préstamos y avíos eran para financiar a los rescataadores y mineros de Guanajuato, y tal fue su importancia. Sin tan cuantiosos desembolsos de dinero en efectivo la industria del beneficio de la localidad probablemente no habría podido refinar todo el mineral de La Valenciana, y si el caso hubiera sido diferente, habría tenido que recurrir a los comerciantes de México en busca del capital necesario para financiar tales operaciones.

Pedro Luciano de Otero, el otro accionista principal de La Valenciana, siguió una política de inversión muy similar. El inventario de sus bienes sucesorios, hecho en 1788, año en que murió, nos revela los renglones que figuran en la tabla 51 ⁸³.

Después de la muerte de Otero, sus bienes fueron administrados por su hermano en nombre de los herederos, que eran los hijos. Este individuo, Manuel Antonio de Otero, loco por la minería, procedió a malgastar las enormes utilidades que entonces producía La Valenciana. Para 1791 Otero había invertido 340 452 pesos en minas de su propiedad, y otros 40 026 en las de San Bruno y del Refugio. Además, proporcionó avíos por valor de 434 193 pesos a unos 19 rescataadores y mineros. No obstante, aquel año la viuda de Otero, aconsejada por su nuevo marido José Antonio del Mazo, obtuvo la adjudicación de los bienes. La administración de su participación en la mina y las de sus tres hijos menores pasaron a poder de del Mazo. Sólo entonces salió a la luz la enormidad de los despilfarros de Otero. Por

⁸² AGN, Vínculos 216/10, Condesa viuda de Revillagigedo, 7 junio 1793. AHGP, Cabildo, 25 octubre 1791, 1 diciembre 1792.

⁸³ AGN. Tierras 679, inventario, 31 octubre 1788.

Ejemplo, en las cinco semanas transcurridas entre el 20 de septiembre y el 20 de octubre de 1790, había proporcionado 39 843 pesos a una serie de nueve minas que entre todas no produjeron más que 20 843 pesos, ocasionando a Otero una pérdida de 19 000 pesos. Durante esas mismas cinco semanas proporcionó 74 794 pesos a unos 17 rescatadores, recibiendo a cambio únicamente 31 644 pesos en plata, de manera que perdió 43 150 pesos. Esta última pérdida era acumulativa, porque cuando se hizo el balance de cuentas en mayo de 1791, del Mazo descubrió que durante el período de dos años y medio a partir de noviembre de 1788, las mismas personas habían acumulado deudas por valor de 487 882 pesos ⁸⁴.

TABLA 51
BIENES DE LA SUCESION DE PEDRO LUCIANO DE OTERO,
OCTUBRE DE 1788

	Pesos
Haciendas de beneficio de La Escalera, San Agustín y Cuevas	161 552
Plata en proceso de ser refinada	366 300
Haciendas de San José del Comedero, Santa Guadalupe de las Cuevas y Atotonilquillo	245 664
Casas	114 433
3 almacenes y su existencia	73 961
Avíos y rescatadores	122 155
Créditos proporcionados, buenos	147 170
Créditos proporcionados, dudosos y malos	136 620
Invertido en las minas de San Bruno, El Refugio y Los Remedios	159 775
En las minas de Manuel de Otero	32 395
Varios	315 703
	1 875 728

Nos es así posible calcular en qué se gastaron las enormes utilidades de La Valenciana durante este primer período, hasta los años de 1791-3. En primer lugar, una gran cantidad de capital fue reinvertido en la minería, casi todo en la misma Guanajuato. Una simple suma de esas inversiones conjuntas arroja la siguiente cantidad:

	Pesos
Avíos a rescatadores	926 521
Créditos proporcionales buenos y malos	1 682 136
Inversión en mina	572 648
Total	3 181 305

⁸⁴ AGN, Minería 141/1, informe 29 octubre 1790; AGN, Minería 20/6, Oidor Anda al Virrey, 21 marzo 1792.

Por el contrario, el capital colocado en tierras no ascendía a más de 600 000 pesos. Ni siquiera el valor de las siete haciendas de beneficio propiedad de ambas familias superaba la cantidad de 460 000 pesos, y esta suma era equivalente apenas al doble del valor de las propiedades urbanas en conjunto, que era de unos 227 000 pesos. Es claro, entonces, que la prosperidad de Guanajuato no se basaba únicamente en la producción minera de La Valenciana, sino también en el cuanioso desembolso de crédito y de capital.

Durante los veinte años transcurridos de 1790 a 1810, todas las antiguas minas de Guanajuato fueron rehabilitadas y volvieron a producir. En parte, estas rehabilitaciones fueron promovidas por los accionistas de La Valenciana, y en parte por la entrada del capital mercantil a la minería, siendo la única excepción parcial a esta regla la mina de Rayas. De los socios de La Valenciana, los Otero fueron los más activos. Manuel Antonio de Otero heredó una quinta parte de los bienes de su hermano, además de la porción que dejó el mayor de sus sobrinos al entrar al sacerdocio. Era dueño de $5\frac{8}{9}$ acciones de La Valenciana. Durante la última década del siglo XVIII hizo fuertes inversiones en la rehabilitación de la mina de La Sirena, que era la misma que en el decenio de 1750-60 había llevado prácticamente a la ruina a Lorenzo de Incháurregui. También ayudó a financiar el desarrollo de la de La Luz, de nuevo descubrimiento, que sería sumamente productiva en la década de 1840-50. En general, parece que Otero continuó dilapidando su dinero en varias minas sin obtener en ninguna de ellas un éxito digno del nombre. Tenía acciones en las minas de La Valenciana, de La Sirena, de San Bernardino, de San Nicolás, de la Purísima Concepción, en Villalpando, de San Agustín, en Real del Monte y de la Purísima, en Catorce. Hacia 1802, cuando hizo el inventario de sus bienes, su fortuna ascendía a 1 245 000 pesos. Dendas y créditos estaban en buen equilibrio, ya que había prestado 350 000 pesos, y había obrenido préstamos por la suma de 320 000 pesos ⁸⁵.

⁸⁵ AHGP, Cabildo, 27 abril 1807. En 1797 Otero trató de hacer el denuncia de una gran faja de tierra situada en la costa de Michoacán, en la jurisdicción de Coacoacán y Coahuayana. Véase en AGN, Tierras 1283, la primera demanda de Otero, 14 julio 1797; abandonó el proyecto el 20 abril 1807; véase un ataque contra su plan en BN (Madrid) MSS 18739, informe del Obispo de Michoacán, 8 febrero 1805.

Al contrario de Otero, José Antonio del Mazo evitó con cuidado invertir dinero directamente en la minería, sino que prefirió hacer préstamos al 5 por 100 y mejorar las plantas de beneficio y las haciendas que dejó el difunto Pedro Luciano de Otero. También evitó ser aviador. Esta preferencia parecería ser indicativa (ya que del Mazo era un hombre de negocios cauteloso y de talento) que un interés anual del 5 por 100 sobre el capital, sin correr riesgos, era preferible a las ganancias que dejaban los contratos de avío. Cualquiera que haya sido el caso, el hecho es que para 1799 ya había distribuido 327 877 pesos en préstamos a un gran número de personas⁸⁶. Hacia aquella fecha un corresponsal observó: «El amigo Mazo es uno de los que más negocios hace en Guanajuato y si Dios le da mucha vida encerrará toda la ciudad en su panza, pues lleva la regla de Quevedo que decía, para tener, tener»⁸⁷.

Del Mazo murió en 1805 dejando la mayor parte de su fortuna a sus hijastros, los dos hijos de Otero que sobrevivían, Pedro y Mariano. Al año siguiente se dividieron la herencia, que comprendía los bienes que figuran en la lista de la tabla 52⁸⁸.

Podemos comentar una vez más que en tierra estaba invertida una cantidad relativamente pequeña; su valor está aquí inflado ya que la hacienda de Cuevas comprendía una planta de beneficio además de tierras de labor. La sección de préstamos contenía un renglón muy fuerte, los aproximadamente 89 000 pesos prestados a Fernando de la Concha, rescatador importante. Por lo demás, el inventario nos revela un sistema de reinversiones continuas en la minería guanajuatense aunque, en este caso, fuese en la cautelosa forma de préstamos al 5 por 100 de interés.

Contrariamente a los Otero, los dos yernos de Obregón, Antonio Pérez Gálvez y Diego Rul, compraron títulos de nobleza y varias haciendas. Un balance elaborado por el conde de Pérez Gálvez el 31 de diciembre de 1798 (véase tabla 53) nos da un nítido cuadro de lo que fue esta política. En 1793 su esposa había heredado 3 1/3 acciones de La Valenciana y 597 215 pesos distribuidos en efectivo, avíos, préstamos, una casa, y la hacienda de beneficio de Las Flores⁸⁹.

⁸⁶ AHG, Bienes Difuntos, septiembre 1800.

⁸⁷ FV, 4, Francisco Alonso Terán a Diego Rul, 11 agosto 1798.

⁸⁸ AHGP, Cabildo, 19 julio 1806.

⁸⁹ *Libro manual del conde de Pérez Gálvez*, balance hecho el 31 diciembre 1798. Este libro se encuentra en poder del Ingeniero Tiburcio Álvarez, Guanajuato.

TABLA 52

BIENES DE LA SUCESION DE OTERO EN 1806

	Pesos
Hacienda de Cuevas	180 931
Hacienda de Atotoniquillo	140 830
Hacienda de Comedero	101 721
Hacienda de Mendoza	28 242
	451 726
Haciendas de Beneficio:	
Dolores	79 282
San Agustín	54 433
Barrera	38 205
San Juan Nepomuceno	28 204
San Ignacio	27 106
La Purísima	15 758
	242 988
Préstamos al 5 por 100	316 969
Casas	205 094
Valor de 2 $\frac{2}{9}$ acciones de La Valenciana, propiedad de Manuel de Otero	193 078
Deudas de Manuel de Otero	139 078
Otros préstamos	159 775
Almacenes	116 817
Efectivo y barras de plata	114 550
Avíos	42 604
Varios	99 348
	2 082 027

Más de la mitad de esta fortuna estaba invertida en haciendas, y por lo menos dos de ellas se encontraban a considerable distancia de Guanajuato. Guanamé estaba en la intendencia de Zacatecas, y San Pedro del Mezquite en la de San Luis Potosí. Pérez Gálvez no se dio por satisfecho con estas propiedades, ya que para 1810 había comprado las haciendas de San Agustín del Vergel, en Zacatecas, la de San Juan Nepomuceno de las Norias, en Durango, la de La Soledad en Nuevo León, y la de San Francisco de Potosí, en Nuevo Santander. Para entonces ya era también propietario de 4 $\frac{1}{2}$ acciones de La Valenciana, 5 de la mina de Mellado-Fraustro y tres haciendas de beneficio ⁹⁰.

⁹⁰ AHIG, Insurgencia 1812-14, 6 febrero 1814; AHGP, Cabildo, 19 diciembre 1808.

TABLA 53

BIENES DE ANTONIO PÉREZ GALVEZ, 1798

	<i>Pesos</i>
3 5/8 acciones de La Valenciana, a 100 000 pesos cada una	383 333
Hacienda de beneficio de Las Flores y equipo	175 121
Planta de beneficio de San Pedro (alquilada con equipo)	51 336
Horno de Santa Ana, y equipo	15 955
Hacienda de Guanamé y existencia de grano	485 068
Su efectivo y préstamos concedidos	91 467
Hacienda de San Pedro de Mezquite y ganado	326 787
Su efectivo y préstamos concedidos	31 945
Hacienda de José del Copal	163 976
Su efectivo y préstamos concedidos	16 410
Préstamos otorgados en general	281 870
Efectivo	17 167
Existencias en el almacén	2 221
Taller de textiles en Acámbaro, en sociedad	11 131
Mina de mercurio en el Real de las Pithayas, con el Conde de La Valenciana	14 459
Casa en Guanajuato	30 000
Plata y joyas personales	40 000
Varios	8 031
TOTAL	2 146 677

Igualmente ansioso de convertirse en gran terrateniente estaba su cuñado Diego Rul, conde de Casa Rul, que al heredar por matrimonio la misma cantidad que Pérez Gálvez, compró las tres grandes haciendas de San Jacinto de Ciénega Grande, Cieneguilla y Santa Rita de Tetillas, todas ellas situadas en la intendencia de Zacatecas. Antiguas propiedades jesuitas, estas haciendas habían sido adquiridas por el conde de Regla, cuyo hijo las vendió a Rul. En 1803, después de haberlas mejorado mucho, valuaba Cieneguilla en 240 035 pesos, y Ciénega Grande en 275 452; la gran hacienda de Tetillas, ubicada en el distrito de Nieve, valía, según sus cálculos, 784 560 pesos, aunque de esta cifra había restado los 100 000 pesos de la hipoteca que la gravaba. Esta hacienda comprendía 169 sitios de ganado mayor, es decir, 169 leguas cuadradas ⁹¹.

Rul, hombre no sólo rico sino también de buen gusto, ordenó la construcción de una casa en Guanajuato de la que Humboldt escribió que «podría servir de adorno en las mejores calles de París y de

⁹¹ AGI, México 1795, avalúos en 1802-3.

Nápoles» ⁹². Su construcción costó 112 410 pesos y el arquitecto que la construyó, quizá el conocido artista neoclásico Eduardo Tresguerras, recibió un honorario de 6 800 pesos. Rul era dueño de dos plantas de beneficio, la de Salgado, que valía 151 389 pesos, y la de Sacromonte, con un valor de 57 581 pesos. También compró 12 acciones de la mina de Mellado-Fraustro.

Las enormes compras de tierras de estas dos personas respondían a una política deliberada y tal vez sabia. Después de todo, era seguro que llegara el día en que La Valenciana sería abandonada al ir declinando la calidad del mineral y aumentando los costos de explotación. Unicamente la tierra daba seguridad permanente. Además, tanto Rul como Pérez Gálvez, aspiraban a ser el tronco de familias nobles. Es digno de hacerse notar que todas las haciendas que compraron se encontraban al norte, e igualmente significativo es el hecho de que Rul adquirió sus tierras mediante compra al segundo conde de Regla: el ciclo de las fortunas mineras a menudo era vertiginoso.

Aunque Pérez Gálvez y Rul invirtieron la mayor parte de sus capitales en tierras, por otra parte financiaron la rehabilitación de la mina de Mellado. Esta mina, antigua y todavía potencialmente rica, estaba inundada desde el decenio de 1750-60. Sus accionistas, que carecían del capital necesario para desaguarla, aceptaron finalmente en 1804 la fusión con la vecina mina de Fraustro, propiedad improductiva de la familia Obregón. A cambio de ello, los tres condes —de La Valenciana, de Pérez Gálvez y de Casa Rul— se comprometieron a aportar unos 40 000 pesos para el desarrollo de ambas minas. Diego Rul se interesó especialmente en la empresa, comprando las acciones que se encontraban en manos de varios accionistas menores, de manera que en poco tiempo tuvo en su poder 12 de las 32 acciones de la mina de Mellado ⁹³. Para 1808 los 3 cuñados habían gastado ya los 40 000 pesos estipulados sin obtener grandes resultados, aunque la mayor parte de los costos se sufragaban mediante las ventas semanales de mineral. La dificultad estribaba parcialmente en que la mina de Mellado estaba en condiciones desastrosas. Después de una visita al lugar, el administrador de Rul, José Joaquín Peláez, exclamó: «es un dolor el ver lo mal labradas que están estas minas cuyos dueños para disfrutarlas han hecho como los salvajes que para comer la fru-

⁹² Humboldt, *Ensayo Político*, p. 343.

⁹³ AHGP, Cabildo, 12 noviembre 1804.

ta tumban el árbol» ⁹⁴. Para entonces los descendientes de los dueños originales no poseían más que fracciones de acción. Los descendientes del último marqués de San Clemente, por ejemplo, no eran dueños más que de $\frac{24}{60}$ de acción de la mina que una vez había hecho rica a su familia. Un cierto José Ignacio de Busto, dueño de media acción, no pudo pagar 103 pesos que le tocaban de los costos, de manera que para evitar endeudarse vendió su participación al conde de La Valenciana ⁹⁵. No sabemos si la mina de Mellado llegó a producir algo en esta última rehabilitación, pero el hecho es que reveló la pobreza en que habían caído las familias Busto y Aranda.

VII

Sin embargo, la de Mellado fue la única antigua mina rehabilitada por la segunda generación de accionistas de La Valenciana. Así quedó libre el camino para que penetrara el capital mercantil. El mejor ejemplo es el de la mina del Tepeyac, propiedad relativamente pequeña colindante con La Valenciana. Denunciada después de un período de abandono por Juan de Revuelta y Manuel Cobo García, dos comerciantes-aviadores montañeses, en 1787, seguía inundada en su mayor parte tres años más tarde. Fue entonces, en 1790, que Francisco de Septién y Arce, el custodio y heredero de la gran fortuna dejada por Martín de Septién, se convirtió finalmente, de comerciante-aviador que era, en minero, a través del beneficio de minerales. Compró ocho acciones de la mina del Tepeyac, en sociedad con Manuel García de Zeballos y Andrés Sagaz Herrera ⁹⁶. No parece que esta inversión haya tenido mucho éxito, pero las pruebas de que disponemos son fragmentarias. Mourelle afirmó que su primera venta de mineral tuvo lugar en 1790 ⁹⁷. Existe otra referencia a ventas semanarias de mineral por valor de 2 000 pesos durante el mes de marzo de 1798, pero el hecho es que en su testamento, fechado en noviembre de 1799, Septién afirmó que la mina era por aquel entonces improductiva, ya que se había encontrado mineral muy

⁹⁴ FV, 5, Peláez a Rul, 6 diciembre 1805.

⁹⁵ AHGP, Minas, 9 noviembre 1808.

⁹⁶ AHGP, Minas, 8 marzo 1790, 10 junio 1791.

⁹⁷ BN (México) MSS 454 (1391), f. 38.

pobre ⁹⁸. El Tepeyac siguió en explotación, y años más tarde fue administrada por Angel de la Riva, que se había casado con la hija de García de Zeballos. Sin embargo, en general, este ingreso a la minería de una antigua casa mercantil no proporcionó a Septién utilidades comparables a las de La Valenciana, que seguramente eran las que le interesaban.

La segunda firma de comerciantes-aviadores que entró a participar más directamente en las empresas de producción fue la que pertenecía a Juan Vicente Alamán, antiguo cajero de Gabriel de Arechederreta. Era este un hombre que, como Septién y Arce, hizo su fortuna al casarse con la viuda de su difunto patrón. En 1789 Alamán, después de haber sido aviador de unos diez rescatadores, alquiló su propia planta de beneficio. Para financiar esta nueva empresa obtuvo un préstamo de 30 000 pesos de su amiga la condesa viuda de La Valenciana ⁹⁹. No satisfecho de ser rescatador, o quizá con el deseo de obtener una fuente más barata de mineral, Alamán, junto con su hermano Tomás y su cuñado Salvador de Rétegui, decidió emprender una vez más la rehabilitación de la mina de Cata. Los tres poseían unas cuantas acciones de dicha mina por haberse casado con mujeres de la familia Busto. Además, a principios de la última década del siglo XVIII acababa de fallar un intento de desaguar la mina por falta de suficiente capital. También en este caso nuestras pruebas son demasiado escasas para que podamos establecer el resultado de esta rehabilitación final. Al morir Alamán en 1808, ya había invertido por lo menos 52 000 pesos sin haber tenido ninguna ganancia ¹⁰⁰. Nuestro interés aquí reside en la década en que estos comerciantes se decidieron a participar en la minería, actividad de la que siempre se habían conservado a distancia prudente. Fue durante el decenio de 1780-90 cuando pasaron por la primera transición de comerciantes y financieros a refinadores, a lo cual siguió poco después la inversión en la minería extractiva.

Nos falta describir la suerte de otra gran mina guanajuatense, la de Rayas. Inundada desde 1780, no se intentó desaguarla sino hasta 1799. En 1790 Mourelle la visitó y encontró que la explotaban menos

⁹⁸ AHGP, Presos, 4 noviembre 1790; FV, 3, Alonso García Candamo a Rul, 16 marzo 1798.

⁹⁹ AGN, Intendencias 79, Amat a Revillagigedo, 2 diciembre 1784; AHGP, Cabil-do, 2 mayo 1789, 24 enero 1791, y 3 abril 1793.

¹⁰⁰ AHGP, Minas, 19 junio 1806, 3 diciembre 1806, y 23 julio 1808.

de 30 buscones y sus 50 peones; el tiro mayor estaba inundado hasta un nivel de más de 100 varas de las 280 que eran su profundidad total. Declaró que la mina necesitaba un nuevo tiro, agregando que «a esta necesaria obra pone invencible obstáculo la variedad y decadencia de los parcioneros» ¹⁰¹. No obstante, en realidad el segundo marqués de San Juan de Rayas era dueño de 13 de las 24 acciones de la mina, mientras que el resto se hallaba en poder de tres nietas de una hermana del primer marqués.

Hacia 1803, cuando Humboldt visitó Guanajuato, la mina estaba ya rehabilitada. Vendía semanalmente mineral por valor de 8 000 a 15 000 pesos, teniendo costos que no superaban los 4 000 pesos ¹⁰². Para producir mineral en una cantidad cuyo valor posiblemente ascendía a 790 000 pesos anuales, la mina empleaba a 560 hombres de los cuales, como en el caso de La Valenciana, apenas una cuarta parte trabajaba en realidad en la veta ¹⁰³. La mina era todavía relativamente poco profunda, pero en 1805 se emprendió la perforación de un nuevo tiro de sección octogonal con un diámetro de 13 1/2 varas, el cual en 1810 había alcanzado una profundidad de 318 varas ¹⁰⁴.

Pero, ¿con qué capital y administración se rehabilitó la mina de Rayas, después de casi veinte años de abandono? En primer lugar, Francisco Iriarte, un vigoroso administrador vasco, fue nombrado para hacerse cargo de la mina, ayudado por un experto alemán llamado Francisco Fischer ¹⁰⁵. Entonces el segundo marqués de San Juan de Rayas, José Mariano de Sardaneta, solicitó y obtuvo en 1798 un préstamo del tribunal diocesano de Valladolid por la cantidad de 80 000 pesos. Como garantía de esta cuantiosa suma dio la serie de haciendas que su padre había comprado, dos haciendas de beneficio, una posada y la casa en que residía su familia en Guanajuato, hipotecando todas estas propiedades valuadas en su conjunto en unos 420 000 pesos, de lo cual había que descontar las hipotecas anteriores a favor de la Iglesia por la suma de 80 000 pesos ¹⁰⁶. Este nuevo préstamo, concedido por el ilustrado Manuel Abad y Queipo, director del

¹⁰¹ BN (México) MSS 454 (1391), ff. 40-1.

¹⁰² Humboldt, *Ensayo Político*, p. 354.

¹⁰³ Silva Herzog, *Documentos*, pp. 79-81.

¹⁰⁴ Ward, *Mexico in 1827*, II, 450.

¹⁰⁵ AGN, Minería 225, Marqués de San Juan de Rayas, 21 septiembre 1801; FV, 5, Peláez a Rul, 6 diciembre 1805.

¹⁰⁶ ACM, 433, préstamo aprobado por Abad y Queipo, 29 noviembre 1798.

fondo diocesano, fue sin duda suficiente para financiar la primera fase de la rehabilitación. Además, los demás socios también reunieron dinero en efectivo, pues uno de ellos vendió una planta de beneficio en 25 000 pesos y otro obtuvo un préstamo de José Antonio del Mazo por la cantidad de 18 000 pesos. Estas cantidades sumadas al producto de las ventas semanales que se hacían a los rescatadores independientes a la entrada de la mina, deben haber bastado para generar un *superávit suficiente para financiar la perforación del nuevo y magnífico tiro central en 1805* ¹⁰⁷. Ward afirmó que en los cuatro años de 1799 a 1803, la mina de Rayas produjo una utilidad de 400 000 pesos ¹⁰⁸.

Sardaneta se enfrentó a un serio problema en 1806 cuando la junta eclesiástica de consolidación exigió el pago de las hipotecas a favor de la Iglesia que gravaban sus propiedades, es decir, una suma total de 154 000 pesos. En vano protestó afirmando que el nuevo tiro iba a costarle medio millón de pesos, y que se había llegado de nuevo a un manto de agua; se le obligó a pagar 12 000 pesos inmediatamente, y el resto en once pagos anuales ¹⁰⁹. No obstante, Sardaneta, elegido en 1806 administrador general del Tribunal de Minería, se aprovechó de su posición para resarcirse de las pérdidas. A pesar de que el tribunal estaba endeudado, obtuvo en secreto un préstamo de 84 000 pesos de sus fondos, dando como garantía hipotecaria una hacienda que tenía en Irapuato. Además, dispuso de otros 163 000 pesos de los ingresos del Tribunal para «liquidar» a Antonio Bassoco, comerciante de México, que le había prestado con anterioridad personalmente a él dicha cantidad con la garantía, según afirmaba, del Tribunal. Ya en 1808 había logrado por esos medios obrenar del Tribunal 247 000 pesos, destinados, según podemos pensar, a ser invertidos en su mina ¹¹⁰.

Las fuentes del capital que se usó para rehabilitar la mina de Rayas no siguen un esquema normal. Primero, el factor excepcional de la intervención de fondos de la Iglesia, que era una fuente disponible únicamente a los mineros que eran propietarios de tierras que pudie-

¹⁰⁷ AHGP, Cabildo, 24 marzo 1800; 13 julio 1795; 8 mayo 1800.

¹⁰⁸ Ward, *Mexico in 1827*, II, 449-50.

¹⁰⁹ AMM, 143, audiencia judicial 1 septiembre 1806; véase también AGN, Consolidación 5, pagos diocesanos de Valladolid, 18 febrero 1808.

¹¹⁰ AGI, México 2254, Fausto de Elhuyar a Lizana, 17 diciembre 1809.

ran ofrecer como garantía. Luego el préstamo del comerciante y capitalista Antonio Bassoco, y finalmente, la desviación secreta de los fondos del Tribunal de Minería hacia lo que era, después de todo, su propósito legítimo. La Iglesia, un comerciante y financiero, el Tribunal de Minas, una pequeña parte de los bienes de Otero, y las ventas semanarias de mineral, fueron todos factores que contribuyeron a financiar la rehabilitación de la mina de Rayas, la cual, podemos apuntar, tuvo un éxito mucho mayor que las operaciones de la misma especie emprendidas en Cata, La Sirena y Mellado.

VIII

Hacia 1809 todas las grandes minas de Guanajuato estaban en explotación. La minería de la ciudad conservaba su lugar como primera en la Nueva España por su producción, que ascendía a la suma de 5 220 000 pesos de plata, casi una quinta parte de la acuñación total de aquel año. Como ya hemos demostrado ampliamente, la capacidad de producir esas enormes cantidades de plata con regularidad, dependía de una estructura productiva industrial altamente compleja. Lo que el Bajío era para la Nueva España, tal era Guanajuato para la minería: sumamente significativo, pero no necesariamente típico. Por otra parte, como ya nos resultará obvio, no existía un campo minero típico en México, porque la minería era muy antigua y las fases de su desarrollo en los diferentes campos en las diversas regiones eran muy distintos para que pudiera surgir un esquema común a todos. En Guanajuato, fue el éxito continuo y particular de La Valenciana lo que generó y sostuvo la estructura individual de la minería. Fue La Valenciana la que liberó a la ciudad del dominio del capital mercantil de México que era tan claro en la primera mitad del siglo. No quiere decir esto que la minería guanajuatense y la misma Valenciana no hayan experimentado ni se hayan beneficiado de los mismos factores que después de 1767 llevaron la prosperidad a la minería de la Nueva España —la reducción de costos, las mayores utilidades y la mayor disponibilidad de capital— sino que el descubrimiento y, lo cual es más importante, en última instancia la explotación más eficiente de La

Valenciana, dieron una nueva dimensión y una perspectiva más amplia a aquellos factores. Encontraron un terreno más propicio del que existía en otros centros mineros. Naturalmente que estas afirmaciones no pueden ser probadas. ¿Podría haberse desarrollado La Valenciana con tanto éxito antes de la década de 1760-70? He aquí una cuestión para los historiadores futuros que se ocupen de la minería.

CAPÍTULO IX

LA ÉLITE

No existe ningún modo, ni estadístico ni exacto, de definir a los miembros de la *élite* social de Guanajuato diferenciándolos de la gran masa de la población. Las categorías raciales y ocupacionales que resultan del censo de 1792 no son suficientemente detalladas para lograr tal propósito. Es verdad que puede argumentarse que los trescientos españoles peninsulares que por entonces residían en la ciudad deberían definirse, por lo menos, como miembros *en potencia* de dicha *élite*, pero, ¿con qué criterios podemos distinguir a los miembros de hecho de los que estaban en potencia, o, más concretamente, cómo diferenciar a un comerciante en pequeño de un Septién? Además, en el caso de los criollos las dificultades son aún mayores. En vez de tratar de manipular estadísticas tan burdas y sucintas, es preferible que concentremos nuestra atención en un grupo más limitado de individuos, es decir, en los riquísimos y en los funcionarios.

Aquí nos enfrentamos a un importante problema de selección. ¿Cómo obtener una muestra representativa de la alta sociedad de Guanajuato? ¿Cuál es el mejor método para estudiar a este grupo? Por fortuna, estos problemas se solucionan con relativa facilidad mediante la comparación de la élite económica con la política, definiendo a esta última como el grupo de personas que formaban parte del ayuntamiento, de las diputaciones mercantil y minera y, en menor grado, a los oficiales de la milicia. El examen más superficial nos revela que estas dos élites eran prácticamente idénticas. La posesión de un cargo de funcionario seguía de cerca a la distribución de la riqueza.

Habiendo así, en términos generales, identificado al grupo objeto de nuestro estudio, ¿cómo podemos llegar a una definición más exacta? A este respecto, la escasez de pruebas documentales a nuestro alcance limita enormemente la investigación. Por ejemplo, ¿había rivalidad entre criollos y gachupines, envidias entre las familias antiguas y los nuevos ricos, o tensión entre la *élite* y el pueblo? Desgraciadamente el

material de que disponemos no da respuesta a estas preguntas. En general, el método que mejor resultado nos ha dado hasta ahora es el estudio de familias individuales, para descubrir cuándo llegaron al Nuevo Mundo, con quién se casaron y a qué ocupación se dedicaron. Surgen inmediatamente varias familias dignas de ser estudiadas. Ningún análisis de la *élite* guanajuatense estaría completo sin examinar de cerca a los grandes mineros y comerciantes —los Busto y Aranda, los Sardaneta, los Obregón y Otero, los Septién y los Pérez Marañón. Estos ejercicios genealógicos pronto revelan un esquema fascinante. En muchos casos, la división entre gachupín y criollo se resolvió muy pronto casi en una simple distinción de generaciones: los abogados criollos a menudo eran los hijos de los comerciantes gachupines, y estos a su vez con igual frecuencia eran los yernos de los mineros criollos. Debemos hacer hincapié en que nuestro método es abrumadoramente descriptivo, pero el muestreo es suficientemente amplio para incluir a la mayoría de los miembros de la clase alta de Guanajuato, de lo cual resulta que podemos extraer algunos argumentos generales muy convincentes. Para que el ejercicio siguiente tenga sentido en toda la extensión de la palabra, será útil que el lector consulte las tablas genealógicas que figuran en el apéndice.

I

Es conveniente empezar con los Busto porque esa familia, además de ser tan rica como numerosa, es casi el prototipo sobre el que pueden elaborarse las genealogías de todas las demás familias criollas de Guanajuato. El primero que llegó al Nuevo Mundo, un cierto Pedro de Busto, se estableció en León en la segunda mitad del siglo XVI. Su nieto Francisco de Busto y Jercz fue el que se inició en la minería de plata en Guanajuato; rehabilitó la mina de Mellado y amasó una fortuna cuantiosa. Sus hijos, dos varones y una mujer, continuaron su obra: mantuvieron en buen estado la de Mellado y desarrollaron la de Cata. Su hijo mayor Francisco Matías, marqués de San Clemente, fue el primer minero de Guanajuato que obtuvo un título de nobleza de esa clase ¹. Su hija Josefa se casó con un extremeño, el comerciante y aviador Manuel de Aranda y Saavedra ².

¹ Ortega y Pérez Gallardo, *Historia genealógica. I Marqués de San Clemente*; véase también Lohman Villena, *Los americanos en las órdenes nobiliarias*, I, 12.

² AHGP, Cabillo, 30 agosto 1730.

El marqués tuvo diez hijos, seis mujeres y cuatro hombres. Dos de los varones siguieron la carrera sacerdotal; otro, llamado Juan Alejo, fracasó en su breve carrera de minero; y el mayor, de nombre Francisco Cristóbal, heredó el título paterno y se retiró a León, donde terminó sus días relativamente en la pobreza, ya que no recibió de la herencia de su padre más que una parte casi igual a la de cada uno de sus hermanos. Su hijo Pedro de Busto y Peredo, tercer marqués, se vio en la necesidad de renunciar al título por falta de medios para pagar el impuesto especial que su calidad de noble causaba ³. Pedro nos permite hacer aquí un comentario picante sobre la decadencia de la familia, pues sabemos que informó a su madre de sus intenciones de casarse con su querida, una criada mulata. La marquesa viuda, indignada, apeló a la justicia para que impidiera por la fuerza unión tan desigual ⁴. Así pues, en un poco más de una generación, la familia Busto desapareció en la masa de la sociedad después de que Cata y Mellado se arruinaron y de la división de los bienes del primer marqués.

Si bien es cierto que la familia continuó figurando en Guanajuato, esto fue por la línea femenina, porque las seis hijas del primer marqués se casaron con españoles peninsulares; dos, con extremeños, Antonio Jacinto Díez Madroñero y Gonzalo de Aranda, ambos sobrinos y cajeros de Manuel de Aranda y Saavedra, mientras que las cuatro restantes prefirieron maridos vascos. La mayoría de estos yernos comenzaron su carrera en los negocios gracias a la dote de sus esposas y al apoyo financiero del primer marqués ⁵. Este mismo esquema matrimonial fue continuado por los hijos de estas parejas. Juan José Compains y Francisco Azpilcueta, ambos vascos también, heredaron los negocios de sus suegros ⁶, y llegó a darse el caso de que este

³ AGN, Vínculos 152/3, f. 134.

⁴ AHL, Caja 1786/17 apelación recibida 25 octubre 1786.

⁵ Gregoria se casó con Francisco de Mendizábal, vasco: AHGP, Minas, 6 agosto 1785; María Manuela se casó con Domingo de Alegría, de Vizcaya: AHGP, Cabildo, 7 julio 1736; Ana Gertrudis se casó con Lorenzo de Olazábal, de Guipúzcoa: AGN, Minería 158/3, último testamento, 18 septiembre 1773; Josefa se casó con Antonio Jacinto Díez Madroñero, de Extremadura: AHG, Bienes Difuntos 1761-79, último testamento, 16 noviembre 1779; Francisca Anastasia se casó con Gonzalo de Aranda y Saavedra, de Extremadura: AHG, Bienes Difuntos 1761-79, testamento, 14 septiembre 1779; María Josefa se casó en primeras nupcias con Francisco de Ochoa, y en segundas con Domingo de Aribe, de Navarra: AHGP, Presos, 24 agosto 1806, empastado en el volumen de 1803.

⁶ Compains, navarro, se casó con María Josefa de Alegría, y su segunda esposa fue María Josefa de Ochoa: AHG, Bienes Difuntos 1785; AHGP, Cabildo, 1 mayo

esquema se repitiera en la tercera generación, pues Gabriel de Arechederreta y Juan Vicente Alamán se casaron con una nieta de Antonio Jacinto Díez Madroñero. El hijo del segundo, Lucas Alamán, distinguido estadista e historiador del siglo XIX, tenía pues, una genealogía francamente curiosa: ⁷ pues aunque por el lado materno podía hacer alarde de que todos sus ascendientes habían sido americanos desde el siglo XVI, en las últimas tres generaciones su progenie se había formado mediante uniones sucesivas con inmigrantes peninsulares. Alamán tenía que llegar hasta su bisabuelo el marqués de San Clemente, para encontrar un criollo entre sus ancestros varones.

Muy similar era la historia de los Arañda. Las tres hijas de Josefa se casaron con vascos, aunque no sabemos bien a bien qué hicieron sus descendientes ⁸. No existen documentos que nos permitan reconstruir con facilidad la suerte que corrieron los siete hijos varones de Josefa. Sabemos que uno se hizo sacerdote, otro se fue a vivir a España, Juan Ignacio se hizo minero, pero únicamente Ramón Luis prosperó notablemente: se casó con una heredera dueña de haciendas en Salta, y manejó con éxito una mina, la de San Ramón, que más tarde vendió a La Valenciana. Sin embargo, muy contra su voluntad, su única hija se casó con un inmigrante, un cierto Juan López ⁹. Finalmente podemos hacer notar que por lo menos dos de las cuatro hijas de Andrés de Busto, hermano del primer marqués, también se casaron con españoles peninsulares. Bernardo Fernández de Riaño heredó así parte de los intereses mineros de Andrés ¹⁰.

Como se ve, en el estudio aparentemente árido de la genealogía, se descubren algunas características importantes de la sociedad criolla. La familia Busto sufrió prácticamente un rapto de las Sabinas. Por lo menos once de las trece hijas del primer marqués, de Andrés y de

⁷ 1786. Azpilcueta navarro, se casó con María de Olazábal. AGN, Minería 158/2, testamento, 21 abril 1794.

⁸ Lohman Villena, *Los americanos en las órdenes nobiliarias*, II, 271-72. Alamán, *Documentos diversos* (4 vols.; México, 1947), IV, 11.

⁹ María Rafaela se casó con Juan Antonio Quintana, de Vizcaya; AHG, Bienes Difuntos 1742-61, convenio, 27 julio 1756. María Antonia se casó con José Antonio Mendizábal, de Vizcaya; AGN, Vínculos 144-1, demanda judicial, 11 octubre 1751. Ana Francisca se casó con Francisco Alipasolo, también vasco.

¹⁰ Ramón se casó con Ana Josefa de Laris y Olavarria, de Soria. Véanse ACM, 617, 27 febrero 1788; AGI, México 1732, protesta a la Audiencia, 12 octubre 1781.

¹¹ Andrea se casó con Bernardo Fernández de Riaño, de La Rioja; AHGP, Minas, mayo 1784; Antonia se casó con Francisco de Iguirategui, de Guipúzcoa; AHGP, Cabildo, 26 febrero 1736.

Josefa, se casaron con españoles peninsulares. La importancia que estas alianzas familiares tuvo para los inmigrantes en cuestión fue enorme, pues muchos de ellos emplearon la dote de sus esposas como base de su carrera en los negocios. Por supuesto que, en este caso particular, el fracaso de las minas de Cata y de Mellado condujo a varios lentamente hacia la bancarota, pero este hecho no modifica las grandes implicaciones del esquema matrimonial. Es más, parece que una gran proporción de mujeres criollas de buena familia estaban reservadas para los gachupines.

De la misma manera, se advierte una cierta retirada de la sociedad por parte de los hijos varones ya criollos: algunos de ellos corrieron la suerte de sus cuñados que quebraron en las empresas mineras, pero además, de los once hijos varones que tuvieron el primer marqués, Josefa y Andrés, tres entraron al sacerdocio. Y en la generación siguiente, nada menos que nueve nietos escogieron la misma célibe carrera. Cuando en 1767 los jesuitas fueron expulsados de la Nueva España, por lo menos cinco nietos de Busto zarparon rumbo a Italia ¹¹. Esta propensión por la Iglesia entre los varones criollos, aunada a la inclinación de sus hermanas respecto al matrimonio, nos pone de manifiesto una vez más que el inmigrante español se encontraba en una posición particularmente favorable.

No obstante, no todas las familias siguieron el paradigma establecido por los Busto. Los Sardaneta, a pesar de que por gracia del cielo eran poco fértiles, sobrevivieron hasta el nuevo siglo, aunque al principio habían seguido el mismo camino que los Busto. Como en el caso de éstos, los Sardaneta descendían de ancestros llegados a la Nueva España a fines del siglo XVI. Un nieto del primer inmigrante, de nombre José de Sardaneta, adquirió la mina de Rayas asegurando así la supervivencia de su familia en sociedad. Él era miembro de la segunda generación, que era muy crítica; tenía un hermano cura y otro abogado, y tanto él como su hermano Pedro probaron suerte en la minería. De sus cuatro hijas, dos se casaron con peninsulares, un hijo entró a la Compañía de Jesús, y el otro se convirtió en el primer marqués de San Juan de Rayas. Aquí termina el paralelo con los Busto, hasta este punto tan exacto. Por algún misterio genético, de sus cinco hijos casados

¹¹ Con relación a estos sacerdotes consúltese la genealogía de la familia. Los cinco jesuitas eran Francisco y José de Alegría, Manuel y Pedro Arenas, y Francisco de Iguirategui. Véase Cuevas, ed., *Tesoros documentales*, pp. 234-6, 258.

únicamente nacieron tres nietos, y uno de estos a su vez fue estéril ¹². Esta falta de descendencia en vez de ser una desgracia, en realidad fue una bendición, porque no provocó que la fortuna familiar se dividiera excesivamente. El segundo marqués heredó las acciones de Rayas, así como las propiedades no solo de su padre, sino también de sus tías.

Así pues, los Sardaneta constituyeron una notable excepción a la regla general de decadencia de las familias entre la *élite* criolla, porque sobrevivieron a los naufragios que tan frecuentes eran entre las fortunas mineras. No obstante, debe señalarse que esta fuerza y resistencia se debió al talento y espíritu de empresa de José de Sardaneta, ya que, después de todo, los descendientes de sus hermanos no dejaron gran huella de su paso. En épocas posteriores, sabemos que hubo capataces empleados en la mina de Rayas que llevaban el apellido Sardaneta, pero no sabemos si eran legítimos o no. Podemos mencionar un hecho curioso: durante la última década del siglo XVIII, la mina de Rayas fue administrada por breve tiempo por un cierto inmigrante guipuzcoano llamado Melchor de Sardaneta, que afirmaba ser pariente lejano del marqués ¹³. En general, puede afirmarse que la familia sobrevivió sobre todo gracias a la posesión de una mina excepcionalmente buena, la de Rayas, y a la especial infertilidad de los descendientes de José de Sardaneta.

Por una notable y casi inverosímil coincidencia, los dos accionistas principales de La Valenciana, Antonio de Obregón y Pedro Luciano de Otero, formaron parte de la misma generación de colonos a la que pertenecieron los otros dos grandes mineros de Guanajuato, Francisco de Busto y Jerez y José de Sardaneta. Ambos eran nietos de inmigrantes españoles. El abuelo de Obregón dejó su aldea de Llerana en las montañas de Santander durante la década de 1680-90 y se estableció en León, donde muy pronto se convirtió en alcalde mayor y miembro prominente de la sociedad local ¹⁴, posición que fue heredada y mantenida por sus hijos y nietos. Antonio de Obregón y Alcocer, único hijo varón del primer matrimonio de su padre no fue el ignorante violinista que la leyenda nos presenta. Fue educado y recibió el grado de bachiller, y en marzo de 1742 solicitó a las autoridades diocesanas de

¹² Ortega y Pérez Gallardo, *Historia genealógica*, I, *Marqués de San Juan de Rayas*; AHGP, Cabildo, 1 diciembre 1730, 2 noviembre 1786; AHGP, Presos, 12 mayo 1746; AGN, Vínculos 171/2, 12 marzo 1782.

¹³ AHGP, Cabildo, 1 marzo 1806, era natural de Oñate, en Guipúzcoa.

¹⁴ AGI, México 1795. Allí se encuentra toda la genealogía de la familia Obregón.

Valladolid que le concedieran la primera tonsura y que se le admitiera a las cuatro órdenes menores del clero ¹⁵. Sin embargo, no fue constante en sus ambiciones sacerdotales, sino que buscó fortuna en las minas de plata de Guanajuato. Al principio, lo único que encontró fue esposa, ya que ésta en su testamento declaró que al casarse «ninguno de los dos trajo caudal alguno» ¹⁶, además de que en 1760 Obregón vendió ocho acciones de su mina, que por entonces se llamaba Animas, a Pedro Luciano de Otero, en la irrisoria suma de 400 pesos ¹⁷.

Una vez rico, Obregón ocupó puestos en el Cabildo, como magistrado municipal, alcalde mayor interino y llegó a ser conde de La Valenciana. No había puerta que no se abiera para un millonario minero, pero desde el punto de vista social Obregón siempre había pertenecido a la *élite* criolla por su origen, aun cuando fue pobre en su juventud. Además tenía parentesco lejano con los Busto, ya que su abuela paterna era hija de Ana de Busto, hermana del abuelo del primer marqués de San Clemente. La esposa de Obregón también era nieta de un español peninsular, y su madre se había casado en primeras nupcias con un Sardaneta ¹⁸. Resulta interesante como comentario sobre la sociedad provinciana de aquellos tiempos, que su mujer no sabía leer ni escribir ¹⁹.

A la muerte de Obregón, su vasta fortuna atrajo inmediatamente al acostumbrado enjambre de cazafortunas peninsulares. Su hija mayor María Gertrudis, fue pretendida por un malagueño llamado Antonio Pérez Gálvez, hijo según sus enemigos, de un carpintero que sacaba mucho provecho al lejano parentesco que tenía con la familia Gálvez. Era amigo íntimo de Francisco Fernández de Córdoba, también malagueño, que ocupaba entonces el cargo de superintendente de la Casa de Moneda y que más tarde se casó con una nieta del marqués del Jaral. A pesar de tan favorables parentescos, no le causó buena impresión a la condesa viuda de La Valenciana, la cual se opuso

¹⁵ Antonio Obregón fue bautizado en San Francisco de Pénjamo, 24 junio 1722, pero fue criado en León. Véase ACM, 743, aprobación episcopal a su solicitud, 6 marzo 1742. Sus medio-hermanos los Obregón y Arce siguieron teniendo papel importante en la vida de León.

¹⁶ AHG, Bienes Difuntos 1801-5, testamento de la Condesa de La Valenciana, 20 octubre 1798.

¹⁷ AHGP, Minas, 15 septiembre 1760, 24 septiembre 1760.

¹⁸ Véase su voluminosa genealogía en AGI, México 1795.

¹⁹ AGN, Vinculos 216/10, Condesa a Revillagigedo, 7 junio 1793.

al matrimonio apelando al Consejo de Indias para que lo impidiera, e hizo cuanto pudo para persuadir a su hija que se casara con Manuel García de Quintana, montañés viudo de una Septién. Temeroso de perder simultáneamente amada y fortuna, Pérez Gálvez convenció a María Gertrudis de que huyeran a la única posada decente que existía en Guanajuato, donde fueron descubiertos esa misma noche. Poco más tarde la Iglesia santificó sus relaciones ²⁰, y así Pérez Gálvez se vio pronto en posesión de los medios necesarios para comprar el título de conde y varias haciendas. Sobrevivió a la Guerra de Independencia y llegó a tener tratos con las compañías mineras inglesas. El representante de estas, mal impresionado por su falta de rectitud mercantil, hizo de él la descripción que sigue: «Este conde de Gálvez fue zapatero en Andalucía... y por su intrigante espíritu logró casarse con la hija de Obregón, conde de la Valenciana, cambiando así su banco de zapatero por una corona condal» ²¹. Esta opinión inglesa era compartida por su cuñado el joven conde de La Valenciana, que se quejó en una carta al virrey Revillagigedo: «No concordamos nada en los genios ni en los modos de pensar; pero con la diferencia de que el mío es muy encogido, taciturno y opuesto a laberintos, tracaes ni enredos, y Pérez todo al contrario» ²². Le indignaba el escándalo y le dolían las intrigas internas de su familia.

La otra hija de Obregón, María Ignacia, se casó también con un malagueño sin que el matrimonio provocara ninguna oposición en la familia. El marido, llamado Diego Rul, era de buena familia, culto y ya poseía una casa mercantil en Salamanca que valía 40 000 pesos ²³. Hombre de gusto refinado como lo indica su magnífica mansión neoclásica, fue amigo del talentoso matemático José Antonio de Rojas, profesor del Colegio de Guanajuato. Cuando el joven profesor tuvo que huir a los Estados Unidos al ser acusado de herejía y de ser libre pensador, se detuvo durante algún tiempo en la hacienda que Rul poseía en Aguascalientes. Rul mismo fue acusado ante la Inquisición por un rencoroso abogado criollo de nombre Vicente Figueroa,

²⁰ AGI, México 1777, queja de la Condesa viuda al Consejo de Indias, 22 diciembre 1790; con referencia a la huida amorosa véase AGI, México 1893, Revillagigedo a Alcudia, 30 junio 1794.

²¹ James, *Remarks on the Mines*, p. 32.

²² AGN, Vínculos 216/10, Conde a Revillagigedo, 8 julio 1793.

²³ AGI, México 1795, contiene una declaración de quiénes fueron sus antepasados y de sus propiedades.

quien declaró que Rul poseía libros prohibidos y que en una conversación había afirmado «que Jesús Cristo había sido un hombre de bien y justo, privándole de la Divinidad». No obstante, no fue aceptada la acusación²⁴. Cualquiera que haya sido la razón, el hecho innegable es que Rul Claramente pertenecía a un pequeño grupo de españoles ilustrados, tales como el intendente Riaño, que por entonces vivían en Guanajuato.

Si bien los dos yernos de Obregón demostraron tanto talento como energía para la adquisición de riquezas y honores públicos, su hijo, el segundo conde de La Valenciana muy poco hizo por distinguirse. Ni aceptó cargos en Guanajuato ni se acercó a la corte virreinal. Cuando era todavía menor de edad dilapidó en dos años más de 41 000 pesos en gastos personales e hizo préstamos de negocios por la suma de otros 51 000. Estos despilfarros hicieron que su madre, alarmada, se quejara ante el virrey, el cual ordenó una investigación sobre cómo se estaban administrando los bienes de la sucesión de Obregón. Muy irónico fue que la carta virreinal haya sido leída a la condesa por el joven conde, ignorante del asunto, el cual más tarde describió la escena en los siguientes términos: «No soy capaz de ponderar a V. E. el sobresalto que me augió en el mismo acto de ir leyendo como ya me sucedía tan de repente y a ciegas y con el pesar de que me tratara con tan poca piedad la misma madre que me dio el ser, sacando al público mis procederes»²⁵.

Por otra parte, su medio hermano Ignacio de Obregón que, si damos crédito a las acusaciones de sus enemigos, era hijo ilegítimo del primer conde, demostró tener tanto buen sentido para los negocios como aspiraciones sociales. Se había establecido en Guanajuato de niño, donde «en compañía de mi padre el señor don Antonio de Obregón y Alcocer... seguí la honrosa carrera de la minería»²⁶. Sin embargo, más tarde regresó a vivir en León, donde fue regidor y magistrado municipal; trabajó en Catorce, donde en sociedad con el minero vasco Francisco Miguel de Aguirre, puso en explora-

²⁴ Respecto a Rojas, véase AGN, Inquisición 1357, f. 158. Respecto a las acusaciones véase AGN, Inquisición 1434/3, f. 96, informe del Lic. José Vicente Figueroa, 30 enero 1807.

²⁵ AGN, Vínculos 216/10, Conde a Revillagigedo, 8 julio 1793.

²⁶ AGN, Minería 152/10, declaración de Ignacio Obregón, 1 junio 1801. Véase también AGI, México 2246, certificados de Obregón presentados 28 enero 1803. Obregón se indignó mucho por las acusaciones de que era ilegítimo, pero nunca declaró quién era su madre.

del ejército. Su riqueza le permitió dar empleo a otro sobrino, Modesto de Villa, al que encargó la administración de una hacienda de beneficio ³⁵. Su prosperidad atrajo a otros parientes, ya que en una ocasión lo encontramos proponiendo el ascenso de «tres jóvenes recién venidos de España y recomendados por mis parientes» ³⁶. Siendo evidentemente un hombre de inteligencia y de empresa, poseía una extensa biblioteca que comprendía 106 títulos. En su testamento estableció un legado de 8 500 pesos para que se fundaran escuelas en Meruelo, además de dejar otras sumas a diversos miembros de su familia que todavía residían en aquel valle ³⁷.

II

La sorprendente regularidad con que los inmigrantes obtenían la mano de una heredera minera no oscurece el hecho de que la mayoría de los españoles peninsulares de Guanajuato comenzaron su carrera financiera como cajeros, amasando sus fortunas mediante el comercio, los que lograron enriquecerse. Los comerciantes formaban una parte considerable de la *élite* de la ciudad. En los años que siguieron a 1770, las dos familias mercantiles más importantes eran los Pérez Marañón y los Septién. No era fortuito que ambas fueran de origen santanderino, ya que el censo de 1793 reveló que los montañeses formaban con mucho el grupo más numeroso, por provincias, entre la comunidad inmigrada. Además, la distribución de mercurio de 1781 indicaba que la mayoría de los comerciantes-aviadores importantes eran originarios de esa misma región. Más sorprendente aún es el hecho de que ambas familias procedían de la pequeña aldea de Llerana, en Vallecarrido, provincia de Santander, el mismísimo lugar de donde el abuelo de Antonio de Obregón había salido en el siglo anterior.

La historia de la familia Septién es la que mejor nos revela tanto el esquema de la inmigración peninsular como el de la formación de la *élite* criolla. En el Bajío vivieron no menos de cuatro generaciones de miembros de la familia Septién, por lo que la perspectiva es mucho más amplia que la de los demás linajes objeto de nuestro estudio. Los primeros inmigrantes de que tenemos noticia fueron dos hermanos, Agustín y Manuel de Septién y Montero, que en cierta época durante

³⁵ AHG, Bienes Difuntos 1801-5, testamento, 18 marzo 1805.

³⁶ AHGP, Cabildo, 21 marzo 1804.

³⁷ Véase nota 35; y también Sojo y Lomba, *Ilustraciones* p. 438.

el segundo cuarto del siglo XVIII se establecieron en Guanajuato y León, respectivamente. Agustín fue un comerciante de más éxito que su hermano, y también se casó con una heredera, hija de José de Austri, regidor y alférez real de León. Cuando Agustín murió había amasado una fortuna de más de 200 000 pesos, invertida en su mayor parte en un grupo de pequeñas haciendas. En Guanajuato compró el puesto de regidor fiel ejecutor, cargo que durante el resto del siglo continuó en manos de su familia ³⁸.

A la edad de dieciocho años, el hijo mayor de Agustín, Pedro Antonio de Septién Montero y Austri, se convirtió en alcalde ordinario de León, pero al casarse trasladó su residencia a Querétaro, donde fue regidor alférez real durante más de treinta y siete años, cargo que había heredado de su suegro Pedro de Primo y Jordán. Tuvo un papel importante en la vida pública de Querétaro, acompañando a los jesuitas a Veracruz en 1767 y promoviendo el establecimiento de una fábrica real de tabaco en aquella ciudad. Durante el período de 1796 a 1801 fue subdelegado en Celaya y Salvatierra, cargo lucrativo que tenía un estipendio de más de 3 000 pesos ³⁹. Pedro vivió lo suficiente para que en 1808 se le acusara de ser partidario de la independencia, cargo que pudo rebatir aunque admitió que descaba se formase una junta provincial mexicana similar a las que se habían formado en la península ⁴⁰.

Sus dos hermanos también ocuparon cargos públicos, José Domingo como regidor alguacil mayor de Querétaro y José Ildefonso como regidor de León. Parece que este último vivía de los bienes que había heredado; en 1787 tuvo que pedir un aumento de la hipoteca que gravaba a su hacienda de San Nicolás, de 5 000 a 14 000 pesos, aunque la propiedad no estaba valuada más que en 25 400 pesos. No logró tampoco liquidar esta nueva deuda dentro del plazo estipulado de cinco años, ya que en 1807 la hipoteca ascendía todavía a la cifra total de 14 000 pesos ⁴¹.

Como podía esperarse en una familia semejante, la hermana de Septién, María, se casó con un gachupín nativo de Toranzo, en los

³⁸ AHGP, Cabildo, 21 febrero 1750, 5 febrero 1772, y 13 febrero 1744.

³⁹ Véanse los certificados expedidos a favor de Septién por sus servicios públicos en AGI, México 1790, Marquina a Caballero, 26 junio 1802.

⁴⁰ AGN, Historia 49/43, la acusación se presentó el 26 septiembre 1808. Septién también publicó un pequeño devocionario. Véase Beristáin, *Biblioteca*, IV, 334.

⁴¹ ACM, 617, 25 junio 1787; AGN, *Consolidación* 5, 25 febrero 1807.

montes de Santander, llamado Bernabé de Bustamante, el cual era tanto comerciante como aviador en Guanajuato. Siendo miembro prominente de la comunidad montañesa, parece que era un hombre culto propietario de una biblioteca de cierta importancia. Sus gustos, y no su oficio, fueron heredados por sus hijos evidentemente, ya que los tres, llamados José María, Miguel y Benigno fueron profesores en el Colegio de Guanajuato. José María fue un conocido naturalista en los años que siguieron a la independencia ⁴². Pedro de Septién tenía otro cuñado gachupín, Antonio de Septién y Castillo, casado con la hermana de su mujer, María Gertrudis Primo y Jordán. Este Septién, que era su pariente lejano, fue representante de la segunda fase de la inmigración desde la aldea de Llerana, ya que era de San Vicente de la Barquera, situado en la costa de Santander y donde su padre había sido regidor. Su abuelo aparece registrado como propietario de una casa en Llerana. En Querétaro, donde fijó su residencia, fue regidor, se dedicó al comercio e invirtió dinero en tierras ⁴³. Puede hacerse notar, de paso, que el abuelo de sus esposas, Juan de Primo y Jordán, también era originario de Santander ⁴⁴.

Es sumamente curioso que la segunda generación de miembros de la familia Septién que se establecieron en el Bajío haya repetido exactamente los esquemas que la rama queretana de la familia había establecido anteriormente. En aquella ocasión inmigraron tres hermanos, Martín, Francisco y Juan Fernando, hijos de Bernardo de Septién y Montero, hermano de Manuel y de Agustín que había permanecido en España. No será ocioso dar una rápida ojeada a los antecedentes de Bernardo, lo que nos permitirá comparar su vida en la Península con la carrera ulterior de sus hijos. La información puede obtenerse del valioso «catastro» o censo que el marqués de la Ensenada preparó en 1752.

Bernardo de Septién vivía en la aldea de Llerana, situada en el Vallecarrido, no lejos de Santander. En 1752 había en ella 72 vecinos, de los cuales 39 eran agricultores y 30 viudas, y todos sin excepción fueron clasificados como hidalgos ⁴⁵. La mayoría de ellos

⁴² AGI, México 1795, en una sección dedicada a la familia Obregón; también Romero, *Noticias*, p. 170.

⁴³ CV, Sala de Hijosdalgo 1145/9, certificación, 15 enero 1733, en la que se dice que Septién es un comerciante de Querétaro; véase también Martínez Cossío, *Los caballeros*, pp. 269-70.

⁴⁴ AGI, México 1790, Marquina a Caballero, 26 junio 1802.

⁴⁵ Tomás Maza Solano, *Nobleza, hidalguía, profesiones y oficios en la montaña según los*

vivía en casas dispersas por el valle, rodeadas de sus tierras, ya que la aldea propiamente dicha apenas si superaba las diez casas. En el catastro, se dice que *Bernardo de Septién era agricultor por ocupación, con el rango de hidalgo. Sus cuatro hijos estaban ausentes, tres habían partido para las Indias, y el cuarto era sacerdote «fraile de la Trinidad Calzada»*. Es evidente que no era un agricultor pobre, ya que tenía dos sirvientes que vivían en una casa separada también de su propiedad, situada a unos diez pasos de la suya propia. Era propietario de una yunta de bueyes, tres vacas con crías, catorce ovejas y una cabra. Su propiedad, que consistía de partes separadas ubicadas en todo el valle, comprendía tierras arables y pastizales, así como hortalizas ⁴⁶. Una breve comparación con las propiedades catastradas de otros vecinos nos sugiere que él era de los ricos del valle, y que al contrario de la mayoría de los demás, sus propiedades no estaban gravadas por hipotecas. Así se nos presenta el cuadro de un agricultor próspero cuyos hijos habían emigrado no por grave necesidad (aunque es claro que la herencia no habría podido mantener a los cuatro hermanos con comodidad), sino por el deseo de participar en la riqueza recién descubierta de sus dos tíos. Había una diferencia profunda, después de todo, entre una yunta de bueyes, tres vacas y catorce ovejas, y los 200 000 pesos atesorados por su tío Agustín.

Sus aspiraciones, en parte, eran justificadas. Martín de Septién llegó a ser el principal comerciante de Guanajuato y dueño de bienes por la suma de 600 000 pesos. Su riqueza y posición fortalecieron a toda la colonia montañesa de Guanajuato y fue claramente un punto de atracción para los inmigrantes procedentes de Vallecarriedo. Septién reclutaba a sus cajeros entre sus compatriotas, y como aviador prefería financiar principalmente a los rescatadores montañeses. Por ejemplo, empleó a Martín de la Riva como cajero, que era natural de Vallecarriedo, y financió al hermano de este, Pedro, en sus actividades como rescatador. Un tercer hermano, de nombre Angel, se dedicó a la minería. Estos inmigrantes no eran en lo absoluto los «polizones» que pinta la imaginación popular. El administrador principal de Septién, Manuel García de Quintana, también natural de

padrones del catastro del Marqués de la Ensenada (4 vols.; Santander, 1953-61), I, Nos. 4970-5066.

⁴⁶ APS, Catastro del Marqués de la Ensenada, 475. Libro Llerana, f. 79, 17 mayo 1752.

Vallecarriedo, venía de una clase social muy semejante a la de José Antonio del Mazo y Diego Rul. Su padre era abogado, y su hermano sacerdote carmelita. De la misma manera, los de la Riva tenían un hermano que era «doctor», es decir, probablemente sacerdote ⁴⁷. No debe concluirse que las conexiones familiares por sí mismas bastaban para hacer fortuna, pues a ninguno de los dos hermanos de Martín le fue especialmente bien. Francisco perdió mucho dinero en la quiebra de su suegro el regidor Agustín de la Torre, y parece que en gran parte vivió a partir de entonces del salario que recibía en su puesto de regidor fiel ejecutor, cargo que había heredado de su tío Agustín ⁴⁸.

Francisco de Septién y Montero tuvo cuatro hijas y dos hijos. Por lo menos dos, y posiblemente hasta tres de ellas se casaron con montañeses, una de ellas con García de Quintana, cajero de Martín ⁴⁹. El hijo mayor, José María de Septién, se recibió de abogado y se casó con María Pérez Marañón, hija de un comerciante montañés, que llevó como dote una pequeña herencia, y después de la muerte de su padre se convirtió en regidor fiel ejecutor, puesto que, según afirmó más tarde, le daba un estipendio anual de 2 000 pesos ⁵⁰. En 1805 vio asegurado su futuro económico cuando su propia hija María Josefa se casó con Pedro de Otero (el joven) accionista de La Valenciana ⁵¹. José María de Septién se encontró exactamente en la misma posición de su primo segundo Pedro Antonio de Septién, de Querétaro. Estos dos criollos de primera generación escogieron la carrera de administración pública y fueron funcionarios municipales; ambos tuvieron los inevitables cuñados gachupines que amasaron grandes fortunas en el comercio y en la minería. No obstante, muy pocos documentos han llegado hasta nosotros que nos aclaren qué pensaban de esta curiosa situación social.

La tercera generación de miembros de la familia Septién que se estableció en Guanajuato estuvo representada por Francisco de Septién y Arce, natural de Llerana, que llegó para ser cajero de su tío lejano Martín de Septién. Tenía otros parientes cercanos en Guanajuato porque su tío materno Francisco de Escalada y la Flor se había

⁴⁷ Respecto a Quintana, véase AHGP, Cabildo, 18 septiembre 1787; respecto a de la Riva, AHGP, Cabildo, 3 septiembre 1786.

⁴⁸ AHGP, Cabildo, 13 enero 1783.

⁴⁹ AHGP, Cabildo, 21 noviembre 1808.

⁵⁰ AHGP, Cabildo, 17 agosto 1793; AHG, Insurgencia 1812-14, 25 enero 1814.

⁵¹ AHGP, Cabildo, 14 mayo 1805.

establecido en la ciudad en época anterior, durante ese mismo siglo; su hija se casó con Juan Vicente Alamán. Con tales parientes, muy difícilmente podía fracasar Septién y Arce, pero dio un golpe maestro cuando ganó la mano de la joven viuda de Martín de Septién, heredando así todas las enormes riquezas de su tío. Sus tres hijos fundaron la tercera rama de la familia Septién residente en el Bajío.⁵²

Después de tres generaciones de inmigrantes podía suponerse que era suficiente, pero en realidad llegaron de la península otros tres hermanos, llamados Bartolomé, Baltazar y Martín de Septién y Arce, como siempre «sobrinos» de su predecesor que se dedicaron respectivamente a la refinación de minerales, a las actividades agropecuarias en Silao y al sacerdocio. Sus carreras llegaron abruptamente a su fin en 1810 cuando los insurgentes mataron a Bartolomé y a Baltazar.⁵³ Martín protegido por la ropa talar, escapó con unos cuantos moretones.

Puede demostrarse que el esquema observado entre los Septién no era raro, mediante el caso de los Pérez Marañón. Los miembros de su familia vivían en la misma aldea de Llerana. En el catastro de 1752, Francisco Pérez Marañón, agricultor por ocupación e hidalgo por derecho, aparece como propietario de una yunta de bueyes y tres vacas con sus crías. Tenía menos tierra que Bernardo de Septién, gravada por una pequeña hipoteca, además de que no tenía más que una sirvienta. En aquella fecha dos de sus hijos, José y Joaquín, ya habían emigrado a las Indias, y el único que le quedaba, Manuel, estaba por hacerlo.⁵⁴ Es obvio que su calidad de hidalgo no era firme, ya que en un censo hecho en 1758, durante un período en que se encontraba ausente del valle, no se le incluyó en dicha clase. Se vio por ello en la necesidad de pedir a la Cancillería de Valladolid que rectificara el error.⁵⁵

De los tres hermanos emigrados, Manuel murió en circunstancias económicas modestas, al igual que Joaquín. Por el contrario, José,

⁵² Septién tuvo tres hijos varones, José Miguel, José Francisco y José María. Véase AHGP, Presos, 4 noviembre 1799.

⁵³ Respecto a Bartolomé véase AHGP, Cabildo, 11 enero 1809, 9 septiembre 1809; respecto a Baltazar véase AGI, México 1686, Iturrigaray a Caballero, 26 abril 1806; respecto a Martín, véase Alamán, *Historia*, I, 277. También AHGP, Cabildo, 31 agosto 1811.

⁵⁴ APS, Catastro del Marqués de la Ensenada, 475, Libro Llerana, ff. 158-60, 22 mayo 1752.

⁵⁵ CV, Sala de Hijosdalgo 1123/54, 19 mayo 1760; 1164/36, 30 septiembre 1783.

que vivió suficientemente para enterrarlos a los dos y a su sobrino Francisco, prosperó más de lo que nunca habían soñado en Llerana ⁵⁶. Como en el caso de Martín de Septién su éxito atrajo a otros miembros de la familia, que se le reunieron en Guanajuato. Un sobrino, de nombre Francisco, llegó de la aldea y más tarde emigraron también otros dos «sobrinos» más lejanos, naturales de otros valles y no de Vallecarrido. Felipe fue su cajero y Agustín Pérez Marañón obtuvo de su tío un préstamo de 12 000 pesos para iniciar lo que resultó ser una sólida carrera en los negocios ⁵⁷.

Al contrario de estos sobrinos, ninguno de los hijos varones de Pérez Marañón demostró el menor interés por los negocios. Fernando, el primogénito y el más distinguido, se recibió de abogado y obtuvo el nombramiento honorario de vice-rector del Colegio de Abogados de la ciudad de México. En Guanajuato compró el cargo de regidor alférez real, y pronto se convirtió en el jefe efectivo del ayuntamiento. Impresionado por sus talentos legales, el intendente Riaño con frecuencia le empleaba como consejero para asuntos públicos y litigios y hasta llegó a recomendar que se le nombrara teniente legal oficial y asesor de la intendencia ⁵⁸. Parece, sin embargo, que tales actividades institucionales no proporcionaban grandes recompensas en efectivo, porque Pérez Marañón seguía teniendo la firma de su padre, habiendo confiado su administración a un gallego ⁵⁹.

Los otros tres hermanos eludieron las actividades comerciales. Antonio se hizo clérigo, Marcos fue empleado de poca importancia en correos ⁶⁰, y Alonso fue administrador del monopolio del tabaco en Salamanca; también compró una pequeña hacienda por valor de 10 000 pesos ⁶¹. Esta primera generación de hijos criollos eligió, pues, las clásicas ocupaciones de la colonia: la Iglesia, la abogacía y la burocracia fiscal. De sus hermanas, una se casó con un comerciante

⁵⁶ AHGP, Cabildo, 29 septiembre 1750, 20 diciembre 1790; AHG, Bienes Difuntos 1784-8, 28 junio 1785.

⁵⁷ Respecto a Felipe, AHGP, Cabildo, 4 abril 1797; respecto a Agustín, AHG, Actas de Cabildo, Enero 1792.

⁵⁸ AHG, Actas de Cabildo, noviembre 1792; AGI, México 1893, Iturrigaray a Caballero, 26 noviembre 1804.

⁵⁹ AHGP, Cabildo, 15 febrero 1798.

⁶⁰ AHGP, Cabildo, 17 agosto 1793.

⁶¹ ACM, 433, 15 septiembre 1798; AMM, 150, 8 octubre 1806.

vasco y la otra con un abogado criollo llamado el licenciado José María de Septién ⁶².

Otros linajes criollos siguieron casi las mismas tendencias. Bernardo Fernández de Riaño, el prominente minero, tuvo cuatro hijos varones, de los cuales uno fue abogado y trabajó en el cabildo de Guanajuato, otro se hizo cura, el tercero murió joven y el cuarto se dedicó a la minería de plata, llegando a tener deudas por la suma de 23 000 pesos ⁶³. Sus primos, los Liceaga siguieron caminos similares. Parece que su padre José de Liceaga fue un minero bastante próspero que también formó parte del ayuntamiento ⁶⁴, pero en 1774 la Caja Real observó que la mina de su hijo, llamada de Chichindarito, era explotada únicamente por buscones ⁶⁵. Su hijo mayor, Tomás de Liceaga, tuvo un papel prominente en la supresión de la revuelta de 1767. Gálvez le recompensó con el grado de teniente coronel en el recién formado regimiento del Príncipe ⁶⁶. En 1776, sin duda para mejorar su peligrosa posición financiera, aceptó un puesto asalariado como diputado general del Tribunal de Minería. Al morir tres años más tarde, dejó sus asuntos en tan mal estado que su familia tuvo que pedir 700 pesos prestados para el entierro ⁶⁷. Su hermano Ramón Luis le sucedió en el cargo de diputado general, y a pesar de que lo conservó durante 14 años (1779-93) también murió abrumado por las deudas. El Tribunal votó una partida de 300 pesos como subvención especial para que se le enterrara decentemente ⁶⁸. Manuel Esteban, tercero de los hermanos Liceaga, fue administrador de la alhóndiga municipal, puesto que tenía un sueldo anual de 700 pesos ⁶⁹. Su viuda, que se quedó con una familia grande y recursos muy escasos, se casó con el rico gachupín Juan de Villamor ex-administrador de los bienes de la sucesión de Obregón ⁷⁰. Después de 1810, un hijo de esta viuda, llamado José María de Liceaga, surgió como conocido jefe

⁶² AHGP, Cabildo, 9 septiembre 1801.

⁶³ AHGP, Minas, Mayo 1784; AHGP, Cabildo, 14 julio 1790, 6 octubre 1803; AMM, 150, 13 septiembre 1806.

⁶⁴ AGN, Minería 5/1, testimonios de linaje, 10 octubre 1738.

⁶⁵ AGN, Minería 11/1, oficiales de Hacienda a Bucareli, 3 febrero 1774.

⁶⁶ Priestley, *José de Gálvez*, p. 225.

⁶⁷ AGN, Minería 113/1, reunión de acreedores, 25 noviembre 1779.

⁶⁸ AGN, Minería 52/12, Tribunal de Minería al Virrey, 27 junio 1792.

⁶⁹ AHG, Actas de Cabildo, enero 1784.

⁷⁰ AHGP, Cabildo, 30 enero 1787, 21 noviembre 1807.

insurgente. En el término de una generación abrumada por las deudas, la familia pasó de la lealtad activa a la rebelión abierta ⁷¹.

Hemos presentado suficientes pruebas para poder formarnos una opinión certera de la composición de la clase alta en Guanajuato. Su característica más notable era la presión ascendente casi continua que ejercían los peninsulares. En cada generación éstos obtenían una buena parte de los premios económicos y cívicos. Sus hijos criollos heredaban su riqueza y, en muchos casos, aunque no en todos, la dilapidaban. Hablando en términos generales, puede afirmarse que los criollos de esta segunda generación, que figuraron en la sociedad de Guanajuato en el siglo XVIII alcanzaron la preminencia no como resultado de su herencia, sino por sus propios esfuerzos en las actividades mineras. La *élite* guanajuatense estaba compuesta casi enteramente por recién llegados, nuevos ricos, comerciantes gachupines y mineros criollos. No obstante, los americanos que ascendían en la escala social eran en su mayor parte gente con muchas relaciones y parientes, de familias a punto de perder su «respetabilidad», o que emprendían actividades mineras para reconstruir su fortuna y para recobrar la perdida posición en la sociedad. De la misma manera, los inmigrantes que pasaban a formar parte de la *élite* generalmente tenían la ventaja de un amplio apoyo familiar. De cualquier manera, no debe subestimarse el papel del talento individual, ya que tanto en la minería como en el comercio, ni los contactos más excelentes ni el más amplio apoyo financiero podían salvar a una persona que no poseyera energía y espíritu de empresa, de que cayera en deudas que le abrumaran.

En muchos aspectos no es exacto dividir a esta *élite* en dos partes, de acuerdo con sus miembros europeos o americanos, porque esto en muchos casos divide en dos a las familias. Por otra parte, parece que tal fue el efecto de la Guerra de Independencia, especialmente en su primera fase. La enemistad entre las dos ramas de la nación española a menudo tomaba la forma de la revuelta de los hijos contra sus padres, o de peleas entre cuñados o primos. Por desgracia, hasta ahora no poseemos pruebas documentales de qué tan profundo fue este sentimiento de irritación y hostilidad en Guanajuato. Lo más cercano a

⁷¹ La madre de Liceaga, María Josefa, junto con su hijo, fueron detenidos por deslealtad a la Corona: AHGP, Cabildo, 18 septiembre 1811 y 8 octubre 1811.

ellas que ha llegado a nuestras manos es la declaración de reivindicación pública expedida por un cabildo en su mayor parte criollo. Después de la matanza de varios cientos de españoles peninsulares por las fuerzas insurgentes de Hidalgo. El autor de este panfleto, que fue el licenciado José María de Septién y Montero, escribió:

Sin esos abominables distintivos de criollos y gachupines, que jamás ha habido entre la gente noble, culta y distinguida de esta ciudad... Los europeos eran nuestros parientes, estaban casados con nuestras hijas o hermanas, eran nuestros buenos amigos, y teníamos con ellos nuestras relaciones de comercio y nuestros intereses y caudales estaban mezclados con los suyos y aun dependían de ellos absolutamente. En su desgracia fuimos todos envueltos.

Septién escribía en nombre del ayuntamiento, pero no parece haber razón para dudar que expresaba también sus propios sentimientos, y quizá los de la mayor parte de los hombres de su generación y posición social ⁷². Por lo menos en Guanajuato, fueron muy pocos los miembros de la *élite* de la ciudad, jóvenes o viejos, que se hayan unido a las fuerzas rebeldes de Hidalgo; la mayor parte fueron leales a la Corona.

III

Los miembros de organismos tales como el cabildo, las diputaciones de mineros y comerciantes y, en menor grado, los oficiales de la milicia, reflejaban todos con una precisión admirable el balance y la riqueza del momento entre la *élite* guanajuatense. Un miembro de la familia Obregón enriquecido recientemente, podía comprar tanto un cargo en el cabildo como un título de nobleza. Uno de los Busto, cuando empobreció, desapareció de dichos organismos muy pronto. La *élite* política, pues, era casi la misma *élite* económica. Para comprobar esta aserción examinemos a los miembros del ayuntamiento, de la milicia, y de las diputaciones de mineros y comerciantes. Debe hacerse hincapié en que las pruebas de que disponemos se refieren esencialmente al período que siguió a la Visita de Gálvez.

Los archivos del cabildo comienzan en 1777, cuando constaba de

⁷² *Pública vindicación del ilustre ayuntamiento de Guanajuato...* (México, 1811), pp. 12, 25-6. Respecto a la paternidad literaria de Septién con referencia a este documento, véase: José María Liceaga, *Adiciones y rectificaciones a la historia de México por don Lucas Alamán* (2 vols.; México, 1944), I, 81.

unos 15 regidores, tanto permanentes como temporales ⁷³. La mayor parte de ellos habían obtenido el cargo mediante una simple compra a la Corona. No obstante, los funcionarios de esta clase gozaban del derecho de legarlo o de venderlo y la Corona exigía únicamente el pago del precio de venta del cargo. Durante el decenio de 1760-70 tuvo lugar una ligera modificación de este sistema, al decretar la Corona que un cierto número de regidores fueran electos. Pero mientras en la Península estos regidores honorarios eran electos por sufragio popular, en Guanajuato eran designados por el ayuntamiento mismo ⁷⁴. Cada año el cabildo elegía a los dos alcaldes ordinarios, a los magistrados municipales, a un procurador general del común que tenía la función de guardián y representante de los intereses populares, y a dos regidores honorarios cuyas funciones duraban dos años, de modo que siempre formaran parte del cabildo cuatro de estos regidores por elección. El núcleo del ayuntamiento lo componían cinco miembros cuyos cargos eran de mayor responsabilidad: el alférez real, el alcalde provincial, el alguacil mayor, el depositario general y el fiel ejecutor. Además, un número variable de «regidores capitulares» completaban el número de los miembros permanentes del cabildo. Una breve enumeración de las responsabilidades y precios de estos cargos será útil para los futuros estudiosos del gobierno municipal, si no lo fuera para el lector común y corriente.

El alférez real era el presidente del cabildo en ausencia del intendente y, en su calidad de miembro principal durante la mayor parte del siglo «en virtud del privilegio de su cargo», proponía los nombres de las personas entre las que se escogían los alcaldes ordinarios; así, en 1778 el alférez real presentó a dos candidatos para el puesto principal y tres para el secundario, entre los cuales el ayuntamiento debía escoger ⁷⁵. Después de 1780 esta costumbre fue abolida cuando el cabildo, a pesar de las protestas, recobró el derecho a designar a quien quisiera ⁷⁶. Durante la mayor parte del siglo este puesto estuvo en manos de la familia Bluet Iguiño hasta que las dificultades financieras y la ruina la hicieron venderlo a los Sardaneta, en el decenio de 1780-

⁷³ Marmolejo, *Efemérides*, I, 190; II, 50.

⁷⁴ Respecto a la práctica en la Península véase: A. Desdèvis de Dèzert, *L'Espagne de l'Ancien Régime: Les Institutions* (París, 1899), pp. 185-6.

⁷⁵ AHG, Actas de Cabildo, 1 enero 1778.

⁷⁶ AGI, México 2240, Diputación minera de Guanajuato al Virrey, 14 enero 1783.

90; en 1792 el segundo marqués lo vendió en 750 pesos al licenciado Fernando Pérez Marañón, que conservó el cargo hasta 1810 ⁷⁷.

El alcalde provincial, que teóricamente estaba a cargo de la policía rural, no tenía en realidad ninguna función específica, de allí que el precio de este puesto, como el de alférez real, fuera bajo, pues en 1788 no valía más de 700 pesos. Durante muchos años el primer marqués de San Juan de Rayas lo ocupó, pero de 1788 a 1810 fue propiedad de Bernardo Chico Valdés, comerciante y rescatador castellano ⁷⁸. El alguacil mayor era el jefe de la policía de la ciudad, tenía a su cargo las prisiones y parecé que obtenía un ingreso considerable del ejercicio de estos deberes. En 1791 el puesto fue comprado por Vicente Regil, rescatador criollo y protegido de la familia Otero, en la cantidad de 1 165 pesos; y en 1805 lo adquirió Mariano de Otero en la cantidad de 3 500 pesos ⁷⁹. Otro cargo de valor era el de depositario general, que administraba todos los bienes intestados en primera instancia, tarca de la que, sin duda, obtenía una utilidad económica. Estuvo en poder de dos generaciones de miembros de la familia Pérez Marañón a partir de la década de 1760-70, y se valuaba en 2 000 pesos ⁸⁰. Las obligaciones del fiel ejecutor consistían en el control de las pesas y medidas usadas en los comercios de la ciudad, y en la inspección de los mercados. Parece que este puesto producía buenos ingresos, ya que el que lo ocupaba en 1812 estimó que le producía comisiones anuales que ascendían a la suma de 2 000 pesos. Se le valuaba en 1 000 pesos, y fue ocupado por tres generaciones de miembros de la familia Septién, por lo menos a partir del decenio de 1740-50 ⁸¹.

Además de estos puestos el cabildo comprendía un puñado de regidores permanentes que variaban en número de dos a cinco según el año. Hacia la última década del siglo XVIII los precios en que se compraban estos cargos iban de 500 a 600 pesos. Es evidente que sólo los puestos que proporcionaban ingresos se valuaban en más de 750 pesos.

⁷⁷ AHG, Actas de Cabildo 1792; AGI, México 2126, 21 julio 1792.

⁷⁸ AHG, Actas de Cabildo, 1 enero 1788.

⁷⁹ Respecto a los deberes del cargo véase Constantine Bayle, *Los cabildos seculares en la América Española* (Madrid, 1952), pp. 189-95. AGI, México 2125, 9 diciembre 1790; AHG, Actas de Cabildo, 14 enero 1805.

⁸⁰ AGI, México 2126, 27 agosto 1792.

⁸¹ Bayle, *Los cabildos seculares*, pp. 207-24; AHG, Insurgencia 1812-14, declaración, 25 enero 1814.

La tabla 54 indica la composición del cabildo de Guanajuato a fines del siglo XVIII; se han seleccionado los años de 1778, 1793 y 1809 para demostrar tanto los cambios, como la relativa estabilidad de su *composición*.

Los nombres nos son conocidos, en su mayor parte. Casi todas las casas mercantiles o empresas mineras importantes tenían a un miembro de la familia que era regidor. Este era el caso, especialmente en el año de 1778. Por ejemplo, tomando una vez más la distribución de mercurio en 1781 como medida de la importancia relativa, encontramos que con la única excepción de Ramón de Aranda, todos los mineros principales y siete de los nueve aviadores mayores estuvieron representados ese año en el ayuntamiento. El pasado tenía todavía voz, pues un hijo del marqués de San Clemente conservaba una curul y figuraban además no menos de seis hombres casados con miembros del clan Busto-Aranda, o descendientes de él.

Para 1792-3 había tenido lugar un cambio notable en la composición del cabildo. En primer lugar, la muerte de los dos socios originales de La Valenciana y del primer marqués de San Juan de Rayas dejaron un cierto vacío que fue ocupado por todo un grupo de montañeses y por sus hijos criollos. Los peninsulares tenían una clara mayoría. El control que tuvieron, haya sido fortuito o resultado de un plan premeditado, es de cualquier forma el reflejo de que los montañeses tuvieron un predominio especial dentro de la comunidad inmigrada y mercantil de Guanajuato. Ya para entonces el antiguo grupo vasco que había emparentado por matrimonio con la familia Busto estaba disminuyendo en importancia.

Hacia 1809 los criollos habían recobrado el control, por lo menos numéricamente. Para entonces la familia Septién estaba formada enteramente por criollos, y un hecho significativo es que la aristocracia titulada se había retirado. Ninguno de los tres condes de La Valenciana, Pérez Gálvez y Casa Rul ocupó cargos en el gobierno municipal. Del mismo modo, aunque su padre siempre había sido regidor, el segundo marqués de San Juan de Rayas vendió el cargo y no presentó su candidatura para los puestos de elección. Por otra parte, los dos jóvenes hermanos Otero compraron puestos de regidores, lo cual quizá es indicativo de que su prestigio estaba en decadencia. En ese año no quedaba en el cabildo ni un solo miembro del clan Busto-Aranda.

TABLA 54

MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO, 1778, 1793, 1809

1778

Alferez real

Joaquín Bluet Iguíño (criollo).

Alcalde provincial

Marqués de San Juan de Rayas (criollo).

Alguacil mayor

Manuel Güemes de la Concha (?).

Depositario general

José Pérez Marañón (montañés).

Fiel ejecutor

Francisco de Sepién y Montero (montañés).

Regidores capitulares

Gabriel de Arechederreta (vasco).

Juan José Compains (vasco).

José Hernández Chico (castellano).

Miguel de Rivera y Llorente (criollo).

Antonio de Obregón y Alcocer (criollo).

Felipe Fernández de Riaño (criollo).

Regidores honorarios

Juan Alejo de Busto (criollo).

José María de Irizar (criollo).

Ramón de Liceaga (criollo).

Pedro de Clavería (criollo).

Alcalde ordinarios

Pedro Sereno de Cobarrubias (criollo).

Pedro Luciano de Otero (criollo).

Procurador general

Francisco de Azpilcueta (vasco).

1793

Alferez real

Fernando Pérez Marañón (criollo).

Alcalde provincial

Bernardo Chico Valdés (castellano).

Alguacil mayor

Vicente Regil (criollo).

Depositario general

Agustín Pérez Marañón (montañés).

Fiel ejecutor

José María de Sepién y Montero (criollo).

Regidores capitulares

José Hernández Chico (castellano).

Martín Coronel y Jorganes (criollo).

Habían renunciado recientemente:

Juan Vicente Alamán (vasco).

Felipe Fernández de Riaño (criollo).

Miguel de Rivera y Llorente (criollo).

Regidores honorarios

Francisco de Sepién y Montero (montañés).

Francisco de Azpilcueta (vasco).

Francisco de Sepién y Arce (montañés).

Julian Lavín (castellano).

TABLA 54 (Continuación)

<i>Alcaldes ordinarios</i>			
Manuel García de Zeballos (montañés).			
Pedro Félix de Quijano (montañés).			
<i>Procurador general</i>			
José Antonio del Mazo (montañés).			
1809			
<i>Alférez real</i>			
Fernando Pérez Marañón (criollo).			
<i>Alcalde provincial</i>			
Bernardo Chico Valdés (castellano).			
<i>Alguacil mayor</i>			
Mariano de Otero (criollo).			
<i>Fiel ejecutor</i>			
José María de Septién y Montero (criollo).			
<i>Regidores capitulares</i>			
Martín Coronel y Jorganes (criollo).			
Pedro de Otero (criollo).			
Rafael López de Miera (criollo).			
Francisco de Septién y Arce (criollo).			
Agustín Pérez Marañón (montañés).			
<i>Regidores honorarios</i>			
Joaquín Aguiar (?).			
Carlos Montes de Oca (criollo).			
Juan Antonio Ginori (canario).			
Miguel Chico Valdés (criollo).			
<i>Alcaldes ordinarios</i>			
Francisco de Iriarte (vasco).			
José María de Septién y Montero (criollo).			
<i>Procurador general</i>			
Pedro Cobo (peninsular).			

<i>Totales</i>	1778	1793	1809
Peninsulares	6	11	5
Criollos	11	6	10
Origen desconocido	1		1
	18	17	16

Este breve estudio del cabildo demuestra que, indudablemente, la venta de cargos no redundaba en menoscabo del carácter representativo del ayuntamiento, sino que por el contrario, esta compraventa de cargos públicos era un indicador extraordinariamente exacto de la posición económica del titular. El cabildo de Guanajuato representaba a los ricos y a los poderosos.

La pérdida del poder de influenciar al cabildo de la ciudad podía ser peligrosa, especialmente para las familias en proceso de de decli-

nación social. Un ejemplo interesante de este peligro se presentó en 1781, cuando Manuel García de Zeballos, procurador general del común, señaló que una gran parte de las tierras que rodeaban a la ciudad y que bordeaban los ríos, anteriormente usada para haciendas de beneficio, se encontraba por entonces ocupada por los trabajadores de las minas. Los propietarios aparentes, que eran los antiguos rescataidores, no poseían títulos legales y sin embargo cobraban alquiler a los nuevos ocupantes de aquellas tierras⁸². En 1790, después de que esta protesta fue reiterada por Agustín Pérez Maraño, procurador general en aquel año, el cabildo presentó el asunto ante la Audiencia de México, obteniendo un decreto virreinal que privaba a los supuestos propietarios del derecho a cobrar alquiler. Según las leyes mineras, las tierras colindantes con la ciudad eran consideradas de propiedad común, teniendo libre acceso a ellas los trabajadores mineros. Ahora bien, los afectados por el decreto en cuestión pertenecían casi todos a familias que anteriormente habían sido prominentes, pero que ya para 1790 estaban en franca decadencia social⁸³. Se trataba de los Busto, los Aranda, los Díez Madroñero, los Fernández de Riaño, los Uribarren, del conde de San Pedro del Alamo y de los Sardaneta. Es evidente que el grupo montañés que se había apoderado del cabildo guanajuatense no se sentía obligado en lo más mínimo a respetar los intereses de dichas familias.

Otra indicación de quiénes eran miembros de la *élite*, aunque menos fidedigna, eran los grados militares, porque como en muchos casos imponían deberes onerosos, no todos los ricos se interesaban en alistarse en los regimientos locales. Este fue el caso especialmente en los años que siguieron a la Visita de Gálvez, cuando, según parece, únicamente el grado de coronel en el Regimiento del Príncipe atrajo a figuras guanajuatenses conocidas. Se trató de Tomás de Liceaga, Simón Eugenio de Arroyo y Sardaneta, también criollo y accionista de la mina de Rayas, y Alfonso Bravo González, peninsular emparentado con la familia Sardaneta por matrimonio⁸⁴.

Sin embargo, durante la última década del siglo XVIII, cuando Revillagigedo disolvió el antiguo regimiento y Branciforte reclutó nuevas fuerzas para formar dos unidades, varios mineros ricos de

⁸² AGN, Minería 371, protesta de García de Zeballos, 8 octubre 1781.

⁸³ AGN, Minería 37—1, Pérez Maraño al Virrey, 2 junio 1790.

⁸⁴ AGI, México 1387, Mayorga a Gálvez, 27 mayo 1780.

Guanajuato compraron grados. La lista de los oficiales del batallón de infantería de la ciudad (tabla 55) es indicativa de algunos de estos cambios ⁸⁵.

TABLA 55

OFICIALES DEL BATALLON DE INFANTERIA DE GUANAJUATO EN 1800

<i>Grado</i>	<i>Nombre</i>	<i>Origen</i>
Teniente coronel	Manuel García de Quintana	montañés
Capitán	Augusto González de Campillo	montañés
	Angel de la Riva	montañés
	Ignacio de la Lama	montañés
	José Manuel Pezuela	criollo
Teniente	Manuel de Escalera	criollo
	Andrés Antonio Pelayo	montañés
	Francisco Bustamante	montañés
	Juan Gómez	montañés
Subteniente	José María Trujillo	andaluz
	Juan Manuel del Río	montañés
	Gerónimo Gómez	montañés
	José Manuel Bustamante	criollo
	<i>Nuevos subtenientes en 1804</i>	
	Joaquín Lavín	montañés
	José María de Bustamante y Septién	criollo
	Manuel Pérez Marañón	criollo
	Mariano de Sein	criollo

La composición de este grupo reflejaba la «toma del poder» por parte de los montañeses que inexplicablemente tuvo lugar entre 1790 y 1800; se apoderaron de casi todos los organismos importantes de la ciudad. García de Quintana era, por supuesto, el antiguo administrador de Martín de Septién, convertido en rico rescatador. Angel de la Riva administraba la mina del Tepeyac por cuenta de Septién y Arce y García de Zeballos; y González del Campillo y Pezuela eran ambos accionistas de la de Rayas.

Además, tanto el conde de Pérez Gálvez como el de Casa Rul recibieron el grado de coronel en los recién organizados regimientos militares, privilegio por el que pagaron cuando menos 40 000 pesos ⁸⁶. Estas fuerzas estaban formadas por personas que, en parte,

⁸⁵ AGS, Guerra Moderna 7276, hojas de servicios de los oficiales del Batallón de Guanajuato para el año de 1800; AGN, Guerra 121 A, Batallón de Guanajuato, diciembre 1804.

⁸⁶ AGI, Estado 23, Branciforte a Alcudia, 30 agosto 1795.

procedían de regiones distantes de Guanajuato, de manera que la mayoría de los nombres de sus oficiales no nos son familiares, pero el primer teniente coronel del nuevo Regimiento de Caballería del Príncipe, reclutado por Pérez Gálvez, fue Francisco de Septién y Arce. A su muerte en 1799 fue sucedido por otro montañés llamado José Gaspar Quijano, que era terrateniente en Silao.

TABLA 56

ORIGEN DE LOS OFICIALES DE LOS REGIMIENTOS DE LA MILICIA
DEL BAJIO, H. 1800

Oficiales	Guanajuato		Príncipe		Reina		Celaya		Valladolid		Totales		
	P	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P	C	GT
Coroneles			1			1	1		1		3	1	4
Tenientes coroneles	1		1			1	1		1		4	1	5
Capitanes	3	2	6	4	3	3	3	6	4	6	19	21	40
Tenientes	4		6	6	6	4	6	4	7	1	29	15	44
Subtenientes	2	1					6	2	2	9			
y alférez			4	7	4	8					18	27	45
Asistentes reg.	1		1	1	2		1		2		7	1	8
Tenientes reg.	2		2		2		3	1		3	9	4	13

Clave: P = peninsular; C = criollo; GT = gran total.

En general, ya haya sido por premeditación o por casualidad, los peninsulares formaban la mayoría de los oficiales de la milicia en Guanajuato. En 1804, siete de los ocho capitanes del Regimiento del Príncipe eran peninsulares⁸⁷. Entre los tenientes y alféreces este predominio era menos marcado, aunque no todas las fuerzas de la intendencia seguían la misma regla. En el Regimiento de Caballería de la Reina, reclutado en el distrito de San Miguel, el coronel, el teniente coronel y la mitad de los capitanes eran criollos. En el Regimiento de Celaya sólo tres de los nueve capitanes eran peninsulares. Estas diferencias en la composición por origen, de los oficiales reclutados, se presentan en la tabla 56⁸⁸.

No hay pruebas de que el virrey favoreciera deliberadamente a los españoles peninsulares, sino que más bien parece que los inmi-

⁸⁷ AGN, Guerra 242 A, hojas de servicios de los oficiales del Príncipe, 1804.

⁸⁸ Elaborada con datos de las hojas de servicios de los oficiales de estos regimientos, según AGS, Guerra Moderna 7276.

grantes eran más ambiciosos de honores que los criollos, además de que tenían más capacidad económica para pagar el valor de compra de la plaza. Es interesante que ni el joven conde de La Valenciana ni el segundo marqués de San Juan de Rayas hayan tratado de obtener un grado militar. En este punto, sin embargo, entramos al problema de la psicología individual. Ignacio de Obregón, medio hermano del conde y rico minero de Catorce, en cambio, se compró el grado de coronel ⁸⁹. Cualquiera que haya sido el caso, la tabla demuestra que se mantuvo, en términos generales, el equilibrio entre peninsulares y criollos hasta el grado de capitán, pero de tenientes para abajo predominaban los criollos con facilidad.

Nos falta describir dos instituciones de considerable importancia para la *élite*: las diputaciones de mineros y comerciantes. La primera requiere un capítulo propio, pero la segunda puede ser tratada sumariamente. La razón de esta diferencia es que disponían de poderes muy contrastantes, pues mientras la de los mineros ejercía una jurisdicción privada, la mercantil únicamente actuaba como agente del Consulado de México, no constituyendo por sí misma un tribunal. Las únicas ocasiones en que la diputación mercantil salió de la oscuridad para defender a sus miembros, fue cuando consideró que estaban siendo víctimas de los mineros.

En 1781 la diputación minera, presidida por el conde de La Valenciana en un momento en que este era magistrado municipal interino, decretó que los cuatro granos restantes del antiguo impuesto de monedaje real (del cual ocho habían sido concedidos al Tribunal de Minería), se pagaran a la Corona durante un período de cinco años en calidad de donación en tiempos de guerra. Los dos diputados mercantiles, el montañés José Pérez Marañón y el vasco Juan José Compains protestaron con energía contra esta imposición unilateral, especialmente porque, según afirmaron, «los introductores de los referidos metales han sido y son no precisamente los mineros, si no en la mayor parte los comerciantes y criadores» ⁹⁰. De mala gana aceptaron hacer el pago, pero únicamente mientras durase la guerra. Este antagonismo entre ambos grupos comenzó a disminuir durante el decenio de 1780-90, cuando los

⁸⁹ Organizó en 1797 el nuevo regimiento de Dragones de Galicia, pagando el costo de 30 000 pesos. Véase AGS, Guerra Moderna 7276.

⁹⁰ AGN, Minería 18/9, protesta de la Diputación Mercantil, 7 mayo 1781.

comerciantes iniciaron sus inversiones directas en la industria minera, y en 1791 los comerciantes amistosamente accedieron a que se impusiera una contribución de dos granos por marco, cuyo objetivo era proporcionar medios financieros a la diputación minera. Se afirmó entonces que «los cuerpos de la minería y comercio que en la realidad vienen a uno sólo en este Real por la unión, enlace y dependencia que tienen y recibe entre sí uno y otro»⁹¹.

La diputación mercantil también fue «tomada» por los montañeses cuando en la reunión general de enero de 1788 se abolió la antigua práctica de dividir a los electores en dos partidos, correspondientes a vascos y montañeses; en cambio, «se resolvió de común acuerdo de ambos partidos de Montañeses y Vizcaínos deberse nombrar por ahora solamente ocho electores indistintamente y sin división de parcialidades». En la elección subsecuente quedó claro el objetivo de esta resolución, al resultar electos seis montañeses como electores⁹². No obstante, debe señalarse en justicia que tanto los diputados en funciones, José Pérez Marañón y Juan José Compains, como los nuevos, elegidos por los electores, Francisco de Septién y Arce y Juan Vicente Alamán, representaban a los dos grupos de la provincia. Por supuesto que también eran los dueños de las principales casas mercantiles y aviadoras de Guanajuato, y también aquí, aunque en un contexto distinto, encontramos los mismos nombres. En épocas diversas, una persona como Francisco de Septién y Arce ocupó los puestos de alcalde ordinario, de regidor honorario, de elector y representante minero, y de teniente coronel en la milicia. Juan Vicente Alamán, aparte de su grado militar, alcanzó honores casi paralelos. Los puestos electivos eran muy pocos, aunque claramente tenían una gran importancia para los que trataban de obtenerlos. Para conocer algunas de las razones por las cuales esos cargos eran importantes, debemos examinar la historia de la diputación minera en aquellos años, porque allí era donde la *élite* guanajuatense se reunía para luchar políticamente.

⁹¹ AGI, México 2248, Diputación Minera, 14 septiembre 1791.

⁹² AHGP, Cabildo, 11 enero 1788.

CAPITULO X

LA DIPUTACION

Cuando Domingo Valcárcel, anciano oidor y superintendente del monopolio del mercurio, conoció los planes de Gálvez para crear un gremio y un Tribunal de Minería que tuviera su propia jurisdicción sobre los litigios que surgieran entre los que se dedicaban a esa actividad, escribió a la Corona una carta de protesta en duros términos, atacando al nuevo régimen en todos sus puntos básicos. Predijo que la elección pública de los representantes locales sería causa de desórdenes y de faccionalismos, y que la justicia que proporcionaría estaría deformada por la influencia de las relaciones de familia y de negocios. Su resultado final serían «notorias monstruosidades»¹. Como ejemplo de lo que temía, citaba un caso de Guanajuato en el que Tomás de Liceaga, recién elegido diputado general del Tribunal de Minas, conspiró con el alcalde mayor de la ciudad para conservar la posesión de una mina que no trabajaba más que unos cuantos días cada cuatro meses. Al recurrirse a la Audiencia, ésta había censurado a Liceaga, ordenándole que trabajara dicha mina como se debía o que, en caso contrario, la cediera al nuevo denunciante. No obstante, con la concesión del fuero la Audiencia no tendría ya facultades para intervenir en casos semejantes. Alarmaba a Valcárcel también la reducción «potestad e imperio de esta audiencia», que el fuero seguramente causaría².

En muchos aspectos estas predicciones se cumplieron ampliamente. Bajo el nuevo código de 1783, las diputaciones mineras recibieron una extensa jurisdicción sobre la solución y arbitraje de los denuncios disputados respecto a la propiedad de las minas, sobre la demarcación correcta de los límites entre minas vecinas, sobre los registros múltiples de tiros abandonados, sobre las luchas subterráneas entre los trabajadores de empresas colindantes, y sobre las

¹ AGI, México 2240, Domingo Valcárcel a la Corona, 29 agosto 1777.

² AGI, México 1728, juicio del alcalde mayor, 28 febrero 1775.

relaciones obrero-patronales entre mineros. En una palabra, de allí en adelante las diputaciones tuvieron derechos sobre la propiedad; un decreto condenatorio de su parte podía fácilmente arruinar a un minero. No es de maravillar, entonces, que las elecciones a la diputación pronto se hayan convertido en motivo de oscuras intrigas. Esto fue así especialmente en Guanajuato porque allí una junta de siete electores nombraba a los diputados y esta junta, elegida mediante el libre voto de todos los mineros registrados, permanecía en funciones durante un período de cuatro años. Era este organismo, y no los diputados, el que gobernaba la minería de la ciudad. Por ello a todos les interesaba ser elegidos miembros de dicha junta. En muchos aspectos, era la institución más poderosa de Guanajuato.

Bajo estas circunstancias, no nos sorprende descubrir que la reunión general de 1783 haya sido especialmente acre. Para entonces los socios de La Valenciana, Antonio de Obregón y Pedro Luciano de Otero, habían casi logrado controlar a la junta. En la reunión de 1779 Obregón, el administrador de su mina Buenaventura José Carrasco y su protegido el licenciado Felipe Fernández de Riaño, abogado hijo del propietario de San Lorenzo, fueron elegidos junto con el marqués de San Juan de Rayas y dos vascos casados con miembros del clan Busto-Aranda, llamados Juan José Compains y Francisco Azpilcuetta³. Un grupo de montañeses, comerciante y rescatadores, aliados a José Hernández Chico, desafiaron al grupo en el poder. Hernández Chico era director de correos y tenía fama de pendenciero. Todos tenían razones varias para esta oposición. En primer lugar, les irritaba la imposición unilateral por parte de la diputación minera de una contribución sobre la plata que llegaba a Real Hacienda. En 1775, cuando se aplicó por primera vez, ascendió a 1½ granos de plata por marco, pero en 1781 la diputación, presidida por el conde de La Valenciana, aumentó dicho impuesto a 4 granos (1/3 de real) durante un período de cinco años, en calidad de donación a la Corona en tiempos de guerra⁴. En segundo lugar, la distribución del mercurio en 1781, en la que los socios de La Valenciana fueron los que recibieron las mayores cantidades, provocó grandes controversias y

³ Véase en el apéndice V quiénes fueron los miembros de la junta durante todo este período, datos tomados principalmente del extenso expediente en AGI, México 2243.

⁴ AGN, Minería 113/1, protesta de la diputación mercantil, 18 Agosto 1778; también AGN, Minería 18/9, protesta de la diputación mercantil, 7 mayo 1781.

acusaciones de corrupción. En aquella ocasión Hernández Chico, que había sido multado por venta ilegal de mercurio, denunció a Obregón y a Otero ante el virrey, alegando que habían sobornado a los oficiales de Hacienda ⁵. En fin, era una época en que los comerciantes de todas partes estaban haciendo más inversiones directas en la minería. Después de la muerte de Martín de Septién, los dos administradores de sus grandes empresas, Francisco de Septién y Arce y Manuel García de Quintana, compraron ambas haciendas de beneficio y acciones en minas menores ⁶. Para proteger su posición dentro del gremio se aliaron a Hernández Chico y emprendieron una ofensiva para adquirir poder institucional.

Dos diputados salientes, Pedro Luciano de Otero y Felipe Fernández de Riaño nos dan la mejor descripción de los resultados de aquellas luchas. «Muchos de los que asistieron en la expresada noche (12 enero 1783) llevaron a prevención sus papeles y en ellos escritos sus votos y listados los nombres de los sujetos a quienes nombraban por Electores... Si de esto resultó el que saliesen electos por Electores don Manuel García de Quintana y don Francisco de Septién y Arce, vecinos de este comercio, y que han vivido tan distantes de ejercitarse en la minería». Además, el notario de la ciudad certificó que si bien la diputación había convocado a los 48 mineros registrados (de los cuales 14 no se presentaron) asistieron a la reunión 62 personas ⁷. Por supuesto que los socios de La Valenciana tenían buenas razones para estar intranquilos, porque todos los nuevos electores eran peninsulares, siendo montañeses por lo menos cuatro de ellos. Además, al día siguiente la nueva junta, haciendo caso omiso de la antigua costumbre de que los diputados salientes designaran candidatos para que entre ellos se escogiera a sus sucesores, designó nuevos diputados a Francisco de Septién y a José Hernández Chico. El contador de la Caja Real de la localidad atribuyó la iniciativa de esta táctica a Hernández Chico, del que dijo que «ha seducido a don Francisco Septién y otros varios sujetos europeos, que en Junta de Minería salieron

⁵ Véanse los extensos expedientes en AHN, Consejos 20701; También en AGN, México 2209, Revillagigedo a Lerena, 27 agosto 1790.

⁶ AHGP, Minas, 7 diciembre 1799; AHGP, Cabildo, 24 diciembre 1782; AHGP, Minas, 9 enero 1783.

⁷ AGI, México 2240, Pedro Luciano de Otero y Felipe Fernández de Riaño al Virrey, 14 enero 1783.

electores de cuerpo... son la causa de que esta ciudad está llena de rencores y malas voluntades»⁸. Ante este golpe, Fernández de Riaño y Otero apelaron al Tribunal de Minería y al virrey. El conde de La Valenciana se quejó con el mismo Gálvez, sugiriendo que para evitar futuras disputas debían ser el Tribunal de Minería o el virrey quienes nombraran a los diputados, pero aunque el virrey Mayorga intervino para suspender las elecciones, Gálvez respondió que el nuevo Código de Minería debía ser estrictamente cumplido⁹. Los mineros criollos tuvieron que esperar así hasta 1787, cuando lograron apoderarse del comité haciendo designar electores tanto a los dos hermanos Otero como a dos Fernández de Riaño; el único peninsular que quedó fue Juan de Villamor, apoderado de los bienes de Obregón.

La oscilación del péndulo electoral fue determinada en parte por la definición del electorado. Las ordenanzas de 1783 señalaban que los rescatadores tenían derecho a medio voto en comparación con los mineiros, que tenían uno. En la reunión de 1787 se cumplió esta regla, y como el partido montañés tenía su mayor fuerza en el campo de la refinación, perdió la elección¹⁰. Por ello, tres años después Francisco de Septién y Arce logró obtener calladamente una resolución que otorgaba a los refinadores el pleno derecho de voto¹¹. El resultado de esto fue que en 1791 cuatro montañeses fueron designados electores; tres de ellos, Manuel García de Zaballos, Andrés Sagaz y Herrera, y Septién y Arce, eran socios de la mina del Tepeyac¹². Naturalmente que para entonces los accionistas originales de La Valenciana habían muerto ya, dejando a Manuel de Otero, que no era persona muy equilibrada, a cargo de sus intereses, el cual tuvo que enfrentarse así a la nueva situación.

Qué tan importante era el control de la junta resulta claro en los años 1790-2, cuando tuvo lugar una fiera disputa sobre las colindancias subterráneas de las minas de Camargo y de La Sirena. Este caso fue aun más serio porque los accionistas principales de los dos bandos en pugna eran José Hernández Chico y Manuel Antonio de Otero. La

⁸ AGI, México, 2981, contador a Gálvez, 18 junio 1783.

⁹ AGI, México 2240, Conde de La Valenciana a Gálvez, 16 julio 1783.

¹⁰ AGI, México 1849, informe de la diputación, 10 octubre 1787.

¹¹ AGN, Minería 1283, queja del minero Juan Antonio Ferrón al Virrey, 20 octubre 1790.

¹² AGI, México 1549, junta general, 8 febrero 1791.

exacta sucesión de los acontecimientos relativos a esta disputa se pierde en la confusión de las acusaciones y contra-acusaciones, pero parece que se originó en una pelea entre los trabajadores al servicio de uno y de otro. La consecuencia final de todo fue que ambas minas fueron abandonadas estando inundadas. Hernández Chico se quejaba de que después de que la mina de Camargo había comenzado a producir en gran escala, los trabajadores de La Sirena habían invadido la propiedad. Otero afirmaba que su adversario, aprovechándose de que la mina de Camargo se hallaba en posición más alta, había inundado deliberadamente La Sirena mediante sus ruedas hidráulicas ¹³. Hasta este día, seguimos ignorando quién tenía la razón en este caso, si bien podemos asegurar que el refinado arte de la mentira judicial, tan común en el México del siglo XVIII, alcanzó aquí una de sus más altas cimas.

Sin embargo, el verdadero interés de esta disputa reside en el conflicto de jurisdicción que provocó, el cual reveló con gran precisión el nuevo equilibrio del poder y de la influencia que las reformas borbónicas establecieron. Como lo había profetizado Valcárcel, todo comenzó con un acto de evidente injusticia, cuando Hernández Chico, nombrado uno de los dos diputados por la junta de electores para el año de 1791, procedió dos meses más tarde, en marzo de aquel año, a encarcelar a uno de los accionistas menores de La Sirena por haber denunciado su conducta como dueño de la mina de Camargo, a la Diputación. Otero inmediatamente protestó ante el virrey Revillagigedo, quien por consejo del fiscal de la Corona turnó el asunto al intendente interino José de Soriano, ordenándole que reuniera un tribunal local de apelaciones para la revisión del caso. No obstante, no fue posible solucionarlo de esta manera, ya que nadie quiso aceptar formar parte de un tribunal de esa clase. Revillagigedo, después de haber recibido reiteradas peticiones de Otero, e irritado por las maniobras de Hernández Chico, cometió entonces el error de pedir consejo a Francisco Javier de Gamboa, regente de la Audiencia: El anciano jurista, que nunca había sido partidario del nuevo fuero, sugirió la intervención del virrey, afirmando que en Guanajuato «todos turnan a ser jueces y están entre sí ligados por parentes-

¹³ AGI, México 1557, Revillagigedo a Gardoqui, 31 marzo 1793. En este legajo se encuentra la totalidad del caso.

co, amistad, interés o compañía... es imposible por tanto, que sin la vice-regia autoridad de V.E. se logren los fines de la paz... ejercitando la suprema potestad política y económica para que la justicia sea sostenida y autorizada y no prevalezca la temeridad y la audacia». El virrey, entonces, comisionó al oidor Juan Francisco Anda, que se encontraba en Guanajuato, para que actuara como su representante y resolviera el asunto, después de lo cual cualquier apelación debía dirigirse personalmente al virrey.

En lugar de aceptar esta disposición, la junta de Guanajuato informó al virrey tranquilamente, que no tenía autoridad para invadir la jurisdicción privada de la Diputación. Revillagigedo, muy molesto por esta resistencia, que parece fue dirigida por Manuel García de Zeballos, el cual en aquel año ocupaba los cargos tanto de elector como de alcalde municipal, dio instrucciones al intendente para que reprendiera a la junta por «su espíritu de insubordinación y falta de respeto por mis superiores resoluciones...»¹⁴. Los dos diputados, Hernández Chico y el licenciado Martín Coronel, sin dejarse impresionar en lo absoluto por esta reprimenda virreinal, junto con los cuatro electores montañeses, defendieron con respeto el fuero minero mediante una declaración que les fue preparado en México por el licenciado Francisco Primo Verdad y Ramos, afirmando no comprender la base jurídica en que se fundaba la intervención de Revillagigedo, ya que «les prohíbe su Majestad por repetidas leyes el conocimiento de negocios de justicia entre partes». Justificaban su resistencia a las disposiciones del virrey con la cita de las *Leyes de Partida* medioevales de Alfonso X, que establecía que era muy posible que el mismo rey, aunque era «Oráculo de la Justicia... expida cartas o privilegios contra derecho no sólo escrito y arbitrario sino aún contra el natural que nace con nosotros y no depende de discursos... No deben cumplir ça no han fuerza». Exhortaban a Revillagigedo: «Véase cómo el Legislador del Reino permite que sus vasallos en cierto modo juzguen de su soberano las resoluciones»¹⁵. Además, el virrey había calumniado a ciudadanos respetables acusándolos de sedición por no haber hecho otra cosa que defender la jurisdicción que la Corona misma les había otorgado.

¹⁴ AGI, México 1547, Revillagigedo a Gardoqui, 1 mayo 1792.

¹⁵ AGI, México 1557, Junta Minera de Guanajuato a Revillagigedo, 3 mayo 1792. Es una ironía que el abogado de Otero fue Miguel Domínguez, más tarde Corregidor de Querétaro.

Revillagigedo reaccionó rápidamente. Hizo encarcelar al representante que la Junta tenía en la capital, confiscó los papeles relativos al caso, y ordenó a la Audiencia que no diera curso a ninguna apelación, ya que se trataba de un asunto que correspondía a la esfera ejecutiva del gobierno y no a la judicial. No obstante, el asunto empeoró, porque la Audiencia, probablemente dirigida por su regente Gamboa, decidió entonces aceptar las apelaciones y ordenó a los notarios del gobierno que le remitieran los papeles confiscados. *Debe hacerse hincapié en que dicho tribunal tenía el derecho a inspeccionar todos los documentos legales originados por las medidas tomadas por el virrey que pudieran afectar los intereses de los particulares.* Sin embargo, en este caso Revillagigedo se negó a acatar la orden afirmando haber actuado en su calidad de capitán general para mantener el orden público, por lo cual la Audiencia no tenía derecho a conocer el caso. Más tarde, después de que se cumplió con el acostumbrado rito de tres solicitudes y tres negativas, ambas partes escribieron a Madrid para protestar contra la conducta de la otra.

Mientras tanto, llegaron a oídos del virrey alarmantes rumores de que el nuevo intendente, Juan Antonio de Riaño, favorecía a sus compatriotas montañeses. Envío entonces sus reproches en una carta en la que preguntaba por qué Riaño no había calmado la disputa. El intendente, que en parte debía su posición a la recomendación de Revillagigedo, respondió inmediatamente en defensa de su actuación. Había persuadido a la familia Obregón a que no interviniera, pero Otero, hasta ese momento se había mostrado inflexible. Respecto a los montañeses, decía que «mis paisanos poseen ya pruebas nada equivocadas de mi modo de pensar y sería palpable su estolidez si se lisongeasen que soy capaz de prostitución y de sacrificar al respeto del paisanaje el que se debe a la Justicia» ¹⁶. Además, un mes más tarde, en junio de 1792, informó que el paciente oidor Anda había logrado finalmente una transacción, mediante la cual Hernández Chico aceptó ceder a Otero la mina de Camargo, a cambio de 100 000 pesos.

A pesar de ello, el asunto no quedó allí, porque la Junta de Guanajuato siguió quejándose, enviando a la Corona una petición de que el virrey se disculpara por haber invadido su fuero. Naturalmente

¹⁶ AGN, Minería 23/2, Revillagigedo a Riaño, 8 noviembre 1792.

que en noviembre de 1792 Madrid falló a favor de la Junta, enviando una real cédula a Revillagigedo formulada en términos cortantes que le advertían:

Que no debió el conocimiento en la causa de los mineros, de que trata este expediente por defecto de jurisdicción, cuyo vicio anula en lo legal todas las providencias de V. E., las de su subdelegado, y los actos a que concurrió... pues ninguno de los motivos que propuso fueron justos para tratar V. E. a unos vasallos tan recomendables con la fuerza y términos tan indecorosos como lo hizo... debió convencer a V. E. de su absoluta inhibición para introducirse en tales asuntos de minería y mineros.

Además, la Audiencia también recibió una reprimenda por su intervención en un caso minero ¹⁷. La transacción lograda por Anda fue aceptada sólo para evitar mayores problemas. Por supuesto que el contenido de esta cédula pronto se hizo del conocimiento público, ya que, como informó un observador posterior, «aunque privada la divulgó la Diputación de Minería de Guanajuato repartiendo copias como en tono del triunfo que había adquirido contra las determinaciones del... Conde de Revillagigedo» ¹⁸.

La exhuberancia del partido montañés se hizo aún más pronunciada porque también lograron arrebatarse a Otero el control de la vasta herencia de sus sobrinos, usando también en este caso, con gran astucia, los derechos de jurisdicción. El oidor Anda recibió en 1792 la comisión de la Audiencia de resolver la disputa entre Manuel Antonio de Otero y José Antonio del Mazo, marido montañés de la viuda de su hermano, relativa a la tutoría de los huérfanos y al cuidado de sus bienes. Cuando Anda falló a favor de Otero, del Mazo anunció que apelaría a la Audiencia. Irritado por esta maniobra, Anda ordenó a del Mazo que le entregara los niños a Otero. Al encontrarse con la negativa del primero, Anda ordenó a un teniente de la sala del crimen, que era la corte inferior de la Audiencia, que rodeara la casa del Mazo a fin de apoderarse de los niños Otero por la fuerza. El magistrado municipal superior Manuel García de Zeballos, declaró entonces inválido el nombramiento del teniente, arrestando inmediatamente a

¹⁷ AGI, México 2244, Real Orden a Revillagigedo, 8 noviembre 1792.

¹⁸ AGI, México 2247, Lic. José Vicente Figueroa al Virrey Azanza, 26 abril 1800.

todos sus hombres ¹⁹. El comandante de la milicia, Manuel García de Quintana rechazó la petición de Anda para que interviniera, de manera que el frustrado oidor tuvo que quejarse ante el virrey «del ultraje padecido y que con rubor me tiene haciendo en esta ciudad el papel más desairado que puede hacer hombre» ²⁰. Como respuesta a estas lamentaciones la Audiencia inmediatamente llamó a García de Zeballos a México, imponiéndole después una multa de 200 pesos por haber obstruido la acción de la justicia. Como en el caso anterior, también él apeló a Madrid, donde el Consejo de Indias invalidó la sentencia, fallando que, una vez que la apelación hubiese sido presentada ante la Audiencia, Anda debía haberse desentendido del caso, por lo que la intervención de García de Zeballos estaba perfectamente justificada ²¹.

Mientras que en Guanajuato estas disputas e intrigas llegaban al máximo a mediados de 1792, la suerte del Tribunal Central de Minería era objeto de vivas discusiones en la ciudad de México y en Madrid. Gamboa, viendo el fracaso del banco de avío, propugnaba su abolición total, pero Revillagigedo, después de escuchar otras opiniones, recomendó que fuera revitalizado y llegó a proponer que tuviera funciones, en el futuro, de tribunal de apelación contra las sentencias de las Diputaciones. Así, «quedando éstas enteramente subordinadas al Tribunal podrá dictar las providencias oportunas o a precaverlos o a cortar y castigar las que se cometan» ²². Esta sugerencia fue aceptada por el Consejo de Estado que estudió el asunto, y en febrero de 1793 se redactó una nueva constitución para el gremio minero, en la cual los tribunales locales de apelación fueron suprimidos y sustituidos por un Tribunal de Minas central con residencia en la ciudad de México ²³.

La perspectiva de verse sometida al control judicial del Tribunal de Minería alarmó enormemente a la Junta de Electores de Guanajuato, porque ya sus miembros se habían disgustado con el director general permanente Fausto de Elhuyar, y en realidad lograron siem-

¹⁹ AGI, México 1719, escrito de Francisco Javier del Mazo al Consejo de Indias, 31 julio 1793.

²⁰ AGI, México 1457, Anda a Revillagigedo, 20 abril 1792.

²¹ AGI, México 1779, Fiscal del Consejo, 23 septiembre 1793.

²² AGI, México 2238, Revillagigedo a Lerena, 13 enero 1791.

²³ Véanse Howe, *The Mining Guild*, capítulo 3; AGI, México 2238, Consejo de Estado, 25 enero 1793.

pre hacer fracasar los intentos que el Tribunal había hecho de intervenir en los asuntos de la Junta. Cuando Elhuyar visitó la ciudad en 1788 para ayudar al profesor Fischer a someter a prueba el método de amalgamación de Born, la diputación local exigió inmediatamente que se sometiera a una comparación pública el costo del nuevo método con el del antiguo método de pario. Más tarde comentaron burlonamente que «habiendo hecho y repetido el director y profesor ensayos por el método de Alemania se extrajo menos plata y se consumió más azogue que el que se extrae y consume por el beneficio corriente» ²⁴. Y en otra ocasión dijeron: «se ha conocido por experiencia que el método de Alemania no se puede adoptar en la América. Podrá acaso provenir de que los que aquí quieren constituirse maestros no lo aprendieron bien, o del que los mineros Americanos saben más de mineralogía y metalurgia que los alemanes.» En una protesta posteriormente enviada a Madrid contra las pretensiones del Tribunal de Minas, el agente de la Diputación se lanza contra «cierta pretendida ilustración y del despotismo que quiere ejercer contra razón y ordenanza», y solicitaba que «deberían los empleados en el Tribunal General acordarse de que son hechuras de los Minerales, y que se mantienen a sus expensas» ²⁵.

No es necesario aclarar que Elhuyar tenía una opinión totalmente distinta sobre este asunto. En un largo memorándum declaró rotundamente que las Diputaciones eran ineficientes, ignorantes y corrompidas, afirmando que «crianza y educación no hay que buscar entre estas gentes». Proponía un remedio aun más drástico que el de Revillagigedo, es decir, aumentar las atribuciones del administrador general, dar dicho nombramiento a un funcionario permanente y unir dicho puesto a la dirección de la Casa de Moneda ²⁶. En otras palabras, el tecnócrata peninsular deseaba que la minería mexicana se pusiera bajo el dominio de una persona semejante a él y capaz de gobernarla para aumentar las ganancias de la Corona.

Las elecciones en el Tribunal de Minas, que debían llevarse a cabo en diciembre de 1793, tenían, pues, una importancia decisiva para los planes futuros de los dos bandos en controversia. Estaba en juego el

²⁴ AGI, México 1560, Revillagigedo a Gardoqui, 30 noviembre 1793.

²⁵ AGI, México 2238, Francisco Javier del Mazo, 30 septiembre 1792.

²⁶ AGI, México 2243, Elhuyar a Aparici, 30 julio 1791.

control del Tribunal, ya que debían elegirse tres diputados generales y el administrador general. Por ello, las reuniones plenarias resultaron extremadamente tempestuosas²⁷. El delegado de Guanajuato, Francisco de Septién y Arce, acusó al Tribunal de haber administrado torpemente el banco de avío y exigió que se hiciera pública su contabilidad. Expresó la opinión de que en asuntos de dinero el Tribunal fuera responsable ante la asamblea general de delegados de las diputaciones, ya que, según él, dicho Tribunal no era más que el órgano ejecutivo electivo de la comunidad minera, por lo que debía depositarse la verdadera autoridad en la asamblea representativa. En fin, propuso también la expulsión de los comerciantes-aviadores que eran delegados de los campos mineros de menor importancia, e insistió en que se exigiera a todos los candidatos que hubieran cumplido el requisito obligatorio de haberse dedicado durante diez años a actividades mineras²⁸. Todas estas propuestas desagradaron a Elhuyar, quien señaló que las finanzas eran, en realidad, la responsabilidad esencial del tribunal. Además, las reuniones plenarias se convocaban no porque pudieran dar un voto definitivo, sino simplemente para elegir a los funcionarios y para aprobar el resumen general de la contabilidad. Protestó, porque según dijo, Septién quería «constituirse la Junta a un mismo tiempo Fiscal y Juez de un tribunal que debe respetar como su cabeza»²⁹.

La controversia se hizo especialmente agria cuando, según expresión de un observador, «el apoderado de la minería de Guanajuato junto con otros apoderados no cesó de procurar que la elección de sujetos para los empleos de Administrador General y Diputados recayesen en persona de su facción. Pero habiéndose formado otro partido contra el de Guanajuato se verificaron las elecciones por espíritu del uno o del otro»³⁰. En realidad, Septién había hecho un pacto con Fermín de Azpezechea, representante de la Diputación de Zacatecas; obtuvo también el apoyo de Catorce, y esta alianza provinciana logró tener éxito en las primeras escaramuzas. El único diputado general supervi-

²⁷ AGI, México 2246, diciembre 1793. Aquí se encuentran las voluminosas actas de las sesiones.

²⁸ AGN, Minería 167/10, peticiones varias, 3 febrero 1794.

²⁹ AGN, Minería 30/7, Tribunal de Minería a Gardoqui, 28 febrero 1794 (firmado por Elhuyar, Guiles y Valcárcel).

³⁰ AGI, México 2244, Delegado de San Luis Potosí a Gardoqui, 27 enero 1794.

viente, el comerciante Antonio Barroso, nombrado por el virrey en 1786, fue definitivamente destituido, eligiéndose entonces a Manuel García Zeballos como administrador general. Esta designación, tan sorprendente, produjo enorme desagrado en el otro partido, el cual emprendió una gran actividad que tuvo por resultado que los dos primeros diputados generales elegidos, José Manuel Valcárcel y Juan Manuel Guiles, ambos residentes en la ciudad de México, vencieran por poco margen a los candidatos rivales, que procedían de Zacatecas y de Catorce. El tercer diputado general fue José Mariano de Fagoaga, administrador de la gran empresa de su familia en Sombrerete.

Estas últimas designaciones nos dan un indicio de quiénes eran los que componían el otro partido, organizado para oponerse a Septién y a Azpezechea. Fue resultado de la unión entre Elhuyar y los comerciantes-capitalistas y casas financieras de la capital, a cuya cabeza se encontraban los Fagoaga. Era muy natural, porque Elhuyar conocía muy bien a la familia Fagoaga desde los días en que le habían recibido en Sombrerete a fin de llevar a cabo las pruebas del método de amalgamación inventado por Born. El marqués del Apartado había sido con frecuencia consejero del Tribunal, además de que poco tiempo antes el territorio en que se encontraba la mina de Vetagrande en Zacatecas, del cual eran accionistas principales los Fagoaga y Bassoco, había sido invadido por Azpezechea y sus asociados. Como este último controlaba la Diputación local, sólo el Tribunal de Minería podía anular cualquier decisión que permitiera a Azpezechea registrar a su nombre varios tiros de Vetagrande por entonces inexplotados ³¹. Así pues, era de importancia fundamental para los Fagoaga derrotar a la alianza de las diputaciones de Guanajuato y Zacatecas. Por supuesto que al año siguiente Azpezechea renunció a sus pretensiones sobre la Vetagrande, tomando posesión de la mina de Quebradilla, que pertenecía a los nietos de José de la Borda.

Las elecciones de 1793 fueron, puede afirmarse, el preludio del siglo XIX. Quizá los representantes de las provincias viajaron por primera vez a la capital para tratar de apoderarse del control de un organismo central de gobierno que hasta entonces se había encontrado en manos de personas radicadas en la ciudad de México. Además, estos mineros y refinadores provincianos luchaban contra la

³¹ AGN, Minería 107, Compañía de Vetagrande al Virrey, sin fecha, fines de 1792.

influencia de los almaceneros capitalinos en sus actividades y, por supuesto, contra una gran familia, los Fagoaga, que durante tan largos años dominó grandes sectores de la minería mexicana. Debe hacerse hincapié, *sin embargo, en que esta disputa no fue simplemente un enfrentamiento de comerciantes contra mineros, ni de peninsulares contra criollos. El mismo Septién era un comerciante convertido en minero. En muchos sentidos, Septién era al Bajío como los Fagoaga eran a la totalidad de la Nueva España. Todas las personas que participaron, además, eran nativas de Europa. Nos encontramos, entonces, ante una lucha abierta por el poder entre un grupo de montañeses de Guanajuato aliados a los vascos de Zacatecas, contra los almaceneros y la familia Fagoaga de la ciudad de México.*

Surge una última cuestión: ¿Para qué querían el poder? Y aquí, desgraciadamente, debemos aceptar que nuestra historia no llega a un desenlace. *No sucedió gran cosa después de la elección de Manuel García de Zaballos como administrador general. ¿Cuáles fueron, entonces, los motivos que hicieron que un grupo de montañeses tratara de obtener el control de las instituciones de Guanajuato primero, y más tarde del mismo Tribunal de Minería? En esos años llegaron a tener el control del batallón de la milicia, del ayuntamiento, y de las diputaciones mineras y mercantil. Manuel Antonio de Otero fue gravemente derrotado en dos ocasiones: una, cuando Hernández Chico recibió 100 000 pesos por la mina de Camargo, y la otra cuando del Mazo obtuvo la custodia de los bienes de sus hijastros. Pero, ¿cómo afectó esto a Francisco de Septién y Arce? En este punto no podemos evitar especular. El, junto con García de Zaballos y un tercer montañés, Andrés Sagaz y Herrera, adquirieron la mina del Tepeyac en 1790, un año antes de que los tres fueran elegidos electores de la junta minera. Por otra parte, dicha mina, propiedad relativamente pequeña, colindaba con La Valenciana. ¿No existiría pues la posibilidad de que tras estas maniobras institucionales se ocultara un plan para invadir la parte más rica de la veta de La Valenciana? Tal vez... pero sin pruebas no podemos permitirnos calumniar a los muertos. Sin embargo, seguramente Antonio Pérez Gálvez, seductor de la hija mayor de Obregón, se lo imaginaba cuando, en una carta que escribió a Revillagigedo poco antes de las elecciones de diciembre de 1793, afirmó que la junta y la Diputación de Guanajuato se encontraban bajo el control de un grupo de perso-*

nas unidas por los lazos de la sangre, del matrimonio y de la asociación financiera. Declaró que estos hombres excavaban tiros en las cercanías de las minas que habían encontrado vetas ricas, a fin de apoderarse, por debajo de la tierra, de los mejores minerales, confiando en que, como tenían el control de la Junta, podrían impedir que los afectados obtuvieran satisfacción de la justicia ³². No obstante, como el rival de Pérez Gálvez por la mano de la heredera de Obregón fue el montañés García de Quintana, es claro que carecía de motivos para sentir simpatía por dicho grupo, por lo cual no podemos considerarlo en ningún caso como testigo digno de confianza. Y en este punto debemos dejar el asunto. La mina del Tepeyac nunca tuvo mucho éxito, y La Valenciana no cambió de manos ni fue invadida. No nos queda más que una serie de acusaciones e insinuaciones. Cualquiera que haya sido el caso, el hecho es que la mayoría de estos hombres murieron antes de que pasaran diez años, y sus puestos fueron ocupados por sus hijos criollos.

³² AGI, México 1561, Antonio Pérez Gálvez a Revillagigedo, 29 noviembre 1793. Véanse también las apelaciones de Petra Alcántara Muñoz, que acusó a los socios del Tepeyac de robarle el mineral de su mina: AGI, México 1594, Azanza a Soler, 27 diciembre 1799; AGI, México 2246, Consejo de Indias, 12 mayo 1803.

EPILOGO

El acto final de la revolución borbónica en el gobierno fue el decreto de consolidación o de amortización, promulgado en diciembre de 1804. Ante la amenaza de una inminente bancarrota, la Corona exigió que todos los fondos eclesiásticos fueran entregados al tesoro real, el cual pagaría a partir de entonces el interés del 5 por 100 sobre el capital depositado ¹. Estos fondos ascendían a más de cuarenta millones de pesos y en su mayor parte tenían la forma de hipotecas y préstamos garantizados con propiedades rurales y, en medida menor, con bienes urbanos ². Esta nueva ley, en consecuencia, constituyó un ataque directo contra los intereses económicos de la mayoría de los terratenientes y de algunos comerciantes y mineros. Toda persona que hubiere obtenido préstamos de la Iglesia quedaba obligada a liquidarlos en pagos periódicos en un plazo no mayor de diez años, y para muchos propietarios fue imposible cumplir con dicha obligación; algunos de ellos vieron sus propiedades embargadas y rematadas. Además, como muchas haciendas aparecieron simultáneamente en un mercado en el que la demanda era, en el mejor de los casos, lenta de por sí, los precios de la tierra se derrumbaron, con la consecuencia de que el valor proporcional de los gravámenes fijos aumentó considerablemente. A fines de 1808 esta salvaje requisición de capital había exprimido de los bolsillos de las clases propietarias más de doce millones de pesos ³.

El marqués de San Miguel de Aguayo, por ejemplo, tuvo que pagar no menos de 450 000 pesos. El cañero vasco Gabriel de Yermo debió liquidar 200 000 pesos. El Consulado de México y el Tribunal de Minería, que parcialmente habían financiado sus diversos proyectos con fondos eclesiásticos, se vieron en la obligación de liquidar

¹ R. Flores Caballero, 'La consolidación de vales reales en la economía, la sociedad y la política novohispanas' *Historia Mexicana*, 18 (1969), 3, pp. 334-78.

² Mora, *Obras sueltas*, escritos de Abad y Queipo, pp. 231-3.

³ Sociedad mexicana de geografía y estadística, *Boletín*, 2.^a serie, 1 (1869), pp. 486-95. La suma total recibida de la Iglesia en esos años fue de 12 1/2 millones de pesos.

esos préstamos. Los mineros de Guanajuato sufrieron tanto como los demás, como en el caso de los bienes del marqués de San Juan de Rayas, que tenían un gravamen acumulado de 154 000 pesos, cantidad obtenida como préstamo para financiar la rehabilitación de la mina de Rayas; se le obligó a liquidar esta suma en pagos anuales de 12 000 pesos ⁴. De igual manera, los hijos de Bernardo Fernández de Riaño tuvieron que reunir los 23 000 pesos que su padre, más de cuarenta años antes, había invertido en la mina de San Lorenzo. La viuda de Ramón de Aranda no pudo liquidar los 50 000 pesos con que estaban gravadas sus propiedades, por lo que la Junta ordenó el remate de una de sus haciendas ⁵. La casa de María Josefa de Busto, hipotecada en 4 000 pesos, fue también embargada ⁶. En la cercana ciudad de San Miguel el Grande había también varias familias fuertemente endeudadas. Los Lanzagorta, por ejemplo, debían la suma de 61 950 pesos, y los Sauto, 34 200. Los hijos de Domingo Narciso de Allende tuvieron que pagar anualidades de 1 500 pesos para redimir una hipoteca de 18 000 ⁷. Y en la congregación de Dolores el cura párroco, Miguel Hidalgo y Costilla, no logró reunir los 7 000 pesos que su pequeña hacienda debía ⁸, de manera que esta fue embargada y dada en alquiler; no recobró la posesión de dicha propiedad sino hasta los primeros meses de 1810. Sin duda alguna, el decreto de amortización predispuso a la colonia a la revolución, e irritó fuertemente tanto a los criollos como a los gachupines.

Así pues, cuando en 1808 llegó a la Nueva España la noticia de la invasión francesa de la Península y de la forzada abdicación de la dinastía borbónica, las tensiones acumuladas, generadas durante cuarenta años de reformas económicas y de cambios sociales, estallaron, y el complejo que formaba el México borbónico comenzó a disolverse en las partes que lo componían. Un virrey fuerte quizá hubiera evitado algo del incipiente caos, pero José de Iturrigaray, que era una creación de Manuel de Godoy, resultó ser al final tan vacilante como venal. Ya se había enemistado con los miembros del consulado, que eran un poco puritanos, por su manera ostentosa de vivir y por su

⁴ AMM, 153, 2 mayo 1807.

⁵ AMM, 150, 13 septiembre 1806; AHGP, Cabildo, 21 julio 1807.

⁶ AMM, 147, 4 agosto 1806.

⁷ Con relación a los Lanzagorta y a los Sauto, véase AGN, Consolidación 5, 9 marzo 1807 y 2 octubre 1807; respecto a Allende, véase AMM, 154, 18 enero 1807.

⁸ AMM, 153, 2 mayo 1807, declaración de costas del caso, 19 febrero 1810.

favoritismo hacia la aristocracia criolla ⁹. Después puso los intereses creados en peligro al convocar una serie de juntas públicas para discutir la disputada cuestión de la soberanía, ante lo cual los criollos, encabezados por el ayuntamiento de la ciudad de México y por el alcalde del crimen Jacobo de Villaurrutia, aprovecharon la ocasión para exigir la convocatoria de una asamblea representativa y nacional que auxiliara al virrey a gobernar al país. Ante esta clara amenaza contra la forma de gobierno tradicional, las antiguas instituciones, cuyo poder había sido mermado laboriosamente por los estadistas borbónicos, reaccionaron agresivamente. La Audiencia conspiró con el Arzobispo y con el Consulado, deteniendo a Iturrigaray y obligándole a renunciar. Nombraron virrey a su propio candidato, un viejo y pobre soldado vasco ¹⁰. En la Audiencia los jefes del movimiento eran Guillermo de Aguirre y Viana, sobrino de aquel mismo conde de Tepa que tanto se opuso a la creación de las intendencias, y Miguel de Bataller, hijo de un antiguo juez del mismo Tribunal ¹¹. La facción del Consulado estaba bajo la dirección de Gabriel de Yermo, cañero que era sobrino y tío de personas que habían sido priores de este bastión de los almaceneros gachupines ¹². Tanto él como Aguirre eran vascos, es decir, originarios del país cuyas libertades tradicionales habían sido atacadas recientemente por el gobierno de Manuel de Godoy ¹³. Sin duda alguna Antonio Bassoco, que por entonces era el jefe reconocido de la comunidad vasca en la Nueva España, conocía sus planes, ya que era originario del mismo valle que Yermo. El golpe de estado de 1808, pues, tuvo un doble significado, ya que fue tanto una maniobra de los antiguos organismos heredados de la dinastía de Habsburgo que trataban de proteger sus prerrogativas, como la expresión de fuerza de la verdadera aristocracia de México, es decir, los

⁹ Entre sus amigos íntimos se hallaban el Marqués de San Juan de Rayas e Ignacio Obregón, que en aquella época eran, respectivamente, administrador general y diputado general del Tribunal de Minería. Véase Alamán, *Historia*, I, 153.

¹⁰ *Ibid.*, I, 114-53.

¹¹ Respecto a Aguirre véase BN (Madrid) MSS 20417, recomendación del Conde de Tepa a la Corona, 24 julio 1798, para que Aguirre sea ascendido y pase a formar parte del Consejo de Indias; véase también AGI, México 1889, Aguirre a la Corona, 8 agosto 1797. Con relación a Bataller véase AGI, México 1540, Branciforte a Llaguno, 3 junio 1795, petición de la viuda del padre de Bataller para que su hijo Miguel sea ascendido.

¹² Respecto a Yermo, véase Alamán, *Historia*, I, 156-7.

¹³ Carr, *Spain, 1808-1939*, pp. 63-4.

inmigrantes gachupines, en defensa de su posición en la sociedad colonial.

A pesar de todo, los conservadores a veces inician revoluciones, pero nunca o casi nunca las terminan. La situación política imperante en los dos años siguientes al derrocamiento de Iturrigaray fue siempre inestable y explosiva, porque los peninsulares habían triunfado completamente, mientras los criollos conspiraban y alimentaban el resentimiento. Esta precaria situación se agravó por la intranquilidad popular causada por una sucesión de malas cosechas. En septiembre de 1809, después de un verano de escasas lluvias, el intendente de Guanajuato informó que el maíz ya costaba más de 20 reales por fanega, cifra que era más del doble del precio normal. En la intendencia de México, en aquella misma época, 30 de los 41 distritos notificaron haber obtenido malas cosechas; hubo regiones en donde el precio se cuadruplicó ¹⁴.

Tales precios eran ruinosos para la minería, porque las haciendas de beneficio no podían alimentar y mantener sus mulas. Hacia 1810, en Guanajuato estaban funcionando únicamente 1 200 arrastres, de un total de 1 700, reducción que «previno de las secas terribles de aquel año y mucho más del año que le precedió» ¹⁵. El desempleo era una consecuencia directa de la sequía, pues según una declaración del Cabildo de Guanajuato los trabajadores de las minas «ellos han padecido todos los efectos del hambre y de la peste de este presente año tan calamitoso. Ellos derramando su vida con arroyos de sudor, palpan los primeros lo infructuoso de este afán por la extremosa decadencia a que ha llegado la Minería» ¹⁶.

Es claro que la combinación de un gobierno débil en la ciudad de México con las grandes multitudes hambrientas en las provincias presentó una situación propicia para los conspiradores criollos. Y fue en las ciudades del Bajío, región cuya reciente prosperidad basada en las minas, los textiles y la agricultura había liberado del control financiero del capital de la ciudad de México, donde tuvieron lugar las primeras rebeliones abiertas contra el gobierno virreinal. En septiembre de 1810, en San Miguel el Grande, un grupo de oficiales de la

¹⁴ AGN, Intendencias 73, Riaño al Virrey, 25 agosto y 11 septiembre 1809.

¹⁵ AGN, Minería 192/1, Diputación minera de Guanajuato al Virrey, 8 noviembre 1816.

¹⁶ AHG, Insurgencia 1810-11, Cabildo a Riaño, 22 septiembre 1810.

milicia dirigido por el cura párroco de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, levantó la bandera de Nuestra Señora de Guadalupe, llamó a los campesinos a la rebelión, y se dirigió a Guanajuato ¹⁷.

En aquella ciudad, al aproximarse las fuerzas insurgentes, el intendente Juan Antonio de Riaño, no muy seguro de la lealtad del pueblo, se retiró a la recién terminada Alhóndiga de Granaditas, edificio con aspecto de fortaleza que servía de granero municipal. Lo acompañaba el batallón local de la milicia, y llevaba consigo los fondos del tesoro. También lo siguieron a la Alhóndiga la mayor parte de los miembros de la colonia peninsular ¹⁸, mientras que por el contrario fueron muy pocos los criollos que se le unieron. El Ayuntamiento, encabezado por Fernando Pérez Maraño, exhortó a Riaño a defender la ciudad asegurándole que tenía el apoyo popular ¹⁹.

Por el contrario, los peores temores del intendente se vieron confirmados por los acontecimientos: las masas se unieron a Hidalgo y hasta el administrador de La Valenciana, Casimiro Chovell, antiguo alumno distinguido de la Escuela de Minería, organizó un regimiento con los trabajadores. Estos mineros, junto con los indígenas de Dolores, fueron los más activos en el sitio de la Alhóndiga. La decisión de Riaño de trasladar el metal precioso del tesoro a la Alhóndiga fue un error, porque, según un relato posterior informa, «el saberse que allí estaban encerrados tantos tesoros, sirvió de incentivo a la plebe de esta ciudad y a la multitud de los indios para que atacaran con más furor a la Alhóndiga» ²⁰. Pocas horas después, la alhóndiga estaba en manos de los insurrectos y Riaño había pasado a mejor vida.

Después de la toma de la alhóndiga, el populacho llevó a cabo una matanza indiscriminada de los peninsulares que seguían resistiendo. Además, los prisioneros que tenían en su poder, fueron muertos a sangre fría más tarde, poco antes de que las tropas realistas entraran en la ciudad. En total, por lo menos trescientos españoles peninsula-

¹⁷ Véase Liceaga, *Adiciones y rectificaciones*, I, 16-66.

¹⁸ Un grupo de peninsulares, entre ellos Tomás de Alamán, tío del futuro historiador, Joaquín Antonio de Iramátegui, cuñado de los Pérez Maraño, y Bernardo Chico Valdés, se quedaron en sus casas, y más tarde juraron 'fidelidad, obediencia y sumisión a la nación americana'. Véase AHG, *Insurgencia*, 1810-11, 8 octubre 1810. El Conde de Pérez Gálvez y Pedro de la Riva huyeron a Acapulco; véase Liceaga, *Adiciones y rectificaciones*, I, 79.

¹⁹ Véase *Pública vindicación*, pp. 19-20.

²⁰ AGN, Minería 192/1, Diputación de Guanajuato, 8 noviembre 1816.

res —comerciantes, mineros y funcionarios— perdieron la vida durante el sitio y en las dos matanzas subsecuentes ²¹. La Alhóndiga de Granaditas, proyecto de un gobernante ilustrado erigido para asegurar el abastecimiento barato de grano al pueblo de Guanajuato, se convirtió en realidad en el mausoleo del imperio colonial español, y en la cuna del México independiente. El recuerdo de aquellas matanzas impidió una reconciliación sensata entre criollos y gachupines, los cuales, a partir de entonces, ya no fueron primos que reñían, sino enemigos en acecho y llenos de sospechas.

La rebelión de 1810 tuvo unas características tan peculiarmente fraticidas, que las matanzas de Guanajuato resultan horrendas, porque los tres capitanes rebeldes de San Miguel, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo, eran criollos de primera generación, hijos de inmigrantes vascos. El padre de Allende era dueño de una tienda y de una pequeña hacienda; el de Abasolo tenía la concesión del monopolio del tabaco en Dolores; y el de Aldama había sido administrador de un obraje propiedad de la rica familia de la Canal ²². En otras palabras, estos tres hombres pertenecían a la clase de los comerciantes y administradores inmigrados. Sus hijos criollos se unieron a la milicia y fueron miembros del Ayuntamiento. Sin embargo, esta hegemonía local tenía que ser compartida con la nueva ola de primos y rivales gachupines que seguían llegando. Por otra parte, Hidalgo venía de una familia criolla más antigua que, por el lado de su madre, estaba en México desde el siglo XVI. Su padre era administrador de una gran hacienda en el aislado distrito de Pénjamo; dos de sus hijos, Manuel y Miguel, entraron al sacerdocio, mientras que el tercero se hizo abogado. Pertenecían a la capa baja de la clase criolla, que lograba sobrevivir únicamente retirándose al campo o mediante el ejercicio de las profesiones, especialmente el sacerdocio.

En Guanajuato sólo hubo dos criollos bien conocidos que se unieran a los rebeldes. Fueron José María Chico, hijo menor del regidor Bernardo Chico Valdés, abogado recién recibido que ya debía la suma de 5 000 pesos a su hermano mayor, y José María de Liccaga. Chico era criollo de primera generación como los integrantes del grupo de San Miguel, y fue nombrado ministro de Justicia por

²¹ Alamán, *Historia*, II, 39-47.

²² Juan Martineña, *Documentos*. p. 83; Alamán, *Historia*, I, 228-30.

Hidalgo ²³, mientras que Liceaga era sobrino de Tomás de Liceaga, que había colaborado con Gálvez en la supresión de la revuelta de 1767; también estaba emparentado con la familia Busto ²⁴. Su padre había sido administrador de la alhóndiga municipal, es decir, funcionario de poca importancia. Aparte de estos dos hombres, la *élite* criolla de Guanajuato se decidió por la neutralidad en la batalla entre Hidalgo y Riaño, pero una vez que la ciudad fue recapturada por las fuerzas realistas, fueron fieles a la Corona. Es una ironía que, en muchos casos, aquellos españoles americanos hayan sido los beneficiados por la rebelión, aunque de modo indirecto, pues por ejemplo Fernando Pérez Marañón, que se negó a unirse a las fuerzas de Hidalgo, recibió, como recompensa a su lealtad y reconocimiento de sus capacidades, el nombramiento virreinal como intendente ²⁵. De manera semejante el licenciado Martín Coronel, también abogado criollo, recibió el puesto de lugarteniente legal del intendente. También en Hacienda los subordinados americanos fueron ascendidos. Pérez Marañón, que fue intendente hasta 1821, era, por supuesto, criollo de primera generación, como Chico y Allende, e hijo de un comerciante.

No es posible explicar esquemáticamente por qué razón algunos favorecían la idea de la independencia, mientras que otros apoyaban a la Corona. Agustín de Iturbide, criollo que inició su carrera militar suprimiendo sin piedad la insurgencia, tenía más o menos los mismos antecedentes sociales que Allende. Era hijo de un comerciante vasco. Por otra parte, pronto fueron evidentes ciertas concentraciones geográficas. En San Luis Potosí, Félix Calleja, de manera semejante al peruano Juan Manuel de Goyeneche, aprovechó las relaciones familiares para atraer a los grandes terratenientes al campo realista ²⁶. También usó para ello la plata que los gachupines dueños de la mina de Quebradilla en Zacatecas le enviaban ²⁷. Con este apoyo pronto

²³ AHGP, Presos, 21 agosto 1810; José María Chico tenía 24 años en 1810. Véase AHGP, Presos, 13 julio 1803. Después de que Guanajuato fue recapturada Bernardo Chico Valdés hizo las paces con la Corona mediante un donativo de 35 000 pesos. AGI, México 2127, Cuentas de Caja, 1810.

²⁴ AHGP, Cabildo, 30 enero 1787, 21 noviembre 1807, 18 septiembre 1811, 8 octubre 1811.

²⁵ Liceaga, *Adiciones y rectificaciones*, I, 168.

²⁶ AGI, México 2345, Calleja a la Corona, 12 enero 1818; por matrimonio era primo de la poderosa familia Rincón Gallardo.

²⁷ Alamán, *Historia*, I, 293. Se trataba de Fermín de Azpezechea, Bernardo de Iriarte y Julián Penmartín.

logró crear un pequeño ejército, cuyos oficiales eran en su mayor parte criollos, con el cual limitó las actividades de Hidalgo y Allende a las intendencias de Guanajuato, Michoacán y Guadalajara, donde todos los regimientos de la milicia se unieron a la rebelión. En la guerra civil que siguió, fueron derrotados por una combinación de la brigada formada por Calleja en San Luis Potosí y los regimientos regulares y milicianos de México y Puebla mandados por Manuel de Flon. Los criollos, naturalmente, lucharon en uno y otro bando. Más tarde Calleja se quejó de la pasividad de los comerciantes peninsulares, que se negaron a alistarse en el ejército ²⁸. No obstante, al mismo tiempo denigraban a quienes los defendían, esperando con ansia la llegada de tropas regulares procedentes de España. El juez peruano Manuel de la Bodega comentó: «Insurgente y Americano se han hecho voces sinónimas en el idioma de aquellos Europeos» ²⁹. Durante los años que siguieron los criollos fueron ascendidos a los más altos cargos civiles y militares en escala sin precedente, y sin embargo al mismo tiempo se les tenía más desconfianza que nunca, situación que, por supuesto, no podía durar mucho. Y fueron precisamente aquellos conservadores realistas los que, finalmente, lograron la independencia de la Nueva España. La guerra civil de 1810-21 tuvo por resultado la militarización definitiva del poder político que los Borbones habían emprendido. El golpe de estado de 1821 fue organizado por un ejército colonial que se había formado principalmente para sofocar la insurgencia, y fue apoyado por una Iglesia conservadora y ansiosa de liberarse del control de una autoridad civil que se había hecho demasiado liberal. El nuevo estado mexicano tardaría más de una generación en arrebatarse el control a tales fuerzas reaccionarias.

En 1814 varios funcionarios prominentes expresaron sus opiniones sobre las causas de la rebelión. El ex-jefe de la Audiencia de México, Ciriaco González Carbajal (uno de los conspiradores de 1808), veía su origen en la expulsión de los jesuitas. Dicha orden, afirmó, había inculcado la lealtad a la Corona en la *élite* criolla, con el resultado de que «en su tiempo no estuviese tan odiado el nombre español, como ha sido después». El vacío que la salida de la

²⁸ Bustamante, *Cuadro histórico*, I, 133.

²⁹ AGI, Indiferente General 42, Manuel de la Bodega a Miguel de Lardizábal y Uribe, 27 octubre 1814.

Compañía dejó en la educación fue ocupado malamente por maestros americanos impreparados, que infectaron a los jóvenes con sus propios sentimientos antipeninsulares ³⁰. Igualmente reveladores fueron los comentarios de Miguel de Lardizábal y Uribe, miembro de una distinguida familia mexicana que aquel año era ministro de la Corona. Percibía una distinción social entre rebeldes y realistas, ya que la antigua aristocracia, que en parte descendía de los conquistadores, había permanecido fiel a la monarquía. Era más bien la prole de los inmigrantes la que había causado todos los disturbios. «Mercaderes, peluqueros, sastres, lacayos y polizones. Los criollos hijos de tales gentes, es decir, la gente baja y ordinaria, son los autores y mantenedores de la insurrección» ³¹. Estos dos comentaristas, en realidad, consideraban que la rebelión era una consecuencia directa del nuevo régimen borbónico que Gálvez había establecido.

Los rebeldes, por su parte, no se dieron prisa en formular la declaración de sus principios. Pasaron tres años para que un congreso nacional declarara que la independencia era el objetivo del movimiento. En el plano emocional, por el contrario, las masas inmediatamente adoptaron un lema que expresaba muy bien el motivo que las había empujado a la lucha: ¡Viva Nuestra Señora de Guadalupe! ¡Mueran los gachupines! «Sus jefes, aunque satisficieron las tendencias del pueblo permitiendo que los europeos que se encontraban a la mano fueran degollados, pusieron el asunto de manera un poco diversa, afirmando que simplemente deseaban ser los amos de su propia casa, gobernando a la Nueva España sin intervenciones extranjeras. También querían terminar con el sistema de que los españoles de la Península, generación tras generación, vinieran a México no únicamente a gobernar la colonia, sino también a ocupar las más altas cimas de la economía y de la sociedad. En una palabra, querían abolir el sistema de inmigración gachupina que tanto nos hemos esforzado en definir. La proclama del padre Hidalgo en Guadalajara expresó clásicamente estos sentimientos, atacando a los gachupines en unos términos que bien podría haber usado el embajador de Moctezuma al describir su encuentro con Cortés. Los acusó de ser «hombres

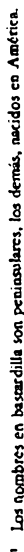
³⁰ AGI, México 1158, Ciriaco González Carbajal a Miguel de Lardizábal y Uribe, 21 junio 1814.

³¹ AGI, Indiferente General 42, Miguel de Lardizábal y Uribe, 29 octubre 1814.

desnaturalizados, que han roto los más estrechos vínculos de la sangre... que abandonando a sus padres, a sus hermanos, a sus mujeres y a sus propios hijos... al atravesar inmensos mares, exponerse al hambre, a la desnudez, a los peligros de la vida... El móvil de todas esas fatigas no es sino su sórdida avaricia... ellos no son católicos sino por política; su Dios es el dinero» ³².

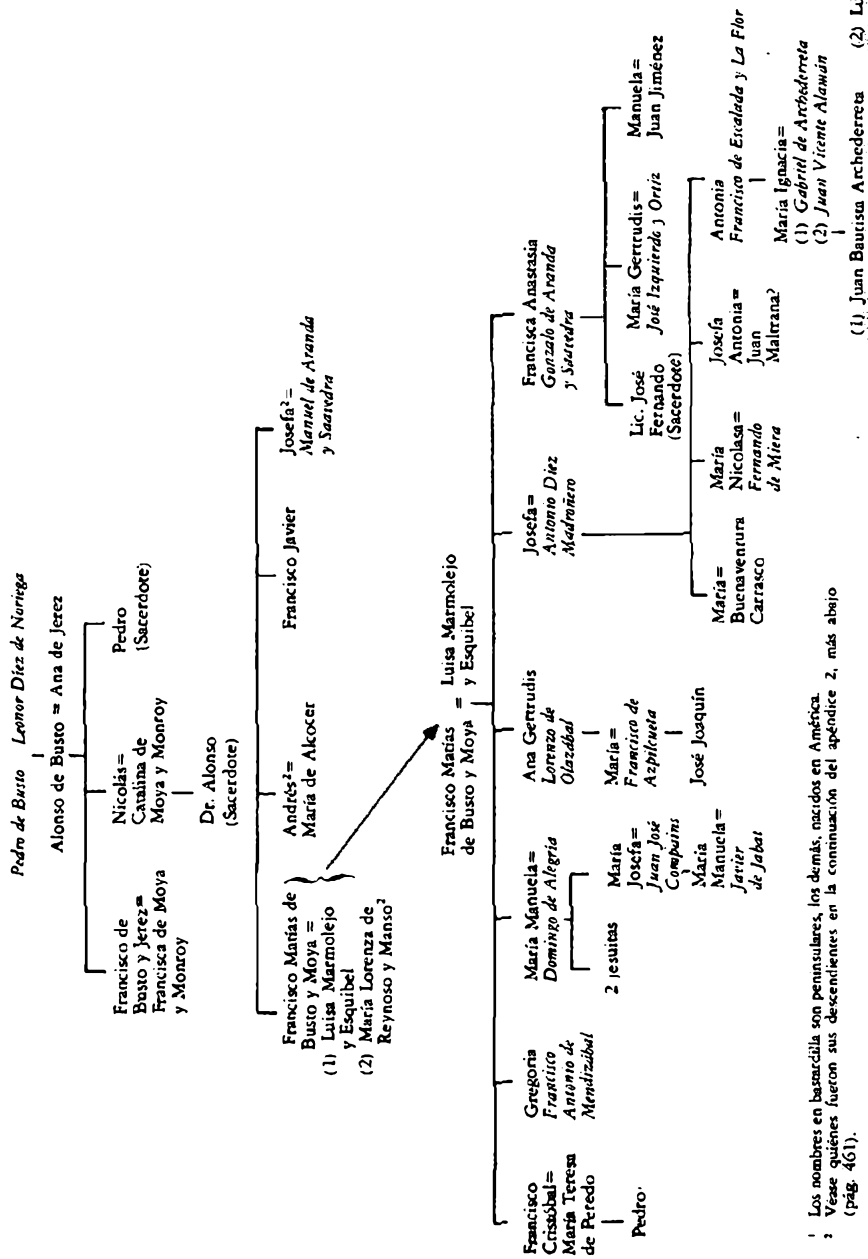
³² Reproducido en Alamán, *Historia*, II, 391-3.

GENEALOGIA ESCOGIDA DE LA FAMILIA FAGOAGA 1



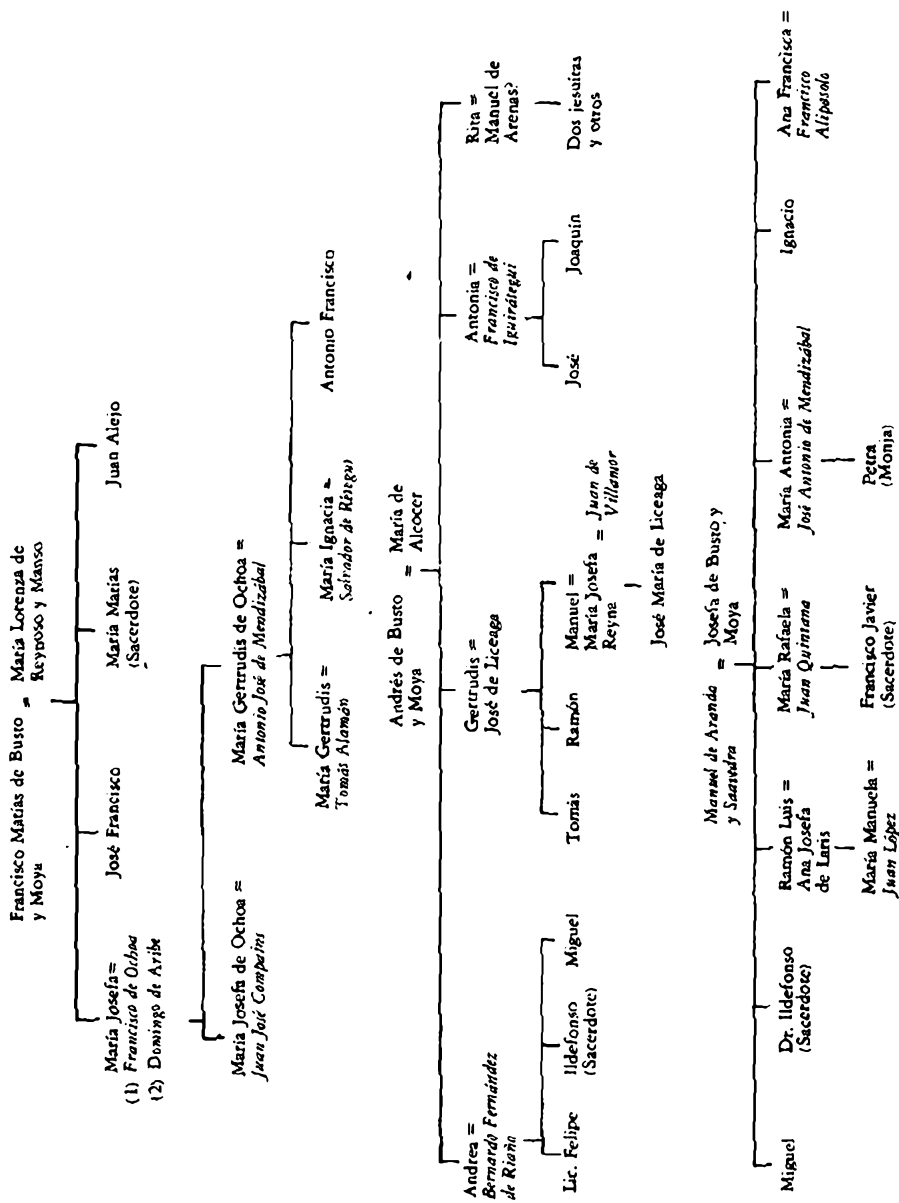
Los nombres en bastardilla son peninsulares, los demás, nacidos en América.

APENDICE 2 **GENEALOGIA ESCOGIDA DE LAS FAMILIAS BUSTO Y ARANDA**



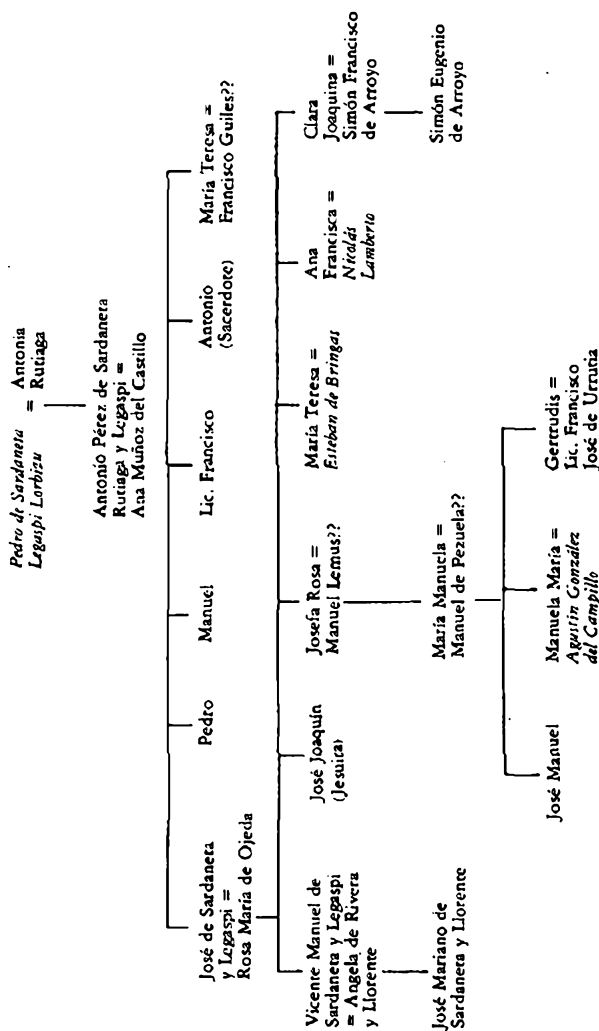
Los nombres en bastardilla son peninsulares, los demás, nacidos en América.
 Véase quiénes fueron sus descendientes en la continuación del apéndice 2, más abajo (pág. 461).

APENDICE 2 (Continuación)



APENDICE 3

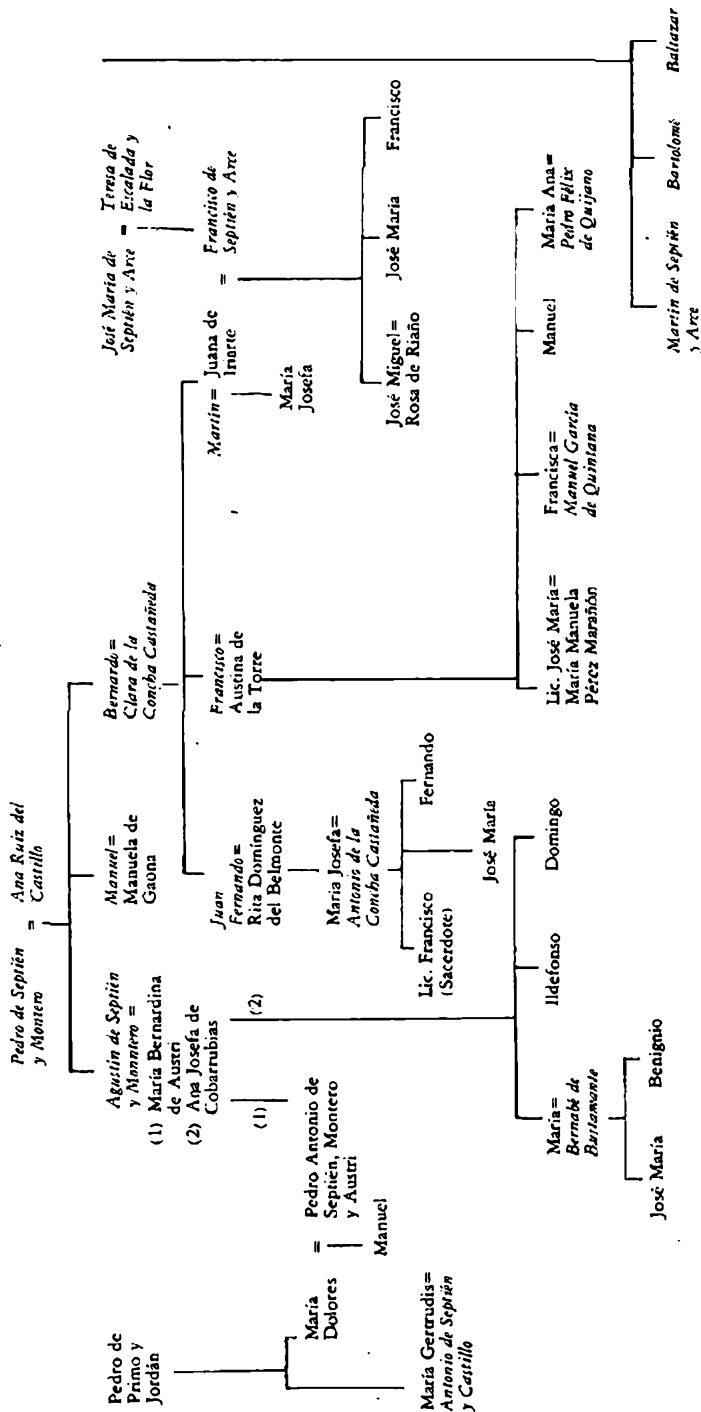
GENEALOGIA ESCOGIDA DE LA FAMILIA SARDANETA ¹



¹ Los nombres en bastardilla son peninsulares, los demás, nacidos en América

APENDICE 4

GENEALOGIA ESCOGIDA DE LA FAMILIA SEPTIEN¹



¹ Los nombres en bastardilla son peninsulares, los demás, nacidos en América.

APENDICE 5

MIEMBROS DE LA JUNTA DE ELECTORES Y DE LA DIPUTACION MINERA GUANAJUATO, 1751-1808

Febrero de 1751

Electores

Antonio Jacinto Díez Madroñero	Extremeño
Lorenzo de Incháurregui	Vasco
Juan Antonio Quintana	Vasco
Gonzalo de Aranda y Saavedra	Extremeño
Vicente Manuel de Sardaneta	Criollo
Augusto Gallartu	?
Andrés de Regil	?
Francisco Javier de Uribarren	?

Diputados anteriores

Antonio Jacinto Díez Madroñero	Extremeño
Francisco Javier de Uribarren	?

Nuevos diputados

Esteban de Bringas	Andaluz
Ignacio de Uribarren	Vasco

Septiembre de 1771

Electores

Juan José Compains	Vasco
Bernardo Fernández de Riaño	Castellano
Lucas de Irizar	Vasco
Domingo de Arike	Vasco
Tomás de Liceaga	Criollo
Juan José Iguirátegui	Criollo
Juan Ignacio de Aranda	Criollo

Diputados anteriores

Antonio Jacinto Díez Madroñero	Extremeño
Marqués de San Juan de Rayas	Criollo

Nuevos diputados

Fernando Antonio de Miera	Montañés
Gabriel de Arechederreta	Vasco

Abril de 1775

Electores

José Hernández Chico	Castellano
Domingo de Arike	Vasco
Juan José Compains	Vasco
José González del Peral	Montañés
Antonio de Obregón	Criollo
Tomás de Liceaga	Criollo
Pedro Luciano de Otero	Criollo

Diputado anterior

José González del Peral	Montañés
-------------------------	----------

<i>Nuevo diputado</i> Domingo de Aribé	Vasco
Febrero de 1779	
<i>Electores</i>	
Juan José Compains	Vasco
Francisco Azpilcuera	Vasco
Domingo Presa	Vasco
Conde de La Valenciana	Criollo
Ventura José Carrasco	Criollo
Lic. Felipe Fernández de Riaño	Criollo
Marqués de San Juan de Rayas	Criollo
<i>Diputados anteriores</i>	
José Hernández Chico	Castellano
Domingo de Aribé	Vasco
<i>Nuevos diputados</i>	
Lic. Felipe Fernández de Riaño	Criollo
José María de Irizar	Criollo
Enero de 1783	
<i>Electores</i>	
José Hernández Chico	Castellano
Domingo de Aribé	Vasco
Manuel García de Quintana	Montañés
José Campero	Montañés
Juan Revuelta	Montañés
Manuel García de Zaballos	Montañés
Antonio José de Mendizábal	Vasco
<i>Diputados anteriores</i>	
Pedro Luciano de Otero	Criollo
Lic. Felipe Fernández de Riaño	Criollo
<i>Nuevos diputados</i>	
José Hernández Chico	Castellano
Francisco de Sepiñ y Ance	Montañés
Febrero de 1787	
<i>Electores</i>	
Juan de Villamor	Castellano
Gervasio de Irizar	Criollo
Lic. Martín Coronel	Criollo
Pedro Luciano de Otero	Criollo
Manuel Antonio de Otero	Criollo
Lic. Felipe Fernández de Riaño	Criollo
Miguel Fernández de Riaño	Criollo
<i>Diputados anteriores</i>	
Domingo de Aribé	Vasco
Francisco de Sepiñ y Arce	Montañés
<i>Nuevos diputados</i>	
Manuel García de Zaballos	Montañés
Lic. Felipe Fernández de Riaño	Criollo
Febrero de 1791	
<i>Electores</i>	
Manuel García de Zaballos	Montañés
Andrés Sagaz y Herrera	Montañés

Francisco de Septién y Arce	Montañés
José Quijano	Montañés
Juan Bautista de Incháurregui	Criollo
José María de Irizar	Criollo
Marqués de San Juan de Rayas	Criollo
Juan Vicente Regil	Criollo
<i>Diputados anteriores</i>	
Domingo de Aribé	Vasco
Miguel Fernández de Ruano	Criollo
<i>Antiguos diputados</i>	
José Hernández Chico	Castellano
Lic. Martín Coronel	Criollo
 Noviembre de 1793	
<i>Electores</i>	
Manuel Fernando de Portu	Peninsular
Juan de Villamor	Castellano
Gervasio de Irizar	Criollo
Manuel García de Zaballos	Montañés
Marqués de San Juan de Rayas	Criollo
Lic. José María de Septién y Montero	Criollo
Juan Vicente Regil	Criollo
<i>Nuevos diputados</i>	
Andrés Sagaz y Herrera	Montañés
Lic. Martín Coronel	Criollo
 Noviembre de 1796	
<i>Electores</i>	
Domingo de Aribé	Vasco
Juan Vicente Alamán	Vasco
José Antonio del Mazo	Montañés
Martín de la Riva	Montañés
Pedro Félix Quijano	Montañés
José Campero de Montero	Montañés
Manuel Antonio de Otero	Criollo
<i>Nuevos diputados</i>	
León de Sein	Vasco
Juan de Villamor	Castellano
 Diciembre de 1799	
<i>Electores</i>	
Juan Vicente Alamán	Vasco
Tomás Alamán	Vasco
Fernando de la Concha	Montañés
Andrés Sagaz y Herrera	Montañés
Francisco de Septién y Arce	Montañés
Pedro de Bustamante y Tagle	Criollo
Marqués de San Juan de Rayas	Criollo
<i>Diputados</i>	
Martín de la Riva	Montañés
Gervasio de Irizar	Criollo
 Noviembre de 1802	
<i>Electores</i>	
Manuel Fernando de Portu	Peninsular
Conde de Pérez Gálvez	Malagueño

José Miguel Carrica	Vasco
José Antonio del Mazo	Montañés
Pedro de la Riva	Montañés
Pedro Félix Quijano	Montañés
Lic. José María de Septién y Montero	Criollo
José María Hernández Chico	Criollo
<i>Diputados</i>	
Juan Vicente Alamán	Vasco
Agustín Pérez Marañón	Montañés
Noviembre de 1808	
<i>Electores</i>	
Juan Vicente Alamán (finado)	Vasco
Sebastián Sorondo	Vasco
Modesto de Villa	Montañés
Joaquín Gutiérrez de Mercadillo	Montañés
Pedro de Otero	Criollo
José Miguel de Septién y Arce	Criollo
Joaquín de Aguiar	?
<i>Diputados</i>	
Francisco de Iriarte	Vasco
Martín de la Riva	Montañés

JUNTA MERCANTIL DE ELECTORES Y DIPUTADOS

Enero de 1788

<i>Electores</i>	
Juan de Villamor	Castellano
Juan Vicente Alamán	Vasco
Bernabé de Bustamante	Montañés
Fernando Mazorra	Montañés
Andrés Sagaz y Herrera	Montañés
Francisco de Septién y Arce	Montañés
Agustín Pérez Marañón	Montañés
Gervasio de Irizar	Criollo
<i>Diputados anteriores</i>	
Juan José Compains	Vasco
José Pérez Marañón	Montañés
<i>Nuevos diputados</i>	
Juan Vicente Alamán	Vasco
Francisco de Septién y Arce	Montañés

BIBLIOGRAFIA

A) FUENTES PRIMARIAS (MSS citados en las notas)

ESPAÑA

AGI.—Archivo General de Indias

Audiencia de Guadalajara, legajos 203, 477-8.

Audiencia de Lima, legajo 1119.

Audiencia de México, legajos 1045-6, 1127, 1129-30, 1133, 1136, 1138-40, 1143, 1158, 1196, 1317, 1365, 1367, 1369-70, 1377-8, 1380, 1382, 1387-8, 1390-1, 1394, 1396-8, 1400, 1403-5, 1416, 1418, 1420-1, 1426-7, 1448, 1454, 1457, 1461, 1463, 1509-11, 1513, 1515, 1521-2, 1525, 1528, 1531-3, 1540-2, 1544-5, 1547-5, 1547-9, 1154-5, 1557, 1560-1, 1568, 1571-3, 1577, 1579-81, 1587, 1594, 1608, 1614, 1617, 1619-20, 1622-3, 1630, 1632-4, 1645, 1660, 1686, 1719, 1724, 1728, 1730, 1732, 1743, 1745, 1750-3, 1762, 1765, 1768-9, 1772, 1775, 1777, 1779-80, 1783-4, 1786, 1790, 1795, 1804, 1809, 1811-12, 1815, 1817, 1849, 1856-9, 1862-3, 1866-8, 1870-2, 1876, 1878-9, 1883, 1887, 1889-90, 1893, 1895, 1960, 1973-6, 2018, 2026, 2032, 2119-20, 2122, 2125-7, 2200, 2202-3, 2205-9, 2212-14, 2235, 2238, 2240-8, 2251, 2254-6, 2345, 2356, 2379, 2504-5, 2512, 2811, 2981, 2990.

Estado, legajos 20, 23, 41, 42.

Indiferente general, legajos 42, 1713.

AGS.—Archivo General de Simancas

Guerra Moderna, legajos 7015, 7275-7.

AHN.—Archivo Histórico Nacional

Consejo de Indias, legajos 20688, 20701, 20727, 20728.

APS.—Archivo Provincial de Santander

Catastro, volumen 475.

Consulado, legajo 2.

BN (Madrid).—Biblioteca Nacional

MSS volúmenes 2929, 17618, 18636, 18739, 20417.

BRP.—Biblioteca del Real Palacio

MSS volúmenes 2815, 2816, 2824.

CV.—Cancillería de Valladolid

Sala de Hijosdalgo, legajos 1123, 1145.

GRAN BRETAÑA

MB.—Museo Británico

MSS adicionales, volúmenes 17557, 20999.

MSS Egerton, volumen 517.

MEXICO

- ACM.—*Archivo Casa de Morelos*
Legajos 433, 598, 617, 688, 743.
- AGN.—*Archivo General de la Nación*
Civil, volúmenes 142, 161, 189, 256.
Consolidación, volumen 5.
Consulado, volúmenes 44, 123.
Guerra, volúmenes 121A, 242A, 5B.
Historia, volúmenes 44, 49, 130, 503, 523.
Inquisición, volúmenes 1384, 1434.
Intendencias, volúmenes 8, 17, 48, 64, 73, 79.
Minería, volúmenes 5, 11, 18, 20, 23, 25-8, 30, 37, 40, 45-6, 50-2, 56, 58, 75-6, 80, 82, 87, 94, 97, 106-8, 110, 111, 113-15, 120, 128, 137-8, 141, 148, 151, 152, 158, 167, 180, 192, 193, 202, 211, 216, 221, 225.
Padrones, volúmenes 30-3.
Subdelegados, volumen 2.
Tierras, volúmenes 678, 679, 1283.
Vínculos, volúmenes 6-8, 10, 25, 106, 123, 144, 150, 152, 158, 171, 174, 176, 213-14, 216, 282.
- AHG.—*Archivo Histórico de Guanajuato*
Actas de Cabildo, volúmenes relativos a los años 1778-1810.
Alhóndiga, un legajo.
Bienes de Difuntos, legajos de los años 1742-61, 1761-79, 1784-8, 1795-9, 1801-5.
Insurgencia, legajos de los años 1767, 1810-11, 1812-14.
Protocolos de Cabildo, volúmenes por años, 1730, 1736, 1744, 1750, 1770, 1772, 1776, 1782, 1783, 1786-1811.
Protocolos de Minas, volúmenes por años, 1760, 1780, 1783-5, 1790, 1799, 1806, 1808.
Protocolos de Presos, volúmenes por años, 1746, 1755, 1799, 1803, 1806, 1807, 1810.
- AHH.—*Archivo Histórico de Hacienda*
Legajo 204.
- AHL.—*Archivo Histórico de León*
Legajo del año de 1786.
- AMM.—*Archivo Municipal de Morelia*
Legajos 143, 147, 150, 153-4.
- AMZ.—*Archivo Municipal de Zacatecas*
Legajo 23.
- BN (México).—*Biblioteca Nacional*
MSS volúmenes 1187, 1374, 1380, 1385, 1388, 1391, 1396, 1405, 1535, 1791.
- FV.—*Fundación Conde de la Valenciana*
Legajos 3-5.
MSS particulares.—Libro manual del Conde de Pérez Gálvez; prueba de hidalguía de José Antonio del Mazo.

B) MANUALES BIBLIOGRAFICOS Y GUIAS DE LOS ARCHIVOS

- Aguilar y Santillán, Rafael, «Bibliografía geológica y minera de México», *Boletín del Instituto geológico de México*, X-XV (1898-1901).
- Bermúdez Plata, Cristóbal, *Archivo general de Indias, catálogo de documentos de la sección novena*, I (Sevilla, 1949).
- Gayangos, Pascual, *Catalogue of the Manuscripts in the Spanish Language in the British Museum* (4 vols.; Londres, the Trustees, 1875-93).
- Gómez Cañedo, Lino, *Los archivos de la historia de América. Período colonial español* (2 vols.; México, 1961).

- Gómez Molleda, D., *Bibliográfica histórica española. 1950-54* (Madrid, 1955).
- González Palencia, Angel, *Un extracto de los documentos del Consejo de Indias conservados en la sección de Consejos del Archivo Histórico Nacional* (Madrid, 1920).
- Guía del archivo histórico de Hacienda, siglos XVI-XIX* (Secretaría de hacienda y crédito público; México, 1940).
- Handbook of Latin American Studies* (Harvard University Press, 1936-50, University of Florida Press, 1951).
- Humphreys, R. A., *Latin American History. A guide to the literature in English* (Oxford, 1958).
- Índice histórico español* (Universidad de Barcelona, Centro de estudios históricos internacionales, Barcelona, 1953-).
- Jones, C. K., *A Bibliography of Latin American Bibliographies* (2.^a ed.; Washington, 1942).
- Paz, Julián, *Catálogo de manuscritos de América existentes en la Biblioteca Nacional* (Madrid, 1933).
- Peña y Cámara, José María de la, *El archivo general de Indias de Sevilla. guía del visitante* (Sevilla, 1958).
- Rubio Mañé, Ignacio, «El archivo de la nación», *Revista de Historia de América*, IX (1940), pp. 63-169.
- Sánchez Alonso, Benito, *Fuentes de la historia española e hispano-americana* (3.^a ed., 3 vols.; Madrid, 1952).
- Títulos de Indias, Catálogo XX del archivo general de Simancas* (Valladolid, 1954).
- Zavala, Silvio, «Catálogo de los fondos del centro de documentación del museo nacional de historia en el castillo de Chapultepec», *Memorias de la academia mexicana de la historia*, XII (1953), pp. 177-244.

C) DOCUMENTOS PUBLICADOS Y OBRAS CONTEMPORANEAS

- Abad y Queipo, Manuel, *'Los escritos'...*, publicados en José Luis de Mora, *Obras sueltas* (México, 1963).
- Ajofrin, Francisco de, *Diario del viaje que hizo a la América en el siglo XVIII* (2 vols.; México, 1964).
- Alamán, Lucas, *Documentos diversos* (4 vols.; México, 1947).
- Historia de Méjico* (5 vols.; México 1942).
- Alzate Ramírez, José Antonio, *Gacetas de literatura de México* (4 vols.; Puebla, 1831).
- Amar y Junient, Manuel de, *Memoria de gobierno*, edición y estudio preliminar de Vicente Rodríguez Casado y Florentino Pérez Embid (Sevilla, 1947).
- Belaña, Eusebio Buenaventura, *Recopilación sumaria de todos los autos acordados de la real audiencia y sala del crimen de esta Nueva España* (2 vols.; México, 1787).
- Berghes, Carlos de, *Descripción de la serranía de Zacatecas formada por I. A. Bustamante* (México, 1834).
- Beristáin de Sousa, José Mariano, *Biblioteca hispano-americana septentrional* (3.^a ed., 5 vols.; México, 1947).
- Bustamante, Carlos María de, *Cuadro histórico de la revolución mexicana* (3 vols.; México, 1961).
- Campillo y Cossío, José del, *Nuevo sistema de gobierno económico para la América* (Madrid, 1789).
- Cañete y Domínguez, Pedro Vicente, *Guía histórica, geográfica, física, política, civil y legal del gobierno e intendencia de la provincia de Potosí* (Potosí, 1952).
- Castañiza González de Agüero, Juan Francisco, *Relación del reestablecimiento de la sagrada compañía de Jesús en el reino de Nueva España* (México, 1816).
- Castelazo, José Rodrigo de, *Manifiesto de la riqueza de la negociación de minas conocidas por la Veta Vizcuña* (México, 1820).
- Cavo, Andrés, *Los tres siglos de México durante el gobierno español hasta la entrada del ejército trigarante. Publicada con notas y suplemento por Carlos María de Bustamante* (3 vols.; Jalapa, 1870).

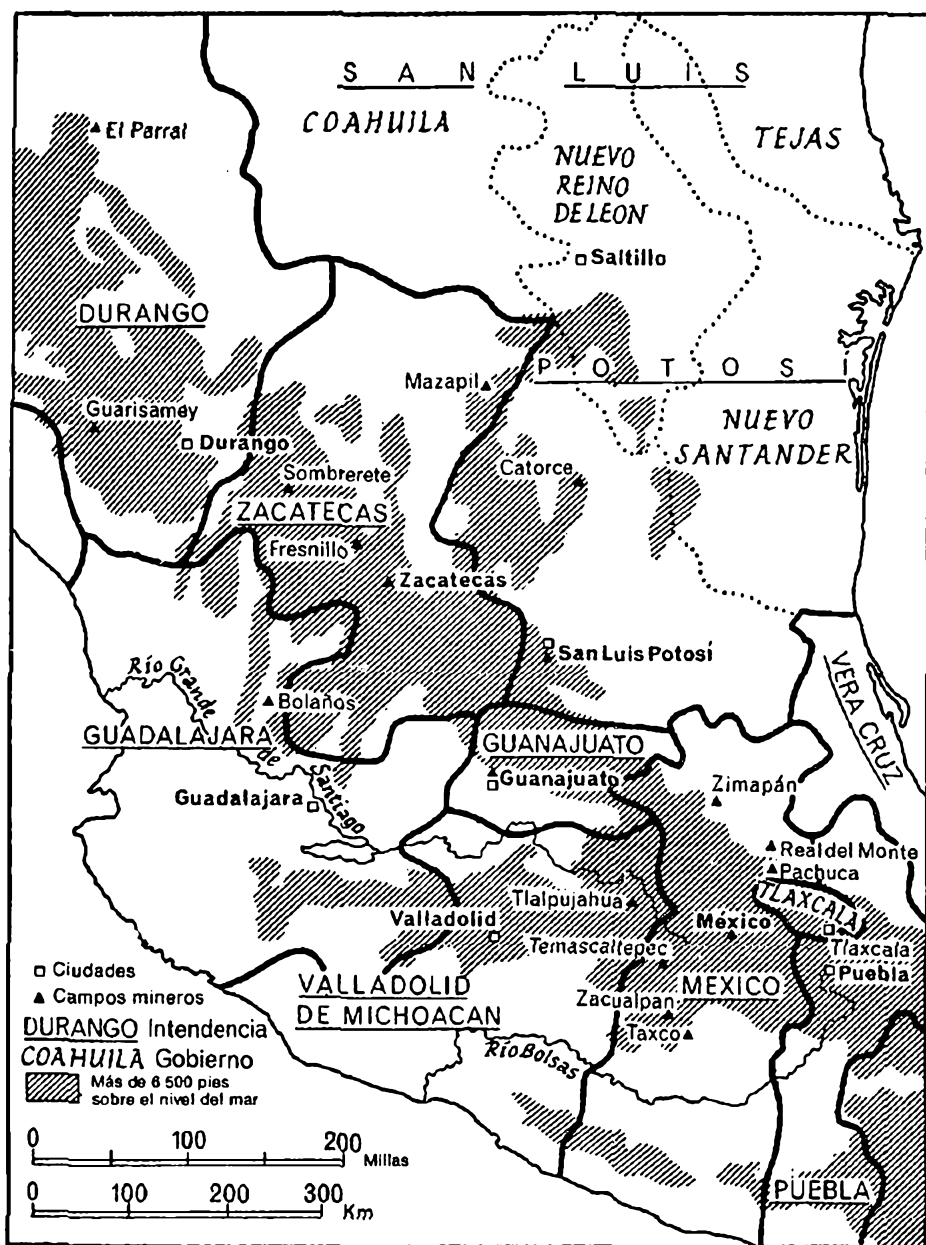
- Chávez Orozco, Luis, ed., *El comercio exterior y su influjo en la economía de Nueva España en 1793* (México, 1960).
- ed., *Conflicto de trabajo con los mineros de Real del Monte, año de 1766* (México, 1960).
- Colección de documentos para la historia del comercio exterior de México* (México, 1959).
- Croix, Marqués de, *Instrucción... que deja a su sucesor Antonio María de Bucareli*, prólogo y notas de Norman F. Martín (México, 1960).
- Cuevas, Mariano, ed., *Tesoros documentales de México siglo XVIII: Priego, Zelis Clarijero* (México, 1944).
- Díaz del Castillo, Bernal, *Historia verdadera de la conquista de la Nueva España*, introducción y notas de Joaquín Ramírez Cabañas (México, 1960).
- Dictamen de la comisión especial nombrada para informar sobre el importante ramo de minería* (México, 1821).
- Díez de Bracamonte, Juan, *Por la justicia...* (México, 1699).
- Discurso sobre el testamento de la señora María Teresa Castañiza de Bassoco* (México, 1830).
- Discurso sobre la minería en este imperio* (México, 1822).
- Elhuyar, Fausto de, *Indagaciones sobre la amonedación en la Nueva España* (Madrid, 1818).
- Fabry, José Antonio, *Compendiosa demostración de los crecidos adelantamientos que pudiera lograr la real hacienda... mediante la rebaja en el precio del azogue, que se consume para el laboreo de las minas de este reino* (México, 1743).
- Fonseca, Fabián de, y Carlos de Urrutia, *Historia general de la Real Hacienda escrita por orden del virrey, conde de Reillagigedo* (6 vols.; México, 1845-53).
- Funes, Gregorio, *Ensayo de la historia civil de Buenos Aires, Tucumán y Paraguay* (2 vols.; Buenos Aires, 1856).
- Gálvez, José de, *Informe general... al excelentísimo señor virrey d. frey Antonio Bucareli y Ursúa* (México, 1867).
- Gamboa, Francisco Javier de, *Comentarios a las ordenanzas de minas dedicados al católico rey, nuestro señor don Carlos III* (Madrid, 1761).
- Commentaries on the mining ordinances of Spain: dedicated to his Catholic Majesty, Charles III. By Don Francisco Javier de Gamboa...*, trad. from the original Spanish by Richard Heathfield (2 vols.; London, 1830).
- Garcés y Eguía, José, *Nueva teoría y práctica del beneficio de los metales* (México, 1802).
- Gemelli Carreri, G. F., *Viaje a la Nueva España* (2 vols.; México, 1955).
- González de Cossío, Francisco, ed., *Gacetas de México* (3 vols.; 1944-50).
- Gómez de Cervantes, Gonzalo, *La vida económica y social de Nueva España al finalizar el siglo XVI*, prólogo y notas de Alberto María Carreño (México, 1944).
- Granados y Gálvez, Fr. José Joaquín, *Tardes americanas* (México, 1778).
- Guijo, Gregorio M., *Diario 1648-1684* (2 vols.; México, 1953).
- Guridi Alcocer, José Miguel, *Censor extraordinario* (Cádiz, 1812).
- Hall, Basil, *Extracts from a Journal written on the coasts of Chili, Peru and Mexico in the years 1820, 1821, 1822* (2 vols.; Edimburgo, 1824).
- Hawks, Henry, 'A Relation of the Commodities of Nova Hispania, and the Manners of the Inhabitants', Richard Hakluyt, *Voyages* (8 vols.; London; Everyman, 1962).
- Hernández y Dávalos, Juan, *Colección de documentos para la historia de la guerra de independencia de México de 1808 a 1821* (6 vols.; México, 1877-82).
- Holland, Lady Elizabeth, *The Spanish Journal* (London, 1910).
- Humboldt von, Alexander, *Ensayo político sobre el reino de la Nueva España*, ed. Juan A. Ortega y Medina (México, 1966).
- Humboldt von, Alexander, y Aimé Bonpland, *Personal Narrative of Travels to the Equinoctial Regions of América during the years 1799-1804* (3 vols.; Londres, 1870).
- Instrucciones que los virreyes de Nueva España dejaron a sus sucesores* (México, 1867); second, enlarged edition (2 vols.; México, 1873).
- James, Edward, *Remarks on the Mines, Management, Ores etc. of the District of Guanaxuato belonging to the Anglo-Mexican Mining Association* (Londres, 1827).
- Jáuregui, José María de, *Discurso en que se manifiesta que deben bajarse los réditos a*

- proporción del quebranto que hayan sufrido en la insurrección los bienes y giros de los deudores. (México, 1820).
- Jovellanos en la real academia de la historia (Madrid, 1911).
- Juan Jorge, y Antonio de Ulloa, *Noticias secretas de América* (2 vols.; Madrid, 1918).
- Lassaga, Lucas de y Joaquín Velásquez de León, *Representación que a nombre de la minería de esta Nueva España, hacen al rey* (México, 1774).
- Lerdo de Tejada, Ignacio, *Discurso que en la profesa solemne del cuarto voto* (México, 1816).
- Lerdo de Tejada, Miguel, *El comercio exterior de México* (México, 1853).
- Licéaga, José María, *Adiciones y rectificaciones a la historia de México por don Lucas Alamán* (2 vols.; México, 1944).
- López de Gómara, Francisco, *Cortes, The life of the Conqueror by His Secretary*. traus. and ed. Lesley Byrd Simpson (Berkeley and dos Angeles 1966).
- López de Cancelada, Juan, *Ruina de la Nueva España* (Cádiz, 1811).
- El Telégrafo Americano* (Cádiz, 1812).
- Maniau Torquemada, Joaquín, *Compendio de la historia de la Real Hacienda escrita en el año de 1794* (México, 1914).
- Martíneza, Juan Martín de Juan, *Verdadero origen, carácter, causas, resortes, fines y progresos de la revolución de Nueva España* (México, 1810).
- Mier, Fray Servando Teresa de, *Memorias* (2 vols.; México, 1946).
- Mora, José María Luis de, *Méjico y sus revoluciones* (3 vols.; México, 1950).
- Obras sueltas* (México, 1963).
- Moreno y Castro, Juan, *Arte o nuevo modo de beneficiar los metales de oro y plata* (México, 1758).
- Morfi, Fray Agustín de, *Viaje de Indias y diario del Nuevo México*, ed. Vito Alessio Robles (México, 1935).
- Mota y Escobar, Alonso de la, *Descripción geográfica de los reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León*. introducción por Joaquín Ramírez Cabañas (México, 1940).
- Navarro y Noriega, Fernando, *Memoria sobre la población del reino de la Nueva España* (México, 1954).
- Notísima recopilación de las leyes de España (6 vols.; Madrid, 1805-26).
- Observaciones sobre el acuerdo de la cámara de senadores... relativo a la testamentaria de la señora doña Maria Teresa Castañiza de Bassoco* (México, 1830).
- Osoreo, Félix, *Noticias bio-bibliográficas de alumnos distinguidos de San Pedro y San Pablo y San Ildefonso de México* (2 vols. México, 1908).
- Paz, Melchor, *Guerra separatista, rebeliones de indios en Sur América, la sublevación de Tupac Amaru* ed., Luis Antonio Eguiguren (2 vols.; Lima, 1952).
- Poinsett, J. R., *Notas sobre México, 1822* (México, 1950).
- Pública vindicación del ilustre ayuntamiento de Guanajuato...* (México, 1811).
- Quirós, José María, *Memorias de estatuto. Idea de la riqueza que daban la masa circulante de Nueva España sus naturales producciones en los años de tranquilidad a su abatimiento en las presentes conmociones* (Veracruz, 1817).
- Ramírez, José María, *Elegía a la muerte del padre José María Castañiza. provincial de la compañía de Jesús de México* (Guadalajara, 1817).
- Ramos Arizpe, Miguel, *Memoria sobre el estado de las provincias internas de oriente presentada a las Cortes de Cádiz*, Noticia biográfica y notas por Vito Alessio Robles (México, 1932).
- Rasgo breve de la grandeza guanajuatense, generoso desempeño con que celebró la regocijada dedicación del suntuoso templo de la sagrada compañía, que a sus expensas erigió...* (Puebla, 1767).
- Representaciones del real tribunal de minería a favor de su importante cuerpo y declaración del excmo. señor virrey de estos reinos* (México, 1781).
- Revillagigedo, Conde de, Juan Vicente Güemes, Pacheco, Padilla y Horcasitas, *Instrucción reservada que... dió a su sucesor en el mando el Marqués de Branciforte sobre el gobierno de este continente en el tiempo que fue su virrey* (México, 1831).

- García Caraffa, Alberto, y Arturo, *Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana*. (Madrid, 1919).
- Gerhard, Peter, *México en 1742* (México, 1962).
- Gibson, Charles, *The Aztecs under Spanish Rule* (Stanford, 1964).
- González Cancino y Aguirre, Francisco, 'Santillana del Mar en el año de 1753', *Altamira*, 2 (1934), pp. 73-178.
- Guthrie, Chester L., 'Colonial Economy, Trade, Industry and Labor in the Seventeenth Century', *Revista de Historia de América*, 7 (December, 1939), pp. 103-34.
- Hagen, Everett E., *On the Theory of Social Change* (Homewood, Ill., 1962).
- Hammond, George P., *Juan de Oñate and the Founding of New Mexico* (Santa Fe, N. M., 1927).
- Hamilton, Earl J., *American Treasure and the Price Revolution in Spain 1501-1650* (Cambridge, Mass., 1939).
- Haring, C. H., *The Spanish Empire in America* (New York, 1963).
- Heckscher, Eli F., *Mercantilism* (2 vols.; Londres, 1934).
- Herr, Richard, *The Eighteenth Century Revolution in Spain* (Princeton, 1958).
- Hoskins, W. G., *Provincial England* (Londres, 1963).
- 'The Elizabethan Merchants of Exeter', in *Elizabethan Government and Society: Essays presented to Sir John Neale*. ed. S. T. Bindoff, et al. (Londres, 1961).
- Howe, Walter, *The Mining Guild of New Spain and its Tribunal General 1770-1821* (Cambridge, Mass., 1949).
- Jiménez Moreno, Wigberto, *Estudios de historia colonial* (México, 1958).
- Lohman Villena, Guillermo, *Los americanos en las órdenes nobiliarias 1529-1900* (2 vols.; Madrid, 1947).
- Lynch, John, *Spain under the Habsburgs* (2 vols.; Oxford, 1964-9).
- Spanish Colonial Administration* (Londres, 1958).
- Macalister, Lyle N., *The fuero militar in New Spain 1764-1800* (Gainesville, Fla., 1957).
- Mariscal Romero, María Pilar, *Los bancos de rescate de plata* (Sevilla, 1964).
- Marmolejo, Lucio, *Efemérides guanajuatenses* (4 vols.; Guanajuato, 1884).
- Martínez Cossío, Leopoldo, *Los caballeros de las órdenes militares de México* (México, 1946).
- Matilla Tascón, A., *Historia de las minas de Almadén* (Madrid, 1958).
- Maza Solano, Tomás, *Nobleza, hidalguía, profesiones y oficios en la montaña según los padrones del catastro del Marqués de la Ensenada* (4 vols.; Santander, 1953-61).
- Mecham, J. Lloyd, *Francisco de Ibarra and Nueva Vizcaya* (Durham, N. C., 1927).
- Mendizábal, Miguel Othón de, *Obras completas* (6 vols.; México, 1946-7).
- Minchinton, Walter F., 'The Merchants in England in the Eighteenth Century', in *Explorations in Enterprise*, ed. Hugh G. J. Aitken (Cambridge, Mass., 1965).
- Miranda, José, 'La población indígena de México en el siglo XVII', *Historia Mexicana*, 12 (1963), pp. 182-9.
- Morse, Richard M., 'Some characteristics of latin American Urban History', *The American Historical Review*, 63 (January, 1962), pp. 317-38.
- Motten, Clement G., *Mexican Silver and the Enlightenment* (Filadelfia, 1950).
- Navarro García, Luis, *Intendencias de Indias* (Sevilla, 1959).
- Neasham, V. Audrey, 'Spain's Emigrants to the New World', *Hispanic American Historical Review*, 14 (1939), pp. 146-60.
- Nieto y Carvallas, Rafael, *Los Villaurrutias* (La Habana, 1952).
- Obregón, Jr., Gonzalo, *El real colegio de San Ignacio de México* (México, 1949).
- Orozco, Rafael, *La industria minera de México, distrito de Guanajuato* (México, 1921).
- Ortega y Pérez Gallardo, Ricardo, *Historia genealógica de las familias más antiguas de México* (3 vols.; México, 1908-10).
- Otero, Mariano, *Obras* (2 vols.; ed. Jesús Reyes Heróles; México, 1967).
- Ots Capdequí, José María, *Historia de América: instituciones* (Barcelona y Madrid, 1959).

- Orte, Enrique, 'Los mercaderes vizcaínos Sancho Ortiz de Urrutia y Juan de Urrutia', *Boletín Histórico Fundación Boulton*, 6 (1964), pp. 3-32.
- Palacio Atard, Vicente, *Areche y Guirior, observaciones sobre el fracaso de una visita* (Sevilla, 1946).
- El comercio de Castilla y el puerto de Santander en el siglo XVIII* (Madrid, 1960).
- Palmer, R. R., *The Age of the Democratic Revolution* (Princeton, 1959).
- Parry, J. H., *The Audiencia of New Galicia in the Sixteenth Century* (Cambridge, 1948).
- The Spanish Seaborne Empire* (Londres, 1966).
- Pimentel, Francisco, *La economía política aplicada a la propiedad territorial en México* (México, 1866).
- Postan, M. M. ed., *The Cambridge Economic History of Europe. I. The Agrarian Life of the Middle Ages* (2.^a ed.; Cambridge, 1966).
- Porash, Robert A., *El banco de avío de México. 1821-1846* (México, 1959).
- Priestley, Herbert Ingram, *José de Gálvez. Visitor-General of New Spain* (1765-71) (Berkeley, 1916).
- Probert, Alan, 'Bartolomé de Medina: The Patio Process and the Sixteenth Century Silver Crisis', *Journal of the West*, 8 (January 1969), pp. 90-124.
- Ramírez, Santiago, *Noticia histórica de la riqueza minera de México* (México, 1884).
- Raso, José Antonio del, *Notas estadísticas del departamento de Querétaro. año de 1845* (México, 1846).
- Real Díaz, José Joaquín, *Lus fertas de Jalapa* (Sevilla, 1959).
- Romero, José Guadalupe, *Noticias para formar la historia y la estadística del obispado de Michoacán* (México, 1862).
- Rosenzweig, Fernando, 'La economía novo-hispánica al comenzar el siglo XIX', *Ciencias Políticas y Sociales*, 9 (1963), pp. 455-93.
- Rowe, John, *Cornwall in the Age of the Industrial Revolution* (Liverpool, 1953).
- Rubio Mané, Ignacio J., *Gente de España en la ciudad de México año de 1689* (México, 1966).
- 'Síntesis histórica de la vida del Ilconde de Revillagigedo, virrey de Nueva España, *Anuario de estudios americanos*, vi (Sevilla, 1949).
- Sarmiento, Domingo de, *Conflicto y armonía de las razas en América* (2 vols.; Buenos Aires, 1953).
- Shafer, Robert Jones, *The Economic Societies in the Spanish World, 1763-1821* (Siracusa, N. Y., 1958).
- Sierra Justo, *Evolución política del pueblo mexicano* (México, 1957).
- Juárez, su obra y su tiempo (México, 1956).
- Simpson, Lesley Byrd, *Exploitation of Land in Central Mexico in the Sixteenth Century* (Berkeley y Los Angeles, 1952).
- Smith, Robert, 'The Institution of the Consulado in New Spain', *Hispanic American Historical Review*, 24 (1944), pp. 61-83.
- 'Sales Tax in New Spain, 1575-1770', *Hispanic American Historical Review*, 28 (1948), pp. 2-37.
- Sojo y Lomba, Fermín de, *Ilustraciones a la historia de la M. N. y S. L. Merindad de Trasmiera* (2 vols.; Madrid, 1931).
- Lierganes* (Madrid, 1936).
- Soraluce y Zubizarreta, Nicolás de, *Real sociedad vascongada de los Amigos del País* (San Sebastián, 1880).
- St. Clair Dupont, Henri, *De la Production des Metaux Precieux au Mexique* (París, 1843).
- Stone, Lawrence, *The Crisis of the Aristocracy, 1558-1641* (Oxford, 1965).
- Toussaint, Manuel, *Don José de la Borda restituida a España* (México, 1933).
- Tasco* (México, 1931).
- Tovar Velarde, Jorge, 'La audiencia de Lima 1705-1707. Dos años de gobierno criollo en el Perú', *Revista de Historia*, 23 (Lima, 1957-8).
- Velásquez, María del Carmen, *El estado de guerra en Nueva España 1760-1800* (México, 1958).

- Vicuña Mackenna, Benjamín, *Los orígenes de las familias chilendas* (3 vols.; Santiago de Chile, 1903).
- Vidal, Salvador, *Señor Francisco García Salinas, 'Tata Pachito'* (Zacatecas, 1962).
- Vilar, Pierre, *La Catalogne dans l'Espagne Moderne* (3 vols.; París, 1962).
- West, Robert C., *The Mining Community in Northern New Spain: The Parral Mining District* (Berkeley y Los Angeles, 1949).
- Whitaker, Arthur, 'The Elhuyar Mining Mission and the Enlightenment', *Hispanic American Historical Review*, 31 (1951), pp. 558-83.
- Wolf, Eric R., 'The Mexican Bajío in the 18th century: An Analysis of Cultural Integration', *Synoptic Studies of Mexican Culture*, ed. Munro S. Edmundson (Nueva Orleans, 1957).
- Wolf, Eric R., and Sidney W. Mintz, 'Haciendas and Plantations in Middle America and the Antilles', *Social and Economic Studies*, 6 (1957), pp. 380-412.
- Zavala, Silvio, 'Orígenes coloniales del peonaje en México', *El Trimestre Económico*, 10 (1943-4), pp. 711-48.



MAPA 2. Campos mineros de la parte central de la Nueva España.

INDICE ANALITICO

- Abad y Queipo, Manuel, 45, 142, 161, 326, 398.
- Abasolo, Mariano, 454.
- Acapulco, 139.
- Agricultura, en los primeros años, 19, 20, 25, 26; cosechas, mercado, 33, 34, 35; indiferencia del gobierno, 51; efectos del repartimiento, 122, 124; dominio de la Iglesia, 131; haciendas, utilidades, deudas, 291, 294; en el Bajío, 309, 311; amortización, 449, 451; *véase también* haciendas.
- Aguascalientes, 260.
- Aguiar, Joaquín de, 428, 467.
- Aguirre, Francisco Miguel de, 192, 268, 411.
- Aguirre y Viana, Guillermo de, 451.
- Ahumada, Juan Antonio de, 285.
- Ajofrín, Francisco de, 153, 284, 286, 368.
- Alamán, Juan Vicente, 374, 377, 388, 397; su vida, 397, 406, 419, 427, 433, 466, 467; Lucas, 41, 154, 179, 201, 287, 288, 291, 325, 406; genealogía, 460; Tomás, 397, 453, 461, 466.
- Alamos, 268
- Alcabalas, 52; recaudación total, 81; su puesta corrupción, 94; exenciones a la minería, 199-200, 229; en Guanajuato, 319-320, 324.
- Alcaldes mayores, críticas, 731; en el sur, 77, 80, 120; salarios, 123; en Guanajuato, 322; *véanse también* subdelegados y repartimientos.
- Alcaldes ordinarios, 73, 74, 110, 113, 424, 442-3.
- Alcaraz, Conde de, 250, 459.
- Aldaco, Manuel de, en Las Vizcainas, 152; su origen, 167-8; compadre de Castañeda, 172; consejero del Virrey, 220; amigo de Gamboa, 223; consejero de Gálvez, 224, 234; prior del consulado, 238; obra de su vida, 242, 246, 250; en Real del Monte, 252; asociación con de la Borda, 271; en Guanajuato, *véase* Fagoaga (354), 357.
- Aldama, Juan, 454.
- Alegría, Martín José de, 108.
- Alemania, mercurio, 27, 29, 195, 196; misión técnica, 226, 227, 444.
- Alhóndiga de Granaditas, 328, 453-4.
- Alipasolo, Francisco, 356, 406, 461.
- Almaceneros, 138, 140, 161-64, 207, 357, 447 y 451; *véase también* comerciantes.
- Almadén, 29, 195-6.
- Altamira, primer marqués de, 148; *véase también* Sánchez de Tagle.
- Alzate Ramírez, José Antonio de, 196.
- Allende, Domingo Narciso de, 450; Ignacio, 454.
- Alles, Pedro Alonso de, primer Marqués de Santa Cruz de Inguanzo, 141, 148, 162.
- Amalgamación, introducción del sistema, 27-29; técnica, 190, 193; costos, 211, 214; en Bolaños, 257; en Guanajuato, 375, 378.
- Amat y Tortosa, Andrés, 323.
- Amigos del País, 152.
- Amortización, 238, 399, 449, 450.
- Anda, Juan Francisco, 68, 413, 440, 442.
- Andalucía, 63, 82, 149, 150, 251, 336, 410.
- Anza, José Vicente de, 187; Marcelo, 225; Marcelo José, 230, 274, 275, 276, 279, 280, 389; Pedro, 242, 369.
- Apartado, Marqués del, 234, 245, 248, 280, 446; cargo, 236, 246; *véase* Fagoaga.
- Aragón, 337.
- Aranda y Saavedra, familia, 354, 356, 404, 405, 460; Gonzalo, 405, 460, 464; Juan Ignacio, 406, 464; Manuel, 354, 356, 404, 405, 460, 461; Ramón Luis, 373, 406, 426, 450.
- Aránzazu, Nuestra Señora de, 151.
- Areche, Juan Antonio, 61, 64, 71, 96, 127.

- Archederreta, Gabriel de, 367, 373, 397, 406, 427, 460, 464.
 Arike, Domingo de, 374, 405, 461, 464, 466.
 Arizmendi, José de, 139.
 Arosqueta, Josefa de, 167, 239, 240, 245; Juan Bautista, 167, 239.
 Arquitectura y construcción: Las Vizcainas, 152; Nueva Señora de Loreto, 176; Palacio de Minería, 230; Monte de Piedad, 253; Santa Prisca, 270; La Compañía, Guanajuato, 314; Alhóndiga de Granaditas, 328; La Valenciana y San Diego, 386, 387; mansión de Diego Rul, 395.
 Arteaga, Ventura de, 274, 275.
 Arrastres, en general, 190, 193; número en Zacatecas, 279; inventario, 353; número en Guanajuato, 375, 452.
 Arroyo, Simón Eugenio de, 429, 462; Simón Francisco, 241, 356, 462.
 Ashton, T. S., 192.
 Asturias, 150, 152, 336.
 Audiencia, oposición a Gálvez, 65; composición, 67, 69; elogio de Bucareli, 75; temor de Revillagigedo, 119, 120; defensa del Consulado, 165; disputa con Revillagigedo, 440, 443; conspiración contra Iturrigaray, 451, 452; pérdida de jerarquía, 69-71; ataque contra los intendentes, 116, 117; aprobación de los repartimientos, 126; pérdida de jurisdicción minera, 435.
 Austri, José de, 415.
 Austria, 48, 195, 227.
 Aviadores, en el sur, 76, 141, 142; en la minería, 139-140, 205, 208, 261, 262; Guanajuato, 357, 366, 372, 375, 387, 390.
 Azanza, José Miguel de, Virrey, 108, 127, 326.
 Azpecechea, Fermín de, 277, 445, 446, 455n.
 Azpilcueta, Francisco de, 373, 405, 424, 427, 436, 460.
 Aztecas, 15, 22, 25, 326.
 Bajío, el 31, 34, 38, 292, 301, 314, 400, 452.
 Banco de Fomento Minero, 226, 255, 399.
 Bancos de plata, 235, 236; Valdivielso, 236, 239; Fagoaga, 239, 246; Rodríguez de Madrid, 252; en Guanajuato, 352, 355, 357, 367.
 Barandiarán, Juan de, 242, 252.
 Barba, Alonso, 191, 227.
 Barcelona, 65, 155, 161.
 Barrio; Aniceto del, 225.
 Barroso, Antonio, 226, 445.
 Baso Ibáñez, Francisco, 263.
 Bassoco, Antonio, título, 148; en los Amigos del País, 152, 164; su vida, 172, 177; diputado general del tribunal de minería, 226, 250; en Bolaños, 261, 265; préstamo a Sardaneta, 399, 400, 446; a la cabeza de los vascos, 451; genealogía, 459; prior del Consulado, 166, 250; en Durango, 207; en Zacatecas, 281, 282 (361).
 Baraller, Miguel de, 451.
 Baropilas, 268.
 Beltrán, Luis, 279.
 Belloquín, José, 322.
 Beneficio, *véase también* Amalgamación.
 Berenguer de Marquina, Félix, Virrey, 129.
 Beristáin de Souza, José Mariano, 68.
 Berthe, Jean Pierre, 32, 294.
 Bibanco, Antonio de, primer Marqués de Bibanco, 188; título, 234; su vida, 257, 258, 263; en Zacatecas, 275, 281, 282; Marquesa de Bibanco, 293.
 Bluer Iguíño, Joaquín, 424, 427.
 Bodega, Manuel de la, 456.
 Bolaños, 175, 183, 188, 199, 201, 203, 222, 223, 225, 235; historia, 256, 265, 267, 282.
 Bonavía, Bernardo, 121, 124.
 Bonilla, Antonio, 92, 444.
 Borbón, naturaleza de las reformas, 42, 8; definición del nuevo régimen, 49, 57; controversia, 57, 60; sobre las intendencias, 72; política general, 79, 80; culminación del régimen, 119; reformas mineras, 219, 223; renovación de Almadén, 195; apoyo en la milicia, 319; Mausoleo del nuevo régimen, 329; apoyo en la militarización, 69, 70; se suspende el pago a los alcaldes mayores, 76; continuidad con el liberalismo, 132; apoyo en el Consulado de los primeros tiempos, 159; reformas comerciales, 160, 161; la burocracia, 324; resultado de las reformas, 439; ataque final, 449; revueltas en su contra, 450, 457.
 Borda, José de la, 193, 196; pago a sus trabajadores, 203, 4; consejos a

- Gálvez, 224, 234; financiado por Aldaco, 242, 243, (259); obra de su vida, la restauración de Zacatecas, 271, 274, 369, 446.
- Borda, Manuel de la, 274, 277, 280.
- Born, Barón de, 227.
- Branciforte, Marqués de, Virrey, inactividad, 83; venalidad, 119; restablece los repartimientos, 126; se opone al Consulado de Veracruz, 165; restablece la milicia, 319, 430.
- Bucareli y Ursua, Antonio María de, Virrey, 67; principios, 74; se opone a las intendencias, 74, 76; crítica justificada, 80, 83, 84; su secretaría, 91, 95, 99; contraste con Revillagigedo, 119, 120, 127; establece el tribunal de Minería, 224, 307.
- Buenos Aires, 38, 100, 349.
- Bugarín, Antonio, 275, 279.
- Burgos, 150, 151.
- Burras, Hacienda de, 352, 353, 370.
- Bustamante, Bernabé de, 144, 415, 463, 341; Carlos María de, 289, 325, 327; Francisco, 324; José Alejandro, 220, 251, 252.
- Busto, familia, historia financiera, 353, 357, 367, 396, 397; posición social, 404-6, 423, 427, 429, 436; genealogía, 460, 461.
- Busto, Andrés, 406, 461; Ana, 409, 353, 404; Francisco Matías, Primer Marqués de San Clemente, 353, 396, 404, 406, 426, 461, 462; Francisco Cristóbal, segundo Marqués, 404; Gregoria, 374, 461; Josefa, 353, 404, 406, 461, 462; Juan Alejo, 405, 427; Pedro, tercer Marqués, 404, 461; Francisco, 404; Hipólito, 374; José Ignacio, 386; María Josefa, 450.
- Cabildos, en Querétaro, 113; subdelegados en funciones de presidentes, 113; de Tlascala, 114; en la ciudad de México, 61, 62, 285, 450; en Guanajuato, composición e ingresos, 424, 426.
- Cádiz, 47, 50, 137, 160-3, 175.
- Cajeros, como lugartenientes de la justicia, 76; aprendizaje, 153, 154; en Guanajuato, 336, 340, 365, 417.
- Calderón de la Barca, Frances, 238.
- California, 16, 92.
- Calleja, Félix, 455.
- Camargo, mina de, 438, 441.
- Caminos, 165, 166, 176, 316.
- Campillo y Cossío, José del, autor de las reformas, 47, 50; sobre las intendencias, 58; sobre los indígenas, 128; sobre el comercio, 160.
- Campo Marín, Manuel, 108.
- Canarias, Islas, 150.
- Cantabria, 149.
- Cañete y Domínguez, Pedro Vicente, 221.
- Capula, 175, 261.
- Caracas, 45, 67, 135.
- Caribe, Mar, 18, 47.
- Carlos III, 48, 49, 60, 119.
- Carlos IV, 88.
- Carrasco, Ventura, 373, 436, 460, 465.
- Carrillo, Francisco de Sales, 108.
- Casa de Moneda, 197, 198, 222.
- Casafuerte, Marqués de, Virrey, 91, 220.
- Castañiza, Juan de, primer marqués de Castañiza, título, 148, 172, 177, 78; en el consulado, 159; compadre de Aldaco, 250; María Teresa, 174, 177; genealogía, 459; bienes sucesorios, 172, 178; segundo marqués, 281; véase Bassoco.
- Castilla, 148, 151, 145, 258, 336, 337.
- Castilla, Luis de, 21.
- Castilla, Mariscal de, 310, 311.
- Cata, mina de, 241, 267; su historia primitiva, 353, 355; rehabilitación, 397, 404, 407.
- Catalán, 68, 161, 179.
- Cataluña, (véase Barcelona), 336, 37.
- Catastro, del marqués de la Ensenada, 417, 419.
- Catorce, 113, 191, 198, 205, 215, 230, 234, 265; su producción en los primeros tiempos, 268, 270, 389, 391, 411, 432, 446.
- Cazo, método de refinación de, 192, 227.
- Celaya, 31, 36, 301, 302, 307, 311, 313, 319, 321, 322, 323, 415.
- Clases Sociales, su estructura general, 39, 40, 153; en Guanajuato, 336, 346, 347.
- Clavijero, Francisco Javier, 59.
- Coahuila, 24, 34, 37.
- Cobo García, Manuel, 374.
- Cochinilla, 76, 77, 124, 136, 141, 161.
- Colima, 124, 358.
- Colotlán, 256, 260, 264.
- Comentarios (a las ordenanzas de minas), 179, 220-22, 226.
- Comerciantes, primeros fortunas, 31:

- posición en la sociedad, 42; en los repartimientos, 75, 79, 122, 126, 139, 161; discusión general, 135, 178; en la minería en Sierra de Pinos, 139; su entrada después del comercio libre, 163, 176, 177; como aviadores, 206-24; en Pachuca, 254; en Bolaños, 263, 265; en Zacatecas, 275, 276; en Guanajuato, 357, 365, 372, 274, 296, 398; su número en Guanajuato, 337, 334; en la Diputación, 432, 433, 437, 438, 445, 446.
- Comercio, en los primeros tiempos, 22, 26, 31; interno, 35, 40; de exportación e importación, 135, 139; en el norte, 139; en el sur, 140-141; dependencia en el crédito, 142; libranzas, 144, 145; agentes, 144, 146; efectos del comercio libre, 160, 61; con el Norte, 312, 314; dos comerciantes, 167, 178; en Guanajuato, 110.
- Comercio libre, 50, 79, 81; causas y efectos, 160, 161; oposición del Consulado, 163; defensa de Revillagigedo, 163; efectos sobre los Bascos, 174; efectos sobre la minería, 209, 215; contraste con las reformas mineras, 219, 339.
- Compains, Juan José de, 367, 374, 405, 427, 432, 433, 436, 460, 461, 465, 467.
- Concha, Fernando de la, 382, 466.
- Consulado de Guadalajara, 164, 167.
- Consulado de México, fin de la recaudación de alcabalas, 80-1, 105; dominado por montañeses y vascos, 151; memoria enviada a las Cortes de Cádiz, 155-56; ingresos y deberes públicos, 159, 160; ataque contra el comercio libre, 163; atacado por Revillagigedo, 163; elecciones, 164; camino a Veracruz, 165, 166; interferencia de Iturrigaray en las elecciones, 166; priores, 238; conspiración de 1808, 441; Diputación de Guanajuato, 433-34.
- Consulado de Guadalajara, 166.
- Consulado de Veracruz, creación y actividades, 166, 164.
- Córdoba, 63, 82, 113.
- Cornejo, José, 191.
- Coromina, Ignacio, 366.
- Coronel, y Jorganes, Martín, 427, 428, 440, 455, 465-66.
- Corres, Norberto de, 324.
- Cortés, Hernán, 15, 16, 457.
- Cortina, Conde de la, 166, 234.
- Consejo de Indias, 59, 85, 109, 114-16, 126-27, 163-6, 247, 410, 443.
- Cossío, familia, 95, 97, 157; Pedro Antonio de, 104, 105, 108, 158.
- Criollos (españoles americanos), posición general en la sociedad, 40, 41, 42; ataque de Gálvez, 86, 90; en la Junta Superior, 108, 109, 129, 130; naturaleza de los Criollos, 284-5; su exclusión de cargos públicos, 59, 60, 285-86; decadencia social, 288; en Guanajuato, 332-33; esquemas matrimoniales, 406-7; familias de la élite, 405, 423; la élite en la burocracia, en las Audiencias, 66, 68; mujeres, 157; ocupaciones, 289, 290, 297, 342, 343; en la Iglesia, 407, 408; opinión sobre los gachupines, 421-22; en la milicia, 431-32; en la Diputación Minera, 436; en la rebelión, 456, 457.
- Croix, Marqués de, Virrey, 48, 59, 64, 71, 72, 74, 75, 96, 103, 108, 254, 270-1, 315.
- Croix, Teodoro de, 59.
- Cruillas, Marqués de, Virrey, 59, 71.
- Cuba, 73, 119.
- Guernavaca, 34, 162.
- Chalco, 34, 36, 111, 123, 293.
- Chapingo, Hacienda de, 261, 293.
- Chaunu, Pierre, 26.
- Chevalier, François, 31.
- Chico, José María, 454; Miguel, 428.
- Chico Valdés, Bernardo, 425, 428.
- Chichimecas, 22, 23, 301.
- Chihuahua, 168, 183, 195, 241.
- China, 29, 135, 139.
- Cholula, 116, 296.
- Chuvell, Casimiro, 228, 453.
- Diputación, mercantil, 432; minera, en Zacatecas, 276; en Guanajuato, 435, 447.
- Díaz de la Vega, Silvestre, 87.
- Díaz del Castillo, Bernal, 15.
- Díez de Bracamonte, Juan, 351.
- Díez Madroñero, Antonio Jacinto, 355, 405, 429, 454, 464.
- Dolores Hidalgo, 304, 306, 322, 450, 453.
- Durango, 23, 32, 34, 36, 97, 121, 150, 168, 175, 185, 198, 207, 234, 268, 301, 393.

- Echarri, Juan Francisco de, 266.
 Echazaurreta, Juan de, 257.
 Echeveste, Francisco, 152, 245.
 Eguía, Sebastián de, 152.
 Elhuyar, Fausto de, 26, 180, 214, 228, 230.
 Encomiendas, 16, 80.
 Ensenada, Marqués de la, 416.
 Escalada y la Flor, Francisco, 418, 460.
 Escobedo, Jorge, 127, 128, 131.
 Escuela de Minería, 225, 226, 228.
 Españoles, americanos, *véase* Criollos; peninsulares, *véase* Gachupines.
 Exenciones al diezmo de la plata, política general, 102, 197; efectos, 215; exención general de 1801, 129, 130, 229, 230; apoyo de Gamboa, 221; a favor de Sierra Uruñuela en Bolaños, 262, 264; a favor de Echarri en Oaxaca, 226; a favor de Borda en Zacatecas, 270, 272; a favor de los socios de la Quebradilla, 278; a favor de la compañía de Veta Grande, 279; a favor de Fagoaga en Sombrerete, 246, 249; a favor de Moya en Pachuca, 254, 257; a favor de Anza, 275.
 Extremadura, 336, 405, 406.
 Fabry, Manuel, 220.
 Fagoaga, familia, posición general en la sociedad, 238, 250, 251, 282; Casa mercantil, 167, 172, 364; relaciones con Bassoco, 175, 176, 250, 251, 281, 282; recepción a la misión técnica alemana, 228; dirigentes de la minería, 238, 246, 282; banco de plata, 238; en Sombrerete, 246, 250; en Zacatecas, 281, 282; relaciones familiares, 250, 251; En Guanajuato, 356-57, 367; en el Tribunal de Minería, 447; genealogía, 459; *véanse también*. Aldaco y Meave.
 Fagoaga, Francisco de, 167, 170, 235, 240; Francisco Cayetano, primer Marqués del Apartado, 234, 238, 246, 248, 280, 446; José Joaquín, 243; José Luis, 246; José Mariano, 230, 238, 247, 250, 446, 447; Juan Bautista, 246, 247, 250, 280, 281.
 Felipe V, 285.
 Filipinas, 52.
 Ferias comerciales, 137, 313, 357.
 Fernández de Córdoba, Francisco Crisóbal, 104, 409.
 Fernández de Madrid, Diego, 65, 68; Andrés, 177.
 Fernández de Riaño, Bernardo, 306, 321, 355, 356, 364, 365, 373, 421, 429, 450, 461; Felipe, 420, 425, 436, 437, 461, 465.
 Fernández Paredo, Juan, 263, 264, 279.
 Figueroa, Vicente, 410.
 Fiscal de Real Hacienda, creación del cargo, facultades, 88, 90; en la Junta Superior, 102; *véase también*. Posada.
 Fischer, Francisco, 398, 444.
 Flon, Manuel de, familia, 97; nombramiento de los subdelegados, 110, 111; conflicto con la junta Superior, 112; con el gobernador de Tlaxcala, 114; con Gamboa y la Audiencia, 117; opiniones sobre los repartimientos y los subdelegados, 121, 123; juicio sobre las intendencias, 129, 131, 456.
 Flores, Manuel Antonio, Virrey, 106, 119, 325.
 Floridablanca, Conde de, 61, 105, 119, 325.
 Flotas transatlánticas, 137, 138, 160, 168, 172, 360.
 Francia, 47, 48, 120, 196, 274, 325.
 Fraustro, Mina de, 395, 396.
 Fresno, 160, 162, 243, 244, 249, 276.
 Fuenclara, Conde de, Virrey, 220.
 Fueros, entre la *élite*, 41, 42, 44; política borbónica, 49, 50; ataque de la Audiencia, 69; para los mineros, 224, 225; consecuencias, 435, 436.
 Funes, Gregorio, 63.
 Gachupines o peninsulares, sed de riquezas, 15, 16; tendencia a la vida urbana, 19, 21; alta jerarquía social, 40; dominio del comercio, 148, 149; migración, 53; orígenes en el Norte de España, 149, 151; pretensiones sociales, 152, 153; preparación, 153, 154; actitudes, 155, 156; causas de su éxito, 156; esquemas matrimoniales, 157, 158; control del Consulado, 158, 159; contrastes con los criollos, 287, 288, 290; en Guanajuato, 238, 339, 415, 423; en la milicia, 429, 431; defensa de su posición, 452; matanza de 1810, 453, 454; condena de Hidalgo, 457, 458; *véase también* vascos y montañeses.
 Galicia, 150, 336.
 Gálvez, Bernardo de, Virrey, 96, 97.
 Gálvez, José de, temor de Inglaterra, 48, 50; supresión de la revuelta de

- 1767, 49, 314; favorecimiento de la minería, 50; hostilidad hacia la industria colonial, 51, 52; *oposición* a que los criollos ocuparan cargos públicos, 58, 69; a la Audiencia, 69, 70; al virreinato, 71, 72; plan de las intendencias, 72, 73; condenación de los *repartimientos*, 77, 79; empleo a Cossío, 93, 94, 95; hostilidad a Gamboa, 65, 104, 105; opinión de los comerciantes, 147, 160; su mercantilismo, 160, 231; reducción del precio del mercurio, 195; concesión de exenciones fiscales, 197, 198, 259, 271; política minera, 51, 223, 224, 231; creación del Tribunal de Minería, 224, 225; abroga la concesión del Apartado, 246; temor a los jesuitas, 314; creación de la milicia, 316, 377, 421, 435, 437, 457.
- Gálvez, Matías de, Virrey, 88, 93, 96.
- Gamboa, Francisco Javier de, ataques contra Gálvez, 64; en la Audiencia, 66, 68; su vida, 104, 106; oposición contra Cossío, 95, 103, 106; ataques contra el código de intendencias, 106, 109, 110, 116, 117, 126; elabora las reglas de las Vizcainas, 152; agente del Consulado, 163; regula salarios en Real del Monte, 204; importancia en sus *Comentarios*, 207, 220, 225; ataques contra el Tribunal de Minas, 230, 231, 443; asesoramiento de Revillagigedo, 439, 440; referencias a sus *Comentarios*, 180, 186, 234, 236, 256, 260, 269.
- Gamboa, Juan José de, 104, 177.
- Garcés, y Eguía, José, 180, 190, 191, 192, 209, 211.
- García, Francisco, 282.
- García de Quintana, Manuel, 410, 418, 430, 437, 438, 443, 463, 465.
- García de Zeballos, Manuel, 430, 438, 440, 442, 443, 446, 447, 465, 466.
- Gardoqui, Diego de, 116.
- Gemelli, Carreri, Juan F., 147, 157.
- Gente decente, de razón, 40, 41, 45, 46.
- Ginoesio, Manuel, 236, 237.
- Godoy, Manuel de, 119, 129, 450, 451.
- Gómez Campos, José, 266.
- Gómez de Cervantes, Gonzalo, 21, 30, 135, 296.
- González, José Andrés, 139.
- González Bravo, Ciriaco, 456.
- González Calderón, José, 159, Miguel, 164.
- González Cossío, Miguel, 164.
- González del Campillo, Augusto, 430, 462.
- Gordejuela, Valle de, 158, 172.
- Goya, Manuel Ramón de, apoyo a los alcaldes mayores, 141, 142; sirve a los Amigos del País, 152; se dedica a la minería, 162; declaración de los bienes sucesorios de Meave, 167; invierte en Bolaños, 262; bancarrota en Zacatecas, 275, 281; se apodera de plata de la Valenciana, 389.
- Goyeneche, Juan Manuel de, 455.
- Granada, 65, 336.
- Gran Breraña, 48, 94, 129, 169, 196, 229, 254, 280.
- Grandes Notarios del Gobierno, 91, 95.
- Guadalajara, 33, 35, 37, 51, 69, 82, 96, 97, 105, 121, 123, 132, 164, 166, 168, 214, 257, 259, 260, 264, 358, 456, 457.
- Guadalcazar, 234.
- Guanajuato, 23, 33, 48, 49, 96, 97, 121, 140, 143, 144, 168, 179, 180, 184, 186, 190, 214, 225, 230, 234, 235, 238, 249, 265, 267, 270, 301.
- Guarismey, 199, 268, 358.
- Guatemala, 69, 78, 93.
- Güemes de la Concha, Manuel, 363, 427.
- Guijo, Gregorio de, 31.
- Guipúzcoa, 152, 167, 239, 408.
- Gutiérrez, Luis, 111.
- Gutiérrez del Mazo, Ramón, 86, 323, 325.
- Habana, La, 46, 47, 108, 135.
- Habsburgos o Casa de Austria, 47, 49, 52, 53, 76, 79, 87, 91, 164, 241, 242, 244, 351, 352, 354.
- Haciendas, en los primeros años, 19, 25, 31, 36; deudas, 131; mercados, utilidades y deudas, 292, 297; en el Bajío, 309, 311; compradas por mineros y comerciantes, 161, 172, 174, 238, 242, 251, 254, 261, 272, 287, 378, 390, 393, 395, 398, 415, 420.
- Hall, Basil, 148, 149.
- Hambre de 1785-6 en el Bajío, 304, 312; de 1809, 452.
- Hamilton, Earl J., 26.
- Haro, Alonso de, arzobispo y Virrey interino, 69, 99, 119.
- Heckscher, Eli, 160.

- Helling, Rafael, 196.
 Heras y Soto, Sebastián, Conde de, 148, 263.
 Herencia, leyes de, 145, 146, 354, 365.
 Hernández Chico, José, 384, 427, 436, 439, 441, 447, 464, 465.
 Hernández de Alba, Lorenzo, 125, 129.
 Herrera, Fernández, 87, 129.
 Herrera Rivero, Vicente, primer Marqués de Herrera, 68, 71.
 Hidalgo y Costilla, Miguel, 326, 450, 453, 457.
 Hierro, Felipe del, 315; Julián del, 225.
 Huancavelica, 28.
 Huehuetoca, 20, 25, 159, 165.
 Huejotzingo, 124.
 Humboldt, Alexander von, 45, 150n, 154n, 179n, 192n, 215, 216, 227, 270, 350, 351, 378n, 382, 394, 398; Iglesia católica, 46, 49; su autoridad, su control de la agricultura, 131; cantidad de clérigos, 289, 991; diezmos y riquezas, 294, 296; reclutamiento entre los criollos, 399; amortización, 449, 450; *véase también* Jesuitas.
 Imperio otomano, 64.
 Incháurregui, Lorenzo de, 357, 391, 464.
 Indígenas, efectos de la conquista, 16, 21; calidad legal, 44, 45; comercio, repartimientos, 77, 80, 121-22, 125, 128, 155, 146; aculturación, 307, 308, 314; tributos, 16-18, 83, 106, 107, 110, 111, 319, 320; trabajos en las minas, 24, 201, 202, 260, 261, 264; situación en el Bajío, 306, 308, 314; revuelta, 325.
 Industrias textiles en general, 33-37, 50-51, en el Bajío, 312, 313.
 Inmigración. *Véase* Gachupines.
 Intendentes, su importancia, 54; críticas al proyecto, 72, 75; creación, 96, 104; ataques contra ellos, 104, 117; debate final, 126, 132; en Guanajuato, 323, 329.
 Irapuato, 305, 308, 319, 370.
 Iriarte, Bernardo de, 277, 455n; Francisco de, 398, 428, 467.
 Irizar, José M.^a de, 373, 377, 427, 465; Lucas, 373, 464.
 Iturrigaray, José de, Virrey, 85, 132n, 166, 194, 323, 412, 452.
 Izúcar, 123.
 Jalapa, ciudad, 112, 113, 165; feria comercial, 137, 160, 170, 172, 174-75.
 Jalpa, hacienda de, 103, 295.
 Jalisco, 34, 36, 107, 256; *véase también* Guadalajara.
 Jaral, Marqués del, 104, 409.
 Jesuitas, expulsión, 49, 58; San Ildefonso, 59; partido jesuita, 65; su restablecimiento, 177; antiguas propiedades rurales, 254, 293, 294; temores de Gálvez y supresión de la revuelta en Guanajuato, 315; colegio de Guanajuato, 354; familia Busto, 406, 407; efecto general de la expulsión, 456, 457.
 Jiménez, Juan, 353, 360.
 Judíos, 156.
 Junta Superior de Real Hacienda, poderes, 93; composición, atribuciones, 100, 104; abolición del código de intendencias, 107, 109, 112, 125, 129; composición, 129, 131; exención fiscal, 229.
 Ladrón de Guevara, Baltasar, 67, 68, 95, 106, 125, 129.
 Landa, Nicolás de, 235.
 Lanzagorta, familia, 450.
 Lardizábal y Uribe, Miguel de, 457.
 Lassaga, Juan Lucas, 224, 225.
 Lasso Nacarino, José M.^a 129, 130.
 León, 268, 301, 307, 312, 315, 319, 321, 405, 408, 411, 414, 415.
 Lequeitio, 167.
 Libranzas, definición, 143, 144; usos, 80, 236, 319, 355.
 Liceaga, José de, 421, 461; José M.^a, 421, 454, 461; Ramón Luis, 373, 421, 427, 461; Tomás 225, 421, 429, 435, 454, 461, 464.
 Lierganes, 327.
 Lima, 42, 61.
 Linares, duque de, Virrey, 45, 90, 135, 219, 230, 235.
 Lissa, Francico de, 115.
 Logroño, 148, 149.
 López, Juan, 406, 461.
 López de Cancelada, Juan, 286, 307.
 López Portillo, Antonio, 65; Francisco, 66.
 Lorenzana, Francisco Antonio, Arzobispo de México, 61, 65.
 Luisiana, 52, 325.
 Llerana, 408, 414, 416, 418, 420.

- Malacates, en general, 185, 186; en Zacatecas, 271, 273, 278; en Guanajuato, 383.
- Málaga, 81, 93, 160.
- Malagueños, 62, 63, 165, 321, 409, 410.
- Malo de Villavicencio, Félix Venancio, 66, 67; Pedro 65, 67.
- Malpaso, hacienda de, 272.
- Mancera, Marqués de, Virrey, 30, 41, 149.
- Mangino, Fernando, 97, 100, 110, 112.
- Manila, 135, 139.
- Marfil, 304, 308, 316, 318, 352, 370, 375.
- Marino, Francisco, 325.
- Mariscal de Castilla, 311, 312.
- Marquina, Félix Berenguer de, Virrey, 129.
- Martínez Cabezón, Francisco, 263.
- Mathuala, 263.
- Mateos, Domingo, 240, 241.
- Mayorga, Martín de, Virrey, 93, 94, 199, 229, 438.
- Mazapil, 168, 190, 234, 238.
- Mazo, José Antonio de, actividades económicas, 389, 392, 399; origen: 413, 414, 418, 428, 442, 447, 466.
- Mcave, Ambrosio de, 152, 159; su vida, 167, 172, 241, 243, 244, 276, 365.
- Melgarejo, Ambrosio Eugenio, 66.
- Mellado, Mina de, 185, 241, 267, 351; historia, 353, 356, 378; rehabilitación 393, 396, 404, 407.
- Mendizábal, José Antonio, 356, 461, 465.
- Meoqui, Juan Fernando de, 263.
- Mercantilismo, 47, 160, 231.
- Mercurio, abastecimiento en los primeros tiempos, 24, 30; el monopolio, 195, 197; política relativa, 219, 221, 247, 269, 274; en Guanajuato, 352, 372, 374.
- Merino, Martín, 77, 78.
- Meruelo, 413, 414.
- Mestizos, 19, 25, 40, 45, 201, 202, 333, 341, 345, 348.
- México, ciudad de, 22, 26, 28, 34, 36, 48, 50, 51, 60, 62, 76, 80, 83, 93, 99, 105, 111, 113, 116, 119, 131, 132, 139, 149, 159, 161, 163, 168, 172, 176, 178, 194, 198, 201, 207, 208, 222, 225, 236, 237, 239, 241, 253, 254, 263, 270, 274, 276, 280, 285, 293, 350, 351, 357, 360, 389, 412, 432, 443, 447, 452; ayuntamiento, 61, 62, 285, 451; número de españoles, 53, 149, 150; control político de la colonia, 97, 117; ataque contra su dominio, 131, 132; centralización fiscal, 81, 84, 98, 99, 158, 193, 198, 222; centro financiero, 138, 147, 160, 164, 206, 208; dependencia de Guanajuato en los primeros tiempos, 350, 352; lucha en contra, 400, 446, 447, 453.
- México, intendencia de, 35, 37, 96, 121.
- Michoacan, 24, 33, 34, 48, 124, 142, 302, 303, 311, 326, 328.
- Mier, Fray Servando Teresa de, 88.
- Miera, Fernando de, 360, 388, 460, 464.
- Milicia, creación, 48, 53, 70; en Bolaños, 260; en Guanajuato, 315, 316, 320, 369, 430, 433; en la revuelta, 455, 456.
- Minería en los primeros años, 21, 30; obras relativas, 179, 181; acuñación, 182; técnicas de excavación, 182, 189; refinación, 190, 193; intervención del estado, 194, 202; mano de obra, 201, 205; estructura del capital, 205, 210; costos de producción, 210, 214; causas de su florecimiento, 215, 217; planes de reforma, 219, 221; comentarios de Gamboa, 221, 223; Tribunal de Minas, 223, 231; nobleza, 233, 234; bancos de plata, 235, 246; *Sombrerete*, 246, 250; *Real del Monte*, 251, 253; Pachuca, 254, 255; Bolaños, 256, 265; Catorce, 267, 278; Zacatecas, 269, 275; Guanajuato, 349, 401; diputación de Guanajuato, 435, 448.
- Mineros-trabajadores, reclutamiento en los primeros tiempos, 23, 25; instrumentos de trabajo, 184, 185; sistemas de pago, 201, 203; en Bolaños, 260, 265; en Zacatecas, 272, 278; en Guanajuato, 345, 348, 368, 370, 283, 286, 398; en la revuelta, 451, véase también partidos.
- Moncada, Marquesa de, 104.
- Montañeses, su origen, 149, 151; pretensiones, 152, 153; familia Cossío, 158; elecciones en el consulado, 164, 167; Valdivielso y Sánchez de Tagle, 236, 238; Riaño, 326, 327; su número en Guanajuato, 336, 338; relaciones de negocios, 365, 373, 383; familias

- Septiën y Pérez Marañoñ, 414, 421; en el Cabildo, 427, 429; en la milicia, 429, 431; en la Diputación mercantil, 432, 433; en la Diputación minera, 436, 438, 442, 443, 446, 448; véase Gachupines y vascos.
- Monterde y Antillón, Pedro M.^a de, 88, 129, 130, Rafael, 319.
- Mora, José María Luis, 291, 325.
- Morán, Mina de, 228.
- Morfi, Juan Agustín, 175, 292; Tomás, 165.
- Mourelle, Francisco, 382, 384, 396, 398.
- Moya, Manuel José de, 197, 254, 255.
- Mulatos, 19, 25, 40, 44, 201, 202, 335, 345, 348.
- Napoleón, 229, 280.
- Navarra, 150, 336, 337.
- Navarro y Madrid, Juan 82, 94.
- Nayarit, 256.
- Nobleza, en los primeros tiempos, 30, 41, 42; mercantil, 148; minera, 233, 234; en general, 283, 284.
- Nueva Inglaterra, 21, 42.
- Nuevo León, 34, 313, 393.
- Nuevo México, 23.
- Nuevo Santander, 393.
- Núñez de Ibarra, Cayetano, 197.
- Oaxaca, 33, 35, 36, 45, 76, 79, 97, 98, 122, 124, 132, 141, 266, 326.
- Obregón, familia, 408, 412, 423, 441.
- Obregón, Antonio, primer Conde de la Valenciana, 234, 276, 308, 370, 374; bienes sucesorios, 388, 389, 393; su vida, 408, 410, 411, 426, 432, 436, 437, 464, 465; Antonio, segundo Conde de la Valenciana, 411, 412, 426, 432; Agustín, 408; Ignacio, 230, 268, 389; su vida, 411, 432, 451n; María Getrudis, 409; María Ignacia, 409.
- Ollolqui, Vicente, 281.
- Orizaba, 82, 166.
- Ortiz de Landázuri, Tomás, 223.
- Otero, familia, 377, 391, 412, 413, 425, 427, 428.
- Otero, Manuel Antonio de, 373, 389, 391, 412, 413, 438, 441, 442, 447, 465, 466; Mariano, 106, 355, 413, 425, 428, 429; Pedro, 392, 418, 428, 467; Pedro Luciano de, 360, 361, 371, 373; bienes sucesorios, 389, 391, 407, 409; su vida, 411, 413, 424, 437, 438, 464, 465.
- Oromies, 301, 306, 308.
- Oyarzu, 167, 239.
- Pabellón, Mina de, 188, 247, 248.
- Pachuca, 23, 26, 80, 190, 195, 197, 201, 202, 214, 221, 226, 229, 234, 238, 241; historia, 251, 254, 255, 265, 266.
- Pácz de la Cadena, Miguel, 82, 94.
- Parral, 183, 222.
- Partidos, en general, 202, 205, 216; en Real del Monte, 203, 252; en Pachuca, 254; en Bolaños, 263; en Zacatecas, 272, 274, 278; en Guanajuato, 370, 371, 383.
- Paz, Melchor, 63.
- Pelácz, José Joaquín, 395, 412.
- Peninsulares. Véase Gachupines.
- Pénjamo, 322, 412, 454.
- Penmartin, Francisco Javier, 40, 276; Julián, 274, 455.
- Peñón Blanco, 190.
- Pérez Becerra, José, 324.
- Pérez Gálvez, Antonio, primer Conde de Pérez Gálvez, 234, 393; bienes sucesorios, 394; su vida, 410, 426, 431, 433n, 448, 466.
- Pérez Marañoñ, familia, 365, 366, 419, 420, 425; Agustín, 374, 420, 427, 429, 467; Fernando, 420, 425, 427, 428, 453, 455; Joaquín, 360, 419; José, 358, 360, 361, 365, 374, 419, 420, 427, 432, 433, 467; María Manuela, 336, 418, 463.
- Perú, 29, 38, 42, 57, 61, 71, 75.
- Pimentel, Francisco, 294, 297.
- Población, 15-18, 31-33, 303-306, 333.
- Porlier, Antonio, 105.
- Portu, Manuel, 388, 466.
- Posada, Ramón de, su vida, 88, 91; defensa del código de intendencias, 107, 111; ataque contra los repartimientos, 125; defensa de los indígenas, 128; elogio del comercio libre, 162; ataque contra el consulado, 163.
- Potosí, 228, 293.
- Prado Alegre, Marquesa de, 67.
- Primo y Jordán, Pedro, 416, 463.
- Primo Verdad y Ramos, Francisco, 440.
- Príncipe, Regimiento del, 316, 319.
- Puebla, industria, 36; motines, 48; diócesis, 73; fábrica de tabaco, 82; fraude de las alcabalas, 86; intendente

- de, 97, 99, 114, 116, 121, 130, 132, 325, 328; salarios de los subdelegados, 123; repartimientos, 125; agricultura, 131, 296; camino a, 166.
- Quebradilla, Mina de, 186, 188, 197, 204, 205; historia, 269, 274, 277, 278, 455, 456.
- Querétaro, indígenas, 31, 307; industria, 36, 37, 312, 313; corregidor, 112, 114, 322, 325; monopolio del tabaco, 82, 312, 415; Conde de Regla, 251, 253; fundación, 301; población, 304, 305; agricultura, 310-313; milicia, 319; familia Septién, 415, 417.
- Rayas, Mina de, 184, 204, 230, 241, 267; historia, 351, 353, 366, 367, 369, 371, 385; rehabilitación, 397, 400, 429, 450.
- Real del Monte, 23, 180, 183, 185, 188; problemas obreros, 201, 205, 212, 214, 222, 235, 242; historia, 251, 253, 266, 267, 280, 370, 375, 391.
- Rebeliones de 1767, 46, 47, 314, 316, 327; de 1810, 452, 457.
- Reborato, Domingo, 220.
- Refinación, 190, 193, 209, 214, 370, 378; *véase también* Amalgamación.
- Regil, Vicente, 425, 427, 466.
- Regla, Pedro Romero de Terreros, primer conde de, 71, 186, 187, 193, 205; problemas obreros, 203, 205, 212, 223, 235, 242; su vida, 251, 254, 259, 283; sus tierras, 294, 375, 394.
- Repartimientos de comercio, 74, 79, 120, 128, 140, 160, 161, 321, *véase también* Alcaldes mayores, y Subdelegados.
- Rétegui, Manuel de, 276, 277, 280; Salvador de, 397, 461.
- Reuelta, Juan de, 374, 396.
- Revillagigedo el viejo, Conde de, Viñey, 57, 256.
- Revillagigedo el joven, Conde de, Viñey, política colonial, 51, 57, 82, 83; crítica al tribunal de cuentas, 86, 87; elogio de Posada, 88, 107; crítica a la secretaría, 92; Junta Superior, 101; Gamboa, 104; Alegría, 108; opinión de Flon, 114, 116; vida y opiniones, 118, 120; investigación sobre los repartimientos, 121, 125, 127 128; ataque contra el consulado, 163; misión técnica alemana, 226, 227; causas de la prosperidad minera, 215, 216; disolución de los regimientos de la milicia, 319, 429; elogio de Riaño, 326; conflicto con los mineros de Guanajuato, 426, 431, 447, 448.
- Riaño, Juan Antonio de, intendente de Valladolid, 97, 112, 323; su vida y su obra, 326, 329, 385, 411; defensa de la Diputación, 441; su muerte, 453, 454.
- Rieger, Christian, 222.
- Río, Andrés del, 227, 228.
- Rioja, la, 321, 336.
- Riva Agüero, Juan de la, 106.
- Riva, *Antel de la*, 397, 417, 430; Martín, 365, 417, 466; Pedro, 363, 365, 417, 453n, 466.
- Rivascacho, Marqués de, 148, 263.
- Robles, José María, 325.
- Rodríguez de Madrid, Isidoro, 235, 252.
- Rojas, José Antonio de, 410.
- Roma Rossel, Francisco, 68.
- Rosario, 238.
- Ruiz Calado, José Ignacio, 99.
- Rul, Diego, primer conde de Casa Rul, 143, 144, 234; bienes sucesorios, 392, 395; su vida, 410, 412, 418, 426, 430.
- Sáenz de Escobar, José, 221.
- Saint Maxent, Victoria, 326.
- Salamanca, 302, 306, 313, 322, 410.
- Salgado, Hacienda de beneficio, 375.
- Saltillo, 138, 313.
- Salvatierra, 305, 312, 321, 322, 415.
- San Bartolomé de Jala, Conde de, 67, 148, 254, 261.
- San Clemente, Marqués de, *véase* Busto.
- San Felipe, 301, 306, 315, 322.
- San Ildefonso, colegio de, 57, 59, 65.
- San Juan de los Lagos, 138, 313.
- San Lorenzo, Mina de, 367, 436.
- San Luis de la Paz, 304, 306, 315, 321, 323, 358.
- San Luis Porosí, 28, 33, 49, 97, 113, 121, 139, 187, 190, 194, 203, 222, 313, 315, 393, 412, 456.
- San Mateo de Valparaíso, Conde de, 234; condesa, 104.
- San Miguel de Aguayo, Marquesa de, 237, 238; Marqués, 238, 296, 449.
- San Miguel el Grande (de Allende), 37,

- 174, 301, 307, 310, 313, 315, 321, 322, 431, 450, 452, 454.
- Sánchez de Tagle, Francisco Manuel, 221; Luis, primer Marqués de Altamira, 148, 235, 237, 351.
- Santa Ana, 304, 386.
- Santa Ana, Juan Antonio de, 373.
- Santa Brigida, Mina de, 242, 243.
- Santander, 148, 151, 163, 336, 337, 408, 413, 415, 416.
- Sanriago, Conde de, 66.
- Saniago de la Laguna, Conde de, 234, 269.
- Santillana del Mar, 237.
- Santo Domingo, 69, 104, 105.
- Sarachaga, Isidoro, 262.
- Sardaneta, familia, 352, 353, 407, 409, 424, 429; genealogía, 462; José Mariano de, segundo Marqués de San Juan de Rayos, 230, 398, 401, 424, 427, 432, 450, 462, 465, 466; Melchor, 408; Pedro, 352, 407; Vicente Manuel, 234, 353, 367, 370, 374, 407, 425, 427, 429, 436, 462, 464, 465; primer Marqués, 465.
- Sarmiento, Domingo Faustino, 42.
- Secretaría Virreinal, historia, 91, 96.
- Sello y Somoza, Manuel de, 321.
- Septián, familia, posición económica, 359, 366, 404; orígenes, 414, 419; 425, 428, 447; genealogía, 463.
- Septián, Montero y Austri, Pedro de, 322, 416, 417, 463.
- Septián y Arce, Francisco de, 327.; actividades financieras, 362, 365, 396; origen, 418; 428; en la milicia, 431, 433; en la Diputación minera, 436, 438, 445, 448, 463, 465, 467.
- Septián y Castillo, Antonio de, 364, 415, 416, 463.
- Septián y Montero, Bernardo de, 417, 419; Francisco, 360, 374, 416, 418, 427; José María, 366, 418, 423, 427, 428, 466, 467; Martín, 359, 367, 370, 372, 373, 416, 418, 437.
- Sevilla, 137, 138.
- Sierra, Justo, 149, 156.
- Sierra de Pinos, 139, 268.
- Sierra Uruñuela, Juan, 197, 258, 259, 261, 263.
- Silao, 306, 308, 319, 364, 367, 370, 406, 419, 431.
- Sombrerete, 113, 186, 188, 193, 197, 201, 205, 222, 227, 230, 234, 238, 244; historia, 246, 249, 253, 265, 280, 370, 377.
- Sonora, 23, 37, 73, 97, 108, 121, 198, 223.
- Soriano, José, 323, 328, 439.
- Subdelegados, atribuciones y deberes, 110, 118; remuneración, 122, 124; se acepta su fracaso, 128; en Guanajuato, 322, 323; véase también Alcaldes mayores y Repartimientos.
- Sultepec, 22, 225, 249.
- Superintendente, Subdelegado de Real Hacienda, 71, 72, 87, 90, 97, 100, 131, 132, 194.
- Tabaco, monopolio del, utilidades, 48, 52, 82; Auditoría de cuentas, 87; en Sombrerete, 246, 247; en Guanajuato, 321, 324.
- Tabasco, 76, 141.
- Tarascos, 302, 306, 307.
- Taxco, 16, 22, 24-27, 191, 222, 225, 235, 241, 265, 266, 270.
- Tehuacan, 123.
- Tehuilotpec, 187.
- Telmo Primo, Pedro, 144.
- Temascaltepec, 197, 210, 225, 241.
- Tenochtitlan, 15, 18.
- Tepeaca, 110.
- Tepeyac, Mina del, 350, 378; rehabilitación, 396, 430, 438, 448.
- Tepezala, 358.
- Tepotzotlán, 253, 294.
- Tequesquite, 190.
- Texcoco, 123, 293.
- Textiles, véase industria.
- Tiros, profundidad general, 183, 185; en Pachuca, 255; en Bolaños, 258, 264; en Catorce, 267, 268; en Zacatecas, 271, 278, 279; en Guanajuato, 352, 383, 398.
- Tlalpujahua, 22, 203, 241, 243, 270.
- Tlaxcala, 67, 114, 124, 256, 260.
- Toluca, 293.
- Torre Calderón, José de la, 254.
- Tres Guerras, Eduardo, 395.
- Tribunal de cuentas, 84, 85.
- Tribunal de Minería, 223, 230, 443, 448.
- Ulloa, Antonio de, 153n.
- Uruapan, 49.
- Urdinola, Francisco de, 24, 237.
- Uribarren, José Antonio, 360, 429.
- Ustáriz, Gerónimo de, 149.

- Valcárcel, José Manuel, 446.
 Valcarcel, y Baquerizo, Domingo, 67, 69, 194, 244, 435, 439.
 Valdivielso, Francisco de, primer conde, S. Pedro del Alamo, 234; su vida, 235, 239; en Guanajuato, 355, 357, 367, 429.
 Valencia, 65, 337.
 Valenciana, Conde de la, 387, 397, 409, 411; véase Obregón.
 Valenciana, La, Mina de, 183, 185, 189, 201, 205, 210, 215, 234, 265, 268, 297, 298, 350, 351; historia, 371, 374, 377, 387; resultados, 392, 395, 400, 401, 435, 436, 438.
 Valladolid (Morelia), 96, 98, 107, 112, 121, 123, 132, 144, 168, 266, 325, 398, 409, 431; véase también Michoacán.
 Valle Ameno, Marqués de, 234, 252.
 Valle de Suchil, Conde del, 234.
 Vallecarriedo, 327, 328, 408, 414, 416, 419.
 Vascos, 108; comunidad inmigrada, 150, 152; en el consulado, 163, 165, 166, 192, 223, 224; colegio vasco, 227, 239, 240, 257, 258, 262, 268; en Zacatecas, 274, 277; en Guanajuato, 336, 338, 405, 428, 432, 433, 436; en la rebelión, 452, 454.
 Vázquez de Terreros, Juan, 251.
 Velarde, Juan Antonio, 59, 65.
 Velázquez de León, Joaquín, 180, 224, 226, 233.
 Venezuela, 150.
 Veracruz, 18, 29, 37, 46, 51, 81, 92, 96, 113, 121, 124, 129, 130, 137, 141, 158, 160, 161, 164, 166, 172, 176, 201, 222, 324, 415.
 Vergara, Colegio de, 152, 227.
 Vértiz, Francisco de, 240, 241; Pedro, 164, 208.
 Veta Negra, Mina de, 186, 247, 250.
 Veta Vizcaina, Minas de, 183, 185-188, 193, 203-205, 212, 220; historia, 251, 253.
 Veta Grande, Mina de, 175, 183, 197, 249, 250, 261, 263, 274; historia, 274, 282, 446.
 Viana, Francisco Leandro de, primer Conde de Tepa, 66, 68, 74, 75, 100, 152, 451.
 Vicario, Gaspar Martín, 279, 281.
 Vilar, Pierre, 179.
 Villa Alta, 141, 266.
 Villa, Modesto de, 413, 414, 467.
 Villachuat, Hacienda de, 242, 245, 355.
 Villalba, Juan de, 48, 49, 59.
 Villamoz, Juan de, 374, 388, 421, 438, 461, 465, 467.
 Villaurrutia, familia, 282; genealogía, 459; Antonio de, 66, 69; Antonio (el joven), 250; Jacobo, 250, 451, 459.
 Virreinato, ataque contra la institución, 71, 73; aumento de poderes, 131, 132.
 Visita de Gálvez, 48, 59, 64, 160, 199, 200, 203, 205, 230, 314, 316, 325, 429; véase Gálvez.
 Vizcainas, las, 152, 242.
 Wall, Bernardo, 47.
 Ward, H. G., 180, 201, 207, 412.
 Yermo, familia, 158; Gabriel de, 158, 162, 449, 451; Juan Antonio, 35, 158, 164.
 Yucatán, 96, 99, 121, 132, 148, 294.
 Zacatecas, 23, 76, 80, 97, 98, 121, 140, 150, 162, 168, 175, 180, 214, 222, 225, 230, 234, 238, 241, 242, 244, 249, 456.
 Zacualpan, 243, 249.
 Zambrano, hacienda de, 168, 170, 245.
 Zambrano, Mariano, 116, 117.
 Zavala, Lorenzo de, 148, 154.
 Zimapan, 190, 253.

INDICE DE TABLAS, FIGURAS, MAPAS E ILUSTRACIONES

TABLAS

1.	Envíos de mercurio a Veracruz (1610-45)	29
	Valor de la producción anual de la Nueva España	38
2.	Miembros de la audiencia de México h. 1769	66
3.	Miembros de la audiencia de México h. 1779	68
4.	Expedientes del fiscal de Real Hacienda, enero de 1781-8	89
5.	Composición de las exportaciones de la Nueva España (1761-75, Vía Veracruz)	136
6.	La nobleza mercantil de la nueva España 1700-1812 (Creaciones)	148
7.	Inventarios y composición del capital de la casa mercantil de la familia Fagoaga, 1736-81 (en pesos)	170
8.	Inventario de los bienes de Castañiza, mayo de 1769 (En pesos)	174
9.	Ingresos reales por concepto de la minería en México, 1789. (En pesos)	200
10.	Costo semanal medio de una hacienda de beneficio con un molino de pisones y 12 arrastres, con una capacidad de 193 cargas (580 quintales de mineral) de una calidad media de nueve onzas de plata por carga (tres onzas por quintal)	210
11.	Costo de la amalgamación en Real del Monte de dos cantidades iguales de mineral con peso de 30 quintales cada una pero con diferente contenido de plata, la primera con una producción de una onza de plata por quintal, y la segunda dos onzas y media por quintal	213
12.	La nobleza minera mexicana en el siglo XVIII (Creaciones)	234
13.	Inventario de los bienes de la sucesión de Francisco de Fagoaga, diciembre de 1736 (en pesos)	240

14.	Inventario parcial de los bienes de la sucesión de Fagoaga, agosto de 1772 (en pesos)	245
15.	Producción de la mina de Pabellón, 1790-noviembre de 1804	248
16.	Inversiones mineras de la familia Fagoaga, h. 1804 (en pesos)	249
17.	Producción y exención fiscal de la mina de Quebradilla	273
18.	Producción de la compañía de Vetagrande, Zacatecas, 1786-1810	281
19.	La nobleza mexicana en el siglo XVIII (Creaciones) .	283
20.	Ingreso y utilidad sobre el capital de dos haciendas 1800-5 (en pesos)	293
21.	Valor e ingresos de las antiguas haciendas jesuitas adquiridas por el Conde de Regla h. 1775 (en pesos) .	295
22.	Población de la intendencia de Guanajuato, con varios registros de nacimientos y defunciones 1742-1812 ..	304
23.	Distribución de ocupaciones en la intendencia de Guanajuato (h. 1793)	309
24.	Gastos estimados del Ayuntamiento h. 1800	317
25.	Ingresos de la Tesorería de Guanajuato en 1742 y 1793 (en pesos)	320
26.	Ingresos de los subdelegados de la intendencia de Guanajuato en 1792 (en pesos)	322
27.	Población de la ciudad y distrito de Guanajuato, 1792-93	333
28.	Lugar de origen de la mano de obra adulta masculina, Guanajuato, 1792	335
29.	Distribución por ocupación de los varones adultos Guanajuato, 1792	335
30.	Provincia de origen y ocupación de los españoles peninsulares de Guanajuato, 1792	336
31.	Ocupación, edad y estado civil de los españoles peninsulares de Guanajuato, 1792	338
32.	Estructura ocupacional del comercio y la minería, Guanajuato 1792	341
33.	Ocupaciones de la élite criolla, Guanajuato, 1792 ..	342

34.	Ocupación, edad y estado civil de los criollos de Guanajuato, 1792	343
35.	Raza de los trabajadores varones adultos en algunos oficios, Guanajuato, 1792	345
36.	Los mineros: Tasa de matrimonio entre razas diversas.	347
37.	Bienes de la sucesión del primer marqués de San Clemente h. 1747 (en pesos)	354
38.	Contabilidad del banco de plata de Fagoaga en relación a los mineros de Guanajuato h. 1736	356
39.	<i>Entrada de mercancías a Guanajuato enero a agosto</i> (Inclusive) de 1778	359
40.	Bienes de Martín de Septién y Montero, mayo de 1761 (en pesos)	360
41.	Bienes de la sucesión de Martín de Septién y Montero, diciembre de 1779 (en pesos)	362
42.	Contabilidad de la casa mercantil de Francisco de Septién y Arce, diciembre de 1779 (en pesos)	362
43.	Contabilidad de la casa mercantil de Manuel García de Quintana (en pesos)	363
44.	Estructura de la minería en Guanajuato, 1780-1, según la distribución de mercurio	373
45.	Producción, costos y utilidades de la Valenciana 1788-1810 (en pesos)	379
46.	Producción total estimada de la Valenciana, 1774-86, según su valor antes de ser refinada	380
47.	Producción de la Valenciana durante seis meses del año 1788	381
48.	Producción de la Valenciana, 1791, tipos y valor del mineral producido	381
49.	Fuerza laboral y escala de salarios en la Valenciana h. 1803 (resumen)	385
50.	Principales bienes de la sucesión de Obregón, h. 1791 (en pesos)	388
51.	Bienes de la sucesión de Pedro Luciano de Otero, octubre de 1788	390
52.	Bienes de la sucesión de Otero en 1806	393
53.	Bienes de Antonio Pérez Gálvez, 1798	394

54. Miembros del Ayuntamiento de Guanajuato, 1778, 1793, 1809	427
55. Oficiales del batallón de infantería de Guanajuato en 1800	430
56. Origen de los oficiales de los regimientos de la milicia del Bajío h. 1800	431

FIGURAS

1. Acuñación de oro y plata en México, 1690-1820	181
2. Nacimientos e inhumaciones registrados en la parroquia de Marfil, Guanajuato, 1743-1811	305
3. Producción de plata en Guanajuato, 1766-1803	376

MAPAS

1. División política de la Nueva España	480
2. Campos mineros de la parte central de la Nueva España.	481

ILUSTRACIONES

1. Una galería de arrastre (Salgado, Guanajuato). frente a pág. 14	
2. Patio de una hacienda de beneficio (Salgado, Guanajuato)	frente a pág. 15

INDICE GENERAL

<i>Prefacio</i>	7
<i>Abreviaturas de archivos consultados</i>	10
<i>Medidas y moneda</i>	11
<i>Glosario</i>	12
INTRODUCCION	15
PRIMERA PARTE: <i>La revolución en el gobierno</i>	55
SEGUNDA PARTE: <i>Mineros y comerciantes</i>	133
Cap. I. Comerciantes	135
Cap. II. La estructura de la producción de la plata	179
Cap. III. El Tribunal de minería	219
Cap. IV. Las grandes empresas	233
Cap. V. La herencia criolla	283
TERCERA PARTE: <i>Guanajuato</i>	299
Cap. VI. El Bajío	301
Cap. VII. Un censo	331
Cap. VIII. Las minas	349
Cap. IX. La élite	403
Cap. X. La Diputación	435
EPILOGO	449
APENDICES	
1. <i>Genealogía escogida de la familia Fagoaga</i>	459
2. <i>Genealogía escogida de las familias Busto y Aranda</i>	460-1
3. <i>Genealogía escogida de la familia Sardaneta</i>	462
4. <i>Genealogía escogida de la familia Septiën</i>	463
5. <i>Miembros de la junta de electores y de la Diputación Minera de Guanajuato 1751-1808</i>	464
<i>Bibliografía</i>	469
<i>Mapas</i>	480-481
<i>Indice Analítico</i>	482
<i>Indice de tablas, figuras, mapas e ilustraciones</i>	494

Este libro se acabó de imprimir el día 7 de febrero de 1983 en los talleres de Offset Marvi, S. A. Calle Leiria Núm. 72, México 13, D. F., se imprimieron 3 000 ejemplares.

MINEROS Y COMERCIANTES EN EL MEXICO BORBONICO, 1763-1810



El objeto de este estudio es definir la característica mezcla de despotismo ilustrado y talento empresarial que creó el México de la época borbónica.

El periodo de 1763-1810 fue una fase crucial y característica de la historia colonial de México. José de Gálvez, el dinámico ministro de las Indias, transformó el sistema de Gobierno y reestructuró la economía. La «edad de oro» que siguió, lejos de ser la culminación de dos siglos de continuo desarrollo, fue más bien el resultado de una profunda regeneración de la sociedad hispánica en el Nuevo Mundo. El mayor éxito de la política de Gálvez fue un florecimiento sin precedente de la minería, que convirtió a México en el primer productor de plata en el mundo. Fue esta producción de plata la que permitió financiar, en su mayor parte, el renacimiento del poder político y económico de la monarquía española y la que creó, dentro de México, una nueva aristocracia de comerciantes capitalistas y de millonarios mineros.

Hasta ahora, la mejor fuente de información sobre la minería en el México de la época borbónica ha sido el *Essai Politique sur la Nouvelle Espagne*, de Alexander von Humboldt, publicado en 1811. No obstante, muchas cuestiones permanecen sin respuesta. ¿Fue efectiva la política del Gobierno? ¿Fue esta política la causa del florecimiento de la minería? ¿Cuál fue precisamente el papel que tuvo el talento individual de organización en esta notable hazaña de crecimiento económico? ¿Quiénes fueron los millonarios de la plata? ¿Qué estructura tenía el capital de la minería?

A contestar estas cuestiones está dedicado este libro, fruto de siete años de investigación en los archivos de México y España. El profesor Brading ejerce la enseñanza en la Universidad de California, Berkeley.

Fondo de Cultura Económica